

María Cora Paulizzi

ENTRE GOBERNADOS Y GOBERNANTES

Los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres-desocupadas y las prácticas de resistencia y autogobierno en Salta, Argentina. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi

Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Humanas,
mención en Estudios sociales y culturales.

Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Catamarca

Directora: Dra. Elsa Ponce
Co-Directora: Dra. Susana Murillo

Catamarca
Año 2019

A mis hijos: Jacinto y Felipe...

INDICE

Resumen	8
Summary	9
Agradecimientos	11
Glosario de Siglas	12
A modo de Introducción	14
I- Los caminos del pensar: motivaciones, tesis a sostener, posicionamientos	14
II- Avatares teóricos específicos: antecedentes y perspectivas	21
II.1-Gubernamentalidad y gobierno: entre racionalidades políticas, programas y prácticas	22
II. 2- El gobierno de la pobreza y las políticas sociales: problematización y re-invencción de lo social	27
II. 2.1-Las políticas sociales y el gobierno de la pobreza	29
II. 3-Prácticas de resistencia y autogobierno: entre la metis y la aceptabilidad	32
II.3.1- Errape: límites y rebasamientos	35
III- Cuestión de Método: ...el camino hacia...	40
III.1- Técnicas de aproximación	47
IV- Esbozo de contenidos: organización del trabajo de tesis	50
 PARTE 1 - Heterogeneidades 1: Entre Reformas y resistencias: Programas de gobierno y políticas sociales “humanizadas”, en la Argentina y la Salta de los noventa. YPF y el acontecer piquetero (1995-2002)	54
 CAPITULO 1: “Los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta de los 90’”: la reconfiguración del rol del Estado, el caso de YPF y el acontecer piquetero. Primeros destellos de la UTD Mosconi	55
 I: Los avatares de la gubernamentalidad en la Argentina de la década de los 90’: programas de gobierno	58
1-Entre singularidades, procedencias y emergencias: breve aproximación a la gubernamentalidad en la Argentina, entre 1976 y 1990	58
2. La Bisagra: el programa de gobierno democrático (1983)	64
3- El programa de gobierno de perfil neoliberal, en la Argentina de 1989-2001	66
3.1-Prácticas de gobiernos al modo de Re-formas: entre tradiciones, radicalizaciones y privatizaciones	70
3.2-El caso de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)	74
4-Continuidades y Discontinuidades crisis y retoques: la Argentina en el 2000-2001, entre banelcos, helicópteros y cacerolas.	83
 II: La Reconfiguración del rol del Estado en los avatares de la gubernamentalidad Salteña: entre neoliberalismos, “salteñidad” y desarrollo humano (1995-2003)	88
1-Aproximación inicial	88
1.1-Prácticas de gobierno y relaciones de poder en Salta, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX	90
2-El programa de gobierno salteño entre 1995-2003: entre la tradición y la transición neoliberal local	99
2.1-La-s Reforma-s de Estado-s (1995-2003): entre los abandonos, las transformaciones, las aperturas, la vida y las muerte-s.	100
 III: YPF en Salta, YPF y el mundo del trabajo, YPF y las tradiciones de lucha en el	111

<i>departamento Gral. San Martín: trabajo, territorios, historias de lucha, historias de vida</i>	
1-El petróleo en Salta: aproximación histórico-genealógica	111
2-YPF en sus albores: la empresa-fábrica y el mundo del trabajo	118
2.1 Las distribuciones organizativas del espacio y el territorio: YPF empresa del Estado	121
2.2 -Las disposiciones organizativas del trabajo y el sujeto trabajador	124
3-La Privatización de YPF en el Dpto. Gral. San Martín-Salta y las primeras revueltas	127
3.1 -Prácticas de resistencia en torno a las primeras tentativas de privatización entre 1983 y 1991.	127
3.2 -La lucha contra la privatización, bajo la lógica y órbita del gobierno de Estado asumido en 1989	132
3.3 -La primera pueblada en Tartagal y Mosconi, últimos destellos de la lucha “contra la privatización”: setiembre de 1991	138
3.4 - La privatización de YPF: la tragedia y la emergencia	141
-Esbozos finales	147
 CAPITULO 2: <i>El gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, en Argentina y en Salta (1990-2002) y el estar siendo trabajadores desocupados y piqueteros: entre mínimos biológicos, emprendedores moribundos y piqueteros. La emergencia e instalación de la UTD Mosconi.</i>	150
 I: <i>El gobierno de la pobreza y los pobres- desocupados</i>	151
1-La problematización de la pobreza: la reinención de lo social, las políticas sociales y el Discurso de desarrollo humano	151
1.1 -La cuestión social, la invención de lo social y el gobierno de la pobreza	154
1.2 -El problema de la pobreza, la invención de lo social y del “otro radical” en América Latina y Argentina: entre neoliberalismo y neocolonialismo.	159
2-Las Políticas Sociales y el Discurso de Desarrollo Humano, en el proceso de reinención de lo social.	162
2.1 -Gobierno, Población, Pobreza y Políticas Sociales: biopolítica y gubernamentalización del Estado.	164
2.2 -Gubernamentalidad neoliberal, neoliberalismo-s y cuestión social: hacia el desarrollo con rostro humano	166
2.2. a -Del Discurso de Desarrollo a secas, hacia el Discurso de Desarrollo con rostro Humano	175
2.2a.1 -El Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con rostro “humano”: influencias, estrategias y marcos	181
 II: <i>El gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, en la Argentina de los 90’: La políticas sociales y el Discurso de Desarrollo con rostro Humano</i>	190
1-Dispositivos de gobierno, intervención y gestión de las poblaciones pobres (1980-2002): una aproximación a las políticas sociales “para” pobres.	191
2-El gobierno de los pobres y desocupados: las políticas sociales y los programas de empleo “para” pobres, entre 1989 y 2002, el advenir del <i>workfare</i>	199
2.1 -El problema del desempleo: empleabilidad e inempleabilidad	203
3-El <i>workfare</i> en Argentina: entre la empleabilidad, la inempleabilidad y la asistencia comunal	207
3.1 -La crisis, el salto, las continuas discontinuidades: 2000-2002	210
 II A: <i>La singularidad salteña en los trazos del gobierno de la pobreza y los pobres</i>	219

desocupados.

1-Las políticas sociales y de empleo humanizadas “para” pobres, entre 1995 y 2003	219
2-Las políticas sociales y los programas de empleo: el pobre válido, el pobre capaz, el pobre moribundo.	221
2.1-Programas de empleo “para” trabajadores pobres	227
III: “Cortar la ruta es abrir caminos”: Estar siendo trabajadores desocupados y piqueteros, los primeros cortes y tomas de rutas. La emergencia y consolidación de la UTD Mosconi, autogobierno, trabajo y recreación.	232
1-Entre la vida, la muerte, la lucha y el trabajo: los días previos al levantamiento “piquetero” de 1997.	233
1.1-El primer gran piquete: la afirmación de los sujetos trabajadores desocupados advenidos piqueteros unidos en la UTD Mosconi.	239
1.2-El desbloqueo, en 1999: entre la lucha, el poder de la ley-espada y los campos transaccionales de relación	247
1.3-Los cortes y puebladas de principios del siglo XXI (2000-2001): radicalización, muerte-s y autonomización.	254
1.3.a-Uniones y des-uniones piqueteras: las prácticas de lucha y resistencia de noviembre del 2000 y 2001	260
2- La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi: la cuestión del trabajo, des-sujeción y re-territorialización (1997-2002).	268
2.1- La UTD: un espacio común de trabajo digno y genuino.	269
3-La metis cotidiana: los referentes/líderes, las áreas de trabajo y las prácticas	273
3.1-Las reconfiguraciones creativas: Los proyectos productivos, las tareas, las oficinas.	276
3.1. a- La organización y distribución de tareas y espacios	288
-Esbozos finales	292
Parte 2 - Heterogeneidades 2: Los programas de gobierno y la reconfiguración del rol del Estado en la Argentina y Salta, entre 2003 y 2012/13: el gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de “ciertos modos”. La UTD Mosconi.	298
CAPITULO 3: Los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta entre 2003 y 2013. Entre recreaciones, reparaciones y resistencias	299
I: América Latina: entre el neoliberalismo, las crisis y las transformaciones integracionistas	301
1-Breves referencias a la geopolítica continental de la época (S. XXI)	301
II: Programa de gobierno en la Argentina (2003-2012/13): prácticas y lógicas	306
1.- El Programa Nacional de gobierno entre 2003-2007: primeros pasos	306
1.1-Entre transversal y transformador: avances y retrocesos, giros y contragiros (2003-2007)	306
1.2-Entre economía y política, Estado y mercado: prácticas, mecanismos y dispositivos de gobierno	312
2.- Profundizaciones, crisis y transformaciones (2007-2011)	319
3- Hacia la re-nacionalización de YPF: el programa de gobierno nacional entre 2011 y 2012/13	327
3.1-Prácticas y mecanismos de gobierno: la reconfiguración de YPF “Sociedad Anónima”	328

4- Abanico de racionalidades políticas y lógicas de gobierno, en los trazos del programa nacional	332
III- Programas de gobierno en Salta entre 2003-2013: Entre las continuas discontinuidades	339
1- Los vaivenes del programa de gobierno “Golden Boys”	339
2-El programa de gobierno del Frente Para la Victoria y el Partido Renovador de Salta (2007-2011): alianzas, lógicas y prácticas	342
2.1- Prácticas y re-soluciones: entre continuas-discontinuidades	349
3-La re-elección y re-creación del legado: el programa de gobierno salteño entre 2011 y 2013	355
3.1-La reconfiguración del rol del Estado: entre nexos y eficiencias	359
4- Salta la Linda, la Petrolera, la Sojera y la Minera: desposesión y extractivismo (2007-2013)	362
4.1-El campo y la sojización: entre disputas, desertificaciones y destierros	363
4.2- Minería en Salta: ¿sustentable?	371
4.3.- Petróleo e Hidrocarburos: YPF, las inversiones, concesiones e invasiones.	374
5-Entre Reparaciones y Resistencias: Fondo de Reparación Histórica, en el Dpto. Gral. San Martín	380
-Esbozos Finales	390
CAPITULO 4: El gobierno de la pobreza con rostro humano, en la Argentina y en Salta entre 2003 y 2012/13, y los procesos de reafirmación y recreación de la UTD Mosconi.	396
I: Los avatares del gobierno de la pobreza y las políticas sociales en la Argentina, entre 2003-2013	397
1-Entre sujetos jurídicos y sujetos económicos: un singular re-torno al trabajo decente y humano	397
2-Las políticas sociales “humanizadas e inclusivas”: entre el desarrollo, la justicia social, la comunidad y la solidaridad emprendedora	399
2.1-El Discurso de Desarrollo Humano y local sostenible: la comunidad y la sociedad	403
3-Dispositivos de Intervención: entre empleables e inempleables, decentes e indecentes, la familia y el trabajo.	406
3.1-La re-edición del PJJHD: Plan Familia, Plan Manos a la Obra, Programa Nacional de Capacitación y Empleo.	408
3.2-La Asignación Universal por Hijo/a: entre el salto y la universalidad condicionada de la transferencia.	414
4-El trabajo “decente” y la Economía social: dimensiones éticas, jurídicas y económicas de gobierno.	419
4.1-Economía Social y trabajo para pobres: dispositivos de gobierno.	424
4.2- El trabajo decente y Argentina Trabaja: entre la dignidad, el emprendedurismo, la cooperación y los lazos primarios de solidaridad.	428
II: Las políticas sociales en la Salta: El gobierno de la pobreza y la re-invenición de lo social, entre la equidad humanizada, la sociedad empresaria y la solidaridad natural (2007-2013).	441
1-Aproximación inicial: Desarrollo Humano, poblaciones pobres, carentes y débiles	441
2-Tejidos vinculares entre Estado y Sociedad civil: estrategias de gobierno, gobiernos estratégicos, estratagema	446
2.1-Des-centralización de las Políticas sociales en Salta (2009-2010):	448

gubernamentalización del gobierno de Estado.	
2.2-Mecanismos de intervención y gobierno de las poblaciones pobres y vulnerables: programas, planes y proyectos (2007-2011)	452
2.3-Programas de Empleo: emprendimientos, capacitaciones y cooperación	454
3-Segunda etapa en el Plan de Políticas sociales: descentralización, planificación y abordaje foco-federal-asistencial-humanizado (2010-2013).	459
4-Re-toques, transformaciones, re-nominaciones del marco gubernamental-institucional: la otra faceta de la gubernamentalización del gobierno de Estado y la sociedad civil (2011-2013)	461
5-Las políticas sociales y la cuestión del desempleo, el trabajo decente, las fábricas sociales y la responsabilidad social empresaria: hacia el ciudadano emprendedor.	465
5.1-Sujetos económicos y Empresas-Fábricas sociales: ¿economía social, economización de lo social, fabricación social de lo económico, fabricación económica de lo social?	473
6-Entre, la Provincia y la Nación, esbozos: encuentros, desencuentros, saberes, técnicas y técnicos	478
 III: “...No queremos ser incluidos”: Las Prácticas de resistencia y Autogobierno de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, ex/ypefianos, organización en movimiento, trabajo y Estado-s (2003-2012/13)	484
1-La reconfiguración singular de los trabajadores ex/ypefianos en trabajadores desocupados y piqueteros: entre las resistencias, los Estados, las transacciones y las luchas.	484
2-Las prácticas del piquete-piqueteras y sus singularidades, en torno de la UTD Mosconi entre 2003 y 2013.	485
3-Las prácticas cotidianas, en el tiempo y el espacio de la UTD: des-sujeción y re-territorialización.	490
3.1-La Fundación de Trabajadores Desocupados (FUNDATRAD) y su singularidad: entre legalismos, salarios, liderazgos y saltos.	498
3.1.a-FUNDATRAD-UTD y la cuestión del trabajo.	502
3.2-Organización del trabajo: Tareas, actitudes, herencias y re-creaciones.	508
4-Las prácticas de transacción, negociación, discusión y la transgresión: El Estado verdadero y el Estado Gobernante.	512
-Esbozos Finales.	519
 -Conclusiones	525
-Bibliografía	563

Resumen

El trabajo de investigación y tesis se dirige a reconstruir y analizar, desde una perspectiva crítica y de gubernamentalidad, los modos en que se configuran las relaciones entre gobernados y gobernantes, mediante una analítica de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, en Argentina y, específicamente en la provincia de Salta, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos, atendiendo al caso testigo de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, entre 1995 y 2013.

Procuramos profundizar en dichas líneas de análisis, centrando el interrogante general del trabajo de tesis sobre dos ejes simultáneos de indagación. Por un lado, nos interesa realizar un ejercicio analítico en torno del gobierno de la pobreza - puntualmente de las poblaciones pobres y desocupadas - codificado en el campo de las políticas sociales públicas argentinas y salteñas. Para esto pretendemos focalizar en las relaciones existentes entre las múltiples lógicas y prácticas dirigidas a objetivar y subjetivar a dichas poblaciones, en clave de desarrollo humano, comprendido como un eje transversal de saber que articula y regula la configuración de las políticas sociales y la problematización de lo social en términos de pobreza, con singularidades específicas en los diferentes tramos históricos a desandar. Por otro lado, pretendemos abarcar cuestiones vinculadas con las relaciones existentes entre gobernados y gobernantes, específicamente entre gobierno y resistencia, en tanto relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades. Puntualmente, trabajaremos en torno de las perspectivas y las prácticas de aquellos espacios y sujetos a los cuales las políticas sociales públicas se dirigen, cuyos efectos transaccionales ejercen reconfiguraciones mutuas, mientras se recrean los espacios de organización, entre la resistencia y el autogobierno. De este modo, recuperamos el caso testigo, por vigente, paradigmático y relevante de la UTD de Gral. Mosconi, como un espacio de unión en movimiento, en el cual identificamos los procesos de construcción y subjetivación (colectiva), en relación con el trabajo, la vida, la muerte y la lucha.

Entre los supuestos hipotéticos, que trazan la tesis, sostenemos que los programas de gobierno en los cuales se enmarcan las políticas sociales, remiten a racionalidades políticas heterogéneas. Esto se expresa con nitidez en el ejercicio del gobierno de la pobreza, desde mediados de los 80' hasta nuestros días, de modos singulares. En sintonía sostenemos que, en el campo de las políticas sociales públicas y en los trazos enunciativos del discurso de desarrollo humano, nacido en los albores del neoliberalismo, se produce la re-invenición de lo social en términos de pobreza. En tanto se produce la problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza.

Asumimos, a su vez, que para una analítica de estas relaciones, es preciso comprender la dinámica de apropiaciones y transformaciones en las que se basa el juego del gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia. En este tejido relacional, partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego transaccional de prácticas de resistencia, entre la negación, la afirmación y la diferenciación. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, son puestas en juego diferentes prácticas de subjetivación desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana.

La cuestión de método, se construye en torno de un abordaje metodológico cualitativo, ante todo desde la perspectiva sugerida por una genealogía de las prácticas y los saberes, así como por las herramientas provenientes de la arqueología trabajada por Foucault, en torno del análisis de las discursividades locales. A su vez, en referencia al trabajo de

campo y estudio de caso recuperamos tanto elementos provenientes de la perspectiva etnográfica, así como de la investigación acción participativa y educación popular (Rigal y Sirvent, 2007, Fals Borda, 2015 y Freire y Faundez, 2010); y también recuperamos elementos que aporta el análisis sociológico, en torno de la perspectiva del actor (Long, 1997, 2007; Giarraca y Bidaseca, 2001). A modo de organización expositiva, el trabajo cuenta con dos grandes partes organizadas en un total de cuatro capítulos, subdivididos en diferentes apartados.

Summary

The research work and thesis is aimed at reconstructing and analyzing, from a critical perspective and governmentality, the ways in which the relationships between the governed and the rulers are configured, through an analytical of the government's practices and logics aimed at the poor and the poor unemployed, in Argentina and, specifically in the province of Salta, and resistance practices to be governed in certain ways, taking into account the witness case of Union of Unemployed Workers (UTD) Mosconi, between 1995 and 2013.

In this sense, we seek to deepen these lines of analysis, focusing the general question of the thesis work on two simultaneous axes of inquiry. On the one hand, we are interested in carrying out an analytical exercise around the government of poverty - specifically of poor and unemployed populations - codified in the field of public social policies in Argentina and Salta. For this, we intend to focus on the existing relationships between the multiple logics and practices aimed at objectifying and subjectivizing these populations, in terms of human development, understood as a transversal axis of knowledge that articulates and regulates the configuration of social policies and the problematization of the social in terms of poverty, with specific singularities in the different historical sections to be retraced. On the other hand, we intend to cover issues related to the existing relations between governed and rulers, specifically between government and resistance, as strategic and heterogeneous relations between freedoms. Specifically, we will work around the perspectives and practices of those spaces and subjects to which public social policies are directed, whose transactional effects exercise mutual reconfigurations, while recreate the spaces of organization, between resistance and self-government. In this way, we recover the witness case, by current, paradigmatic and relevant of the UTD of Gral. Mosconi, as a space of union in movement, in which we identify the processes of construction and subjectivation (collective), in relation to work, life, death and struggle.

Among the hypothetical assumptions, which trace the thesis according to the above, we argue that the government programs in which social policies are framed refer to heterogeneous political rationalities. This is clearly expressed in the exercise of the government of poverty, from the mid-1980s to the present day, in unique ways. In tune we maintain that, in the field of public social policies and in the enunciative traces of the discourse of human development, born at the dawn of neoliberalism, there is a re-invention of the social in terms of poverty. While the problematization of the social occurs through the discourse of poverty.

We assume, in turn, that for an analytic of these relations, it is necessary to understand the dynamics of appropriations and transformations on which the government's game of poverty and resistance practices is based. In this relational fabric, we start from the thesis that the UTD is installed and re-configured between successes and cleverness, in a transactional game of resistance practices, between denial, affirmation and differentiation.

While, in a dynamic beam of local and daily relationships, different practices of subjectivation are put into play from the privatization of YPF to the current news. The question of method, is built around a qualitative methodological approach, first of all from the perspective suggested by a genealogy of practices and knowledge, as well as by the tools from archeology worked by Foucault, around the analysis of local discursivities. In turn, in reference to the field work and case study, we recover elements from the ethnographic perspective, as well as from participatory action research and popular education (Rigal and Sirvent, 2007, Fals Borda, 2015 and Freire and Faundez, 2010); and we also recover elements that the sociological analysis contributes, around the perspective of the actor (Long, 1997, 2007, Giarraca and Bidaseca, 2001). As an exhibition organization, the work has two large parts organized into a total of four chapters, subdivided into different sections.

Agradecimientos

El hecho de que un trabajo de tesis sea un proyecto individual, no remite a que haya sido realizado en solitario, todo lo contrario. El camino del pensar, es también un camino del sentir y el hacer de un modo compartido, múltiple y multitudinario, a veces. De hecho, los senderos del pensar siempre son “con otros”, por eso me encuentro en la necesidad de realizar profundos agradecimientos.

Gracias a Elsa Ponce, mi directora, quien me ha guiado, acompañado y ha tenido profunda confianza en mi trabajo.

Gracias a Susana Murillo, mi codirectora, por su compañía, su aliento y guía en el camino del pensar profundo y movedizo.

Gracias a Pepino, a Gipi, a Chiqui, a Juan, a doña Mari, a Sandra, a todos, todas y cada uno de los integrantes de la UTD Mosconi. Espacio de profundo aprendizaje político y existencial, en el cual resistir está siendo un modo de re-existir.

La tesis ha sido realizada en el marco de una investigación que comencé siendo becaria doctoral, por lo cual debo mi agradecimiento al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que hizo posible esta investigación; así como al Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, del cual fui becaria y soy investigadora, desde hace algunos años.

También en la amistad, referente, universitaria, amorosa, familiar, intempestiva, encontré lazos de confianza, entrega, resguardo y compañía. En este camino agradezco infinitamente a Andrea Flores y Gabriela Ferro por su incansable paciencia, aliento, alegría y alegoría. Gracias a Luis Arias, por nuestros espacios de aprendizajes compartidos. Agradezco a Melisa Campana y José Giavedoni, por su guía, entrega y compromiso. Gracias a Emiliano Venier, por su confianza y seriedad en el trabajo compartido. Agradezco a Ana Simesen, por su entrega y ánimos para desandar caminos del pensar subalternos y nuestros. Gracias a Andrea Villagrán, por su compañía, desde el inicio del proceso. Agradezco, profundamente, a Sonia Álvarez Leguizamón quien durante largos años, ha guiado mi trabajo. Gracias a Zulma Palermo, por su luz y sabiduría. Gracias a mis alumnas/os/es, por sus tiempos de escucha, diálogo, discusión y lectura. Gracias a todos/as/es aquellos de quienes he ido aprendiendo a lo largo de estos años de investigación, escritura, reflexión, discusión, a todos/as/es y cada, que en diferentes ámbitos de la vida académica y universitaria, me han incitado, orientado, derivado, en los caminos del pensar.

Gracias a mis amiga/os/es de la vida, que sin saber muy bien que estaba haciendo me alentaron siempre. Especialmente, gracias a Mariela, amiga amada que nos dejó antes de que pudiese enviarle el trabajo finalizado.

Gracias a mi familia pampeana, mi mamá, mis hermanas, mi papá, mi abuela Petila, por su profunda confianza en mi trabajo. Especialmente, gracias a mi mamá por acompañarme en el proceso de corrección de la tesis entera.

Gracias a Jacinto y Felipe, mis dos hijos; a Iván, mi amor y compañero de vida. Gracias a ellos, gracias, gracias, gracias, sin los cuales jamás hubiese tenido las fuerzas para realizar este trabajo, quienes me dieron alegría, amor, abrazos, ánimos en momentos arduos y oscuros, quienes le dan luz y sentido a cada cosa que hago, cada paso que doy.

Gracias a quienes, advenidos “nadies”, nos motivan en la esperanza y construcción de un mundo posible: “en el que quepan todos los mundos”.

Glosario de Siglas

ABE: Apoyo a la Búsqueda de Empleo.
ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social.
ASOMA: Ayuda Solidaria a Mayores.
AUH: Asignación Universal por Hijo.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.
BM: Banco Mundial (World Bank).
CCC: Corriente Clasista y Combativa.
CCT: Condicional Cash Transfer.
CDR: Centros de Referencia.
CENOC: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
CIC: Centro de Integración Comunitaria.
COFEDES: Consejo Federal de Desarrollo Social.
CTD: Corriente de Trabajadores Desocupados de Tartagal.
CUF: Centro Único de Facturación.
DDH: Discurso de Desarrollo Humano.
DGAS: Dirección Nacional de Asistencia Social.
DH: Desarrollo Humano.
DINOS: Dirección Nacional de Obras Sociales.
DNAS: Dirección Nacional de Asistencia Social.
DNH: departamento Nacional de Higiene.
DNSPyAS: Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social.
EPH: Encuesta Permanente de Hogares.
FEP: Fundación Eva Perón.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
FUNDATRAD: Fundación de Trabajadores Desocupados de General Mosconi.
GeAR: Gestión Asociada Regional.
GPS: Gasto Público Social.
HPA: Hospital Público de Autogestión.
HPGD: Hospital Público de Gestión Descentralizada.
IAPI: Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio.
IDH: Índice de Desarrollo Humano.
ILPES: Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
IPEC: Instituto Provincial de Estadísticas y Censos.
MASySP: Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.
MBS: Ministerio de Bienestar Social.
MDS: Ministerio de Desarrollo Social.
MDSyMA: Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
MIJD: Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
MSyAS: Ministerio de Salud y Acción Social.
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados.
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas.
OEA: Organización de Estados Americanos.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OL: Orientación Laboral.
OMS: Organización Mundial de la Salud (World Health Organization).
ONU: Organización de Naciones Unidas (United Nations Organization).
OTI: Orientación al Trabajo Independiente.
PIDUA: Planes Integrales de Desarrollo Urbano Ambiental.

PAGV: Programa de Atención a Grupos Vulnerables.
 PAID: Programa de Asistencia e Intervención Directa.
 PAN: Plan Alimentario Nacional.
 PBI: Producto Bruto Interno.
 PCR: Partido Comunista Revolucionario.
 PDFT: Programa Descentralizado de Formación para el Trabajo.
 PEC: Programa de Empleo Comunitario.
 PER: Plan Estratégico Rosario.
 PERM: Plan Estratégico Rosario Metropolitana.
 PF: Plan Familia.
 PJJHD: Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
 PMI: Programa Materno Infantil.
 PNP: Proyecto Nacional y Popular.
 PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
 POSOCO: Políticas Sociales Comunitarias.
 PRANI: Programa de Asistencia Nutricional Infantil.
 PRIST: Programa de Ingreso Social con Trabajo.
 PROMIN: Programa Materno Infantil y Nutrición.
 PRONATASS: Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de Servicios Sociales.
 PROSONU: Programa Social Nutricional.
 PTP: Partido del Trabajo del Pueblo.
 RSE: Responsabilidad Social Empresaria.
 RUB: Registro Único de Beneficiarios.
 SAS: Subsecretaría de Acción Social.
 SB: Sociedad de Beneficencia.
 SCYE: Seguro de Capacitación y Empleo.
 SEPAC: Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad.
 SEPAS: Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia Social.
 SES: Subsecretaría de Economía Solidaria.
 SIEMPRO: Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.
 SIES: Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.
 SINITyS: Sistema Nacional de Identificación Tributario y Fiscal.
 SIPROF: Sistema de Protección Familiar.
 SISFAM: Sistema de Identificación de Familias Beneficiarias de Programas Sociales.
 SPS: Secretaría de Promoción Social.
 SSP: Secretaría de Salud Pública.
 SUPE: Sindicato Unidos Petroleros del Estado.
 TCI: Transferencias Condicionadas de Ingreso.
 TIAR: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
 TOL: Trayectos de Orientación Laboral.
 TUC: Tarjeta Única de Ciudadanía.
 UOCRA: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
 UTD Mosconi: Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.
 YPF: Yacimiento Petrolíferos Fiscales.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

I.-Los caminos del pensar: motivaciones, tesis a sostener, posicionamientos

¿Cómo estamos siendo gobernados/as en nuestro presente histórico? Y ¿Cómo podemos resistir a ser gobernados/as de ciertos modos?, ¿Cómo en los diferentes suelos, historias, trazos y tramos de la América y la Argentina Profundas construimos modos y mundos disímiles, simultáneos, múltiples y en permanente tensión, en los cuales “poder vivir juntos/as”? Estas han sido preguntas amplias y motivadoras que, intuitivamente, han trazado el bifurco sendero del trabajo doctoral desde sus comienzos, allá por año 2011. Le anteceden, tanto andares académicos específicos en los avatares del pensamiento filosófico y social contemporáneo¹; así como laborales y vivenciales vinculados con encuentros en torno de diferentes, múltiples y simultáneos modos de hacer política en el NOA, Argentina y América Latina².

En simultáneo motiva el trabajo doctoral el contexto histórico, político, económico y social, que entre 1995 y 2013 configura modos singulares de establecer relaciones entre poder y resistencia en Argentina y específicamente en la provincia de Salta. En tanto, desde finales de los años setenta, en América Latina y en Argentina, la instalación de programas de gobierno contruidos en torno de la gubernamentalidad neoliberal, promovieron lógicas y prácticas políticas materializadas en reformas de Estado y economías abiertas. En la década de los 90', estos programas de gobierno se

¹ En primer lugar, está mi recorrido, como profesora y licenciada en Filosofía, recibida en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre mis trabajos más relevantes se encuentra mi tesis de licenciatura en filosofía (UNRC), “*Hacia el otro comienzo*”. *Aportes e indicaciones desde el camino del pensar de Martín Heidegger*”, en la cual he tenido una aproximación profunda al pensamiento contemporáneo y sus avatares. En este recorrido filosófico de búsquedas y encuentros comencé la Especialidad en Políticas Sociales con orientación en Desarrollo Humano Sustentable (UNSA), cuyo trabajo de tesis lleva por título: “*El Discurso del Desarrollo Humano y Rural Sostenible, en el acaecer del Programa Social Agropecuario: entre lo escrito, lo dicho, lo hecho y lo por venir*”. En dicho trabajo me introduje con profundidad y rigurosidad a las cuestiones del discurso y la gubernamentalidad sugeridas por Foucault, (1978-79), a través de un ejercicio analítico y genealógico de los entramados discursivos y extradiscursivos del Desarrollo Humano, puntualmente, del Discurso de Desarrollo Rural Humanizado. Desde entonces, a través del andamiaje foucaultiano, fue y está siendo posible un encuentro con los avatares del poder, desde una perspectiva heterogénea y múltiple, lo cual me permite una proximidad analítica y positiva a las realidades y prácticas políticas en los senderos del viviendo.

² Luego de obtener los títulos de grado y también de postgrado, me desafié la vida a dar un “salto hacia otro comienzo”, y encontrarme con diferentes mundos y prácticas cotidianas, locales, movedizas y positivas a través de las cuales considero que la cuestión política y “de la” política, van cobrando formas. Por tales motivos decidí instalarme en el norte, Salta primero, Jujuy luego y México más tarde (además de Ecuador y otros países de América Latina). Este trabajo también se nutrió y enriqueció por mis antecedentes laborales específicos, ya que he tenido proximidad a las diversas experiencias de lucha y resistencia vigentes en Argentina y en América Latina, tales como: MNCI; Mocase; Red Puna; CONAIE; EZLN, así como realizado tareas, bajo la figura de “técnico” en organizaciones, en el marco de programas y proyectos de desarrollo social y de desarrollo para pequeños agricultores y campesinos (IPAF NOA-INTA).

profundizaron a nivel nacional y provincial-salteño. Por un lado, se produjeron transformaciones en el territorio, en los procesos sociales de subjetivación y de trabajo, en torno de lo cual tomamos como hito referencial la privatización de YPF. En esa matriz se construyó, tanto un enorme conjunto de programas, planes y proyectos que nucleados en las políticas sociales y programas de empleo se dirigían a gobernar a las poblaciones advenidas pobres y desocupadas, así como se produjeron diferentes prácticas de resistencia, ante todo bajo la forma piquete. Tal es el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi³ emergida post privatización de YPF, a partir un complejo proceso que afectó de diversos modos la subjetividad de los trabajadores ypefianos⁴, en su advenir trabajadores desocupados y piqueteros. En el 2001, estas prácticas de impugnación y cuestionamiento a los diferentes modos programáticos de ejercer el gobierno, culminaron en una crisis inédita, cuando luego de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 el presidente es destituido. Desde el 2003 en Argentina y, de un modo singular en la provincia de Salta desde el 2007, se instalaron programas de gobierno de perfil nacional y popular, mientras que las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi continúan en un permanente proceso de construcción, hasta la actualidad.

En dicha línea de análisis, el trabajo de investigación y tesis se dirige a reconstruir y analizar, desde una perspectiva crítica y de gubernamentalidad, los modos en que se configuran las relaciones entre gobernados y gobernantes, mediante una analítica de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas⁵, en Argentina y, específicamente en la provincia de Salta, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos, atendiendo al caso testigo de la UTD de Gral. Mosconi, entre 1995 y 2013⁶. No obstante, nuestro objetivo no pretende generalizar a partir del análisis del caso a abordar, sino reflexionar acerca de las relaciones entre gobierno y

³ UTD, de ahora en más.

⁴ De ahora en más, así se nombrará a los trabajadores que realizaban tareas diversas en los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) regional norte.

⁵ Remitimos a un sector de la población, que bien podríamos también llamar “sectores populares” (Romero L. A. 1995), tomando distancia de la noción de “clase”, en tanto dicha noción nos remite a una situación estática, un *a priori*, mientras que el término sugerido permite captar el devenir del proceso histórico en el que se constituyen los sujetos sociales, los cuales “están siendo”, en un permanente proceso de cambio, transformación y también continuidad y permanencia.

⁶ Cabe aclarar que, no solo analizamos el acaecer de la gubernamentalidad “neoliberal”, sino el heterogéneo cruce de racionalidades políticas y prácticas de gobierno que configuran las gubernamentalidades históricamente; noción que a su vez se diferencia de “gobernanza y gobernabilidad”, en tanto y como desarrollaremos en el apartado que sigue, la gubernamentalidad define el campo estratégico de relaciones de poder, en lo que tienen de móviles, transformables, reversibles, en cuyo seno se establecen los tipos de conducta que caracterizan al gobierno, el cual no refiere sólo a la dirección de los Estados y las instituciones, sino que: “*Gobernar (...) es estructurar un campo posible de acción de los otros*” (Foucault, 2001: 254)

resistencia en torno de un eje transversal, que permite la subdivisión y delimitación propuesta: la “privatización de YPF”. Consideramos que dicho acontecimiento abre dos dimensiones analíticas: por un lado, nos remite al advenir de los “trabajadores en pobres y desocupados” y con ello a la emergencia, instalación y propagación de múltiples programas de gobierno dirigidos a gobernar la pobreza de la mano de la desocupación; y por otro lado – pero en simultáneo – nos remite a la emergencia, instalación y diversificación de las prácticas de resistencia piqueteras en el norte de nuestro país, entre las cuales recuperamos la singular, relevante y vigente experiencia de la UTD Mosconi.

En tal sentido, entonces, procuraremos profundizar en dichas líneas de análisis, centrando el interrogante general del trabajo de tesis sobre dos ejes simultáneos de indagación. Por un lado, nos interesa realizar un ejercicio analítico en torno del gobierno de la pobreza - puntualmente de las poblaciones pobres y desocupadas - codificado en el campo de las políticas sociales públicas argentinas y salteñas. Para esto pretendemos focalizar en las relaciones existentes entre las múltiples lógicas y prácticas dirigidas a objetivar y subjetivar⁷ a dichas poblaciones, en clave de desarrollo humano, comprendido como un eje transversal de saber que articula y regula la configuración de las políticas sociales y la problematización de lo social en términos de pobreza, con singularidades específicas en los diferentes tramos históricos a desandar.

Por otro lado, pretendemos abarcar cuestiones vinculadas con las relaciones existentes entre gobernados y gobernantes, específicamente entre gobierno y resistencia, en tanto relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades. Puntualmente, trabajaremos en torno de las perspectivas y las prácticas de aquellos espacios y sujetos a los cuales las políticas sociales públicas se dirigen, cuyos efectos transaccionales ejercen reconfiguraciones mutuas, mientras se recrean los espacios de organización, entre la resistencia y el autogobierno. De este modo, recuperamos el caso testigo, por vigente, paradigmático y relevante de la UTD de Gral. Mosconi, como un espacio de unión en movimiento, en el cual identificamos los procesos de construcción y subjetivación (colectiva), en relación con el trabajo, la vida, la muerte y la lucha.

Entre los supuestos hipotéticos, que trazan el trabajo de tesis acorde a lo antedicho,

⁷ En tanto las poblaciones pobres y desocupadas son *objeto* de instituciones y procedimientos particulares, esto es de las políticas sociales que pretenden regular a dichas poblaciones para lo cual es fundamental: identificarlas, ubicarlas, cuantificarlas y conocerlas. Por su parte, dichas políticas también interpelan a las poblaciones pobres en tanto *sujetos*, en primer lugar, dándoles reconocimiento público para lo cual se las identifica y considera desde la particularidad de su condición social, económica, moral y política, es decir se las individualiza. La segunda dimensión de la subjetivación de las poblaciones pobres y desocupadas, remite a interpelar a los sujetos promoviendo su libertad y autodeterminación/autogestión.

sostenemos que los programas de gobierno en los cuales se enmarcan las políticas sociales, remiten a racionalidades políticas heterogéneas. Esto se expresa con nitidez en el ejercicio del gobierno de la pobreza, desde mediados de los 80' hasta nuestros días, de modos singulares. A partir de lo cual, siguiendo a Shore (2010), las políticas públicas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamientos, en medio de las cuales están inmersas. En sintonía sostenemos que, en el campo de las políticas sociales públicas y en los trazos enunciativos del discurso de desarrollo humano, nacido en los albores del neoliberalismo⁸, se produce la re-invenición de lo social en términos de pobreza. En tanto se produce la problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza.

Asumimos, a su vez, que para una analítica de estas relaciones, es preciso comprender la dinámica de apropiaciones y transformaciones en las que se basa el juego del gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia. En este tejido relacional, partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego transaccional de prácticas de resistencia, entre la negación, la afirmación y la diferenciación. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, son puestas en juego diferentes prácticas de subjetivación desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana.

Así, de los supuestos hipotéticos y del objetivo general señalados se desprenden otros más específicos, en primer lugar el de analizar cómo se ejerce el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres –desocupadas, en un heterogéneo haz de lógicas y prácticas políticas, en el tramo histórico señalado. Para realizar lo antedicho, nos centramos en una analítica de la configuración y puesta en práctica de los saberes, programas y discursos,

⁸ Si bien existen diferentes trabajos relativos a la reconfiguración de la dominación capitalista durante el neoliberalismo y las cuestiones vinculadas a la fabricación de subjetividades capitalistas (Bidet, 2010; Guattari, 1992); los estudios ligados a las transformaciones en el mundo del trabajo y las revisiones sobre la dominación de clase en un contexto de disolución de la sociedad salarial (Gorz, 2000; Boltansky y Chiapello, 2002); o bien las indagaciones ampliamente difundidas sobre las transformaciones culturales, territoriales, políticas y geopolíticas de la dominación capitalista bajo el neoliberalismo (David Harvey, 2014), cuando referimos a neoliberalismo no pretendemos pensarlo como modelo, ni como régimen, ligado estrictamente a la transformación y/o variación en la dominación capitalista y del capitalismo. Por neoliberalismo, entendemos una práctica y un método de racionalización del ejercicio de gobierno, que lleva consigo una visión de sujeto y de mundo. Por su parte, el neoliberalismo a diferencia del liberalismo, se traza partiendo de la consideración de que el mercado liberal resultaba una ingenuidad naturalista. Entonces, el mercado no debe ser concebido en términos de intercambios y equivalencias, sino de competencia y de desigualdad, a partir de lo cual: “*Hay que gobernar para el mercado más que gobernar a causa del mercado*” (Foucault, 2007: 120-125). En este sentido, el neoliberalismo sólo se comprende en el trazo heterogéneo de relación con otras racionalidades políticas y tecnologías de gobierno, más allá de pueda presentarse como predominante en ciertos momentos de la historia, no podemos esencializar el neoliberalismo, como si fuese un único modo posible o un único patrón de poder dirigido a gobernar a las poblaciones, en torno a la configuración del mercado, la economía, el estado y la sociedad civil.

que configuran y realizan a las políticas sociales públicas dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas.

En segundo lugar consideramos que, tanto este análisis de las lógicas y prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, así como las prácticas de resistencia derivadas del proceso de privatización de YPF, en Mosconi, requieren identificar las diferentes formas de concebir el rol del Estado, la economía, el gobierno del mercado y las relaciones con la sociedad civil, que configuran la gubernamentalidad, entre las diferencias y las singularidades a lo largo de la historia y los escenarios políticos nacionales y salteños.

En tercer lugar, y asumiendo que las relaciones de poder interpretadas bajo la noción de gobierno forjada por Foucault, se ejercen y construyen como relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades, pretendemos analizar y describir – de un modo ilustrativo y crítico - el tejido relacional entre gobernados y gobernantes, en torno de la emergencia, instalación y permanente reconfiguración de las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi, desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana.

Acorde a los ejes de interrogación, que construyen nuestro trabajo de tesis, nos guían un conjunto amplio de preguntas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

En torno del gobierno y la gubernamentalidad partimos de la siguiente pregunta abarcadora: ¿Cómo estamos siendo gobernados/as en nuestro presente histórico?, a partir de la cual podemos desandar: ¿cómo se construyen los programas de gobierno en el trazo de racionalidades políticas y prácticas heterogéneas, en relación con el Estado, el gobierno del mercado y la sociedad civil en los diferentes niveles analíticos sugeridos (macro, meso y micro)? ¿Cuáles son los mecanismos de gobierno a partir de los que se ensaya la conducción de nuestras conductas, como sujetos situados?

En relación con lo antedicho, para desandar lo referido al gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, cuyas prácticas y lógicas se codifican en el campo de las políticas sociales públicas en clave de desarrollo humano y, en una permanente configuración estratégica de campos transaccionales entre gobierno y resistencia, nos preguntamos: ¿Cómo se expresan, esos modos de conducción de nuestras conductas y espacios, en el gobierno de la pobreza? ¿Cómo se configura la problematización de la pobreza, en clave de desarrollo humano?, en tal sentido: ¿Cómo se construye y constituye al sujeto pobre-desocupado? ¿Cuáles son los objetivos y los mecanismos de gobierno puestos en juego, en y desde el campo de las políticas sociales públicas? ¿Cómo se construyen, en estas

redes vinculares, las relaciones entre gobierno y resistencia?

En sintonía y en referencia a la UTD Mosconi, por un lado nos preguntamos respecto de las procedencias vinculadas con los procesos de configuración de la subjetividad ypefiana, en relación con la empresa-fábrica, el petróleo, el trabajo y los primeros destellos de resistencia y organización: ¿cómo se configuraba la subjetividad ypefiana/trabajadora en el esplendor de YPF? ¿Cómo se expresaban las primeras prácticas de resistencia a la privatización desde la década los 80'? De estas preguntas se derivan otras que nos llevan a cuestionar el advenir de los trabajadores en trabajadores desocupados y piqueteros: ¿Cómo estos hombres y mujeres, advienen trabajadores desocupados y piqueteros (ex/ypefianos)? ¿Cómo, en pie de lucha, configuran espacios de trabajo, organización, autogobierno y resistencia, en el cotidiano de sus vidas y prácticas concretas? ¿Cómo, para qué, contra quiénes, desde cuándo resisten?; ¿Cómo se organiza la resistencia bajo la forma piquete, en los diferentes trazos de la historia de la organización? ¿Cómo se tejen relaciones transaccionales y negociaciones, con quiénes y para qué, según prácticas concretas, trayectorias de vida y tradiciones de trabajo? A su vez, en los avatares de la dispersión genealógica y de modo transversal también nos guían las siguientes preguntas: ¿Cómo, estos hombres y mujeres unidos en la UTD Mosconi, se enuncian, se piensan y se hacen?; ¿Cuáles son los momentos históricos de quiebre, reinención creativa y reconfiguración política?

En este camino de investigación, nuestro campo inmediato de experimentación se traza entre el año 1995 hasta el 2013 y se sitúa en la provincia de Salta y en la localidad de Gral. Mosconi⁹, como campos contextuales inmediatos, aunque el análisis se extiende a nivel nacional. Nos situamos entonces en la provincia de Salta, una de las provincias más pobres del país, y a la vez una de las más ricas tanto en el trazo de prácticas de lucha y resistencia confluyentes y múltiples, desde inicios del siglo XX, así como en la distribución y ubicación de recursos naturales estratégicos como gas, petróleo y minerales diversos. Recuperamos el caso de la UTD Mosconi porque resulta una experiencia

⁹ La provincia de Salta tiene una posición singular en la geografía social y política de la Argentina. Está localizada a 1600 kilómetros hacia el norte de la capital y ciudad-puerto de Bs. As. Limita al norte con Jujuy y Bolivia hasta el trifujo Hito Esmeralda, donde comienza su frontera con Paraguay (noreste), al este con Formosa y Chaco, al sur con Stgo. Del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con Chile. Por su parte, la ciudad de General Enrique Mosconi se encuentra sobre la ruta nacional 34 y a una distancia de 340 Km de la Capital Salteña. Integra uno de los seis municipios del Departamento General San Martín. Limita, al norte con parte de la localidad de Aguaray, al sur con la localidad de General Ballivián, al Este con la ciudad de Tartagal y al Oeste con el Río Grande de Tarija (Bolivia) La ciudad cuenta con una población estable aproximada de 19.000 habitantes, el Dpto. Gral. San Martín posee 156.910 habitantes, en un total de 1.214.441 a nivel provincial. (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. INDEC)

paradigmática a nivel latinoamericano y aún vigente, a su vez dicha experiencia no es prácticamente recuperada ni analizada, en profundidad, en los ámbitos académicos y de reflexión, en la provincia de Salta. De hecho no hay antecedente de investigación doctoral en el NOA en torno de la UTD Mosconi. En sintonía, delimitamos el trabajo analítico al año 2013, puesto que, en el año 2012, tomamos como punto referencial y terminal, a su vez, la decisión programática de la re-nacionalización de YPF, en torno de la cual si bien se abren diferentes aristas de análisis, estas resultan imposibles de ser abarcadas en el presente trabajo, quedando abiertas y en latencia para una próxima investigación consecuente y consecutiva. En el tramo histórico trabajado, así como en la provincia de Salta en interacción con el territorio nacional, las convergencias múltiples, heterogéneas y siempre abiertas de prácticas y lógicas vinculares entre gobierno y resistencia resultan expuestas y puestas en juego, con un enorme valor analítico y expositivo.

Por tanto, consideramos que el principal aporte de nuestro trabajo es enfocarnos, en clave de gobierno, en aspectos que no suelen ser abordados como objetos de investigación de un modo relacional¹⁰, esto implica desarrollar una analítica de las prácticas vinculares entre gobernados y gobernantes, construidas en diagramas heterogéneos y estratégicos de poder, profundizando en la relación entre poder y resistencia. A su vez y, en sintonía, otro aporte remite a desandar el problema de investigación planteado en relación con racionalidades políticas, técnicas, prácticas y tecnologías de gobierno ejercidas en y de espacios de intervención social ante todo los Estados, sin por esto caer en las perspectivas de la disfuncionalidad, la retirada y la ausencia del mismo, sino identificando los procesos de configuración dinámica del rol del Estado, en condiciones históricas concretas de posibilidad y realidad¹¹. Y por último, pensar en clave de gobierno permite desandar la

¹⁰ La mayoría de los estudios recorridos han trabajado la relación entre los movimientos de desocupados y el Estado, ante todo en una doble reducción de análisis. Por un lado encontramos trabajos que acentúan el estudio de los movimientos de desocupados y procuran mostrar la potencialidad del mismo para reconstruir lazos sociales, mediante formas alternativas de organización centradas en valores como la horizontalidad y la cooperación (Delamata, 2004). La potencialidad de los movimientos piqueteros consiste, ante todo en limitar la participación de los sectores populares en “redes clientelares”; en tal sentido las referencias a las acciones estatales se utilizan para señalar los riesgos de “cooptación” que gravitan sobre dichos movimientos (Svampa y Pereyra, 2003, 2005; Delamata 2004). Otros trabajos remiten a dicho vínculo entre Estado y Movimientos de desocupados mediante una analítica de las modalidades de autogestión estratégica de estos movimientos, frente a las modalidades de institucionalización y dominación del Estado (Manerio, 2012, Wahren, 2011). Por su parte, los estudios que abordan las políticas “sociales” públicas dan cuenta de la formulación técnica de programas sociales y políticas sociales (Grassi, 2003, 2013; Grondona, 2012; Campana, 2012; Álvarez Leguizamón, 2008, 2010, 2015).

¹¹ En ese sentido, más que pensar en un retroceso del Estado, estamos pensando en una reconfiguración de los fines del mismo, y por tal motivo creemos que es posible abordar los problemas sociales más allá de su explicación en términos de ausencia, disfuncionalidad o debilidad del Estado. La perspectiva aquí asumida nos permitió por un lado, reconocer una función estratégica y una finalidad productiva en las prácticas de gobierno y, por otro, abordar el problema del Estado no en términos normativos, sino en su carácter de reproductor del orden

posibilidad de negarse a ser gobernados de tal modo. En tanto, si se piensa el gobierno como la conducción de las conductas, un elemento no solo importante sino constitutivo de dicha noción, es el de “libertad”, a partir de lo cual analizamos las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi.

II - Avatares teóricos específicos: antecedentes y perspectivas

En la historia de las ciencias sociales y humanas, la reflexión sobre la política y el gobierno se ha ligado desde principios del siglo XX a la preocupación por el orden social, las estructuras sociales, las instituciones y los procesos de representación. En ese marco, los principales interrogantes giraban en torno a la posibilidad del mantenimiento del orden, la organización y la cohesión social, entre los mecanismos de un poder centralizado y con capacidad de coerción.

Con la crisis del estructural-funcionalismo los conceptos de “situación social, campo político, acción y práctica” indicaron el desplazamiento de intereses académicos desde la taxonomía, estructura y función de los sistemas políticos hacia los procesos, el conflicto y el cambio social. La política fue asociada a lo público, surgiendo análisis sobre los criterios de formación de grupos políticos, la competencia, las estrategias y las acciones individuales (Manzano, 2012).

En la década del 70' comienzan a desarrollarse enfoques en relación a la política y lo político como “relaciones de fuerzas”, desplazando la pregunta por el orden hacia la lucha por el orden, (Balbi, Boivin, 2008: 8). En estas transformaciones de enfoques también el Estado fue concebido de otros modo, ante todo los conceptos de “Estado ampliado” de Gramsci y también la noción de “gubernamentalidad” de Foucault permitieron destacar que las acciones estatales no se circunscriben a un ámbito institucional fijo y unitario, sino que se despliegan en un conjunto de prácticas y regulaciones. En esta línea de análisis también rescatamos aquellos trabajos que analizan el Estado en torno de sus “efectos” (Shore, 2010) y en sus “márgenes” (Das, V. y Poole, D. 2008; Asad, 2008), a través del registro de rutinas, procedimientos y prácticas cotidianas, entre otras cuestiones. Otras contribuciones, en estas líneas analíticas remite a pensar los modos en que este “gobierno de las poblaciones” puede ser ejercido tanto por entidades “estatales”, como por organizaciones “no gubernamentales” o movimientos sociales.

social. Por esta razón creemos que en vez de pensar en ausencia de Estado debemos pensar en “gobierno de la pobreza”, razón por la cual asumimos la perspectiva teórica centrada en los estudios de la gubernamentalidad.

También resultan relevantes los desarrollos de la teoría social latinoamericana, cuyos aportes sobre la especificidad de la forma estatal y las configuraciones políticas, la dominación y/o el gobierno de las poblaciones subalternizadas, las resistencias y la conflictividad estructural, desde Martí y Mariátegui, a Quijano (2001), Segato (2002; 2010), y el mismo Castro Gómez (2002, 2007), pasando por Aricó, Agustín Cueva, Marini y los teóricos de la dependencia, Zavaleta Mercado, Dussel (2003), entre otros.

En Argentina, conviven diferentes enfoques y perspectivas con apropiaciones, más o menos críticas, de las diversas teorías, en torno a interrogantes, andares y problematizaciones trazadas a partir de diversas problemáticas, que atraviesan y conforman las relaciones sociales, políticas, de poder y resistencias en los tramos relaciones para con los Estado-s, el gobierno, las organizaciones sociales y políticas, los conflictos sociales, las prácticas de resistencia, lucha y revuelta (Balbi 2008, 2020, 2013; Balbi y Boivin, 2008; Neufeld y Tiscornia y Wallace, 1998; Claverie, 1988); mientras que identificamos aquellos estudios en referencia a los efectos de gobierno ejercidos en torno de poblaciones específicas como los pobres, los enfermos de VIH, los indígenas, las mujeres, las poblaciones subalternas, la infancia, los trabajadores ypefianos y ex/ypefianos recuperamos aquí los trabajos (Fassin, 2003, Flores, 2012, 2013; Grimberg, 2008, Villagrán, 2010b, 2014a; Grimberg, Manzano y Fernández Álvarez, 2008; Palermo, 2010; Petz, 2005; Ferraudi Curto, 2006; Sigaud (2000, 2004; Wahren, 2009, 2011; Shuster, 2005; Svampa, 2003, 2005)), entre otros. Así como dialogamos con las investigaciones en torno de las relaciones de poder, políticas, de trabajo y la vida cotidiana, neoliberalismo y prácticas económicas diversas: (Grimberg, 2005, 2008, 2009; Palermo, 2010; Presta, 2009, 2011, 2015; Gago, 2014, entre otros).

II.1-Gubernamentalidad y gobierno: entre racionalidades políticas, programas y prácticas

En referencia la perspectiva teórica, que reviste el trabajo de investigación en torno de las de la gubernamentalidad, las prácticas, programas, lógicas de gobierno y racionalidades políticas, de la mano de las herencias foucaultianas nos encontramos con los trabajos realizados por la vertiente llamada anglofoucaultiana, (O'Malley, 2007; Dean, 1999; Miller y Rose, 2008; Burchell, Colin Gordon and Miller. P, 1991) dedicados a una analítica, que desde lo que denominan perspectiva de gubernamentalidad, abordan

dimensiones como las racionalidades políticas, los programa de gobierno, la comunidad en torno de los advenidos capitalismos avanzados de Europa, ante todo. También los trabajos de Deleuze, (1968-2000) en su lectura de Foucault resultan un importante aporte, así como las investigaciones de De Certeau (1998, 2000) en relación con las técnicas de gobierno, entre disciplinas e indisciplinas. Mientras que, otros trabajos pretenden proveer una analítica crítica para comprender la manera en que las políticas públicas funcionan: como tecnologías políticas, formas de gubernamentalidad e instrumentos de poder que a menudo ocultan sus mecanismos de funcionamiento (Shore, 1997, 2010).

En América Latina, nos antecede y orienta el trabajo de Santiago Castro Gómez (2005, 2007, 2009, 2010), quien desde el andamiaje foucaultiano, en diferentes pesquisas ha realizado ejercicios críticos, genealógicos y de gubernamentalidad en torno de las prácticas y los saberes en Latinoamérica. Mientras que en Argentina, recuperamos como antecedentes inmediatos los trabajos de Murillo (1996, 2006, 2007, 2011, 2013), dirigidos a un análisis crítico del neoliberalismo en el trazo de la historia de la gubernamentalidad y sus configuraciones locales en diferentes campos; y otros trabajos, que desde las ciencias sociales analizan las relaciones entre gobierno de las poblaciones desocupadas y la biopolítica en clave genealógica (Grondona, 2006, 2009, 2011, 2012). También, en la región el Norte Grande encontramos el trabajo de Ruidrejo (2005, 2012, 2014) el cual, en el trazo de la historia de la gubernamentalidad, analiza las relaciones entre gobierno y poder pastoral, en relación con los alcances y trazos de la crítica; mientras que recuperamos las investigaciones de Vega y Avellaneda, tanto en sus producciones conjuntas en torno de los estudios de gubernamentalidad (2015), así como en los trabajos individuales referidos, por un lado a los trazos vinculares entre gobierno, economía y derecho, y en torno de la política y la teoría (Vega, 2016, 2014, 2012); y por otro, a las relaciones entre gubernamentalidad, población y problematización, en referencia específica al gobierno de la vida militar (Avellaneda, 2015, 2012).

En este marco, a fin de abordar la cuestión planteada en el presente trabajo de tesis se la enmarcará en la línea de investigaciones que, desde la perspectiva foucaultiana, procuran apropiarse de algunas herramientas teóricas y metodológicas, que se desprenden de los estudios sobre gubernamentalidad. Dentro de estos últimos se optará por la línea de

investigaciones que conducen a un rastreo de orden genealógico de las prácticas y los dispositivos de poder y resistencias, en la historia latinoamericana y Argentina¹².

Acorde a la perspectiva sugerida, la gubernamentalidad da cuenta de las transformaciones sociales y políticas producidas desde el siglo XVII, a partir del proceso de “gubernamentalización del Estado” vinculado, ante todo, a la cuestión de la urbanización (escasez, circulación, seguridad, territorio y población). En el desplazamiento de su analítica del poder, Foucault señala que comienza a ser el “*modo de relación propio del poder, el gobierno*”, en el campo de fuerzas de lo que se va a llamar gubernamentalidad liberal vinculada al Estado y al gobierno de la vida de las poblaciones, es decir, la biopolítica¹³.

A partir de 1979, para Foucault la “gubernamentalidad” ya no refiere a un régimen de poder particular, como el Estado de policía o el Estado liberal, sino a “la manera cómo se conduce la conducta de los hombres”, sirviendo de: “...*grilla para el análisis de las relaciones de poder en general*” (Foucault, 2007: 192). Por tanto, la gubernamentalidad está siendo comprendida en el marco del gobierno de la conducta, como un campo estratégico de relaciones de poder para dirigir (conducir, gestionar) la vida de los otros y de sí mismo. El gobierno, siguiendo a Giavedoni (2012a), no indica sólo la institución por donde pasan las decisiones públicas y vinculantes, sino una modalidad de intervención que involucra tanto a autoridades políticas, como autoridades privadas, en el abordaje de un mismo problema: “... *A través de las diferentes formas de acción se estructura un campo de intervención, se estructura un campo de acciones posibles*” (Giavedoni, 2012a: 75).

A partir de ciertos desplazamientos respecto de los supuestos característicos del pensamiento político occidental moderno, el Estado¹⁴ mismo será considerado una

¹²En tal sentido cabe señalar, que la apropiación y recreación de la propuesta antedicha no remite a dar muestra, en nuestro trabajo de tesis, de un estudio foucaultiano propiamente dicho, sino de un señalamiento que viene a cuenta de la potencia explicativa y crítica que aporta la literatura producida por el pensador francés y sus herencias a los estudios sobre gubernamentalidad, gobierno, racionalidades políticas y prácticas de resistencia.

¹³La Biopolítica tiene en Foucault varios momentos (1976, 1978 y 1979). Apenas señalaremos que la biopolítica se despliega como la gestión del cuerpo-especie, en el marco de la medicalización (en sentido amplio incluyendo, actualmente, los efectos de las tecnologías como la biotecnología, el complejo electrónico, nuevos materiales, entre otros) de la vida de las poblaciones activas y productivas, bajo el principio de “Hacer vivir y dejar morir”. Dicha cuestión ha tenido diversas recepciones, entre las más relevantes encontramos las de Agamben, Negri y Esposito (Flores, A., 2011). En el presente escrito resulta central destacar como, la recepción y posterior reelaboración de la noción de biopolítica por parte de los pensadores citados, la escinden de la cuestión de la gubernamentalidad, cuando consideramos que dicha separación no resulta tal en Foucault, si no que en la discontinuidad propia del pensar, se trata de re-configuración de la cuestión, sobre todo en el ejercicio del gobierno de sí y de los otros, en el neoliberalismo contemporáneo.

¹⁴Acorde a tales desplazamientos, tomando distancia de los estudios estadocéntricos, según Foucault: “...*El Estado no tiene esencia. El Estado no es un universal (...) El estado no es otra cosa que el efecto (...), el recorte*

peripezia de la gubernamentalidad. En esta línea, el presente trabajo de tesis se desplaza de aquellas perspectivas que analizan la cuestión del Estado en relación con los problemas sociales a partir de la ausencia del mismo, la disfuncionalidad y la debilidad. Puesto que, consideramos dichos análisis conllevan la dificultad de hacer a un lado los efectos que se producen en el ejercicio de gobierno, ya sea en términos de los sujetos que se constituyen, los problemas que se fundan, así como de las particulares formas de intervenir: “...*Sólo se realiza un juicio de ellos, pero no se llega a un análisis sobre el papel que desempeñan en la construcción y reproducción del orden social...*” (Giavedoni, 2012a: 87). Frente a la perspectiva normativa del Estado¹⁵ se encuentra la del gobierno, entendiendo como tal una forma particular de ejercicio del poder, la cual permite centrar el análisis en los efectos estratégicos del ejercicio del mismo y no tanto en sus disfunciones.

En este entramado teórico relacional también rescatamos la noción de “programas de gobierno”, los cuales no son la simple formulación escrita de intenciones y deseos, sino que son “prácticas discursivas” que expresan ciertas formas de hacer el mundo inteligible y planificable. Puesto que, sin un régimen de verdad no hay acción posible de gobierno:

Los programas presuponen que lo es real es programable, que puede ser sometido al dominio de ciertas reglas, normas y procesos. Ellos hacen ‘pensables’ los objetos de gobierno, de tal manera que sus ‘males’ pueden ser diagnosticados, recetados y curados mediante intervenciones calculadas. (Miller y Rose, 2008: 63).

Los programas de gobierno se construyen, entonces, según la lectura de Castro Gómez (2010), no centrándose en los actores, sino en las racionalidades políticas, cuando estas no refieren a ideologías, sino a las tecnologías y programas a través de los cuales el gobierno

móvil de una perpetua estatización...” (2007: 96). El Estado se comprende a partir de las prácticas como, “el lugar de su codificación”. Identificamos, entonces, cómo el autor francés arremete nuevamente contra el pensamiento político. Lo había realizado en el período anterior, mientras su labor se encontraba dirigida a determinar las modalidades en el ejercicio del poder en la sociedad moderna a través de la noción de disciplina, a través de mecanismos infinitesimales no centrados en la institución Estado. En las clases dictadas en la segunda mitad de los 70, pueden reconocerse tres quiebres o rupturas con respecto al pensamiento político. Un primer quiebre donde señala la soberanía y el gobierno como dos tradiciones diferentes y, por ende, donde deja ver la ausencia de todo vínculo, de toda consanguinidad entre ambas. Es decir, no solo provienen de tradiciones diferentes, sino que al romper esos lazos de consanguinidad, también pone en cuestionamiento la noción de gobierno como mero instrumento del Estado. Un segundo quiebre que refiere a las diferencias de objeto, de fines, de saberes y de medios entre el modelo de la soberanía y el modelo del gobierno. Finalmente, un tercer quiebre que señala la ausencia de universales como punto de partida, al mismo tiempo, epistemológico y metodológico, en el estudio del poder, o en todo caso, los universales (en este caso el Estado) no son más que efectos de conjunto de una multiplicidad de prácticas que deben ser analizadas en su propia racionalidad.

¹⁵ En clave de gobierno, se trata de desarticular el binomio Estado-Sociedad, en tanto el gobierno, como forma de ejercicio del poder, que se inscribe sobre la conducta de los sujetos constituyendo sus hábitos, sus valores, sus creencias, sus deseos, etc., se despliega en diferentes espacios y se inscribe sobre diferentes formas de relaciones sociales.

es realizado. Con respecto a las tecnologías¹⁶, apenas esbozamos que cualquier práctica de gobierno demanda la puesta en marcha de una *techne*, esto es, de ciertas “formas de hacer” y de disponer materialmente las cosas, a partir de lo cual una acción gubernamental es operable.

En este sentido, por “racionalidad política” entendemos la codificación realizada *post-factum* de un cúmulo de medidas administrativas, económicas, sociales, educativas, entre otras: “*Esto implica comprender y estimar de qué modo se establece el dominio de la práctica de gobierno, sus diferentes objetos, sus reglas generales, sus objetivos de conjunto para gobernar de la mejor manera posible*” (Foucault, 2007: 17). En tanto, las prácticas¹⁷ emergen en un momento específico de la historia y quedan inscriptas en relaciones de poder, que tejen redes. Por eso: “*...aunque las prácticas son singulares y múltiples, deben ser estudiadas como formando parte de un ensamblaje, de un dispositivo que las articula*” (Castro Gómez, 2010: 29), lo cual funciona a partir de “reglas”.

De este modo, “los conjuntos de prácticas o regímenes de prácticas”, según expresiones de Foucault, tienen una racionalidad, que remite a las reglas, que acompañan a las prácticas mismas y se transforman con el tiempo. Esto no implica referir la acción y el trazo de las reglas a un sujeto, sino a un régimen de prácticas. Por esto, Foucault no se interesa por la “acción política”, sino por la “racionalidad política”, como entramados discursivos en los que el poder es ejercido, enunciado y conceptualizado, ante todo a partir del registro de la problematización¹⁸ (Giavedoni 2012a). La problematización lejos de toda evidencia remite a cierta interpelación del orden del pensamiento y las prácticas a partir de lo cual algo se torna pensable y adviene problema, así como aquello que advenido problema interpela el orden de las prácticas. Así, el gobierno sobre un área específica como la pobreza, que interpela el orden de las prácticas y el pensamiento, no sólo supone implementar medidas sobre ella, también implica, en el proceso de su constitución problemática, la instalación de la verdad de esta esfera, así como sus regularidades, ante todo en la lógica de la intervención social y de lo social.

¹⁶ Según Castro Gómez: “...las tecnologías de gobierno aparecen como un nuevo conjunto que se diferencia de las tecnologías de dominación porque no buscan simplemente determinar la conducta de los otros, sino dirigirla de un modo eficaz, ya que presuponen la capacidad de la acción (libertad) de aquellas personas que deben ser gobernadas” (Castro, Gómez, 2010: 39)

¹⁷ Las prácticas son: “...entendidas simultáneamente como un modo de actuar y de pensar que proporcionan la clave de la inteligibilidad de la constitución correlativa del sujeto y del objeto” (Foucault, 2008: 7).

¹⁸ Foucault refiere a problematización señalando que: “...no quiere decir representación de un objeto preexistente, así como tampoco creación mediante el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de las prácticas discursivas o no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento...” (Foucault, 1991: 231).

II. 2- *El gobierno de la pobreza y las políticas sociales: problematización y re-inención de lo social*

La cuestión de la pobreza ha sido abordada desde diferentes perspectivas y tramos de investigación, en la historia de las ciencias humanas y sociales. Encontramos una enorme discusión y producción acerca de los términos “exclusión social, vulnerabilidad, marginalidad y pobreza” (Castel, 1999; Merklen, 2005; Álvarez Leguizamón, 2008; Grassi, Hintzey Neufeld, 1994). Acorde a cuatro ejes podemos sintetizar algunas de las principales corrientes: en primer lugar encontramos los trabajos que han abordado el problema de la marginalidad a partir de un eje económico, propiamente, los estudios sobre marginalidad en América Latina. Un segundo eje agrupa los trabajos que se centraron en los aspectos políticos del fenómeno, el rol desempeñado por el Estado en los procesos de marginalización. En el tercer eje, se agrupan los trabajos que se centran en la noción de “exclusión social”, particularmente referidos a América Latina, principalmente Brasil y Argentina; y finalmente, se consideran una serie de aproximaciones sobre el problema de la pobreza y lo que se ha llamado la crisis del lazo social. La pregunta orientadora remite a cuando se habla de marginalidad y de exclusión remite a: ¿marginalidad respecto a qué y exclusión respecto a dónde?. Mientras que la discusión de los 60’ versaba sobre los medios de empleo (marginalidad respecto al modo de producción capitalista, al mercado de trabajo), al parecer, actualmente, la exclusión refiere, casi fundamentalmente, a los medios de subsistencia. Como expresará Nun (2001) la categoría Europea de “exclusión social” da cuenta del descubrimiento en aquellas latitudes de una situación social que América Latina había comenzado a vivenciar con fuerza en los 60’, dando muestra de ello el fructífero debate en torno a la marginalidad (Giavedoni, 2012a: 31)

A su vez, identificamos cómo a finales de los 90’ se construyen categorías y clasificaciones en torno de un abordaje subjetivo de la pobreza junto con estudios cuantitativos de alta especialización. Estas categorías se asocian a diferentes representaciones de corte cualitativo y lábil de la pobreza tales como: la pobreza heterogénea y específica, la pobreza vulnerable, la pobreza participativa, con capacidades y voces propias (García Delgado, 1995; Golbert, L. y Tenti, E, 1994; Minujin y Kessler, 1995; Minujin y otros, 1995; Murmis, y Feldman, 1995). En el contexto de crisis de los paradigmas estructuralistas los científicos sociales comienzan a revalorizar estudios sobre

las formas de vida de los pobres, donde la pobreza es vista como un fenómeno multidimensional y no sólo material. Luego de la crisis del 2001, las producciones en torno de la pobreza recuperan, en su analítica, la impronta heterogénea y múltiple de la misma, mientras que realizan diferentes análisis categoriales en el marco de las políticas sociales y el gobierno de las poblaciones pobres; así como analizan la cuestión en relación a prácticas diferenciales de organización de y en los espacios de vida y territorios pobres (Álvarez Leguizamón, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010a, 2015; Murillo, 2013; Freyre, 2012; Campana, 2012, 2014; Aguilar y Vázquez, 2015; Fassin, 2003). En Salta, ante todo nos nutre el trabajo realizado por Álvarez Leguizamón (2005, 2006, 2013, 2015), en torno de la producción social de la pobreza en América Latina, Argentina y Salta, en relación con el Discurso de desarrollo humano y las políticas sociales.

En nuestro trabajo de tesis, abordamos la cuestión de la pobreza en clave de gobierno, a partir de lo que damos en llamar *gobierno de la pobreza*. Para lo cual recuperamos las resonancias de obras atravesadas por el pensamiento de Foucault y sus herencias. Se trata de pensadores como F. Ewald, en obras como “*L’Etat providence*” (1986), así como “*La Invención de lo Social*” de J. Donzelot (2007)¹⁹. Otra discípula importante, en este campo de acción y pensamiento, ha sido Gioavanna Procacci, en sus estudios sobre las tecnologías liberales de gobierno con relación a las transformaciones de la economía política y la cuestión social, en el siglo XIX:

*Lo común de estos tres textos, considerados centrales en el andamiaje foucaultiano para pensar el gobierno de la pobreza, remite a las transformaciones sufridas por la racionalidad del liberalismo clásico en el momento en el que la industrialización hizo que la pobreza se convierta en un asunto, que debía ser gobernado con urgencia. Pues, si lo que se buscaba era evitar el levantamiento de la clase obrera y/o trabajadora y domesticar su peligrosidad, entonces había que producir e intervenir sobre un nuevo medio ambiente llamado sociedad o lo social (Castro Gómez, 2010: 230-31).*²⁰

En este marco, el estudio que proponemos pretende analizar cómo el gobierno de la pobreza, no sólo supone implementar medidas sobre ella, sino que también implica constituirla como problema, representarla y significarla a través de ciertos instrumentos que la hagan cognoscible, presuponiendo la instalación de la verdad de esta esfera y sus

¹⁹ Ambos textos examinan el funcionamiento de las leyes sociales aprobadas entre finales del siglo XIX y principio del XX en Francia concernientes al desempleo, las enfermedades y los accidentes del trabajo. Ver: Castro Gómez, 2010...op...cit. Donzelot, 2007...op...cit.

²⁰ En tanto, ya no se podía gobernar el pauperismo desde las medidas clásicas vinculadas con la reinmersión en el ciclo productivo industrial. Así, el “gobierno de la pobreza” comienza a vincularse con el gobierno del riesgo, y a un conjunto de tecnologías vinculadas a gestionar la pobreza y a aportar a los trabajadores una serie de garantías sociales. Ver: Castro Gómez. 2010: 232-34.

regularidades. En este punto introducimos la referencia a la pobreza como dispositivo²¹ y como producto de prácticas problematizadoras en el ejercicio del gobierno:

...el gobierno de la pobreza, supone, como cualquier ejercicio de gobierno, la conformación cotidiana de prácticas discursivas y extradiscursivas a través de las cuales se despliegan tácticas, que van conformando tecnologías que constituyen diversas racionalidades de gobierno (...) el dispositivo pobreza no emerge como un producto exclusivo del Estado. (Murillo, en: Giavedoni, 2012a: 15).

Esto implica comprender a la pobreza, no como una realidad homogénea y centralizada, ya que resulta un dispositivo que se transforma constantemente, entre y en relación a prácticas diversas.

Así, para analizar la problematización de lo social en relación con el gobierno de la pobreza, rescatamos la riqueza del pensamiento Francés, en torno de *la cuestión social* (Castel, 1997) y *la invención de lo social* (Donzelot, 2007). En tanto, en dicha tradición de pensamiento, por un lado y como ya ha sido esbozado el pauperismo se asoció con lo que se ha dado en llamar “invención de lo social” (Donzelot, 2007) y, por otro lado con la aparición de lo que se denomina la “cuestión social moderna o la “cuestión social clásica” (Castel, 1997), es decir a manera de resolver la tensión entre la igualdad jurídica y la desigualdad formal (Castel, 1997: 20-1).

En el presente trabajo de investigación, la “invención de lo social” es comprendida en términos de pobreza, es decir a partir de la “*problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza*” (Giavedoni, 2012a: 106). La pobreza adviene, entonces, “cuestión social”, a partir de lo cual, también adviene “cuestión de política pública” (Grassi, 2003); y con ello acaece una reinención y reconfiguración de los mecanismos, las lógicas y las prácticas de gobierno dirigidas a la administración de la pobreza.

II. 2.1-Las políticas sociales y el gobierno de la pobreza

En torno de la temática de las *políticas sociales*, algunos análisis recorridos abordan a las políticas sociales como campos culturales en relación con el desarrollo humano, en torno de un ejercicio de producción/reproducción de la pobreza (Álvarez Leguizamón, 2008, 2010). Otros, remiten a la constitución de las políticas sociales, en torno de la pobreza, el trabajo, la ciudadanía y el Estado, (Grassi, 2003, 2012; Merklen, 2005; Andrenacci, 2010;

²¹ El dispositivo, según Foucault resulta: “. (...) un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas...”. (Foucault, 1991: 128).

Campana, 2012, 2013). Así como identificamos diversas analíticas que se concentran en la programación y los saberes dirigidos a promover la relación entre empleabilidad e inempleabilidad (Hopp, 2009; Grondona, 2012). Nos anteceden trabajos dirigidos a estudios etnográficos sobre las relaciones cotidianas entre funcionarios públicos y organizaciones de desocupados en el Gran Bs. As. (Manzano, 2007, 2009); también no nutrimos de trabajos que se dirigen a una analítica de la políticas sociales en clave biopolítica y en relación con el gobierno de la pobreza extrema, identificando los límites y los alcances de un análisis de los dispositivos de intervención, interrogando las racionalidades políticas de la gestión de la pobreza, según el proceso de objetivación y subjetivación que en el campo de las políticas sociales (Lasch, 2014, 2012).

Acorde a nuestra perspectiva, consideramos que el gobierno de la pobreza se codifica en el campo de las políticas las políticas sociales públicas. Entre diversas referencias a las políticas sociales encontramos la propuesta por Grassi, para quien: “...*las políticas sociales son una forma particular, que adquirieron los sistemas de obligaciones reciprocas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el mercado y la familia y la comunidad*” (Grassi, 2003: 25). En este sentido, consideramos que no sólo se trata de instalación de instituciones donde se pretenden asegurar la reproducción social o responder al riesgo social o evitar las fracturas sociales, sino de modos específicos de configurar, lo que damos en llamar, relaciones entre poder, gobierno y verdad.

En esta línea de análisis, las políticas sociales nos remiten, siguiendo a Álvarez Leguizamón, a un campo discursivo y un campo cultural, que resultan espacios privilegiados de condensación y construcción de una alteridad radical, “el pobre”:

...las políticas sociales son en sí mismas un discurso sobre lo social donde hay una serie de visiones y representaciones del mundo y sobre los “otros”, a los que se les aplica ciertos dispositivos de saber que implican la intención de modelación de sus comportamientos, al mismo tiempo que van naturalizando representaciones sobre su lugar en la sociedad y sobre el tipo de bienes materiales y simbólicos a los que tiene derecho o no de acceder(...) las políticas sociales, sus prácticas, instituciones y dispositivos de intervención son formas culturales particulares, cosmovisiones del mundo y de la vida que implican un campo de lucha (Álvarez Leguizamón, 2005: 11).

A su vez y acorde a la perspectiva que orienta nuestro trabajo, recuperamos lo propuesto por Campana, (2012), quien inspirada en la idea de intervención social del Estado de Cortés y Marshall (1991, 1993) y en la mirada teórica de la función propuesta por Andrenaccci (2008, 2009), sostiene que: “...*la política social no se refiere a un sector o a una sumatoria de instituciones, sino que constituye un enfoque desde el cual es posible detectar un conjunto de funciones de las intervenciones sociales del Estado*” (Campana,

2012: 27). La “función” alude a los objetivos estratégicos de las prácticas de gobierno de Estado, a partir de lo cual considerar a las políticas sociales como un enfoque permite dar cuenta de las lógicas de intervención del Estado en lo social.

Si bien, estas referencias corren el riesgo de resultar o ser consideradas “estadocéntricas”, suponemos que sería “irreal e imprudente” subestimar el rol del Estado. Por lo tanto, no se pretende anular, negar o silenciar la especificidad y singularidad del gobierno de Estado, sino de evitar explicar, los problemas sociales a partir de la ausencia, debilidad, incapacidad, disfuncionalidad del Estado. De lo que se trata es de comprender al Estado en términos no normativos, sino en el ejercicio de su función positiva y estratégica, es decir, en un proceso productivo de prácticas de gobierno; a partir de lo cual el rol del Estado es re-configurado como efecto de gobierno y espacio de codificación de prácticas vinculares y heterogéneas.

Por último, nos guía el supuesto de que las “políticas sociales de orden público” se construyen en los entramados discursivos del desarrollo humano, instalado a finales de la década de los 80’. En tanto, el desarrollo humano resulta un eje transversal de saber que articula y regula la configuración de las políticas sociales y la problematización de lo social en términos de pobreza, con singularidades específicas en los diferentes tramos históricos analizados, el mismo:

...se caracteriza por la gestión, control y producción de saberes especializados sobre grupos de riesgo. El discurso de este nuevo arte de gobernar es el desarrollo humano. (...) El arte de gobernar un problema de gestión de la vida de las poblaciones foco, las más pobres de entre los pobres, las más vulnerables, las que están al límite de su extinción por hambre.... (Álvarez. Leguizamón, 2008: 20-21).

Dicha humanización del desarrollo implica la plena “autorealización” de los hombres acorde a capitales, no sólo materiales, si no humanos y sociales adquiridos tanto por naturaleza, como por el acceso e incremento de oportunidades

De este modo, la singularidad de nuestra investigación radica, tanto en poner a prueba una grilla analítica que comprenda a las políticas sociales públicas como enfoque (Campana, 2012) y como discurso, así como en pensar la relación entre políticas sociales y prácticas de resistencia en un permanente proceso de mutua transformación.

Por tanto, la perspectiva de gubernamentalidad aquí sugerida, en relación con el gobierno de la pobreza y las políticas sociales en clave de desarrollo humano, nos permite pensar los campos discursivos y extradiscursivos, considerando que los mismos dan existencia a las realidades sociales. Puesto que, en palabras de Foucault:

...las prácticas discursivas no son pura y simplemente modos de fabricación de discursos. Ellas toman cuerpo en el conjunto de las técnicas, de las instituciones, de los esquemas de comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión, en las formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y mantienen (1994: 124 apud Castro, 2004: 94)²².

En tanto son dichas prácticas, las que dan la clave de inteligibilidad para la constitución correlativa del sujeto y el objeto.

De tal modo, no pretendemos realizar una analítica de la evidencia revelada, ni del plano de los hechos reales velados. La perspectiva de gubernamentalidad aporta herramientas útiles para pensar la constitución discursiva y no discursiva de los fenómenos sociales en el marco de mecanismos específicos de poder (tal es el caso de documentos y programas como lo elaborados por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, archivos vinculados con evaluaciones realizadas por trabajadores y asistentes sociales, manuales ministeriales, entre otros), configurando el programa de una manera específica (enunciándolo, caracterizándolo, midiéndolo, construyéndolo, enmarcándolo, evadiéndolo, etc.) y, como correlato, interviniendo sobre el mismo también de un modo singular, en función de aquella caracterización.

II. 3-Prácticas de resistencia y autogobierno: entre la *metis* y la aceptabilidad

En la historia de las ciencias humanas y sociales, entre algunos de los principales aportes acerca de los estudios en torno de la resistencia, encontramos a Worsley (1957), quien en su análisis sobre los pueblos de Melanesia, focaliza la lucha contra los regímenes coloniales y la articulación de las resistencias en un contexto de dominación (Wolf, 1982). Más tarde, destacamos el trabajo de James Scott (1990) para quien la resistencia, ante todo en las formas cotidianas de resistencia campesina, se gesta en los momentos de calma aparente, siendo estos momentos las armas más interesante que tienen “los débiles” para resistir al poder. Lo interesante de este acercamiento, acorde a lo sugerido por Palermo (2010), tiene relación con posar la mirada en aspectos cotidianos de las formas de dominación y resistencia. En la década de los `60 y `70, período signado por una intensa actividad política y crecimiento de movilizaciones y organizaciones obreras, se gestaron diversos trabajos que aportan a un ejercicio de pensamiento en torno de la-s resistencia-s. Entre ellos, recuperamos los planteos de June Nash (1979), y su trabajo en las comunidades mineras de Oruro en Bolivia, atravesado del concepto de experiencia de

²² Para ampliar Ver: Chartier, R. (2006), Pp.: 30-45...op...cit. Deleuze, G. (1987), Pp. 70-75...op...cit.

Thompson, en el cual formula, que es a partir de la experiencia de estos grupos, que se genera un sentido de identidad de comunidad y de clase.

Según lo sugiere Manzano (2012), en la década de 1980, en América Latina, el análisis sobre la transición democrática hegemonizó el estudio sobre los movimientos sociales. Ante todo, el estudio de los movimientos se articuló con temas que recortaban como campos de preocupación la “gobernabilidad”, el “consenso”, la “participación/representación”, los “procesos de institucionalización política”, etc. La oposición democracia/dictadura marcó el sentido del eje de reflexión sobre la transición democrática; de ahí, que el análisis sobre las transformaciones socioeconómicas de las sociedades latinoamericanas haya sido subvaluado con respecto al estudio de la dimensión política (Lechner, 1996).

En este marco, se analizó la descentralización del Estado en función de la participación política de los “ciudadanos” (Herzer y Pérez, 1988; Passalacqua, 1988; Nunes, 1991) y a los movimientos sociales como espacios de mediación entre la sociedad civil y el estado/sociedad política (Jelín, 1987). Algunos estudios empíricos de este enfoque han sido los de García Delgado y Silva (1989); González Bombal y Palermo (1987) y Palermo (1988), todos referidos al “movimiento vecinal”. El conjunto de estos estudios parten de la asunción de la separación entre Estado/sociedad civil. En un trabajo más reciente, E. Jelin (1996) propone una perspectiva de análisis donde se relacione la democracia política, la equidad económica y la democracia social. Con respecto a esto, Jelin problematiza la exclusión social y afirma que los excluidos se encuentran en una situación de apatía debido a la ausencia de lazo social; por lo tanto, no pueden constituir un movimiento social, más allá de resistencias individuales o violencia esporádica. Esta postura sobre la acción de los sectores denominados excluidos o marginados también es compartida por otros investigadores como W. Ansaldi (1997).

En un debate con los enfoques centrados en la transición democrática y con las posturas que pueden llamarse posmarxistas, otros autores sostienen que los movimientos sociales se plantean frente y contra las formas hegemónicas de representación política y generan una lucha en torno a la reestructuración del poder (Wallace, 1998). Vicente Di Cione (1994), por su parte, sostiene que los movimientos expresan la trama de fuerzas sociales, políticas, simbólicas y materiales de la formación social nacional que a su vez se encuentra inserta en la formación del capitalismo mundial. De acuerdo con esta línea, el trabajo de Carlos Vilas (1998) se interroga por el sujeto social de los movimientos

sociales en América Latina y sostiene que la reestructuración del capitalismo, por un lado, desestructuró a la clase obrera y sus organizaciones, por el otro, fortaleció las asociaciones empresariales. De esta manera, se supone que el sujeto protagónico de los movimientos sociales no es el ciudadano, en sentido abstracto, sino el sujeto popular (Manzano, 2012).

En Argentina, a partir de mediados de los 90' e inicios del siglo XXI, diversos son los trabajos académicos que han desandado el surgimiento y desarrollo de las advenidas organizaciones de desocupados y piqueteros desde los enfoques de la acción colectiva, los ciclos de acción²³, repertorios de acción²⁴, así como de la protesta social²⁵.

De hecho, en Argentina el repertorio de investigaciones en las ciencias humanas y sociales, en torno del proceso de lucha de las organizaciones de trabajadores desocupados y el fenómeno “piquetero” definió a este último, como un indicador de la transformación de los repertorios de acción colectiva (Schuster, 2005). La acción colectiva comienza a cobrar vigencia y se torna un problema en las ciencias sociales desde el momento en que muchas de las certezas, en torno de sujetos colectivos homogéneos, se desmoronaron. También, luego de la crisis de fines de los 90' e inicios del 2000, algunas líneas de investigación, sin dejar de analizar los procesos de lucha como acciones colectivas, comenzaron a realizar investigaciones sobre los movimientos de trabajadores desocupados a partir de una reconfiguración de la clase trabajadora, en tanto proletariado pobre, plebeyo o popular; mientras que señalan cómo estos movimientos y acciones colectivas cuestionan el modelo económico neoliberal excluyente y extractivista

²³ Por ciclo de acción se entiende una fase de incremento del conflicto y la contienda través del sistema social que incluye: una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos, un paso acelerado en la innovación de las formas contenciosas, nuevos o transformados marcos de acción colectiva, una combinación de participación organizada o espontánea y secuencias de interacción entre quienes protestan y las autoridades, que pueden terminar en reforma, represión y algunas veces en revolución. Ver: Tarrow, 1997...op...cit.

²⁴ Los trabajos sobre repertorios de acción colectiva recuperan la propuesta teórica de historiador Charles Tilly (2000), así como también la de Tarrow (1997) y se concentran en el estudio de los cambios de repertorio en función de tiempos largos, retomando las ideas de la escuela Historiográfica de los Annales. El objetivo de ambos era mostrar que los incentivos para la acción colectiva se formaban en la interacción entre grupos sociales y el sistema político. Ver: Manzano, 2007 y 2009...op...cit.

²⁵ En Argentina, diversos autores han propuesto el concepto de “protesta social” para analizar los diferentes procesos de sublevación y de movilización. Para esos autores, la focalización del abordaje en las continuidades identitarias y en los recursos materiales y simbólicos puestos en juego, no permitiría captar las tensiones y el carácter de los actuales procesos de acción colectiva. El concepto de protesta social posibilitaría, en cambio, dar cuenta tanto del carácter segmentario de la acción colectiva -en aspectos tales como la identidad, la localización, los temas y los formatos-, como de los sentidos políticos particulares de cada protesta o ciclos de protestas. Este concepto sería aplicable a acontecimientos de carácter contencioso e intencional, de visibilidad pública, orientados al sostenimiento de demandas centralmente referidas al Estado. Ver: Auyero, 2002a, 2000b; Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra (2005)...op...cit.; Schuster y Pereyra (2001)...op...cit.

(Svampa, 2006, 2010; Bonifacio, 2011; Murillo, Seoane, 2012; Giarraca, 2001)²⁶. Otros análisis en sintonía con los antedichos, afirman que las ocupaciones ilegales de tierras (asentamientos), los cortes de ruta (piquetes) las revueltas populares para exigir la renuncia de autoridades provinciales o nacionales (estallidos) y el asalto a comercios en situaciones de crisis agudas (saqueos) constituían los componentes de un nuevo repertorio de acción de las clases populares argentinas (Merklen, 2005). Se explica esta transformación conectando tres elementos: la exterioridad de los sectores populares respecto de las relaciones salariales clásicas, el anclaje territorial de estos grupos sociales y una nueva relación con el Estado, centrada en el conflicto por la distribución de ayuda social (Merklen, 2005)²⁷.

II.3.1- Errape: límites y rebasamientos

Entre encuentros y desencuentros, el presente trabajo de tesis pretende no seguir pensando la resistencia bajo los vectores de la conciencia de clase, la ideología, el sujeto histórico y las prácticas revolucionarias, pues la complejidad y heterogeneidad de la analítica del poder se traslada a las resistencias. Lo que interesa analizar, siguiendo a Giavedoni (2012b) es, no una definición de resistencia, sino las configuraciones de poder de las sociedades contemporáneas en términos de subjetivación-desubjetivación-

²⁶ Svampa (2010) reflexionando en torno de los repertorios de acción colectiva en torno de los movimientos piqueteros, remite a la conformación de un “proletariado plebeyo”, que fue cobrando forma, cuerpo y nombre a través de los llamados movimientos piqueteros. El proceso de “descolectivización” de las clases populares conlleva a un corrimiento del conflicto, manifiesto en la crisis y debilitamiento de mundo obrero tradicional y la emergencia de un proletariado multiforme y plebeyo, que se reconoce en las nuevas formas de auto-organización barrial y la preeminencia de la acción directa. En esta misma línea, se encuentran los trabajos de Bonifacio, quien pretende analizar la reorganización de los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén, luego del levantamiento piquetero del 96, fundando su teorización sobre el proceso de formación de las clases sociales de Przeworski (1988), el cual afirma que el desarrollo capitalista transforma continuamente la estructura de los espacios del sistema de producción y realización del capital. Según Bonifacio, los desocupados son un componente dramático de la clase marginal, y las clases excedentes que advienen irrelevantes para el sector hegemónico de la economía puede convertirse o no en un peligro para su estabilidad. Este plantea el problema de gestión de la mano de obra excedente para que no advenga disfuncional y a su vez los levantamientos y modos de organización de estos espacios. Esto no implica la constitución de “sociedades excluyentes”, como masas marginales, cuyo efecto más importante, en nuestro país fue el desempleo, y Bonifacio quiere destacar la forma del conflicto social que emana directamente de este proceso: la protesta y la organización de trabajadores desocupados (Bonifacio, 2010: 46-7).

²⁷ Otras investigaciones, desde una perspectiva antropológica, se dirigen a analizar las organizaciones de desocupados con la intención de identificar cómo las políticas modelan las demandas y las prácticas de las mismas; las relaciones contradictorias entre estas políticas sociales y las tradiciones de organización social y política previas; y las tensiones que se generan en el espacio cotidiano de los distintos barrios donde tienen asiento las organizaciones (Manzano, Fernández, A., Trigubof y Gregoric, 2008; Grimberg, 2005, 2009; Manzano, 2009, 2014); otros trabajos analizan la articulación entre la “gestión” familiar de las políticas sociales y la “gestión” de las organizaciones de desocupados (Quirós, 2005, 2011); otras líneas de análisis contribuyen a conceptualizar la relación entre movimientos sociales y estatalidad, así como los sentidos políticos construidos por los desocupados en el norte salteño, puntalmente en la UTD Mosconi (Petz, 2005, 2010, 2012).

resubjetivación, así como de “decir no” a ciertos modos de ser gobernados (de ejercer el poder) y con ello de re-configurar los espacios y territorios de vida.

En las derivas de la investigación, las distancias críticas a los trayectos de investigación antedichos remiten a ciertas decisiones teórico/epistemológicas. Ante todo, ponemos en cuestión la noción de “acción”, así como los modos de concebir el poder. A partir de lo cual, consideramos que dichos enfoques no ponen en cuestión lo que Foucault (2012) señala, en sus críticas - a los marxismos - “la funcionalidad económica del poder”. Puesto que, las investigaciones propuestas se construyen en torno de una representación “jerárquica del mismo”, a partir del cual se parte del supuesto de que el poder se posee, se acumula, se impone y se construye desde arriba hacia abajo o a la inversa. Poder este, que en manos de quienes luchan, protestan y se revelan posibilitaría, en la corta y/o larga historia, transformaciones identitarias (de hábitos, culturales y políticas), de organización, de demandas; así como, en algunos casos, la emancipación” de los sujetos colectivos. Mientras que, desde la perspectiva heterárquica del poder consideramos que los diferentes niveles y lógicas se entrecruzan y superponen - sin subsumirse real y definitivamente - de modos múltiples, heterogéneos y siempre abiertos.

En igual sintonía, los enfoques centrados en la acción colectiva no escapan a la perspectiva de la “acción”, con herencia weberiana y marxista, en torno de un sujeto capaz de cobrar conciencia de su situación, condición y clase. En tal sentido, se instala la colectivización de la conciencia, que adviene “individual colectivo”, según procesos de cambios atravesados por conflictos específicos, por lo general de corte estructural condicionante. Mientras que, acorde a lo propuesto en la presente tesis, partimos de un estudio, no centrado en el poder al nivel de la ideología y/o el sujeto “substante”, sino de las prácticas. El sujeto es resultado y efecto de prácticas, vinculares y ensambladas - de gobierno, de resistencia, de lucha-, no hay un sujeto preexistente que se ve constreñido por un poder que se abate sobre su autonomía y libertad, una esencia que debe pujar por emerger en medio de un mar de constreñimiento. Entonces, el poder no reprime, o no sólo reprime, sino que produce realidades y sujetos (Giavedoni, 2012b).

En tal sentido, partimos del supuesto de que el gobierno se ejerce y teje al modo de relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades²⁸:

²⁸ Al respecto Foucault señala que: “*La libertad es una práctica (...) la libertad de los hombres nunca está asegurada por las instituciones y las leyes que tiene por función garantizarla. Es la razón por la que se puede, de hecho, eludir la mayor parte de estas leyes y de estas instituciones. No porque son ambiguas, sino porque la “libertad” es lo que se debe ejercer*” (Foucault, en Rabinow, 1982-2015: 4-5)

En el corazón mismo de la relación de poder, y "provocándola" de manera constante, se encuentran la obstinación de la voluntad y la intransitividad de la libertad. Más que hablar de un "antagonismo" esencial, sería preferible hablar de un "agonismo" -de una relación que es al mismo tiempo de incitación recíproca y de lucha-; no tanto una relación de oposición frente a frente que paraliza a ambos lados, como de provocación permanente. (Foucault, 1988: 16)

Así, consideramos que las relaciones de poder y resistencia se entrecruzan, yuxtaponen, multiplican, según Foucault:

Si no hubiera resistencia no habría relaciones de poder. Todo sería una cuestión de obediencia. Desde el instante en el que el individuo está en situación de no hacer lo que quiere, debe utilizar relaciones de poder. La resistencia se da en primer lugar y continua siendo superior todas las fuerzas del proceso, bajo su efecto obliga a cambiar las relaciones de poder. (Foucault, 1994b: 423).

Siguiendo a Giraldo Díaz (2009), la resistencia también se vincula con la vida, con la creación en la medida en que el ingreso de la vida en la historia supuso constituir la como plataforma de las luchas políticas y económicas, proceso que se desarrolló con el surgimiento y expansión del capitalismo. Para Giraldo Díaz, Foucault entiende la resistencia como: “...un proceso de creación y transformación permanente; la resistencia no es una sustancia y no es anterior al poder, es coextensiva al poder, tan móvil, tan activa y tal productiva como él, existe como despliegue de fuerza, como lucha...” (Giraldo Díaz, 2009: 106)

Parafraseando a Foucault, se trata de poner en juego “fuerzas creadoras” para: “...crear modos de vida...” (Foucault, 1994b: 418). Lo cual conlleva al problema de la “identidad”, que: “...no es más que un juego.” (Foucault, 1994b: 418); la identidad no es una cláusula, no impone límites, sino que insta la fuerza creadora de la renovación y recreación constantes. Por tanto, no pretendemos realizar una analítica de la acción colectiva y homogénea manifiesta en la forma piquete y/o develar una identidad “piquetera”, sino analizar las prácticas que permiten ejercicios cotidianos de diferenciación y afirmación, en el estar siendo, poético y poiético de la UTD Mosconi, ya que: “...la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de creación; crear y recrear, transformar la situación, participar en el proceso, eso es resistir” (Foucault, 1994b: 423).

Ahora bien, las resistencia se practican en un múltiple tejido de relaciones de poder y gobierno, a partir de lo cual se construyen campos transaccionales²⁹, en los cuales no sólo

²⁹ Desde la década de los cincuenta diversas líneas de análisis antropológicos contribuyeron a definir una lectura de los procesos sociales en términos de transacción. Entre ellos Barth (1959) consideraba el sistema político como la suma de interacciones diádicas y voluntarias, es en los ochenta cuando se redefine dicha noción incorporando una relación entre dominación y resistencia, dominación y subalternidad (Manzano, 2009: 34).

se producen relaciones de dependencia y dominación; si no que, en una tensa configuración social y específica, también se ponen en juego prácticas de negación e impugnación creativa (Lazzarato, 2010).

En sintonía, para esta analítica de las prácticas de resistencia y autogobierno, recuperamos algunos tramos del pensar de De Certeau, tal es el caso de la noción de astucia³⁰, que remite a la “*metis*” griega, comprendida como ardid: “...*sabiduría práctica del sujeto, (...) Se aproxima a las tácticas cotidianas por medio de sus mañas, sus destrezas y sus estratagemas, y por el abanico de conductas que abarca, desde las habilidades prácticas, hasta la astucia*” (De Certeau, 2000: 91-2).

Así, nos aproximamos a lo que damos en llamar *autogobierno*, en tanto prácticas y lógicas dirigidas a conducir las acciones y los espacios posibles de acción, en el nivel micro de relación y organización de los trabajadores desocupados y piqueteros. Esto también nos remite a lo que identificaremos a lo largo del trabajo como la “autonomía” de la organización, considerando que la misma es posible en las tramas relacionales que la UTD va tejiendo a nivel micro y que, a su vez, van constituyendo a la misma como una organización en movimiento, no necesariamente “contrahegemónica o dependiente”. Pues no se trata de pensar la autonomía como: “*un requerimiento para que el antagonismo como tal pueda emerger*” (Laclau y Mouffe, 2004: 175), sino como una construcción en torno de un permanente agonismo, que insta a la provocación y la tensión, en torno de disímiles lógicas, prácticas y reglas. La autonomía no es un *a priori* dado, determinado y saturado, sino un proceso permanente y movedizo de construcción³¹. Mientras que, siguiendo a Castoriadis (1998), también supone un ejercicio de “autotransformación”, que cobra formas diversas sin recibir órdenes y normas desde el exterior: partidos, sindicatos, Estados. A partir de lo cual, se pone en juego un diagrama “heterónimo” de la organización, en sentido amplio, que se sostiene y posibilita en el ejercicio de la libertad constitutiva de las prácticas cotidianas, territoriales, organizativas y laborales (Wahren 2011).

³⁰ Acorde a lo antedicho, también, en la Tesis IV cuando Benjamín (2008) señala la espiritualidad que guía la lucha de clases hace referencia a la confianza (*Zuversicht*), el coraje (*Mut*), el humor (Humor) y la astucia (*List*). Michel Löwy (2003: 68) sostiene que la inclusión de estas dos últimas cualidades reflejan la influencia de Brecht. [T.I.1: 694, IV] Esto lo distancia, también de la crítica a la astucia por parte de Horkheimer y Adorno, quienes la identifican con la razón instrumental, mientras que Benjamín la pone del lado de los que luchan. Ver: Ruidrejo, 2006...op...cit.

³¹ No hay una plena autonomía respecto a por ejemplo el Estado, sino que hay un estratégico juego entre libertades vinculares que generan espacios de articulación, transacción y negación, que cobran diferentes formas en el nivel meso y micro de análisis y de ejercicio.

En sintonía, la presente tesis recupera la investigación realizada por Wahren (2009, 2011, 2016), en la cual encontramos una particular motivación analítica referidas a las prácticas “autonómicas y territoriales”, a partir de la cual es abordado el caso de la UTD Mosconi, mediante un análisis de los procesos que la constituyen como una *construcción colectiva autonómica*, en su relación con el Estado y otros agentes incidentes en los territorios locales. También, el trabajo genealógico realizado por Benclowicz (2009, 2013), desde el campo de la historia, permite un acercamiento al movimiento piquetero norteco desde una práctica crítica de reconstrucción histórico-analítica.

Por tanto, en los avatares teóricos apenas esbozados podemos concluir que la presente propuesta de tesis resulta atravesada por una perspectiva estratégica y heterárquica del poder. Por un lado, la perspectiva estratégica se diferencia de la dialéctica: “...la lógica de la conexión de lo heterogéneo y no de la homogeneización de lo contradictorio” (Foucault, 2007: 62). En tal sentido, Castro Gómez (2007) señala como “heterarquías” a las consideraciones del poder según herencia foucaultiana, contraponiéndolas a las teorías jerárquicas³². Ante todo, esta consideración jerárquica en torno del poder dificulta los ámbitos que tienen que ver con la producción autónoma de la subjetividad. A partir de lo cual se postula una *perspectiva heterárquica*, que plantea la existencia de diferentes cadenas de poder, que operan en distintos niveles de generalidad (micro, meso o macro), acorde al ámbito específico de operación (Castro Gómez, 2007: 166).

En la línea de investigación de la presente tesis, dichas perspectivas remiten por un lado, a la consideración múltiple, heterogénea y siempre abierta de las relaciones de poder, gobierno y resistencia, en las cuales, parafraseando a Foucault (2007) “lo disímil no deja de ser disímil”. Así como, a no ignorar los procesos de producción autónoma de las subjetividades individuales y/o colectivas. Puesto que, estos procesos de negación y afirmación crítica de la subjetividad no dependen de las revoluciones molares (aunque no las excluye), sino de las transformaciones en torno de los diferentes ejercicios de gobierno dirigidos hacia sí mismos, como de sí mismos hacia otros y con otros³³.

³²El filósofo colombiano cuestiona la influencia metodológica que en las teorías postcoloniales, ante toda la red modernidad/colonialidad, ha tenido una representación jerárquica del poder (Castro Gómez, 2007: 155). Una de las grandes contradicciones en las que se cae cuando se piensa la colonialidad desde una teoría jerárquica del poder es que se le otorga al sistema- mundo una especie de poder mágico, de hecho la palabra griega de la que proviene nuestro vocablo «jerarquía» significa “autoridad sagrada”.

³³ La dialéctica hegeliana, se configura en torno de las nociones de lucha y de trabajo, saliendo del cogito y produciendo un efecto reflexivo. Para Descartes, salir del cogito implicaba una referencia trascendente (dios), mientras que salir del cogito para Hegel es duplicar la conciencia, a partir de lo cual el juego de reconocimiento

La ventaja que reviste la perspectiva que traza y sostiene nuestro trabajo de tesis, es que permite centrarse en los efectos y resultados del ejercicio del poder, en términos de efectos estratégicos, y no tanto en términos de disfunciones. Así también, la perspectiva del gobierno permite vincular en el análisis diferentes escalas, tales como la población, determinados grupos, la familia, el individuo, un barrio, etc. Como el propio Foucault expresa (2007:218), el análisis de los micropoderes no es una cuestión de escala, sino de punto de vista, lo que permite articular el gObierno de los otros con el gobierno de uno mismo.

III- Cuestión de Método: ...el camino hacia...

La cuestión de método que atraviesa y sostiene el trabajo de tesis, se construye en torno de un abordaje metodológico cualitativo, ante todo desde la perspectiva sugerida por una genealogía de las prácticas y los saberes, así como por las herramientas provenientes de la arqueología trabajada por Foucault, en torno del análisis de las discursividades locales. A su vez, en referencia al trabajo de campo y estudio de caso recuperamos tanto elementos provenientes de la perspectiva etnográfica, así como de la investigación acción participativa (Rigal y Sirvent, 2007), bajo la guía silenciosa de Fals Borda (2015) y sus sentipensamiento, también de Freire y Faundez (2010) y la pedagogía de la pregunta, en los avatares de la educación popular y el proceso colectivo y situado de producción del conocimiento. También, recuperamos elementos que aporta el análisis sociológico, en torno de la perspectiva del actor (Long, 1997, 2007; Giarraca y Bidaseca, 2001).

Dichas perspectivas metodológicas se vinculan en simultánea complementariedad en el trabajo de análisis e investigación de la problemática planteada³⁴. Y lo hacen a partir de

se da, en un par de iguales. Esta forma de pensar la constitución de la subjetividad en la lucha por el reconocimiento muestran como, ante todo, el planteo dialéctico homogeniza. En tanto, una tradición, cuya herencia inmediata es el marxismo en sus diferentes vertientes, que solo lee la lucha de modo dicotómico (opresor-oprimidos, dominados-dominantes, amo-esclavo, etc.), pierde de vista los flujos, en tanto no ve el dinamismo y la multiplicidad que insta la configuración de subjetividades. La propuesta en clave estratégica permite pensar las luchas del presente en la condensación-descentrada, múltiple, siempre abierta - de una serie de campos de fuerzas.

³⁴ En tal sentido, consideramos que la relación entre teoría y práctica se recrea. La práctica no es concebida como una aplicación de la teoría, como una consecuencia o por el contrario debiendo inspirar a la teoría como siendo ella misma creadora de una forma de teoría futura. Como dice Deleuze (1992) la relación teoría y práctica es más fragmentaria y parcial, la teoría es siempre local, relativa a un campo pequeño y que puede tener su aplicación en otros dominios más o menos lejanos. Desaparece aquí la figura del sujeto de conocimiento identificado con la/su conciencia representante o representativa y de los sujetos que actúan o luchan como los representados, ya sea por partidos o sindicatos que se arrogarían a su vez el hecho de ser sus conciencia. Quienes hablan y quienes actúan son siempre grupúsculos, multiplicidades, en tanto hay ejercicio práctico de pensamiento con otros y en el suelo, que se conectan en redes y relaciones concretas. De este modo de pensar la teoría y la práctica surge algo muy interesante que remite, en el proceso de investigación, a evitar la “indignidad de hablar por los otros”, lo cual señala Foucault (1992) estaba centrada en la representación. Esta exigencia dirigida a evitar dicha indignidad,

una relación heterárquica de los niveles analíticos: nivel micro, en referencia a las tecnologías del yo y prácticas de autogobierno y resistencia a nivel local, territorial; Nivel meso: en torno de los programas de gobierno de Estados nacionales y provinciales; Nivel macro: en referencia a programas supranacionales, Organismos Internacionales, entre otros.

En tanto, la vinculación heterárquica de las perspectivas en los niveles de análisis supone identificar, abordar y desandar los disímiles y heterogéneos modos de configurarse las relaciones entre poder y resistencia, considerando qué lógicas y prácticas diferentes en diferentes niveles, se cruzan, yuxtaponen, chocan, transforman mutuamente, en condiciones históricas – de posibilidad y realidad - concretas. De este modo, la genealogía, la arqueología y las perspectivas disímiles propuestas para el abordaje del estudio de caso se realizan en complemento, en estos diferentes niveles y dinámicas analíticas, a lo largo del trabajo doctoral.

En primer lugar referimos a la puesta en marcha de una investigación *histórico genealógica*, entre los comienzos y las sucesiones: “...a través de los acontecimientos que nos condujeron a construirnos, a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, decimos y pensamos” (Foucault, 1996: 104). En tanto la genealogía nos aproxima a un modo de hacer historia, que nada tiene que ver con el reencuentro de los orígenes o las raíces:

La genealogía no se opone a la historia como la visión altiva y profunda del filósofo se opone a la mirada de topos del sabio; se opone, por el contrario, al desplegamiento metahistórico de las significaciones ideales y de las indefinidas teleologías. Se opone a la búsqueda del “origen” (Foucault, 2004: 13).

Con esto señalamos que la genealogía se detiene a escuchar la historia y en ese sendero no descubre un secreto esencial, ya que el secreto no tiene esencias y que fue construido pieza a pieza a partir de figuras extrañas a ella: “Lo que encontramos en el comienzo histórico de las cosas no es la identidad aun preservada de su origen- es su discordancia con las otras cosas- el disparate” (Foucault, 2004: 19).³⁵

remite a que las personas hablasen por su cuenta, por sí mismas. Lo cual implica la escucha y la capacidad de volcar en letra escrita lo que efectivamente se dice y efectivamente se hace, para identificar ahí, los modos concretos de lucha contra cierto modo de ejercer el poder. Estos podrían luego generalizarse, expandirse del ámbito de lo local para poder comprender como se ejerce el poder y se lucha a niveles más meso o macro

³⁵ La/el genealogista pensada/o que orienta nuestro trabajo se dirige a escuchar la historia, más bien que a añadir cierta fe a la metafísica, o pretender develar orígenes ocultos o que revistan a principios. Nietzsche invita a “reírse de la solemnidad del origen” y nos propone el encuentro con los heterogéneos y múltiples comienzos, que son bajos, no en el sentido de modestos o discretos, sino de irrisorios, irónicos, configurados en procesos de construcción dinámica, histórica y azarosa apropiados para deshacer cualquier vanidad. La genealogía así pensada presupone un ejercicio de reconocimiento de los acontecimientos históricos, de sus sacudidas, sus

Proponemos, entonces, una genealogía de las prácticas y los saberes, como perspectiva metodológica predominante, a partir de la cual: “...no deducir de la forma de lo que somos lo que nos es imposible hacer o ser; sino que extraerá de la contingencia que nos hizo ser lo que somos la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos hacemos o pensamos” (Foucault, 1996: 103).

A través de dicha perspectiva buscamos analizar, tanto la manera en que es racionalizado el ejercicio del poder (cómo se piensa, cómo se formula, sobre qué y quiénes actúa) y al mismo tiempo cómo efectivamente se ejerce y se inscribe sobre lo real (qué prácticas genera, qué efectos produce), así como se tejen y destejen tramas relacionales entre poder y resistencia. En tanto la genealogía señala que:

Al desustanciar y desfuncionalizar las relaciones de poder, se puede aprehender su genealogía: es decir, su manera de formarse, conectarse, desarrollarse, multiplicarse, transformarse a partir de algo muy distinto de sí mismo: a partir de procesos que son en absoluto relaciones de poder. (Foucault, 2000a: 144)

En tal sentido, también entra en juego la genealogía de las prácticas de resistencia y lucha de los saberes subalternos, sometidos, descalificados, esos saberes de la gente, en tanto saber particular, local, regional, diferencial que hacen de la práctica genealógica: “...la táctica que, a partir de las discursividades locales así adscritas, pone en juego los saberes liberados del sometimiento que se dependen de ella...” (Foucault, 2000a: 22-23)

Por tanto, la pregunta que nos guía no remite a los “orígenes” del poder y la resistencia, sino a las “procedencias”, es decir: “...la filial compleja” que percibe los “accidentes”, las desviaciones ínfimas- o al contrario los retornos completos, los errores, los fallos de apreciación, los malos cálculos que han producido aquello que existe y es válido para nosotros” (Foucault, 2004: 27-28).

La pregunta por la procedencia descubre que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la verdad ni el ser, sino la “exterioridad del accidente” (Ibídem).

Una perspectiva genealógica así planteada se pregunta también por las condiciones de “emergencia” de conceptos y/o dispositivos, de prácticas; esto es, por el campo de fuerzas en el que ocurre el “movimiento de golpe”, a partir de lo cual ellos devienen visibles (Foucault, 2004: 47-8). No nos interesará, entonces, reconstruir relatos lineales que nos

sorpresas, sus vacilantes victorias, así como las derrotas mal digeridas que explican los comienzos, los atavismos, las herencias; así como en esta relación que establecemos con una ontología del presente nos permite “diagnosticar” ciertos elementos de debilidad, de fisura, de resistencia.

devuelven la coherencia de un objeto, sino por el contrario dispersar el espacio de su dispersión (Grondona, 2012), a partir de lo cual en nuestro trabajo agudizamos la mirada que distingue, distribuye y deja actuar el juego de la heterogeneidad y multiplicidad estratégica de lógicas y prácticas de gobierno y resistencia. Lo hacemos analizando, por un lado la red heterogénea de lógicas y prácticas que configuran los programas de gobierno en referencia al rol de Estado en relación con el mercado, la economía y la sociedad civil, mientras que identificamos, en el trazo de la dispersión, la singularidad que recae en el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres y desocupadas en diferentes tramos de la historia argentina y salteña, en un cruce que deja jugar las desviaciones, fisuras y rebasamientos de los límites establecidos con el ejercicio de prácticas de resistencia y autogobierno trazadas en territorios específicos de conflictividad, pobreza y riqueza natural.

Lo antedicho nos remite al ejercicio de la historia efectiva, la cual pretende no mirar hacia abajo desde arriba, sino mirar lo más próximo, pero para apartarnos bruscamente de ello y volver a captarlo en la distancia, para diagnosticar las diferencias. En tanto, nuestro ejercicio genealógico se sumerge en el heterogéneo campo de la dispersión, en la puesta en juego de un “gran carnaval del tiempo”, en el cual las máscaras no cesarán de volver, a partir de lo cual es posible desnaturalizar las relaciones de poder y de resistencias, desnaturalizar las nociones y configuraciones de los sujetos y de los vínculos, nos permite identificar cómo, en tramas heterogéneas de relación, de continuas discontinuidades y de cruces des-encontrados, todo es susceptible de transformación mediante el ejercicio de la creatividad y la crítica.

En segundo lugar, en este tejido vincular de saberes, pensares y haceres, acorde a lo antedicho también para la analítica de las prácticas discursivas y extradiscursivas nos hemos apropiado de algunos elementos desplegados por el autor francés en torno *de la arqueología* propuesto por Foucault, como el método propio del análisis de las discursividades locales. En tanto las racionalidades se inscriben, parafraseando a Foucault en una *economía general del discurso*; es decir una mecánica de producción social de los discursos, en función de quién lo enuncian, cómo se enuncia, qué se dice sobre lo que se está enunciando. Para esto es menester comprender las reglas de formación e instalación

del discurso, las condiciones de posibilidad de los mismos y la correlación entre diferentes tipos de discursos³⁶.

Parte del gobierno de un problema, como la pobreza, se encuentra en el ejercicio discursivo que lo constituye como tal: “...*el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino a aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse*” (Foucault, 1992: 1). Las racionalidades políticas no sólo enuncian problemas, si no aquello mismo por lo cual se lucha y cómo se lo pretende hacer, ya que en la enunciación se disponen de valoraciones y modalidades específicas de intervención.

Esto también implica dejar de pensar el término “autor” como sustancia predada y/o sujeto soberano, y comenzar a pensarlo como una construcción que emerge a partir de prácticas sociales concretas (Murillo, 1996). Más allá de que sean recuperados y analizados, por ejemplo: discursos presidenciales (nacionales, internacionales), el nombre del autor solo describe sin pretender homogeneizar o generar autoidentificación de unos a través de otros. Más bien, se trata de comprender al autor como una función que emerge de y en prácticas discursivas, que sin dejar de ser prácticas sociales entrelazadas en relaciones de poder y gobiernos, así como de saber y verdad, garantizan el modo de circulación de los discursos.³⁷

En esta analítica del discurso también es relevante la dimensión epistemológica heterogénea y positiva del archivo, considerando que trabajamos con una amplia diversidad de fuentes: escritos teórico-académicos, discursos presidenciales (nacionales, de organismos internacionales, etc.); notas periodísticas; informes oficiales; manuales; resoluciones ministeriales y ejecutivas; estadísticas, entre otros. La heterogeneidad del archivo forma parte del ejercicio crítico y analítico en torno del discurso, la discursividad y la autoría.

Por último, para la ejecución del trabajo de campo y para el trabajo analítico en torno del estudio de caso, han sido recogidas y utilizadas herramientas provenientes, en primer lugar de la *perspectiva etnográfica* (Guber, 1991; Restrepo, 2016; Reynagas, 2014). Se considera que: “...*la etnografía puede ser entendida como una práctica de investigación que trata de aprehender una porción del mundo social a través de un análisis que se*

³⁶ En tal sentido, nos orienta de la mano de Foucault, la posibilidad de mostrar cómo prácticas complejas y diversas configuran reglas del ver y del hablar, regímenes de verdad en lo que emergen coincidencias entre discursos diversos que pueden o no articularse en una misma estrategia independientemente de la voluntad individual de sus autores.

³⁷ Parafraseando a Foucault, señalamos que “el autor” es a través de quien pasa el poder.

centra estratégicamente en las perspectivas nativas”. (Balbi, 2008: 37). Ahora bien, un rasgo central de este tipo de investigación resulta de: “...la integración dinámica de las perspectivas nativas al análisis, su incorporación paulatina, siempre incompleta, orientada a tornarlas en parte integrales de la descripción analítica de una porción del mundo social “. (Balbi, 2012: 493)

El enfoque etnográfico propuesto se teje en una vinculación dinámica entre los puntos de vista, referencias teóricas, perspectiva del investigador y las perspectivas nativas, las cuales, si bien resultan “construcciones analíticas” no son “ficticias”, en tanto tienen un fundamento empírico³⁸ específico y contextual. Siguiendo a Guber, la perspectiva del autor remite a:

...un universo de referencia compartido- no siempre verbalizable- que subyace y articula el conjunto de prácticas, nociones y sentido organizados por la interpretación y actividad de los sujetos sociales (...) tiene existencia empírica aunque su formulación, construcción e implicancias estén definidas desde la teoría (Guber, 1991: 75).

También, en el andar de nuestro trabajo de investigación, hemos dialogado y puesto en juego otros modos de aproximarnos al encuentro entre las perspectivas nativas y las del investigador/a. Esto nos lleva a recuperar elementos de la Investigación Acción Participativa (Rigal y Sirvent, 2007)³⁹, bajo la guía silenciosa de Fals Borda (2015) y sus sentipensamiento, así como de Freire y Faundez (2010) y la pedagogía de la pregunta en los avatares de la educación popular y el proceso colectivo y situado de producción del concommiendo. También, identificamos en este proceso de proximidad y análisis elementos de lo que sociología ha llamado la perspectiva del actor (Long, 1997, 2007) y de la mano de Giarraca y Bidaseca (2001) de la perspectiva polifónica, no porque los integrantes de la organización hayan realizado un ejercicio de coescritora, en este caso, sino porque en primer lugar nos aproximamos al diálogo y la participación, colaboración en el proceso de investigación.

Por tanto, el abordaje metodológico propuesto se sostiene en el trazo de una “ontología del presente”, a partir de la cual la intención es analizar formas de poder y resistencia, que aún hoy en día se constituyen re-configurándose, siendo posible: “... establecer la

³⁸ Ahora bien, abogar por un ejercicio de la práctica de investigación etnográfica no debe ser confundido, en igual sentido que con la práctica genealógica, con empirismos. Ver: Shore, 2010: 35; y Foucault, 2000...op...cit.

³⁹ Sirvent (2007) nos dice que la IAP remite a: “...un estilo o enfoque de investigación social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar concommiendo colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares”. Sirvent, apuntes tomados en un taller interno para quienes formábamos parte del equipo del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, región NOA-INTA.

singularidad de nuestro presente; indagar cómo hemos llegado a ser lo que somos y no otra cosa” (Castro Gómez, 2010: 49)⁴⁰. En tal sentido, el trabajo analítico y experimental a realizar se esboza dentro de un espacio de problemas emergentes y actuales, en torno de los cuales es menester iluminar la amplitud y multiplicidad de modelaciones y re-configuraciones singulares de las relaciones entre poder/gobierno y resistencia. Así es puesta en juego una práctica problematizadora que contribuye a desnaturalizar y des-sustancializar, no sólo las prácticas de gobierno y sus lógicas, si no nuestra conducta presente-actual.

Una analítica de las prácticas de gobierno y resistencia, en nuestro presente, es ante todo un análisis material que sitúa a estos regímenes de prácticas en el centro de la atención y busca dilucidar su lógica, identificar su emergencia, examinar los elementos que las constituyen y seguir diversos procesos y relaciones a través de los cuales estos elementos se ensamblan en formas diversas: “...*Debemos descender al estudio de las prácticas concretas a través de las cuales el sujeto se constituye dentro de un campo de saber*” (Foucault, 2008: 7)⁴¹.

La pregunta, entonces, es por el “cómo”⁴² del gobierno, en una historia del presente que: “...*Seleccionando prácticas y proporciones particulares traza las condiciones de su existencia, es decir, cómo unos regímenes de gobierno se convirtieron en lo que hoy son y en ningún otra cosa*” (Campana, 2012: 24) De este modo, es posible identificar continuidades y discontinuidades, visualizando momentos críticos, quiebres y desviaciones.

Por tanto, un ejercicio crítico de pensamiento en torno de nuestra-s actualidade-s no remite sólo a indicar la “repetición”, que significa el ejercicio actual del poder/gobierno y verdad, sino la “diferencia”, en tanto singularidad a partir de lo cual poner a jugar la siguiente pregunta: “¿*Qué diferencia introduce el hoy respecto del ayer?*” (Foucault, 1996: 99). En este análisis histórico de nuestro presente y de nosotros mismos, la cuestión no es identificar el “núcleo esencial de racionalidad” ni el “*argé*/origen” de la historia, sino de orientar la práctica y actitud hacia los “límites actuales de lo necesario”, esto es

⁴⁰ Mientras las configuraciones cambian, siendo problematizadas, la antigua figura no desaparece, sino que se reubica en lugares diferentes dentro de un espacio de problematizaciones, a partir de ser pensada de nuevo y debiendo ser pensada de nuevo (Rabinow, 2009: 149).

⁴¹ Cabe señalar, que la referencia a las prácticas concretas no remiten ni a un empirismo, ni aun positivismo analítico, en tanto la positividad según remite a que las prácticas están ligadas a ciertas condiciones, sometidas a ciertas reglas y pasibles de ciertas transformaciones, que a su vez están contenidas en sistemas de correlación con otras prácticas.

⁴² Preguntarse por el “cómo” significa, no buscar las intenciones ocultas o las esencias últimas de un fenómeno, sino estudiar los mecanismos concretos por medio de los cuales el poder efectivamente se ejerce.

hacia: “... *lo que no es ya o no es indispensable para la constitución de nosotros mismos como sujetos autónomos...*” (Foucault, 1996:100). En tanto, una actitud crítica se presenta como una “actitud límite”, ni adentro ni afuera, ni a favor ni en contra, sino en la “frontera”, según Foucault. De lo que se trata, es de identificar y reconstruir cuál es la parte singular, contingente y debido a coacciones arbitrarias, a partir de lo cual transformar la crítica de la forma de la limitación necesaria a la crítica práctica, en la que es posible franquear esas limitaciones.

III.1- Técnicas de aproximación

Para la realización del trabajo de tesis hemos recurrido a distintas técnicas de aproximación a los procesos y problemáticas planteadas, a partir de la complementariedad de las perspectivas metodológicas sugeridas:

-Observación y registro: de los espacios de interacción y relación entre los dispositivos públicos dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas y la organización de desocupados; así como de reuniones y asambleas en la UTD. Para ello utilizaremos diarios de campo donde incluiremos los productos de la observación directa y la textualidad de comentarios o diálogos.

-La entrevista en profundidad, con preguntas abiertas y sesiones múltiples: realizamos entrevistas abiertas a partir de guías temáticas dirigidas a recuperar material espontáneo resultado de la interacción con el entrevistado, en donde aquel pudo incluir temas, percepciones y valoraciones propias. Las entrevistas fueron extensas y pudieron ser grabadas; asimismo un mismo informante calificado pudo ser entrevistado en más de una ocasión. En algunos casos los fragmentos de entrevistas, que fueron transcritos en la tesis, carecen de nombres, indicando sólo aquellos datos que suponemos pertinentes para el análisis y el año en que fue realizada la entrevista. Mientras que, en otros casos, indicamos el nombre del o los entrevistados/as bajo su autorización previa. Realizamos entrevistas en profundidad a funcionarios de organismos Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia y de la nación, funcionarios provinciales cercanos a la gobernación e integrantes de equipos técnicos; dirigentes/referentes de la UTD; ex/trabajadores de YPF fundadores de la UTD; grupos de jóvenes trabajadores-desocupados de la UTD, hijos de ex/ypefianos; mujeres integrantes de larga data en la UTD; grupos de trabajadores-desocupados que participaron de los piquetes iniciales y aún siguen siendo parte de la UTD; mujeres que ya no son parte de la UTD, pero mantienen

vínculos estrechos y vivos; entre otros.

-Entrevistas grupales: este tipo de entrevistas se realizaron a través de guías temáticas específicas y se dirigieron, puntualmente, a los diferentes grupos de trabajo de los proyectos productivos, que nuclea la UTD. Esta modalidad de entrevistas nos permitió un encuentro dinámico y abierto de varios días de trabajo, con más de 50 entrevistados de diferentes edades, sexos, y con diferentes tramas experienciales en torno del trabajo a realizar en y de la UTD.

-Análisis de documentos: constituyó una fundamental modalidad de obtención de información, ante todo para las secciones de investigación dedicadas a los programas de gobierno, las racionalidades políticas, las prácticas de intervención, entre otras. Entre estos documentos trabajamos con: informes del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de la CEPAL y del gobierno nacional y provincial. A nivel nacional y provincial, documentación perteneciente al Ministerio de Desarrollo social y de Trabajo (manuales, libros, trípticos, etc.); así como de Ministerio de DDH y de economía. También trabajamos con: resoluciones ministeriales, decretos gubernamentales varios (desde 1991-2013), leyes, informes, expedientes judiciales; datos de informes y encuestas. Informes realizados por los integrantes de la UTD, petitorios, proyectos elevados al gobierno provincial y nacional, reseña-s elaboradas por el área administrativa de la UTD, memorias, entrevistas, entre otros.

-Talleres: los talleres fueron comprendidos como un espacio abierto de diálogo, discusión y encuentro colectivo logrado en torno de la interacción dinámica entre las perspectivas teóricas y las perspectivas nativas. Los talleres se realizaron mediante una co-organización con el área administrativa de la UTD, bajo ejes referenciales de trabajo, utilizando técnicas facilitadoras y dinamizadoras provenientes, ante todo, de la investigación acción participativa y la educación popular (Sirvent y Rigal, 2009, 2011). Realizamos tres talleres, uno en la Universidad Popular referido a la privatización de YPF y los efectos del neoliberalismo a nivel local, provincial, personal y nacional; y otros dos talleres en los galpones de la UTD a los efectos de reconstruir las memoria de la organización y de las prácticas realizadas en el cotidiano, con diferentes grupos de trabajadores-desocupados, con un total aproximado de 250 personas, en total. Todo el material fue recogido mediante afiches y fotografías, así como, en los tres casos, elaboramos un informe escrito que fue entregado al área administrativa de la UTD, el cual fue puesto en común y revisado en varias oportunidades.

-Material fotográfico y gráfico: producido y recuperado en el propio trabajo de campo. El registro fotográfico, ante todo, nos permitió un acercamiento memorioso y pormenorizado tanto a los barrios, las prácticas cotidianas, las expresiones, los rostros, los movimientos, etc.

En el uso **de fuentes secundarias** apelamos a la prensa escrita y a crónicas periodísticas, ante todo, considerando que no sólo trabajamos con el registro periodístico para dar cuenta del nivel público que adquieren las problemáticas abordadas en este trabajo, sino también para analizar las maneras en que es significado a través de la prensa el mismo. Además de ello, la prensa escrita ha sido útil para relevar entrevistas a los funcionarios públicos, opiniones y análisis en torno de las condiciones y circunstancias actuales derivadas de decisiones políticas, económicas y sociales estratégicas, manifestaciones y prácticas de resistencia de los pobladores del norte provincial.

Por tanto, lo propuesto y desplegado en nuestro trabajo de investigación doctoral nos desafía a nutrirnos de una perspectiva pluridisciplinar e interdisciplinar, en tanto:

...Se requieren muchas más analíticas específicas, y tan sólo se pueden alcanzar a través de proyectos coordinados, multidisciplinarios y multisituados. La contemplación sin la constricción empírica, y la Teorización (Latour) sin la indagación, nos parecen retrógrados. (Rabinow, 2009: 151).

En tal sentido, consideramos que nuestra tesis realiza aportes al campo de las ciencias humanas en general, pero en particular se torna relevante para los estudios sociales. En tanto, el modo de abordar las problemáticas sugeridas resulta singular desde las perspectivas señaladas en el ejercicio de un pensar situado en nuestra región, trazado a su vez, en torno de la filosofía política como eje de inspiración epistemológica en un permanente proceso de revisión de las lecturas, en torno de las cuales nos apropiamos de los modos disímiles de hacer política, en nuestro presente. A su vez en la configuración del problema de investigación convergen aportes de la ciencia política (en relación a los debates sobre la/s teoría/s del Estado, las caracterizaciones del gobierno y de los regímenes políticos; el tema de las políticas públicas en general y el de las políticas sociales en particular, así como en torno del neoliberalismo y de las políticas neoliberales); la sociología (en particular, los estudios sobre los movimientos sociales, el conflicto social y las teorizaciones sobre la acción colectiva; los estudios sobre trabajo, pobreza, desigualdades sociales), y las perspectivas antropológicas e históricas (etnografías, archivos, ante todo). Por tanto, nuestro trabajo responde a los requerimientos de una investigación doctoral, pertinente para el campo de las Ciencias Humanas y se

suma relevancia para el contexto teórico-político contemporáneo.

IV- Esbozo de contenidos: organización del trabajo de tesis

A modo de organización expositiva, el trabajo cuenta con dos grandes partes organizadas en un total de cuatro capítulos, subdivididos en diferentes apartados. Las dos partes que sostienen el trabajo han sido organizadas siguiendo el criterio histórico, contextual y territorial de análisis arriba explicitado, acorde a la historia configurada en torno de las relaciones entre gobernantes y gobernados, según la singularidad propuesta en los objetivos de la presente tesis.

La **Parte I**, dentro del núcleo de **Heterogeneidades I**, remite a las diversas reformas y prácticas de resistencia en relación con los programas de gobierno y políticas sociales humanizadas, en la Argentina y la Salta de los 90', haciendo hincapié en YPF y el acontecer piquetero, e introduciéndonos en el caso de la UTD Mosconi, entre 1995 y 2002.

El **Capítulo 1**, nos centramos en los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta de los 90', y profundizamos en la reconfiguración del rol del Estado, el caso de YPF y el acontecer piquetero. Primeros destellos de la UTD Mosconi; el mismo está organizado en tres apartados en continua discontinuidad. Para la elaboración de este capítulo y del capítulo 3, partimos del supuesto que las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres se desarrollan y construyen en un diagrama más amplio de pensamiento y modos de hacer; por lo cual es fundamental dar cuenta de los diferentes programas de gobierno que tuvieron lugar en estas épocas específicas, poniendo especial atención en la reconfiguración del rol del Estado, las consideraciones en torno de la economía, el mercado y la sociedad civil. En el *apartado I*, remitimos a los avatares inaugurales de la gubernamentalidad en la Argentina de la década de los 90' hasta la propuesta de lo que dio en llamarse “la Alianza” (1999-2001), profundizando en las continuidades y discontinuidades, las crisis y los retoques que en la Argentina de esta época llevaron a la profundización de la racionalidad neoliberal instalada en los 90'.

En el *apartado II* nos situamos en la provincia de Salta mediante una analítica de lo que denominamos la reconfiguración del rol del Estado en los avatares de la gubernamentalidad Salteña, entre neoliberalismos, “salteñidad⁴³” y el desarrollo humano

⁴³ El adjetivo “salteñidad” es utilizado para referir a la identidad salteña, ante todo en torno a la construcción de la misma en relación con las elites locales y los saberes autorizados.

(1995-2003). Como experiencia central para el trabajo analítico de tesis, en el apartado I, reconstruimos el proceso de “privatización de YPF”. Nos detenemos en la práctica estratégica de la privatización de la empresa estatal por considerar que se trata de un acontecimiento inaugural. Entre sus efectos encontramos el advenir de los “trabajadores en pobres”; a partir de lo cual se abren dos dimensiones de análisis en torno de la reconfiguración de: por un lado, las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, y por otro, la emergencia e instalación de las prácticas de resistencia y lucha piqueteras.

En continua discontinuidad con lo antedicho, en el *apartado III* mediante una aproximación teórica, analítica y práctica reconstruimos brevemente la historia del petróleo en Salta, y con ello, la instalación de YPF en el departamento Gral. San Martín, así como ensayamos una aproximación a las tradiciones y prácticas de resistencia precedentes a los levantamientos piqueteros y las organizaciones de trabajadores desocupados, en el norte salteño. A partir ello identificamos los primeros destellos de la UTD Mosconi.

En este camino del pensar, damos entrada al **Capítulo 2** que cuenta con tres apartados en su interior. Aquí analizamos y describimos el gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, en Argentina y en Salta (1995-2002) y el estar siendo trabajadores desocupados y piqueteros, entre lo que denominamos mínimos biológicos, emprendedores, moribundos y piqueteros. Profundizamos, respectivamente, en la emergencia e instalación de la UTD Mosconi.

En el *apartado I* realizamos una aproximación teórico-analítica al proceso de problematización histórica de la pobreza en clave de Desarrollo Humano. En el *apartado II*, en primer lugar des-andamos el gobierno de la pobreza y los pobres desocupados en la Argentina de los 90´ mediante una analítica de las políticas sociales y el Discurso de Desarrollo con rostro Humano. Mientras que, *en IIA*, nos concentramos en Salta haciendo referencia al gobierno de la pobreza en la “Linda”: entre capitales humanizados, desarrollos posibles y represiones directas. En ambos apartados analizamos las lógicas y prácticas de gobierno que en la Argentina y la Salta de los 90´ fueron ejerciendo de modos singulares el gobierno de la pobreza y de las poblaciones pobres y desocupadas, profundizando en torno de los vínculos Estados y sociedad civil en el trazo del desarrollo humano y local, así como en la instalación del *workfare*.

En la simultaneidad de prácticas de gobierno y resistencia, o a la inversa, damos entrada al *apartado III*, en el cual realizamos nuestra primera aproximación a la UTD Mosconi mediante una analítica de los dos primeros momentos históricos de resistencia y autogobierno, que decidimos subdividir entre 1997-1999 y entre 2000-2002. Los ejes de análisis puestos en juego son: los primeros piquetes, modalidades de organización, lucha y subjetivación; prácticas iniciales de desbloqueo de las programáticas y lógicas de gobierno dirigidas a gobernar-los como pobres “desocupados” y prácticas de subjetivación del “trabajador desocupado” ex/ypefiano, ante todo.

En este espiral expositivo, damos entrada a la **Parte II** del trabajo de tesis, **Heterogeneidades 2**, en la cual des-andamos los programas de gobierno y la reconfiguración del rol del Estado en la Argentina y Salta entre 2003 y 2012/13; en torno del gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de “ciertos modos”, profundizando en el proceso de consolidación de la UTD Mosconi.

En el **Capítulo 3** nos centramos en los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta entre 2003 y 2012/13. En el *apartado I*, referimos a América Latina y su configuración de época entre el neoliberalismo, las crisis y las transformaciones integracionistas, mediante un breve recorrido por el diagrama geopolítico continental actual, considerando que el mismo posibilita comprender la emergencia, instalación y singularidad de la gubernamentalidad argentina de la época en cuestión. En segundo lugar, en el *apartado II* realizamos una analítica crítica y descriptiva en torno del programa de gobierno y las racionalidades políticas, en la Argentina (2003-2013), identificando singularidades, prácticas y dispositivos, mediante un ejercicio de análisis en clave genealógica. En este ejercicio analítico dirigido a la reconstrucción de la heterogeneidad de lógicas de gobierno que configuran el programa nacional de gobierno, nos aproximamos a la re-nacionalización de YPF y sus más inmediatos efectos en torno del autoabastecimiento energético, las lógicas extractivistas puestas en juego y las prácticas de resistencia piqueteras.

En esta línea, en el *apartado III* del presente capítulo (III), realizamos una reconstrucción crítico genealógico de la gubernamentalidad en la provincia de Salta entre 2003 y 2013, con la intención de captar la singularidad del programa de gobierno en cada una de los trazos históricos contextuales señalados haciendo especial hincapié en la relación establecida entre explotación (humana y ambiental), restauración y resistencias.

En este haz de relaciones múltiples y simultáneas, inauguramos el **Capítulo 4**, en el cual abordamos las políticas sociales de segunda generación con rostro humano, en la Argentina y en Salta, y las prácticas de resistencia, lucha y aceptabilidad de la UTD Mosconi, entre 2003-2012/13. En el *apartado I*, analizamos cómo, en los trazos de la gubernamentalidad Argentina del período trabajado, la transformación de los trabajadores en pobres, ante todo a partir del 2003, reinstala la cuestión social en términos de pobreza y en clave de DH de un modo singular. Sostenemos, en tal sentido, que el gobierno de la pobreza se ejerce en el complejo dominio de “lo social” y por la “unidad nacional”, promoviendo la complementación paradójica entre sujetos jurídicos y sujetos económicos, en los trazos enunciativos del DDH y el dispositivo estratégico de la economía social.

Por su parte, en el *apartado II* nos introducimos en la provincia de Salta. Analizamos cómo, desde sus inicios, el programa de gobierno provincial dirige las prácticas de intervención social a la “lucha contra la pobreza”, reafirmando que la “acción social” es la mejor herramienta. Profundizando en los mecanismos de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas, nos detenemos en lo que da en llamarse “el triángulo de la responsabilidad social empresaria, en relación con las empresas/fábricas sociales y los diferentes programas de capacitación” dirigidos, ante todo, a jóvenes – empleables – desocupados, así como esbozamos una breve referencia a las redes gubernamentales y vinculares entre nación y provincia y, lo hacemos recuperando las prácticas técnicas ante todo, de trabajadores sociales y promotores territoriales. En este tejido movedizo damos entrada al último *apartado III*, en el cual realizamos, en continuidad con el resto de los capítulos, una reconstrucción crítica y descriptiva en torno de las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi, entre 2003 y 2013. Hacemos hincapié en los procesos de subjetivación y organización mediante las diversas maneras de organizar el trabajo, a través las prácticas de afirmación, resistencia y autogobierno, ante todo instaladas en torno de la Fundación de Trabajadores Desocupados (FUNDATRAD), y los diferentes vínculos establecidos para con los Estado-s.

Finalmente abordamos las conclusiones y reflexiones finales, en torno del trabajo de tesis.

PARTE 1

Heterogeneidades 1

Entre Reformas y resistencias: Programas de gobierno y políticas sociales “humanizadas”, en la Argentina y la Salta de los noventa. YPF y el acontecer piquetero (1995-2002)

CAPITULO 1: “Los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta de los 90’”: la reconfiguración del rol del Estado, el caso de YPF y el acontecer piquetero. Primeros destellos de la UTD Mosconi

El presente capítulo está organizado en tres apartados en continúa discontinuidad. Para la elaboración de este capítulo y del capítulo 3, partimos del supuesto de que las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres se desarrollan y construyen en un diagrama múltiple de pensamientos y modos de hacer; por lo cual es fundamental dar cuenta de los diferentes programas de gobierno que tuvieron lugar en estas épocas específicas, haciendo especial hincapié en la reconfiguración del rol del Estado, las consideraciones en torno de la economía, el mercado y la sociedad civil.

En tal sentido, en el *apartado I* realizamos un breve recorrido genealógico por la gubernamentalidad neoliberal, que desde los años 70’ hasta los 90’ se instala y radicaliza en la Argentina. Nos detenemos en el programa de gobierno construido y dispuesto desde 1989 mediante una revisión crítica de los procesos y prácticas de reformas, como las de los Estados, así como la emergencia económica, la ley de convertibilidad y los efectos vinculados con las privatizaciones, las prácticas de la flexibilización, tercerización y precarización laboral, y el problema del desempleo. Como experiencia central para el trabajo analítico de tesis, reconstruimos el proceso de “privatización de YPF”, por considerar que se trata de un acontecimiento entre cuyos efectos encontramos el advenir de los “trabajadores en pobres”; a partir de lo cual se abren dos dimensiones de análisis en torno de la reconfiguración de, por un lado, las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas y, por otro lado, la emergencia e instalación de las prácticas de resistencia y lucha piqueteras.

En sintonía, en el *apartado II* nos acercamos a lo acontecido en la provincia de Salta de los 90’. Proponemos una analítica del programa de reformas acorde a las singularidades locales, entre los avatares del peronismo con matices neoliberales, pastorales⁴⁴ y soberanos.

⁴⁴ La “historia de la gubernamentalidad” remite, según Foucault a: “*La pastoral, la nueva técnica diplomático-militar y, por último, la policía fueron a mi entender los tres grandes puntos de apoyo sobre cuya base pudo producirse ese fenómeno fundamental en la historia de Occidente que fue la gubernamentalización del Estado*” (Foucault, 2006: 138). El modelo arcaico es encontrado, en la “pastoral cristiana”, el poder pastoral opera sobre una multitud, una totalidad móvil, que es el rebaño, no sobre un territorio. Se define por su carácter benefactor y resulta individualizante, ya que el pastor puede cuidar de todas las ovejas, para lo cual tiene que conocer a cada una. A partir de lo cual, opera una economía de la salvación, en tanto no se trata de conquistar a través de la

En torno de YPF, en el trazo de simultaneidades heterogéneas, nunca resumidas a contradicciones irresueltas, en *el apartado III* del capítulo 1, mediante una aproximación teórica, analítica y práctica reconstruimos, brevemente, la historia del petróleo en Salta y con ello la instalación de YPF, en el departamento Gral. San Martín. También, en este ejercicio ensayamos una aproximación a las tradiciones y prácticas de resistencia precedentes a los levantamientos piqueteros y las organizaciones de trabajadores desocupados, en el norte salteño.

Para realizar el trabajo propuesto seguiremos los lineamientos analíticos sugeridos en torno del gobierno y el Estado, una “analítica del Estado” en tal sentido, remite a: “...*el examen de la condiciones particulares bajo las cuales emergen y se transforman diferentes prácticas de gobierno, mirando además el tipo de racionalidad específica movilizado por cada una de esas prácticas*” (Castro Gómez, 2010: 45). Esto posibilita un movedizo ejercicio de desnaturalización de las prácticas de gobierno, mediante un análisis crítico de las racionalidades políticas en su singularidad y, no según una unidad o centro fijo.

En tal sentido, el Estado no está siendo comprendido como la sede o el origen del gobierno, a partir de lo cual no pretendemos desplegar una “teoría del gobierno”, sino ensayar una “analítica de la gubernamentalidad”. La primera da por supuesto al Estado como actor unitario dotado de un conjunto de instituciones o aparatos que sirven de asiento y base del gobierno, por lo cual se ocupa de reflexionar sobre la legitimidad del gobierno, las mejores o peores formas de gobernar (populismo, democracia, totalitarismo, etc.), o bien sobre la “sostenibilidad” de las potestades legislativas, punitivas o administrativas del Estado (gobernabilidad, gobernanza, etc.). Mientras que, la segunda no parte de la unidad del Estado, sino de una multiplicidad de prácticas dotadas de racionalidades particulares. Entonces, siguiendo el análisis foucaultiano, una analítica de la gubernamentalización del Estado se ocupará de mostrar cómo el Estado surge y se modifica, en torno a la “objetivación” de una serie de prácticas gubernamentales.

guerra, sino de cuidar y/o velar por cada una de sus ovejas. En relación a ello, es preciso recordar que, un año después de que Michel Foucault dictase su conferencia *Omnes et singulatim: Towards a Criticism of 'Political Reason'*, en el mismo contexto de las *Tanner lectures on human values*, George Stigler, uno de los más claros representantes del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, expone su trabajo *The Economist As Preacher* (Stigler, 1997: 12) donde señala que desde fines del siglo XIX el poder pastoral parece haber intervenido crecientemente sobre el campo de las racionalidades económicas. A su vez, el neoliberalismo en su versión norteamericana habría penetrado, vía la teoría del capital humano, en el ámbito de una intimidad que estaba reservada a la conducción de las almas (Foucault, 2007).

En suma, una analítica de la gubernamentalidad cumple una tarea doble, a la vez genealógica y arqueológica: “...examinar las posibles articulaciones entre unas tecnológicas de conducción de la conducta y unas tecnologías de producción de la verdad” (Castro Gómez, 2010: 29).

Antes de introducirnos en el desarrollo del capítulo y acorde a la perspectiva propuesta, cabe aclarar que, las referencias al “peronismo/justicialista⁴⁵” en los tramos seleccionados al respecto, no pretenden una analítica del mismo, ni encuentran en dicho peronismo un origen, centro y espacio de veridicción y legitimidad de las prácticas y los discursos.

En el caso puntual de la tesis, el retorno al peronismo y a las diversas modalidades – discursivas y extradiscursivas - en las cuales es recuperado por los programas de gobierno trabajados, pretende identificar las singularidades y diferencias que dichos programas contemporáneos, en Argentina y en Salta, adquieren en el proceso de construcción y constitución de las prácticas de gobierno y las racionalidades políticas que los “ordenan y regulan”.

⁴⁵ El “peronismo” fue un apelativo, que designó una etapa de la historia argentina, también al movimiento político e ideología identificada con la figura de Perón. Juan Domingo Perón fue electo presidente de la Argentina en febrero de 1946. Luego, fue reelecto por otro período y en setiembre de 1955 derrocado por un golpe de Estado y regresó a la presidencia en 1973. El partido justicialista, en los marcos de la doctrina peronista trajo consigo importantes transformaciones políticas, económicas y sociales; se profundizó la protección social gubernamental, en el primer gobierno de Perón, a partir de una ampliación de la participación popular en la escena política, así como un proceso de creciente urbanización, industrialización y el crecimiento del Estado Benefactor. Esto último, fundamentalmente, por una alianza entre sectores de la burguesía nacional y el movimiento obrero organizado. La idea tercerista de Perón y el rol que asigna al Estado, como regulador de las relaciones entre capital y trabajo, y a la vez promotor del desarrollo, son fundamentales para la configuración del régimen. Cabe distinguir entre el “primer peronismo” y la “tercera presidencia” al regreso de su exilio en 1973, luego de Cámpora y el viraje del peronismo hacia la izquierda, con diversos enfrentamientos entre medio. Perón retoma, definitivamente la presidencia el 20 de junio de 1973, acompañado de su tercera esposa María Estela Martínez con quien conforma la fórmula “Perón-Perón”. Luego de su muerte, “Isabelita” continuó en la presidencia hasta el golpe militar de 1976. En este convulsionado tercer gobierno se conformó el plan trienal también llamado “Pacto Social”, el cual fue producto de una concertación política, económica y social previa basada en la necesidad de recuperar la democracia y detener la violencia. La aprobación de dicho plan tuvo lugar en la Asamblea empresarial realizada en junio de 1973, mediante la cual se firma el “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social”. Ver: Álvarez, Leguizamón 2008: 87-89; Poderti, 2010: 161-62; 38-8; 167-173.

I-

Los avatares de la gubernamentalidad en la Argentina de la década de los 90': programas de gobierno

1-Entre singularidades, procedencias y emergencias: breve aproximación a la gubernamentalidad en la Argentina, entre 1976 y 1990.

A principios de 1976 se instala en Argentina, y en igual época en diferentes países de América del sur, un proceso de desbloqueo del neoliberalismo que opera con la violencia al modo de “dictaduras” de gobierno de Estado (Murillo, 2018), en el trazo inaugural de lo que damos en llamar gubernamentalidad de perfil opresor y neoliberal. Las crisis económicas, la violencia política y la descomposición del gobierno abrieron una brecha que permitió a los militares regresar⁴⁶ a ocupar el gobierno de Estado, a partir de lo cual acontece el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional⁴⁷.

Ahora bien, cabe recordar que tanto el liberalismo, como el neoliberalismo, según lo sugerido por Foucault, no resultan ideologías o teorías, tampoco las maneras en como la sociedad se representa a sí misma. Ambos son prácticas, principios y métodos de racionalización del ejercicio de gobierno. En el liberalismo clásico del siglo XVIII-XIX, la relación entre economía y política se daba porque el mercado, que había sido hasta entonces objeto privilegiado de la intervención gubernamental, con la instalación del neoliberalismo se convierte en un mecanismo de formación de la verdad (Foucault, 2007). La pregunta que atraviesa la configuración de las relaciones de poder y verdad en el trazo de dichas tecnologías de gobierno liberales remite a ¿cómo se puede gobernar, sin gobernar demasiado?, la cual se despliega en torno de la reconversión frugal del gobierno de Estado. Por un lado, el liberalismo clásico postula, en torno de la relación entre gobierno y mercado, que el gobierno político se ejerce “a causa del mercado”, el cual

⁴⁶ Este “regreso” remite a que no era la primera vez que los militares ejercían el gobierno de Estado. Bien conocida es la llamada “década infame”, como el período comprendido en 1930, con el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Irigoyen, y 1943, con el golpe de Estado que derrocó a Ramón Castillo. La denominación de “infame” a dicho período histórico se debió, ante todo, al fraude electoral sistemático, la represión a los opositores, la proscripción a la Unidad Cívica Radical y la corrupción generalizada. Ver: Campana, 2012...op...cit. En esta línea, Grassi (2003b) bautizó a la década de los 90' como “la otra década infame”.

⁴⁷ Dicho Proceso, así como el de las diferentes dictaduras en América Latina, se sostuvo y programó en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional ideada en los Estados Unidos, como forma de ejercer un contrapeso político en la región, en el marco de la Guerra Fría. En este marco se creó la Escuela de las Américas en Panamá, encargada de instruir a militares y policías latinoamericanos.

adviene ámbito natural de intercambio, en torno de lo cual el hombre económico tiene una libertad plena e infinita.

Por su parte, el neoliberalismo en las versiones señaladas por Foucault, “neoliberalismo alemán y anarcoliberalismo norteamericano”⁴⁸, parte de la consideración de que el mercado liberal resultaba una ingenuidad naturalista. Entonces, el mercado no debe ser concebido en términos de intercambios, y por lo tanto de equivalencias, sino en términos de competencia y de desigualdades. Para que ello sea posible es necesario que existan determinadas condiciones que no se dan naturalmente, sino artificialmente: “*Hay que gobernar para el mercado más que gobernar a causa del mercado*” (Foucault, 2007: 120-25). Siguiendo a Murillo, podemos agregar que el neoliberalismo como una mutación en el orden social capitalista, es entendido como una “tendencia” que se renueva constantemente a sí misma nutriéndose, a través de diversos cálculos acerca de sus propios fallos, de los movimientos de sus opositores y de los obstáculos que se le oponen⁴⁹ (2018: 394).

Retornando al periodo histórico analizado, si bien en la década de los 70’ el neoliberalismo se instala de modos singulares y divergentes en Europa y en varios países de América Latina y, con ello acaece, entre otras cuestiones, una mutación en las racionalidades políticas que conlleva tanto un cambio en el rol del Estado y sus configuraciones específicas, así como del mercado, la sociedad civil y los procesos de subjetivación. En el caso argentino, es posible rastrear la procedencia de las estrategias que constituyeron la gubernamentalidad neoliberal mucho tiempo antes. Sobre todo,

⁴⁸ El neoliberalismo en su versión alemana, “ordoliberalismo alemán”, según Foucault encuentra, sobre todo, en el totalitarismo nazi un campo de adversidad para instalarse, a partir de lo cual dispone de la llamada “sociedad política”, en tanto sociedad empresa. A partir de lo cual se instala lo Eucken llamó las “políticas adecuadas”, entre acciones reguladoras: cuyo objetivo es mantener la estabilidad de los precios mediante el control de la inflación, aplicando políticas fiscales, de ahorro o de inversión, buscando reducir costos o ganancias. Y acciones ordenadoras: no buscan intervenir sobre la situación del mercado, sino sobre las condiciones fundamentales de la economía, las que hacen que el mercado sea posible: el suelo, la cultura, las técnicas o jurídicas. El Estado mantiene y genera el ordenamiento y las reglas de la comunidad, con la competitividad activa y la desigualdad necesaria, sin los avatares de los conflictos y sus efectos desestabilizadores. Pues, se trata de una *Vital Politik*, lo cual implica ejercer el gobierno, no sólo mediante la intervención en lo social, por ejemplo: el salario, sino en diferentes cuestiones de la vida. (Foucault, 2007: 123-187). Por su parte, el “neoliberalismo norteamericano” o anarcoliberalismo, según Foucault, se presenta como mucho más radical y riguroso, en torno de la extensión de la racionalidad del mercado a ámbitos considerados hasta ahora no económicos, acorde a la grilla trazada por la teoría del capital humano. Pues, para lo liberales, el análisis económico se centra en los sujetos “quienes” toman las decisiones respectivas, en el marco de las relaciones de intercambio, y el uso racional de los recursos.

⁴⁹ Para ello, según la autora el neoliberalismo hace eje en dos aspectos: la centralidad dada a las tácticas de gobierno de la subjetividad individual y colectiva, en las que los fenómenos afectivos cognitivos y morales se constituyen a la vez en objeto de cálculo e intervención y cuyo fin es la reconstrucción constante de un sentido común que acepte lo “dado” como la única realidad posible. Esos procesos son a la vez la condición de posibilidad y el efecto de otro aspecto: la tendencia a modificar los sentidos del Estado en tanto espacio facilitador de los negocios internacionales centrados en el lucro. Ver: Murillo, 2018...op...cit...Pp.:394-5

mediante la visita de von Mises en 1959⁵⁰ para dar una conferencia en el Centro de Difusión de la Economía Libre e inaugurar la Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, a través de seis conferencias entre cuyos conceptos centrales encontramos el de libertad individual, para sostener el programa en torno de la mercado y la importancia de las inversiones extranjeras. Señala Murillo que el ilustre invitado venía a hacer comprender dicha noción de libertad a nuestro país, pues entendía que los habitantes de este territorio no sabían de ella, por el contrario, realizando críticas al gobierno del Estado argentino derrocado por el golpe militar de 1955, criticaba el gobierno elegido por el voto popular y lo caracterizaba de “tiranía” (von Mises, 2002, en: Murillo, 2018: 405)⁵¹. Por tanto, en las tendencias neoliberales la democracia puede resultar un medio solo cuando es controlada para favorecer a los grandes grupos económicos del poder, las dictaduras, entonces, nunca son mal vistas, si les son afines (Murillo, 2018).

Por su parte, dichos saberes, modos de ver y de hacer, sin determinar, preceden y atraviesan elementos fundamentales del programa de gobierno argentino instalado entre 1958-1962 bajo la presidencia de Frondizi, cuando el Estado comenzaba a reformarse mediante algunos principios neoliberales, en los albores de la modernidad y el progreso, a partir de lo cual: “...*el Estado debe intervenir en la programación económica, pero debe ser respetuoso de la naturaleza y las dinámicas de sus variables (...) los fines de la*

⁵⁰ Aún cuando en la década de los 70' el neoliberalismo haya comenzado a tornarse hegemónico de manera visible, sus comienzos pueden rastrearse hacia fines de siglo XIX, particularmente a partir de los trabajos de Carl Menger en Austria y la instalación de la “teoría subjetiva del valor”, la cual, retomada en el siglo de Oro español por renombrados jesuitas sostiene que la estimación subjetiva de los hombres determina el valor de las cosas. Sobre esta clave analítica el marginalismo austriaco afirmó que el valor de un bien depende de la “utilidad” que tenga para diversos sujetos (von Mises, 1968: 164; Menger, 1976, en Murillo, 2011: 95). La teoría subjetiva pone el acento en el “deseo” del/los sujetos y con ello en el consumo, considerado como algo ilimitado, siempre renovable y posible de diferentes re-lLENOS. Entre otras de los entramados que constituyen a la gubernamentalidad neoliberal se encuentra la “teoría de la acción humana” de von Mises, la cual parte de la consideración de que los sujetos son “libres”, a partir de lo cual se trata de profundizar en la construcción y práctica de la libertad individual, sobre todo mediante el gobierno del deseo. Este modo de presentar la acción humana, lleva a la gubernamentalidad neoliberal a plantear algo que el viejo liberalismo no reconoció en todos sus aspectos, la natural *desigualdad* de los seres humanos, conformada por factores hereditarios, congénitos y adquiridos; lo cual va unido a la noción de la *competencia*, que es la que se entabla entre quienes desean alcanzar los puestos mejores dentro de un orden basado en la cooperación entre individuos: “*La acumulación de capital a través de la competencia que no es sino el libre juego de las des-igualdades es la única forma de progreso económico*” (von Mises, 1968: 1008 y ss, en Murillo, 2011: 100). Por lo tanto, corresponde a los empresarios, afirma von Mises, el gobierno de todos los asuntos económicos (1968: 348). Estos entramados discursivos se complementan con la reconocida “teoría del capital humano”, la cual proviene de la escuela de Chicago, donde en 1959, Theodore Schultz afirmaba: “*ésta es una simple verdad: que las personas inviertan en sí mismas*” (Schultz 1959, en Murillo, 2011: 107).

⁵¹ También Friedrich Hayek, a quien haremos mención en el próximo capítulo, líder político y teórico fundamental de la Sociedad *Mon Pélerin* y de la revolución neoliberal de la época, se reunía en 1956 con el presidente de facto Pedro Aramburu en el mismo año que el país ingresaba en el Fondo Monetario Internacional. Hecho, que muestra una temprana injerencia de la estrategia neoliberal en Argentina, al tiempo que lo extenso y sólido de las resistencias cobraban formas diversas.

intervención desarrollista se inscriben en un lenguaje político, pero los medios son de la economía” (Grondona, 2012: 503). Dicho programa de gobierno se articuló mediante un plan de racionalización administrativa destinado a reorganizar la estructura orgánica y funcional de la administración nacional, a evitar el exceso de personal, a facilitar su adecuada distribución y su capacitación (Orlansky, 2001). También en esta época, como ya se había signado por la visita de Hayek en 1956, la capacidad de financiamiento productivo se concentró en la inversión de capital extranjero, así como en la extranjerización de la economía en un aumento de la tasa interna de ahorro a través de la traslación de ingresos desde los sectores populares a los grupos de altos ingresos (Ferrer, 1980: 240-1)⁵².

Las prácticas de gobierno, a su vez, se realizaban mediante un complejo ensamblaje de redes de expertos, que permitían la adquisición y configuración de marcos estratégicos para intervenir sobre las variables económicas. Así como en la construcción de mecanismos que moldearan la conducta y afianzaran la moral de los sujetos gobernables, para así abrir caminos hacia la modernización y el progreso desarrollista (Grondona, 2012; Campana, 2012; Álvarez Leguizamón, 2008).

En el trazo de las grillas de inteligibilidad antes señaladas observamos cómo, en la Argentina de los años 70’, se desbloquea la gubernamentalidad de perfil predominantemente neoliberal de la mano de la violencia y la opresión dictatorial. La política económica se caracteriza por la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros, ante todo. La producción industrial deja de ser centro del desarrollo económico nacional, a partir de lo cual se da lugar a un modelo de acumulación basado en la valorización financiera en relación a la deuda⁵³ (Basualdo, 2006), lo cual es posible en un camino de reconfiguración del rol del Estado.

⁵² Entre los efectos de esta política se cuentan: la cancelación de financiamientos hipotecarios para viviendas, la restricción del déficit del Banco Central, la eliminación de la mayoría de los controles de precios que quedaban pendientes desde el gobierno peronista, una fuerte devaluación del peso, una dura política salarial y la disolución de toda vinculación entre ajustes salariales e incrementos del costo de vida. Al mismo tiempo, se tomaron una serie de medidas respecto del capital extranjero, en diciembre de 1958 se aprobó una ley de inversiones extranjeras que les daba el mismo trato que a las nacionales, se firmaron contratos petroleros, al tiempo que se tomaban créditos para reconstruir las reservas del Banco Central. La entrada de capital extranjero estuvo vinculada al financiamiento de la importación de bienes de capital y de fondos líquidos de corto plazo. Al mismo tiempo, dado que las exportaciones fueron muy bajas, durante todo el gobierno de Frondizi la balanza comercial sufrió un profundo déficit. Ver: Ferrer, 1980: 240-243.

⁵³ Con la dictadura se abre un nuevo comportamiento en relación con la deuda pública y del sector privado: “*el crecimiento inédito de la deuda pública, acompañado de un profundo proceso de desindustrialización se acrecentó al calor de la deuda de los sectores privados, llegando a finales de 1982 a un monto de 43 millones de dólares*” (Palermo, 2010: 162). En este período el sector privado también comenzaría a endeudarse, y las inversiones empresariales se volcaron, ante todo, a la inversión financiera y no industrial, a partir del lo cual el Estado ejercía el rol estratégico en el impulso por realizar dichas inversiones, valorizando el carácter financiero

Por tanto, se construye un programa de gobierno atravesado por la afirmación de una fobia, ante todo al llamado “Estado patrón⁵⁴”; lo cual se pone en acto, por un lado mediante un voraz uso de la violencia/opresión, como modalidad de gobierno ejercido en torno del “uso del poder de la espada, que permite dar muerte” a los cuerpos y los sujetos en desacuerdo, en conflicto y sin comunión con un proyecto de “orden”, que impidió el pleno ejercicio de las libertades.

Mientras que por otro lado, observamos cómo el principio de subsidiariedad del Estado, el cual nos remite tanto a la colonización que el neoliberalismo realiza en los ensamblajes de la DSIC⁵⁵, así como a la re-edición que de ello se ejerce en el programa de gobierno desarrollista de los 60’, fue interpretado y concertado por el Ministro de economía del gobierno de facto (1976-1983) Alfredo Martínez de Hoz, quien en su programa gubernamental lanzado el 2 de abril de 1976 señalaba que el Estado argentino debía redefinir sus funciones y adoptar una función “subsidiaria”:

El Estado establece el marco de reglas generales y objetivos dentro de las cuales los sectores privados deben desarrollar su acción y sólo interviene en subsidio o complementariamente cuando individuos, empresas o asociaciones intermedias se encuentran incapacitados de actuar. O sea que el Estado no “hace” sino que “hace hacer” proveyendo los estímulos o las normas requeridas por la acción privada... (Martínez de Hoz, 1991: 25-26, en Murillo, 2011: 100).

de la economía empresaria nacional, esto llevó a la toma de créditos y al endeudamiento sistemático lo cual desencadenó un aumento en la tasa de interés interna, por encima de la internacional, transformando el mercado interno de acumulación de capitales, promoviendo y consolidando los marcos para la fuga de capitales y la famosa “estatización de la deuda privada”, en 1981. Para esto, las empresas estatales fueron importantes tomadoras de créditos, como fue el caso de YPF, la cual se convirtió a finales de la dictadura militar en una de las empresas más endeudadas. Ver: Palermo, 2010...op...cit.

⁵⁴ El “Estado Patrón” (Palermo, 2010), nos remite en sus comienzos hacia 1943, con una marcada radicalización en torno del primer gobierno de Perón en 1945 y remite a un Estado centralista, ante lo cual se promulga y programa un Estado abierto, eficiente y competente.

⁵⁵ La Doctrina Social de la Iglesia está expresada en diversos documentos como la encíclica *Rerum Novarum de 1891, o la del Quadragésimo Anno* de 1931; la misma ponía énfasis en la “libertad individual” y, a partir de ella se hacía cuestión de la libertad en materia económica, sobre todo en relación con la propiedad, la productividad y el trabajo. En cuanto al Estado, se proponía que éste lograra una administración propicia para que de ella “brotara espontáneamente” la prosperidad, tanto de la sociedad, como de los individuos” (*Rerum Novarum*: 11, en Murillo, 2011: 99), de este modo, la espontaneidad es el paso inicial al límite de intervención estatal: “...El Estado debe ofrecer sólo un marco para poner a salvo la común utilidad de todos, pero es contrario al derecho natural que el Estado grave con impuestos excesivos la propiedad privada ya que ésta es un derecho natural del hombre y el “hombre es anterior al Estado” (*Quadragésimo Anno*, en Murillo 2011: 99). Estas consideraciones en torno del Estado sostienen el advenir del principio de subsidiariedad del mismo, a partir de lo cual la sociedad civil cobra un rol preponderante. De aquí se desprende una de las ideas centrales del neoliberalismo contemporáneo, en torno de la cual el Estado debe abstenerse en la regulación de acciones privadas, posibilitando al máximo el uso de los derechos individuales de autodeterminación. Cabe consignar, que no todas las herencias estatales atravesadas de la DSIC remiten a este carácter subsidiario del estado, tal es el caso de la constitución peronista de 1949 la cual en gran parte inspirada en la misma ponía el acento en la labor del Estado en la planificación social y económica y en los derechos de los trabajadores.

En igual tonalidad programática se extendía la crítica acérrima al Estado que pusiera el eje en la gestión de empresas estatales, bajo las premisas de la “ineficiencia y el carácter deficitario”:

¿El fin del Estado patrón? Al parecer, el proceso de privatización de empresas que se encuentran en poder del Estado será encarado con toda energía. En una primera etapa 30 de ellas pasaran a manos privadas. La idea es que el país no tenga cargas inútiles que drenen los presupuestos (Título del diario Somos, sección economía, 1/4/1977, en: Palermo, 2010: 168).

Este proceso se reforzaba con un ensamblaje de prácticas dirigidas al disciplinamiento de la mano de la represión y el terror en diferentes suelos, como el de las “fábricas”, a partir de lo cual acontece la reconversión productiva en relación, ante todo, con algunos sectores históricos de lucha organizada, como es el caso de los cordones industriales de Córdoba, Rosario y Bs. As.: *“La desaparición de activistas y militantes sindicales, políticos y sociales, comisiones internas y cuerpos de delegados, la desarticulación e ilegalización de las organizaciones sindicales, instauraron el acallamiento de las acciones de resistencia* (Palermo, 2010: 163). Estas prácticas y lógicas de gobierno de los sujetos encuentra una emergencia genealógica en la mutación acaecida a partir del nacimiento de los Estados territoriales, que gestaron la Razón de Estado⁵⁶ en los albores de la modernidad (Foucault, 2006). Razón de Estado que se desplegó sobre América Latina desde fines de siglo XV utilizando tanto la violencia directa sobre los cuerpos como la violencia simbólica, que obturó y reconfiguró las especificidades culturales de nuestros pueblos. Ahora bien, las prácticas de muerte ligadas a esa razón de Estado vinculada a la “invención de Europa” (Dussel, 2000, Castro Gómez, 2007), gestaron reflexiones que dieron a luz durante el siglo XVIII nuevas tecnologías de gobierno (Foucault, 2007), que se reflejan en los programas que configuran el rol del Estado argentino, en la época analizada:

⁵⁶ Siguiendo a Foucault (2007), en la historia de la gubernamentalidad, entre 1580 y 1650 desaparece un mundo enteramente finalista. Toma así forma, paralelamente, a la constitución de una nueva racionalidad científica, la necesidad de definir una nueva racionalidad política, que confiera al ejercicio de la soberanía una especie de suplemento de poder. Definir esto es tarea de la Razón de Estado, la cual surge a partir de la necesidad de encontrar un principio de compensación, que no sea exterior, sino interno a la propia razón de Estado. El Estado comienza a ser objeto de la práctica reflexiva del hombre occidental, y lo es a través de la problemática de la gubernamentalidad. También aparece la política como una determinada manera de plantear, de pensar, de programar la especificidad del gobierno en relación con el ejercicio de la soberanía y, “los políticos”, como aquellos que buscaran pensar, programar la especificidad del gobierno, en relación con el ejercicio de la soberanía (Foucault, 2006: 251). Así entra en juego, la opinión pública en tanto se debe poder manejar la opinión de la población/gente acerca de la manera de actuar y comportarse. Por tanto, el problema de la razón de estado es la riqueza del estado y no de la población, es la de mantener la potencia del estado. Para esto último se requiere un aparato diplomático-militar, para conservar las relaciones de fuerza entre los diferentes estados; y la policía, encargada de las políticas internas, vinculada sobre todo a la estadística. El desbloqueo de la Razón de Estado, que había quedado atrapada en torno de la discusión de la Soberanía, da paso al “liberalismo”, en el siglo XVIII.

... En ellas, la muerte y la amenaza de muerte desplegadas en la violencia directa de la Razón de Estado no desaparecieron sino que se ocultaron y ocultan tras la conformación del ideal de libertad individual, concepto que es un componente fundamental en el imaginario que sostiene a la gubernamentalidad liberal y neoliberal, definidas éstas de maneras diversas desde Rousseau hasta Menger, Inaudi, von Mises o Gary Becker. (Murillo, 2011: 93)

Por tanto, hemos podido observar, brevemente, cómo en Argentina desde mediados de los años 50' y los 70' se instala lo que dimos en llamar una racionalidad política de perfil marcadamente neoliberal opresora y violenta. Consideramos que la noción de gubernamentalidad, en el ejercicio individualizante y totalizante del gobierno de las poblaciones, tiene la riqueza de, por lo menos intentar articular líneas de fuerzas trazadas políticamente, mediante diferentes mecanismos de gobierno, entre los cuales encontramos al Estado, con los diversos procesos y prácticas de subjetivación. En esta clave de análisis, el Estado, adviene efecto de un conjunto de dispositivos, que, entre otros, ejerce el gobierno de los sujetos colectivos e individuales. (Foucault, 2007).

De este modo, en la Argentina de los 70', la muerte y la amenaza de muerte desplegadas por la violencia ejercida, en y desde el Estado, codificado de modo dictatorial, no dejaron de fomentar y posibilitar el ideal de la libertad individual, como uno de los sostenes fundamentales de la gubernamentalidad neoliberal.

2. La Bisagra: el programa de gobierno democrático (1983)

El programa de gobierno democrático instalado en 1983⁵⁷ reviste singularidad, en tanto trazó una bisagra, entre el modelo económico de perfil neoliberal durante los setena y su definitiva consolidación durante la década de los noventa.

De hecho, la economía fue el espacio de mayor conflicto y disputa para el ejercicio del gobierno que desde el programa de la Unión Cívica Radical instaló la llamada democracia a inicio de los 80'; los grandes grupos financieros nacionales e internacionales coordinaban el proceso productivo y financiero; la inflación era del 20%, la deuda externa superaba los 45 millones de dólares y la tasa de desocupación ascendía al 7%, como

⁵⁷ En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR) se adjudicó el 51.7% de los votos, contra el 40,1% de Ítalo Argentino Luder, convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotar a un peronista/justicialista. Sin embargo el PJ siguió manteniendo el gobierno en la mayoría de las provincias, ya que la UCR sólo ganó los gobiernos de siete de las veintitrés provincias. Esto quedó reflejado en el diagrama político del Senado, donde de los 46 miembros de la UCR solo conquistó 18 bancas, es decir, la minoría. Cabe recordar que en esta transición, en 1982, acontece el acto de oposición de la CGT, la Guerra de Malvinas y con ello la renuncia Galtieri, la nacionalización de deuda privada y la amnistía de la junta militar.

algunos de los efectos del gobierno ejercido durante la dictadura⁵⁸ (Campana, 2012).

En este movedizo tejido de relaciones de poder, con el quiebre que implicó el retorno a la democracia, el rol del Estado parecía reconfigurarse generando el marco para que el juego abierto, eficiente y verdadero del mercado siguiera siendo posible, lo cual se observa en el plan de privatización de varios sectores:

Las empresas del Estado, por otra parte, no son verdaderamente empresas porque trabajan sin idea de costos y no manejan sus precios. Se han acostumbrado a que sus egresos sean cubiertos en parte por tarifas y el resto por el tesoro Nacional que depende del Ministerio de economía (Terragno, 1987)⁵⁹.

Así como veremos en el apartado III del presente capítulo, en 1985 se da el lanzamiento del *Plan Houston*, dirigido a atraer capitales extranjeros y privados para la explotación del petróleo; mientras que el *Petroplan*, fue otro intento de privatización que abría distintas licitaciones para el ingreso de capitales extranjeros, pero sin éxito.

También, fueron parte del programa de gobierno instalado en 1983, como modo de modificar el abuso opresor del poder codificado en el Estado y su militarización, la reorganización y el papel específico de las Fuerzas Armadas como institución subordinada al poder civil, y en particular la figura del presidente como Comandante en Jefe. Ante todo, se propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la llamada “lucha antisubversiva” quedara en manos de la policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos⁶⁰. En este proceso, mientras que se inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa, se envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986⁶¹. Pocos

⁵⁸ Ante la inflación, en junio de 1985, se anuncia el famoso Plan Austral que incluía control en los precios de los productos y tarifas de los servicios público, congelamiento salarial y no emisión monetaria. En 1987 el gobierno dio fin a dicho plan debido a los efectos nocivos en torno de la desvalorización de la moneda, el aumento de la inflación y la emergencia de diversos conflictos sociales. Así y con el apoyo del FMI, en 1987 se lanzó el Plan Primavera como nuevo intento por frenar la inflación y congelar los salarios estatales. En 1989 se produjo una incontrolada subida de las tasas de interés, junto con el agotamiento de la reservas del Banco Central lo que impidió mantener el valor del Austral (moneda nacional, en esa época), lo cual se complementó con el llamado “golpe de mercado” por parte de los principales grupos económicos y con las enormes sequías, que afectaron las cosechas y la provisión de energía.

⁵⁹ Entrevista a Rodolfo Terragno Ministro de Obras y Servicios Públicos: “El Desafío de Terragno”, Revista Somos, 28-10-87, Pp.: 74-5; en: Palermo, 2010: 171.

⁶⁰ El juicio a los ex comandantes, la política de derechos humanos y el problema militar en sí mismo, no sólo son temas relacionados con las fuerzas en forma interna, sino también con los diversos levantamientos que tuvo que afrontar el gobierno democrático. Entre estos levantamientos, el 16 de abril de 1987 el Teniente Coronel Aldo Rico y un grupo que lo acompañaba conocidos como los “carapintadas”, se amotinaron en la Escuela de infantería de Campo de Mayo resistiendo la citación que la Justicia le hiciera al Mayor Ernesto Guillermo Barreiro. En Monte Caseros provincia de Corrientes, entre el 16 y la de enero de 1988 Aldo Rico volvió a sublevarse, repudiando la prolongación de su arresto por los hechos de Semana Santa. El copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento Todos por la Patria.

⁶¹ Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (basta el

días después se envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida⁶² Así, las tan conocidas leyes de Punto Final y Obediencia Debida dejaban al descubierto las relaciones estratégicas tejidas en tramas de violencia, presión y temor entre el advenido gobierno constitucional y los sectores de las Fuerzas Armadas –particularmente- el Ejército, para que se concluyera con la persecución a los diversos integrantes que participaron de la matanza y secuestros ejecutados durante el gobierno dictatorial.

También fue un anuncio y una decisión política la de democratizar los sindicatos, mediante el considerado “reordenamiento” de los mismos⁶³, que en su mayoría se encontraban en manos de sectores opositores al partido de gobierno vigente.

En este diagrama de relaciones de poder, las elecciones presidenciales llamadas para mayo de 1989 se llevaban adelante entre la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la remarcación de precios, la compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores, entre otras cuestiones que, en relación con el gobierno de la pobreza, analizaremos en el capítulo 2.

3- El programa de gobierno de perfil neoliberal, en la Argentina de 1989-2001

En la Argentina de 1989 se instala un programa de gobierno⁶⁴ articulado en torno de un proceso candente de profundas y radicales reformas, de las cuales la provincia de Salta fue precursora y muy buena alumna. Una de las medidas más relevantes fue la aplicación del Plan B.B (acorde a las siglas de Bunge & Born)⁶⁵ dirigido a la liberalización de economía, mediante la designación en el Ministerio de economía de Miguel Roig y de Mario Rapanelli al frente de dicho ministerio, ambos altos funcionarios del grupo Bunge & Born. Luego de dichas gestiones, así como las de Erman González llegaría al ministerio Domingo Cavallo (perteneciente a la fundación Mediterráneo) y con él el Plan de Convertibilidad, el cual junto con la reforma fiscal y la del Estado trazarían las tramas

23102/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en el seno de los sectores castrenses.

⁶² Promulgada el 8/6/87, que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban por encima del rango de brigadier, es decir, aquellos que habían impartido órdenes y que habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas. Hubo sólo una excepción: era el caso de los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.

⁶³ Para alcanzar ese objetivo, en febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical que permitía la creación de nuevas uniones gremiales. Durante este gobierno hubo 13 paros generales organizados por la CGT en defensa de los intereses sectoriales que representaba.

⁶⁴ La presidencia es ocupada por Carlos Menem y la vicepresidencia por Eduardo Duhalde.

⁶⁵ *Bunge & Born* es un grupo económico de Argentina que durante el siglo XX fue considerado como la corporación más poderosa e influyente del país. El grupo Bunge & Born tuvo su eje en la empresa de alimentos Molinos Río de la Plata y forma parte del holding Bunge International Ltd., con sede en Bermudas, una de las corporaciones más grande del mundo en comercialización de commodities, y en especial soja.

programáticas de una de las mayores transformaciones económicas y sociales de Argentina (Grondona, 2012: 372).

En el advenido peronismo-justicialista de la época de los 90', resulta evidente cómo las políticas macroeconómicas y sociales se ubicaron en las antípodas de cualquiera de las anteriores gestiones peronistas, a partir de lo cual comienza a ponerse en juego la reivindicación de una "peronismo verdadero" y otro de perfil "neoliberal", entre lo que daríamos en llamar la "tradición y la traición" (Grondona, 2012) respecto de la doctrina peronista⁶⁶, la cual se reconfigura en torno de la singular heterogeneidad del programa de gobierno de la época trabajada.

En los 90', en el ya conocido escrito publicitario *La Revolución Productiva* (1989)⁶⁷, en el cual se ponía de manifiesto la nominada "plataforma política" de la candidatura a presidente de Menem y vicepresidencia de Duhalde, se mostraban diferentes relecturas de la tradición peronista entre las cuales se referían al movimiento peronista, como un constante limitador de la acción privada, por lo cual el peronismo-justicialista de la época se postulaba al modo de partido. Hacemos la aclaración de que la relectura del peronismo se realiza utilizando y poniendo especial énfasis en algunos de los entramados enunciativos concretos de la doctrina, sobre todo, mediante la recuperación de la voz del propio Perón.

Re-tomando lo sugerido en el panfleto de campaña, si bien el "rol del Estado" era entendido como un auténtico mediador entre los intereses particulares y los intereses generales (1989: 65), un aspecto particularmente afín con la racionalidad gubernamental neoliberal trabajada y sus herencias en América Latina es la del ya mencionado "principio de subsidiariedad del Estado". En torno de dicho proceso, en los 90' se sostiene que el país entraría en la concreción de la Revolución Productiva, cuya filosofía se traduce en un proyecto de carácter esencialmente "*nacional, social, popular y cristiano*", cuyo objetivo es servir a la comunidad como a un todo, y al hombre no sólo como sujeto

⁶⁶ La Carta Orgánica Nacional es el documento fundacional del peronismo, en la cual se expresa que este queda organizado como "movimiento de la revolución nacional" puesto al servicio de la patria, del régimen republicano de gobierno y de la justicia social. Este cuerpo de saberes y enseñanzas luego se transforma en la Doctrina Nacional, en 1952, específicamente en el art. 3 de la ley 14.184: "*Defínase como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la Doctrina Peronista o Justicialista que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad*" (Poderti, 2010: 68).

⁶⁷ Nos referimos al conocido "Documento de campaña", autoría de: Carlos Menem y Eduardo Duhalde, 1989, *La Revolución Productiva, de la Argentina especuladora a la Argentina del trabajo*. Peña Lillo Editores, Argentina.

natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también: “...como persona moral, intelectual y espiritual” (1989).

En tal sentido, la propuesta de gobierno y sus programas políticos específicos, a su vez, se enuncian haciendo hincapié en una mirada de la sociedad singular, en tanto se rechazaba el crudo capitalismo liberal, así como el opresor capitalismo estatal, a partir de lo cual se proclamaron luego las reformas, dirigidas a una: “*Reconversión industrial y la reforma de todo un sistema económico que se muestra exhausto e insuficiente para dar respuestas acabadas a los problemas actuales*” (1989: 65). Esto iba de la mano con lo ya iniciado en el gobierno de la UCR referido a la “modernización sindical”⁶⁸.

En el documento trabajado, “Revolución productiva” (1989), encontramos evocaciones de algunas alocuciones de Perón en el *Congreso de la Productividad y el Bienestar* de 1955⁶⁹, las cuales fueron utilizadas como una invitación al empresariado a un proceso de transformación creadora y recreada de las industrias y empresas nacionales-estatales. Para esto también se re-toma la figura y la voz del propio Perón revalorizando las palabras por él emitidas en su libro *La Hora de los Pueblos* (1968), en la cual hacía referencia a los dichos de Ludwin Erhard y el milagro alemán⁷⁰:

El factor riqueza de un país depende tanto de su producción, transformación y distribución, como de su consumo, porque del equilibrio de estos cuatro factores depende realmente el equilibrio de toda la comunidad. Lo demás es solo trabajo. Cuando le pregunté al canciller Ludwin Erhard, de Alemania, sobre las causas del llamado “milagro Alemán” me contestó riendo Todo no ha sido sino trabajo. (Perón, 1968: 255).

⁶⁸ Dicha transformación de las relaciones y constituciones sindicales remitían a una modernización de las relaciones laborales, bien alejadas de las propuestas elaboradas por el gobierno peronista en su etapa fundacional. Esto era, una invitación a las reformas laborales atravesadas por la flexibilización y tercerización laboral, ante todo.

⁶⁹ El Congreso de Productividad de 1955 fue un intento fallido de Pacto Social que no pudo prosperar por dos razones: primero porque el gobierno popular fue derrocado por la contrarrevolución oligárquica seis meses después; y segundo, porque la dirección de la Confederación General del Trabajo no aceptó aumentar los ritmos de producción perdiendo las conquistas sociales tal como planteaba la representación empresaria.

⁷⁰ El canciller alemán Erhardt, en 1949 con la creación de la república Federal de Alemania se convierte en Ministro de Economía del gobierno de K. Adenauer, cargo que mantuvo hasta 1963, y se encuentra en el heterogéneo grupo de nombres recogidos por Foucault para referir al “ordoliberalismo alemán”. Ante la consideración de que no hay Estado y en que algunos miembros de la escuela austríaca - como Ludwig Erhardt - plantean públicamente la necesidad una fundación del Estado. Ahora bien señala Foucault, al fundar el Estado a partir de la institución económica, los argumentos del canciller alemán apuntaban a la necesidad de crear un espacio de libertad económica que sirviese como base para la construcción del Estado, con el fin de evitar la “recaída” de los alemanes en el autoritarismo al que estuvieron acostumbrados por tanto tiempo. Reorganizar primero la económica y luego, sobre esa base crear el Estado (Foucault, 2007: 105). A su vez, en el proyecto del “milagro alemán” agenciado por los ordoliberales van a converger las principales fuerzas políticas del país: por un lado la socialdemocracia que se separa de sus orígenes marxistas para hablar de “socialismo y competencia” y, por otro la “democracia cristiana” que se separa de sus orígenes antisocialistas para empezar a hablar de una “economía social cristiana” (Foucault, 2007: 111-112). Cabe señalar que las referencias antes realizadas, de ningún modo pretenden sugerir que el peronismo y/o la figura de Perón “fueran” neoliberales o totalitarios (nazis, fascistas), sino de traer a las memorias de los trazos genealógicos algunos entramados discursivos y encuentros referenciales, que hicieron al proceso de configuración del Estado en la época peronista.

Dicha cita pone el centro en el trabajo, la productividad y multiplicación de las riquezas verdaderas, lo cual nos convida a reflexionar en torno del modo a partir del cual los tramos enunciativos y prácticas de gobierno puestos en juego en los 90´ revitalizan las discusiones neoliberales, que luego de la crisis del 30´ recuperan la cuestión de “el trabajo” como eje de reflexión y gobierno. Acorde a los saberes de la economía política y la economía social de mercado alemana, el trabajo por sí mismo generaría riqueza, por lo cual el valor del trabajo es la riqueza en términos de verdad. Estas consideraciones en torno del trabajo son reconfiguradas por el neoliberalismo del siglo XX, cuando el mismo ya no es pensado en torno de la cantidad (de horas, de fuerzas, etc.), sino según las cualidades consideradas flujos de intensidad variable, en correlato con el tipo de ingreso, sinónimo de renta.

Por tanto, en los albores del neoliberalismo, que colonizaba la Argentina de ésta época, se considera que si todos tenemos capitales, entonces ya no hay diferencias entre capitalistas y no capitalistas, ya no hay que discutir en términos de “lucha de clases” (Marx), pero tampoco de *laissez faire* acorde a un mercado natural de intercambios (liberalismo S. XIX); sino a partir del supuesto de que todo somos hombres empresas capaces de gestionar los capitales, internalizando la competencia en un juego infinito entre desigualdades. El rol del Estado, entonces, resulta de la regulación y promoción de este libre juego e inversiones desiguales, que paradójicamente, nos hace a todos iguales en clave de equidad y emprendedurismo-empoderado de la propia existencia. Por tanto, apostar al trabajo cuyo salario es “ingreso y renta”, tiene como efecto un Estado que no se plantea advenir “frugal”, sino gobernar para el libre e infinito juego, verdadero, de las desigualdades y competencias que el mercado dispone sean posibles, reales y efectivas.

Por otro lado, aunque en estrecha relación observamos cómo se recupera la propuesta peronista de vincular el aumento del salario a un mejor rendimiento de la economía, aunque en un diferente contexto de distribución de la riqueza, recordando, cómo el peronismo pretendía y ejercía un gobierno político de la economía y no un gobierno económico de la economía y la política.⁷¹

⁷¹ Para realizar tales afirmaciones nos guiamos por la propuesta de Grondona (2012) en torno de la racionalidad política que da en llamar “neocorporativista” y la intervención en la economía, como adecuación de Stocks desde 1944. La autora señala que esta última se desplegaría en la conformación del sistema que vinculaba el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI 1946) a los bancos nacionales y a los sistemas de crédito: “El sistema de “ordenamiento de stocks” y reasignación de la renta extraordinaria que garantizaba la “plena ocupación” y salarios altos (como condición de acuerdo neocorporativo), dependía de la producción agraria, en manos de actores que no participaban del sistema de consenso. En este sentido, la acción sobre la economía era inmediatamente política, cifrada en una voluntad construida a partir de los principales actores económicos”

Ahora bien, y como ya fue señalado, los diversos cruces singulares de las lógicas de gobierno peronistas-justicialistas y neoliberales contemporáneas, no pretenden realizar una determinación del pasado por el presente, ni un presagio de lo que vendrá a partir de lo diagramado, pues esto impediría identificar qué hay diferente y singular, en el hoy respecto del ayer; así como llevaría a perder de vista las diferentes prácticas de resistencia y lucha, que se desencadenaron entre y frente a las prácticas y lógicas de gobierno dispuestas en la época de los 90’.

3-1 Prácticas de gobiernos al modo de Re-formas: entre tradiciones, radicalizaciones y privatizaciones

El gobierno de Estado ejercido entre 1989 y 1999 en Argentina, se trazó en el entramado y las formas dadas por una lógica de acatamiento y aplicación, de las políticas neoliberales hegemónicas dispuestas por los países potencias. Este proceso de reformas inspiradas en el Consenso de Washington, (Murillo 2008, Falappa y Andrenacci, 2009)⁷², en sus dos versiones, promovió la precarización laboral, la flexibilización laboral, la contracción salarial y la privatización de los recursos estratégicos en un contexto de creciente desregulación y liberalización económica.

Esto se puso en marcha en 1989 con las *Leyes de Emergencia Administrativa y Reforma de Estado* (23.696) y la *Ley de Emergencia Económica* (23.697). La primera dejó trazado el marco para la privatización de una gran cantidad de empresas públicas, mediante la declaración de emergencia:

(Grondona, 2012: 140). Ahora bien, dicha intervención resulta de la movilización de un antagonismo respecto de otros actores tales como la oligarquía, el capital extranjero, que quedan del lado de los “anti-patria”, de este modo la lógica combativa en torno de dicho antagonismo – patria, anti-patria- legitima al neocorporativismo, mientras establece los límites del “espacio común” de la nación, la cual: “*como toda comunidad, la ‘organizada’, operaria a partir de una exclusión*” (Grondona 2012: 141).

⁷² El Consenso de Washington, firmado en 1989 por el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro de los EE.UU, consta de una serie de recomendaciones políticas macroeconómicas para países en desarrollo (Murillo, 2008, Campana, 2012). En su primera etapa, instó “transformaciones políticas” dirigidas a la desregulación del Estado y liberalización de la economía, ante todo. Esto, se llevó a cabo, en AMLC, mediante procesos de privatización, ajuste fiscal, flexibilización de las relaciones entre capital y trabajo, apertura de mercados, enajenación de los servicios públicos y de los recursos naturales y energéticos, entre otras cuestiones y características, que llevaron a una restructuración de la sociedad y a reformas de Estado. Estas medidas de ajuste y des-centralización generaron varias consecuencias, ante todo, un enorme crecimiento de la pobreza. A partir de las consecuencias señaladas, y de diferentes levantamientos sociales (como el Zapatismo), fue elaborada una segunda versión del CW a mediados de los 90’, según la cual se trataba de reformas orientadas a “transformaciones institucionales” (estatales y sociales), asociadas al buen gobierno, la democracia participativa y el control de la gestión, sobre todo con una fuerte impronta dirigida al “gobierno de sí”, según lógicas antes trabajadas. Así, se instala, según palabras del Banco Mundial, en los 90’ un “nuevo pacto social”, acorde al paradigma de la “integración mundial” y un nuevo rol del Estado (Murillo, 2008: 63). Esto remite, a lo que el Banco Mundial llama “Triálogo”, pues el pacto social y el buen gobierno serán desarrollados en un vínculo estratégico, que facilite la integración entre los organismos internacionales, la sociedad civil y el Estado, bajo la coordinación del mercado.

...Declárese en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias. (Art. 1)

Para ello, entre otras medidas específicas, se autorizó al poder ejecutivo nacional, provincial y otras entidades públicas a la Intervención (Art. 2) para la “reorganización provisional” (Art.3) de las empresas, entes, o sociedad intervenida en su advenir de “sujetos/sujetas a privatización” (Art. 10, 11. 12). Puesto que, en dicha época aconteció la privatización de YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, entre otros espacios nacionales estratégicos de producción, industrialización y empleo.

Lo antedicho también se impulsó a partir de la tercerización y precarización laboral, el desarrollo de una estructura impositiva favorable al capital (con disminución de aportes patronales), mayor liberalización financiera y altas tasas de intereses, así como una apertura comercial con disminución arancelaria, mientras se protegía a ciertos sectores del capital concentrado (como el automotriz).

Entre algunos de los mecanismos propuestos por la ley de Emergencia Administrativa y Reforma de Estado se encuentra la de la “intervención”, a partir de la cual se dispone del ejercicio pleno del “poder de policía” por parte del Estado (Art. 4),⁷³ lo cual es reforzado en el Art. 1 de la Ley de Emergencia Económica, mediante la puesta en ejercicio de: “...el poder de policía de emergencia del Estado, con el fin de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padece...”. Mientras que dichas disposiciones repercutían en la suspensión de subsidios y subvenciones, suspensión de los gastos administrativos públicos, la venta de bienes raíces, la autonomía del Bco. Central a fin de preservar el valor de la moneda y evitar financiamientos directos o indirectos por parte de Estado nacional y/o provincial.

Sumado a esto se autorizó la contratación, con el sector privado, de la prestación de servicios administrativos consultivos, para controlar lo perteneciente a todos los entes y

⁷³ Se le otorga al: “...Ministro la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresarial o administrativa de que se trate, pudiendo a tal fin disponer y realizar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso solicitando el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en los lugares donde se ejercite tal actividad empresarial o administrativa”. (Art. 4)

organismos de la Administración centralizada: “...a los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia” (Art. 60. Ley 23.696)

En esta sintonía, en 1991 el Congreso aprueba la *Ley de convertibilidad*, centrada en la paridad peso-dólar, lo cual llevó a endeudamientos profundos (públicos y privados, fuga de capitales), ya que: “...poseía cualidades que lo hacían intrínsecamente deuda-dependiente debido a que precisa de divisa para mantener la paridad 1 peso- 1 dólar del tipo de cambio fijo por ley” (Varesi, 2010a: 59). Si bien, dicha ley trajo consigo cierta estabilidad, su contrapartida fue la caída de los salarios reales, que recuperados del proceso inflacionario anterior, comenzaron a la descender bruscamente, así como, la disminución del índice de pobreza fue un reflejo de la baja de la inflación, acompañada por un leve crecimiento del PBI y no una consecuencia de cierta distribución racional de la riqueza y el ingreso. Siguiendo a Dobaño y Lewkowicz (2005), el crecimiento de las exportaciones estuvo centrado en sectores de uso intensivo de los recursos naturales y la brecha salarial ante mano de obra calificada y no calificada creció notablemente. En tal sentido, como señala Grassi (2003), en los 90´ no solo se estabilizaron los precios, también se profundizó la desigual distribución del ingreso, empeorando las condiciones de empleo lo cual llevó a la desestabilización de los índices de pobreza.

En el caso puntual de la reforma laboral y el mercado de trabajo, el proceso de modernización señalado llevó a la transformación nominada “flexibilización laboral”. La transformación en el campo de trabajo supuso la movilización de dinámicas asociadas al peronismo y a ciertas formas, recreadas, del diálogo tripartito, en torno de las prácticas sindicales. Identificando junto con Etchemendy y Palermo (1998) que hubo dos etapas en el proceso de reformas, la primera marcada por la obstrucción del parlamento (1989-1994) y la segunda fundada en el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social” (25-07-1994).

Asimismo, la ley 24.013⁷⁴ es el enclave normativo que instala el proceso de reforma el mercado de trabajo en Argentina. Entre algunas cuestiones reguladas por la presente ley se encuentran a necesidad de relativizar las supuestas condiciones de “rigidez”, que

⁷⁴ La presente ley se complementa con la N° 24.465 de 1995, a partir de la cual se creaba el período de prueba de tres meses, ampliable a seis, mediante convenio colectivo, en el que el empleador estaba eximido de cualquier forma de indemnización, así como de la realización de aportes. También esta ley configuraba el “contrato de aprendizaje” para jóvenes entre 14 y 25 años, que no quedaban comprendidos en una relación laboral protegida por las instituciones de seguridad social, aunque sí eran protegidos frente a riesgos de trabajo. Le siguió la ley 24.467, 1995, que fomentaba las pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso de estas a nuevas modalidades temporarias. Y la ley N° 25.013 de 1998 que derogaba algunas de las modalidades creadas por la ley de 1991.

habían dado origen a las desregulaciones laborales, por eso apuntaban a flexibilizar, por ej., se contempla el despido sin causa justificada, sin mediación de trámite administrativo y solo a cambio de la indemnización. Ahora bien, en lo referente al gobierno de las poblaciones desempleadas o subempleadas la presente ley otorgaba las facilidades para la regulación de trabajadores en negro, la introducción de nuevas modalidades temporarias de contratación, la creación de instituciones de protección del desempleo (el seguro y los programas de emergencia económica) y una red de oficinas de empleo.

En este marco programático de gobierno del empleo, mediante la flexibilización laboral dispuesta, la estrategia para gobernar el “desempleo”, lo cual será profundizado en el capítulo 2, se configura en torno a: “...*el discurso de reducir la población desempleada y eliminar segmentaciones injustas, fue mediante la flexibilización de la “entrada” al mercado de trabajo*” (Grondona, 2012: 379).

Por tanto, las reformas programáticas y los mecanismos de gobierno puestos en juego para ejercer el gobierno de las poblaciones y los territorios, fueron posibles, siguiendo a Álvarez Leguizamón (2005, 2008) en un proceso creciente de reprimarización económica y remercantilización social, cuyos efectos conllevaron a un crecimiento de la deuda pública y privada, así como a un aumento desmedido de los sectores poblacionales “dejados a la muerte”, en sus comunidades locales. Esto es, mediante la profundización de políticas públicas” de “desarrollo social” y el fortalecimiento de la sociedad civil, con un rostro descentralizado y focalizado, como analizaremos en el capítulo 2.

Por tanto, las transformaciones propuestas y realizadas re-configuran el rol del Estado, ante todo, mediante un proceso de des-centralización de los espacios y ejercicios instituidos de gobierno. Esta re-codificación de las prácticas de gobierno en los 90’, no implica una lectura del mismo a partir de su “retirada, desguace y desaparición” acorde a lecturas funcionalistas y normativas, en torno del ejercicio del gobierno. El proceso de “descentralización” del rol del Estado, puede ser analizado como un proceso de re-configuración del mismo y extensión del gobierno a sectores, como la sociedad civil, los municipios, las ONG, etc. Mientras tanto eran contruidos diversos mecanismos de gobierno dirigidos a ejercitar prácticas represivas, ante todo sobre las organizaciones que se constituían resistiendo a las dispositivos impuestas; lo cual se complementa con una creciente política de racionalización de los trabajadores, sobre todo en las empresas tendientes a privatización, entre las cuales el caso de la privatización de YPF resulta uno de los más claros y crueles de los ejemplos (Palermo, 2010: 165-66)

Por tanto, la explícita “fobia” emitida hacia el Estado desde 1976 que cobra las singularidades antedichas a partir de los 90’, implicaría una metamorfosis del mismo (Bonnet, 2008), en torno de sus funciones, prácticas y lógicas. De hecho, las privatizaciones conllevaron a un renovada manera de poner en juego diversos mecanismos de intervención y conducción de las acciones de los sujetos advenidos gobernables, mediante la introducción de una profunda reconversión del modo de ejercer el gobierno económico de las poblaciones en una reafirmación del mercado como espacio de veridicción y gestión de las libertades, siempre desiguales y competentes competitivas.

3.2-El caso de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

En el presente apartado, nos detenemos en una breve reconstrucción de la instalación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y los avatares de su privatización, por considerar que dicha práctica de gobierno nos permite analizar y comprender la emergencia de diversas experiencias de resistencia y lucha, en el advenir de los trabajadores en pobres y piqueteros; así como nos aproxima a una analítica de los diferentes programas de gobierno dirigidos a gobernar a estas poblaciones advenidas desocupadas y pobres, según analizaremos en el capítulo 2.

En 1887 se promueve la Ley de Minería, que en su artículo noveno prohibía al Estado intervenir en las explotaciones mineras, incluyendo, a los hidrocarburos. Recién en 1935 se dictamina la ley 12.161 mediante la cual se habilita al Estado nacional y provinciales a intervenir directamente en la exploración y exportación de hidrocarburos. En medio de este lapso temporal, varias fueron las intervenciones estatales en torno de la producción petrolera y gasífera, entre las más importantes rescatamos la creación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1922.

Como antecedentes encontramos en diciembre de 1910 la creación de la Dirección de Exploración de Petróleo de Comodoro Rivadavia, para explorar y explotar los yacimientos que habían sido descubiertos en 1907. En efecto los programas de gobierno de la época bajo la presidencia de Irigoyen y Marcelo T. de Alvear continuaron profundizando la acción del Estado dentro de la actividad petrolera, aunque en sus primeros años mantuvieron la idea de la necesidad de la coexistencia entre la explotación estatal privada. Así el 3 de junio de 1922 se crea YPF, que bajo la dirección del Gral. Enrique Mosconi desde 1922 (bajo la presidencia de Alvear) hasta el golpe de estado - de Uriburu - en 1930 se despliega como la empresa más importante del siglo veinte en

nuestro país. Mientras que el Gral. Enrique Mosconi promovió, en sus inicios, una intervención mixta de capitales en el ejercicio de YPF, y luego propugnó el monopolio estatal en toda la cadena productiva del petróleo (Mosconi, 1985).

Con la llegada del programa de gobierno peronista en 1946, YPF fue dirigida por el Gral. Albariños. En los primeros años se dieron diferentes disputas sindicales entre el recién creado Sindicato Unido de Petroleros (SUPE) cercano al gobierno peronista pero altamente combativo en la lucha por mejoras laborales y dentro del cual había pujas dirigenciales. YPF venía en crisis a partir de la descapitalización producida por la segunda guerra mundial, en tanto la empresa realizó enormes esfuerzos por abastecer casi en soledad al mercado interno de naftas, por lo cual se encontraba desgastada productivamente, así como su maquinaria quedó casi obsoleta por ausencia de repuestos y desactualización tecnológica (Gadano, 2006). Luego, Canessa con un perfil nacionalista de gobierno asume la dirección de YPF, continuando con el programa propuesto por Mosconi. Sin embargo, en el seno del gobierno peronista había diversas líneas de perfil más “pragmático” que planteaban una asociación relativa con capitales extranjeros, que permitieran la recapitalización de la empresa y la ampliación de los yacimientos petrolíferos y gasíferos, así como la comercialización de combustibles (Wahren, 2011).

Fue en la segunda presidencia de Perón cuando se realizan convenios con empresas petroleras norteamericanas, ante todo con la California Argentina de Petróleo S.A subsidiaria de *Standard Oil* de California⁷⁵, con enormes disidencias dentro del peronismo así como fuertes críticas por parte de la oposición (entre las que se encuentra la de Frondizi, en su libro *Petróleo y Política*, (1955). Dichos contratos petroleros fueron rechazados y denegados en el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955, lo cual no oculta la disposición de la “Revolución Libertadora” para con las posiciones

⁷⁵ La *Standard Oil*, empresa norteamericana, a inicios de siglo veinte (entre 1911 y 1916), realiza varias solicitudes de cateos y exploraciones con el objetivo de expandir su explotación petrolífera, ante todo en los yacimientos salteños, considerando que la empresa ya realiza tareas de explotación en la región de Tarija al sur boliviano, lindante a Salta. Este permiso fue otorgado por el gobierno de A. Cornejo quien anuló el decreto que había creado la reserva petrolífera en la provincia de Salta y permitió los avances de la empresa estadounidense. Esto tuvo un freno particular con la asunción de A. Güemes en 1992 (UCR) en igual período en que asumía Mosconi la dirección de YPF, ante todo bajo la defensa de los recursos naturales, especialmente el petróleo. Sin embargo, la *Standard Oil* continuó con sus solicitudes obteniendo permisos diversos a lo largo de la historia salteña, en 1932 la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo en el conflicto que se había generado entre *Standard Oil* e YPF, en torno de las explotaciones y exploraciones en la provincia de Salta, resolviendo el conflicto a favor de la empresa norteamericana, bajo dictámenes estrictamente normativos y jurídicos se denegaron las acusaciones de corrupción emitidas hacia dicha empresa. En su libro *El Petróleo en el Norte* (1928) Mosconi señalaba: “*La Standard Oil ha puesto en práctica su ya famoso catecismo de acción: la penetración sonriente, la consolidación cuidadosa y la imposición insolente*” (citado en: Mayo, Andino y García Molina, 1983). Wahren, 2009, 2011...op...cit; Pañuelos en Rebeldía, 2006...op...cit; Mosconi, 1957...op...cit.

asociacionistas y mixtas en torno del capital extranjero, la inversión y extranjerización de los recursos hidrocarburíferos.

Unos años más tarde, el programa de gobierno desarrollista continuó con la programática gubernamental en torno del petróleo y el gas, la cual se manifestó divergente con lo propuesto en el libro referido al *Petróleo y la Política* del entonces presidente Frondizi, en el cual postulaba la necesidad de una monopolización estatal de toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos. De hecho, en los albores del programa desarrollista se realizaron diversos contratos con petroleras multinacionales a modo de propiciar la inversión extranjera, en el marco del proyecto de modernización y crecimiento.

Algunos de estos contratos fueron anulados en 1964, por el gobierno bajo la presidencia de Illia quien orientó el ejercicio de gobierno en torno de los hidrocarburos a partir de una racionalidad política de perfil, moderadamente nacionalista. Luego de su derrocamiento, en 1966, las diversas dictaduras militares de la llamada “Revolución Argentina” reabrieron las apuestas a las inversiones extranjeras, principalmente a empresas como *Pan American* y *Cities Service*, autorizando a diferentes empresas multinacionales para que realicen prácticas de exploración y explotación de nuevos yacimientos. Sin embargo, en todo este período de idas y venidas, YPF se mantuvo como la principal productora de gas y petróleo en el país, así como la primera empresa del Estado con mayor volumen de productividad, lo cual permitió una consolidación territorial y laboral de la empresa en las diferentes regiones en las cuales operaba (Wahren, 2011; Pañuelos en rebeldía, 2006).

Así, durante el tercer período del programa de gobierno peronista entre 1973 y 1976 se hicieron varios intentos de restablecer políticas programáticas de perfil nacionalista. Tal es el caso del otorgamiento del monopolio de la comercialización de los derivados del Petróleo a YPF, lo cual no pudo ser llevado adelante por la empresa, ya que carecía de la infraestructura pertinente, tras lo que se continuó con la importación de combustible, lo que pretendía realizarse mediante la “soberanía petrolera” propuesta por el peronismo.

Por tanto, hasta 1976 con el retorno de la dictadura militar, YPF realizaba todo el proceso productivo del petróleo, controlaba tanto la unidad de negocio llamada *upstream* (exploración, desarrollo y producción petrolera) como el *downstream* (transporte, refinancian de petróleo, distribución y comercialización). Ya sea por administración directa, alrededor del 70% de la producción petrolera y cerca de un 30% mediante

celebración de contratos con el sector privado, la empresa estatal controlaba el 100% de la producción petrolera argentina (Palermo, 2010).

Como ha sido indicado en la época de los 70', comienzan los procesos de "privatización" de las empresas estatales. Ante todo, las llamadas "privatizaciones periféricas"⁷⁶, las cuales fueron técnicas de gobierno que orientaron el control de algunas de las actividades que realizaba YPF otorgando poder del sector privado. También en esta época comienza un proceso e importante racionalización de trabajadores, en 1975 la planta de YPF era de 50.555 agentes, mientras que para 1983 era de 32.772.

En 1985, en el ejercicio democrático-constitucional de gobierno ya explicitado, se anuncia en Texas el lanzamiento del *Plan Houston*, dirigido a atraer capitales extranjeros y privados para la explotación del petróleo. El *Petroplan*, fue otro intento de privatización que abría distintas licitaciones de capital privado, el cual fracasó por la fuerte oposición de algunos sectores de la misma UCR y del partido Peronista-justicialista, ante todo. Surgen en estas épocas las primeras declaraciones públicas dirigidas a la "necesidad y posibilidad" de vender YPF, ante todo bajo el argumento del déficit del Estado, que no podría hacerse cargo de la empresa. También, en esta línea se argumentaba la ineficiencia de la petrolera estatal, según Palermo (2010), eran adjetivaciones comunes las de "obsoleta, rústica, estática, mala, torpe, un servicio lleno de desperdicios", entre otras cuestiones.

Ahora bien, lo que realmente se ponía en cuestión, interpelando los saberes, haceres y decires de las prácticas gubernamentales y políticas era el rol del Estado y el proceso de su transformación hacia un gobierno ejercido "para" el mercado. En tal sentido, a partir de las transformaciones antedichas, los discursos en torno del petróleo, que desde sus inicios con la llegada del Gral. Mosconi a YPF lo valorizaban como un "recurso estratégico", pues conducía, según lógicas nacionalistas, hacía la independencia, la soberanía y el crecimiento interno, resulta reconfigurado a partir de la puesta en juego de la herencia de lógicas molares de desarrollo. Ante todo, haciendo del uso del recurso un camino hacia la modernización, el desarrollo y el crecimiento económico, no ya por su

⁷⁶Dichas privatizaciones periféricas, que también se aplicaron a empresas de los considerados bienes "no estratégicos", fueron llevadas adelante mediante un conjunto de decretos emitidos por la Junta Militar, a través de los cuales se realizaban adjudicaciones directas de importantes yacimientos en explotación a empresas privadas como *Bridas*, *Pérez Companc* y *Techint*. Estas adjudicaciones se situaron en eslabones periféricos de la producción como perforación, terminación y reparación de pozos. Estos servicios los pagaba YPF a precios muy superiores a los costos que, por igual tarea, realizaba la empresa estatal. Ver: Palermo, 2010: 173.

valor-recurso estratégico, si no por su valor-bien de cambio, que aceleraría el proceso de efficientismo de gobierno económico de las poblaciones y los territorios.

Así, en la embestida del programa de gobierno instalado en 1989 de perfil neoliberal se realizan diferentes disposiciones programáticas y normativas que habilitan la definitiva privatización de YPF. Ante todo, mediante un conjunto de decretos⁷⁷ se transformó la política que otorgaba al petróleo el lugar de recurso estratégico, incentivando la libre disponibilidad y la libre exportación del mismo, limitando, ante todo, la regulación que tenía YPF en torno del petróleo y el gas y se le otorgó a empresas privadas libres de acción y decisión (Palermo, 2010; Wahren, 2011).

Entre los diferentes decretos señalados, finalmente se firma el 2.778 el 31 de diciembre de 1990⁷⁸ como la piedra fundacional de la privatización de YPF. El mismo se llamó “Plan de Transformación Global” y disponía, entre otras cuestiones, la transformación de YPF Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima (S.A), abriendo la posibilidad de la venta accionaria de la empresa. Cabe mencionar que entre los integrantes del equipo de creación de dicho decreto se encontraba el ingeniero José Estenssoro⁷⁹, a quien mediante decreto 1604/90 se lo designa interventor de YPF. Dichos considerandos, resultan fundamentales para comprender, analíticamente, el proceso de re-nacionalización de YPF

⁷⁷ Algunos de los decretos firmados antes de la total privatización de YPF fueron: el N°1055 de 1989, declarando la prioritaria necesidad de promoción, desarrollo y ejecución de planes destinados a incrementar la producción nacional de hidrocarburos líquidos y gaseosos; el decreto N° 1212 de noviembre de 1989, en el cual se disponía la eliminación de cuotas del crudo, las políticas de presiones, la desregulación de refinerías y bocas de expendio, ante todo la desregulación privilegiaba los mecanismos de mercado para la fijación de precios, cantidades, valores de transferencia, etc. (Art. 1); el decreto N° 1216 de junio de 1990, en el cual se llamaba a concurso público internacional para seleccionar empresas que se asociaran con YPF en la explotación de diferentes áreas, ante todo se refería a Mendoza, Chubut, Neuquén y Río Negro; el decreto N° 1589 de diciembre de 1989, dirigido a la libre disponibilidad de los productores del petróleo crudo, gas natural y/o gases licuados, lo cual tenía el antecedente del decreto N° 1212. Ver: Palermo, 2010: 175-178. Dichos decretos se construyeron entre intensas y diversas reuniones. Para octubre de dicho año ya existía un borrador del decreto que permitía la apertura del sector petrolero, el cual comprendía la liberación progresiva de los precios y la desregulación de la importación y exportación de crudo y los productos derivados, medidas éstas a las cuales se oponían el gremio de trabajadores petroleros y diversos trabajadores ypefianos; la propuesta de gradualidad se definía mediante un primer período de acumulación del petróleo para disponibilidad y autoabastecimiento nacional/loca y posteriormente la total apertura, a lo cual se le sumaría la privatización del transporte y la comercialización, todos estos argumentos bajo la afirmación de que YPF “daba pérdidas”. Fuentes: El tribuno, Salta, 3 de noviembre de 1989; Clarín, 12 de octubre de 1989 y El tribuno, Salta, 31 de octubre de 1989.

⁷⁸ Para el 18 de diciembre de dicho año ante la inminente “privatización de YPF” luego de varios encuentros la consultora McKinsey seleccionada por el Bco. Mundial acerca al gobierno las siguientes propuestas: 1) cierre y/o venta de los sectores de actividad que no son rentables o estratégicos (por ej.: 3 refinerías de 6, flota fluvial, etc.), 2) Reducción de personal hasta un total de 18.431 trabajadores; 3) Privatización de la mayor parte de la compañía mediante el lanzamiento de acciones en la Bolsa y 4) Valuación base de entre 3 y 4 millones de dólares. A partir de esta propuesta se abrieron diversas discusiones en torno del porcentaje de privatización de la empresa, el número de empleados desahectados, el porcentaje ofertado para las llamadas “aéreas marginales”, etc., lo cual concluye en el decreto señalado a finales del mismo mes de diciembre. Fuente, Diario El Tribuno, 18 de diciembre, de 1990.

⁷⁹ El ingeniero es un reconocido empresario petrolero de tendencias liberales explícitas y egresado del *Rensselaer Polytechnic* en Troy, Nueva York, EE.UU.

(Ley N° 7691/2012), la cual sigue siendo considerada Sociedad Anónima, así como la intervención empresarial privada en los primeros intentos de inclusión de capital nacional al interior de la empresa.

Entre algunas de las afirmaciones normativas del decreto se sostiene:

...a fin que la futura YPF Sociedad Anónima pueda actuar en un mercado desregulado y competitivo, asegurarle la máxima autonomía empresarial en su gestión liberándola de las restricciones y limitaciones existentes y dotándola de una estructura jurídica propia del derecho privado que le permita actuar con eficiencia en dicho mercado de condiciones de autentica competencia. (Decreto N° 1778/90, en Palermo, 2010: 179).

Resulta importante señalar cómo las lógicas rectoras de la gubernamentalidad neoliberal regían el ordenamiento político y jurídico de los programas de reforma y reconfiguración del gobierno de Estado “para el mercado”; en tanto dicho mercado adviene ámbito de veridicción regido por la desigualdad y la competencia.

A partir de estos marcos normativos se dio lugar, políticamente, a la venta de acciones, el desembarco de capitales extranjeros, mientras se abrían las puertas a una nueva forma de explotación petrolera, mediante las reglas del derecho privado. Así con el apoyo de los empresarios privados petroleros, representados por Estenssoro y tirando por la borda muchos de los derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa/fabrica se tejieron los hilos que darán lugar a la privatización total de la empresa.

Así esta primera etapa de fragmentación de YPF se profundiza cuando, en el marco del Plan de Transformación Global, se realizó una sistematización de las áreas consideradas estratégicas, si una área era relevada como estratégica, en sentido de rentable, quedaba en propiedad de YPF S.A, y si era clasificada como estratégica no rentable se decidía la asociación o renta, y si eran áreas no rentables, ni estratégicas, se resolvía venderla o cerrar.

Ahora bien, YPF atravesó diferentes momentos de compra y venta de acciones hasta que, recién en 1998 aparece Repsol accediendo a un 5% de las acciones, disminuyendo el porcentaje de las provincias y el personal de YPF. S.A. En 1998 con el pago de una cifra aproximada de 2.000 millones de dólares, Repsol le compra al Estado su 14,99% con el fin de constituirse en el principal accionista; y, finalmente en 1999 y previo pago de 13.000 millones de dólares, Repsol pasa a controlar casi la totalidad del paquete accionario de YPF, adquiriendo a fin de ese año el 83,24% de las acciones de YPF S.A (Diario El Tribuno, Salta, 6 de junio de 1999; Palermo, 2010: 183, y Wahren, 2011).

Así quedan en manos del Estado, solamente las llamadas “acciones de oro”⁸⁰, dicho mapa accionario se moverá solo en el 2008, cuando en el programa de gobierno bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con la intención, como antecedente a la advenida “renacionalización de YPF” (2012), se dirigía a incluir capitales nacionales en YPF mediante la inversión del Grupo Petersen del empresario Eskenazi, quien le compra a Repsol el 15% de las acciones. Dicha actividad económico-política resulta fomentada desde el gobierno de Estado como una estrategia que propicie la inversión empresarial privada en rededor de YPF.

Es importante señalar a su vez, que del 39% de acciones que estaban en manos de los gobiernos provinciales para 1992, bajan al 12% en 1993, se reducen a 0% en 1999 e incluso en 2008. Así, Repsol se posicionaba como la principal empresa con la mayor concentración de reservas de petróleo en Argentina, seguirían los conglomerados de Estados Unidos BP-Amoco, que controla *Pan American Energy*, con importantes intervenciones accionarias en el yacimiento norte de la provincia de Salta y, luego la empresa estatal brasileña PETROBRAS. Mientras que, a nivel nacional, en primer lugar se encontraba Repsol YPF como productor de crudo, en segundo lugar la empresa Pérez Companc y por último *Pan American* (que incluye Amoco y Bidas), Total Austral y Tecpetrol (de Techint) (Fuente, De Dicco, 2005)⁸¹. De hecho en 2003 Repsol, que no solo se concentraba en la producción de petróleo también comienza a realizar tareas de refinación a partir de lo cual adquiere, entre otras la refinería de Campo Duran ubicada al norte de la provincia de Salta (además de la refinería la Plata y Lujan de Cuyo en Mendoza y Plaza Huincol).

En Salta, la privatización obtuvo apoyo mayoritario y explícito por parte de la gobernación de Juan Carlos Romero, aunque con matices que luego profundizaremos en relación con los levantamientos de los trabajadores desocupados y piqueteros. En el Dpto. Gral. San Martín, la composición accionaria y la de las distintas empresas que actúan en la zona es la siguiente: *Tecpetrol* perteneciente un 100% al *Grupo Techint* (Argentina);

⁸⁰ La acción de oro es una acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación bajo ciertas circunstancias. Su poseedor suele ser una organización gubernamental, o un Estado. Este tipo de títulos financieros son habituales en compañías públicas que están siendo o fueron sometidas a un proceso de privatización y transformación, en una compañía cotizada. Aunque no solamente se utiliza en estos casos, puede suceder que en la constitución de una empresa entre particulares surja esta acción de oro, como medio de garantía o seguridad en la inversión de uno de los socios o, beneficios otorgados por un tercero.

⁸¹ En febrero del 2011 *Pan American Energy*, adquirió el paquete accionario de Esso Argentina, perteneciente a Exxon Móvil de capitales estadounidenses, con lo cual se posicionó como la segunda empresa de hidrocarburos en el mercado argentino, tanto en explotación, refinamiento, como distribución. Ver: Wahren, 2011...op...cit.

Refinor cuyo 72% del paquete accionario pertenece a Repsol (España) y el 28% restante a Petrobras (Brasil); *Pan American Energy* que originalmente era de capitales británicos (*British Petroleum*) y en la actualidad (2011-2013) pertenece en partes iguales a *Bridas S.A (Bulgheroni)* y a la *China National Oil Offshore Corporation* (empresa estatal china de hidrocarburos); *Pluspetrol* con un 55% de acciones en manos de la familia Rey (Argentina) y el 45% restante también bajo control de Repsol (España) (Wahren, 2011: 959).

Ahora bien, este paso de las empresas estatales a manos privadas, este proceso político gubernamental de “privación y privacidad” ejercido mediante la reconfiguración efficientista, empresarial y competitiva de rol del Estado, en un ejercicio de gobierno “para” el mercado, aunque con el resonante discurso del “progreso nacional y su consecuente desarrollo-económico”, también acontece a mediados de los 90’, una voraz racionalización de los trabajadores de YPF. Esto es, mediante diferentes medidas dirigidas a despidos masivos, recambios de fuerzas de trabajo, implementación de nuevas organizaciones empresariales y renegociaciones de convenios colectivos, persecuciones en el lugar de trabajo, despidos encubiertos, desarticulación de instituciones dirigidas a la seguridad del trabajador, entre otros.

El proceso de recambio, despido y racionalización laboral se llevó a cabo, ante todo, en la primera etapa de privatización bajo la intervención de Estenssoro en complicidad con la dirección del entonces Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE)⁸². Su estrategia de “supervivencia organizativa” lo llevó a transformarse en un “sindicato de negocios” (Orlansky 1997), optando por la política de la negociación en lugar de la confrontación (Sabatella, 2011).

La mayoría de las modificaciones en el marco laboral trastocaron los sentidos y sentires contruidos en el espacio de lo que Palermo llama “la comunidad de fábrica” YPF, hacia lo que damos en llamar la empresa-fábrica⁸³, a partir, ante todo, de una desestructuración,

⁸² Entre algunos de los acontecimientos, que según las memorias de los ex/ypefianos, se avistó la “traición” del gremio estuvo la llamada “La Gran Hechada” (bautizada así por los trabajadores del Plata) o la “Huelga de la Traición” (trabajadores de Comodoro Rivadavia), ya que en setiembre de 1991 el sindicato convoca a una huelga general y luego de la misma se realizan los mayores despidos de trabajadores, ante todo en Comodoro Rivadavia y en Salta. Para ampliar ver: apartado III del presente capítulo.

⁸³ Según Palermo, en la época estatal de YPF “la comunidad de fábrica” devino, motorizada por el interés de moldear al colectivo de trabajo en pos de los intereses de la producción, así determinadas políticas empresarias modelaron las experiencias obreras configurando un modelo identificador, tal cual es el caso de la “comunidad de fábrica”: “El término “comunidad” supone la referencia a relaciones armónicas, no jerárquicas y fundamentalmente, no mercantiles. En este sentido, la reconstrucción de las relaciones en términos de comunidad de fábrica, implicó el desplazamiento de las asimetrías y contradicciones propias de la relación capital-trabajo en la experiencia de los trabajadores” (Palermo, 2010: 15). En el proceso de privatización y la

destrucción e incertidumbre en torno de las relaciones laborales, en el proceso de privatización. Así entre 1991 y 2003 se ejecuta el gran plan maestro de “saneamiento” de YPF. La planta de YPF que contaba en 1989 con un total de 37.046 trabajadores, en diciembre de 1994 se reduciría a 5.839, es decir una reducción, en 4 años, de un total de 31.207 trabajadores. Estas medidas tuvieron especial impacto en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Gral. Mosconi, lo cual será analizado con mayor profundidad en la tercera parte de la presente tesis, alcanzando en la zona de Mosconi y Tartagal a un 42,8% los índices de desocupación para el año 2001, y extendiéndose a un 60%, según estadísticas locales en la actualidad (2013) (Svampa y Pereyra, 2003).

Diferentes y diversas fueron las técnicas de intervención y gestión de estos despidos y sujetos ahora “desempleados-desocupados”, entre los que brevemente podemos señalar las indemnizaciones, las capacitaciones para la conformación de micro emprendimientos, los contratos provisorios, los retiros voluntarios, apuntando al advenir de los “ex/trabajadores de YPF o ex/yperfianos” en “empresarios”, lo cual tuvo diferentes efectos en los territorios petroleros del país. En la provincia de Salta, la singularidad de los despidos es que fueron llevados a cabo, ante todo, por la gendarmería y la policía provincial, modalidad que consistirá en las diversas intervenciones policiales por parte del Estado provincial.⁸⁴

Ahora bien, y como será trabajado en el apartado III del presente capítulo, los efectos del proceso de privatización y racionalización laboral también tuvieron efectos vinculados con las diferentes prácticas de resistencia emergidas e instaladas ante todo en el sur y el norte de nuestro país, pues irrumpieron en esta época las prácticas de resistencia y lucha llamadas “piqueteras”, con diferentes diagramaciones y codificaciones locales,

profunda “modernización empresaria” en el interior y exterior de la empresa, se reconfigura la conformación del trabajo y los trabajadores, a partir de los cual Palermo indica que adviene un nuevo “modelo identificador” sustentado en la fragmentación e individualización de las relaciones sociales, agregaríamos, laborales y de poder y resistencia en tal sentido. En este advenir de la fábrica empresa es que señalamos que YPF se reconfigura como una empresa-fábrica, trazada bajo la lógica de la competencia, la desigualdad y el libre juego-individual- de la economía política de mercado.

⁸⁴ Cabe señalar que las empresas que se instalaron en la zona impulsaron una modalidad laboral diferente a la de YPF. Ante la drástica reducción de personal solo las más grandes, como Refinor, Pluspetrol, entre otras, tenían alrededor de 100 empleados cada una. El resto, mucho menos. Para los empleados que permanecieron, se incrementó las horas de trabajo, de 8 horas que trabajaban en YPF a 12 o 14, a la vez que se redujeron los salarios. Por otra parte, varios de los servicios que anteriormente prestaba YPF fueron trasladados fuera de la empresa y reinstalados mediante subcontrataciones. En este diagrama surgen cooperativas conformadas por ex/empleados para brindar servicios calificados, entre otras prácticas de reorganización laboral entre las diversas figuras que cobran aquellos sujetos ex/yperfianos hasta ahora asalariados: asalariados flexibilizados, ex/asalariados, cuentapropistas, changarines y desocupados. Ver: Aguilar, Vásquez, 1998: 44-46.

comunales, regionales y nacionales, que serán analizadas⁸⁵, en el caso del yacimiento norte, puntualmente de la localidad de Gral. Mosconi y la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi.

En tal sentido, cabe remarcar que las prácticas de gobierno y políticas construidas en torno del petróleo en Argentina han sido, y siguen siendo altamente complejas, puesto que reviven en las mismas, diferentes intereses, perfiles y lógicas que tejen los múltiples y heterogéneos diagramas de gobierno entre el poder y las resistencias.

4. Continuidades y Discontinuidades crisis y retoques: la Argentina en el 2000-2002, entre banelcos, helicópteros y cacerolas.

Luego del programa de gobierno de perfil neoliberal de los 90', en el año 1999 se instala, en Argentina, un programa de gobierno bajo la bandera de lo que se llamó “La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”⁸⁶ y asume la presidencia Fernando de La Rúa, como representante de la Unión Cívica Radical⁸⁷. La victoria de la Alianza se debió, en parte, al fuerte rechazo público hacia el despliegue de una estrategia discursiva mediática centrada en la corrupción, así como al deterioro de la situación socio-laboral del país. Argentina estaba sufriendo el impacto de las crisis económicas asiática y brasileña, y se encontraba en medio de una profunda recesión, que había comenzado a fines de 1998.

Desde su creación, la Alianza intentó elaborar una estrategia discursiva que apuntaba a la superación de las falencias del modelo económico y social, sin poner en riesgo ninguno de los supuestos éxitos alcanzados. Este discurso tenía ambigüedades, lo que permitía que los diferentes sectores, que se oponían al llamado “menemismo” encontraran en él

⁸⁵ Dichas prácticas de resistencia, lucha y autogobierno en torno de la UTD Mosconi, serán analizadas en el apartado III del presente capítulo, el apartado III del capítulo 3 y el apartado III del capítulo 4, con diferentes referencias a las mismas a lo largo de la totalidad del escrito de tesis.

⁸⁶ La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida simplemente como La Alianza, fue una coalición política, entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaaso), conformada en 1997. En las elecciones presidenciales de 1995, cuando Menem fue reelecto la oposición se había presentado dividida en dos grandes fuerzas, el Frente País Solidario, una alianza de partidos de centro-izquierda, que obtuvo el 29% de los votos, y la Unión Cívica Radical que obtuvo el 17%. Ante esto, logran una alianza estratégica que no resultó fácil de consolidar, debido a la desconfianza existente entre los diferentes grupos que contribuían a ella. Estas luchas internas se volverían más evidentes durante el gobierno de De la Rúa (1999-2001).

⁸⁷ La Unión Cívica Radical (UCR) es uno de los primeros partidos políticos de América del sur y el primero en Argentina, fundado en junio de 1891, por Leandro Alem. Gobernó la república siete veces, en oportunidad de las dos presidencias de Yrigoyen, Torcuato, Illia, Frondizi, Alfonsín post dictadura (1983) y De la Rúa. Dicho partido se encuentra atravesado por lógicas políticas varias de corte liberal, socialdemócrata, nacionalismo, socialismo, etc. Sobre todo, posee herencias humanistas de corte iluministas, en el trazo de sus procesos de gubernamentalización, en torno de las libertades individuales y la igualdad, en un complejo vínculo entre Estado y Sociedad Civil, considerando al partido como una “fuerza moral” cuya meta era garantizar la constitución de la nación. Diferencias internas, en torno de lo antedicho, llevaron a la fragmentación interna del partido, en especial la escisión entre personalistas y antipersonalistas, lo cual perdura hasta la actualidad, en torno de modalidades de ejercicio del gobierno y lógicas que lo atraviesan.

respuestas a sus distintas propuestas e intereses. En las propuestas de la Alianza predominaban “las buenas intenciones, la voluntad de acabar con la corrupción y de ingresar a los sectores sociales postergados”.

El gobierno de Estado instalado a finales de los 90' intentó llevar adelante medidas, que el programa anterior había dejado inconclusas, ante todo algunas vinculadas a la reducción del gasto público, en torno de las jubilaciones y el peso que esas implicaban para el Estado, teniendo en cuenta que ya existía el sistema privado de jubilaciones (AFJP), así como el remplazo de Prestación Básica Universal (igual para todos los beneficiarios) por una Prestación Suplementaria, que sería decreciente hasta los que se jubilaran con 800 pesos⁸⁸, entre otras.

También en el área de la burocracia gubernamental se introdujeron modificaciones, tal es el caso, en el año 2000 del *Programa Carta Compromiso con el Ciudadano*, cuyo objetivo era:

... restablecer la confianza del ciudadano, mejorar su percepción del Estado y su relación con los mismos, transparentar y legitimar la gestión de los organismos públicos y establecer un mayor nivel de compromiso del ciudadano con sus obligaciones y con sus responsabilidad social (Decreto N° 229/2000).

El “ciudadano”, según estos entramados discursivos es un sujeto libre y responsable, tal cual lo manifestaba la teoría subjetiva del valor, así como el discurso de von Misen, en su arribo a nuestro país en los años 50'. En este sentido, es su “deber” individual hacer-se cargo de su existencia como “sujeto social”, plano en el cual el Estado debiera tener “buena imagen” en pos del “buen gobierno”, según lo promovido por los Organismos Internacionales de crédito e Intervención, ante todo el Banco Mundial.

Acorde a lo antedicho, también se promueve el *Plan de Modernización del Estado*, el cual partía de la consideración de que el problema del Estado no era su excesiva dimensión, sino su forma inadecuada de gestión, tras lo cual se buscaba mejorar sus capacidades a través de reformas basadas en cambios en el modelo de gestión, proyectos de modernización estructural y transparencia anticorrupción (Estévez y Lopreite, 2001, en: Campana, 2012: 122). El rol del Estado, entonces, era y debiera ser eficiente y eficazmente “gestivo”.

⁸⁸ En el año 2000 se dictó un decreto por el que se remplazaba la Prestación Básica Universal por una Prestación Suplementaria, que sería decreciente hasta los que se jubilarían con 800 pesos. Por otra parte, para aquellos sectores que no estaban cubiertos, se instituyó el Beneficio Universal de 100 pesos para mayores de 75 años, que no tuvieran ningún ingreso, ni dispusieran de propiedades. Quienes accedieron a ese beneficio recibirían también la cobertura médica del PAMI. Además se creó la Prestación Proporcional para mueres de 70 años que tuviern10 y 29 años de aporte. Finalmente se forzó a las Administradoras a comprar bonos del Estado. Ver: Campana, 2012: 122.

Sin embargo, algunas de estas medidas, que no distaban de sostener y profundizar las dispuestas por el programa de gobierno anterior llevaron a quiebre definitivo del frente de la Alianza. Lo cual concluye, cuando en torno de la Ley de Reforma Laboral y posterior acuerdo con la CGT, se realizan los llamados “sobornos en el Senado” y el escándalo de la Banelco⁸⁹ y las renunciaciones posteriores del Ministro de Trabajo y el vice presidente Chacho Álvarez.⁹⁰

Así, ante la profundización de la crisis y la necesidad de sostenimiento de lo dispuesto, surge entre otras cuestiones la necesidad de estrechar vínculos con miembros de “Acción por la República” (el partido de Domingo Cavallo, ministro de economía del gobierno de los 90'), de la mano de quienes se tomaron severas medidas de ajuste con el propósito de mejorar la recaudación pública, que resultaron sin embargo insuficientes para resolver el deterioro de las finanzas y agravaron la capacidad productiva de la industria nacional. Por otra parte, acorde a lo planteado en la convertibilidad de los 90', la Alianza se había comprometido a mantener el tipo de cambio anclado en paridad con el dólar estadounidense.

Así y mientras tanto, la situación social se deterioraba: había cotidianamente, diversos conflictos y huelgas; los inversores desconfiaban de la paridad cambiaria y de la capacidad del Estado para pagar sus deudas, la bolsa de Buenos Aires registró varias bajas. La profundización de la “crisis de confianza” hizo que los ahorristas retiraran los fondos de los bancos, mientras los grandes ahorristas hacía tiempo habían puesto su dinero, a salvo, en el exterior. Disminuyó el consumo y la actividad productiva. En dicho contexto se declara el “estado de sitio”, y luego de masivas manifestaciones y saqueos, acaece la renuncia del ministro Cavallo.

El gobierno instalado a principios del siglo XXI, se mantiene en el ejercicio del poder de Estado hasta el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando: *“Luego de una venta de bonos de deuda pública, con altas tasa de interés y una fuga de los ahorros bancarios,*

⁸⁹La Banelco (tarjeta de débito) fue una noción utilizada, “simbólicamente”, para referir a las coimas del senado, explicitadas más abajo, que llevaron a las renunciaciones del ministro y el vicepresidente.

⁹⁰Con relación a la reforma laboral, luego de una negociación con la CGT para que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De la Rúa logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la ley. Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador, que se había iniciado en el gobierno menemista. Se proponía extender el período de prueba para los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones para favorecer la contratación de nuevos operarios. Sin embargo, rápidamente se acusó a varios senadores de haber recibido sobornos para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la coalición gobernante y llevó a las renunciaciones antedichas. Ver: Dobaño y Lewkowicz, 2005...op...cit.

el Ministro Cavallo inmoviliza los ahorros de la clase media y el circulante monetario” (Álvarez Leguizamón., 2005b: 5). Éste fue el último golpe soportado por la sociedad Argentina, tras lo cual se produjeron los “cacerolazos”⁹¹, manifestaciones de una marcada heterogeneidad social y política con epicentro en Capital Federal, pero rápidamente propagados por todo el país. Mientras se ejecutaban diversos “saqueos” (a los supermercados, sobre todo), en diferentes puntos del país, y se reforzaron diferentes protestas bajo el lema de “que se vayan todos”, a partir de una enorme insurrección popular en la que se desató una feroz represión en la Capital nacional y la ciudad de Rosario, ante todo, lo que produjo aproximadamente 38 muertos. Esta situación, en la que el neoliberalismo y la violencia se conjugan para ser y para no dejar ser, acaece la renuncia del presidente De La Rúa, el 20 de diciembre del 2001, cuando huye del techo de la Casa Rosada, en un helicóptero.

De este modo, dicho programa de gobierno, no sólo no rebasó la racionalidad política de corte neoliberal y sus prácticas específicas, sino que en muchos sentidos la profundizó en continua-discontinuidad con el proyecto anterior de gobierno.

En este diagrama de relaciones de poder y resistencias, según las condiciones de posibilidad y realidad brevemente señaladas, varios fueron los efectos⁹², entre ellos, una gran masa de los trabajadores desocupados y desesperados – urbanos - advinieron “cartoneros”⁹³, mientras se extendían las prácticas económico-populares diversas como el trueque, las asambleas barriales, la toma de fábricas, y se profundizaban los “piquetes” como prácticas de lucha en torno de la ocupación y la toma de las rutas y los espacios de circulación; así como se profundizó la migración desde el campo a la ciudad, conformando espacios muy pobres en las márgenes, en y de los grandes aglomerados.

⁹¹ El cacerolazo consiste en manifestaciones públicas, en un primer momento autoconvocadas, en las cuales se hacían sonar cacerolas, ollas, tapas de ollas en las calles, frente al Congreso de la Nación, ante todo. Esta protesta comienza en capital federal y se expande al resto del país y tiene una larga data en la historia de América Latina.

⁹² A partir de las prácticas antedichas, se alcanzan índices de desocupación nunca vistos, la desocupación ya había tenido un pico de alce en 1995 con la crisis del Tequila mexicana alcanzando el 28,4%, y un segundo pico durante la crisis económico-institucional del 2000-2001 con un 21,4% de la población desocupada. La indigencia en la región Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja), alcanzó el 35,4%; Mientras que en abril del 2003, según datos del INDEC, la incidencia de pobreza en el total de aglomerados urbanos ascendía al 42,6% de hogares y al 28% de hogares respectivamente, lo que se traducía en una incidencia del 26,3% de personas indigentes y el 55% de personas pobres. Esto es, la mitad de la población. Así, mientras la pobreza aumentó un 78% entre 1993 y 2003, el Gasto Social Focalizado (GSF) experimentó solo un incremento 24%, también el gasto social comunitario caía, lo cual pone de manifiesto el crecimiento de la pobreza por las medidas de ajuste, la descentralización, privatización, terciarización laboral. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas-INDEC y consultoría CEPAL. Naciones Unidas. Serie Políticas Sociales. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años noventa. Vinocour. P. y Halperin. L. 2004, Stgo de Chile...op...cit.

⁹³ Cartoneros son aquellos hombres, mujeres y niños que juntan basura, sobre todo cartón y papel, para luego poder revenderlo a intermediarios y de ese modo sobrevivir.

Luego de la caída del programa de La Alianza, el país tuvo cuatro presidentes en menos de diez días: el Presidente del Senado Puerta, hasta que dos días más tarde la Asamblea Legislativa designó como presidente a Adolfo Rodríguez Saa (San Luis). Luego de su renuncia, fue remplazado por el Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, hasta que una nueva Asamblea Legislativa eligiera a Eduardo Duhalde, el 2 de enero del 2001. Es Duhalde el último de los presidentes, quién convoca a elecciones en el 2002, las cuales se realizan, finalmente, en mayo del 2003, tal cual analizaremos en el capítulo 3.

II

La Reconfiguración del rol del Estado en los avatares de la gubernamentalidad Salteña: entre neoliberalismos, “salteñidad” y desarrollo humano (1995-2003)

1-Aproximación inicial

En continua discontinuidad con el apartado anterior, la presente sección del trabajo de tesis pretende reconstruir las prácticas y lógicas de gobierno ejercidas en la Salta de los 90', puntualmente desde 1995 hasta 2003-2007.

Es menester referir a algunos datos relevantes acerca de la Provincia de Salta, la cual presenta una superficie de 155.488 km, que representa el 5,6% de la superficie continental Argentina. Está ubicada en la región Noroeste de la República Argentina y limita con tres países: Chile al oeste, y Bolivia y Paraguay al norte. La Provincia de Salta, está dividida territorialmente en 23 Departamentos, según se ilustra en el Mapa N° 1. (Fuente, Plan De Desarrollo Estratégico, Salta 2030, 2012).



El dilatado territorio salteño está poblado por 1.214.441 según censo 2010 -597.153 varones y 617.288 mujeres-, mientras que la población del país asciende a 40.117.096 habitantes. La provincia tiene una bajísima densidad por habitante/Km² de tan sólo 7,8 personas. La población no sólo es escasa, sino que está distribuida en una forma desequilibrada, presentando una gran concentración en las áreas urbanas –la ciudad de

Salta tenía el 43,42% de la población total de la provincia en el Censo 2001, tendencia que se acentuó hacia 2011. Los valores censales arrojan, a su vez, una muy baja densidad poblacional en la zona rural que presenta grandes espacios vacíos, mientras que el proceso de urbanización, si bien ha crecido es menor que en otras provincias de la región. A su vez, la población salteña muestra a través de los Censos Nacionales una dinámica y sostenida evolución de crecimiento, en el Censo de 1991, la Provincia concentraba el 2,6 % de la población del país, habiéndose acentuado la tendencia ascendente. En la actualidad, la población salteña se acerca al 3% de la nacional. (Fuentes: Censo poblacional-INDEC 2001, 2010 y Plan De Desarrollo Estratégico, Salta 2030, 2012).

Este amplio y rico territorio salteño se configura y reconfigura en la década de los 90' en sintonía con los programas de gobierno dispuestos en la Nación. Como ya ha sido trabajado, la racionalidad política de perfil predominantemente neoliberal se pone en juego en la Argentina de esta época, cuyas prácticas de gobierno se dirigen a radicalizar las transformaciones económicas de ajuste y fobia al Estado, mientras se profundizan cambios, que ya se habían iniciado en etapas anteriores implementando, sistemática y rigurosamente, las transformaciones propiciadas por las Agencias Internacionales de desarrollo y crédito, ante todo.

Ahora bien, estos programas de gobierno, con singularidades específicas (epocales, territoriales y técnicas) se diagraman en torno y acorde al *locus* del peronismo - justicialista-, que en los 40' instala un modelo de Estado Benefactor⁹⁴, a partir de lo cual se pretende poner límites a la “beneficencia filantrópica” para producir sujetos de derecho con pleno empleo y bienestar social. Esto sería posibilitado y logrado mediante la gestión de Estado y no la autogestión del individuo, en torno de su propia felicidad. Mientras que en los 90', se re-configura el rol del Estado hacía un perfil eficientista y subsidiario,

⁹⁴ El gobierno peronista se enmarca como un ejemplo local y divergente en referencia de los advenidos Estados de Bienestar y/o Estados sociales, en el trazo del *welfare state* (posguerra europea) y el *New Deal* de Franklin de Roosevelt, ante todo. Los análisis más clásicos y reconocidos en torno de los “regímenes de bienestar” propusieron identificar modelos de tipos ideales, basados en la distinción elaborada por Esping-Andersen (1990), según quien, las cuestiones ligadas a la desmercantilización, la estratificación social y el empleo son claves para identificar regímenes de bienestar. También Andrenacci (2010) refiere a los regímenes de bienestar considerando que mientras el mercado provee tanto oportunidades de sobrevivencia como de instancias de movilidad social ascendente, las políticas sociales generan pisos de condiciones de vida accesible a todos los individuos, independientemente de su inserción en el mercado, lo cual puede ser complementado por diversos tipos de arreglos familiares y/o comunitarios, así como pueden ayudar a sobrevivir y/o adaptarse a los mecanismos centrales. En diálogo con lo planteado por Esping Andersen, Lo Vuolo y Barbeito (1998) postulan que el régimen de bienestar argentino se conformó como un “híbrido institucional” en cuanto a sus principios organizadores, cuya principal fuente de inspiración provenía del modelo corporativo: el corazón del mismo había sido establecido alrededor de cuerpos de seguros sociales financiados por el impuesto al salario. El sistema apuntaba, entonces, a la división entre los propios trabajadores asalariados, estableciendo distintos programas para diferentes grupos y preservando el diferencial de status del trabajo.

“gobernando sin gobernar demasiado”. Así, se recrean redes estratégicas entre Estado y sociedad civil, a través de lo cual lograr eficiencia, eficacia, operatividad, reducción de gastos, disminución de la pobreza soportable, en un eficiente marco gestivo de la misma.

En el caso de la provincia de Salta, se observa que la misma ha sido pionera a nivel nacional en la implementación de las reformas neoliberales del Estado y sus avatares gubernamentales, en los diferentes ámbitos del gobierno. Algunos de los rasgos generales que definen estas políticas son:

...el debilitamiento y privatización del sistema de seguros; la asistencialización de las políticas universales como salud y educación, a transformación de la “Asistencia social” en políticas denominadas de “desarrollo social” o focopolíticas. Ello incluye también la promoción de derechos de ciertas poblaciones especiales como las minorías étnicas, las mujeres y los niños. (Álvarez Leguizamón, Villagrán, 2010b: 217).

Esto también implica una cristalización del discurso de Desarrollo Humano en el ámbito de las políticas sociales, a partir ante todo de la institucionalización de los Ministerios y Secretarías de Desarrollo social, en el entramado burocrático y gestivo del Estado provincial lo cual trabajaremos en el capítulo 2.

1.1-Prácticas de gobierno y relaciones de poder en Salta, entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX

La instalación de los programas de gobierno de la época trabajada nos invitan, en un ejercicio genealógico, a realizar un breve rastreo de las procedencias y los comienzos que a lo largo de la historia salteña, han ido trazando y enredando diferentes lógicas y prácticas de gobierno. Recuperando el trabajo de Vázquez (1996), realizaremos una breve reconstrucción remodelada de los programas y prácticas de gobierno, en la Salta del siglo XIX y XX.

Un primer momento histórico nos remite a la incorporación de la provincia al nuevo esquema político con centro en Buenos Aires, durante el cual (1810-1875)⁹⁵ la pertenencia de Salta a este orden fue puesta en cuestión en reiteradas oportunidades. Estos conflictos entre las provincias y el gobierno central se canalizaron en muchos casos, por la separación o por conflictos armados.

⁹⁵ La ciudad de Salta, según lo señalado por Álvarez Leguizamón (2004), a principios del siglo era una aldea de fuertes tradiciones hispánicas, con una estratificación social segmentada, entre la oligarquía criolla que se vanagloriaba de su origen patricio, por un lado, y los artesanos, el personal de servicio doméstico, trabajadores conchabados y escasos trabajadores independientes. Esto se acompañaba de un crecimiento demográfico estancado y una escasa incidencia de la inmigración europea, lo cual se visualiza como un signo de retraso económico y cultural.

Un segundo momento, entre 1875 y 1930⁹⁶, manifiesta singularidad en el proceso de incorporación en el llamado sector “dominante central” (Vásquez, 1996) de algunos miembros de la llamada oligarquía local, que de ese modo consiguen además algunos beneficios para sus actividades económicas (vinculadas al azúcar y al petróleo). Mientras que un tercer quiebre (1930⁹⁷-1990), se caracteriza por un proceso de desarrollo expansivo del Estado provincial, que atiende a la brecha que abre la necesidad de incorporar áreas que habían quedado marginadas del mercado interno⁹⁸. En este período cabe referir, brevemente, a las singularidades locales del programa de gobierno peronista en Salta⁹⁹, considerando que el mismo va a ir cobrando matices diferenciales que denotarían la singularidad del proceso de re-conversión neoliberal local, en los 90’.

Siguiendo a Valle Michel (2004), los cambios socio-económicos operados en el país, sobre todo a partir de la década de 1930 con la llamada industrialización por sustitución de importaciones (ISI), se produjeron de manera desigual. En ese contexto, Salta tuvo un escaso desarrollo industrial¹⁰⁰ y por tanto los trabajadores no contaron con una tradición sindical como ocurrió en Buenos Aires¹⁰¹. Económicamente, la provincia había

⁹⁶Salta había atravesado una fuerte crisis a comienzos del siglo XX. Luego de la Guerra de la Independencia, la economía se sobrepuso gracias al ganado que se exportaba hacia Chile. En 1883 el importante tráfico entre Salta y las provincias del norte, donde se incluye Bolivia, fue redirigido por Chile, luego de haberse completado el tramo del ferrocarril que unía Chile con Bolivia por Uyuni (Hollander, 1976: 147). Luego, por la Guerra del Pacífico, se abandona definitivamente la ruta del Atlántico. En 1890, se finaliza el tramo del ferrocarril que unía a Salta con Bs. As., lo cual disminuyó el aislamiento geográfico de la provincia respecto de la llamada Pampa Húmeda, mientras que permitió que los productos baratos del litoral y las importaciones extranjeras destruyeran la incipiente industria local y agricultura. Por ello Salta entró en un período de escasez y estancamiento económico, época que el poeta y ensayista J. C. Dávalos llama, en un artículo de autoría (1925): “La crisis”: Ver: Á. Leguizamón, 2004: 116-118.

⁹⁷ Cabe recuperar lo señalado por Roffman y Romero (1973) cuando comentan que la situación de subordinación, que mantenían las provincias del interior durante la República, se mantiene durante el período que denomina “sustitutivo por importaciones”, entre 1930 y 1952; esto se complejiza con las apropiaciones y distribuciones de ingresos y salarios en tejidos relacionales jerarquizados, en torno de la marcada oligarquía local.

⁹⁸ En el plano estrictamente político, la historia electoral de Salta está marcada por ciclos de predominios partidarios fuertes pero, al mismo tiempo, escasamente competitivos. En efecto, los conservadores gobernaron la provincia tanto en el llamado período oligárquico, como en la fraudulenta etapa de los años 30’, los radicales alcanzaron la administración provincial gracias a la intervención del gobierno federal y se mantuvieron en ella gracias a la abstención conservadora primero y a la proscripción del peronismo más tarde; por último, los peronistas salteños llegaron a la gobernación amparados en un esquema de poder nacional poco proclive para el ejercicio de la actividad opositora.

⁹⁹ La victoria provincial del peronismo en 1946 se da mediante la fusión de los grupos peronista con las fracciones del Irigoyenismo radical liderado por J. c. Cornejo Linares. Los Cornejo eran radicales y también propietarios fundadores del primer trapiche para la producción de azúcar de la Argentina, que más tarde se transforma en el Ingenio San Isidro en Campo Santo. Ver: Álvarez Leguizamón, 2004, 2010a; A. del Valle Michel, 2004...op...cit.

¹⁰⁰ Hacia 1941 existían en la provincia 492 establecimientos industriales con un personal ocupado de 7.893. La mayor cantidad de trabajadores concentraba la elaboración de productos forestales, sustancias alimenticias, bebidas y tabaco; seguida de maquinarias y vehículos, empresas de construcción, yacimientos, canteras y minas.

¹⁰¹ En cuanto a las organizaciones de trabajadores, éstas experimentaron modificaciones a medida que las actividades productivas iban generando una trama más compleja de relaciones sociales. Sin embargo, el grado de sindicalización era muy bajo; los gremios existentes no tenían participación política y sus problemas, cuando eran atendidos, se resolvían entre patronos y empleados. Producido el golpe de Estado de 1943, la Delegación

experimentado una diversificación en comparación con las décadas de fines del XIX y principios del XX, en las que primaba el comercio ganadero, especialmente con el norte de Chile.

Es en la agricultura donde se observaba un importante crecimiento tanto en las áreas sembradas como en las toneladas producidas. Entre los cultivos industriales tuvieron un lugar destacado la caña de azúcar, uva para vinificar, tabaco, seguido por los cereales. Justamente la primera dio lugar a dos agroindustrias: el ingenio azucarero "San Isidro", ubicado en la localidad de Campo Santo (Dpto. General Güemes), de propiedad del primer gobernador peronista, Dr. Lucio Alfredo Cornejo Linares y el Ingenio "San Martín del Tabaco" 4 (Dpto. Orán), cuyo dueño, el Dr. Robustiano Patrón Costas¹⁰², tuvo una activa participación en la política provincial y nacional. Otra agroindustria (Valles Calchaquies) fue la del vino y cuyos principales fabricantes, los hermanos Michel Torino y los hermanos Lovaglio, tuvieron una fuerte gravitación en la política salteña. Como ya fue enunciado, la producción petrolera se desarrollaba en los departamentos Orán y San Martín, y su explotación estaba a cargo de Y.P.F. y de la *Standard Oil*, como profundizaremos en el apartado que sigue.

En este contexto, al igual que el programa de gobierno del radicalismo, el peronismo, a pesar de su discurso fuertemente antioligárquico llega a Salta también con gobiernos pertenecientes a familias de la oligarquía local. Los cruces de casamientos, entre estos linajes y entre miembros de los partidos radicales y conservadores se materializaron en el apellido Cornejo Linares y en las prácticas de gobierno instaladas en estas épocas (Álvarez Leguizamón, 2010a).

En este diagrama entonces, es el 14 de mayo de 1946 cuando el Dr. Lucio Alfredo Cornejo Linares¹⁰³, después de asumir como gobernador de la provincia, pronunció ante

Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión inició una fuerte política de cooptación de los distintos sindicatos que en su mayoría pertenecían a la "Confederación de Trabajadores Cristianos". Ésta, según declaraciones de su primer presidente Arturo Pacheco, nucleaba alrededor de 4.500 trabajadores. Aquella política se hizo evidente con el Interventor Federal Arturo Fassio (1944-1945) quien impulsó la creación de la "Confederación Gremial Salteña" y a cuyo seno se fueron incorporando la casi totalidad de los sindicatos que dependían de la Iglesia. Algunos, como la Fraternidad, obreros de la Construcción, Municipales y Empleados de Comercio, en un primer momento, no respondieron al llamado oficial. Ver: A. del Valle Michel, 2004...op...cit.

¹⁰² El abogado Robustiano Patrón Costas desempeñó numerosos cargos electivos y políticos como: Ministro de Hacienda del gobernador Zerda Medina; Senador provincial (1909 y 1925-1929); Ministro de Gobierno de Figueroa Ovejero; Gobernador de la provincia (1913-1916); Senador Nacional (1916-1925 y 1932-1943); candidato a Presidente de la Nación en 1943. Fue fundador de partidos políticos provinciales que nuclearon a conservadores salteños y que le posibilitaron su acceso a la gobernación: "Unión Popular" (1906), luego "Unión Provincial" (1912). Fue partícipe en la formación del Partido Demócrata Nacional (1931) y de la Concordancia.

¹⁰³ La candidatura de Perón, en Salta, fue patrocinada por una fracción del radicalismo denominada Unión Cívica Radical Irigoyenista. Mientras que el otro pilar, el Partido Laborista, lo integraban trabajadores con escasa actividad gremial, prescindentes hasta ese momento de intereses políticos y entre quienes la acción de la

la Asamblea Legislativa un extenso discurso organizado en tres partes: la primera de reconocimiento y defensa de los gobiernos radicales; la segunda de crítica a los conservadores que tuvieron el poder entre los golpes de Estado de 1930 y 1943 y la tercera, de lineamientos programáticos (A. del Valle Michel, 2004). En él sostuvo, entre varias cuestiones imposibles de desarrollar en su totalidad, que después de la sanción de la Ley Sáenz Peña y con el gobierno de Hipólito Irigoyen se produjeron hechos trascendentales como el real ejercicio de la "soberanía del pueblo", datando también de ese período el nacimiento de la "justicia social", entre peronismo y radicalismo¹⁰⁴. Trazos programáticos que, entre diversas cuestiones, pretendían frenar las disputas internas entre Laboristas e Irigoyenistas, remarcando la "autoridad del gobernante", ante todo en torno de los gremios de trabajadores.

Al respecto, primero se aseguró "encuadrar dentro del marco de la Constitución y de la ley, la tarea social ya cumplida por la Revolución" y seguir perfeccionándola. Pero seguidamente expresó que:

...es un derecho primario e inalienable el que tienen los obreros para asociarse, agremiándose, a fin de alcanzar sus legítimas aspiraciones y defender sus intereses. Pero, también es oportuno dejar sentado que el poder de los sindicatos está limitado por la Constitución y la ley y por la intervención tutelar del estado. De donde se sigue que los organismos gremiales actúan dentro de un campo de acción que le es propio, en defensa de sus intereses materiales y morales, pero que a los mismos les está vedado invadir otras esferas, como la de la política, en la cual no les corresponde actuar a dichos organismos, como tales, sino a sus componentes, como simples ciudadanos. En consecuencia, siendo incompatibles las actividades políticas con las gremiales, los que ejerzan la dirección, o formen parte o integren las comisiones directivas de las asociaciones obreras, no pueden aspirar a ser, al mismo tiempo, dirigentes políticos. Deben, pues, optar por ser dirigentes gremiales o dirigentes políticos¹⁰⁵.

La cita recogida, permite identificar algunos lineamientos programáticos en torno de las prácticas políticas y de gobierno dirigidas a los trabajadores; ante todo, cada uno debía ocupar su respectivo lugar sin invadir campos, debían elegir: o ser gremialista o político, pero no las dos funciones al mismo tiempo. Estas propuestas fueron duramente criticadas por los gremialistas, quienes argumentaban que para ganar las elecciones y conseguir

Delegación Regional de Trabajo y Previsión desempeñó un papel esencial para su organización. La alianza, así formada, quedó bajo la dirección de los viejos grupos dominantes en la provincia y no tardó en manifestar sus contradicciones. A principios de 1946, comenzaron los primeros conflictos; los laboristas no aceptaban la fórmula ya proclamada por los Irigoyenistas y que contaba con el apoyo de Perón: Dr. Lucio Cornejo Linares-Dr. Roberto San Millán, por ser representantes genuinos de la oligarquía salteña, pero finalmente se impone la misma.

¹⁰⁴ Ante todo, en su discurso hizo referencia a la no improvisación de Irigoyenismo, del cual provenía, considerando las reformas constitucionales de 1929, la cual fue efectuada durante el gobierno de su padre, el Dr. Julio Cornejo en la que se habían abolido los "privilegios de casta" y fue la única que contempló la situación de los trabajadores y la dilucidación de los conflictos entre el capital y el trabajo.

¹⁰⁵ Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 14 de mayo de 1946, Salta.

votos podían ser políticos y dirigentes gremiales a la par y una vez logrado el gobierno, se efectuaban esas distinciones tan categóricas.

En sintonía, entre las primeras medidas del programa de gobierno instalado en 1946 con importantes efectos político gubernamentales en Salta, fue el *Estatuto del Peón*, dirigido a la modificación de las relaciones semiserviles, que aún existían en las zonas rurales. En el caso de Salta, el estatuto tuvo influencia específica en torno del *Fuero Gaucho* promulgado por Güemes en Salta. La Ley Güemes estaba vigente formalmente, sin embargo no se aplicaba, ya que el gobierno local, en manos de la oligarquía salteña, no solo no se había puesto en funcionamiento la ley ante dicha, sino que tampoco se diagramaron las prácticas de gobierno dirigidas a posibilitar la intervención del Estado en las relaciones “patrón-peón”, ante todo en las fincas donde los vínculos sociales estaban trazados en un sistema de “haciendas”. Siguiendo a Álvarez, Leguizamón (2008, 2010a) el poder de garante del gobierno nacional comienza a ejercerse por encima de los gobiernos provinciales, mediante delegaciones del Ministerio de Trabajo, con grandes resistencias de la Sociedad Rural Salteña, que proponía otra legislación a partir de una Federación Rural, con participación patronal y de la iglesia, además de amenazar con el despido masivo de peones (Rodríguez, 2010). En dicha propuesta se realizaban consideraciones morales en torno del “campesinado”, como “la degeneración de sus costumbres” y sus características “genéricas inferiores respecto a los obreros del sur del país”, lo cual debía ser modificado.

Así, se promovía la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, lo cual se complementaba con el interés gubernamental de conocer y modificar los aspectos socio-morales y biológicos, que caracterizaban a las poblaciones salteñas las cuales, presuntamente, impedían su transformación. Esto también implicaba un exhaustivo conocimiento de los aspectos socio ambientales para intervenir sobre los llamados “problemas sociales”, lo cual, se asocia a la estatización de las necesidades sociales, cuya resolución se considera un deber “moral y social” y espiritual” (Álvarez, Leguizamón, 2010a: 145). En estos entramados discursivos y extradiscursivos se entrecruzan, las consideraciones propias del higienismo¹⁰⁶, la gestión eficaz de los “males sociales”, las

¹⁰⁶ La medicina desde su nacimiento y como práctica social, siguiendo a Foucault (2006), se inscribe en cómo el capitalismo desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, socializó un primer objeto que fue el cuerpo, ante todo en función de la fuerza laboral. Mientras que la medicina moderna resulta una medicina social cuyo fundamento es una cierta tecnología del cuerpo social. Ahora bien, esta medicina social de perfil asistencial en la Argentina (en la década del 40', guiadas por el Plan Carillo) tuvo entre sus antecedentes la higiene social, el sanitarismo e higienismo. Cuyas procedencias genealógicas, a su vez, se encuentran en el tiempo hacia fines del

degeneraciones “raciales” y espirituales, que conllevaron, a su vez, a la asistencia benéfica y luego, a la medicina social¹⁰⁷ y la tutela jurídica para con las poblaciones carentes.

Por tanto, el programa de gobierno instalado en la era del llamado primer peronismo en Salta, pretendía iniciar una nueva etapa en la provincia¹⁰⁸, de la mano de un divergente grupo de profesionales y miembros de las consideradas “familias tradicionales”.

Luego del golpe del 55’, con la llamada “Revolución Libertadora”, en la provincia de Salta se sucedieron una serie de gobernantes e interventores¹⁰⁹. En dicha época la ciudad capital denotaba un importante crecimiento debido a las migraciones internas, mientras que, según lo trabajado por Álvarez Leguizamón: “...surge una clase media que comienza a competir con la oligarquía y a constituirse, algunos de sus miembros, en una burguesía con intereses en los servicios y en el comercio” (2010a: 153)¹¹⁰.

Los programas de gobierno de la época, entonces, entre dictaduras y militares tienen la impronta de introducir criterios eficientistas en la gestión pública y social. Entre algunas cuestiones se institucionaliza el “desarrollo comunitario” en organismos públicos,

siglo XVIII cuando funcionaban en Bs. As el “Protomedicato” a partir de lo cual se crea en 1804 la Junta de Sanidad dirigida, no a conservar la vida de los habitantes, sino a precaver los males con que puede ser asaltada (Veronelli y Vernelli, 2004: 86, en Campana, 2012: 47). Luego de 1869, en el devenir del higienismo en Argentina puede observarse un lento, pero caro paso de un núcleo centrado en la prevención de epidemias hacia otro abocado a la construcción de dispositivos estatales de asistencia; de hecho fue Sarmiento en su presidencia quien advierte sobre la obligación del Estado de intervenir en materia de salubridad de las poblaciones desde la infraestructura hasta la pedagogía social de la higiene; así en 1873 se crea la cátedra de Higiene Pública en la facultad de medicina de Bs. As.; en 1883 la Dirección de Asistencia Pública inspirada y conducida por Ramos Mejía. En sus inicios la propuesta higienista se basó en un amplio programa de profilaxis sanitaria, social y moral a partir del descubrimiento de la enfermedad como problema social (Armus, 2000), así las epidemias, entre otros “males” que atacan a la población dejaron de ser considerados problemas individuales y pasaron a ser problemas de políticas públicas. A partir de 1900 se privilegió el carácter preventivo de las acciones sanitarias a través de medidas profilácticas en torno de la higiene industrial y las llamadas “plagas sociales” o enfermedades sociales (el alcoholismo, la tuberculosis, etc). Ahora bien estas prácticas de gobierno no se dirigían solo a la prevención y vigilancia epidemiológica, tenían vasta influencia en la vida social y familiar, ante todo, pobres. Así los médicos higienistas, fueron construyendo a partir de “saberes expertos”, problemas sociales y generando diversas técnicas de intervención del Estado en lo social-poblacional asociadas con la erradicación de enfermedades endémicas y hábitos culturales vinculados ante todo con lo cultural y moral, en relación a la “pobreza-vicio y pobreza enfermedad”. Ver: Campana, 2012...op...cit; Álvarez Leguizamón, 2008, 2010a...op...cit.

¹⁰⁷ En la provincia de Salta, el gobernador Dr. Ernesto M. Araóz, en 1943 ya planteaba esta concepción de medicina social, asociada a la prevención y la higiene social.

¹⁰⁸ Diario “Norte”, año 1970, Salta.

¹⁰⁹ Nos referimos al gobierno del interventor teniente coronel Arnoldo Fiser y Julio Lobo, que permanece hasta el 12 de mayo de 1956, cuando se hacía cargo de la dirección provincial el abogado porteño Alejandro Lastra, hasta el 5 de enero de 1957.

¹¹⁰ A pesar de estos “avances y retrocesos, giros y contragiros”, entre el 55’y la dictadura iniciada en 1976 la llamada aristocracia criolla local si bien se debilita, no pierde el control y/o la injerencia directa, por ej.: mediante los Ingenios azucareros, las fincas tabacaleras, los viñedos y bodegas, los cuales si bien tenían conflictos entre ellos orientaban sus prácticas políticas, directamente, al mantenimiento de sus “intereses” entre lo que podríamos llamar lógicas utilitaristas y, paradójicamente, conservadoras, tras lo cual más allá de los avances del peronismo en torno del trabajo, no se modificó sustancialmente la propiedad de la tierra y el Estado resultó débil en el control de la legislación laboral. Ver: Álvarez, Leguizamón, 2010a: 155.

mientras se pasa de denominar a la Asistencia pública, como asistencia social entre la construcción de organismos de acción, promoción y bienestar social (Álvarez, Leguizamón, 2010). Siguiendo a la antropóloga salteña, mientras que durante la última dictadura militar iniciada en 1976, en la provincia, el principio de subsidiariedad del Estado se reafirmaría, como sucedió en la nación, al tiempo que se pondrían a jugar diferentes mecanismos de represión de las manifestaciones sociales y políticas, a partir de lo cual las organizaciones obreras resultan perseguidas y sus demandas limitadas o anuladas; mientras que, en simultáneo, se revalorizan los saberes experticios en una fuerte apuesta por la técnica y los técnicos de intervención mediante la construcción de dispositivos en los cuales se conjuga lo cultural, el desarrollo y la constitución biológica de las poblaciones, ante todo aquellas inidentificadas como pobres.

Esto último, según Álvarez, Leguizamón (2010a), cobra singularidad en Salta, en tanto se enreda con el discurso de “la tradición” y las costumbres que debieran de ser erradicadas para alcanzar el desarrollo y la modernidad, de la mano del crecimiento, la urbanización y buena salud¹¹¹. Con dichos tramos discursivos y prácticas de gobierno en tal sentido, se construyen lo que podríamos llamar la proyección dirigida a rebasar los límites que las situaciones sociales y culturales, además de económicas, parecen aparejar con el atraso, a partir de lo cual no es posible el progreso, el desarrollo de este “interior” respecto de aquel” centro”, con sede en Buenos Aires.

Retomando el recorrido histórico señalado observamos cómo, el proceso de reforma estatal iniciado en los 90’, dispone un cuarto quiebre y desbloqueo definitivo para la instalación predominante de la lógica neoliberal de gobierno. Este se traza en torno de redefinición de la relación nación-provincia, con un esquema totalmente transformado por la reestructuración del Estado nacional, por la globalización y la apertura de la economía (Vázquez, 1996).

En este vaivén histórico político, en la provincia de Salta a comienzos de los 90’ se instala el programa de gobierno de la mano del recién inaugurado Partido Renovador (PRS), cuyo gobernador era el ex interventor de la dictadura Augusto Ulloa (1992-

¹¹¹ Uno de los saberes experticios que se desarrolla en la provincia remite a los estudios médicos que, en relación con la medicina social, refieren a las llamadas “patologías regionales”. La particularidad que asume en Salta la medicina social remite al modo en el cual el bienestar y el desarrollo se asocian a la existencia de ciertas pautas culturales que son consideradas patológicas, como el alcoholismo, el consumo de coca, hábitos alimenticios clasificados de no saludables, entre otros. Y es aquí donde la figura de Arturo Oñativia cobra relevancia en tanto el médico sanitarista salteño promovió la fundación del Instituto de Nutrición y el de Patologías regionales. Podríamos señalar, junto con Álvarez Leguizamón (2010), como en dicho momento se refuerzan las prácticas higienistas atravesadas de marcas biotipológicas de corte eminentemente racista, en torno del gobierno de las poblaciones, ante todo, pobres.

1995)¹¹². Los principios que guían y configuran la propuesta del PRS ponen en juego lógicas que recogen elementos centrales de la DSIC y del neoliberalismo en su versión alemana, en el proceso de configuración del Estado provincial. Entre los principios más importantes encontramos:

*I.- Respeto por el hombre: El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es el destinatario de todas nuestras acciones. Por eso nuestra filosofía es humanista... II.- Valoración de la familia... Porque creemos en la vida, nos oponemos al aborto. III.- Libertad, solidaridad y responsabilidad social: Creemos en la eficacia de la libertad, pero introduciendo el concepto de solidaridad y de responsabilidad social. V.- Construcción de un Estado moderno, eficiente y ágil... VII.- Defensa de la iniciativa privada... VIII.- Gestión ordenada y administración transparente de los bienes públicos: El objetivo del gobierno es el bien común.*¹¹³

A este programa le precede, en los albores del retorno a la democracia, el gobierno justicialistas/peronista de la mano de Roberto Romero (1983-1987). Dicho programa de gobierno se instala en el regreso de la democracia a nivel nacional, bajo los lemas de lealtad al P.J.: *“Su administración se caracterizó por desarrollar en los primeros años trabajos de promoción en el campo social. De esta manera se elaboraron planes de salud que redujeron la mortalidad infantil, junto a proyectos educacionales, que llevaron a los docente a percibir un salario superior al 40 por ciento en relación a la Nación”*, dice el historiador Walter Bosio, 1995 (s/d).

Uno de los ejes de gobierno fue la obra pública, mientras que se señalaba que el gobierno “para la provincia” no podía quedar aislado de la integración regional. En tal sentido, en primer lugar se promueve el Acta de Coincidencia Democrática que se firma el 18 de Julio de 1984 en el Cabildo Histórico con la presencia del Ministro del Interior Dr. Antonio Tróccoli y varios de los principales dirigentes políticos nacionales. En segundo lugar, para evitar “el aislamiento en el individualismo provincial” se apunta a institucionalizar como región operativa al Norte Grande, integrado por nueve provincias del Noroeste y Nordeste argentino. El 10 de octubre de 1986, los gobernadores de esas nueve provincias del NOA y del NEA suscriben en Salta la “Declaración para la

¹¹² Roberto Augusto Ulloa llegó a la provincia de Salta en 1978 como gobernador-interventor designado por el gobierno de facto a cargo de J. Rafael Videla, cargo al que renuncia en 1983 y poco antes, en octubre de 1982 funda el partido Renovador de Salta (PRS), en cuya representación resulta electo en 1991. En su segundo mandato como gobernador se produjeron numerosas huelgas de maestros, empleados estatales, etc. La oposición peronista, con mayoría en la Legislatura, bloqueó sus proyectos de reforma. Se trató este de un período de instalación y fortalecimiento de las tecnologías de gobierno neoliberales, ante todo mediante procesos masivos de despidos y ajustes estructurales en torno del gasto público. En 2007 renunció al PRS, en repudio a la alianza de este partido con el Frente para la Victoria, y anunció su apoyo a una nueva agrupación política denominada *Propuesta Salteña*. Fuente: página web oficial del PRS: www.partidorenovador.com.ar; consultada marzo, 2012.

¹¹³ Ver: página web oficial del PRS: www.partidorenovador.com.ar; consultada marzo, 2012.

Integración del Norte Grande Argentino”¹¹⁴. En estas líneas de reformas, concordias y comuniones inter e intra provinciales se plantea la necesidad de reformar la Constitución de la Provincia para consolidar esas garantías, para asegurar las autonomías municipales y para dar a los partidos políticos y a la región rango constitucional¹¹⁵, mientras que puso en marcha un plan económico provincial preponderantemente de perfil keynesiano.

Entre 1987y 1991¹¹⁶ que se elabora el Ley N° 6583 (15/03/1990)¹¹⁷ como antecedentes a la Reforma administrativa del Estado y la Emergencia económica. Desde 1991 a 1995 la dirección de gobierno provincial re-torna a las lógicas del PRS, a partir de lo cual se recupera el decreto de Reforma de Estado del 90’, reformando, derogando y realizando alguno de los capítulos del mismo; lo cual tuvo entre sus efectos críticos el:

Retardo el traspaso de la Caja de Jubilaciones de la provincia a la Nación condición indispensable para recibir ayuda del gobierno nacional, mientras que las cesantías o retiros voluntarios no fueron considerados: Problemas de financiamiento y una fuerte recesión generaron durante los últimos años de su gobierno, un clima de descontento social generalizado producido fundamentalmente por el retraso en de pago de los sueldos a empleado públicos- en dos y tres meses- desencadenando una crisis similar a la de otras provincias del país. (Álvarez Leguizamón, 1995, en: Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 218)

En esta línea, y según las críticas construidas en el marco del gobierno instalado en 1995, la crisis del gobierno Renovador resulta, según lo sugerido Juan Manuel Urtubey, de que:

¹¹⁴ Entre los objetivos acordados se destacan los referidos a la adecuación de los mecanismos jurídicos e institucionales tendientes a mejorar la capacidad de compra regional; la organización y promoción de las exportaciones regionales y el incremento del intercambio con los países latinoamericanos; la descentralización de los servicios nacionales vinculados con el comercio exterior; la creación de un sistema regional de investigación y desarrollo; la elaboración de un plan de industrialización regional y la implementación de una red de transporte transversal – multimodal.

¹¹⁵ Posteriormente el ex gobernador asume la banca de Diputado Nacional por la provincia de Salta en el Congreso de la Nación por el período 1987 – 1991. Sin pretender personalizar los programas y procesos cabe recuperar la cita actual del diario el Tribuno (al cumplirse 31 años de democracia) ya que en las mismas se señala el perfil empresarial, gestivo, pastoral y peronista del programa de gobierno de la época: “...fue un empresario que hizo todo en base al trabajo y a la visión de futuro y era un enamorado de Salta” (El Tribuno, 17-02-2015)

¹¹⁶ La gobernación estaba en manos de Hernán Cornejo, quien asume con la provincia sumida en una profunda crisis económica y social. El gobernador convoca a una asamblea legislativa a fines de diciembre y en un dramático mensaje informa la real situación de la provincia, envía un proyecto de ley de emergencia económica y solicita el acompañamiento de los partidarios y de la oposición. Durante los cuatro años el gobierno se enfrentó con una férrea oposición conformada por los partidos Radical y Renovador de Salta, y los “romeristas”, liderados por Marcelo E. Cantarero en la Cámara de Diputados, Juan C. Romero en el Senado Nacional y Roberto Romero desde la Cámara de Diputados de la Nación, todos apoyados periodísticamente por el Diario “El Tribuno”.

¹¹⁷ El Decreto de Necesidad y Urgencia, luego Ley N° 6.583 postula, para el plazo de una año, un conjunto de medidas y decisiones político-gubernamentales, que luego serán recuperadas y reconfiguradas en el proceso de Reforma de Estado del gobierno que asume en 1995, por ej., las suspensiones de subsidios como modalidad de reducción de gastos en el presupuesto general de la provincial (Cap. 1) en la cual se exceptúan los subsidios destinados a atender comedores, personas carenciadas, se realizan modificaciones en torno de empleo en el Estado provincial estableciendo pautas para áreas vacantes, los retiros voluntarios y los despidos asegurando la “eficacia, eficiencia y productividad en las intervenciones estatales”, en los diferentes ámbitos (créditos, empleo, subsidios, etc.). En el capítulo II se hace referencia a las “privatizaciones y participación del capital privado”. En el Art. 78 se indica la “privatización de servicios” a modo de mejorar prestaciones, disminuir gastos y aumentar eficiencia.

...el Estado provincial en manos de los actores de la vieja política, era un sobreviviente de los períodos de alta inflación y crisis fiscal, repitiendo en su actuación el intento de resolución autoritaria de su inadecuación a la nueva realidad, tal como se dio en el Estado Nacional en los años setenta durante el gobierno militar de Videla, Agosti, Bussi y Ulloa entre otros (...), el PRS no pudo administrar la multiplicidad de opiniones y disensos que caracterizan a la sociedad civil. (Juan Manuel Urtubey, 1999: 30. JMU, de ahora en más).¹¹⁸

Como veremos, acorde a estos tramos discursivos se promueve la “modernización y reforma de Estado”, en la provincia.

Así, entre las crisis y las reformas, en 1995 se re-instala el programa de gobierno de perfil neoliberal local, bajo la gobernación de Juan Carlos Romero¹¹⁹, con una explícita alineación al proyecto nacional, aunque con las singularidades que lo atraviesan y posibilitan.

2-El programa de gobierno salteño entre 1995-2003: entre la tradición y la transición neoliberal local

En este tramo del análisis propuesto, recapitulamos la historia reciente de las reformas estatales y económicas en la provincia de Salta, para observar que el año 1995 opera como un punto de inflexión, principalmente político, en los tramos de dicha historia local. Ciertamente, desde finales de los 80´ hasta mediados de los 90´ nos encontramos con dos programas de gobierno que van reaccionando frente a los síntomas de la crisis fiscal del Estado dado que la misma pone en cuestión la llamada “gobernabilidad”. De hecho, desde entonces se hacían explícitas las referencias a la crisis del Estado salteño y del modelo “super-burocrático”, en el que, parafraseando a Urtubey, su excesiva complejidad decisional era una pesada carga para la economía de la sociedad, mientras las

¹¹⁸ Para aproximarnos a las traducciones y traiciones de los avatares de la gubernamentalidad salteña en la época analizada, trabajaremos con el libro “*Sembrando Progreso* (1999)”, autoría del actual gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, quien con 26 años, se convierte en Secretario de Gobierno de Juan Carlos Romero. A partir de allí, ascendió rápidamente pasando a ser coordinador del programa Familia Propietaria, secretario de prensa, vocero del gobernador, diputado provincial y diputado nacional. Dicho libro es trabajado en profundidad, no sólo porque resulta un diagnóstico de las tramas político-gubernamentales de la época, si no y también, porque muchos de los entramados enunciativos ahí propuestos atravesarán, de modo singular, el programa de gobierno provincial desde 2007 hasta el año 2013. El modo de citar el libro fuente, en el cuerpo del texto es: J.M.U, 1999: pp.:

¹¹⁹ Ingresa a la actividad política cuando es designado senador nacional en 1986, por el voto mayoritario que el padre consigue en las Cámaras para esa designación. Para los dirigentes, ese cargo era una posición que se alcanzaba en la culminación de sus carreras por quienes, además, daban sobradas muestras de formación e ideales políticos (que decían, él no los tenía). A raíz de la muerte de su padre en 1992 y en un momento de crisis del P.J. local (por la derrota electoral de 1991), asume la presidencia del partido y es considerado el mejor candidato para disputar en las elecciones a gobernador de 1995 (por su relación con el presidente Menem, sus recursos económicos y el legado político familiar, entre otros). Dos reformas de la Constitución Provincial mediante, los posteriores triunfos electorales –en 1999 con el histórico 58 % de los votos- expresaban su incuestionable hegemonía política y, para muchos dirigentes, el efecto demagógico del líder mantenía los votos de muchos de ellos. Ver: Maidana, 2010 y 2013...op...cit.

espasmódicas reacciones de sus gobernantes aumentaban la sensación de anarquía (J.M.U., 1999). A partir de lo cual se sostiene que con la reforma se debe buscar una mayor eficiencia y eficacia en las organizaciones estatales en dirección a la racionalización del gasto y apuntando a reducir el tiempo que media entre la toma de decisión política y la ejecución administrativa (J.M.U., 1999).

Justamente, esto es lo que sucede en 1995, por un lado, el programa de gobierno instalado en dicha época organiza estratégicamente las propuestas reformistas, que ya estaban instaladas en los programas precedentes y las aplica, radicalmente. Pero por otro lado, goza de ciertas capacidades político/partidarias que le permiten llevar adelante su plan de reforma como obtener una mayoría propia en ambas Cámaras legislativas, producto de haber resuelto bajo su liderazgo la crisis interna del PJ, que había dividido al partido desde la gestión de Hernán Cornejo.

En este sentido, es crucial observar el modo en que este cambio político no sólo permite llevar adelante reformas, que de algún modo ya estaban instaladas en la agenda política provincial, sino que además modifica el tipo de relaciones que el gobierno provincial establece con la Nación, así como con los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs), que apoyan técnica y financieramente dicha reforma, entre otras cuestiones.

2.1-La-s Reforma-s de Estado-s (1995-2003): entre los abandonos, las transformaciones, las aperturas, la vida y la-s muerte-s.

A partir del año 1995 se inicia en Salta la Reforma Administrativa del Estado, acorde a lo enunciado en varios decretos y discursos gubernamentales se trata de superar la crisis del Estado Benefactor, asociada a los problemas internos y externos, que se evidencian en los 70', basados en la energía barata por la crisis del petróleo, la inflación junto con la recesión, el agotamiento del modelo industrial sustitutivo de las importaciones y el crecimiento de la disputa empresarios-sindicatos por la redistribución de ingreso.

Así, la reforma de Estado de los 90' implicó la transferencia a terceros (empresas, ONGs, etc.) de la responsabilidad de producir determinados bienes y servicios, así como de prestarlos y garantizarlos. Además de la privatización, descentralización y tercerización laboral, que fueron sus instrumentos principales, también se incluye la desregulación de numerosas actividades comerciales, como el control de precios, promociones e intervenciones en los mercados.

En tal sentido, en el programa de gobierno instalado en 1995 hasta el 2007 se señalan tres generaciones de reforma-s. En las denominadas, “*reformas de primera generación*” (1995-1999) la Provincia de Salta buscó, a través del marco normativo, la privatización de servicios y la implementación de sistemas de gestión, mejorar la eficiencia en la asignación presupuestaria y el ordenamiento del Estado:

Entre las medidas estructurales cabe señalar la transferencia a la actividad privada de la gestión de los servicios públicos de distribución de energía y agua potable y, además, un plan de reformas del Estado alejado de los intentos de mera amputación de organismos estatales con los cuales se ha venido considerando a la reforma de aquel y concebido como la reformulación de las competencias del Gobierno y la sociedad civil y como un autentico proceso de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de funciones públicas, hasta hoy, formalmente en manos del Estado, aunque en verdad, no realizadas. (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 217-18).

En dicho diagrama de poder las prácticas de gobierno también se dirigen a producir reformas económicas y a la par reformas de las políticas sociales, lo cual implicó, ante todo un proceso planificado de descentralización, promoviendo la participación comunitaria y de desarrollo local. También implicó avistar las grietas en las acciones de políticas sociales para enfrentar la carestía de los sectores con escasos recursos, lo cual se debía a la ineficiencia expresada en la ausencia de controles y a la superposición de estructuras. Ahora bien, en consonancia con lo acontecido en el programa de gobierno instalado en 1989, este ensamblaje de prácticas de gobierno en Salta se construye entre los tramos discursivos y extradiscursivos del peronismo-justicialista local, con la singularidad de que el “partido justicialista en la Argentina de los 90” se inserta en un “nuevo orden mundial” de globalización e intercambios fluidos e influyentes, a partir de lo cual, la provincia de Salta tiene que diagramar sus prácticas de gobierno y políticas en torno de tres niveles, que describen un nuevo contexto político:

...a) necesidad de adecuación del Estado a las características transnacionales que adquieren los fenómenos; b) la nueva conflictividad social que debe resolver el Estado y, c) la necesidad de hacer frente a los ajuste culturales producto de la extensión de las comunicaciones. (J.M.U., 1999: 81).

Ante todo, en este camino de re-formas y transiciones reconfiguradas, para dar cuenta de los fenómenos contemporáneos de transformación global el gobierno de Estado local parte de la siguiente afirmación: “...para el peronismo lo determinante a la hora de formular las políticas es la realidad (...) lo sustantiva que define el servo político” (J.M.U., 1999: 63). Por eso se sostiene, en una particular re-lectura del peronismo, e incluso re-apropiación de los dichos de Perón, que los “modelos políticos” tienen

particularidades histórico-epocales y contextuales, a las cuales el peronismo ha sabido adaptarse, pues no reviste un carácter, según el planteo analizado, de ideología partidaria cerrada, sino que son los “principios humanistas los que permiten explicar y comprender el mundo de manera abierta y no parcial”: “*Pues, la formulación de la política se atiende a dos verdades evidentes: la realidad y el bienestar del país, partiendo de ahí para buscar el pleno desarrollo de la sociedad*” (J.M.U,1999: 64).

De ahí la importancia de reconocer la presencia del movimiento peronista y de su expresión institucional y jurídica el partido justicialista, así como de recuperar la base “filosófico moral”, ante todo, centrada en el “humanismo cristiano” que reconoce la fundamental igualdad de todos los hombres entre sí, como hijos que son de un mismo padre. Esto conlleva a sostener la “solidaridad” como exigencia propia del amor fraterno, como así también la justicia social, principio de equidad, lo cual se convalida recuperando la siguiente alocución de Perón:

El Cristianismo enriqueció la personalidad del hombre e hizo de la libertad, teórica y limitada hasta entonces, una posibilidad universal. En evolución ordenada, el pensamiento cristiano, que perfeccionó a la visión genial de los griegos (...) Lo que le faltó a Grecia para la definición perfecta de la y del Estado fue, precisamente, lo aportado por el cristianismo: su hombre vertical, eterno, imagen de Dios. De él se pasa y a la familia, al hogar; su unidad se convierte en plasma que a través de los municipios integran los Estados y sobre los que descansaran las modernas colectividades. (Perón 09/abril, 1949, en: J.M.U., 1999: 66).

Lo antedicho refleja, por un lado, la influencia y vinculación estrecha entre el peronismo y la DSIC en el primer gobierno peronista, de la mano de la consideración de la existencia de derechos fundamentales y de un orden total que, entre la concordia y conciliación posibilitarían el beneficio pleno de los hombres humanos y solidarios, posterior al beneficio del Estado.

Y, por otro lado, en la colonización neoliberal de dicha doctrina y las traducciones neoliberales locales con matices diversos, estos discursos ponen a jugar el principio de “subsidiariedad de Estado”, a partir de lo cual el bienestar del individuo y su felicidad estaban en manos del mismo individuo, acorde a la inversión en capitales - humanos y sociales- según herramientas mínimas otorgadas por los Estados, encargados de la articulación y gestión de las condiciones posibles para que el bienestar del individuo redunde en sí mismo.

Esto permitió construir programas y prácticas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, mientras se promovía la movilización de los sectores productivos y la

eliminación de imperfecciones en la correcta asignación de recursos, lo cual se plasmó en las “*reformas de segunda generación*” (1995/99-2003). En éstas reformas, se hizo hincapié en experiencias de descentralización educativa, autogestión hospitalaria, ordenamiento del sistema de subsidios para Unidades Educativas Públicas de Gestión Privada, el gerenciamiento privado de un hospital público y gratuito, entre otras, buscando un cambio estructural de los componentes del desarrollo humano, que permita una mejor prestación de los servicios a la población más necesitada.¹²⁰

Ante todo, en este proceso de re-formas y re-configuraciones, se sostenía que en el plano económico las provincias argentinas no podían quedar desvinculadas del mercado internacional, a partir de lo cual se programó un plan económico estratégico en Salta. Para esto se promueve un perfil productivo de la provincia en torno de 7 variables: nuevos mercados, polos de desarrollo, materia prima, tecnología de punta, productividad, competitivas, pleno empleo, esto último le otorga un perfil social propio del justicialismo al proyecto económico que se traslada a la comunidad e individualidad del sujeto económico.

En este sentido, pero ya en el marco de las prácticas estratégicas codificadas en torno del Estado y la generación de marcos y condiciones para que los mercados mundiales y regionales sean posibles y propicien crecimiento con progreso o a la inversa, también se recupera la “visión estratégica de Perón”, en torno del valor de los alimentos y los recursos naturales, lo cual implicaría un mundo de producción y perspectiva ecológica, mientras que se plantea perfeccionar la democracia “a través de las organizaciones del pueblo”, que le otorguen a la sociedad y, no solo al gobierno y el Estado con su partido, participación y poder en las decisiones. En tanto, las políticas que trazan el marco de las políticas nacionales es la mundial, por lo cual el programa de gobierno salteño de los

¹²⁰ En el Decreto N°58/95, se postula la necesidad de aplicar la Ley Federal de Educación acorde a las particularidades de la provincia y la región la cual debe ser ratificada mediante la Ley De Educación Provincial promoviendo la reforma educativa considerada, para esto se promueve la novedosa participación real de la docencia en torno de las Conferencias de Educadores y la posibilidad de administrar las unidades escolares autogestionadas dirigidas por los directores de escuelas y con la asistencia de miembros de las comunidades educativas (Art. 40, boletín oficial 14814). Para esto se reconoce, en el Artículo 1, el derecho a enseñar y aprender, mientras se reivindica la gratuidad de la educación y se fortalece la calidad de la educación como “servicio”. En el caso de la Salud, se promueven los principios sobre el Planes de Salud Provincial, partir de lo cual “el Art 2 postula que: “*La prestaciones previstas en el marco normativo (...) estarán basadas en la estrategia de atención primaria de la salud y en el derecho del habitante a la libre elección del profesional, con las limitaciones propias del manejo eficiente de los recursos*”. Esto implicó la Reestructuración el Instituto Provincial de Seguros (IPS), en el marco de una institucionalidad y gestión mixta en tanto ente público no estatal (Art. 2). Mientras que en el Capítulo III se disponen “políticas de asistencia de la salud del gobierno de la provincia que se funda en el sistema de redes de servicios de salud centradas en hospitales públicos de autogestión (Art. 15) promueve la Reestructuración de los Hospitales Públicos y se concluye dicho decreto definiendo a la salud como “un deber de cada persona” (Art. 28).

90'sosiene que se ha dado un salto a la propuesta peronista del "continentalismo", hacia universalización en el sentido de la historia.

Esta lectura particular y estratégica del peronismo, pretende dejar en claro que el mismo siempre miró al mundo para crearse, reconociendo la realidad y buscando el medio de y para aprovechar esas circunstancias elaborando una montura (herramienta de confección y concepción político dirigencial, ante todo), que permita actuar sobre este mundo "nuevo" (JMU, 1999: 70). Ahora bien, sin pretender una analítica del peronismo, sino una aproximación a los quiebres y singularidades del heterogéneo abanico de racionalidades políticas en el programa de gobierno salteño de los 90', cabe señalar que si nos atenemos a la doctrina peronista y los dichos de Perón, al inicio de su tercer gobierno (1974), reemplaza su propuesta de "continentalismo" por la de "universalismo", cuando realiza reflexiones específicas acerca de la situación internacional y la posición Argentina en el concierto mundial. Sin embargo, no renuncia a la tercera posición: "*Vendrá después – pensamos-el universalismo, que es la última etapa de integración mundial. Quizá, allí sea necesario crear otras doctrinas*"¹²¹, el universalismo responde a que todos los hombres se convenzan de su "hermandad" y de la necesidad de trabajar para defenderse de un modo conjunto, es una extensión del continentalismo propuesto para una integración a nivel regional.

En tal sentido, la singularidad salteña a nivel regional y nacional nos remite a la equiparación que se pretende realizar en las afirmaciones del gobierno salteño entre "universalismo" y "globalización" resultan una traducción, que marca una singular diferencia del programa de gobierno provincial y sus declives neoliberales. Puesto que, entre otras cuestiones, la globalización ha implicado la extensión al resto del mundo de un único patrón económico y tecnológico hegemónico, esto mediante una perfección de los medios tecnológicos y comunicacionales, de modos unilaterales, promoviendo espacios multiculturales homogéneos y fácilmente identificables. En estos puntos el universalismo propuesto por Perón se distancia ampliamente, ya que constituiría aquel estadio cultural deseable en el que aporten todas o al menos la mayoría de las culturas, incluso las consideradas marginales. Mientras que el universalismo piensa en "la comunidad de hermanos", la globalización aparejada a la transnacionalización capitalista se expande modelizando el "único y mejor" de los mundos posibles, homogeneizando diferencias coloniales, entre otras; mientras que se constituye entre hebras atravesadas de profundas

¹²¹ Perón, 19 de abril de 1974, "Inauguración en los Cursos de Doctrina Justicialista", en: Poderti, 2010: 216-17.

desigualdades, divisiones económicas, sociales, culturales, étnicas, entre otras. Esto conlleva a singulares configuraciones geopolíticas y geoculturales en las cuales los países quedan, nodalmente, imbricados en el camino hacia el “desarrollo capitalista de perfil neoliberal”, ante todo (Poderti, 2010; Hobsbawm, 1998; Jameson, 1984; Wahren, 2011).

Así, el programa de gobierno provincial, se materializa en proposiciones y prácticas dirigidas a la generación de mercados, el ordenamiento de una política financiera que se legitima con la división del Ministerio de Economía en dos entidades de gestión: el Ministerio de Hacienda (abocado a las políticas de ingresos, regalías coparticipación, impositivas y deuda pública) y el Ministerio de Producción y Empleo modeló el perfil productivo provincial enmarcado en el crecimiento e integración elaborando un plan de obras públicas inédito).

Ante todo, se motoriza la integración del Mercado común del Sur (MERCOSUR). La oportunidad salteña se encuentra en la reforma de la Carta Magna en el 1994¹²², de la cual Juan Carlos Romero fue constituyente. Dicha reforma elabora y propone un nuevo marco jurídico que le permita a las provincias desarrollar sus propias estrategias autónomas de crecimiento y de inserción internacional de manos del motor del pensamiento peronista concibiendo la herramienta para cabalgar sobre la evolución historia. A partir de tales marcos jurídicos, la provincia de Salta se convierte en la puerta del corredor bioceánico, como iniciativa de integración regional, que no sería posible sin la reforma de Estado para adecuarlo a las necesidades de dicha estrategia económica y de desarrollo. De este modo el gobierno, que asume en el 95', se propone promover el desarrollo armónico regional dentro del centro oeste de Sudamérica en el marco de las tendencias de agrupación mundial, evitando o modificando el centralismo del puerto bonaerense para la exportación e importación (J.M.U., 1999).

Ante todo, se pone el acento en el ZICOUSR¹²³ (Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano) del cual Salta forma parte por su ubicación geográfica, es un foco de reservas energéticas y de recursos importante.

¹²² Esto refiere al artículo 124 de la constitución introducido por la convención nacional de 1994: “*Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo armónico y social establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecte las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio*” (Constitución Nacional Argentina, 1994).

¹²³ El ZICOUSR está integrado por las regiones chilenas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama; por las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Stgo. del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, por los Dptos. bolivianos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz; Paraguay y los

Ahora bien, en el trazo de marcos y oportunidades promoviendo el crecimiento provincial mediante políticas económicas de integración regional, también se ponen en juego mecanismos – disciplinares y biopolíticos - de “ordenamientos espacio-territorial y poblacional” para posibilitar dicho “desarrollo”. En tal sentido, en palabras del gobernador provincial Juan Carlos Romero:

*En el interior de la provincia no existen polos de desarrollo, motivo principal de la migración hacia esta capital (...) Surgen entonces los asentamientos, duplicándose los gastos en el suministro de servicios y restringiéndose el mercado de trabajo. Queremos dar a la gente la posibilidad de permanecer en sus lugares de origen, asegurándoles viviendas dignas y los servicios básicos de salud, educación, luz, agua, gas, caminos e infraestructura productiva que permitan intensificar las inversiones en el interior de las provincias.*¹²⁴

Así, estas programáticas gubernamentales dirigidas hacia la interacción y desarrollo mundial, también implican procesos de urbanización y modernización hacia “el interior” de las ciudades y la provincia. En el Decreto N° 57/95¹²⁵ se postula un “Plan Regulador de la ciudad de Salta”, partiendo de las consideraciones siguientes:

...la provincia de Salta ingresará en el siglo XX con cuatro problemas fundamentales. El primero, consistente en la premiosa necesidad de reconvertir sus producciones, a fin de hacerlas aceptables en una economía mundial ya globalizada, de tal suerte de lograr una estrecha relación con mercados globales. (Estos se facilita mediante la reconversión productiva ante dicha) El segundo problema (...) hace a la transformación educativa la provincia. Que el tercero de dichos problemas es el de la atención de la salud. Que el cuatro, por cierto, del crecimiento anárquico de la ciudad de Salta (Considerandos del decreto N°57/95).

Dichas afirmaciones conllevan a un plan de gestión “biopolítica”, dirigido al ordenamiento del crecimiento biológico y espacial de las poblaciones capitalinas y provinciales. Para lo cual es fundamental ejercer el “poder de policía del Estado”:

...un Plan Regulador que imposibilite, llegado el caso, el crecimiento anárquico de la ciudad, a través del ejercicio del poder de “policía del Estado” o que condicione el mismo a la presencia de servicios y ofertas razonables de trabajo. Pero debe provenir, además, de una nueva concepción de espacio geográfico y humano de la ciudad y sus contornos. (Decreto N°57/95, considerandos.)

Estados Brasileños de Matto Grosso y Matto Grosso Sul y 4 Dptos. departamentos de Perú. Es una institución impulsada por gobiernos y empresarios, con el objetivo de coordinar posiciones consensuadas de amplio apoyo territorial para integrar la zona central de América del Sur. Desde 1997 se trabaja activamente para lograr una inserción internacional competitiva de la región, promoviendo el desarrollo de infraestructura para la articulación de ejes de comunicación comunes, que faciliten la movilidad de personas y bienes, agilicen el comercio intra y extra zona y contribuyan al encuentro y reconocimiento de los pueblos que la integran, potenciando el desarrollo armónico y sostenido. Pág. Web oficial: <http://www.zicsur.org/quees.php>, consultada marzo-abril, 2012.

¹²⁴Gobernador. J. C. Romero, 1 de mayo de 1998, en J.M.U., 1999: 122-23.

¹²⁵ Decreto N° 57/95. Boletín oficial N° 14.814. Gobernación de la Provincia de Salta.

Para llevar adelante lo antedicho, se “considera” y apunta también a los marcos disciplinares del urbanismo y a la capacidad de gestión y presión gubernamental, poniendo en juego, a su vez, dispositivos de seguridad¹²⁶ dirigidos a prever y gestionar, probabilísticamente, el número de habitantes que podría tener la ciudad de Salta, en el futuro. Se hace especial hincapié en controlar el crecimiento vinculado con las migraciones internas y de otros países, además deberán analizarse los impactos ambientales y naturales vinculados con el uso de servicios públicos, viviendas, es decir con el crecimiento demográfico y su impacto urbano, la mortalidad y la natalidad, mientras se prevé la cantidad óptima de habitantes y se construye un mapa alternativo de ubicación y reubicación de las poblaciones en los departamentos cercanos a la capital (Anexo, Art. 1, 2 y 3).

Tal propuesta de re-acomodo poblacional decretado como necesario y problemático pone en juego tecnologías de gobierno dirigidas al control y gestión de la poblaciones urbanas, según técnicas de medición, disciplinamiento y seguridad ante el riesgo que, heterogéneamente, se conjugan en la búsqueda de los objetivos de gobierno que remiten al crecimiento económico integral e integrado manifiesto y posibilitado por la eficiente gestión de un Estado no centralista y, mediante la sociedad civil, ante todo.

Estas prácticas de gobierno se acompañan de técnicas vinculadas con la “capacitación” del personal y de las poblaciones pobres desempleadas, ante todo, como estrategia para mejorar los recursos humanos y con ello la igualdad de oportunidades: “...*En definitiva, invertir en capital humano preferentemente en los sectores que más lo necesitan.*” (J.M.U., 1999: 150), lo cual implica generar un marco propicio de “competitividad”, reduciendo gastos, impuestos, mejorando la prestación de servicios camineros, transportes, energías, así como promover créditos y servicios¹²⁷.

¹²⁶Foucault (2006, 2007) distingue tres tipos de dispositivos: jurídicos; disciplinarios y de seguridad. Los primeros encargados de formular leyes en torno del código binario prohibición/permisión. Los segundos, establecerán entramados de control para construir el cuerpo del trabajado dócil y útil, y en caso de aparecer una conducta criminal, se pondrán en marcha técnicas orientadas a la corrección (encierro, trabajo comunitario, seguimiento psicológico, etc.), pues dicho dispositivo opera con el código binario normal/anormal, sobre todo. Por su parte, los dispositivos de seguridad, implican el ejercicio de la “gestión de la tasa de criminalidad”, dentro del un intervalo probable y tolerable, ponen en marcha una serie de técnicas (estadísticas, mediciones, diseños urbanos, etc.) capaces de insertar el fenómeno del crimen dentro de una serie de acontecimientos probables para así realizar un cálculo del riesgo y de costos. Ahora bien, la predominancia de los dispositivos de seguridad no implica la ausencia de los otros mecanismos de gobierno. Ver: Foucault, 2006, 2007...op...cit.; C. Gómez, 2010...op...cit.

¹²⁷ Por ley N° 6838, instalada en el gobierno de 1991-1995 y remodelada a lo largo de los gobiernos sucesivos y aún vigente, se establece un nuevo régimen de contrataciones; se ejecutará una ley de exenciones impositivas para emprendimientos productivos generadores de empleos e inversión: se promueve la protección de la iniciativa privada, la reducción del impuesto inmobiliario rural, la reducción de los aportes patronales, la promoción de certificación de calidad y origen, la reducción de tarifa de gas y electricidad para parque industriales y zona

Asimismo se incentivan las actividades de las empresas privadas, mientras se promueven las privatizaciones y se otorga seguridad jurídica, como marco requerido por los capitales para operar sin aumentar costos y, así favorecer el crecimiento económico provincial¹²⁸.

Continuando con el proceso de Reforma Provincial, ya en su etapa final, Salta se abocó con decisión en la “*tercera generación de la reforma*” (2003-2007). Dentro de esta etapa, se continuó con la implementación de sistemas de gestión, a través de lo cual se firmó un convenio y desarrollado un plan estratégico para la implementación del *e-government* y *e-procurement*, cuyos objetivos principales fueron los de hacer más transparente la gestión, modernizar los servicios del Gobierno para los ciudadanos y empresas de la Provincia, así como mejorar de manera significativa la eficiencia de los procesos internos de gobierno¹²⁹.

Por último, en este tejido de racionalidades políticas y prácticas de gobierno dirigidas al gobierno de las poblaciones y los territorios, existen diversos efectos, que reconfiguran el rol del Estado en el proceso programático y estratégico de su codificación. Nos referiremos, brevemente, al uso y abuso del “poder de policía”, el cual entra a jugar para “gobernar” los efectos producidos por la profunda reconversión en los programa de gobierno dirigidos al ahorro de la mano de obra, disminución de los puestos laborales (entre las primeras medidas del gobierno se encuentran los masivos despidos, declarando “prescindibles” a miles de empleados públicos), intensificación del trabajo y prolongación de la jornada, disminución de salarios reales, desempleo y precarización laboral; aparejado con un creciente proceso de acumulación de las riquezas en pocas

franca. Cabe mencionar algunos de los considerandos del Decreto N°64 de 1995 en el cual se sostienen que: “*las normas, además, parten del presupuesto que, en las nuevas condiciones de la reforma del Estado y del mercado acaecidas como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, el crecimiento económico tiene como motor las decisiones empresariales de inversión*” (Boletín oficial N°14.814, 14 de diciembre de 1995), para lo cual se postula la necesidad de instalar un Sistema de Información de la provincia como medio que facilite a los empresarios locales la toma de sus decisiones de inversión suministrándole información y colaborando con la reconversión de la ingeniería empresarial, para lo cual se decreta “Establecer el Sistema de Gestión de la Provincia” (Art. 1)

¹²⁸ Este es el marco de reformas fiscales, en las cuales se insertan algunas reformas más específicas en materia de administración pública, que contaron con el apoyo del BID y el Banco Mundial. Uno de los ejes centrales de la estrategia de la provincia era el fortalecimiento institucional y la modernización de las áreas vinculadas con la capacidad de recaudación del Estado, a partir de lo cual se promueve el Fortalecimiento de la Dirección General de Rentas, Fortalecimiento de la Dirección General Impositiva (Catastro), Fortalecimiento de la Administración Financiera; otro de los ejes centrales era el de las reformas que tuvieran que ver con la gestión presupuestaria y por lo tanto con la administración del gasto. Para ello, se diseñó un programa de Reforma Integral del Sector Público Provincial. Otro de los ítems centrales era el de la gestión de los recursos humanos, apuntando principalmente a controlar el nivel de gasto público destinado a salarios. Ahora bien, algunas de las reformas que habían sido comprometidas a través del préstamo de ajuste (PRL), que Salta obtuvo en 1997, fueron sostenidas con fondos del programa provincias II. Ver: Banco Mundial, 2004...op...cit., World Bank, 2000...op...cit; Posadas, 2007...op...cit.

¹²⁹ Fuente: página oficial de Juan Carlos Romero: http://www.romerojuancarlos.com.ar/?page_id=84, consultada abril, 2012.

manos y considerable aumento de los índices de pobreza y indigencia¹³⁰. Por un lado, el mayor problema manifiesto por los gremios estatales no fue la cantidad de despidos, sino la pérdida de estabilidad laboral y el atraso de los pagos (Maidana, 1996; Álvarez Leguizamón, Villagrán, 2010b); mientras que los trabajadores desocupados advenidos piqueteros entre 1996 y 1997 (en su mayoría exyepfianos) luchaban por sobrevivir - en los márgenes - mientras eran dejados y dados a la muerte en el reclamo de un puesto digno de trabajo.

Por tanto, las prácticas de gobierno des-centralizadas en la Salta de los 90', se realizan a su vez, mediante una construcción imponente de mecanismos "represivos y de seguridad". De hecho, para instrumentar el plan de ajuste se creó la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, la cual operó sofocando las protestas sociales a través de violentas represiones bajo la órbita de la policía provincial y la gendarmería. Para la programación de estas prácticas, se les encomendó la tarea a expertos, siendo el funcionario sobresaliente el conocido represor Sergio Nazario, alias Estévez, nombre que utilizaba para confundir a sus víctimas durante la dictadura militar¹³¹.

Entre las prácticas represivas más evidentes y relevantes encontramos las realizadas en torno de los levantamientos y luchas "piqueteras", llevadas a cabo por trabajadores desocupados, ex/yepfianos, ante todo, lo cual será esbozado en el apartado III del presente capítulo y profundizado en el capítulo 3. Así como la llamada "noche de las tizas", cuando el 1 de abril del año 2005 los docentes salteños sufrieron una feroz represión. Mujeres, jóvenes y niños fueron desalojados violentamente de la plaza 9 de julio, mientras se manifestaban, en forma pacífica después de una multitudinaria marcha y tras 45 días de paro en toda la provincia y en todos los niveles educativos¹³².

¹³⁰ Salta era la cuarta provincia con mayor desocupación promedio 18,7% en mayo del 1995 en igual situación mantiene para abril de 1996: 19,6%, y es la primera provincia del país con NBI: 32,6%, en 1991. En la década de los 80' Salta tenía un 38% de sus hogares con NBI y Jujuy y el 38,9%. En los 90' se pasa al 32,6% y Jujuy al 31,8%. En términos de intensidad de pobreza medida el número de indicadores de insatisfacción que poseen los hogares, la provincia de Salta es la que posee un mayor número de hogares con más de un indicador, y Jujuy la segunda del país. La ciudad de Salta en 1999 formaba parte de la 11 últimos aglomerados con mayor desigualdad según el índice de Gini, que de la equidad. Ver: Paz y Piselli, 2000, op...cit.

¹³¹ Nazario está denunciado en el informe de la CONADEP. El juez federal Claudio Bonadío libró una orden de captura nacional e internacional contra el represor Sergio Nazario (a) "comandante Estévez", asesor del gobernador Juan Carlos Romero. En el caso concreto de Nazario, su nombre aparece vinculado a un episodio ocurrido en 1980, con un grupo de Montoneros que integraban la célula T.E.I (Tropas Especiales de Infantería), dirigida desde el exterior por Roberto Cirilo Perdía. Tras un presunto enfrentamiento, unos 20 militantes montoneros fueron secuestrados, torturados y luego asesinados. La vinculación del "comandante Estévez" con este oscuro episodio de terrorismo de Estado habría surgido de las evidencias logradas a partir de las detenciones masivas ordenadas por el juez Bonadío.

¹³² Tras la ausencia del gobernador, que se encontraba en el exterior, el Ministro de Justicia Ferraris Gustavo, dio la orden de reprimir brutalmente a los docentes utilizando el aparato de las fuerzas policiales.

De tal modo, las prácticas de gobierno cuyos objetivos eran la modernización y el desarrollo integrado se construyen entrecruzando diferentes lógicas y mecanismos dirigidos, por un lado a “producir vidas emprendedoras y autogestivas”, mientras que, por otro se ponen en marcha tecnologías biopolíticas y neocoloniales, en el avance sigiloso de lo que damos en llamar “racismo de Estado”¹³³, a través del cual “dejar morir y hacer morir” a ciertas poblaciones no deseadas (Castro Gómez, 2007; Foucault, 2000a). En este ensamblaje de lógicas y prácticas de gobierno, es posible observar cómo el Estado salteño va cobrando formas diversas, mientras que su rol se dirige a generar marcos - jurídicos, legales, económicos y políticos - para que las reglas del juego - de mercado - y el orden sean posibles, a través de lo cual la felicidad del individuo – ciudadano - ya no se recuesta en la bienestar del Estado-Nación, sino en su propia individualidad.

¹³³Para referir al “racismo de Estado” recuperamos la clase del 17 de marzo de 1976, en la cual Foucault plantea que el problema de la guerra resulta la grilla de inteligibilidad de los procesos históricos. Foucault señala que durante el siglo XVIII esa guerra se había concebido como “guerra de razas”; mientras que en el siglo XX, el tema de la raza se mostrará en lo que da en llamar Racismo de Estado. Para referir al mismo recupera la cuestión de la soberanía como el derecho de vida y de muerte, lo cual se traducía en “hacer morir y dejar vivir”, considerando que una de las transformaciones más masivas del derecho político del siglo XIX consistió en complementar ese viejo derecho de soberanía con un nuevo derecho, que sin borrar el primero lo penetraría, lo modificaría y sería un derecho o, mejor, un poder exactamente inverso: poder de “hacer vivir y dejar morir” (2000a: 218). A lo largo del escrito Foucault realiza una analítica de las tecnologías y mecanismos de poder de dicha transformación más que de la teoría política en tal sentido. Así remite a la anatomopolítica vinculada la disciplina aplicada al cuerpo y a la emergente, en el siglo XVIII, de la biopolítica aplicada a la vida de los hombres en tanto población (2000a: 220: 22). Vinculado a este biopoder, como tecnología de poder sobre la población, sobre el hombre como ser viviente aparece ahora un poder continuo, sabio, que es el poder de “hacer vivir” y comienza a repreguntarse ¿cómo ejercer el poder de muerte?, la función de la muerte, en un sistema político centrado en el biopoder. Es así como instala la noción y cuestión del “racismo” en los mecanismos del Estado. El racismo emerge como ese corte en el ámbito de la vida que el poder tomó a su cargo, el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir. En tal sentido, dicho mecanismo puede actuar porque los enemigos que interesa suprimir no son los adversarios en el sentido político del término, son los peligros, externos e internos, con respecto a la población y para la población. Este ejercicio de racismo de Estado va a tener en las llamadas “colonias”, como primeros espacios de práctica y concreción según Foucault, diferentes matices y modalidades de ejercicio a lo largo de la historia.

III:

YPF en Salta, YPF y el mundo del trabajo, YPF y las tradiciones de lucha en departamento Gral. San Martín: trabajo, territorios, historias de lucha, historias de vida

En diálogo con lo trabajado en torno de la privatización de YPF en el apartado I, en los trazos de la gubernamentalidad instalada en la Argentina de la época analizada, esta sección pretende, mediante una aproximación teórica, analítica y práctica, reconstruir, brevemente, la historia del petróleo en Salta, y con ello la instalación de YPF en el departamento Gral. San Martín. Esto implica un recorrido por el mundo del trabajo que trazó la “comunidad YPF”, la construcción de la subjetividad “ypefiana”, así como las tramas relacionales cotidianas, territoriales y laborales específicas, en tal sentido. Diagrama éste que se desarticula y transforma con la privatización de YPF y el quiebre que ello instaló en las comunidades del departamento y las relaciones laborales - sociales y humanas - contruídos a partir de ciertas identidades, posiciones, lugares, espacios, tradiciones y luchas.

En este ejercicio de reconstrucción genealógica y analítica de las relaciones entre poder y resistencia trazadas en torno del trabajo, la lucha por el trabajo, la pérdida del trabajo y la lucha por la vida, también pretendemos ensayar una aproximación a las tradiciones y prácticas de resistencia precedentes a los levantamientos piqueteros y las organizaciones de trabajadores desocupados, en los albores de la UTD Mosconi, puesto que, remitir a aquello - prácticas, lógicas, dispositivos, tramas vinculares - acaecido en el ayer, permite identificar la singularidad del hoy, en el juego múltiple de las continuas discontinuidades, entre los comienzos y las sucesiones.

1-El petróleo en Salta: aproximación histórico-genealógica

En la historia salteña se fueron conformando diferentes modos imaginarios que configuraron mundos en la llamada “nación interior”, mundos estos que convivían en conflicto. Por un lado, como ya fue señalado, se encontraba el mundo español y criollo, ligado a los intereses de Buenos Aires, metrópolis que reproducía un esquema de colonialidad interna (González Casanova, 1965; Mignolo, 2003) tanto en términos políticos, como económicos. En efecto, mientras la producción económica se

especializaba en la ganadería, el azúcar y, en menor medida, en la vitivinicultura; se fue conformando un sector dirigente constituido por terrateniente y comerciantes criollos y españoles que detentaban el poder local a través del Cabildo de Salta (Orietto y Marinelli, 1991). Nombramos a este sector hegemónico y elitista, como “oligárquico y oligarquía”, es decir, como el que detenta el poder político y económico de la provincia permeando la estructura estatal con sus propios intereses. Así, puede decirse que se conformó en la provincia un Estado Local, fuertemente ligado a los intereses de estos sectores dominantes, quienes en muchos casos detentaban directamente parte de los cargos públicos en los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual se sigue avistando en la actualidad.

Por otro lado, la contraposición a estos sectores, se conformó de manera heterogénea y compleja en torno del mundo indígena, negro, mestizo y popular. Con las guerras de la independencia estos proyectos divergentes se polarizaron en la provincia de Salta, así como sucedía en el resto del país.

El proyecto de perfil emancipatorio y popular de la Revolución de Mayo, fue cristalizado en Salta por la figura de Miguel Martín de Güemes, quien había asumido la lucha contra el ejército realista español y, por otro lado, contra parte de los hacendados criollos, detentores del poder económico local, muchos de ellos aliados a las tropas realistas.

Como ya fue señalado, con la finalización de las Guerras de Independencia la estructura económica de la provincia quedó devastada; aunque los intereses económicos y la tierra se mantuvieron concentrados en el sector terrateniente y oligárquico.

En lo referente a la “explotación de hidrocarburos” en la provincia, se habían realizado algunos emprendimientos comerciales de kerosene por parte de los terratenientes en afloramientos naturales de petróleo. El primer yacimiento petrolífero de la provincia explotado comercialmente para la producción de combustibles fue descubierto hacia el año 1906 en la Quebrada de Galarza. Ahí, el empresario español Tobar Francisco fundó el pozo petrolífero “República Argentina”, en la zona que actualmente es “Campamento Vespucio”; pero no logró generar un emprendimiento económicamente sustentable, ya que el petróleo extraído debía ser transportado a lomo de burro hasta la ciudad de Orán, la localidad más próxima al yacimiento, cuestión que elevaba enormemente los costos productivos (Mayo, Andino y Garcia Molina, 1983; Gadano, 2006). Dicho yacimiento será, como se verá luego, un enclave estratégico en el conflicto que se suscitará durante la década siguiente en territorio salteño entre la empresa petrolera de capitales

norteamericanos *Standard Oil* y la empresa estatal YPF. En efecto, a partir de este descubrimiento, sectores de la oligarquía comenzaron a realizar concesiones de cateos¹³⁴, contabilizándose más de cien entre 1907 y 1910 (Orietto y Marinelli, 1991).

Entre 1911 y 1913 - durante el gobierno provincial de Avelino Figueroa - fueron descubiertos diferentes yacimientos petrolíferos en una vasta zona de la provincia de Salta lo que dio pie a la creación de una reserva hidrocarburífera de 4000.000 has., junto con la firma de convenios de exploración y explotación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial; constituyéndose así el primer antecedente de lo que luego serían los convenios entre YPF y la provincia. En el año 1919, el nitrato chileno entró en una profunda crisis por la competencia del nitrato sintético, por lo que el principal mercado de venta de la producción ganadera salteña se vio profundamente retraído. Consiguientemente, se desencadenó una crisis económica local y la oligarquía salteña avizoró al petróleo como una alternativa productiva. A esta crisis económica, se sumaba que con el gobierno nacional en manos del programa radical, en 1916, el Estado nacional ya no constituía una herramienta donde se reflejaban los intereses de los sectores hegemónicos salteños. En el marco de esta situación coyuntural económica y política, se comprende la alianza que se constituyó entre estos sectores dominantes y la compañía estadounidense *Standard Oil*. Por esos años, esta empresa comenzó una disputa con el Estado nacional por el control de las explotaciones petrolíferas de la provincia de Salta. En efecto, la *Standard Oil* venía realizando solicitudes de cateos y explotaciones, con el objetivo de expandir la explotación petrolera en la zona a partir de los yacimientos que la empresa ya explotaba en Tarija, al sur fronterizo boliviano. De lograrlo, la empresa obtendría el control estratégico de los hidrocarburos en la cuenca Norte.

En consonancia con este intento expansivo, Abraham Cornejo - el gobernado que sucedió a Figueroa - anuló el decreto que había creado la reserva petrolífera en la provincia y promovió el avance de la *Standard Oil* en los yacimientos salteños. Así, dicha empresa continuó acumulando permisos de exploración y comenzó la explotación de algunos yacimientos. Simultáneamente construyó una pequeña destilería en la localidad de Manuel Elordi, entre la localidad de Embarcación y la ciudad de Orán. Posteriormente, en ese mismo año el gobierno nacional realizó una intervención federal de la provincia al comprobarse elecciones fraudulentas en las elecciones legislativas locales.

¹³⁴ Entre algunos apellidos de los solicitantes particulares ilustran lo antedicho: Patrón Costas, Serrey, Uriburu, Güemes, Villafañe, Isasmendi, entre otros.

Recién en el año 1922 se regularizó la situación política en la provincia con la realización de elecciones para gobernados. Allí resultó electo Adolfo Güemes por la Unión Cívica Radical -descendiente del caudillo federal- quien pese a ser parte de la oligarquía local encarnó un proyecto cercano a los sectores populares y de defensa de los recursos naturales, ante todo, el petróleo. En ese mismo año, el Gral. Enrique Mosconi comenzó con su labor en la empresa estatal YPF, a partir de lo cual y mediante la coordinación de esfuerzos se creó una nueva reserva petrolífera y se procedió a la firma de convenios entre YPF y el gobierno provincial. Dichos mecanismos de gobierno en torno de los hidrocarburos lograron frenar, transitoriamente, la apropiación de los yacimientos petroleros salteños que presencia realiza algunas empresas extranjeras, ante todo la ya mencionada Standard Oil.¹³⁵

En sintonía, la empresa *Leach Brothers* de capitales vinculados a *Standard Oil*, había adquirido la concesión de 20.000 has, en la provincia de Jujuy, donde se había descubierto petróleo en 1923. En 1925, con las nuevas elecciones de gobernador resultó ganadora la Unión Provincial, que era la expresión política de los sectores oligárquicos salteños; de esta manera las prácticas de gobierno se ejecutaron en favor de la *Standard Oil*, lo cual se reflejó en la habilitación de las explotaciones que al anterior gobierno había detenido. En tal contexto, YPF acrecentó su intervención en los yacimientos del norte enviando a sus mejores técnicos y al propio Mosconi para evaluar tanto la explotación de *Standard Oil*, como los posibles yacimientos donde solicitar permisos de exploración y cateo.

En tal diagrama de poder y gobierno, YPF adquirió en 1926 los derechos de explotación de los yacimientos de Quebrada Galarza, en el extremo norte de la provincia, lo cual generó un problema de superposición entre los yacimientos de la *Standard Oil* e YPF. Simultáneamente, YPF realizó ofertas de exploración y explotación a las provincias de Jujuy y Salta ofreciendo un aumento en las regalías del 10% para las provincias, pero estos ofrecimientos fueron rechazados por los gobernadores que continuaron otorgando concesiones a la *Standard Oil*. Este conflicto por las zonas de explotación petrolífera se

¹³⁵ De hecho, esta empresa había solicitado al gobierno provincial la firma de un convenio para la explotación con exclusividad de 90.000has durante veinte años ofreciendo regalías del 9% y del 1% a los municipios afectados. De todas maneras, la empresa norteamericana continuó realizando pedidos de exploración y cateo en las provincias del norte, ya que el decreto de 1924 de reserva petrolífera fiscal no permitía la explotación de empresas privadas en los territorios nacionales, es decir, en los yacimientos patagónicos, en este caso. Al no tener la posibilidad legal de explotar los yacimientos sur, gran parte de los esfuerzos de la *Standard Oil* se concentraron en los yacimientos del noroeste argentinos, de los cuales los derechos para realizar convenios se encontraban en manos de los gobiernos provinciales.

extendió en la provincia hasta la década siguientes, generando un amplio debate en la prensa y en el propio congreso nacional (Gadano, 2006).

En el año 1927, YPF abandonó la exploración y explotación petrolífera en Jujuy debido a trabas judiciales y burocráticas y a las pocas perforaciones exitosas realizadas, de esta manera, concentró sus esfuerzos en la provincia de Salta. En el año 1928, asumió como gobernador Julio Cornejo, quien retomó el programa de gobierno promovido por Güemes dirigido a suspender las nuevas exploraciones petrolíferas privadas, reservando así los yacimientos hidrocarburíferos para el Estado provincial.

De esta manera, se reiniciaron las negociaciones con YPF en base a regalías petroleras que implicaban importantes beneficios para el erario provincial. Sin embargo, la *Standard Oil* continuó con sus explotaciones y presentó, además, un recurso judicial en contra de la reserva planteada por el estado provincial e YPF; cuya resolución llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tardaría varios años en emitir un fallo del conflicto. Con el golpe de Estado de 1930, el gobernador Julio Cornejo fue también destituido y asumió un interventor federal, Gregorio Vélez, quien de todas maneras sostuvo los convenios entre la provincia YPF.

A finales de 1931, la *Standard Oil* empresa que había construido estrechos lazos con el gobierno nacional bajo la presidencia de Uriburu, firmó un convenio de explotación con la intervención federal en la provincia con regalías del 10% para esta última y que a su vez autorizaba la construcción de un oleoducto desde los yacimientos de la empresa norteamericana en Bolivia hacia la Argentina. Este acuerdo fue puesto en cuestión por YPF, logrando que finalmente se anulara ese convenio, lo cual generó fuertes discordancias tanto dentro del directorio de YPF como en el seno del gobierno nacional.

En 1932, la Corte Suprema de Justicia, emitió su fallo en el conflicto entre *Standard Oil* e YPF, por las explotaciones en Salta y, basándose en argumentos estrictamente jurídicos que dejaban de lado las acusaciones de corrupción contra *Standard Oil*, resolvió el conflicto a favor de dicha empresa. Este proceso judicial estuvo signado por diversas presiones corporativas y diplomáticas que involucraron incluso al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos en la Argentina (Mayo, Andino y García Molina, 1983).

Pese al fallo, ambas empresas siguieron operando en Salta y negociando convenios con la provincia que, en el marco de una profunda crisis económica, intentaba conseguir mejores porcentajes de regalías. En este sentido, la competencia entre la empresa estatal y la

norteamericana acrecentaba sus posibilidades de negociación. Sin embargo, en 1933 el gobierno provincial firma un convenio con la *Standard Oil* que nuevamente es criticado por YPF y sectores nacionalistas de la oposición¹³⁶.

En esta línea y a tono con el tratado de libre comercio con Gran Bretaña, conocido como el “Pacto Roca-Runciman”, las negociaciones de la oligarquía salteña con las empresas petroleras multinacionales fueron convenientes a la estrategia del gobierno nacional de mostrarse como un país estable y abierto a las inversiones extranjeras, aunque el hecho de que la *Standard Oil* fuera una empresa norteamericana, generaba ciertas disonancias en torno de la preferencia “anglófila” del gobierno de Justo. De todas maneras, durante estos años se consolidó esta alianza entre la oligarquía local y la de Buenos Aires y el Litoral, a partir del acuerdo de la “Concordancia” y un acuerdo económico en el usufructo de los hidrocarburos, que se materializó en 1935 con la sanción de la Ley N°12.161 que establecía: “...el régimen de propiedad nacional o provincial del petróleo según el lugar en donde se encontraba el recurso, con lo cual triunfaba la posición de las provincias del norte” (Orietto y Marinelli, 1991: 112) y sus respectivas oligarquías locales. Sin embargo, esta ley otorgaba al Estado nacional no solo el usufructo de los recursos petrolíferos en los Territorios Nacionales (Neuquén, Santa Cruz, etc.), sino que le daba la potestad de realizar convenios de exploración y explotación con las distintas provincias por lo que la “competencia” con las empresas privadas no se veía saldada.

De hecho, YPF continuó con las exploraciones en la provincia de Salta obteniendo gran cantidad de concesiones de yacimiento y autorizaciones de cateos para nuevas exploraciones. Sin embargo, la competencia con las empresas privadas, principalmente la *Standard Oil* y la *Shell* (de capitales Ingleses) continuó in crescendo en el ámbito de la refinación y comercialización de los combustibles.

Con la consolidación de YPF, siguiendo a Wahren (2011) a partir de la sanción de la ley de 1935, la mayoría de los yacimientos de la provincia de Salta pasaron a estar bajo la órbita de la empresa estatal¹³⁷. Parte del conflicto se había subsanado por una alianza coyuntural y pragmática de la oligarquía salteña con YPF y su política petrolera e intervención estatal, al lograr convenios con la empresa que implicaban importantes

¹³⁶ En efecto, en el plano político-gubernamental, luego del derrocamiento del gobierno de Yrigoyen por el golpe de estado de Uriburu, la oligarquía salteña reorganizó su accionar a nivel regional y nacional en torno de la figura de Robustiano Patrón Costas, dueño del ingenio azucarero San Martín del Tabacal, que también contaba con inversiones en el área petrolera de la provincia. Se conformó así el Partido Demócrata Nacional que luego integró la llamada “Concordancia”, una alianza entre el gobierno de Agustín P. Justo que sucedería a Uriburu durante la llamada “Década Infame”.

¹³⁷ La *Standard Oil* solo se quedó con un poco más de 15.000has en la zona de Orán.

regalías para la provincia; además de la posibilidad de intervenir en la gestión de la empresa estatal. En tal sentido, profundizando dicha política en 1941 se firmó un convenio por el cual YPF se comprometía a pagar regalías por el 12% más un canon anual a la provincia, así como YPF se comprometía a realizar nuevas exploraciones e industrializar el petróleo en la provincia, lo cual implicaba nuevas inversiones en refinerías con la consiguiente generación de mano de obra local especializada.

Un hecho determinante para la región fue el descubrimiento de los yacimientos de Campo Durán¹³⁸ en el año 1951, que expandió ampliamente la presencia de YPF en la provincia, así como consolidó su despliegue en la zona del Dpto. Gral. San Martín.

Con este avance de YPF en la provincia de Salta, se fue desarrollando un esquema que se repetiría en diversas localidades del país, ligado a la industria petrolera y a otras economías de enclave, como el acero. Como veremos, en la ciudad de Gral. Mosconi y en la región adyacente, la empresa estatal se convirtió paulatinamente en la ordenadora de la actividad económica, pero también social y cultural, en sentido amplio. La misma YPF construyó infraestructura comunitaria (escuelas, edificios de usos comunes, hospitales, etc.) y realizó actividades culturales, educativas, recreativas y turísticas, así como plenas de viviendas con créditos accesibles para sus empleados. Este modelo continuó consolidándose en la región hasta finales de la década de los ochenta. Con la privatización de YPF, a comienzo de los 90' el diagrama de poder y gobierno trazado en torno de YPF entró en una crisis profunda. De este modo, YPF no fue solo una empresa económica, sino un espacio de construcción de procesos de subjetivación que organizaron el gobierno de las conductas mediante estrategias diversas a las de las oligarquías locales y nacionales; estrategias estas que conllevan a la conformación de la llamada, según

¹³⁸ Campo Durán, en sus inmediaciones, fue protagonista del crecimiento de la industria desde el norte del país. La diferencia entre las exploraciones y explotaciones en el Sur y el Norte se encuentran, ante todo en lo duro de los comienzos, mientras que en la Patagonia los resultados no tardaron en aparecer, en Aguaray debieron pasar cuatro décadas antes de hallar el petróleo suficiente que permitiera el desarrollo industrial de la zona. La Dirección de Minas de la Nación inició las exploraciones y perforaciones en 1911, mismo año de la fundación de Aguaray, pero el resultado fue desafortunado y concluyeron en 1918. A este resultado fallido lo precedía una historia de intentos y abandonos por parte de otros emprendedores, la etapa entre 1865 y 1906 que fue llamada de la iniciativa privada. En 1923 la compañía *Standard Oil* obtuvo permiso para explorar –también con dificultades, pues, en el medio, se acusó a la empresa de acaparar “todos los cateos”– e YPF se dedicó al área de Laguna de Brea, donde fue obteniendo resultados positivos. De hecho, su exploración se había intensificado tanto que en 1939 comenzó la construcción de una destilería que inauguró en 1941, en Chachapoyas. Sin embargo, hacia 1950 se temió otra declinación. Campo Durán, una de las poblaciones más antiguas del municipio de Aguaray, había pasado de los 200.000 m³ a los 60.000, y la idea del abandono volvió a ensombrecer al área, hasta que en 1951, YPF tuvo un resultado sorprendente. Concretamente el Pozo CD-6 “tuvo una erupción de gas de extraordinaria potencia”, según el libro del cincuentenario de la empresa. Hacia final de década, los hallazgos se multiplicaron. Ver: Dto. Historia: “Los Duros Comienzos de Aguaray”, En: Petrotecnia, 2011, junio: 106-109.

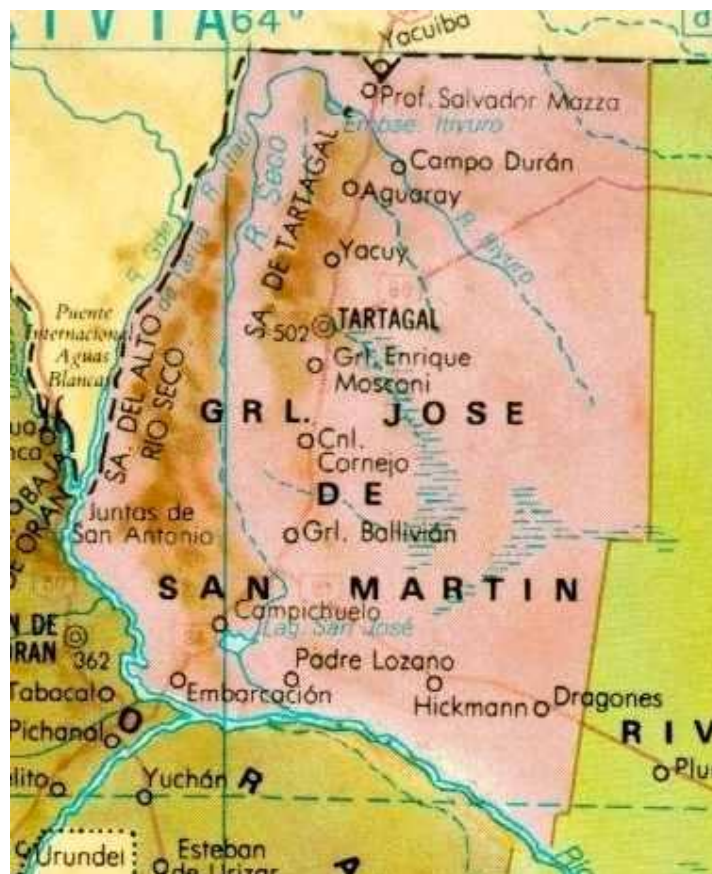
enunciaciones nativas, “familia ypefiana” y que precede a las diversas formas de organización y resistencia.

Se puede decir, entonces, que las compañías petroleras que actúan en la zona, según lo ya señalado en el apartado I, pasaron del monopolio al oligopolio, pero las estrategias empresarias no parecen haber cambiado demasiado casi un siglo después. En los años 1920, siguiendo a Wahren (2011), quien se opuso a esta lógica “extractivista” de las compañías petroleras fue Enrique Mosconi a través de la ardua construcción de una empresa petrolera estatal. Actualmente, como analizaremos a lo largo del trabajo de tesis, pese a la re-nacionalización de YPF (2012) que continúa con su “antigua” política de inversión en los yacimientos del sur, es la UTD Mosconi emergida en la lucha de los advenidos ex/ypefianos, la organización de trabajadores desocupados, jóvenes, indígenas y mujeres, la que protagoniza ese mismo y social conflicto con las empresas multinacionales. Como una organización social en disputa y movimiento, la UTD, genera y configura diferentes lógicas y prácticas de gobierno y autogobierno que en torno de las prácticas de lucha, en y de los espacios territoriales y recursos naturales recrean también el espacio – geográfico y comunal- y las subjetividades de quienes forman parte de esta unión, desde mediados de los 90’ hasta nuestros días.

2- YPF en sus albores: la empresa-fábrica y el mundo del trabajo

El Dpto. Gral. San Martín ubicado al norte de la provincia de Salta, limita con la República de Bolivia, al este con el departamento Rivadavia, al sur con los Departamentos de Rivadavia y Orán, al oeste con el departamento de Orán y la República de Bolivia. El Departamento tiene 6 municipios. La cabecera es Tartagal, Embarcación y Gral. Mosconi; Aguaray, Profesor Salvador Mazza y Gral. Ballivián. La única vía de comunicación con el sur del país es la ruta nacional N° 34, existiendo además la red de vías férreas por la cual transita el F.C. Gral. Belgrano con conexión directa a la Capital Federal y a Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia). El clima en toda la superficie del Dpto. es tórrido, con temperaturas que superan los 40° en verano y lluvias tropicales, que superan los 1.000mm anuales¹³⁹.

¹³⁹ Fuente: Documento elaborado por la UTD Mosconi, mayo de 1996.



Mapa Departamento Gral. San Martín. Salta (Portal Salta)

A lo largo de décadas, dicho Dpto. al igual que otras regiones del país, se construyó y consolidó en torno de YPF, a partir de lo cual se instaló un diagrama de relaciones de poder y territorialidades que daremos en llamar “ypefianas”; es decir, un entramado de prácticas, dispositivos, identidades y espacios atravesados y constituidos en referencia de las lógicas de la “empresa-fábrica nacional”. Lógicas que se codifican, ante todo, en torno del mundo del trabajo, pero que se extienden a las tramas sociales, políticas, culturales y económicas en las zonas donde YPF se configuraba como un espacio, que se comportaba, según enunciaciones nativas y diversos trabajos de investigación al respecto, como un “Estado más presente y eficiente que el Estado municipal, provincial y nacional” (Wahren, 2011, Svampa y Pereyra, 2003; Gipi Fernández, referente UTD, entrevista setiembre, 2011).

En tal sentido nos encontramos, en diversas investigaciones, con diferentes modos de nominar esta forma diagramática de relaciones en torno de YPF, tal es el caso de la noción de “comunidad ypefiana”, en resonancia a lo señalado por Anderson (2007)

respecto de la “comunidad imaginada”¹⁴⁰. En el caso analizado, dicha comunidad se encontraba religada en torno del trabajo y los recursos naturales en juego, principalmente el petróleo. Si bien la comunidad ypefiana estaba anclada en la práctica del trabajo petrolero, también estaba profundamente marcada por la acción territorial y gubernamental a nivel cultural y social; mientras que dichos tramos de relación instalaban una comunidad en comunión con el ambiente haciendo posible la construcción de un “*ethos*”¹⁴¹ ypefiano” (Kusch, 2000c).

Según la perspectiva aquí sugerida, la pertenencia a la comunidad ypefiana, y con ello la advenida subjetividad ypefiana se instalaba como efecto de las tramas relacionales de poder que han ido dando formas – móviles, heterogéneas, abiertas - a la empresa petrolera nacional, y no a la inversa: “*YPF...representó la organización trabajadora industrial*”¹⁴². “*YPF fue la columna vertebral de la sociedad moscoina, a nivel laboral, social, cultural y de sentido*” (Juan Carlos “Gipi” Fernández, referente área técnica UTD, entrevista junio 2011).

Así, los sujetos ypefianos remitían a quienes eran trabajadores de YPF, pero también a quienes se encontraban, de uno u otro modo, ligados a las actividades de YPF. Nos encontramos aquí con las referencias a la “familia ypefiana”, noción que surge de los relatos de los pobladores de la región, donde señalan que de manera directa o indirecta los habitantes de la zona se encontraban ligados, atravesados, en su conformación subjetiva por YPF: “*Y...yo entré al club social de YPF a los 13 años y después a los 17 años entré a YPF, luego entró mi hermano, el menor- el Gipi -, todas las familias teníamos a alguien en YPF y todos estábamos vinculados con YPF*” (Pepino Fernández, referente UTD, entrevista julio, 2012).

Por tanto, en estas tramas relacionales de poder, que hacen de YPF una “forma institucionalizada” (Foucault, 1988: 17) de ejercer el gobierno, se cruzan disposiciones, tradiciones, órdenes jurídicos, costumbres, etc. En tal sentido, consideramos que YPF se torna un dispositivo que se cierra sobre sí mismo con sus lugares específicos, sus reglamentos propios, sus estructuras jerárquicas cuidadosamente diseñadas y una relativa autonomía funcional. Mientras que resulta una empresa estatal, lo cual denota como las

¹⁴⁰ Benedict Anderson (1983) mostró que las naciones no eran el producto de condiciones sociológicas dadas como la lengua, la raza la religión. Fueron imaginadas en su existencia.

¹⁴¹ *Ethos* es un término griego que remite, de un modo amplio, a los modos de ser, hacer, ser y sentir acaecidos en suelos específicos atravesados de temporalidades epocales. Siguiendo a Kusch, la constitución de un *ethos* en comunidad con el ambiente permite pensar las culturas como estrategias para vivir y, en tal sentido como políticas.

relaciones de poder se elaboran, racionalizan y centralizan bajo la forma o bajo los auspicios de instituciones estatales; esto nos invita a pensar como YPF se instala al modo de uno de los tantos aparatos que tienen como efecto el Estado, e incluso como uno de esos aparatos que cobra en sí mismo la forma Estado y, de ese modo construye mundos, sujetos y verdades.

2.1 Las distribuciones organizativas del espacio y el territorio: YPF empresa del Estado

Entre los efectos más relevantes en torno de la empresa-fábrica petrolera encontramos, por un lado la contención de distintos sectores poblaciones - sociales y culturales - en un diseño territorial y social específico y, por otro la segregación de otros sectores poblaciones (Wahren, 2011). Esto se avista con cierta claridad en los distintos roles que cumplen y cumplían tanto los diferentes trabajadores, según jerarquías laborales establecidas al interior de YPF; así como en las distribuciones y construcciones espaciales y tramas territoriales de las distintas localidades, que forman parte del departamento.

En tal sentido, por su parte, la localidad de Gral. Mosconi, era un lugar de residencia de los trabajadores técnicos y sin calificación de YPF, constituyendo una típica localidad “obrero”, con una relativa homogeneidad social de sus habitantes; quienes en la mayoría se encontraban vinculados directa o indirectamente con la producción del petróleo o con alguna de sus vastas actividades sociales, culturales y deportivas que YPF desplegaba. Allí es donde se asientan, en la actualidad, la mayoría de las empresas petroleras privadas de la región. El centro de la ciudad, con una plaza redonda de la cual salen distintas calles diagonales que atraviesan radialmente la localidad, se encuentra a dos kilómetros de la entrada de la ruta nacional 34. Esta entrada es uno de los puntos de referencia de los cortes de ruta, la otra referencia importante de los cortes se encuentra a casi un kilómetro hacia el sur, más precisamente a la altura del cementerio municipal. Allí se encuentra, también, las “Tres Cruces”, es espacio construido por los trabajadores desocupados en homenajes a los piqueteros muertos entre 2000 y 2001 a efecto de las represiones policiales y gubernamentales, que analizaremos en el apartado III del capítulo 2.

En este diagrama, la localidad de Campamento Vespucio, distante a unos seis kms. de Gral. Mosconi, vivían los empleados más calificados de YPF como el personal directivo de la empresa. Esta localidad era, casi exclusivamente de y para “ypefianos”. Ubicado hacia el oeste de la ruta nacional 34, Vespucio fue construido a los pies de la Selva de las

Yungas en un microclima y un paisaje subtropical, sorprendentemente distinto a las demás localidades ubicadas a la vera de la ruta. Allí se encuentran las diferentes entradas a los principales pozos petroleros. Una marca específica de este lugar que era habitado por ingenieros y técnicos calificados, es decir personal “jerárquico” de YPF, señalándose la diferencia, por ejemplo: mediante una barrera a cargo de un guardia de YPF, que se encontraba al ingreso del campamento controlando el egreso e ingreso de personas y vehículos a la zona.

Dicha localidad contaba con un hospital, una proveeduría de alimentos y bienes de todo tipo a precios especiales para ypefianos, quienes tenían una tarjeta para comprar allí desde alimentos hasta ropa, etc., también en Vespucio se encontraba el cine, el Club Social deportivo construido y gestionado por YPF. Con la privatización de la empresa estatal, la localidad se fue transformando paulatinamente en “una ciudad fantasma”, en el presente más cercano el ingreso a la ciudad, por un lado retrotrae a aquello que fue, pero por otro es un enorme cementerio de ruinas, mientras que algunos espacios recuperados por la UTD y por otros grupos culturales de la localidad de Mosconi, cobran vida entre lo opaco de la historia y lo verde de la Yunga.

Entre los espacios “recuperados” aparece el viejo cine a cargo de un grupo de jóvenes con apoyo de la UTD y, en igual cuadra la Antigua Proveeduría, en la actualidad la Universidad Popular gestionada por la UTD cuyo nombre es “JUVEGOSABA” evocando los nombres de los compañeros asesinados por la gendarmería nacional y la policía provincial entre 2000 y 2001, tal cual analizaremos en el capítulo 4. Paradójicamente, al lado de la Universidad Popular, otros edificios abandonados por YPF albergan a uno de los escuadrones de la Gendarmería Nacional, afincados en la zona desde que comenzaron los conflictos de 1997. Luego, el camino cuesta arriba nos lleva hacia el club deportivo que cuenta con una cancha profesional de básquet y otra de fútbol. Casi en la cima de la localidad se encuentra el hospital, actualmente clausurado, con las puertas y ventanas tapiadas, sin personal médico, ni pacientes.



Ex proveeduría de YPF, desde 2011 Universidad Popular UTD Mosconi. Campamento Vespucio. Foto: Cora Paulizzi, julio 2013.

En el caso de Tartagal, una ciudad de aproximadamente 70.000 habitantes (INDEC, 2010) y cabecera del Departamento, fue históricamente centro comercial de la zona, allí se encontraban los negocios y los principales servicios financieros, administrativos y comerciales de la región y, así sigue siendo, donde se volcaba “gran parte de la masa salarial de los empleados de YPF” (Lapegna, 2000: 14). En esta localidad, también habitaban trabajadores no calificados de YPF, pero su presencia, en términos relativos era mucho menor que en las otras localidades del departamento, como Gral. Mosconi, Coronel Cornejo y Campamento Vespucio. También existe en Tartagal una fuerte presencia de comunidades indígenas wichí y en menor medida guaraníes.

Por último, en este entramado territorial (Wahren, 2011) se puede sostener que las comunidades indígenas permanecían reproduciendo sus formas de vida, casi literalmente a “un costado” de las localidades petroleras, puesto que, de hecho la mayoría de las comunidades - wichí, guaraní, chulupí, chorote, entre otras - se encontraban y encuentran ubicadas a los costados de las rutas principales aledañas a las ciudades antes dichas, utilizando grandes extensiones del monte chaqueño para la caza, la pesca y la producción de artesanías y vestimenta (Flores, 2011). En la época de esplendor ypefiano, dichas comunidades mantenían una relación “a distancia” del desarrollo urbano y petrolero de la región, lo cual no implicaba que los contactos con el mundo ypefiano fueran inexistentes, aunque esta conexión no se tradujera en una inclusión de indígenas, relevante, en la actividad específica del trabajo de la empresa YPF.

Ante todo, las distintas comunidades indígenas se relacionaron a través del sistema educativo, con la construcción de escuelas y, luego con la incorporación de maestros bilingües, así como la llegada de distintas religiones a las comunidades (cristianas católicas y cristianas protestantes y evangélicas). Con la privatización de YPF y el progresivo avance de la frontera agropecuaria los territorios pertenecientes a dichas comunidades se vieron afectados por la construcción de gasoductos que atravesaban las comunidades o por el avance terrateniente y los “pools de siembra” que desmontaban y desmontan millones de hectáreas de monte nativo para el sembradío de soja transgénica. Así la destrucción de gran parte de los territorios que implica un componente esencial para las formas de vida de dichas comunidades, trastocó radialmente la lógica de vida de las mismas (Wahren, 2011)¹⁴³.

2.2- Las disposiciones organizativas del trabajo y el sujeto trabajador

La distribución de tareas y disposiciones organizativas del trabajo y el sujeto trabajador dentro la empresa-fábrica, se organizaban desde una lógica ordenadora de perfil jerárquico y disciplinar.

La asignación de los puestos de trabajo y los tiempos para cada tarea, según Palermo (2010), estaban dados por las particularidades del proceso de producción propio de la industria petrolera, y con ello el rol otorgado a los diferentes trabajadores acorde a una división disciplinar - taylorista-fordista - del trabajo. Esta división en el trabajo supuso claras tareas diferenciadas, siendo las gerencias y direcciones encargadas de los lineamientos de funcionamiento estratégico, y por otro lado, los trabajadores operarios los portadores del trabajo manual, muscular, como responsables de las funciones básicas de la empresa (Chandler, 1987). De esta forma, se dividió el trabajo entre los trabajadores de línea y trabajadores profesionales. El trabajador de línea u operador realizaba un conjunto de operaciones y tareas manuales, por lo general sumamente riesgosas e insalubres.

El comienzo del itinerario que pautaba el disciplinamiento, incluye la división del trabajo para los operadores de campo, el cual estaba organizado de acuerdo a un orden ascendente. El primer eslabón de la distribución interna del trabajo de los operadores era el de *aprendiz*. El lugar del aprendiz, generalmente estaba reservado a aquellos hijos de trabajadores que tenían entre 16 y 17. Una vez atravesado el rol del aprendiz, este

¹⁴³ De hecho, en los últimos años (luego del 2003) se produjeron diversas fragmentaciones en el interior de las comunidades por cuestiones religiosas y políticas, así como se dio un proceso de pasaje de la caza, la pesca y la recolección a una cierta “agriculturación”.

ascendía como *ayudante de operador*. Esta modalidad duraba generalmente algunos meses, durante los cuales el ayudante realizaba funciones en paralelo con: “...*un operador de campo, operador de consola a lo que le seguía supervisor, asistente de jefe de turno y jefe de turno*” (Palermo, 2010:134-5).

En el caso de los operadores del sector de extracción, era el siguiente: *Operador de boca de pozo, Enganchador, Maquinista, Encargado de turno*¹⁴⁴. La mano de obra empleada por YPF, tanto para operadores y profesionales, era predominantemente masculina, encontrándose algunas mujeres en puestos administrativos.

Por su parte, los llamados “trabajadores profesionales” provenían de diversas disciplinas dependiendo del área de trabajo. En los sectores donde la actividad principal era el refinamiento, predominaban los profesionales ingenieros. En los sectores de exploración y extracción, como en Comodoro Rivadavia y General Mosconi, los profesionales eran predominantemente geólogos y en menor grado ingenieros. Y en sectores dedicados al manejo del personal, principalmente fueron psicólogos, abogados, contadores, etc. (Palermo, 2010).

La toma de decisiones se encontraba centrada en el andamiaje instituido y codificado en YPF, en conjunto con los gobiernos locales y provinciales. A partir de lo cual el diagrama de poder/gobierno se construía “verticalmente”, ante todo en cuanto a la participación de los habitantes: “...*verticalidad que, por cierto, no era puesta en cuestión por los propios pobladores de la región. Con el derrumbe del “mundo ypefiano” este territorio segregado pero inclusivo se convirtió en poco tiempo en un territorio segregado y excluyente*” (Wahren, 2011: 117).

Ahora bien, en el trazo movedizo de relaciones de poder, el dispositivo institucional YPF a lo largo de su desarrollo no fue más rígido que el de una empresa capitalista promedio, contemporánea, en definitiva, fue menos rígido que, por ejemplo, el Ingenio San Martín de Tabacal, en el cual participaban muchos trabajadores de Tartagal y Mosconi. De hecho algunos testimonios de trabajadores del Ingenio y luego ypefianos (entre los años 1962 y 1972) señalan cómo en YPF, si bien se ganaba menos dinero, y había que alquilar las casas en las cuales vivir, era un espacio con más libertad, por ejemplo, el club social era

¹⁴⁴ El operador de boca de pozo es quien realiza las maniobras más duras como “bolsear”, realizar la limpieza de las roscas de los caños, subir las estructuras o los caños, etc.; el enganchador, quien maniobra las piletas que están al lado de la grúa -si el pozo tuviese una fuga de gas el enganchador se encargaría de “ahogarlo” con agua a través del manejo de válvulas y de la bomba-, y monta el equipo; el maquinista opera la grúa, maneja el aparejo (el subibaja); el encargado de turno es el jefe del equipo. Ver: Palermo, 2010:136-138.

para todos, empleados y obreros, lo cual no resultaba así en el Ingenio (Benclowics, 2013: 85-6).

Podemos esbozar entonces, que en Salta, en un cruce heterogéneo entre las lógicas de gobierno procedentes de la llamada oligarquía local y el desarrollo nacional hacían de YPF un espacio, relativamente singular, en cuanto a su organización y ofrecimiento de libertades. Esto también, se avista en comparación con lo acontecido en el sur, en tanto en Comodoro Rivadavia, todo el personal vivía dentro de las dependencias de la petrolera estatal y por lo tanto, bajo sus reglas y lógicas de organización y vida, mientras que en el yacimiento norte, en Vespucio se desarrolló el núcleo urbano del personal jerárquico y administrativo, viviendo los obreros en la zona de Mosconi y Tartagal, ya sea por decisión, ya sea porque los pabellones de Vespucio no podían contener a la gran masa de trabajadores, estos últimos no vivían bajo los dictados organizativos de la empresa en su vida cotidiana:

...quizás el trabajador Ypefiano era un trabajador calificado, y al tener una buena vida, porque teníamos un buen estándar de vida en base a los recursos que se obtenían de la producción, realmente muchas mentalidades se habían aburguesado, habían perdido el objetivo de la clase a la cual pertenecían. Siempre habíamos dicho: compañeros mientras tengamos relación de dependencia vamos a pertenecer a una clase, que es la clase obrera o el proletariado, les guste o no les guste, pero había una diferenciación entre quienes estaban más calificados porque tenían más categoría, tenían mayor conocimiento o quizás igual conocimiento pero la jerarquía era diferente y tenían un estándar de vida realmente que lo confundían. (J. Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista julio 2013).¹⁴⁵

En este diagrama vincular de tramas cotidianas de vida y trabajo, también los ypefianos se diferenciaban de otros trabajadores-obreros locales, ante todo por la “capacidad de consumo, los derechos obtenidos” y los diferenciales beneficios, que tenían por pertenecer a la comunidad ypefiana. Las diferencias materiales entre unos y otros trabajadores tendieron a opacarse y desaparecer luego de la privatización de YPF, mientras que las tendencias de perfil subjetivo aún permanecen, quizá fantasmagóricamente, en las comunidades locales (entre los ex/ypefianos y los no ypefianos, en la actualidad):

Para nosotros fue pertenecer a un estándar de vida muy acomodado. Trabajábamos ocho horas. Teníamos muy buenos sueldos, cualquier trabajador de YPF tenía la posibilidad de tener una secretaria para que le ayude a la ama de casa, teníamos para ir de vacaciones en colectivo, en avión, en tren, si teníamos auto nos daban combustible para el viaje, (...). Por ese entonces nosotros podíamos comprar 5kg de asado y compartir con otros que no podían, luego eso ya no es posible. (J. Nievas, referente-fundador de la UTD entrevista, julio 2013).

¹⁴⁵ Juan Nievas proviene de una familia de ypefianos, su padre y tíos trabajaron 37 años en YPF. Él ingresa en 1972, luego de finalizar el colegio secundario, y realiza tareas por 20 años, ya que en 1992 le llega el telegrama de despido, en el área de terminación de pozos (perforación de pozos).

Los dos mundos, el estrictamente ypefiano y el construido en torno de YPF, se configuraban en un trazo dinámico de relaciones laborales – sociales, económicas, culturales y políticas - vivas, cotidianas y fluidas, aunque existía entre ellos una clara diferenciación. La cuestión, entonces, de “pertenecer”, de “ser parte” del dispositivo ypefiano, en su impronta comunitaria y territorial, marcó todo un tramo de la historia local generacional, simbólica y políticamente.

3-La Privatización de YPF en el Dpto. Gral. San Martín-Salta y las primeras revueltas

3.1- Prácticas de resistencia en torno a las primeras tentativas de privatización entre 1983 y 1991.

Como anunciamos al inicio del apartado, las relaciones de poder que cobran formas y modalidades múltiples, abiertas y que a su vez se entrecruzan, se yuxtaponen, se limitan, se anulan, se transforman y se refuerzan, solo pueden ser ejercidas al modo de gobierno, en tanto juego estratégico entre libertades. Las relaciones de poder y las rebeldías de la libertad no pueden separarse, señala Foucault, hay en ellas y entre ellas una incitación recíproca y de lucha. En tal sentido, realizaremos un breve recorrido por las diferentes prácticas de resistencia, que previas a la privatización se realizaban en el interior de la empresa-fábrica YPF. Observamos cómo dichas prácticas preceden a los llamados levantamientos piqueteros y de trabajadores desocupados y que, en tal sentido, los nutren, los trastocan y configuran, en los vaivenes de condiciones históricas de realidad y posibilidad específicas.

Para el análisis y descripción de dichas prácticas de resistencia tomamos como referencia el relato de Juan Nievas, así como el material de su biblioteca personal de archivos. Nievas es un trabajador exypefiano, fue delegado de exploración de SUPE y luego integrante de listas opositoras a la oficial en el año 1992, en las luchas instaladas en el interior de la empresa-fábrica; así como referente y fundador de la UTD en 1996-97.¹⁴⁶

Haciendo un poco de memoria de lo ya trabajado, en 1985 el gobierno bajo la presidencia de Alfonsín (UCR) instrumentó el Plan Huston¹⁴⁷ a través del cual se ofertaron al capital

¹⁴⁶ El relato de Juan Nievas resulta sumamente enriquecedor, así como original, en tanto los trabajos de investigación que anteceden a la presente tesis, no han tenido acceso al material de archivo personal de Juan Nievas, y la mayoría no le ha realizado entrevistas en profundidad.

¹⁴⁷ En 1985 Raúl Alfonsín instrumentó el *Plan Houston* que ofertó al capital privado 165 áreas para la exploración y la explotación. El llamado Plan Houston, impulsado a través del Decreto N° 1.443/85, fue complementado principalmente por el Decreto N° 1.758 (Plan Huergo) y el N° 1.812/87 (Plan Olivos I). Véase:

privado 165 áreas para la exploración y la explotación. Ante dicha medida el peronismo nacional manifestó cierta oposición.¹⁴⁸ Un par de años después el gobierno de Estado impulsó, a través de su ministerio de Obras y Servicios Públicos bajo la dirección de Terragno el Petroplan, que planteaba la creación de “uniones transitorias de empresas” para la explotación en las áreas marginales, la creación de *joint ventures* de YPF con capitales privados en las áreas centrales y la desregulación del mercado del petróleo. Estas mismas medidas fueron implementadas, programáticamente y en la órbita de una racionalidad predominantemente neoliberal en el gobierno asumido en 1989, en el inicio del proceso de privatización de YPF: “*En obras públicas estaba Terragno y ahí querían descuartizar YPF de otra manera, dividirla en PetroSalta, ¿y cómo viene el tema? porque esto es lo mismo, descuartizarla en pedacitos ponerle anestesia o no le pongas nada, es lo mismo*” (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Sin embargo, hacia 1988 la oposición del peronismo y de algunos sectores del propio radicalismo fue vigorosa y el Petroplan no llegó a implementarse. Lo cierto es que la oposición, según Benclowicz (2013), del justicialismo a las políticas petroleras del gobierno de Alfonsín contribuyeron a liberar las trabas para la acción de los sectores combativos del sindicato de petroleros SUPE¹⁴⁹, en la localidad norteña de Vespucio, que desplegaron desde entonces una intensa actividad.

Una de las prácticas de resistencia y lucha más radicalizadas de este período fue “*el corte de pista del aeropuerto de Mosconi*”, en oportunidad del arribo de un avión que trasladaba autoridades de YPF y del gobierno. Tras una jornada completa de manifestaciones que atravesaron las calles de Mosconi y de diferentes dependencias de YPF, el día martes 14 de junio de 1988 centenares de trabajadores petroleros instalaron un enorme “piquete” en la pista de aterrizaje. Allí esperaban el arribo del gerente de explotación y exploración de YPF, Julio Casas, entre otras autoridades que debían inspeccionar las áreas comprometidas con el Petroplan.

Boletín Oficial de la República Argentina del 9 de Agosto de 1985, 13 de noviembre de 1987 y 26 de noviembre de 1987 respectivamente.

¹⁴⁸ Desde la oposición, el partido Justicialista criticó el plan de gobierno, pero al mismo tiempo, aclaró que no estaba en contra de la participación de los capitales privados: Ver: Benclowicz, 2013: 144.

¹⁴⁹ En 1984, en las elecciones del SUPE local gana la lista blanca; la misma, en oposición al sindicalismo tradicional, estaba conformada mayormente por justicialistas disidentes, aunque también había declarados comunistas, radicales e independientes. De hecho la conducción local rechazó la concertación que negociaban por ese entonces el gobierno de Alfonsín y la CGT, y planteo tempranamente una posición combativa ante el deterioro del salario debido al proceso inflacionario y los rumores que ya comenzaban a circular sobre la desregulación petrolera y la privatización de YPF. Ver: Benclowicz, 2013...op...cit.; y Nieves, 2013, entrevista.

Si bien el avión pudo aterrizar, una vez que se detuvo fue rodeado y se impidió el desmembrado de los funcionarios, que debieron retirarse sin cumplir sus tareas, mientras se levantaba la bandera: “*entregar nuestro petróleo es entregar nuestra bandera*”. Este es un relevante precedente de lo que luego serán las ocupaciones y tomas de rutas.

De hecho, el siguiente relato pone de manifiesto el modo astuto a través del cual las comunicaciones y redes de información se construían y movilizaban entre los trabajadores de la empresa-fábrica por ese entonces y, a tales fines en defensa del trabajo:

Había parte del gremio, que no todo era burocracia, que habían compañeros que a través de un sistema que teníamos de comunicación en todo el país por radio, che mira están por salir estos tipos van a esto a esto, una auto convocatoria, te podes imaginar inmediatamente que los compañeros dejaron de laburar a las diez de la mañana o quizás antes, nos metimos al aeropuerto y sacamos los guardaguanados que eran pesadísimos, los sacamos para que no pase nadie y los funcionarios no puedan salir del aeropuerto, y hemos tomado el aeropuerto. (J. Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).



Foto, Juan Nievas, 1988: marchan camino a la toma del aeropuerto en Mosconi.



Foto De Juan Nievas, 1988: toma del aeropuerto Mosconi.

Luego de aterrizado el avión un grupo de referentes ingresa a la misma:

Hemos hecho una asamblea que justamente subimos, un secretario general que era S.U.P.E, un secretario de la parte legal, yo un delegado de exploración, un delegado de zona central y un delegado también de un sector, éramos cinco. Entramos al avión, ¡te podes imaginar que me quería morder la oreja el administrador, los tipos, los pope! Porque nunca se había animado nadie a decirles nada. Estos eran los capos (...) venían con el cuento que ellos tenían, decían: “Venimos con un plan de reactivación de YPF”, y ¡fíjate que ya era el umbral de la privatización, y fíjate con que nos estaban saliendo! Entonces, ellos venían muy conscientes de lo que venían a hacer. (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).



Foto Juan Nieves, 1988 Asamblea, toma del aeropuerto minutos antes de que referentes de los trabajadores de YPF subieran al avión.



Foto Juan Nieves, 1988, referentes de trabajadores ypefianos arriba del avión con los directivos, que no pudieron arribar debido a la toma del aeropuerto.

Dicha práctica de lucha, también marca el carácter combativo¹⁵⁰ de los “salteños y trabajadores ypefianos”. De hecho los trabajadores se declararon en huelga, tomaron el aeropuerto y coordinaron un bloqueo de las demás pistas de aterrizaje del Yacimiento Norte, ubicadas en Martínez de Tineo, cerca de Mosconi, y en Palmar Largo, provincia de Formosa: “*Siempre la resistencia estuvo a través de estas cosas, no dejamos bajar del avión a la gente que venía a vendernos buzones como hemos dicho*” (J. Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Otra de las prácticas de lucha, en sintonía y contemporaneidad con la anterior, poco después del corte de pista del aeropuerto acontece en junio de 1988 en la ruta nacional 34- epicentro de los principales piquetes en la década posterior- un corte por lo menos en dos oportunidades. En ese momento se estaba llevando adelante una importante huelga docente en toda la provincia y los estudiantes y padres de Aguaray primero, y de Tartagal después, se autoconvocaron en asambleas y votaron un apoyo activo a la huelga mediante un corte de ruta a la altura de cada localidad. Dichos cortes fueron dispersados por gendarmería y la policía y no se prolongaron demasiado. La modalidad de lucha fue retomada años después.

Por su parte, la movilización de los trabajadores ypefianos contribuyó al fracaso de las políticas promovidas por el gobierno de Estado. Ahora bien, la fragmentación y divergencia comienza a sentirse en el interior de SUPE, cuando a finales de los 80’ se impuso en Vespucio la lista celeste, perteneciente al sindicalismo peronista tradicional,

¹⁵⁰ Cabe señalar que las diferentes prácticas de resistencia y lucha se encuentran atravesadas por lo que damos en llamar una tradición de izquierda en la zona. Desde el derrocamiento de Perón en 1955 se fue conformando en Salta, una heterogénea izquierda peronista, influida por la tradición marxista y anarquistas, ambas instaladas en la provincia desde principios del siglo XX. Fuera de esa corriente principal, aunque frecuentemente en contacto con ella; hacia 1961 se fundó el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP); entre 1963 y 1964 el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) intentó crear en Orán el primer foco guerrillero guevarista de la Argentina, aunque el grupo fue derrotado por las fuerzas represivas. En 1965 se fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), a partir de la fusión del FRIP y la agrupación trotskista Palabra Obrera. Ese mismo año, el PRT presentó candidaturas para las elecciones legislativas en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. En 1968 el PRT se dividió en dos: por un lado, el PRT El Combatiente, dirigido por los hermanos Santucho, que reivindicó la lucha armada y creó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); por el otro, el PRT La Verdad, dirigido por Nahuel Moreno, que en 1972 se transformaría en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), al fusionarse con un sector de izquierda del Partido Socialista dirigido por Juan Carlos Coral. Por su parte, las distintas expresiones del peronismo revolucionario alcanzaron un predicamento notable, que incidió claramente en las elecciones de 1973. Tartagal y Mosconi no quedaron por fuera del contexto de la radicalización de las prácticas políticas que se desarrolló en esa época. Hacia 1968, el movimiento obrero de la zona adhirió a la combativa CGT de los Argentinos (CGTA), apoyada por distintos sectores de izquierda. De 13 gremios que funcionaban en la región, 11 se afiliaron a la CGTA: Madereros, Unión Obrera de la Construcción, Sindicatos Gastronómicos, Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, AATRA, Asociación del Personal Aeronáutico, Asociación de Trabajadores del Estado, Centro de Empleados de Comercio y entre ellos SUPE. Por otro lado, el movimiento estudiantil fue uno de los ámbitos donde la influencia de la izquierda salteña se hizo sentir a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970; en 1974, tras la apertura de la sede central de la UNSA en la ciudad de Salta, se creó la Regional Tartagal. Ver: Benclowicz, 2013...op...cit.

mientras que el sector más combativo se presentó como “lista marrón y blanca”¹⁵¹. Varios miembros de la conducción previa fueron elegidos delegados y cierto reconocimiento del que gozaban entre sus compañeros, forzó a la nueva conducción a aceptar la creación y financiación de una comisión especial para el seguimiento de los pasos de privatización de YPF, integrada, ante todo, por los llamados “activistas combativos” (Benclowicz, 2013).

A inicio de los 90’, las correlaciones de fuerzas divergentes se van a homogeneizar a nivel nacional, ante todo cuando en el comienzo del gobierno de Estado de 1989 se marca una nueva etapa, en torno de la lucha contra la privatización de YPF y, otro tejido relacional del sindicato para con el Estado (Diario El Tribuno, diciembre, 1989; y setiembre 1991). Nos encontramos, para ese entonces, con la siguiente declaración de la lista celeste, cuyo nombre era: “Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización”:

Cros. Ypefianos de Yacimiento Norte, que ésta amplia y nueva victoria del Movimiento Celeste, los llame a la reflexión: NO PERMITAN EL INFLILTRAMIENTO DE LAS MINORIAS DE IZQUIERDA, seguidas por otras de ingenuos que piensan que el poder y la fuerza pueden más que la razón, instados por un núcleo infame de la sociedad, que resguarda solo sus propios intereses, para que se quebrante el Orden Constitucional del País. UNIDOS, SOLIDARIOS Y ORGANIZADOS, trabajamos con FE Y ESPERANZA en bien de Y.P.F. y de S.U.P.E., que es también trabajar en defensa de la Democracia y de nuestra querida Nación Argentina (Declaración Lista Celeste, Filial Vespucio, 6 de noviembre de 1990)

3.2- La lucha contra la privatización, bajo la lógica y órbita del gobierno de Estado asumido en 1989

Entre las diversas Reformas de Estado y la reconfiguración de su rol desde 1989 y 1995 en la provincia de Salta, trabajadas en los apartados I y II, se modifica la correlación de fuerzas con las poblaciones trabajadoras, que comienzan a advenir “trabajadores desocupados”¹⁵². En este diagrama de poder, gobierno y resistencias más o menos articuladas con Diego Ibáñez como secretario general a nivel nacional y Fernando Jurado, como secretario general en Vespucio, el gremio SUPE procuró alinearse a la política del gobierno del Estado nacional instalado en 1989: “*Algunos gremios, la federación ya con Diego Ibáñez que era el secretario general, él estaba entregado de pies y manos,*

¹⁵¹ Para la renovación de autoridades gremiales en 1988 se formó a nivel nacional un “frente antiburocrático que se presento como lista “marrón y blanca”.

¹⁵² En el año 1992, dos años después de comenzado el proceso de privatización, la actividad petrolera en el Dpto. Gral. San Martín había disminuido un 73%. El desempleo se transformó, para entonces y desde entonces en un fenómeno radical, en la región entera. En mayo del 2001 mientras la tasa de desocupación de la ciudad de Salta era del 17,1% en las ciudades de Mosconi y Tartagal alcanzaba el 42,8%. Svampa y Pereyra, 2003...op...cit.

inclusive él había puesto plata de todos los trabajadores para la campaña de Menem-Duhalde”. (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

En 1990 el sindicato firmó el convenio colectivo N° 30/90, que introdujo importantes cambios con relación al que regía la actividad desde 1975. En el viejo convenio se garantizaba la estabilidad laboral y se establecía el derecho de intervención sindical ante acotamientos que la pusiesen en peligro. En cambio, el de 1990 no contempló esas garantías y condicionaba los beneficios contemplados en su propio texto a la situación económica de la empresa (Murillo, 1997; Orlansky y Makón, 2003). A partir de ese momento se instrumentó una política de despidos y “retiros voluntarios” o “jubilaciones anticipadas” de modos masivos.

Por su parte, si bien la dirección sindical afirmaba oponerse a la privatización, defendía la necesidad de “reestructurar” la empresa y de convertirla en una sociedad anónima” (El tribuno, 4/01/1991). En este diagrama de relaciones de fuerzas, intereses, derechos y resistencias, de un promedio de 4,6 huelgas anuales entre 1984 y 1988 realizadas contra la política petrolera de Alfonsín, se pasó a 1,4 entre 1990 y 1994 (Murillo, 2000: 208). Entre las prebendas más relevantes, se encontraba el Programa de Propiedad Participativa que destinaba el 10% del paquete accionario para los trabajadores bajo el control de la cúpula sindical, los subsidios para la compra de equipamiento de YPF y para la formación de cooperativas que prestarían servicios a la empresa privatizada, la obtención de subsidios para la obra social sindical, entre otras: *“De este modo, los dirigentes sindicales iniciaban la transformación de representantes de los trabajadores a empresas protegidas por el Estado, modelo de sindicalismo de negocios que fue impulsado por casi todos los gremios pertenecientes a la CGT oficial”* (Benclowicz, 2013: 151)

Ahora bien, un vasto sector de la población trabajadora se oponía a la privatización y reclamaba una convocatoria a asamblea general del gremio para discutir la situación. Ante la negativa de la dirección, a principios de enero de 1991 se organizó una movilización a la sede de SUPE Vespucio para exigir una asamblea extraordinaria (El Tribuno, 4/01/1991) y se realizó un acto en Mosconi contra la privatización, con la participación del Partido Obrero y la Izquierda Unida. Para marzo de 1991 el cuerpo de delegados convocó a una asamblea “para discutir un plan de acción por el salario y para oponerse al plan de entrega del petróleo (Prensa Obrera, marzo de 1991) a partir de lo cual se conforma una agrupación que nuclea a los trabajadores “activistas” que se oponían a la privatización, la *Agrupación de Trabajadores ypefianos*. Dicha agrupación estaba

influenciada por la izquierda local, de hecho Juan Nieves militante del PC y delegado de SUPE - luego fundador de la UTD Mosconi- fue un importante referente. También Perico Raineri, delegado y militante del PO participó inicialmente y jugó un importante papel en la lucha: así como Rodolfo “Chiqui” Peralta, hasta hoy referente de la UTD Mosconi, y militante para aquel entonces del Partido Intransigente, que participó del espacio y de la lucha, siendo él, no un trabajador calificado de YPF, sino un encargado de seguridad de la empresa.

Dicha Agrupación de Ypefianos se veía aislada y acosada por la dirección oficial de SUPE, a partir de lo cual establecieron diferentes contactos con filiales opositoras, lo que aumentó el acoso sindical local. También se movilizaron a nivel nacional hacia el Congreso de la Nación, Diputados y Senadores y a nivel provincial, así como interprovincial, buscando apoyos diversos trascendiendo el espacio de YPF. Así se fue acrecentando en número de trabajadores, que de diferentes sectores confluían en la defensa de sus fuentes laborales.



Integrantes de la Agrupación de Ypefianos en el Congreso de la Nación en Bs. As. Foto de Juan Nieves, 1991.

La Agrupación de Trabajadores Ypefianos viaja a Bs. As., con una propuesta dirigida a refutar la afirmación: “YPF no da ganancias”, realizada por los sectores dirigidos a privatizar. Algunos de los lineamientos de la propuesta de los trabajadores, en base a datos y estadísticas, se centraban en que los sectores productivos de YPF por el tipo de actividad, no podía tener pérdidas:

...cuando fuimos a exponer el proyecto que nos ignoraron, como dicen ahora nos ningunearon, estaba de presidente de la comisión de energía el Diputado Antonio Casia, un burócrata que lo siguió después a Diego Ibáñez que hoy sigue en el sindicato y no nos dejó hablar (...) primero a la comisión de energía de la cámara de Diputados de la Nación, ahí estaba el representante nuestro secretario general de S.U.P.E, se llamaba Jurado, él

dijo: “el yacimiento Norte ni siquiera produce un metro cubico por trabajador. (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Pese a los esfuerzos, las luchas y las búsquedas astutas, como ya fue trabajado en el apartado I, la privatización de YPF avanzó con velocidad y en abril de 1991 se aprobó el decreto N°643/91, que adjudicó la primera área en la zona. Según la información encontrada y trabajada, la Agrupación de Trabajadores Ypefianos con tal privatización se constituyó formalmente, ese mismo año, y a partir de ahí desplegó diversas actividades.

A pesar del contexto adverso los opositores a la privatización alcanzaron cierta influencia e incluso lograron adhesión de funcionarios y representantes provinciales. En abril de 1991 se reunieron 2000 personas en la plaza general de Mosconi para protestar contra la privatización de YPF, además de la Agrupación de Ypefianos, también participó el intendente local (El Tribuno, 13/05/1991). En mayo de igual año 1500 personas se reunieron en Tartagal para oponerse a la privatización, dicho acto se consolidó en una asamblea popular que pidió la renuncia de Ibáñez y la convocatoria de un congreso nacional de trabajadores petroleros de todo el país, mientras que impulsó un plan de lucha a nivel provincial.

Ahora bien, en este juego vincular entre poder y resistencias, ni la dirección sindical ni las autoridades provinciales se pronunciaban explícitamente a favor de la privatización. En su lugar, se postulaba la idea de “reestructuración” de la empresa. A principios de mayo de 1991, tanto los dirigentes de SUPE, como Roberto Romero, por entonces diputado nacional y presidente del PJ local, y Juan Carlos Romero¹⁵³ - hijo - senador nacional, participaron del acto “contra” la privatización de YPF en Tartagal: *“...allí es ese acto es donde dice Romero: “Si yo llego a levantar la mano para que se privatice YPF, me la corto” y bueno, vimos que nunca se cortó la mano, al contrario”* (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

En tal sentido, también se recreaban los vínculos estratégicos entre provincia y nación. De hecho el proyecto de privatización de YPF fue acompañando por la provincialización de los recursos hidrocarburíferos, quedando a mediano plazo las regalías bajo su

¹⁵³ Juan Carlos Romero desempeñaba funciones legislativas en torno del proceso de contrarreformas neoliberales, como se mencionó, fue Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vicepresidente de la Comisión de Economía, secretario de la Comisión de Combustible y secretario de la Comisión de la Reforma del Estado. Aún así, el senador, cuasi un “*deja vú*” en la actualidad, por aquellos años se encargó de afirmar que el proyecto de privatización de YPF “no pasaba por los suelos del Senado” (El tribuno, mayo de 1991).

control¹⁵⁴. En este juego heterogéneo, Roberto Romero en el acto contra la privatización, en mayo de 1991, planteó que “las provincias resultan víctimas de lo que se piensa en Buenos Aires”. Dicha reivindicación federalista fue utilizada para responsabilizar al poder central por la privatización de YPF y, por las consecuencias que esa medida produciría en la zona, instituyéndola como algo “ajeno y dispuesto”, lo cual posibilitaba, quizá “ocultando, quizá desdibujando” el claro interés de buena parte de los sectores dirigentes provinciales con la concreción de dicha medida, así como con las Reformas neoliberales del Estado y la economía, que se profundizarán con el gobierno de Juan Carlos Romero, a partir de 1995.

Tampoco el gremio, que parecía mostrarse disidente de la medida nacional de privatización, impulsó medidas de fuerza concretas, más bien sus prácticas se trazaron en el ámbito del discurso coloquial y mancomunado tradicional dirigido a la mantención de los puestos de trabajo, solicitando transferencias de personal, etc. Esto era compatible, en cierto sentido, con el proyecto promotor de Cooperativas promovido por el sindicato y por la dirección de YPF¹⁵⁵.

A su vez, y como es “tradición” en la zona, se buscaba “amedrentar” la actividad de la Agrupación de Trabajadores Ypefianos, quienes denunciaban la actividad de servicios de inteligencia que operaban en Vespucio interceptando sus comunidades e intimidando personal (El Tribuno, julio de 1991). Mientras que, con la complicidad de la dirección gremial, las autoridades ypefianas presionaban a los trabajadores para que aceptaran los retiros voluntarios, entre tanto se instalaba, discursiva y políticamente, la cuestión de que la privatización era irreversible. A partir de lo cual, dicha dirección mediante lo que damos en llamar el poder del miedo y el gobierno del deseo proclamaban la reestructuración de la empresa-fábrica, haciendo énfasis en “no perder lo obtenido”.

Entre algunos de las prácticas programáticas identificadas se encuentran la derivación de los trabajadores a cursos de capacitación en diferentes áreas durante el lapso de un año, lo

¹⁵⁴ Ley N° 24.145 de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de YPF, Artículo 1. Dicha ley dispuso la transferencia de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias, respetando los contratos en curso y sus eventuales reconversiones.

¹⁵⁵ Para la conformación de cooperativas, los trabajadores debían adoptar la modalidad de los contratos terciarizados, por lo cual se retiraban de la empresa y armaban las cooperativas. Para alentar la decisión política antedicha se permitió la venta de equipos e insumos de YPF a un valor muy inferior al real y se ofrecieron contratos garantizados por un lapso determinado, al término del cual se suponía competirían en el mercado. Cada sector podía, según las sugerencias y discursos programáticos de la empresa prestar servicios de operaciones y mantenimientos, transporte de productos petrolíferos, transporte de personal, vialidad y movimientos de suelos, construcciones, contaduría, minería, exploraciones, electricidad, etc., a partir de las cooperativas. La propuesta, sumada al monto de indemnizaciones por el retiro resultaba atractiva y fue aceptado por gran parte de la población trabajadores, con los efectos y consecuencias que trabajaremos luego, en torno del caso puntual de Mosconi.

cual era financiado y dispuesto por la empresa para favorecer la “posterior inserción laboral de los trabajadores desvinculados”; lo cual se acompañaba de la modalidad voluntaria y/o forzosa de retiro que alejaban a los trabajadores de sus lugares de trabajo. Observamos cómo lo antedicho resultó un ejercicio microconductual de dirección de las conductas y de subjetivación de los trabajadores, mediante la inversión en capital humano y con ello la promoción de la “autogestión empresarial de la propia existencia”, lo cual veremos se profundiza en la puesta en práctica de los diversos programas de gobierno dirigidos a estas poblaciones advenidas, luego de la privatización, “pobres y desocupadas”.

De hecho, en este cruce de relaciones de poder y resistencia, en el interior de YPF, en 1992 un grupo de integrantes de la agrupación de ypefianos se presentan como lista marrón y blanca a las elecciones de SUPE, en el momento de presentar la lista reciben el telegrama de despido y quedan desvinculados de la actividad laboral petrolera:

...nosotros resistimos con la última lista marrón y blanca se llama que nos oponíamos a la privatización y nos oponíamos a la burocracia sindical de Diego Ibáñez y nos ponemos a la cabeza y armamos una lista en tiempo record. De secretario general Perico Raineri un compañero del partido obrero, yo iba como adjunto, iba un radical que se llamaba Jorge Gerala y después varios compañeros. Nos oficializan la lista a las diez de la mañana para que nos presentemos a la contienda electoral y a las una de la tarde nos llega el telegrama de despido a mí, a Perico Raineri y a Gerala. (J. Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013)

La declaración de dicha lista señalaba lo siguiente:

En el marco del desastre producido por la político fondomonetaria que gira sobre una gigantesca reconversión de la mano de obra y el remate descarado del Patrimonio Público, la burocracia sindical, eso es IBAÑES, GASSI y su expresión locas los JURADOS, NIETO, etc., es decir la burocracia CELESTE, acompañaron la política MENEMISTA, primero confundiendo a los trabajadores, luego ignorando las luchas del año 91, y finalmente aliando directo de la burocracia Empresarial de ESTENSORO Y CIA. Intentando usar los fondos sindicales para convertirse en “Empresarios”, todo un símbolo de traiciones y en estos días con disimulos, cómplices de los despidos de los compañeros activistas de la lista y fuera de ella y no que garanticen públicamente las elecciones de SUPE de noviembre y la participación en ella de la MARRON Y BLANCA con todos los candidatos, lista que hizo su presentación ante la Junta Electoral 8 (ocho) días antes que el despido de tres de sus integrantes: CESAR RAINERI, JUAN N. NIEVAS Y JORGE GERALA (Declaración lista Marrón y Blanca, 3 de noviembre de 1992)¹⁵⁶

¹⁵⁶ El petitorio y/o las propuestas de trabajo que dicha lista sostenía y, que luego atravesarán las diferentes luchas piqueteras hasta la actualidad, eran las siguientes: por un salario mínimo igual al costo de la canasta familia; por la reestatización de todas las áreas sin indemnización; por el control obrero en todas las actividades petroleras; por el monopolio estatal del Petróleo y todas sus actividades; por una jubilación mínima del 82% móvil del sueldo en actividad; control de las cajas por jubilados democráticamente elegidos irrevocables en cualquier momento; rechazo de la jubilación privada fuente de una nueva negociado en manos de las aseguradoras; por la extensión a 30 años de los contratos de las cooperativas, S. A integradas por trabajadores “Despedidos” para garantizar sus fuentes de trabajo y el porvenir de la zona. Fuente: declaración de la lista marrón y blanca, 3 de noviembre de 1992.

En este juego de relaciones, subjetivaciones y luchas, la empresa comienza a tener paralizaciones parciales, de hecho y como ya fue trabajado en el apartado I. A mediados de agosto de 1991 se aprobó la concesión de la importante área de Puesto Guardián¹⁵⁷ en los sectores que seguían bajo la órbita de YPF y, los directivos contrataban servicios en aéreas donde la empresa contaba con personal efectivo, que queda inactivo, al tiempo que se instalaba la idea de “ineficiencia” de YPF, muy promovida a nivel nacional, como ya fue trabajado.

Finalmente, los topes de indemnizaciones fueron resueltos por el Congreso nacional mediante la Ley de Empleo sancionada el 13 de noviembre de 1991. Si bien los montos otorgados por los retiros voluntarios no dejaban de ser considerables, esto implicaba la pérdida de los puestos de trabajo-empleo y le otorgaba una clara ventaja a las empresas que compraron a YPF, que no precisaban pagar indemnizaciones por despidos y que contrataban según las nuevas leyes de perfil neoliberal atravesadas por la flexibilidad laboral y la extensión de la jornada. Sin embargo, la energía privatizadora que se tornaba cada vez más real y certera todavía tenía que sortear otros obstáculos trazados en el acaecer de las prácticas de lucha y resistencia: la primera pueblada de la historia de Tartagal y Mosconi.

3.3- La primera pueblada en Tartagal y Mosconi, últimos destellos de la lucha “contra la privatización”: setiembre de 1991

Como veremos a continuación, cuando hagamos especial referencia y análisis de la experiencia de la UTD Mosconi, los primeros grandes cortes y ocupaciones de ruta, así como las puebladas contra las lógicas y prácticas ante todo nominadas como “neoliberales”, fueron en Cutral Co y Plaza Huincul en junio de 1996 y abril de 1997. A partir de lo cual se visibilizaba a nivel nacional la situación de los trabajadores, los pueblos y los territorios invadidos por la privatización de YPF y sus efectos devastadores. A estos primeros cortes y puebladas de trabajadores desocupados ex/ypefianos y piqueteros, ante todo, les siguieron las de Tartagal y Mosconi en 1997.

Ahora bien, a estas primeras revueltas nominadas “piqueteras”, le precedieron las ya trabajadas y en setiembre de 1991 una pueblada en Tartagal y Mosconi, como antesala de las prácticas de resistencia que se radicalizarían años más tarde. Para setiembre de 1991 el proceso de privatización de YPF, había alcanzado un considerable punto de ebullición,

¹⁵⁷ Según decreto N° 1596/91. Boletín Oficial de la Republica Argentina, 16 de agosto de 1991.

mientras la provincia discutía un proyecto de provincialización de las reservas. La Agrupación de Ypefianos realizó una asamblea el 5 de este mes y, luego junto con el Partido Obrero y algunos intendentes de la zona convocó a otra más grande, en el complejo municipal de Mosconi para el 11 de setiembre, adonde se reunieron entre 4000 y 5000 personas de localidades como Mosconi, Tartagal, Aguaray y Pocitos. Dicha Asamblea, transmitida en directo por la radio Tartagal, se pronunció contra la dirección de SUPE, forzó la renuncia de la comisión directiva y del secretario general de la filial Vespucio y resolvió cortar la ruta nacional 34 a la altura de Mosconi y de Aguaray donde se encuentra la destilería de Campo Durán, para rechazar la privatización de YPF (Benclowicz, 2013: 165; El Tribuno, 11 de setiembre de 1991).

Los ejes de la discusión asamblearia giraban en torno de:

...en defensa de Yacimiento Norte y de la fuente de trabajo, que es una forma de velar por el patrimonio de estas tierras- en alusión al departamento Gral. San Martín que tanto entrega al país y que nada recibe en proporción, excepto ciertos efectos negativos dirigidos desde gobiernos centralistas que, al parecer, poco les interesa o, posiblemente desconocen sobre el terreno la realidad de la actual situación y el destino de los trabajadores de YPF del Norte y de sus respectivos núcleos familiares (El Tribuno, 11 de setiembre de 1991).

En dicho acontecimiento se realizó, por parte de la intendencia local (de la mano del intendente local Karinocolas) un importante ordenamiento policial con colaboración de la policía provincial y gendarmería, además de varios controles del tránsito en torno de las instancias de diálogo y protesta.

La ruta permaneció cortada toda la noche, buena parte de los trabajadores de YPF Vespucio suspendieron las tareas realizando paros de hecho y, se convocó a una asamblea popular en la ruta para el día siguiente. Mientras tanto, los poderes centrales de la empresa, provinciales y demás referentes comenzaban a ejercer diferentes tipos de presiones para que se levante el corte, a tal punto de que un integrante de Gendarmería nacional se presentó en la ruta con una orden de desalojo. La dirección nacional del SUPE propuso el levantamiento del corte y la convocatoria a un paro en todo el país para el 13 de setiembre (El tribuno, 13/09/1991).

Desde la mañana del día 12 de setiembre la población comenzó a volcarse a la ruta, la mayoría provenía de las localidades de Tartagal y Mosconi. En ambas localidades, así como en Aguaray y Pocitos todos los negocios comerciales cerraron, el corte se había convertido en “una pueblada”.

Mientras tanto, se produjo el arribo de tropas de Gendarmería Nacional con las instrucciones de desalojar la ruta. La Agrupación de Ypefianos, que jugaba un papel

central en el corte, se vio intimidada por los sectores diversos que acompañaban la protesta y que ahora procuraban resolverla, mientras que la magnitud de la situación había superado lo esperable y manejable. En ese contexto y con la amenaza clara de una violenta represión policial, los dirigentes de la Agrupación se reunieron con los representantes del SUPE, de la CGT Regional, del comercio y de los gobiernos municipales con los oficiales de gendarmería y acordaron levantar el corte (El Tribuno, 13/09/1991).

Resulta importante referir a las diversas estrategias y prácticas puestas en marcha y que tendrán una continua discontinuidad a lo largo de los años, por lo menos hasta el 2001, en cuanto a la intervención de la iglesia católica en los intentos de desmovilización de las prácticas de resistencia radicalizadas y colectivas en Mosconi. De hecho, la anécdota del ejercicio Monseñor Sueldo, el obispo de Orán convoca a través de una mujer que se encontraba en la manifestación a una procesión religiosa para las 18hs, mientras se transmitía el siguiente discurso de perfil “humanista cristiano”, ya desarrollado anteriormente: *“Bueno hijos míos ustedes saben que la violencia no nos llevará a ningún lado, ustedes realmente lo que se dicen muchas veces son versiones mal intencionadas de grupos que se ocupan de crear el caos”*. (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013); de este modo se señalada indirecta y directamente que la violencia era promovida por este grupo de ypefianos que habían convocado al encuentro y luego a la pueblada masiva. Esta primera protesta no estaba conformada y promovida solo por los llamados “trabajadores ypefianos”, sino que había geólogos, ingenieros, y demás sujetos con diferentes formaciones y oficios. Así, la “gente, el pueblo” los más de 9000, según enunciaciones nativas, que estaban en la calle querían continuar con la medida de fuerza, de hecho: *“El pueblo se quedó. La gente que pertenecía a vialidad tiene máquinas, Tragabastos y todos ellos querían hacer un puente pero cortando todo el asfalto, aislarlo. Tenían la firmeza de querer decir: “Viejo acá no nos dejemos agarrar”*. (J. Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

De este modo y en estos inicios, la práctica de resistencia, si bien resultó fragmentada por los llamados sectores “dominantes, hegemónicos” (mediáticos, políticos, pastorales), cuestión que se va a recrear en los años venideros, no deja de resultar un primer destello de la situación que se aproximaba, considerando que muchos de los referentes de la Agrupación de Ypefianos recibirán sus telegramas de despido en 1992.

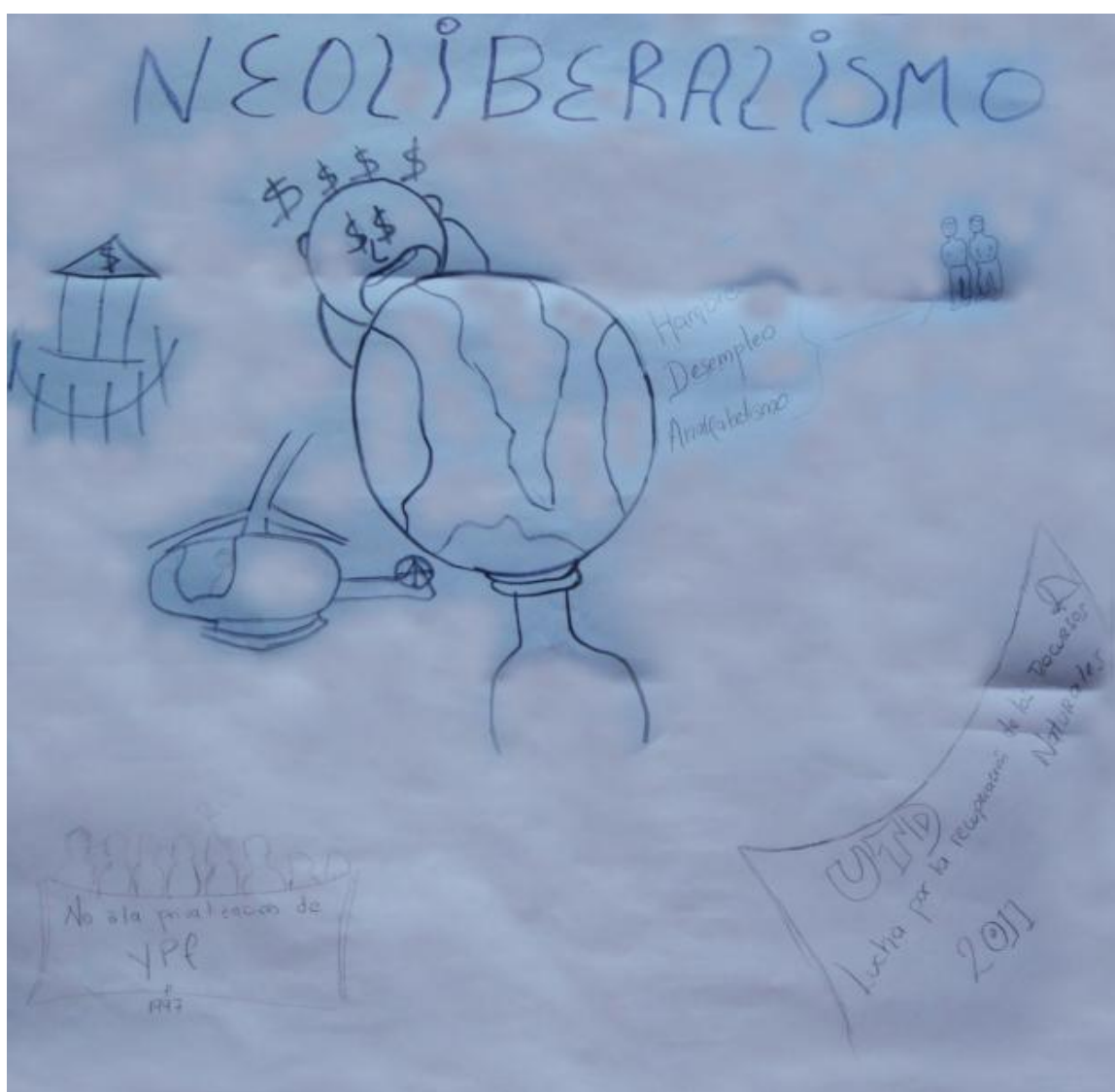
En este tejido vincular, los acontecimientos de 1991 superaron a las solas agrupaciones y activismos, puesto que se extendieron a la casi totalidad de la población local-regional. En tal sentido, aconteció lo que damos en llamar un desbloqueo de las prácticas de lucha en la región, a partir de un trastrocamiento en torno de las tendencias hasta ahora vigentes y comunes lideradas por los sindicatos y los clientelismos políticos, así como por los partidos de izquierda. La singularidad, de las prácticas de lucha y resistencia de 1991, será un importante nutriente para las puebladas siguientes y, los diversos “modos de resistencia”, que no resultan suma cero, pues se realizan en la reconfiguración creativa y movediza de historias abiertas y múltiples.¹⁵⁸

3.4- La privatización de YPF: la tragedia y la emergencia

Considerando que en el apartado I del presente capítulo hicimos un breve recorrido por los mecanismos, técnicas y dispositivos que tuvieron como efecto la privatización de YPF acorde al programa de la época. En el presente subapartado, de un modo gráfico y breve, trabajaremos la cuestión de la privatización de YPF puntualmente en el yacimiento norte, a partir de las tramas vinculares y enunciativas obtenidas en un trabajo de taller en la Universidad Popular-UTD Mosconi, allá por setiembre del 2011. En dicho taller, se encontraban ex/ypefianos entre los cuales había algunos que habían pertenecido a SUPE, otros que nunca lo habían hecho, mujeres y hombres no ypefianos, pero que sí habían participado de las primeras puebladas y cortes, así como habían experimentado el mundo ypefiano y sus avatares, y jóvenes, algunos hijos de ex/ypefianos, otros nietos, sobrinos y algunos referentes de la UTD Mosconi. Recuperaremos dos afiches resultado de un trabajo grupal en torno de los efectos que tuvo la privatización de YPF en la zona, y con

¹⁵⁸ Luego del levantamiento del corte, se realiza el paro convocado por SUPE el 13 de setiembre, con un acatamiento casi total en Vespucio, importante acatamiento en Ensenada y Capital y parcial en el sur y en Mendoza. El gobierno lo declaró ilegal y el directorio de YPF dispuso la cesantía de 2.300 trabajadores en todo el país, que fue aceptada por el sindicato. En Mosconi se produjeron algunas protestas menores, algunas mujeres de trabajadores de YPF se organizaron y movilizaron en defensa de las fuentes de trabajo y la Agrupación de Ypefianos realizó una reunión pública. El movimiento de lucha se había debilitado y la justicia salteña comenzó a criminalizar las protestas enviando citaciones judiciales a distintos trabajadores que habían participado en la pueblada. Las elecciones provinciales se realizaron poco después, en octubre de 1991, el Partido Obrero obtuvo un 9% de los votos para concejales resultado sin precedentes en la zona y el país en general. El PJ fue derrotado por primera vez en elecciones libres para gobernador, resultando electo gobernador Ulloa del PR. La campaña que dejó a Cesar “Perico” Raineri, candidato del PO y delegado de YPF al borde de la concejalía, contó con el apoyo de luchadores contra la privatización vinculados al PC, como es el caso de Juan Nievas delegado de YPF, dirigente de la Agrupación de Ypefianos y fundador de la UTD Mosconi. Ahora bien, luego de la pueblada en las localidades de Mosconi y Tartagal se produjo una enorme desmovilización; como efecto de los retiros y despidos se vieron desvinculados de su trabajo entre 2.400 y 3.500 trabajadores, un 90% del personal de YPF de la zona. Mientras que diferentes empresas extranjeras y privadas se iban asentando en la zona (Síntesis extraída de Benclowicz, 2013: 168-70).

ello de lo que significó YPF y la relevancia de la UTD Mosconi a lo largo de estos años de supervivencia y de lucha, según enunciaciones nativas. Dichos gráficos fueron realizados en grupos, en los cuales todos participamos, en un espacio atravesado de ricas discusiones políticas, anecdóticas y emotivas; los mismos fueron puestos en común y rediscutidos en un ejercicio colectivo de diálogo y escucha, en el cual los “más viejos” recordaron y compartieron experiencias y, los “más jóvenes” se encontraron con relatos que a veces les resultaban comunes y otras novedosos, en torno de las localidades y tramas territoriales, en las cuales están siendo¹⁵⁹.



¹⁵⁹ La experiencia de dicho taller fue recogida en un informe, entregado a la UTD Mosconi que lo puso a libre disposición de quien desee revisarlo y repetirlo.

El presente gráfico, realizado en setiembre del año 2011, ha sido leído/relatado del siguiente modo, la imagen principal (el globo y el hombre, con cara de dólar, mirando desde arriba) refleja, según los integrantes del grupo, el monstruo del capital, manifiesto en lo que dieron en llamar “el sistema neoliberal de los 90”. El mismo se encuentra comiéndose el mundo, devorándose el mundo, que se torna globalizado. En nuestro país, el referente del neoliberalismo, a nivel de política de Estado, fue Carlos Menem, a partir de quien se dieron los procesos de ajuste, privatización, terciarización laboral, despolitización de los procesos sociales organizativos, desmovilización, desaparición del Estado de la intervención social y responsabilidad, así como el paso de la salud y la educación a servicios mercantiles, y no mas derechos, entre algunas de las cuestiones mencionadas: hambre, desempleo y analfabetismo. Así, se señala como pasamos a ser “recursos humanos”, cuando, según palabras de los integrantes “somos seres humanos”; mientras que la pobreza crecía y todo esto se reafirmaba con el corralito en el 2001, la partida del presidente en helicóptero, entre otras cuestiones. Ante todo, lo señalado se reflejó en las localidades del norte de Salta, según los integrantes del grupo, en la privatización YPF, la cual fue reconocida como el espacio de trabajo, organización obrera y movimiento económico, cultural, etc., en Mosconi y sus alrededores desde sus inicios, hasta su privatización.

En tal sentido, diversos fueron los comentarios, entre los cuales es posible rescatar aquellos que señalaban cómo, de a poco, desde adentro, los obreros, iban viendo que entraban otras empresas a hacerse cargo de trabajos de YPF, es decir, se terciarizaba y por ende, privatizaban ciertas labores. La privatización de YPF, a finales del gobierno menemista, no solo significó el cierre de una fábrica, de una petrolera, significó, según palabras nativas, para muchos de los que allí trabajaban “la muerte”; esto no solo perjudicó a los trabajadores, también al pueblo en general, a la zona, ya que todos, de uno y otro modo, vivían vinculados con YPF. Desde ese momento hasta hoy, se señaló y recalcó, sobre todo recuperando la figura de lo que desde 1996 será la UTD Mosconi, como el pueblo en general se encuentra en la lucha por sobrevivir, por recuperar el valor de sus recursos naturales, de su espacio natural de vida rica, y por el sentido de su vida digna, mediante trabajo, salud, educación y resistencia.

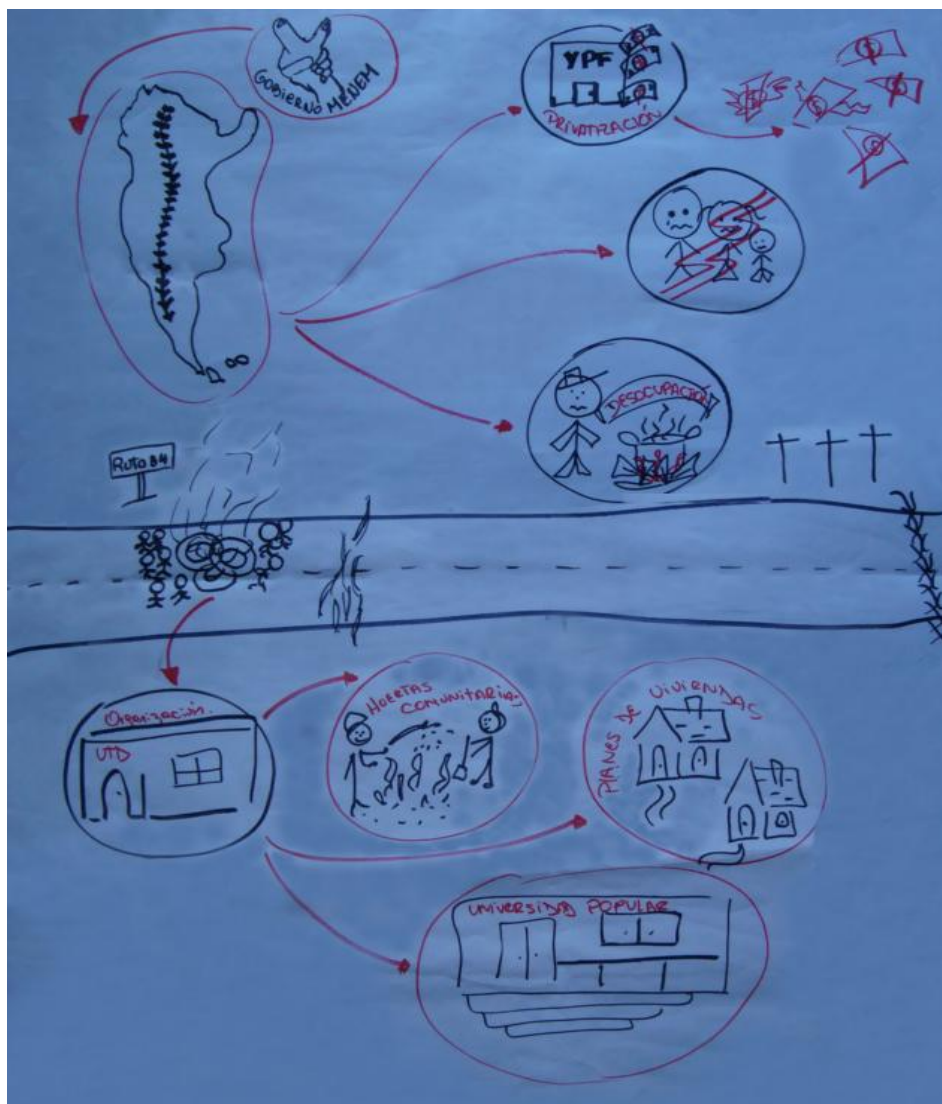


Gráfico 2. Taller, setiembre 2011.

La gráfica se lee de izquierda a derecha. Muestra el contexto argentino de los 90 con el gobierno de Menem señalado por la V de la victoria representativa del Partido Justicialista. Puesto que, la intención fue poner de manifiesto cómo, a través de ese discurso, muchos fueron engañados y llevados a votarle a este gobierno. Sobre todo, porque en la otra gráfica, Argentina está atravesada por una columna vertebral, que según los integrantes del grupo, representaba YPF, y que esto había sido señalado por el gobierno menemista. Sin embargo, en el proceso de desmantelamiento de Estado e instauración neoliberal a nivel social, cultural y político, no solo económico, se llega a la privatización de YPF, y los dólares salen volando, esos dólares que representaban, para algunos sueños y esperanzas, pues eran sinónimo de trabajo, y para otros, los poderosos, significaban negocios y poder, según enunciaciones nativas. Así, se muestra cómo

vendiendo YPF los dólares vuelan hacia los países potencias y el pueblo queda vacío, no solo de dinero, se remarca, también de sentido.

Pues, las consecuencias de la privatización son identificadas en la gráfica a través de: la destrucción de las familias, la desocupación, el hambre y, en el caso de Mosconi, la muerte (las tres cruces que refieren a los tres compañeros caídos en lucha). En estas épocas, a finales de los 90', llegan los cortes de ruta graficados con una ruta atravesada por gomas, fuego, gente alrededor y palos que la atraviesan. De un lado de la ruta ocupada y cortada se encuentra lo antedicho en torno de la privatización de YPF y sus efectos desbastadores y, del otro lado, se sitúa lo que desde 1996 será la UTD, el inicio de la organización, su sede, los proyectos en búsqueda de trabajo, con actividades como las huertas comunitarias, la planificación de viviendas y hoy, la universidad popular, como algunas de las actividades que realiza y realizó UTD. Por tanto, y como veremos a continuación la UTD, no solo cortó rutas, sino que significó un corte con las disposiciones políticas dominantes, según enunciaciones nativas.

Acorde a los relatos y gráficos antes descriptos se observa cómo la privatización de YPF trajo consecuencias devastadoras en la sociedad mosconense y zonal entera, entre las más relevantes se encuentra el despido del 90% de su planta de empleados¹⁶⁰:

Cuando nosotros nos fuimos eran 4500 en todo el norte, que se clasificaba como administración yacimiento Norte, y en Salta Capital en la sede divisional Salta habían 800 trabajadores entre la planta administrativa y la planta Chachapoya que es donde se producía el envasado de gas. A pesar de eso no significaba ningún tipo de pérdida, ni siquiera en los balances figuraba un exceso en pago de personal... (J. Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Ahora bien, en el momento preciso y los años posteriores a la privatización, como fue señalado, YPF pagó fuertes indemnizaciones a los empleados que aceptaron los retiros y la empresa, junto al Sindicato Único de Petroleros (SUPE), favorecía la creación de emprendimientos. Las PYMES o cooperativas, como le llaman los ex/trabajadores de YPF, contaron con contratos transitorios entre 18 y 24 meses, podían utilizar las maquinarias de la empresa y continuaban prestando servicios, mediante contratos de obra o servicios, pero perdiendo su relación de dependencia con YPF. Con el paso de los días la renovación de los contratos con la empresa ya privatizada comenzó a ser una tarea imposible; mientras que las lógicas jerárquicas de organización del trabajo se reproducían

¹⁶⁰La planta, que contaba en 1990 con 51.000 empleados, luego de un acelerado proceso de restructuración que incluía retiros voluntarios y despidos, pasó a tener 5.600 empleados. Las bajas contabilizadas entre 1990 y 1997 fueron: para la zona salteña, 3.400. Ver. Pereyra, 2006...op...cit.

al interior de las cooperativas trastocando su espíritu y dificultando su continuidad, según lo señalado por los mismos ex/trabajadores de YPF:

*...en el momento posterior a la privatización, cuando con el dinero de las indemnizaciones se crearon las cooperativas, ya que seguían siendo gestionadas por influencias empresariales externas (...) no funcionaban en asamblea, todos ponían igual dinero al entrar y luego el sistema era jerárquico*¹⁶¹.

A esta situación, de marcado disciplinamiento y jerarquización, se le sumaba la falta de otras alternativas, por lo cual muchos utilizaron la indemnización para realizar alguna actividad por su cuenta (kioscos, remiseras, etc.) o fue destinado al consumo y adquisición de bienes (compra de automóviles, casas), lo cual tampoco tuvo frutos, ya que parte de los bienes fueron vendidos, lo cual hizo imposible su reinversión.

Por tanto, a la desocupación repentina le siguió la desesperación, la angustia, la ausencia de oportunidades y el olvido, a partir de lo cual los ex/trabajadores YPF se tornaron *trabajadores-desocupados y moribundos* (De Certeau, 2000), según analizaremos en el próximo capítulo (2). La privatización de YPF significó, según enunciaciones nativas: la “muerte”, y la lucha comenzó a ser *contra la muerte*, no solo física, también emocional y ética: “*Cuando YPF se privatiza se llevan todo, no solo los dólares, también el sentido de la vida*”¹⁶². Dicha tragedia, no sólo se manifestó en suicidios, separaciones familiares, violencia doméstica y callejera, así como alcoholismo y drogadicción; también lo hizo mediante la puesta en juego de mecanismos diversos de ocultamiento, represión, encierro y olvido a los que fue sometida la población local/regional, en sus propias comunidades.

Por tanto, en este momento histórico y como efecto de la privatización de la empresa-fábrica YPF acorde a los programas de gobierno descriptos en los apartados I y II, no solo se modifica el espacio social y político, sino la visión de mundo y el lugar de la propia vida. Cambiaron drásticamente y rápidamente los posicionamientos anteriores, las divisiones, los cortes y los criterios de diferenciación ya no son los mismos:

Los ex/ypefianos ya no son los otros ya son parte del nosotros o viceversa. En este sentido, entre los sectores pobres y empobrecidos hay una percepción de nivelación para abajo “ahora todos estamos iguales, todos estamos viviendo mal. Se borran algunas diferencias, pero sin embargo se marcan otra fuertemente (Aguilar, Vásquez, 1996: 3).

Entre la vida y la muerte, en esta historia local según palabras de Juan Nievas: “...*que hicimos nosotros, los ex/ypefianos, los desocupados*”, en 1996 comenzará a instalarse de

¹⁶¹Taller, realizado en la sede de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, perteneciente a UTD. Setiembre 2011

¹⁶²Síntesis de relatos y comentarios de ex/trabajadores de YPF y de habitantes de Mosconi, obtenidos en el trabajo de Taller, realizado en la sede de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, perteneciente a UTD. Setiembre 2011.

modo emergente y astuto la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi¹⁶³, en lucha por trabajo y la dignidad. Por ende, en este acaecer de la tragedia, el encuentro con la muerte puso de manifiesto, siguiendo a Kusch, que ya no se trata de una vida para siempre, mientras que: “...con la muerte algo nuevo comienza. Indudablemente vida y muerte pertenecen al mismo segmento, y ambas partes solo se distinguen por su colorido (...) Morir es germinar” (Kusch, 2000, I: 596). La muerte, entonces, instó a “luchar por trabajo y en defensa de la vida”, a germinar comunal y singularmente.

Esbozos finales:

El supuesto que ha guiado la construcción del presente capítulo y sus correspondientes apartados, remite a considerar que las relaciones entre gobernados y gobernantes, se desarrollan y construyen en un diagrama más amplio de pensamiento y modos de hacer. Por lo cual es fundamental dar cuenta de los diferentes programas de gobierno que tuvieron lugar en las épocas estudiadas, haciendo particular hincapié en la reconfiguración del rol del Estado, las consideraciones en torno de la economía, el mercado y la sociedad civil.

Al inicio del capítulo realizamos un breve recorrido genealógico por la gubernamentalidad de perfil predominantemente neoliberal, que desde los años 70' hasta los 90' se instaló y radicalizó en la Argentina.

Por su parte, los diversos cruces singulares de las múltiples lógicas de gobierno que trazaron los programas de gobierno analizados, no trataron de realizar una determinación del pasado por el presente, ni un presagio de lo que vendría a partir de lo diagramado. Pues esto impediría identificar qué hay de nuevo y diferente, singular, en el hoy respecto del ayer; así como llevaría a perder de vista las diferentes prácticas de resistencia y lucha, que los efectos de las prácticas y lógicas de gobierno dispuestas en la época de los 90', tuvieron como corolario y correlato.

En tal sentido, observamos cómo, en los años 90', también se re-creó la lógica peronista de vincular el aumento del salario con un mejor rendimiento de la economía, aunque en un diferente contexto de distribución de la riqueza en el cual el salario es sinónimo de ingreso e inversión de capitales. Nos guió la remembranza diferencial de cómo el

¹⁶³ La referencia específica a la UTD será explayada en el apartado III del capítulo 2, en el cual profundizaremos en la irrupción del llamado movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, a partir de una analítica descriptiva e histórica de las diferentes prácticas de resistencia, lucha, autogobierno y transacción.

peronismo pretendía y ejercía un gobierno político de la economía y no un gobierno económico de la economía y la política, tal era el caso del programa de gobierno analizado.

Por tanto, las transformaciones propuestas y realizadas en el programa de gobierno de los años 90' re-configuran el rol del Estado, ante todo, mediante un proceso de descentralización, focalización, flexibilización y frugalidad de los espacios y ejercicios instituidos de gobierno. En tal sentido, también observamos cómo se puso a jugar el principio de subsidiariedad heredado de la DSIC, aplicando recetas y técnicas traídas de los países potencias, desarrollados y neoliberales. En este diagrama de poder, gobierno y verdad observamos el modo en que las privatizaciones, conllevaron a una renovada manera de poner en juego diversos mecanismos de intervención y conducción de las acciones de los sujetos advenidos gobernables, mediante la introducción de una profunda reconversión dirigida a ejercer un gobierno económico de las poblaciones, una reafirmación del mercado como espacio de veridicción y gestión de las libertades.

En tal sentido, como experiencia central para el trabajo analítico de tesis, en los avatares de las gubernamentalidades de la época, reconstruimos el proceso de “privatización de YPF”. Nos detuvimos en la práctica estratégica de la privatización de la empresa estatal, por considerar que se trata de un acontecimiento inaugural entre cuyos efectos encontramos el advenir de los “trabajadores en pobres”; a partir de lo cual se abren dos dimensiones de análisis en torno de la reconfiguración de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, por un lado y, por otro, la emergencia e instalación de las prácticas de resistencia y lucha piqueteras.

Luego del programa de gobierno de perfil neoliberal de los años 90', en el 2000 se instala, en Argentina, un programa de gobierno bajo la bandera de lo que se llamó “La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”. Al respecto realizamos un breve recorrido por dicho programa, haciendo especial hincapié en las continuidades y discontinuidades, las crisis y los retoques, que en la Argentina de esta época llevaron a la profundización de la racionalidad neoliberal instalada en los años 90'.

En los avatares de la investigación nos introdujimos en el programa de gobierno que desde 1995 a 2003 se desplegó y codificó en Salta. Luego de reconstruir precedentes diversos identificamos la singularidad del programa de gobierno analizado, identificamos cómo las diversas reformas se realizaron en sintonía y consecuencia con lo dispuesto en el diagrama nacional de gobierno; aunque a nivel local, lo hicieron en una yuxtaposición de

racionalidades políticas de perfil neoliberal y peronista atravesadas de matices pastorales y soberanos. A su vez, en un ejercicio de gobierno que consideramos resultó neocolonial, se construyó un programa de gobierno en los avatares del racismo - de Estado (Foucault, 2000), entre “la producción de vida activa, la salvación y el poder de la espada”.

En sintonía, en el *apartado III*, mediante una aproximación teórica, analítica y práctica reconstruimos, brevemente, la historia del petróleo en Salta y con ello, la instalación de YPF en el departamento Gral. San Martín. Para esto recorrimos el mundo del trabajo que trazó la “comunidad fábrica YPF” (Palermo, 2010), la cual se instaló como “una comunidad imaginada” (Anderson, 1983) construida en el ejercicio autónomo del poder/gobierno en y de los territorios en los cuales la empresa se asentó, y en su enclave vincular con los recursos naturales en juego, ante todo petróleo. Observamos como en este período se generó un relativo bienestar económico y social para la población local a partir de la YPF considerada “Estado dentro del Estado” (Wahren, 2011, Giarraca y Wahren, 2009), lo cual será recuperado por la UTD a lo largo de su historia y sus prácticas, tal cual veremos a lo largo del escrito.

Acorde a una de nuestras principales afirmaciones remitida a que el gobierno se ejerce en una tensa, dinámica y múltiple relación entre poder/gobierno y resistencias, en este ejercicio de reconstrucción ensayamos una aproximación a las tradiciones y prácticas de resistencia precedentes a los levantamientos piqueteros y las organizaciones de trabajadores desocupados, en el norte salteño. Según enunciaciones nativas, a la desocupación repentina producto del proceso de privatización de YPF, le siguió la desesperación y la angustia, la ausencia de oportunidades y el olvido. Para ello se habían puesto en juego mecanismos de ocultamiento, represión y encierro, a partir de los cuales la población local/regional, fue sometida en sus propias comunidades. Los ex/trabajadores YPF se tornaron *trabajadores-desocupados* y *moribundos* (De Certeau, 2000), según analizaremos en el próximo capítulo.

A continuación damos entrada al Capítulo 2, en el cual realizaremos una analítica minuciosa en torno del gobierno de la pobreza, así como de las prácticas de resistencia, que en simultáneo, se configuraron e instalaron en el norte salteño, en los avatares de las gubernamentalidades descriptas y analizadas en el período extendido entre 1989 y 2001, en Argentina y en Salta (1995-2003).

CAPITULO 2: *“El gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, en Argentina y en Salta y, el estar siendo trabajadores desocupados y piqueteros: entre mínimos biológicos, emprendedores moribundos y piqueteros. La emergencia e instalación de la UTD Mosconi (1990-2002).*

En presente capítulo, cuenta con tres apartados. En continuidad con el capítulo anterior, en el cual desandamos los avatares de la gubernamentalidad en Argentina y Salta entre 1990 y 2002, así como el acaecer piquetero y sus primeros destellos, en el presente capítulo en una primera instancia, analizamos y describimos las lógicas y prácticas de gobierno que, en Argentina y Salta de los años 90, fueron ejerciendo, de modos singulares, el gobierno de las poblaciones pobres en general y pobres desocupadas en particular. Profundizamos en torno de los vínculos entre Estados y sociedad civil, en el campo de las políticas sociales públicas y los trazos del Desarrollo Humano y local, entre racionalidades políticas heterogéneas.

En simultáneo, en las tramas enunciativas y prácticas propuestas en torno de las prácticas de gobierno y resistencia, en el apartado III realizamos nuestra primera aproximación a la UTD Mosconi mediante una analítica de los que decidimos subdividir, metodológicamente, en los dos primeros momentos históricos de resistencia y autogobierno, entre 1997-1999 y 2000-2002. Los ejes de análisis puestos en juego son: los primeros piquetes, modalidades de organización, lucha y subjetivación; prácticas iniciales de desbloqueo de las programáticas y lógicas de gobierno dirigidas a gobernarlos como pobres “desocupados” y prácticas de subjetivación del “trabajador desocupado” ex/ypefiano, ante todo.

I

El gobierno de la pobreza y los pobres-desocupados

1-La problematización de la pobreza: la reinención de lo social, las políticas sociales y el Discurso de desarrollo humano

En el presente apartado realizamos un ejercicio teórico-analítico, en torno del proceso de problematización de la pobreza, en relación con las políticas sociales y la invención de lo social, en clave de Desarrollo Humano. Para esto, también desandamos los tramos enunciativos de los Organismos internacionales de Crédito e Intervención, en el proceso de construcción de la pobreza, como problema interpolador de prácticas y pensamientos.

Acorde con lo trabajado en el capítulo 1, consideramos que la heterogeneidad y multiplicidad de racionalidades políticas y prácticas de gobierno, que atraviesan y constituyen los avatares de la gubernamentalidad y su codificación en torno del Estado, en Argentina y en la provincia de Salta, pueden ser comprendidas y captadas con mayor precisión en el ejercicio del gobierno de la pobreza y de los pobres desocupados, en un múltiple diagrama vincular de poder y resistencias.

Desde una perspectiva estratégica y heterárquica del poder, abordamos la pobreza como dispositivo, puntualmente como dispositivo de gobierno sobre la cuestión social. Pensar la pobreza en términos de dispositivo refiere a un conjunto de elementos heterogéneos entre sí, pero interrelacionados: discursos, instituciones, arquitecturas, reglamentos, leyes, enunciados científicos, enunciados filosóficos y morales, entre otros. Un dispositivo¹⁶⁴ nos permite observar el modo en que se ha problematizado un fenómeno, es decir, la manera en que algo se ha constituido y construido como problema. En tal sentido, por “pobreza” no referimos a ese fenómeno tangible relevado en sus rasgos cuantitativos por la Línea de Pobreza o las Necesidades Básicas Insatisfechas, sino a ese fenómeno conformado por trabajos científicos, políticas públicas, técnicas diversas, saberes y tecnologías específicas para su abordaje, apreciaciones morales sobre los sujetos, entre otras (Giavedoni, 2012a).

¹⁶⁴ Murillo (2007) señala que la pobreza se ha convertido efectivamente en un dispositivo de intervención sobre la fuerza de trabajo a nivel internacional. Esto indica que las transformaciones en las estrategias discursivas hegemónicas no solo producen resultados en la percepción de lo social, sino en las prácticas concretas y efectivas de sujetos individuales y colectivos. Nuestro trabajo encuentra en dichas referencias una orientación contundente y clara.

El gobierno de la pobreza nos permite pensarla entonces, no como problema en sí misma, sino como soporte y apoyo de diversas técnicas para la regulación y el gobierno de este sector de la población:

A lo largo de ese apoyo, el poder avanza, multiplica sus estaciones de enlace y sus efectos, mientras el blanco en el cual deseaba acertar se subdivide y raifica, hundiéndose en lo real al mismo paso que el poder. Se trata, en apariencia, de un dispositivo de contención; en realidad, se han montado alrededor (del problema) líneas de penetración indefinida. (Foucault, 2000b: 56).

En tal sentido, sostenemos que el dispositivo de la pobreza remite a un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que construyen lo social como pobreza, asignándole características personales e individuales, interviniendo sobre situaciones concretas y problemas específicos, y diluyendo cada vez más la discusión sobre las causas estructurales, en un marcado proceso de “naturalización” de la condición y situación de la pobreza y de los pobres.

En lo que respecta a la “utilidad económica” de la pobreza como dispositivo, siguiendo a Giavedoni (2012a), nos interesa remarcar cómo la fuerza enunciativa que posee el discurso sobre la pobreza la ha independizado de la cuestión del trabajo en los 90’, y la ha re-vinculado en clave de “empleabilidad, inempleabilidad y decencia”, en la actualidad más cercana. Pobreza y trabajo nos llevan a repensar cómo, a mediados de los 90’, según lo trabajado en el caso de YPF y los trabajadores ypefianos: “...han dejado de ser trabajadores aquellos a quienes el Estado les debe garantizar las condiciones mínimas para su reproducción, al tiempo que el disciplinamiento de esa misma fuerza de trabajo, sino que son ahora pobres, sujetos barriales, organizaciones comunitarias, etc.” (Giavedoni, 2012a: 125). Se trata, en tal sentido, del advenir de los trabajadores en pobres y de una constante de formas diversas de precarización del trabajo que se asumen en el ejercicio del gobierno de la pobreza y de los pobres desocupados, acorde a las condiciones de posibilidad y los programas de gobierno que trabajamos en el capítulo 1 y 3, según corresponda.

A su vez, las modalidades de gestión, en la línea descrita en el párrafo anterior, en torno de estas poblaciones se dirigen a contenerlas de posibles “desbordes”. En tal sentido se reconoce su “utilidad política” ya que poseen capacidad desestabilizadora en ciertos momentos y también recursos electorales y legitimadores en otros (Auyero, 2007). Siguiendo a Deleuze (1999), es posible pensar cómo estas “sociedades de control”, propias del capitalismo avanzado, se construyen en torno a diversas estrategias de poder,

haciendo posible diferentes y novedosas modalidades de sujeción y/o estados de dominación vinculados ante todo, con los aprisionamientos y encierros en lo que daremos en llamar las “comunidades locales”.

De esta forma y como señalaremos más abajo, el Estado como centro de codificación de las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres, ante todo en y desde la década de los 90’, controla a través de la articulación de políticas sociales y políticas sociales públicas más o menos focalizadas, la vida y reproducción de la vida de millones de personas pobres, en Argentina y en Salta.

Siguiendo este planteo, entendemos que las prácticas discursivas y extradiscursivas entretejidas en el *Discurso de Desarrollo Humano* (DDH), desde la década de los 90’ posibilitan la construcción e intervención en torno del advenido “problema de la pobreza”, cuyo gobierno se ejerce en el campo de las políticas sociales y de empleo atravesadas por el *Discurso de Desarrollo Social* con rostro humano. En el caso argentino y salteño, pretendemos aproximarnos analíticamente a los modos en que el gobierno de los pobres y la pobreza se ejerce, sobre todo, a partir de lógicas y prácticas de gobierno codificadas en torno del DDH, con las improntas singulares en los diferentes tramos epocales analizados, esto es, en torno de la focalización y la autogestión participativa en los 90’ y desde el 2003 y 2007 en la provincia de Salta en torno de la “inclusión y equidad”, mediante la ampliación de los derechos sociales y el incremento de capitales humanos y sociales “para el acceso a oportunidades”.

Por tanto, la perspectiva de gubernamentalidad aquí sugerida, nos permite pensar los campos discursivos y extradiscursivos, considerando que los mismos dan existencia a las realidades sociales. De tal modo, no realizamos una analítica de la evidencia revelada, ni el plano de los hechos reales velados. La perspectiva de gubernamentalidad aporta herramientas útiles para pensar la constitución discursiva y no discursiva de los fenómenos sociales en el marco de mecanismos específicos de poder (tal es el caso de documentos y programas como lo elaborados por el BM, PNUD, las políticas sociales, las evaluaciones realizadas por trabajadores y asistentes sociales, manuales ministeriales, etc.), configurando el programa de una manera específica (enunciándolo, caracterizándolo, midiéndolo, construyéndolo, enmarcándolo, evadiéndolo, etc.) y, como correlato, interviniendo sobre el mismo también de un modo singular en función de aquella caracterización.

Si bien es muy amplia la bibliografía e investigaciones que han trabajado la cuestión de la pobreza¹⁶⁵ - marginalidad, pauperismo, vulnerabilidad, entre otras- en el presente escrito centramos nuestra analítica en los mecanismos concretos de gobierno y las lógicas que los regulan: programas, planes y proyectos contruidos para gobernar a las poblaciones pobres y a los pobres desocupados, ante todo, pues, consideramos que los mecanismos antedichos, así como los análisis al respecto y las prácticas concretas ejecutadas en torno de este universo de archivos nos permiten una proximidad a los modos de ejercer el gobierno de la pobreza, y con ello a los modos de resistir a ser gobernados de estos modos, siempre en torno del DDH.

1. 1- La cuestión social, la invención de lo social y el gobierno de la pobreza

Para aproximarnos a la cuestión del gobierno de la pobreza, recuperamos las resonancias de obras atravesadas por el pensamiento de Foucault. Se trata de pensadores como F. Ewald, en obras como “*L’Etat providence*” (1986), así como “*La Invención de lo Social*” de J. Donzelot (2007)¹⁶⁶. Otra discípula importante, en este campo de acción y pensamiento, ha sido Gioavanna Procacci, en su libro “*Gobernar la pobreza: la sociedad liberal y el nacimiento de la cuestión social*” (1998), texto que traza una genealogía de las tecnologías liberales de gobierno con relación a las transformaciones de la economía política y la cuestión social, en el siglo XIX:

Lo común de estos tres textos, considerados centrales en el andamiaje foucaultiano para pensar el gobierno de la pobreza, remite a las transformaciones sufridas por la racionalidad del liberalismo clásico en el momento en el que la industrialización hizo que la pobreza se convierta en un asunto, que debía ser gobernado con urgencia. Pues, si lo

¹⁶⁵ En el campo de las Ciencias Sociales encontramos una enorme discusión y producción acerca de los términos “exclusión sociales, vulnerabilidad, marginalidad y pobreza” (Castel, 1999; Merklen, 2005; Álvarez Leguizamón, 2008; Grassi, Hintzey Neufeld, 1994). Recuperamos aquí la sistematización realizada por Giavedoni (2012a), acorde a cuatro ejes el politólogo resume: en primer lugar encontramos los trabajos que han abordado el problema de la marginalidad a partir de un eje económico, propiamente, los estudios sobre marginalidad en América Latina. Un segundo eje agrupa los trabajos que se centraron en los aspectos políticos del fenómeno, el rol desempeñado por el Estado en los procesos de marginalización. En el tercer eje, se agrupan los trabajos que se centran en la noción de “exclusión social”, particularmente referidos a América Latina, principalmente Brasil y Argentina; y finalmente, se consideran una serie de aproximaciones sobre el problema de la pobreza y lo que se ha llamado la crisis del lazo social. La pregunta orientadora cuándo se habla de marginalidad y de exclusión remite a: ¿marginalidad respecto a qué y exclusión respecto a dónde? Mientras que la discusión de los 60’ versaba sobre los medios de empleo (marginalidad respecto al modo de producción capitalista, al mercado de trabajo), al parecer, actualmente, la exclusión refiere, casi fundamentalmente, a los medios de subsistencia. Como expresará Nun (2001) la categoría Europea de “exclusión social” da cuenta del descubrimiento en aquellas latitudes de una situación social que América Latina había comenzado a vivenciar con fuerza en los 60’, dando muestra de ello el fructífero debate en torno a la marginalidad Ver: Giavedoni, 2012a: 31.

¹⁶⁶ Ambos textos examinan el funcionamiento de las leyes sociales aprobadas entre finales del siglo XIX y principio del XX en Francia concernientes al desempleo, las enfermedades y los accidentes del trabajo. Ver: Castro Gómez, 2010...op...cit. Donzelot, 2007 y 1984...op...cit.

que se buscaba era evitar el levantamiento de la clase obrera y/o trabajadora y domesticar su peligrosidad, entonces había que producir e intervenir sobre un nuevo medio ambiente llamado sociedad o lo social. (Castro Gómez, 2010: 230-31).

La racionalidad política y gubernamental del liberalismo clásico consideraba que “el trabajo”, logrado mediante la industrialización, y con ello el progreso, iba a generar las condiciones para “salir de la pobreza”. Sin embargo, la revolución industrial mostró que el trabajo no solo genera riquezas, también genera “pauperismo”, tras lo cual, en el juego del arte de gobierno liberal, superar la pobreza nunca fue posible.

A su vez, siguiendo a Castro Gómez (2010), el nuevo régimen económico de mercado no solo implicó un crecimiento de la pobreza sino el surgimiento de nuevos-otros tipos de pobreza, vinculadas a los cordones urbanos, al desempleo estructural, etc. De este modo, el pauperismo de masas - superador de la pobreza individual - comenzó a ser visto como un problema a ser gobernado, pues pone en riesgo el orden social. Así, emerge y se instala la pobreza como problema, esto es, acaece la problematización de la pobreza pues interpela el orden de las prácticas políticas, así como de los sistemas de pensamiento a partir de lo cual comienzan a construirse estratégicamente, lógicas y prácticas de gobierno vinculadas a este problema.¹⁶⁷

Por tanto, referir a una transformación en torno de la cuestión social, no implica que la pobreza haya nacido en el momento en el cual adviene problema social. En tanto, el trabajo ya era considerado, estratégicamente, como la principal tecnología superadora de las crisis y el pauperismo. La transformación acaece cuando el trabajo ya no permite solucionar la problemática de la pobreza, la cual además de crecer se multiplica y tipifica de modos diversos¹⁶⁸. Así, adviene riesgosa y necesariamente gobernable, se construyen para gobernarla, entonces, lógicas y prácticas también múltiples y discontinuas y, a partir de esta dinámica, el espacio que emerge como objeto de intervención y observación, es el de “lo social”.

¹⁶⁷Según Castro Gómez (2010), ya no se podía gobernar el pauperismo desde las medidas clásicas vinculadas con la reinmersión en el ciclo productivo industrial. Así, el “gobierno de la pobreza” comienza a vincularse con el “gobierno del riesgo, y a un conjunto de tecnologías de gobierno vinculadas a gestionar la pobreza y a aportar a los trabajadores una serie de garantías sociales. Ver: Castro Gómez. 2010: 232-34.

¹⁶⁸ Dean, en su libro *The constitution of poverty* (1991), sostiene que la “condición de pobreza”- que no es sinónimo de Discurso de los pobres, el cual remite al campo de conceptualización e intervención sobre los pobres, previo al pauperismo - emerge a fines del siglo XVII como condición diferenciada respecto de la “masa” de sus portadores. La condición de la pobreza aparecía como equivalente a la de “dispuesto al trabajo”. A partir de ello, pasaba a ser interpelada como un requisito para el desarrollo de la riqueza, pues si era necesaria para el trabajo, también lo era para la creación del valor. Si “pobreza” y “fuerza de trabajo” eran sinónimos que delimitaban el naciente mercado de mano de obra, el “pauperismo” constituía una suerte de exterior constitutivo: la pobreza era el origen natural del trabajo, mientras que el pauperismo era un estado de corrupción de la naturaleza humana. Entra aquí a jugar el gobierno moral de las poblaciones en el ejercicio liberal de gobierno.

En este sentido, recuperamos algunos tramos del pensamiento Francés a partir de los cuales el pauperismo se asocia con lo que se ha llamado “invención de lo social” (Donzelot, 2007) y con la aparición de lo que se denomina la “cuestión social moderna” o la “cuestión social clásica” (Castel, 1997)¹⁶⁹. Las intervenciones que surgen de la tensión entre la igualdad jurídica promulgada por la Revolución Francesa, la desigualdad social creciente, producida por el capitalismo y la ya señalada industrialización, serían para Castel el orden de las diferentes formas de resolución de la cuestión social moderna. La actitud del comité de la Asamblea Constituyente de Francia inventa lo social a partir de medidas distintas a las de la extinción de la mendicidad (Donzelot, 2007). Según sus miembros:

...allí donde existe una clase de hombre sin subsistencia, allí existe una violación de los derechos de la humanidad, allí el equilibrio social está roto, la cuestión social se reflejaría en el lugar que podían ocupar en la sociedad industrial, las franjas mas des-socializadas de los trabajadores. (Castel, 1997).

En el caso de Donzelot, la “invención de lo social” en Francia y después de la Revolución de 1848, está vinculada con la marginación política de la población trabajadora. Entre las tensiones de la declaración de los Derechos del Hombre y la resistencia de los miembros de la asamblea por atender los reclamos de la muchedumbre que solicitaba mejores condiciones de vida, se inventa lo social. Lo que aparecía como “ayuda pública”, en la declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en 1791, se perfiló como derecho. Por tanto, la tensión entre los derechos formales y las demandas y movilizaciones populares por mejorar las condiciones de vida tuvieron como efecto lo “social”, así como y/o con ello se instalaron las diversas regulaciones sobre las condiciones del trabajo y los salarios (Donzelot, 1984: 28-30)¹⁷⁰. Lo social, entonces, es

¹⁶⁹ Según Castel: “Este hiato entre la organización política y el sistema económico permitió señalar por primera vez con claridad que el lugar de lo “social”, debía desplegarse en el espacio intermedio restaurar o establecer vínculos que no obedecían a una lógica estrictamente económica ni a una jurisdicción estrictamente política. Lo social consiste en sistemas de regulación que no son los del mercado, instituidos para tratar de llenar la brecha. En este contexto la cuestión social se convertiría en la cuestión del lugar que podían ocupar en la sociedad industrial las franjas más des-socializadas de los trabajadores. La respuesta a esta cuestión fue el conjunto de dispositivos montados para promover su integración” (1997: 20-1).

¹⁷⁰ Traducción: Álvarez Leguizamón. Acorde a lo sugerido por la autora salteña (2008), también Thompson (1995) y Amartya Sen (1995) desde abordajes diferentes al propuesto por los franceses en torno de la invención de lo social, están preocupados por explicar en momentos históricos diferentes, qué función cumplen las normas no monetarias y las expectativas de acceso legítimas a medios de subsistencia en situaciones de pobreza masiva, sobre todo de hambrunas. Thompson refiere, en la transición al capitalismo, a los levantamientos producidos por el alza del pan y la pobreza masiva por ella producida, en la Inglaterra del siglo XVIII, y; Sen a las hambrunas a finales del siglo XX, en algunos países de Asia y África. Ambos polemizan con Malthus, en el sentido de que las hambrunas no se producen por escasez de alimentos, sino por carencias de normas para regular sus precios, en un cierto límite de dignidad por falta de una “economía moral” para Thompson o por debilidad o carencia de los derechos de acceso y las titularidades, según Sen. Álvarez Leguizamón (2008), sugiere que estos dos autores producen muestran cómo la pobreza, en el capitalismo, no solo depende de condiciones materiales que se

entendido como un entramado que intenta integrar las diferencias más allá de las desigualdades; al tiempo que éstas persisten y por ende “lo social” emerge a la vez como un intento de suturar los efectos de las desigualdades y a la vez como “algo que falta”.

De este modo, las intervenciones sociales surgidas a finales del siglo XIX se trazaban en torno a la idea de que la sociedad existe en un modo más potente que las clases, y que el papel de la república era entonces, defender al individuo contra los riesgos que producía la división del trabajo, pero también, proteger a la sociedad contra el individuo cuyos comportamientos “antisociales” advenían amenaza.

Así se instala sobre el primer aspecto, según Donzelot (2007), la “protección social” o el recurso técnico del “seguro” que responde a una contribución de “todos” de manera automática para la constitución de indemnizaciones destinadas a ayudar a quienes podrían, en el futuro, sufrir los efectos de la división social (accidentes, envejecimiento, etc.); mientras que en el otro aspecto se encuentran las intervenciones dirigidas a los individuos que representaban un peligro para la sociedad. En tal sentido, la seguridad social conjuga, según el autor, el gobierno del riesgo, y un cierto tono de solidaridad social de perfil republicano, que limita y gestiona los individualismos e individualidades también “peligrosos”. Según Álvarez Leguizamón, entonces:

...en el análisis de estos autores franceses la pobreza masiva produce un saber hacer particular sobre los pobres, los trabajadores y los ciudadanos marginados políticamente que es el social. La invención de lo social está a su vez fuertemente vinculada con las formas de resolver el pauperismo y los reclamos a él asociados. (2008: 38).

Por tanto, la cuestión social entendida en términos de pobreza, o el dispositivo de la pobreza como gobierno ejercido sobre la cuestión social acorde a la perspectiva sugerida, debiera ser analizado desde lo que realmente produce, el modo en el que lo produce y los efectos que las mismas prácticas inscriben en lo real. Las estrategias del gobierno de la pobreza refieren a la constitución de lo real, de las subjetividades a partir de prácticas múltiples y diversas que pueden no estar monitoreadas y dirigidas racionalmente, pero que en su puesta en funcionamiento, en sus transformaciones y en su persistencia han

producen por las carencias de medio de empleo o por las bajas de salarios, sino por limitaciones en el acceso o por la falta de expectativas legítimas de subsistencia. Así, la economía moral propuesta por Thompson, resulta una institución que permite el acceso a medios de subsistencia en el momento de la transición al capitalismo en Inglaterra. Más tarde la propuesta de economía moral como una red de relaciones recíprocas basadas en las costumbres para dar respuesta a la preproducción de la vida (Thompson, 1995 y Scott, 1976) se economizará y pasará a llamarse “capital social” en el campo del saber de la economía política. Para Sen, desde la economía política nekeynesiana y contemporánea, los vínculos antedichos permiten el acceso a los medios de subsistencia y evitan el hambre, en países pobres, en relación con el acceso a la propiedad o el derecho de acceder a activos. Así las titularidades conceden a las personas una pretensión legítima hacia las cosas a través de los medios legales disponibles en la sociedad. Ver: Álvarez Leguizamón, 2008: 38-40...op...cit.

adquirido la regularidad suficiente como para instalar formas de obrar y de pensar. Entendemos, que no existe un “sujeto o un grupo” que sea responsable de esa estrategia, sino que, a partir de efectos diferentes a los fines iniciales y de la utilización de esos efectos, se construye un determinado número de estrategias.¹⁷¹

En tal sentido, entendemos que el análisis en términos de racionalidades y tecnologías de gobierno no se dirige a denunciar lo que se hace mal o lo que se deja de hacer, sino a lo que efectivamente se hace, lo que se produce, las subjetividades que se construyen, las relaciones y las prácticas sociales que afloran producto de aquéllas.

Al respecto, hemos identificado que la cuestión social es enunciada en términos de pobreza y ya no en términos de trabajo desde los 90’, con matices diferenciales desde el 2003 hasta nuestros días, en el caso de la provincia de Salta desde 2007, cuando se avista un desbloqueo mediante el retorno a la cuestión del trabajo - “para pobres” - como herramienta integradora, mientras que se programa el ejercicio de gobierno en torno de la problemática que la pobreza implica.¹⁷²

Pues, tal como analizaremos, en el advenir de los trabajadores en pobres en Argentina, siguiendo a Svampa (2004), desde finales de los 90’, el mundo del trabajo ha dado lugar al “mundo comunitario de los pobres”. Una vez que el mundo popular no se identifica con el trabajo formal, la relación del sistema político con los sectores populares no se da fundamentalmente a través de los sindicatos, sino a través de las organizaciones barriales y comunitarias, por medio de la descentralización y focalización de la política social, así como, en la actualidad, por medio del emprendedurismo comunitario y orgánico de los pobres organizados. A su vez, el problema resulta enunciado de ciertas maneras, lo cual entendemos tiene implicancias en las modalidades que se piensan para intervenirlo (Merklen, 2005; Lo Vuolo, 1999, Giavedoni, 2012a). Las políticas sociales advienen, en este diagrama de poder y gobierno, el espacio y la forma a través de la cual se promueve el trabajo – precarizado, flexibilizado, paliativo, transitorio “para pobres -, cuando en ciertos imaginarios y experiencias laborales, como la de los trabajadores ypefianos,

¹⁷¹ Según Castro (2004) y como ya ha sido enunciado, si la noción de práctica trae aparejada la noción de regularidad y racionalidad en los modos de actuar, el término *tecnología* agrega el concepto de estrategia, lo cual sitúa el análisis del poder “en un campo que se define por la relación entre medios (tácticas) y fines (estrategias)”. Por ello, la estrategia no es el fin diseñado, sino el sentido y la dirección dada a las tecnologías de gobierno, y los resultados que las mismas producen. Ver: Castro, 2004: 336.

¹⁷² Observaremos en el capítulo 4, cómo se amplía el campo de lo social y la constitución de subjetividades pobres, ante todo potenciando al sujeto económico - trabajador y emprendedor - y con ello al sujeto jurídico - de derechos -, sobre todo mediante la construcción de mecanismos y dispositivos de intervención, como la economía social, siempre en los tramos discursivos y extradiscursivos del DDH.

siempre había sido a la inversa, el trabajo –asalariado, estable, digno, según tramos nativos de enunciación - era el que garantizaba el acceso a políticas sociales, ante todo de seguro.

1.2- El problema de la pobreza, la invención de lo social y del “otro radical” en América Latina y Argentina: entre neoliberalismo y neocolonialismo

El advenir de la pobreza como problema o la problematización de la pobreza en tanto dispositivo de gobierno implicó, siguiendo a Álvarez Leguizamón, a partir de la mitad del siglo XX en América Latina, con sus proyecciones singulares en Argentina y en Salta, un proceso práctico y teórico experticio de construcción de una “alteridad radical” a la modernidad: “...diferente a la del “indio”, que había primado en la etapa de predominio de la hegemonía del discurso civilizatorio, aunque el color racista de la representación sobre la pobreza se mantiene hasta la actualidad” (Álvarez, Leguizamón, 2008: 52).

Re-considerando la “amenaza” al “orden social”, que la pobreza implica, cabe consignar que:

A pesar de las transformaciones paulatinas de las maneras como se ha encarado esta amenaza, ésta mantuvo constante una cuestión radical, la pobreza es representada para la modernidad occidental como una alteridad radical que se debe conjurar, excluir, controlar disciplinar, moralizar o integrar de manera subordinada. (Álvarez Leguizamón, 2008: 25).

Lo antedicho nos remite, en el trazo de la presente investigación, a lo que Castro Gómez (2002) llama “la invención del otro”, en sentido de la construcción colonial de ese “otro” advenido gobernable, intervenible, modificable e incluso dejado a su deseo y libertad para el cumplimiento de su destino, según parámetros de capital humano, así como, muchas veces “dejado y/o echado a la muerte”.

Al hablar de “invención” entonces, el pensador colombiano no refiere al modo en que un cierto grupo de personas se representan mentalmente a otras, sino que apunta, más bien, a los dispositivos de saber y poder a partir de los cuales esas representaciones son construidas: “Antes que como el ocultamiento de una identidad preexistencia, el problema del “otro” debe ser teóricamente abordado desde la perspectiva del proceso de producción material y simbólica en el que se vieron involucrados las sociedades occidentales a partir del siglo XVI” (2002:148).¹⁷³

¹⁷³ Castro Gómez, 2011...op...cit.

¹⁷³ También Castro Gómez (2011) concluye que los discursos de identidad - desde Alberdi a Martí y Rodó y hasta Zea y Roig - han sido cómplices de una modernista lógica de alterización, descansando en el postulado de una alteridad fundacional y un sujeto trascendental que constituía una alteridad radical en relación con un igualmente homogeneizado. En tal sentido, el problema del “otro” debiera ser, según el filósofo colombiano,

En este sentido, es posible comprender la racionalidad política neocolonial instalada en el proceso de construcción y constitución de la pobreza como problema y por ende, de los diferentes mecanismos y lógicas heterogéneas puestos en juego para gobernarla. El pobre es un “otro” advenido gobernable, entre saberes experticios, tecnologías dirigenciales, libertades construidas y muerte latente.

En este diagrama de poder, gobierno y verdad en América Latina, la constitución de la pobreza como problema y como fenómeno colectivo, según lo sugerido por Álvarez Leguizamón (2008), tiene su primer momento cuando las formas de dominio coloniales rompen con los anteriores sistemas de reciprocidad y de inscripción de las comunidades y las familias, reconfigurando los espacios y las relaciones de poder y gobierno mediante la construcción de mecanismos e instituciones como la mita y el yaconazco, la encomienda y en muchos casos mediante la represión directa y violenta sobre las diferentes prácticas de resistencia y lucha por la “liberación”, como el “pillaje o el vagabundeo”. La segunda ruptura se produce con la independencia de las coronas, cuando se debilita la caridad religiosa y se inicia el proceso de su laicización por medio de la beneficencia. La tercera, tiene lugar en la primera mitad del siglo XX, cuando en la gran mayoría de los países se desarticulan las estructuras semiserviles y se construyen mercados internos para los procesos incipientes de industrialización. Hasta entonces, la provisión de medios de subsistencia reposaba en las relaciones serviles, semi-asalariadas o en las economías de subsistencia campesina o el trabajo de oficios: *“Esto coincide con lo que Rahnema (1998) llama la segunda ruptura con las formas de intervención y administración de la pobreza en el ámbito global, a mediados del siglo XX con la substitución del discurso civilizatorio por el de desarrollo”* (Álvarez, Leguizamón, 2008: 41).¹⁷⁴

En tal sentido, lo novedoso no es la aparición del término “pobreza”, ampliamente conocido y utilizado, sino la magnitud y el lugar que comienzan a ocupar en los organismos públicos y privados, fundamentalmente en Argentina a partir de la década del

teóricamente abordado desde la perspectiva del proceso de “construcción material y simbólica”; se trata de reconocer el carácter parcial histórico y heterogéneo de todas las identidades, en el sentido de una “producción histórica de la diferencia”. Tras lo cual toma distancia de la noción de “encubrimiento” sugerida por Dussel para pensar la cuestión, puesto que según la propuesta de Castro Gómez no se trata de estudiar el poder y el saber desde las máscaras-ideológicas y/o materiales- sino desde y entre los procesos y prácticas de producción y relación. Ver: Castro Gómez, 2011,...op...cit.; Escobar, 2003: 51-86; Castro Gómez, 2000: 163-181.

¹⁷⁴ Estas construcciones y modalidades de advenir la pobreza un problema y de ser gobernada, tiene particularidades en cada uno de los países latinoamericanos, lo cual resulta imposible de exponer en el presente trabajo.

80'¹⁷⁵. Acorde a la geopolítica colonial y neocolonial, Álvarez Leguizamón (2008) sostiene que la invención de “lo social” (Donzelot, 2007) y su relación con la problematización de la pobreza, llega a desarrollarse, en Argentina, recién a mediados del siglo XX, durante el primer gobierno peronista. Luego de los sucesivos golpes que paulatinamente deshacen derechos y desbloquean el neoliberalismo en Argentina, según lo trabajado en el capítulo anterior, es en los 80' época del retorno a la democracia y de la creación de espacios estructurales, que comienzan a trabajar la “cuestión social” como parte del nuevo orden social a partir de los efectos de la crisis del Golpe de Estado, en camino hacia el Desarrollo de la Sociedad Argentina se construye el Primer Mapa de Pobreza, que analizaremos en el apartado que sigue. En tal sentido se objetiva una transformación en torno del gobierno de la pobreza, que tenía como precedentes los programas de gobierno desarrollistas en gran parte influenciados por los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención.

Es a finales de los 80' cuando se instala el Discurso del Desarrollo Humano (DDH) en el marco del diagrama de poder dispuesto y manifiesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ONU) y el Banco Mundial, ante todo, mediante programas de gobierno dirigidos a “combatir la pobreza” de un modo “participativo” y con “mayor control social”. Es a partir de la “problematización de la pobreza”, cuando el pobre deviene un “otro radical” que pretende ser controlado, gestionado, atacado y asistido mediante dispositivos y técnicas diversas.

Por tanto, en este movedizo juego de re-inversión, “lo social”, según lo sugerido por Deleuze (2008) en la introducción a la “*La policías de la Familia.*” de Donzelot, no refiere sólo a ese objeto de estudio de la sociología, sino más bien a un conjunto de problemas¹⁷⁶ alrededor de los cuales se constituye un archipiélago de instituciones,

¹⁷⁵ Cabe recordar que a comienzos del siglo XX (1904) se le encarga a un médico y abogado catalán, Juan Bialeto Massé, la realización de un informe que dé cuenta de las condiciones en las que se encontraban los trabajadores en el territorio argentino, nos remitimos al *Informe sobre el estado de la clase obrera*. La finalidad del Informe era relevar los mayores datos posibles en dirección de la creación de una óptima legislación del trabajo. Según Merklen y su lectura del mismo, este refleja la voluntad del Estado de pensar y emprender la intervención sobre la cuestión social en términos de trabajo, no en términos de pobreza como lo haría a finales del siglo XX; también Álvarez Leguizamón (2008), comenta el perfil étnico y racial de dicho trabajo dirigido a los obreros criollos “del interior”, así como el despliegue de mecanismos estadísticos y de control social dirigidos a la “clase obrera” la cual se encontraba organizada y en pie de lucha en Buenos Aires. A su vez, Giavedoni (2012a) remarca que llama la atención del informe su referencia a la cuestión social en términos de trabajo y también en términos de “clase”. La transformación de los trabajadores en pobres en la década de los 90', trajo aparejado, por un lado el cambio de la noción de “clase” a la de “sectores”, “capas”, “estratos” y, por otro la transformación de las relaciones entre pobreza y trabajo, desligados de los marcos estrictamente económicos y políticos.

¹⁷⁶ Siguiendo a Grassi (2003a), la cuestión social no se presenta como tal (como contradicción y virtualidad de la fractura), sino que se particulariza, en cada época, en problemas sociales que son, a la vez, la expresión hegemónica del modo como se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma. El problema es, así,

profesiones, pautas de acción y valoraciones sobre fenómenos que son constituidos como problemas. Así, en el presente trabajo de tesis comprendemos la “problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza” (Giavedoni, 2012a: 106), y la pobreza como dispositivo de gobierno sobre la cuestión social y también, agregaríamos, sobre la fuerza de trabajo¹⁷⁷.

2.- Las Políticas Sociales y el Discurso de Desarrollo Humano, en el proceso de re-invinción de lo social.

Acorde a lo antes esbozado, en torno del gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres sostenemos que, en los diagramas de poder y gobierno construidos en Argentina y en Salta en los períodos analizados, se produce la re-invinción de la cuestión social en términos de pobreza, puntualmente en el campo discursivo de las políticas sociales públicas¹⁷⁸ y los trazos enunciativos del Discurso de desarrollo humano.

Entre diversas referencias a las políticas sociales encontramos la propuesta por Grassi, para quien: “...*las políticas sociales son una forma particular, que adquirieron los sistemas de obligaciones reciprocas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el mercado y la familia y la comunidad*” (Grassi, 2003a: 25). En este sentido, no sólo se trata de instalación de instituciones donde se pretenden asegurar la reproducción social o responder al riesgo social o evitar las fracturas sociales, sino de un modo específico de configurar, lo que damos en llamar, relaciones de poder, gobierno y verdad.

También Álvarez Leguizamón (2008, 2010a) sostiene que las políticas sociales, en tanto prácticas y lógicas de gobierno productoras de subjetividad, resultan un campo cultural, es decir un espacio de relaciones donde se construyen “identidades” y, en el que lo social tiende a naturalizarse, a partir de la estrategia discursiva de igualdad, diferencia, reciprocidad, autogestión, jerarquizando lo social. Esto significa un proceso de

dependiente de su definición como tal en los procesos de homogenización, donde se imponen los términos con que se lo nomina, describe y se especifica el contexto de referencia (económico, cultural, etc.) al cual es remitido” (Grassi, 2003a...op...cit).

¹⁷⁷ Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole (Grondona, 2009: 8).

¹⁷⁸ Esto no pretende silenciar, obviar y olvidar los entramados discursivos y extradiscursivos instalados en diferentes campos de acción (Ministerios, ONGs, Iglesias, organizaciones, etc.), que atraviesan y entrecruzan las racionalidades de gobierno dirigidas a la pobreza. La intención es des-andar, en profundidad, el campo de las políticas sociales y de empleo de orden público, dando cuenta de dicho entrecruzamiento de voces, haceres y pensares, así como de sus silencios y olvidos, en los diversos procesos programáticos de reconfiguración del Estado, en la Argentina y en la provincia de Salta.

transformación de las formas de gestión y representación predominantes acerca de la *pobreza*, a partir de la identificación de la *cuestión social* relevante y la construcción del sujeto - pobre - y el objeto - pobreza -, en tanto:

... las políticas sociales son en sí mismas un discurso sobre lo social donde hay una serie de visiones y representaciones del mundo y sobre los “otros”, a los que se les aplica ciertos dispositivos de saber que implican la intención de modelación de sus comportamientos, al mismo tiempo que van naturalizando representaciones sobre su lugar en la sociedad y sobre el tipo de bienes materiales y simbólicos a los que tiene derecho o no de acceder (...) las políticas sociales, sus prácticas, instituciones y dispositivos de intervención son formas culturales particulares, cosmovisiones del mundo y de la vida que implican un campo de lucha. (Álvarez Leguizamón, 2005a: 11).

De tal modo, las políticas sociales resultan un campo discursivo, que analizaremos se codifica en torno del discurso de Desarrollo Social con rostro humano, y un campo cultural, como espacios privilegiados de condensación y construcción de una alteridad radical (Álvarez Leguizamón, 2008), ante todo.

A su vez y recuperando la propuesta inicial de que las política sociales públicas son las que mayor visibilidad e injerencia tienen en torno del gobierno de las poblaciones pobres y pobres desocupadas, recuperamos lo propuesto por Campana, (2012), quien inspirada en la idea de intervención social del Estado de Cortés y Marshall (1991, 1993) y en la mirada teórica de la función propuesta por Andrenaccci (2008, 2009), sostiene que: “...*la política social no se refiere a un sector o a una sumatoria de instituciones, sino que constituye un enfoque desde el cual es posible detectar un conjunto de funciones de las intervenciones sociales del Estado*” (Campana, 2012: 27). La “función” alude, siguiendo a la autora, a los objetivos estratégicos de las prácticas de gobierno de Estado, en suma considerar a las políticas sociales como un enfoque permite dar cuenta de las lógicas de intervención del Estado en lo social y con ello de la gubernamentalización de lo social, agregaríamos. De hecho, las políticas sociales, como tecnologías de gobierno¹⁷⁹, resultan un permanente intento - a veces fallido - de suturar la cuestión social.

Si bien, estas consideraciones corren el riesgo de resultar o ser consideradas “estadocéntricas”, consideramos que sería “irreal e imprudente” subestimar el rol del Estado, en tanto el mismo tiene una especificidad que es del orden de lo real y en el proceso de su gubernamentalización adviene espacio de codificación de prácticas de gobierno. Por tanto, enfatizar lo no estatal o temer nombrar al Estado, muchas veces

¹⁷⁹ Por tecnología de gobierno entendemos a los mecanismos prácticos, locales, sutiles y cotidianos, mediante los cuales se intenta conformar, normalizar, guiar e instrumentar los deseos, acciones y pensamientos de los sujetos objetos de gobierno. De Marinis 1999; Dean, 1999; Rose, 1999...op...cit.

conlleve a descuidar la importancia del mismo, en los análisis de los procesos sociales.

Por lo tanto, no se pretende anular, negar o silenciar la especificidad y singularidad del gobierno de Estado, sino de evitar explicar, como ha sido señalado, los problemas sociales a partir de la ausencia, debilidad, incapacidad, disfuncionalidad, metamorfosis del Estado. Se trata entonces, de considerar al Estado en términos no normativos, sino como un activo productor y reproductor del orden social, lo cual implica considerar su función positiva y estratégica en el proceso productivo de prácticas de gobierno.

En tal sentido y en resonancia con lo propuesto por Grassi (2003a), el Estado actúa en la producción de problemas sociales, en la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores y válidos de sus acciones y de las condiciones de dicho merecimiento a partir de lo cual sostenemos que el Estado se configura y reconfigura como espacio de codificación de prácticas de gobierno y, como efecto de las mismas.

2.1- Gobierno, Población, Pobreza y Políticas Sociales: biopolítica y gubernamentalización del Estado.

Siguiendo la perspectiva de gubernamentalidad aquí propuesta, la problemática liberal de la seguridad de aquellos procesos no-económicos de los cuales el gobierno depende se introduce con el surgimiento de la “población” en la Europa del siglo XIX, a partir de lo cual, siguiendo a Dean (1999), la población y sus procesos deben ser asegurados. Así se reinstala la noción foucaultiana de *biopolítica* la cual describe la manera como se han procurado racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de una población (Foucault, 2007). A la biopolítica le conciernen los problemas de la vida y de la muerte, natalidad y reproducción, salud y enfermedad; se interesa por las condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas y geográficas bajo las cuales la población vive, procrea, enferma o muere (Dean, 1999). En tal sentido, la población no es pensada como un dato natural ni estrictamente biológico, sino como una construcción que, al igual que el mercado, se torna espacio de regulación y gobierno en torno de la vida biológica de las poblaciones, la medicalización de la misma y la reconversión del principio hobbesiano, según el cual se trata de “hacer vivir y dejar morir” (Foucault, 2000a, 2006, 2007).

Siguiendo a Campana (2012), el concepto de población emerge en el marco de la gubernamentalización del Estado, es decir, el proceso por el cual el Estado comienza a

concebirse como modalidad de actuación sobre condiciones externas a él e independientes de su existencia, ya sean de orden económico, social o biológico. La población, en tal sentido, adviene blanco de la gestión y los dispositivos de seguridad en mecanismos privilegiados de intervención.

En lo referente a la “acción social de los Estados occidentales modernos”, en Inglaterra la llamada Ley de Pobres de 1597 declaraba indigentes y retiraba la ciudadanía económica a aquellos que fuesen atendidos por el sistema de asistencia pública, quienes eran reclusos en las Casas de Corrección, en tanto la pobreza resultaba un problema de “carácter”.

Las reformas de dicha Ley, en 1834, aunque no abolió enteramente la ayuda a los pobres, implicó su reducción y una redefinición importante. En principio, redefinió las Casas de Corrección, desdoblando las tareas entre las Casas de Trabajo y las de los Pobres; el acceso a unas y a otras dependía de la rigurosa evaluación de la vida personal y familiar del o la solicitantes y la atención implicaba asumirse en dependiente del poder público y a una vida regulada por normas y reglamentos. La reforma de la ley reinstala un sistema público de socorro que había tenido su emergencia en 1665, las llamadas *workhouse* dirigidas al trabajo obligatorio de los indigentes en condiciones inhumanas, pero como un sistema centralizado, nacional, pretendidamente homogéneo y financiado con fondos públicos (Campana, 2012; Castel, 1997).

En tal sentido, Dean (1991) sostiene que no se trató de una reforma no paternalista, en tanto suprimió la protección del Estado soberano sobre los pobres, pero la alternativa resultó claramente centrada en la figura del hombre varón trabajador. Entonces, la reforma no sólo produjo un mercado de trabajo y un obrero “liberado” de cualquier otro modo de garantizar su reproducción, sino que coadyuvó a delimitar el espacio doméstico, materialmente sostenido por el salario y administrado cotidianamente por las mujeres.

Este ámbito, según lo señala Grondona (2009) es central en el desarrollo de las políticas sociales, en tanto intervención que busca actuar sobre la paradójica condición de la fuerza de trabajo. Condiciones de vida y (necesidades, estructura, composición) del hogar serían términos indisociables para la racionalidad política social.

Por otra parte, la Ley de Pobres también distinguía entre los vecinos de la parroquia - merecedores de la asistencia- y los extranjeros. La distinción entre “el verdadero pobre” que merecía recibir ayuda, y el “falso mendigo”, que buscaba vivir a costa de la sociedad, se mantenía como una preocupación esencial de los filántropos (Golbert, 1996). En los albores de la Revolución Industrial, años más tarde, se diferenciarían a los

verdaderamente necesitados de los vagabundos y mendigos consuetudinarios, quienes no se consideraban merecedores de ayuda.

En la reforma de 1834 se avanzó en la distinción entre Pobreza y Pauperismo: la primera era causada no por faltas personales sino por “infortunio”; el pauperismo, por el contrario, era consecuencia de la indigencia, de hábitos viciosos. Por lo tanto, aquello que pedían o vivían de la ayuda, los “pauperizados”, eran considerados moralmente deleznable (Golbert, 1996). Esta distinción permitió, según Procacci (1991), comprender que la pobreza - soporte indispensable de la existencia de la riqueza - no era el objeto de ataque que el objeto no era la eliminación de las desigualdades, sino de la diferencia. La relevancia de la noción de pauperismo consistió en indicar una serie de formas “diferentes” de conducta: la indigencia como conjunto de hábitos psicológicos y morales negativos. Según Castel se instala:

...una concepción nueva y original de la movilización de las elites sociales para desplegar un poder tutelar hacia los desdichados y asumir una función de beneficencia sin la intervención del Estado, estrategias complejas, basadas en la búsqueda de respuestas no estatales a la cuestión social. (1997: 233).

Así la “tutela moral” se instala como respuesta política pero no estatal a la cuestión social fundada en el temor a la disociación social, apuntando a construir nuevas tutelas eficaces para el contexto:

Las políticas sociales que empezaban a gestarse no hacían responsable al Estado como organizador y garante sino que quedó en manos de “ciudadano esclarecidos”; que voluntariamente asumieron: hacer lo social, parafraseando a Castel, como un modo de abordar las ya indicadas consecuencias de la industrialización, pero sin modificar las estructuras del orden social. (Campana, 2012: 43).

En paralelo, el desarrollo de la higiene pública y/o medicina social¹⁸⁰ por ese entonces se inscribieron en el marco general de la biopolítica, en tanto se ejercita un marcado proceso de “medicalización de la existencia” y regulación biosociológica de las poblaciones mediante manejos específicos instalados en el proceso de gubernamentalización del Estado, como mecanismos de seguridad.

2.2- Gubernamentalidad neoliberal, neoliberalismo-s y cuestión social: hacia el desarrollo con rostro humano

¹⁸⁰ En torno de la biopolítica, la medicina desde su nacimiento como práctica social, siguiendo a Foucault (2006, 2012), se inscribe en el modo a partir del cual el capitalismo, desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, socializó un primer objeto que fue el cuerpo, en función de la fuerza laboral, y que la medicina moderna es una medicina social cuyo fundamento es una cierta tecnología del cuerpo social. Ver: capítulo 1.

Acorde con lo esbozado, a continuación realizaremos una breve aproximación al neoliberalismo en tanto arte de gobierno, en torno de la cual se instala el Discurso de Desarrollo Humano (DDH, de ahora en más). Analizaremos los dispositivos y tramos epistémicos de enunciación más relevantes, así como su configuración y recreación, en referencia al gobierno de la pobreza, las poblaciones pobres y la cuestión social. Para en los apartados que siguen analizar el juego y singularidad, en Argentina y en Salta.

El arte liberal de gobierno y sus diversas tecnologías, siguiendo a Castro Gómez (2010), sufrieron significativas transformaciones durante el siglo XIX. La más importante tiene que ver con la emergencia de la llamada “cuestión social” (1848), que obligó a un replanteamiento de la función que debe cumplir el Estado en el arte liberal de gobernar, según lo analizamos más arriba. Hacia finales del siglo XIX, difuminada ya esa frontera que prohibía la intervención del Estado sobre la “naturalidad” de ámbitos como el mercado, la población y la sociedad civil, aparece triunfante la institución del Estado social: el Estado bismarkiano alemán en primer lugar entre cuyos objetivos referenciales encontramos el dirigido a lograr “la unidad alemana”; luego en 1929 con la crisis del capitalismo la instalación del *New Deal* estadounidense, a lo cual se prosigue el *welfare* británico de la postguerra, los populismos desarrollistas latinoamericanos, asiáticos y africanos, etc.

Si bien, Foucault no habló del Estado social durante el siglo XIX, sí hizo referencia¹⁸¹ a una transformación de la racionalidad liberal según la cual las libertades democráticas solo podrán ser garantizadas mediante la intervención del Estado en ámbitos que el liberalismo clásico había considerado como “intocables”. En contra de esta gran transformación de la racionalidad liberal es que surgiría el neoliberalismo, es decir, poniendo en cuestión, por un lado las propias crisis del liberalismo en torno de las cuales, entre otras cuestiones, se generaban monopolios y/o corporaciones, así como en las mismas soluciones que se daban a estas crisis a partir de que los Estados advienen sociales y/o interventores (Foucault 2007: 91-91).

En este diagrama de relaciones de saber, poder y gobierno el arte neoliberal de gobierno encuentra un punto de emergencia en el marco del Coloquio Lippman (1938), en donde se encuentran representantes de diversos países entre los más relevantes estaban quienes

¹⁸¹ Al final de su clase del 24 de enero de 1979 Foucault hace referencia a la política del *welfare* implementada por Roosevelt en los Estados Unidos, como consecuencia de la crisis económica de los años treinta.

formaban parte de las escuelas de pensamiento económico¹⁸². Los allí presentes coincidían en poner un freno al modo en que el Estado intervenía constantemente sobre las libertades de los individuos, en nombre, precisamente, de la libertad.

En la clase del 31 de enero de 1979 Foucault señala que los economistas que participaron del Coloquio señalarían que el abandono de los principios liberales en nombre del intervencionismo estatal conlleva un peligroso retorno de la “Razón del Estado”, que era, precisamente, lo que liberalismo clásico, comenzando por los fisiócratas, había reconfigurado en el proceso de inflexión de la misma. Según lo sugerido por las Escuelas de Friburgo y de Chicago, en su crítica al liberalismo, no se trata de promover la regulación estatal de la economía, ni la desregulación absoluta del mercado, ambas posturas ponen en riesgo la libertad (absolutismo moral, por un lado, el anarquismo moral, por el otro). Para contrarrestar estos efectos perversos, las dos escuelas neoliberales proponen un modelo de gobierno que permita la “interacción” entre el mercado y el Estado con el fin de asegurar unas reglas de juego que abran campo a la responsabilidad y el compromiso moral de los jugadores. Un modelo que ya no apunta a la autorregulación del mercado ni hacia la planificación del Estado, sino a una “intervención indirecta”, que permita crear condiciones formales para el juego entre individuos libres.

Ambas escuelas se van a diferenciar en el modo en el cual organizan las políticas sociales. La Escuela Austríaca (Menger, vos Mises, entre otros) proyecta una organización de la sociedad conforme a mecanismos empresariales, multiplicando la “forma empresa” hacia todo el tejido social, mientras que es función del Estado proteger el entorno competitivo y no compensar al individuo por desigualdades sociales y servirles de contrapeso, sino para que el individuo logre autorregularse, serán estos los cimientos para el ordoliberalismo alemán de postguerra. Mientras que la Escuela de Chicago (Schultz y Beker, Hayek y Firdman, entre otros), ante todo a partir de 1947 y la conformación de la Sociedad Mont Pelerin¹⁸³ rompen con la dicotomía economía y

¹⁸² En el Coloquio Lippman se encuentran representantes de diferentes países, entre ellos: Estados Unidos, Alemania, Austria y Francia para repensar el liberalismo, en torno de la reconfiguración del *laissez faire* y de la naturalidad dada al mercado; si bien no hubo acuerdo en este espacio Foucault lo retoma como un puntapié de lo que será el arte neoliberal de gobierno en los próximos años. Aquí se encuentran las escuelas alemanas (Viena en sus inicios y luego Friburgo) y norteamericanas (Chicago), si bien ambas se diferencian tienen en común su rechazo tanto al dirigismo estatal como del liberalismo clásico, lo cual las lleva a buscar “un punto medio” entre los dos extremos. Ver: Foucault, 2007: 140- 149...op...cit.; y Castro Gómez, 2010: 190-199.

¹⁸³ Diez años después del Coloquio Lippman, Hayek funda la *Mont Pelerin Society* primer “tanque de pensamiento” neoliberal, en que participaron vos Mises, Eucken, Firdman, entre otros. En la declaración de principios de la *Mont Pelerin* se encuentran las bases para la creación de condiciones formales para la

sociedad y hacen de lo social una economía molecularizando la forma empresa hacia ámbitos nos económicos como las individualidades, para construir ciudadanos emprendedores, cimientos del anarcoliberalismo norteamericano (Castro Gómez, 2010).

Por tanto, el neoliberalismo no pretende resituar los derechos de liberalismo, sino que aparece como una racionalidad diferente, no remite por ende a una relación entre el poder, los derechos del Estado y los imperativos del mercado, pues esto recaería en una teoría del Estado. En el ejercicio crítico aquí propuesto, el foco no está en el Estado, como si éste fuese un universal político, sino en las tecnologías de gobierno. En lugar de ver al Estado como un objeto-real del cual se deducen determinadas prácticas políticas, el camino genealógico es el contrario: examinar primero la emergencia histórica de diferentes racionalidades de gobierno para luego, a partir de ellas, analizar el modo en que se ha constituido el Estado, se trata, sin por esto afirmar que el Estado resulta una “ficción ideológica”, de estudiar el Estado a partir de las prácticas políticas.

Por tanto, el neoliberalismo como un arte de gobierno, no se reduce a “la ausencia del Estado”, tampoco a un “capitalismo desorganizado” ni a una “modernidad líquida” (Bauman, 2000), no es el caos y la irracionalidad que queda luego de desaparecido el Estado; sino que conlleva toda una organización de la racionalidad política, que abarca no solo el gobierno de la vida económica, sino también, el gobierno de la vida social e individual. Se trata de una racionalidad política que no “elimina el Estado”, sino que lo convierte en un instrumento para crear la autonomía del mercado.¹⁸⁴

En una economía de mercado, entonces, sostiene Foucault (2007), el intervencionismo social activo hace de la política social no un mecanismo compensatorio, sino una condición de posibilidad de esa economía de mercado. Para el neoliberalismo, una política social, si quiere integrarse a una política económica sin generarle trabas y/o obstaculizarla, no debe servir de contrapeso y su objetivo no debe ser la igualación relativa o la distribución equitativa, en el acceso de cada uno a los bienes de consumo. Al contrario, debe dejar actuar la desigualdad y la competencia, garantizando un mínimo vital a quienes, de modo definitivo, no puedan asegurar su propia existencia, mientras que puede utilizar “la fuerza” cuando sea necesario. Se trata, de la transferencia marginal de un máximo a un mínimo a través de la privatización, es decir: “...*de que cada individuo*

competencia entre empresas en un juego de reconfiguración vincular entre la ley, la moral, la propiedad privada y el mercado.

¹⁸⁴ Para ampliar ver: Castro Gómez, 2010: 175-78.

tenga ingresos suficientes para auto-asegurarse, desencadenando un proceso de individualización y descolectivización por la política social” (Campana, 2012: 110).

En esta programática neoliberal, la regla social cumple la función de asegurar la “no-exclusión” con respecto al juego económico, las prestaciones sociales, entonces, resultan una transferencia que asegura recursos complementarios solo a quienes no alcanzan el umbral suficiente y para nada deben ser consideradas como consumo colectivo. Por tanto, resultan acciones dirigidas a atenuar los efectos, nunca las causas, de la pobreza absoluta, o sea, el umbral por debajo del cual se considera que las personas no tienen un ingreso que asegure un consumo suficiente. De este modo, la política social delimita umbrales para la sociedad, estableciendo divisiones entre los pobres y los no pobres, los asistidos y los no asistidos (Foucault, 2007).

En dicho juego vincular y estratégico de relaciones de poder y gobierno, una parte de la población asentada en los que acceden a un nivel económico mínimo, estará en una movilidad perpetua entre una asistencia otorgada si cae por debajo del umbral y la posibilidad de ser utilizada y utilizable cuando las necesidades económicas lo requieren.

Uno de los pensadores y promotores de los mecanismos y lógicas de gobierno antedichas, que tendrá influencias contundentes en el esbozo del Desarrollo Humano es Von Hayek¹⁸⁵:

...quien proviene de Austria del neoliberalismo y emigra en el momento de Anschlusso o justo antes de éste. Se marcha a Inglaterra. También va a los Estados Unidos. Es muy notorio que fue uno de los inspiradores del liberalismo norteamericano contemporáneo, si lo prefiere, del anarcocapitalismo; vuelve a Alemania en 1962 y lo nombran profesor en Friburgo y de ese modo el círculo se cierra. (Foucault, 2007: 132).

Hayek resultó una bisagra entre las Escuelas mencionadas, ya que participó de los seminarios dictados por von Mises en Viena durante los años veinte, donde conoció a Röpke (referente del ordoliberalismo alemán), estudió en *London School of Economics* en la década de los treinta y participó del Coloquio Lippman, en el cual Foucault señala que Hayek cumplió un papel importante como “agente de transmisión”. En este cruce de saberes y haceres Hayek postula la “contención del poder” como salvaguardia de la “libertad personal”, el Estado entonces, solo debe usar su poder coercitivo “...para

¹⁸⁵ Fiederich von Hayek nació en Viena el 8 de mayo de 1899, estudió derecho y ciencias políticas en esa ciudad, donde siguió los cursos de económica política de von Wieser (1851.1926) y participó en los seminarios informales organizados en su oficina por Luydwing von Mises, por entonces funcionario de la Cámara de Comercio. Hayek, que aún se inclina por el pensamiento socializante de los fabianos, no tarda en adherir a las tesis ultraliberales defendidas ante todo por von Mises. En 1952 es designado profesor de ciencias sociales y morales en la Universidad de Chicago y regresa a Alemania en 1962 para terminar su carrera en la Universidad de Friburgo. Ver: Castro Gómez, 2010: 196-200 y Foucault: 2007, 131-132.

aumentar la recaudación que le permita proporcionar servicios que, por otra razón el mercado no puede ofrecer” (1980: 60-61, en: Álvarez Leguizamón 2008: 127).

En tal sentido, Hayek remite a la noción de “*redes autogeneradas*” como parte de una sociedad considerada libre, en tanto el Estado es una más de muchas organizaciones. Mientras esta organización del Estado contenga muchas organizaciones voluntarias, será la red de relaciones desarrollada espontáneamente entre los individuos y las varias organizaciones que ellos crean, lo que constituye la sociedad:

Las sociedades se forman en tanto que a los Estados hay que construirlos. Por esto, las sociedades son infinitamente preferibles, en la medida que pueden producir los servicios que se necesitan o las estructuras que se autogeneren, mientras que las organizaciones basadas en el poder de la coerción tienden a convertirse en una camisa de fuerza que demuestra ser nociva. (Hayek, 1980: 61, en: Álvarez Leguizamón, 2008: 127-8).

El Estado se repliega a otorgar cierta seguridad contra la violencia¹⁸⁶ y a la entrega de cierto ingreso mínimo fijo y a garantizar la libre empresa, pero la sociedad civil, como una interface entre gobernados y gobernantes (Foucault, 1979-2007), posibilita el campo de acción transaccional de estas individualidades económicas capaces de autogenerar su bienestar y autogenerar-se como sujetos activos y portadores de capitales

Por su parte Milton Friedman¹⁸⁷, otro referente del neoliberalismo contemporáneo en su versión norteamericana, señala que se debería: “...*reencargar el manejo de la mayoría de las actividades de servicio al gobierno de unidades más pequeñas, llevaría probablemente al renacer del espíritu comunal tan sofocado por la centralización*” (Friedman, 1980: 68), aquí emergen los esbozos que van conformando y configurando el gobierno de lo local y a través de la comunidad, en torno de lo que veremos resulta el DDH.

En sintonía, nos resulta relevante el modo en el cual Milton y Rose Friedman (Friedman & Friedman, 1980) analizan críticamente la instalación del Estado social o de Bienestar en los términos antes citados por Foucault, ante todo cuando señalan que la propuesta de eliminación de estos Estados se funda en una transformación de la “*igualdad de*

¹⁸⁶ Violencia, que pueda afectar a la propiedad privada y al liberal juego de la competencia en el mercado.

¹⁸⁷ Milton Friedman, fue un economista estadounidense (1912-2006). Junto a Henry Simons y George Stigler, fue el principal representante de la ya nombrada “Escuela de Chicago”. Considerado uno de los más grandes economistas de su época, recibió multitud de honores, incluido el Premio Nobel de Economía (1976). Sus postulados fueron la base de las programáticas neoliberales que se establecieron en algunos países en la década de 1980, tal es el caso del gobierno chileno en manos del general Pinochet y, aunque sin llegar a abandonar del todo la asistencia social y haciendo explícita referencia a la “economía social de mercado” advenida del “ordoliberalismo alemán”, también trabajó en el Gobierno de EE.UU bajo la presidencia de Ronald Reagan y el del Reino Unido con Margaret Thatcher.

oportunidades”. En tanto dicha igualdad: “no debe ser interpretada liberalmente”, sino como una carrera abierta a los talentos y a la capacidad: “...*la igualdad de oportunidades especifica más detalladamente el sentido de la igualdad personal, de igualdad ante la ley, como todo ideal la igualdad de oportunidades no puede ser íntegramente realizada*” (1980: 190, en Álvarez Leguizamón, 2008:128). Dicha consideración debe oponerse a la “igualdad de resultados”, lo que traería como resultado que “todos deben alcanzar la carrera a la vez”. Sobre esta base se proponen: en una primer parte, una reforma del sistema de bienestar, reemplazando el paquete de planes concretos por un único programa, que comprenda los anteriores, de suplementos de renta pagados en efectivo. En una segunda parte, se postula un impuesto negativo sobre la renta, además de: “...*reducir la actuación de la Seguridad Social satisfaciendo al mismo tiempo los compromisos actuales y exigiendo gradualmente que los individuos tomen sus propias medidas pasara su jubilación*” (Friedman & Friedman, 1980: 171, en Álvarez Leguizamón, 2008: 129).¹⁸⁸

En dichos tramos de enunciación resuenan las ya esbozadas referencias a la teoría del capital humano, en torno de la molecularización de la forma empresa para la autogestión de la propia existencia, en tanto:

El centro de la economía y el análisis económico es el “comportamiento humano” y su “racionalidad interna (...) La economía deviene el análisis de las programaciones estratégicas de las actividades del individuo (...) el trabajador que posee capitales, los porta y se comporta según los mismos, es decir, acorde a aptitudes (innatas y adquiridas) en las cuales debe invertir, para adquirir una renta y así cierta satisfacción... (Foucault, 2007: 261-264).

Ligado a estos tramos discursivos y no discursivos en torno de los cuales se tejen las redes de gobierno y verdad en los albores del arte neoliberal de gobierno, también recuperamos las referencias acerca del “empoderamiento o *empowerment*”¹⁸⁹, de aquellos sujetos que advienen capaces de autogestionar, económicamente, su propia pobreza, en torno del despliegue de las políticas sociales de “lucha contra la pobreza” en los años 70’.

¹⁸⁸ Recordemos, según fue trabajado en los apartados I y II del capítulo 1, que la Escuela de Chicago tendrá basta influencia en las programáticas económicas dirigidas al gobierno de las poblaciones en la década de los 90’, en Argentina y en Salta.

¹⁸⁹ Siguiendo a Álvarez Leguizamón (2008), la categoría de *empowerment*, relevante en el discurso de desarrollo humano y en los tramos enunciativos y de pensamiento de los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención, se vincula con las sugerencias de los autores señalados según sus tendencias de promoción del fortalecimiento de las llamadas asociaciones intermedias. También en torno de una visión particular de la “gestión de los recursos humanos” y a otras formas de gestión de la calidad como, el movimiento de la “calidad total” aplicadas a la gestión empresarial. Ver: Álvarez, Leguizamón, 2008: 130.

Recuperando el trabajo de Álvarez Leguizamón (2008) señalaremos algunas referencias en tal sentido, según lo promovido por Peter Berger¹⁹⁰ y el sacerdote católico John Neuhaus¹⁹¹ en los Estados Unidos, acorde a sus propuesta de “potenciar al ciudadano” por medio de las “asociaciones intermedias”. Las sugerencias de estos autores se dirigen a “potenciar al ciudadano” sacándole todo lo que puedan producir con recursos propios o autogenerados a partir de las diferentes formas asociativas. Dichos autores sostienen que lo antedicho sería una solución a la creciente demanda de servicios estatales y a un diagnóstico que se basa en la creencia de su burocratización creciente, la inflación de las demandas de los políticos, la necesidad de reducir gastos, la amplitud del sistema tributario frente al Estado por “su impersonalidad, su indiferencia y su excesiva interferencia”.

Por tanto, no se proponen “eliminar el Estado”, sino que sus servicios puedan entregarse a través de mecanismos diferentes y alternativos, esto sería mediante las “asociaciones intermedias”¹⁹², comprendidas como aquellas instituciones existentes entre el individuo, considerado en su vida privada y las grandes instituciones de la esfera pública; esta visión de las asociaciones intermedias es equivalente a la de la sociedad civil según lo propuesto por el Banco Mundial como veremos a continuación, señalando que tienen su origen en el principio de la subsidiariedad proclamada por la Iglesia católica ya en 1891 en la ya nombrada encíclica *Rerum Novarum*.

Por ende, no se trata de un nuevo concepto sino del: “*esfuerzo sistemático de traducirlo en políticas específicas*” (Berger & Neuhaus, 19976: 177, en: Álvarez Leguizamón, 2008: 130). La delegación y/o trabajo de la resolución de problemas, en encuentro con sus soluciones y la gestión de las necesidades a los ámbitos comunales, los grupos, las redes primarias implica el sentido antedicho de la potenciación de las “capacidades” comprendidas como activos:

...el paradigma de las estructuras intermedias apunta a conferir a tales personas (los pobres) el poder necesario para desenvolverse como ya lo hacen los que tienen mayores ingresos, y a distribuir algo mas el poder, allí donde realmente

¹⁹⁰ Peter Ludwig Berger un teólogo luterano y sociólogo; si bien nace en Viena en 1929 emigra a los Estados Unidos, adonde realiza su carrera académica, teológica y política. Una de sus principales obras es la “*La construcción social de la realidad: un tratado en la sociología del conocimiento* (New York, 1966) que escribió junto a Thomas Luckmann.

¹⁹¹ Richard John Neuhaus un sacerdote católico canadiense (1936-2009). Fue autor de varios libros incluido *The Naked Public Square* (La Plaza Pública Desnuda) y fue el editor en jefe de *Firt Thing*, una publicación mensual del Instituto sobre Religión y Vida Pública. Dicho instituto tiene entre sus objetivos, promover una filosofía publica religiosamente informada para el ordenamiento de la sociedad. Objetivos trazados en torno de los legados del diálogo ecuménico y una visión social conservadora promovida por Neuhaus.

¹⁹² Los espacios de desarrollo de dichas asociaciones intermedias resultarían: el barrio, la familia y la iglesia.

importa, es decir, en el control que pueden ejercer las personas sobre sus propias vidas. (Berger Neuhaus, 1977: 184, en: Álvarez Leguizamón, 2008: 131).

Dichas asociaciones intermedias, promotoras de redes y prácticas de empoderamiento autogestivo acorde a la inversión en capitales, que los sujetos portan y aportan, tiene entre sus andamiajes epistémicos las ya referidas tramas en torno de las teorías sociológicas sobre la comunidad y la sociedad, así como aquellas analíticas críticas y contemporáneas que remiten a las mismas como ejercicios de gobierno a través de la comunidad (Rose, 2007).

En la gubernamentalidad neoliberal, entonces, a las poblaciones pobres se le garantizaría solo la posibilidad mínima de la existencia, a partir de lo cual se configura, con cierto énfasis desde la década de los 90', el dispositivo de la "focalización" dispuesto, ante todo, por los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención. Dicho dispositivo configurado en el espacio de las políticas públicas (Shore, 2010) codificadas en torno del Estado, contiene tres operaciones: operaciones de demarcación del universo potencialmente asistible; operaciones de clasificación del/la receptor/a a partir de la definición de atributos (negativos); y operaciones en virtud de las cuales se definen y dirigen "exigencias" al o la receptor/a (Soldano, 2009, en: Campana, 2012: 111).

En tal sentido, el dispositivo de focalización instala un cambio de objetivo en las políticas sociales, ya no se dirigen al ciudadano como tal y en tanto sujeto de derecho, sino a los "grupos de riesgo", los receptores estratégicos merecedores de la asistencia, en tal sentido se construye una población subjetivándola de este modo, mientras que la focalización se define como principio de tratamiento de la pobreza.

Por tanto, con la gubernamentalidad neoliberal, ante todo aquella que con mayor énfasis nos ha colonizado, la de perfil norteamericano, se instala una mutación y quiebre respecto de los modos de ejercer el gobierno de la pobreza en el campo de las políticas sociales. Según Álvarez Leguizamón (2008), lo antedicho implica un *retroceso* hacia las formas más clásicas de asistencia para el tiramiento de las necesidades básicas, retroceso que según la antropóloga salteña se manifiesta en tres procesos:

...los procesos de reprimarización conducen a jerarquizar a la comunidad como objeto de saber y de control. Mientras que la desocialización supone un retorno a las redes de sociabilidad primarias no gubernamentales como forma predominante de intervención sobre los pobres. La mercantilización de las relaciones sociales lleva implícito la destrucción o debilitamiento de las instituciones gubernamentales conocidas; siendo el rasgo más notorio la desgubernamentalización del "bien común", concomitantemente con la promoción de su desplazamiento a través y de las organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales como instituciones proveedoras del bien común... (Álvarez

Leguizamón, 2005b: 27. Resaltados nuestros)

Estos tres procesos que se tejen simultáneamente e interdependientemente reconfiguran el perfil de asistencialización de las políticas sociales en Argentina desde los 70' hasta la actualidad, con cierta radicalidad en la década de los 90'. Ahora bien, acorde a la perspectiva analítica sugerida en el presente trabajo de tesis, nos arriesgaríamos a sostener que tales procesos no implican un retroceso, sino un singular modo de ejercer el gobierno, en torno de la pobreza y los pobres, acorde al arte neoliberal de gobierno, según sea el período y contexto histórico específico.

2.2. a- Del Discurso de Desarrollo a secas, hacia el Discurso de Desarrollo con rostro Humano

En los avatares de la gubernamentalidad neoliberal antes analizados y descriptos, se construye el Desarrollo Humano como un eje vertebrador del gobierno de la pobreza. En este breve apartado pretendemos desandar el camino que va desde el Discurso de Desarrollo a secas, hasta que el mismo toma rostro humano y se torna sustentable, para comprender y analizar la singularidad, que dicho discurso cobra entre las lógicas y prácticas políticas, así como en los mecanismos de intervención, que codifican y programan el ejercicio del gobierno de la pobreza, en la Argentina y en Salta desde los 90' hasta la actualidad más cercana.

Ante todo, el Discurso de desarrollo a secas y el DDH se tejen y destejen entre discontinuidades y heterogeneidades epocales y políticas, en tanto:

Si bien los discursos van cambiando, mantienen un núcleo de elementos y relaciones fundamentales. La construcción e invención de los conceptos para nominar la pobreza ha ido transformándose a lo largo de los últimos cuarenta años, a medida que cambiaban los diagnósticos las cuestiones percibidas como problemas del “subdesarrollo y de la modernidad” en América Latina. Los objetos de conocimiento fueron incorporándose, a las luchas e interpretaciones que se producían en el campo de las ciencias sociales y también a las pujas de los sectores populares para hacer incluso el “Desarrollo. (Álvarez Leguizamón, 2005b: 3).

Así, en el entramado del discurso de desarrollo se da, parafraseando Escobar, el inicio de la guerra contra la pobreza, que fue tomando diferentes matices y significados, en camino hacia el “Desarrollo humano”:

Uno de los muchos cambios que ocurrió a comienzo de la segunda posguerra fue el descubrimiento de la pobreza masiva (...) El discurso bélico se desplazó al campo social y hacia un nuevo territorio geográfico: el Tercer Mundo (...) En la rápida globalización de la dominación mundial por los Estados Unidos, la “guerra a la pobreza” en el Tercer Mundo comenzó a ocupar un lugar destacado (Escobar, 1998: 51).

La situación de emergencia del Discurso de “desarrollo” acaece en los Estados Unidos de post-guerra con la presidencia de Truman en el año 1949, el mismo fue sinónimo de “crecimiento” ilimitado, el cual podría ser traspolado, a causa del “rebalse” desde los “países ricos a los países pobres”, puesto que, para Truman el desarrollo era sinónimo de: “...la evolución, hacia el bienestar y perfeccionamiento del género humano”. (Álvarez Leguizamón, 2005d: 23). De este modo, como ya ha sido señalado, la “pobreza” se torna el “objeto problematizado”, en torno del cual se despliegan un conjunto de estrategias, saberes y mecanismos posibles de identificar en el entramado discursivo del Desarrollo.

En la Argentina de estas décadas (40' - 70'), las condiciones de posibilidad locales y singulares que entretejieron el discurso de “desarrollo” coincidían con el despliegue de la racionalidades políticas codificadas en el Estados de perfil “nacionalista y popular” y luego “desarrollista”, como fue trabajado en los apartado anteriores. En los 40' hasta mediados de los 50' este desarrollo significaba un camino hacia la modernización y el crecimiento movilizado por la urbanización y la evolución de los mercados internos, así como por la fuerza de un poder ejecutivo centralizado y encargado de dirigir y proteger “la vida útil de la población trabajadora”.

Siguiendo este breve recorrido por el camino del desarrollo, en la década de los 60' y 70', en una América Latina atravesada de Golpes de Estado militar y políticos, el “desarrollo” seguía vinculado al “crecimiento económico”. Sin embargo, luego del fracaso del “rebalse” proyectado por Estados Unidos, se modifica el sujeto-objeto de desarrollo, en tanto ya no se trataba del desarrollo proyectado hacia “países” pobres, sino hacia “hombres” pobres, a los cuales otorgar, aplicar y transferir diferentes capacidades, condiciones (económicas y culturales), que les permitan alcanzar la evolución y desarrollo pertinentes. En este sentido, la pobreza adviene “condición humana”, lo cual implicó un ejercicio del gobierno de la misma en torno del desarrollo a través de la puesta en juego de lógicas y prácticas de tipo comunitario, cultural, económico y ambiental que se tradujeron en Argentina en el programa desarrollista de gobierno.

Así, “la pobreza se reafirma como un problema social” y la enorme cantidad de población pobre se consideraban:

...excluidos o descalificados de la posibilidad de ingresar al circuito de la normalidad, de la “racionalidad” y de la historia. (...) Las metáforas utilizadas van cambiando a través del tiempo pero tienen en común, su condición de residual, tanto desde el punto de vista de la lógica del desarrollo o de la acumulación como de la función que pueden jugar en la sociedad. En este sentido, en la mayoría de los casos, sus comportamientos son

considerados anómicos, residuales, premodernos ya sean pobres, marginales, masas marginales u “oprimidos” (Álvarez Leguizamón, 2005b: 28).

Sin embargo, es importante recordar, que también emergieron diferentes prácticas de resistencia a lo dispuesto, sobre todo ejercidas por varios intelectuales¹⁹³ y militantes políticos de diversos espacios organizados, en América Latina. Estos postulaban teorías y prácticas emancipatorias, aunque en su mayoría no lograron rebasar la cuestión del “desarrollo”, como meta. En palabras de Escobar:

Aún quienes se oponían a las estrategias capitalistas del momento se veían obligados a expresar sus críticas en términos de la necesidad del desarrollo a través de conceptos como “otro desarrollo” “desarrollo participativo”, “desarrollo socialista” y otros por el estilo. (...) La realidad, en resumen, había sido colonizada por el discurso del desarrollo, y quienes estaban insatisfechos con este estado de cosas tenían que luchar dentro del mismo espacio discursivo por porciones de libertad, con la esperanza de que en el camino pudiera construirse una realidad diferente. (Escobar: 1998: 22).

La década de los 80', también llamada a nivel mundial “década perdida”, fue una época de estancamiento “económico”, según parámetros de crecimiento y acumulación de capital, a lo cual le siguió un enorme armamento de dispositivos de intervención, según mecanismos establecidos y decididos por los organismos internacionales de crédito e intervención política local.

En Argentina, es el momento del retorno a la democracia (1983) y de la creación de espacios estructurales que comienzan a trabajar la “cuestión social”, a modo de paliar los efectos de la crisis del Golpe de Estado e ir hacia el Desarrollo de la Sociedad Argentina. Siguiendo esta línea de argumentación, la irrupción del problema de la pobreza en América Latina durante la década de los 80', supone una reinvención de lo social, en los términos planteados por Donzelot (2007). La singularidad, en el caso de Argentina, remitió al modo en el cual el imaginario instalado en el período de transición democrática, se encontró de choque con una realidad nacional fragmentada: “...cuyas tradicionales bases económicas habían sido fuertemente debilitadas y donde la mayor parte de la población se encontraba en una situación de gran fragilidad” (Giavedoni, 2012a: 152). Así, comienzan a instalarse las prácticas políticas de “intervención social”, en el marco institucional de la Secretaría de Bienestar Social, como veremos a continuación.

En este camino del Discurso de Desarrollo en relación con las políticas sociales a nivel

¹⁹³ Hacemos referencia, entre otros a Paulo Freire y su “pedagogía del Oprimido” (1970); el nacimiento de la “teología de la liberación” durante la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Medellín 1968); las críticas al “colonialismo intelectual” por Fals Borda; y la “dependencia económica” por Cardoso y Faletto (1979), etc. Ver: Escobar: 1998: 22.

mundial, es a finales de la década de los 80' cuando emerge y se instala el Discurso de "Desarrollo Humano" (DDH). En tanto, al desarrollo a secas se le agrega el adjetivo de "humano" considerando que el crecimiento económico debería humanizarse, así como estar en equilibrio con la armonía ecológica. Dicha humanización del desarrollo implicó un enorme despliegue programático dirigido a la plena "autorrealización" de los hombres, acorde a capitales, no sólo materiales, sino humanos y sociales adquiridos tanto por naturaleza, como por el acceso e incremento de oportunidades.

En esta lógica de "economización de los vínculos sociales e inversión en capitales, entre mínimos y básicos, se inscribió la propuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)¹⁹⁴ sobre desarrollo humano sostenible y ajuste con rostro humano, cuyo objetivo sería combinar políticas de ajuste económico con la restauración del crecimiento y la protección de los grupos vulnerables. En 1990 el PNUD publicó el primer Informe sobre el Desarrollo Humano, Mahbub ul Haq¹⁹⁵ es quien coordinó los primeros cinco informes, en los cuales se evidencia el eje articulador del mismo dirigido a "cambiar el foco del desarrollo económico de la contabilidad del producto nacional a las políticas centradas en la gente". En la primavera de 1989 Ul Haq plantea al administrador del PNUD, W. Draper, su iniciativa de preparar un reporte anual sobre el desarrollo humano, y allí se propone el Índice de Desarrollo Humano¹⁹⁶, consignando, según lo sugerido por Álvarez Leguizamón (2008: 120), que dichas medidas, no ponen en cuestión la necesidad de ajuste ni menos aún el imperativo del equilibrio fiscal en el que se basan las mismas.¹⁹⁷

En el primer Informe de 1990 se entiende que el desarrollo humano sería un proceso de

¹⁹⁴ Desde la década de los 70', con una profundización radicalizada en los 90', los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención, entre los más importantes el Banco Mundial (BM) y la ONU, ejercen una enorme influencia, en los programas de AMLC dirigidos al gobierno y gestión de la pobreza. Esto es realizado mediante una lógica de gobierno indirecto, puesto que requieren de una mediación, especialmente de las instituciones estatales, para hacer efectiva la puesta en práctica de las políticas de desarrollo, las cuales constituyen uno de los ejes centrales de las transformaciones dinámicas de la acumulación de capital Ver: Presta 2011...op...cit.

¹⁹⁵ Mahbub ul Haq es considerado uno de los gestores del nuevo "paradigma de desarrollo humano". Fue fundador del Tercer Foro Mundial en 1973 y sirvió como consejero de la Comisión Brandt sobre el Medio Ambiente. Fue gobernador del FMI y del BM, desde 1982 hasta 1988; dentro del PNUD fue consejero especial del administrador y dirigió los Informes de Desarrollo Humano de 1990 a 1995.

¹⁹⁶ El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado por la ONU en 1990, sobre la base de tres componentes: esperanza de vida al nacer, medida en años; logros académicos, medidos como combinación del nivel de analfabetismo y el promedio simple de las tasas de matrícula primaria, secundaria y terciaria y el estándar de vida, medido por el PBI per cápita real ajustado por el índice de paridad de poder de compra y ajustado para mostrar la utilidad marginal del ingreso.

¹⁹⁷ A estas consideraciones en torno del desarrollo humano había que sumarle el costo humano de los programas de ajuste estructural de los 80' que tenían lugar en la mayoría de los países considerados "subdesarrollados" bajo la influencia del FMI y el BM. Ante lo cual las propuestas de Ul Haq y el programa de gobierno en clave de Desarrollo Humano se dirigían, según Álvarez Leguizamón (2008), a cerrar la contabilidad nacional con cierto grado de compensación a sus víctimas.

“ampliación de las elecciones humanas relevantes”, y un nivel de logro, entendido como *“la medida de comparación internacional del logro de esas elecciones”*, que permite comparaciones entre Estados. En tal contexto en la Cumbre del Desarrollo Social, en Copenhague el del 6 al 12 de marzo de 1995, la comunidad internacional, los organismos internacionales y los países miembros de las Naciones Unidas, produjeron la declaración del Desarrollo Humano que globaliza materializa e internacionaliza el “desarrollo humano sustentable”. Allí se planteó que el DDH centrado en el ser humano, se lograría mediante la adopción de una agenda integral y multisectorial encaminada a la erradicación de la pobreza, la creación de empleo productivo y remunerativo para todos y el fomento de la integración social. Los gobiernos se comprometieron en el imperativo de “erradicar la pobreza” como principio ético, social y político y económicos de la humanidad, velando porque las personas que viven en la pobreza tengan acceso a los recursos de producción, como crédito, tierra, educación y formación, tecnología conocimientos e información, así como servicios públicos.

A tales fines, el Informe del año 1993 señalaba:

En términos comunes se considera que la pobreza no es solo una diferencia de ingresos, que se puede salvar mediante el fomento de la expansión económica general, que goteará hacia los pobres (...) Otro modelo, que el PNUD apoya, considera la pobreza como una diferencia en cuanto a la participación de la gente. Según ese modelo, el otorgamiento de poder es el criterio estratégico fundamental en la abolición de la pobreza. Los propios pobres deben adquirir poder (PNUD, 1993 en: Campana, 2012: 116).

En síntesis, el Desarrollo Humano en clave de capital humano, se instala como: *“...el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades”* (PNUD, 1999). A partir de lo cual, el desarrollo no se limita al acceso al empleo, la salud y la educación, sino que abarca otras dimensiones humanas fundamentales como: *“...el goce de libertades civiles y políticas y la participación de la gente en los diversos aspectos que afectan a su vida: Este concepto incluye las problemáticas de la gobernabilidad democrática, la participación y la vigilancia ciudadana y la generación de capital social¹⁹⁸...”*. Este “capital social¹⁹⁹”, como parte de

¹⁹⁸ Extracto-resumen de varios documentos e informes de “Desarrollo Humano” (2000; 2004; 2009), de las Naciones Unidas. Ver: pág. web Naciones Unidas: <http://www.un.org/spanish/...>; consultada, setiembre, 2012.

¹⁹⁹ Hasta la década de los 80’, en América Latina, tanto la sociología como la antropología habían desarrollado diferentes trabajos y categorías para explicar la importancia de las relaciones de reciprocidad primarias, como formas de generar recursos basados en relaciones de confianza y cohesión entre los pobres urbanos. La categoría de “capital social”, según lo indicado por Álvarez Leguizamón (2008: 137), viene a extrapolarse al campo de la economía y el discurso de desarrollo, en lo que damos en llamar un ejercicio económico del gobierno de las poblaciones a partir del cual adviene un “capital” en el cual invertir e invertir-se. De hecho, según Portes (1996) son dos economistas quienes introducen el concepto en la sociología norteamericana: Glen Loury y Coleman, a

los activos de las familias pobres está influenciado y dirigido por las ideas acerca de las capacidades y agencias, las cuales son adoptadas por los organismos internacionales y las políticas nacionales para pensar la pobreza e intervenirla, mediante prácticas que consideramos ejercerían un “gobierno a través de la comunidad” (Rose, 2007).

En tal sentido, en la actualidad más cercana este Desarrollo Humano se expresa también, en términos de “equidad”, es decir que:

*...todas las personas, sin distinción alguna, puedan obtener capacidades de desarrollo humano, sino también que el crecimiento económico no debería agrandar las brechas sociales entre los sujetos. Desarrollo equitativo significa deber moral de justicia e inclusión social, así como de solidaridad con los que menos tienen para desarrollar sus capacidades...*²⁰⁰.

En estos tramos discursivos y extradiscursivos se pone en juego lo que Álvarez Leguizamón llama política de “grupos focos”, la cual se dirige a “sectores pobres” a los que se otorga financiamiento y mínimos básicos para que sobrevivan en “su” lugar, mientras se construyen un conjunto de nuevos derechos, que los mantiene en los, llamados por el Banco Mundial “umbrales de ciudadanía:

...En esta invención de las necesidades básicas, bajo la cual anida el hambre, la política del desarrollo humano focalizada en las poblaciones de riesgo deviene en una biologización al “mínimo” de la vida. No se trata de aumentar el bienestar de los ciudadanos, sino de mantener a los trabajadores, los no trabajadores (desempleados, inempleados, precarizados “inútiles para el mundo”) y los ciudadanos en un umbral, en la línea de la flotación de la vida. (Álvarez Leguizamón, 2005c: 269).

Según la autora salteña emerge en este entramado de relaciones de poder, gobierno y verdad lo que da en llamar “focopolítica”²⁰¹, como esta nueva táctica de gobierno, encargada de controlar y regular la población en riesgo y riesgosas.

En tal sentido, entran en juego según los tramos epistémicos analizados los conceptos de “empoderamiento, capital social, humano, participación social, entre otros”. En tanto la ONU argumenta que ante las limitaciones del PBI per cápita para analizar los diagnósticos de la problemática social y distributiva, era: “...urgente la búsqueda de nuevos conceptos alternos e indicadores que directamente aborden el campo del desarrollo humano” (Rey de Marulanda y Guzmán, 2003: 12). El DDH trasparenta las estrategias antedichas y define, de modos diversos y singulares, a las políticas sociales

quienes les interesa el capital social en su relación con la formación de capital humano y en la identificación de mecanismos por los cuales se genera.

²⁰⁰ Informe de Desarrollo Humano, 2009. Naciones Unidad, EE.UU.

²⁰¹ La focopolítica: “...se caracteriza por la gestión, control y producción de saberes especializados sobre grupos de riesgo. El discurso de este nuevo arte de gobernar es el desarrollo humano. (...) El arte de gobernar es un problema de gestión de la vida de las poblaciones foco, las más pobres de entre los pobres, las más vulnerables, las que están al límite de su extinción por hambre...” (Álvarez. Leguizamón, 2008: 20-21).

como campo de combate a la pobreza.

Por su parte, en este trazo de prácticas y saberes, al Estado le compete “ayudar entre mínimos y básicos” garantizando umbrales de existencia y subsistencia, en torno y a partir de los cuales, cada jugador queda librado a su suerte; mientras que la teoría de capital humano que atraviesa el DDH, permite repensar todos los problemas de protección de la salud, de la higiene pública, de la educación y del trabajo, como elementos capaces de mejorar o no el capital inicial (Foucault, 2007: 270). Así cobran relevancia las “capacidades, y habilidades” de los pobres, lo cual supone, en la práctica predominantemente neoliberal de gobierno, “producir y organizar libertades”: “...voy a producir para ti lo que requiere para que seas libre, voy a procurar que tengas la libertad de ser libre” (Foucault, 2007: 84).

En los apartados que siguen y, en el capítulo 4, analizaremos la singularidad, que el DDH cobra en Argentina y en Salta, respectivamente.

2.2a.1 El Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con rostro “humano”: influencias, estrategias y marcos

Acorde a nuestra hipótesis de trabajo, la pobreza resulta un dispositivo de gobierno sobre la cuestión social, lo cual nos permite observar el modo en que se ha problematizado, es decir, la manera en que algo se ha constituido y construido como problema. El gobierno de la pobreza nos permite pensarla entonces, no como problema en sí misma, sino como soporte y apoyo de diversas técnicas para la regulación y el gobierno de este sector de la población.

En tal sentido observamos cómo, en la geopolítica mundial, continental y nacional que hace del DDH una grilla de inteligibilidad dirigida a “combatir, aliviar, paliar y erradicar la pobreza”, los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención resultan un actor fundamental.

En el caso del Banco Mundial (BM de ahora en más) su mayor influencia se inscribe en las décadas analizadas en el presente capítulo, cobrando matices diferenciales entrado el siglo XXI, como analizaremos a continuación.

Los entramados discursivos del Banco Mundial (BM), promotores del “combate de la pobreza”, así como sus dispositivos, están atravesados de reformas varias. En los 70` comienza a profundizarse y arraigarse la *problemática de la pobreza*, y es bajo la presidencia de McNamara que se pronuncia la necesidad de *combatir la pobreza* para

compensar las fallas del mercado, mediante el uso racional de recursos y capitales que los pobres deben descubrir que poseen. McNamara (1968), proviene del campo militar²⁰², y fue el promotor de diferentes actividades dirigidas a “*combatir*” la pobreza, lo cual se instala como el problema del milenio. Dicho combate pretende lograrse mediante el perfeccionamiento y diseño, en los 70`, de: estudios demográficos, planificaciones familiares, marcos estadísticos, intervenciones diversas, (Zibechi, 2011: 22). Puntualmente luego de la guerra de Vietnam, en el 73’, se comienza a luchar contra la pobreza extrema, mediante la atención de las necesidades básicas, a través del apoyo a la participación de los pobres, en el desarrollo.

La gran transformación está en la convicción de que no se puede solucionar todo mediante la guerra militar armada, sino mediante la *otra guerra*, centrada en la nueva ciencia y la formación de sistemas sociales. Sobre todo, luego de la “crisis mexicana” Estados Unidos instaló el problema de la pobreza a nivel continental. En ocasión de la 35 Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 1994, este organismo ratificó su compromiso para ayudar a los países de la región a luchar contra la pobreza y, también de dirigir la mayor parte de los fondos a cubrir demandas de los grupos de bajos ingresos, con programas focalizados para la extrema pobreza y líneas de crédito para programas orientados a reformas de los sectores de salud, educación y vivienda (Grassi, 2003b: 175).

En este diagrama de poder/gobierno los Organismos Internacionales de crédito e intervención, como el BM, el BID y la ONU, se tornan centros intelectuales y políticos capaces de gravitar en todo el mundo en influir en casi todos los gobiernos. Ante todo, mediante la promoción del vínculo entre *seguridad y desarrollo*, a partir de lo cual se dispone que la pobreza y la injusticia podían poner en peligro la estabilidad y seguridad de los aliados. También, se reconoce que el crecimiento económico, por sí solo, no podría reducir la pobreza, por lo cual los mecanismos de gobierno comienzan a dirigirse a mediados de los 90’ hacia “las personas pobres y sus capacidades, entre mínimos y en los márgenes”.

En los 90’, el BM dentro de su estrategia de “alivio a la pobreza” surgida en las décadas anteriores, comienza a hablar de un “marco comprensivo del desarrollo”, paradigma que se considera equivalente al Desarrollo Humano. Este marco propone considerar la interdependencia de los aspectos humanos, económicos, financieros, ambientales y

²⁰² McNamara presidió el pentágono y participó de Vietnam.

sociales como parte del desarrollo social vinculado fuertemente a la reducción de la pobreza; lo cual se operativiza mediante préstamos crediticios de la mano de programas específicos dirigidos a tal fin de Organismos como el BM y el FMI a los países considerados en desarrollo y/o subdesarrollados²⁰³. Surge, en este momento del BM, la noción de “gobernanza”, como el ejercicio del poder político para administrar los asuntos de la nación, categoría que abarca las relaciones entre gobiernos de Estado, organizaciones de la sociedad civil e instituciones financieras, es decir, el triálogo, que sostiene el nuevo pacto social.

En la década de los 90’ acontecieron diferentes conflictos, levantamientos sociales y luchas en países, sobre todo América Latina, tal el caso referencial del Zapatismo en México. Ante este panorama atravesado de crisis y luchas, entre 1997 y 2005, en la presidencia de Wolfensohn consideramos que se da una transformación de carácter ampliatorio, al menos enunciativa, en el discurso del BM. En tanto comienzan a referir al “desarrollo integral o más integrado”, a la reconversión del Estado y la cohesión social, el Buen Gobierno en relación con los Estados llamados frágiles y los fuertes bajo el lema: *“Acercar el Estado al pueblo. Fomentar la participación social”*. En este giro hacia el nominado desarrollo integral, de la mano de la reconversión de los Estados y la participación social de los pobres en su desarrollo, se sostiene que: *“Los pobres quieren que los escuchen. No quieren caridad. Quieren tener la oportunidad de lograr una vida mejor por sí mismos”* (Wolfensohn. J.D. 2000)²⁰⁴; podemos leer entonces que los pobres con un piso mínimo de oportunidades, pueden ser gestores activos en el sinuoso camino de superar esa, su condición, de pobreza.

Acorde a la teoría del capital humano, entonces, el BM (1998) promueve que los pobres poseen inteligencia y habilidades, las cuales debieran ser potenciadas y fortalecidas para el logro del objetivo del milenio. Ahora bien, en las referencias a *habilidades* y *capacidades* de los pobres, resuenan las ya señaladas consideraciones de Amartya Sen, para quién: *“Una habilidad sería un logro, mientras que una capacidad es la habilidad*

²⁰³ Ver: OIT, Grupo de trabajo sobre las dimensiones sociales de la liberalización del comercio internacional, 2000, en Álvarez Leguizamón 2008: 121.

²⁰⁴ Entre los entramados discursivos y programáticos del Banco Mundial se señala que, en este milenio, se trata de “reducir la pobreza” de un modo “participativo” y con “mayor control social”. Estas enunciaciones y lógicas políticas se sostienen, a partir el 2000, en un profundo asentamiento y refinamiento de los dispositivos de intervención, siempre bajo la misma enunciación, ya que se considera que este nuevo siglo encuentra al Banco Mundial con los equipos técnicos fortalecidos en torno del desarrollo social, así como con la claridad respecto de la “cuestión social y política” a “atacar”, mediante todo el armamento de los Proyectos y programas, que deberían comenzar a gestarse ahora en más. Síntesis extraída de la página web oficial del Banco Mundial: Informes de desarrollo, 2007-2008: <http://www.bancomundial.org/temas.html>; <http://www.bancomundial.org/odm/>; consultada setiembre, 2011.

para lograrla. Las habilidades constituyen diferentes aspectos de las condiciones de vida, las capacidades, en contraste, son nociones de libertad en el sentido positivo del término: las oportunidades reales que se tiene respecto de la vida que se puede llevar” (Sen 1987: 36). En este sentido, la posesión o acceso a bienes, para Sen, no son criterios para definir el nivel de vida, ya que la tasa de transformación de bienes y servicios a habilidades varía de persona a persona.

Así, en estos juegos enunciativos de desarrollo-s con rostro humano, la *participación* para la gestión de la autogestión de los programas sociales y, la existencia de las poblaciones pobres, es una categoría propia de las técnicas de gobierno básicas de intervención para regular y administrar la pobreza (Álvarez Leguizamón, 2005, 2008). Esto implica, siguiendo a Foucault (2007), que si bien el Estado debiera gobernar lo menos posible, también debiera posibilitar las condiciones y los marcos para que el “sujeto económico” llegue a realizarse, en tanto inversor y promotor de capitales, pues:

... el desarrollo no tiene que ver con la caridad, sino con la inclusión y el empoderamiento, y la lucha contra la pobreza se alcanza por ejemplo: generando nuevas oportunidades para los trabajadores de todos los países de desarrollar su potencial y de sostener a sus familias con trabajo (...) de la mano con un “Buen Gobierno”, es decir, una buena gestión de los asuntos públicos, sin corrupción, según reformas judiciales y financieras necesarias. (Wolfensohn. J.D. 2000:205).

En tal sentido, las reformas orientadas hacia el mercado combinadas con desarrollo social e institucional pueden significar el crecimiento económico “para” los pobres. Para esto, según el entramado enunciativo del BM hay que ayudar a los países “clientes” a proteger a los pobres de las pérdidas de cultivos, de la delincuencia y los conflictos y de las enfermedades y el desempleo, lo cual se logra, mediante una fuerte inversión en activos (materiales, financieros, humanos y sociales) de la mano con un “Buen Gobierno”, es decir, una buena gestión de los asuntos públicos, sin corrupción, según reformas judiciales y financieras necesarias (Wolfensohn. J.D. 2000).²⁰⁶

Ahora bien, en la actualidad más cercana, luego de las transformaciones mundiales

²⁰⁵ En estas referencias a la “inclusión” resuena la categoría de “integración, según Murillo en el paradigma sociotécnico emergido en los 60’, en tanto dicho concepto: “...no alude ya a un todo social como tejido contenedor, inclusor de todos y reparador en nombre de una ley universal y trascendente (...) La “nueva integración” implica varias condiciones fundamentales, entre ellas la caída de la ley universal, el desbloqueo del paradigma jurídico, la fragmentación social y la esencialización ontológica de la misma a nivel social e internacional. Se trata de un nuevo concepto de integración liderada por el mercado” (Murillo, 2006: 15). Esto implica una organización flexible para el tejido de redes que van desde el usuario hasta la empresa y que resitúa el lugar del Estado, como “facilitador” de la integración, lo cual implica una “cooperación” activa entre todos los integrantes de la sociedad (estado, familia, empresas, etc.) en función de la coordinación del mercado y la orientación de la propiedad privada.

²⁰⁶ Zoellick, 2011...op...cit.

acaecidas en torno de las crisis (2008-2011) a nivel económico, social y político, acaecería en las tramas enunciativas y programáticas del BM una reafirmación del DDH, en clave de capital humano. Para lo cual, es necesaria una “*nueva normalidad y una nueva mentalidad*” (Zoellick 2011), es decir, reordenar y reorganizar de un modo funcional y dinámico, las prácticas de desarrollo. Ante esto, resulta fundamental democratizar el desarrollo y modernizar el multilateralismo.

Se trataría de una nueva normalidad fuera de lo normal:

...la cual será dinámica y no rígida con más países en alzas en la configuración del diagrama multilateral, a partir de lo cual las pasadas redes jerárquicas serán desplazadas por nuevas (...) la nueva normalidad será fluida y a veces volátil; (...) deberá impulsar el crecimiento, no solamente transformarlo, crear nuevos empleos a partir de que los antiguos pierdan valor, aprovechar el crecimiento sostenible, estimular al sector privado; (...) por lo cual, la nueva normalidad consistirá en la voz de la gente, a las mujeres en sus comunidades, a los ciudadanos en sus países, a los estados en el sistema internacional (Zoellick, 2011, s/d).

La nominada “nueva normalidad” parecería introducir ciertas reformas, en los modos de ordenar y dar forma a las prácticas de desarrollo dirigidas a los pobres, sin embargo, observamos cómo se profundizan y diversifican cada vez más los mecanismos de gobierno dirigidos a fomentar, permitir y construir las potencialidades y capacidades de los pobres, ampliando las subjetividades intervenidas ante todo hacía las figuras femeninas y diversas. En muchos casos, estos dispositivos y entramados discursivos son recuperadas por los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.

Ahora bien, esta nueva normalidad, cuyos actores responsables somos todos, requiere de una *nueva mentalidad*, que implica:

Avanzar más allá de la ayuda implica continuar cambiando para transformarse en un asociado que propicie el conocimiento abierto, el BM será inversionista e intermediario, de las inversiones destinadas a fortalecer mercados, instituciones y capacidades, ya sea de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. (...) Y el BM será promotor del crecimiento inclusivo y sostenible. (Zoellick 2011)²⁰⁷

Lo antedicho requiere lo que el BM da en llamar “un nuevo contrato social”, en el cual las prácticas dirigidas a combatir la pobreza se centran en las personas, no mediante medidas asistenciales de ayuda, sino a través de medidas económicas inteligentes, que impliquen tener presente el discurso del derecho –social - y no sólo del recurso. En este tejido vincular de gobierno podríamos señalar que se amplía el campo de intervención focalizado en “los más pobres de entre los pobres”, hacía una territorialización

²⁰⁷ Zoellick, 2011...op...cit.

humanizada de los programas de gobierno, mediante un despliegue de armamentos estadísticos y experticios altamente refinados.

En sintonía, el PNUD (2009, 2011), según analizaremos en el apartado I del capítulo 4, también reafirma y recrea sus andamiajes discursivos y prácticas en torno del Desarrollo Humano y el gobierno de las poblaciones pobres y la pobreza. Dicho organismo concentra el enfoque de desarrollo humano en las *personas*, sus capacidades y habilidades, a partir de mejoras en la *calidad de vida*, lo cual acorde a lo propuesto por Sen no apunta, solamente, a la adquisición material de bienes o dinero. En este sentido, la pobreza es calificada como privaciones injustas, o sea como la ausencia de funcionamientos centrales para la vida. Por tanto, la autogestión del desarrollo, como un hecho naturalizado, es posible a partir de la autogestión de la existencia de los sujetos en desarrollo y a desarrollar, a partir de la inversión en sus capitales y el despliegue de sus habilidades: “...*La pobreza, así entendida no es solo una condición socioeconómica sino una privación de ciudadanía, ya que remite a la falta de titularidad de derechos sociales y de participación en el desarrollo*” (Documento PNUD, 2009: 3).

En este sentido, la distribución “real” de los ingresos y las riquezas recae, no en una transformación del orden económico y sus lógicas, sino en una reconfiguración de los marcos de acción e intervención para que todos puedan ingresar en el juego y por lo menos producir, poder comprar y ofrecer, de modo diferencial, aquello que necesitan para sobrevivir entrando a jugar aquí nociones como las de “equidad y justicia”:

...todos los procesos que no son equitativos son injustos: las oportunidades de todas las personas a llevar una mejor vida no debieran verse restringidos por factores que escapan a su control. Las desigualdades son particularmente injustas cuando algunos grupos son discriminados de forma sistemática por motivos de género, etnia u origen geográfico.
(PNUD, 2011: 1).

Las “desigualdades” no económicas, son las que debieran ser gobernadas en un paradójal ejercicio económico de gobierno de las poblaciones pobres. En tanto que, parafraseando a Murillo (2006), “un grado mínimo de desigualdad resulta siempre necesario”, en los tramos gubernamentales del neoliberalismo contemporáneo.

Acorde al breve recorrido realizado en torno del gobierno de la pobreza, las políticas sociales y el DDH, en los apartados que siguen analizaremos cómo, en Argentina y Salta de la década de los 90’ de un modo singular el DDH, de la mano del BM se manifiesta en su esplendor; mientras se materializa en la ejecución de un conjunto de programas y proyectos dirigidos a las poblaciones pobres, así como los trabajadores advenidos pobres,

según los efectos de los programas de gobierno de la época, ya analizados, mientras que, en el capítulo 4 observaremos cómo, en la Argentina luego del 2003 el DDH se recrea, pero de la mano del PNUD²⁰⁸ en su propuesta de “desarrollo centrado en las personas dirigidos a la equidad y la inclusión”. De hecho, en el 2003 se crea en Argentina el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que en Salta, en el 2008 se instituye en Ministerio de Desarrollo Humano. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, dentro de sus objetivos fundacionales se observa con claridad la cristalización de los principales elementos del DDH, entre su objetivo principal figura (Decreto N° 141/2003, artc. 23bis)²⁰⁹:

*...todo lo inherente a la promoción y asistencia social orientado hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de igualdad de oportunidades para estos sectores, capacidades especiales, menores, mujeres y ancianos, la protección de la familia y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.*²¹⁰

Así, entonces, siguiendo la línea del PNUD (2009, 2011), el desarrollo está centrado en la persona (sujeto activo de su desarrollo y “dueño de su destino”), con ciertas garantías otorgadas por el Estado, a partir de lo cual ya no se trata de políticas sociales focalizadas y centradas en los mínimos y básicos, como en las décadas anteriores, si no en un salto logrado por la ampliación de oportunidades y una reformulación del lugar del Estado, a partir de los conflictos trabajados. En el caso de las poblaciones pobres, como será analizado en el capítulo 4 apartado I, el suelo común de equidad y con ello la ampliación de oportunidades, debe ser garantizado por la protección del Estado, en tanto una administración de los básicos, a partir de los cuales poder re-integrar-se en la sociedad o lo social re-inventado, en el proceso mismo del gobierno de la pobreza.

²⁰⁸ En consecuencia con la lógica de des-endeudamiento, promovida por el gobierno de Estando nacional desde 2003, el PNUD recibe, prácticamente, la totalidad del financiamiento por parte del gobierno nacional, mientras que interviene en el diseño, diagrama, monitoreo, evaluación de proyectos, programas y planes dirigidos a los pobres, en Argentina, así como en la capacitación de equipos técnicos expertos. El financiamiento otorgado por el gobierno de Estado nacional, consiste en Fondos provenientes del Tesoro Nacional, así como préstamos otorgados por el BM. y el BID, en el marco de las provincias. Aunque los fondos nacionales superaran los de los Organismos internaciones de intervención y crédito. PNUD (2009)... op...cit.

²⁰⁹ Dicho decreto se dispone el 4 de junio del 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner y la ministra Alicia Kirchner, se enmarca en el Decreto N°1283 de fecha 24 de mayo de 2003, en el cual se sustituyó parcialmente la Ley de Ministerios, según texto ordenado por Decreto N°438 del 12 de marzo de 1992.

²¹⁰ Para el logro de dichos objetivos se programaban las siguientes funciones: “...ejecución de las acciones tendientes a modificar actitudes de la poblaciones desde el punto de vista social (...) ejecución de acciones de asistencia directa a personas en situación de riesgo (...) promoción, programación, ejecución y control de actividades tendientes a la reactivación de conjuntos sociales, mediante la paulatina delegación de responsabilidades sociales desde el Estado hacia las comunidad o entidades intermedias siguiendo el principio de subsidiariedad (...) entender en la organización y operación de un sistema de información social, con indicadores relevantes sobre grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad que permita una adecuada focalización del conjunto de las políticas y programas sociales nacionales” (Decreto N° 141/2003, art. 3. Bis)

Por tanto, con sus singularidades epocales y programáticas específicas, en redes vinculares heterogéneas de lógicas y prácticas de gobierno y dispositivos de intervención, se considera que el DDH brinda un sustento teórico y político para pensar y gobernar la pobreza; bajo la consideración de que la misma puede resolverse, a partir de las potenciación - más o menos regulada - de las capacidades (destrezas, habilidades, capitales) de los pobres. Tramas epistémicas y enunciativas construidas desde un enfoque en torno del cual, la falta de recursos o la calidad de recursos a los cuales se “accede” se relativiza, por las capacidades y oportunidades para conseguirlos transformarlos o intercambiarlos: “...un nuevo descubrimiento de la economía política ha dado a luz. Las personas, y sobre todo las personas pobres, nos son indolentes o inútiles, tiene capacidades y pueden, con recursos limitados, sacar provechos diferenciados son buenos jugadores” (Álvarez Leguizamón, 2008: 123).²¹¹

De este modo, nos orienta el supuesto de que el “combate a la pobreza” no pretende erradicarla, sino gestionarla²¹², en tanto: “...su carácter estratégico se encuentra en que los programas específicos en términos educativos, de salud, alimentación, etc., reproducen marginalmente en el mismo momento en que pretenden aliviarla” (Giavedoni, 2012a: 122). Puesto que, se trataría de un ejercicio de gobierno de la pobreza, en tanto gestión y administración de dicho problema advenido riesgoso, con el fin de ejercer un gobierno económico y moral²¹³ sobre la conducta de los individuos y su medio ambiente. Esto remite, como ya ha sido enunciado, a que las relaciones de poder al modo de gobierno presuponen la libertad de aquellos que se gobierna, por eso se ejercen intervenciones indirectas sobre las conductas, a través de la construcción de las condiciones de posibilidad de las mismas (medio ambiente) y también directas, en torno

²¹¹ En este sentido se encuentran las diferentes discusiones teóricas en torno a que, una vez instalado el problema de la pobreza y su gobierno, sobre todo por el BM., se trata de fijar la mirada en “los pobres”, y no sobre las causas del empobrecimiento en clave de “dinamismos sociales” (Merklen, 2005). Así las responsabilidades recaen sobre comportamientos individuales y no sobre procesos sociales, económicos y políticos específicos.

²¹² Cabe decir que los entramados discursivos en torno del pobreza, ya sea en el análisis social realizado por los Organismos Internacionales, así como en el discurso mediático, en la opinión pública y el sentido común, conllevan al riesgo de solo realzar e identificar las consecuencias y no las condiciones de posibilidad específicas, en torno de las cuales a pobreza adviene realidad. Así, se pierde de vista el proceso de construcción, por lo cual se corre el riesgo de esencializar la cuestión y no analizarla en términos de relaciones sociales de poder y gobierno, en muchos casos creadoras de estados de dominación. Ahora bien, siguiendo a Murillo (2007), se trata de ligar la pobreza, más que a un “estado”, a la lógica misma de la producción capitalista y, agregaríamos, a las tecnologías liberales y neoliberales de gobierno.

²¹³ Según lo señalado por Procacci (1991), quien realiza un análisis de la economía política y social en Francia, lo social se constituye en una vinculación estrecha entre lo económico y lo moral, es en ese “entre” en el cual se ponen en marcha mecanismos diversos de intervención y gestión, que contemplan las correcciones de hábitos, la inculcación de modos y modales, las falacias, entre otros; lo cual implica, menos el problema de la desigualdad que el problema de la diferencia.

de las prácticas de los sujetos, del “*ethos*”; mientras que se configuran prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos.

Así se comienza a intervenir en torno, no sólo del medio ambiente, sino que se ejerce también, siguiendo a Presta (2011) una “colonización ética de los afectos”, que hace a una constitución interventora de subjetividades a partir de ciertos mecanismos y lógicas que no solo advienen productoras de “libertades autogestivas”, también colonizadoras de los deseos y los modos de estar siendo en el mundo y con otros. Mientras que observamos cómo, en los mismos suelos y en simultáneo, se ejercen prácticas de des-sujeción y re-subjetivación crítica, entre prácticas de resistencias, luchas y negación de lo dispuesto.

II

El gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, en la Argentina de los 90': La políticas sociales y el Discurso de Desarrollo con rostro Humano

En el presente apartado analizamos cómo el gobierno de la pobreza, en torno del Discurso de Desarrollo con rostro Humano, acorde a las racionalidades políticas de perfil predominantemente neoliberal se instaura en la década de los 90', en Argentina y el Salta. En éste período, ante todo, se responde a las lógicas y prácticas de gobierno dispuestas por los Organismos Internacionales y Multilaterales de Crédito e Intervención, a partir de lo cual las políticas sociales y locales, comienzan a tornarse “descentralizadas, focalizadas y asistenciales”. Se reduce la inversión social, en torno de las poblaciones pobres y se dirige a las “más pobres de entre los pobres”.

De este modo, la pobreza no solo se sostiene y reproduce, sino que se acrecienta, tras lo cual se torna un “problema - problematizado de ciertos modos - a atacar, paliar, controlar y ocultar. Las políticas sociales y las políticas sociales de empleo dirigidas a los trabajadores advenidos pobres, comienzan a cobrar relevancia, cuando los efectos de las prácticas de gobierno señaladas en el capítulo 1, entre ellos el brutal aumento de la desocupación, se manifiestan bruscamente²¹⁴.

En el marco de éstas prácticas políticas y lógicas de gobierno comienzan a ejecutarse diferentes Planes, Programas y Proyectos de intervención para paliar, controlar y “equilibrar las fallas del mercado” en torno de los territorios y poblaciones pobres. Así, se diseñan y ponen en marcha mecanismos de focalización y asistencia para la lucha contra la pobreza, con la impronta de las necesidades básicas y la participación de la sociedad civil.

²¹⁴ A partir de las prácticas antedichas, se alcanzan índices de desocupación nunca vistos, la misma ya había tenido un pico de alce en 1995 con la crisis del Tequila mexicana alcanzando el 28,4%, y un segundo pico durante la crisis económico-institucional del 2000-2001 con un 21,4% de la población desocupada. La indigencia en la región Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja), alcanzó el 35,4%; Mientras que en abril del 2003, según datos del INDEC, la incidencia de pobreza en el total de aglomerados urbanos ascendía al 42,6% de hogares y al 28% de hogares respectivamente, lo que se traducía en una incidencia del 26,3% de personas indigentes y el 55% de personas pobres. Esto es, la mitad de la población. Así, mientras la pobreza aumento un 78% entre 1993 y 2003, el Gasto Social Focalizado (GSF) experimentó solo un incremento 24%, también el gasto social comunitario caía, lo cual pone de manifiesto el crecimiento de la pobreza por las medidas de ajuste, la descentralización, privatización, terciarización laboral. Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas -INDEC y consultoría CEPAL. Naciones Unidas. Serie Políticas Sociales. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años noventa. Vinocour. P. y Halperín. L. 2004. Stgo. De Chile...op...cit.

En tal sentido, en un análisis que reconoce continuidad con lo realizado por Giavedoni, (2012^a) y lo propuesto por Murillo (2008), el ejercicio analítico y práctico del presente capítulo supone que el gobierno de la pobreza expresa un conjunto de racionalidades y tecnologías, que se construyen y dirigen hacia ciertos sectores de la población constituyéndolos como pobres y reproduciéndolos como tales. Su carácter estratégico se encuentra en que los programas específicos, que analizaremos a continuación, en términos educativos, de salud, alimenticios y de trabajo, reproducen marginal, informal y paliativamente la cuestión de la pobreza en el mismo tiempo en que pretenden aliviarla. Por ende, más que combatir la pobreza, se la administra, se la torna “problema calculable” en torno de un conjunto de programas para pobres.

Observaremos cómo este ejercicio de gobierno se singulariza y diferencia, en un estratégico y heterogéneo juego entre continuas discontinuidades, en Argentina y Salta de los 90’ y, en el capítulo 4 desde 2003 y 2007 hasta el 2013.

1. Dispositivos de gobierno, intervención y gestión de las poblaciones pobres (1980-2002): una aproximación a las políticas sociales “para” pobres.

Entre los primeros antecedentes argentinos en referencia a las tecnologías de diagnóstico focalizado encontramos el “*Informe sobre la Pobreza en Argentina*” publicado en 1984²¹⁵, que definió el Índice Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)²¹⁶, dispositivo que

²¹⁵ Una breve referencia genealógica, siguiendo a Grondona (2012), en torno de la “medición de la pobreza como problema teórico y técnico”, nos indica que la misma nació con los estudios sobre línea de pobreza y canastas básicas de Benjamín Seebom Rowntree en 1901, en la ciudad de York. Esta canasta fue definida en principio en términos exclusivamente eficientistas, reuniendo los elementos necesarios y suficientes para garantizar la mera subsistencia. Se trataba de una canasta normativa, en tanto partía de determinar a priori las necesidades de los trabajadores. Peter Townsend en 1954 marcaría la necesidad de incluir observaciones de los comportamientos realmente existentes de las distintas familias y, analizando los del 25% de hogares más pobres dentro de los que satisficieran sus necesidades, re-determinar los valores de la canasta básica. Por su parte, en los Estados Unidos en 1965 Molly Orshansky propondría una metodología de conformación de la canasta normativa para medir los niveles de indigencia, que debía multiplicarse por el inverso del coeficiente de Engel para obtener la canasta de pobreza. En el caso de la Argentina, hubo una primera recepción de alguno de estos debates en términos de —consumo obrero. Las primeras mediciones específicas del costo de la vida obrera fueron realizadas por Alejandro Bunge como responsable estadístico del Departamento Nacional del Trabajo. En 1919 la Revista de Economía Argentina, dirigida por el propio Bunge, publicaba un artículo en el que se calculaba la variación del costo de vida obrero entre 1910 y 1918. Ahora bien, entre 1971 y 1980 CEPAL y PNUD realizarían una serie de estudios clave sobre pobreza en el marco del Proyecto interinstitucional de pobreza crítica en América Latina. En el caso de la Argentina, se utilizaron los datos de la citada Encuesta de Empleo y Desempleo del INDEC de 1970, que había incluido preguntas sobre ingresos. A partir de ellos, se estimó una Línea de Pobreza (LP) específica, valorizada a los precios corrientes (Minujín y Orsatti 1988). Otros estudios desarrollados por aquellos años fueron el del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre subalimentación (1973), el estudio sobre población marginal llevado adelante por Francisco de Imaz en el Centro de Investigaciones Sociológicas de la UCA en 1974 y la encuesta de consumo de hogares desarrollada por Gas del Estado (1972). Este listado, seguramente incompleto, configura parte de las memorias del discurso experto sobre la pobreza en la Argentina. Ver: Grondona, 2012: 307-308.

²¹⁶ La estrategia discursiva en referencia a la cuestión sociales desplegada desde los 70’ por las grandes potencias, ante todo EE.UU., y materializada en los Organismos Multilaterales de Crédito, reduce la acción del Estado a la

permitió identificar a las futuras “poblaciones objetivo” y realizar el primer mapeo, en todo el país, de los que comenzaron a llamarse “pobres estructurales” (Álvarez Leguizamón, 2006: 93)

Dicho trabajo fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) reprocesando las cifras del Censo Nacional 1980 y permitió configurar el primer “Mapa de la pobreza en Argentina”. Desde entonces, la pobreza ingresó a la llamada “agenda estatal” bajo el nombre técnico de NBI y, el Estado comenzó a programar un conjunto de medidas dirigidas a “combatir” el problema de la pobreza, indicando que: *“Se considera pobre a quien no obtiene o no puede procurarse recursos suficientes para llevar una vida mínimamente decorosa, de acuerdo con los estándares implícitos en el estilo de vida predominante en la sociedad a la que pertenece”* (INDEC, 1984: 9). Mientras que en la referencia a los indicadores se hace referencia a la cuestión del “derecho” en tanto: *“...su satisfacción surge como imperativo del reconocimiento universal de los derechos humanos”* (INDEC, 1984: 10). Así, en la yuxtaposición estratégica de las tramas discursivas de los derechos –humanos- y su operacionalización de y a partir de mínimos vitales -mínimamente decorosos- se construye la pobreza como problema, es decir la pobreza, como dispositivo, es problematizada y con ello fabricado todo un conjunto de mecanismos de gestión, intervención y control de las poblaciones pobres.

En este diagrama de poder y gobierno, en 1987, se ponía en marcha el proyecto de *Investigación sobre la Pobreza en Argentina* (IPA), que a diferencia del mapa de 1984 iba a procesar datos a partir del método de medición de la línea de pobreza. Los análisis del IPA no solo analizaron la pobreza urbana en torno de la línea de pobreza según ingresos, también buscaron herramientas de articulación metodológica con las mediciones por NBI. Un instrumento clave en este ejercicio sería la construcción de “tipologías”:

En un principio, se distinguía entre los -pobres estructurales- (pobres NBI) y los -pauperizados- (o pobres por ingreso, LP). Estos serían los primeros elementos de un diagnóstico que enfatizaría cada vez más la -heterogeneidad-, cuando no la -multidimensionalidad de la pobreza. La articulación de ambos criterios (NBI-LP) generaría novedades conceptuales y metodológicas. En lo que hace a estas últimas, surgirían propuestas del estilo de la de Julio Boltvinik (1992) de diseñar métodos integrados de medición 420, que debían ser (y en alguna medida fueron) impulsados por organismos internacionales (CEPAL y PNUD) para lograr mediciones nacionales commensurables. (Grondona, 2012: 312)

atención de las NBI, categoría central en el discurso de desarrollo humano, cuyas bases teóricas se encuentran en Hayek y Friedman (Campana, 2012). La invención del concepto de Necesidades básicas data de 1973 y fue difundida por el ya señalado McNamara, entonces presidente del BM: frente al crecimiento de la pobreza, comienza a ponerse el acento no en los ingresos, sino en los factores sociales y culturales que la producen Ver: Murillo, 2008...op...cit.

Entre las conclusiones más relevantes de dicho estudio se señala que la pobreza, entre 1974 y 1987, no había aumentado solo en términos absolutos, sino que había cambiado de perfil, habiendo pasado de una pobreza fuertemente estructural (NBI) a una pobreza por ingresos, en relación a personas y a hogares.

Por tanto, dicha transformación no se trataría sólo de un desplazamiento semántico, ya que los diferentes modos de enunciación, así como de categorización y clasificación en torno de la problemática de la pobreza y los pobres, remiten a maneras específicas de comprender y construir las relaciones sociales y de poder/gobierno, en torno de estas poblaciones. Este giro programático y político se produce en el marco de un proceso de transacciones y conformaciones de políticas públicas de lucha contra la pobreza, como ya fue explicitado, con la creciente intervención de los Organismos multilaterales de crédito e intervención. En tal diagrama de poder geopolítico mundial y continental el advenir pobres de los que antes eran trabajadores comporta una redefinición de los problemas sociales y, por ende, de los dispositivos de intervención creados para “gobernarlos” de ciertos modos.²¹⁷

En tal sentido, en el contexto de mediados de los ochenta, los dispositivos que operaban para la deducción del comportamiento de las poblaciones eran puestos al servicio de una acción, “que se limitaba a los márgenes” (Grondona, 2012: 316). La “lucha contra la pobreza, su combate”, ya no se ponía en juego en el campo común de “la nación” (su economía, su desarrollo, su gobierno económico), sino que advendría una guerra permanente en sus márgenes, adyacentes, marcada por la excepcionalidad, en gran medida.

Por tanto, en el marco de la regresión de la condición salarial protegida, se consolidaban los “programas focalizados dirigidos a los “más débiles, carentes y riesgosos”, lo cual ponía en jaque la ciudadanía social, en su mayoría sustituida por una modalidad específica de “ayuda asistencial”:

Si el modelo populista-desarrollista diagnosticaba un dualismo estructural que le era ajeno y que se proponía superar, el nuevo modelo de acumulación es dual en su concepción. Si aquella propuesta ocultaba la desigualdad estructural, en su discurso legitimador (...), arraigaba -al mismo tiempo- la igualdad como positividad y como potencialidad. El modelo neoliberal construye su legitimidad sobre el develamiento y, a nivel de las políticas

²¹⁷ El advenir de los trabajadores en pobres, como veremos, tras el aumento de las tasas de desempleo en los 90´ y de la pobreza, alteró y modificó la considerada “estructura social”, ya sea porque la pobreza creció, así como por la concentración creciente de la riqueza. Para ampliar, ver: Repetto, 2001: 176-184.

sociales, la estrategia de –focalización - es la expresión genuina del reconocimiento de la potencial existencia de grupos excluidos. (Grassi, Hintze y Neufeld 1994: 20)

En este diagrama de poder/gobierno y verdad, a los pocos días de asumir Alfonsín (1983) como presidente de la nación, envía al Congreso la propuesta del Programa Alimentario Nacional (PAN) destinado a: “...enfrentar la crítica situación de pobreza extrema” (Ley N° 23056/1983, art. 1), a través del fomento de: “...la solidaridad social, la donación de bienes y el servicio del trabajo voluntario mediante la participación comunitaria y la difusión de los objetivos y contenidos del programa” (art.5), como se observa las nominaciones del programa se referían a “poblaciones vulnerables y pobreza extrema” puesta en juego en las tramas relacionales de solidaridad comunitaria – local - y participativa.

En 1989 el PAN fue remplazado por el *Bono Nacional Solidario de Emergencia*, que recayó sobre la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social (creado en 1983 por ley 23023) dicho bono se destinó a superar la situación de emergencia social aunando esfuerzos privados y públicos a partir de lo cual se abre una cuenta en el Bco. Nación para recibir donaciones, cuyo primer donante fue el presidente Menem (Diario Página 12, 10/08/1989)

En igual tónica en 1992 se creó el *Programa Federal de Solidaridad* (PROSOL) dirigido desde un enfoque integral al equilibrio entre asistencialismo y promoción, fortaleciendo las organizaciones de base y la focalización agregada (Repetto, 2001). También en esta época entró en escena el *Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales* (PRONATASS) bajo la asistencia técnica del PNUD y créditos del BM, dirigidos a cumplir funciones de evaluación, diagnóstico, capacitación y asistencia técnica para el diseño e implementación de políticas sociales²¹⁸.

En 1989, se derogaron las leyes de creación del PAN y del *Bonos Solidario*, lugar ocupado por el *Programa de Políticas Sociales Comunitaria* (POSOCO), que preveía además de una modalidad de prestación directa para la atención de necesidades alimentarias, sanitarias y asistenciales, subsidios para cubrir necesidades habitacionales y/o locativas de los sectores sociales definidos como “carenciados”. Dicho programa se apoyó en las lógicas dirigidas a construir “políticas compensatorias” para eliminar los

²¹⁸ Uno de sus principales productos fue el Diagnóstico sobre Gasto Público Social, en torno del cual se identificaron cinco problemas: ineficiencia del GPS por excesiva centralización administrativa y falta de transparencia; ausencia de planificación social; inequidad, por ausencia de focalización; baja calidad de los servicios sociales, por falta de actualización y capacitación de los recursos humanos y los sistemas de evaluación y monitoreos y desinversión social (Grassi, 2003a: 247).

desequilibrios sociales producidos en el marco en las políticas de estabilización económica (Grassi, 2003a y 2003b).

En 1991 por decreto N°667/91, se redefinió la estructura del MSyAS creando la Secretaría de Desarrollo de la Persona, encargada de las intervenciones ante las “emergencias sociales”. Se explicitaba la “revitalización del conjunto social” mediante un “progresivo traspaso de las responsabilidades del Estado hacia la comunidad, conforme al principio de subsidiariedad” (Álvarez Leguizamón, 2006: 100). En 1993 bajo decreto N° 783-93, se reemplaza la Secretaría de Desarrollo de la Persona por la de Acción Social y de Promoción del Desarrollo Social, en tal diagrama se lanza el *Plan Social* basado en los diagnósticos del PRONATASS que definía grupos de riesgo prioritarios y fijaba ejes sobre los cuales se lanzaría una serie de programas sociales estratégicos cogestionados por la provincias y la nación, diseñados por el Estado nacional y los organismos multilaterales de crédito (Campana, 2012). Dicho plan, en sus entramados enunciativos estratégicos, vinculaba la pobreza, dependencia y carencia de trabajo como un supuesto implícito de los merecimientos de las acciones de promoción social que en adelante, deberían acompañar la asistencia ya fuera vía la participación de los/as beneficiarios/as en el sostenimiento y continuidad de los proyectos sociales o vía microemprendimientos productivos (Grassi, 2003a: 249; en: Campana, 2012: 128).

A un año del primer Plan Social, en enero de 1994 se creó una nueva estructura de asistencia y promoción social en la órbita del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social. Con esta creación, siguiendo a Grassi (2003b), la política de asistencia se puso en la línea que marcaba el Ministerio de Economía, “como respuesta innovadora que reformulaba los tradicionales modelos de intervención” y que, responde al “agravamiento de la situación social”, traducido en un “fuerte incremento de la demanda de políticas y programas sociales compensatorios” a fin de que se “naturalicen los desajustes iniciales de la política de reconversión y se atiendan sus efectos sociales” (Álvarez Leguizamón, 2006: 102). De hecho el primer secretario de Desarrollo social refería a la responsabilidad de Estado dirigida a los sectores más sugestivos, los sectores de la pobreza, responsabilidad esta a la cual denomina de subsidiaria, que debe agenciarse en espacios de intervención ágiles, eficaces, dotados de técnica y gerencialidad (Repetto, 2001:192).

En 1995 se presentó *el segundo Plan Social*, con el título de “Políticas de promoción y solidaridad con los más necesitados”, dicho plan desacreditaba:

...los vicios de una política social voluntarista (o clientelística) y proponía que la política social sea eficaz y eficiente y sirva para reforzar la organización social con un enfoque que, además de integrado, debe ser a largo plazo, en tanto que entiende a la pobreza no solo como carencias materiales, sino también como pérdida de autoestima y de valores lo que suele transmitirse entre generaciones y requiere más de una generación para ser recuperada. (Plan Social, 1995: 11; en Grassi, 2003a: 251)

Dicho plan también sugería una activa integración e interacción con las organizaciones sociales y de la sociedad, así como definía los criterios que debían seguirse en la ejecución de las políticas sociales del Estado: focalización integralidad, sustentabilidad, metas y control, fortalecimiento de la comunidad. Resuenan en estos diagramas programáticos de gobierno los saberes y técnicas sugeridos en torno de las habilidades, capitales y potencialidades de las poblaciones pobres, en tanto sujetos “capaces” de salir de dicha situación, con el mínimo apoyo de una inversión inicial en el despliegue de sus activos naturales y adquiridos.

Paralelamente a la gestión eficaz y subsidiaria de las poblaciones pobres, se propusieron diversas tecnologías de intervención dirigidas a mejorar los elementos técnicos de diseño, mapeo de poblaciones, objetivos y monitoreos de programas, en un ejercicio particular del gobierno biopolítico de las poblaciones. Para ello, con financiamiento del BM se creó el *Sistema de Información, Monitoreo y Evolución de Programas Sociales* (SIEMPRO) que produjo información sistematizada y agregada a nivel nacional, necesaria para el control, la información y la identificación de las poblaciones-objetivo. También se creó el *Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad* (CENOC) dirigido a desarrollar el registro de las organizaciones comunitarias que participarían de la co-ejecución de la política asistencia, colaborando en lo tendiente a la descentralización administrativa y la participación social (Campana, 2012: 130). En 1996 se crea el *Consejo Federal de Desarrollo Social* (COFEDES) un organismo colegiado, de carácter deliberativo integrado por los máximos responsables de las áreas sociales de los gobiernos provinciales y la nación, con el objetivo de coordinar las acciones vinculadas con el desarrollo social²¹⁹.

²¹⁹ La Secretaría tenía más de veinte programas a cargo que sugerían en su misma enunciación los supuestos en torno de los cuales se inscribían, programaban y ejecutaban, entre algunos: el Programa de Promoción de Desarrollo Local, Acciones de la Dirección de Emergencias Sociales, Fondo Participativo de Inversión Social Programa de Atención a Grupos Prioritarios, Programa de Atención a Grupos Vulnerables, Programa de Atención a menores en circunstancias Especialmente Difíciles, Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Ayuda Social a Personas (Repetto, 2001: 201). También fueron relevantes, en esta época, los programas dirigidos a las poblaciones “pobres” rurales, sub-urbanas, entre ellos el Programas Social Agropecuario (PSA) y el Proyecto Integrado Promoción de la Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA), PSA, en el marco institucional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de desarrollo social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Estos mecanismos y dispositivos de intervención y control, medición y previsión generaron diferentes padrones de beneficiarios, mientras se descentralizaban las políticas de gestión y propagaba el “punterío” político, haciendo de las prácticas de intervención paliativos temporales.

Finalizado el gobierno instalado en 1989, la propuesta social de la Alianza (1999-2001) presentada en la *Carta a los Argentinos*, expresaba:

No existe un cambio viable hacia el desarrollo que pase por la exclusión de los ciudadanos, ni una política para el bienestar que ignore los obstáculos y desafíos técnicos. El programa de la Alianza aplicará políticas que integren el crecimiento de la economía y el desarrollo social. (IPA, 1998).

En este gobierno de Estado se instituye el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDSyMA) cuyas líneas programáticas eran: capacitación, empleo y desarrollo productivo, fortalecimiento institucional, integración social y desarrollo comunitario, vivienda e infraestructura social, subsidios al ingreso.²²⁰

En este período se presentaron algunas iniciativas tendientes a brindar ingresos a las poblaciones en situación de pobreza, tales como el *Plan de Erradicación de la Exclusión social “Solidaridad”*, el *Seguro de Inclusión Infantil*²²¹ y el *Plan Jefes de Hogar*²²², señalando, que ninguno de los planes cumplió los objetivos tal cual se los había proyectado.

En lo referente a los instrumentos de registro y control, se introdujo el Registro Único de Beneficiarios (RUB) con el propósito de controlar la asignación de recursos que realizaban los gobiernos provinciales, mejorar la equidad y la eficiencia del gasto y evitar la superposición de beneficiarios/as entre los programas nacionales y provinciales. Dicho

²²⁰ La Secretaría de Desarrollo Social venía ejecutando tres programas alimentarios: el Programa de Asistencia Infantil (PRANI, de 2 a 5 años); el Programa de Ayuda Solidaria a Mayores (ASOMA) y el Prohuerta. La estrategia del advenido Ministerio, fue unificar las intervenciones alimentarias en el Programa Unido, a la vez que monitorear el POSOCO y el Programa Social Nutricional (PROSONU) con un esquema llamado Sistema Alimentario Federal. Sin embargo, lo antedicho quedó en la mera intención, ya que no se logró uniformar un sistema de distribución de las prestaciones alimentarias de los recursos federales de coparticipación. Ver: Campana, 2012: 131.

²²¹ El primero de estos planes otorgaba un subsidio mensual de \$150 y una prestación alimentaria a las familias indigentes con hijos menores de 14 años, con el compromiso de realizar controles sanitarios y respetar la obligatoriedad escolar. Apenas llegó a cumplir la etapa piloto en pequeñas ciudades, llegando a 18.000 hogares, cuando su meta eran 450.000. El segundo otorgaba una asignación monetaria a los hogares pobres con menores de 18 años y escolarización para sus madres que no se aplicó.

²²² A partir de la reformulación del programa de Atención a Grupos Vulnerables, financiado por el BID, que entregaba un subsidio de \$150 –mensuales a jefes de hogar sin empleo con hijos menores de 14 años- y, como contraprestación solicitaba completar sus estudios primarios y/o secundarios. Solo se implementó en cinco grandes ciudades y no tuvo recursos para transformarse en una alternativa sustentable. Luego, se reformulará en el plan Jefes y Jefas de hogar Desocupados, que será desarrollado en el siguiente apartado.

registro respondía, también a ciertas obligaciones asumidas por la nación para con el BID y el BM por un paquete de ayuda financiera

Una de las incitativas a relevar en este período de gobierno en la Argentina contemporánea es, en el ámbito de las políticas sociales, el Decreto 1382/2001 que puso en marcha el *Sistema de Protección Familiar* (SIPROF) en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Gamallo (2003) lo destaca entre el resto de las medidas a raíz de que modificaba el acceso y la modalidad de las prestaciones de protección social: incorporaba al régimen de asignaciones familiares a los menores de 14 años provenientes de hogares con trabajadores informales y sin empleo, mas los de trabajadores formales con ingresos inferiores a \$1000-mensuales; integra el plan de becas estudiantiles y aseguraba a los mayores de 65 años un beneficio de \$1000 mensuales; independientemente de los aportes y contribuciones. Dicha medida introducía la novedad de un sistema de ingreso social incondicional para el primer y el tercer colectivo y condiciones para los adolescentes. Ahora bien, como la mayoría de los proyectos y programas elaborados y propuestos, “jamás se efectivizó”.

El Plan *Jefes y Jefas de Hogar Desocupados* (PJHD), como veremos, fue creado al calor de la crisis del 2001 constituyó el programa de perfil asistencial de mayor envergadura destinado a poblaciones pobres y desempleadas-desocupadas. El mismo será desplegado y analizado en el siguiente apartado.

En estas épocas y acorde a las condiciones históricas de posibilidad y realidad, entonces, la política social de perfil asistencial se orientó a la creación de una red mínima de intervenciones estratégicas sobre los individuos, grupos y/o poblaciones percibidas como “de riesgo”. En tal sentido y en clave de Desarrollo Humano se multiplicaron, por lo menos en proyección e intención, los diseños de programas sociales con objetivos, plazos y financiamiento limitados, con transferencias fuertes y claras hacia sectores “no estatales”, en la gestión de las intervenciones sociales del Estado.

Por tanto, en un intento por desplazarnos de las discusiones en torno de los debates sobre el campo externo dirigido a la medición y las lecturas de indicadores específicos en torno de la pobreza, lo interesante es analizar cómo, desde el Mapa de la pobreza, allá por 1984, las yuxtaposiciones de dimensiones político-analíticas transforman la retórica de los derechos en una operacionalización de mínimos vitales (Álvarez Leguizamón, 2008). Consideramos que dicha operación se daría en un entramado discursivo que pone a jugar aquellos “límites dispuesto al poder público”, desde el derecho en sus dos versiones,

según lo indicado por Foucault (2007), esto es, la construcción de “sujetos jurídicos-económicos” libres y autónomos (utilitarismo inglés), en torno y a partir del juego desigual y competitivo del mercado y, por otro, los sujetos jurídicos o *legalis*, que se constituyen en la imperante necesidad del “reconocimiento universal de los derechos” (liberalismo rousseauiano).

Por tanto, reinstalando lo antedicho en el plano analítico que atraviesa el trabajo de tesis, sostenemos que no habría un “falseamiento u ocultamiento” de los derechos, sino otros modos de construcción, legitimación y puesta en práctica, diríamos, ya no en torno del Estado, sino del mercado (Grondona, 2012); como espacio de veridicción, la población – pobre - como blanco de intervención y el derecho de perfil utilitarista como modalidad práctica de poner límites - externos - al ejercicio frugal de gobierno de Estado.

Lo antedicho se sostiene en la consideración de que la perspectiva de gubernamentalidad gira en torno del pensamiento estratégico, el cual vincula heterogeneidades y no contradicciones. Pues no se trata de una “tensión dialéctica”, sino de: “...*una relación de fuerzas en las que las estrategia jurídicas entran en juego con las estrategias económicas*” (Foucault, 2007: 61-62). Por tanto, con el avance del liberalismo y luego del neoliberalismo, en clave de desarrollo humano, agregaríamos que el mercado se convirtió en el ámbito en el cual se definía la ciudadanía, según Castro Gómez: “...*el ciudadano ya no es más un asunto de derechos, sino un asunto de emprendimientos*” (2010: 146). Como veremos a lo largo del escrito, lo antedicho cobrará dimensiones analíticas y prácticas diferenciales, entre los diagramas de poder y gobierno de la Argentina de los 90’ y la del 2003/2007, respectivamente.

2- El gobierno de los pobres y desocupados: Las políticas sociales y los Programas de empleo “para” pobres, entre 1989 y 2002, el advenir del *Workfare*

A lo largo de la historia argentina, la relación entre pobreza, trabajo-empleo y desocupación-desempleo ha sido cambiante y no necesariamente entrelazada en conexión, al menos directa.

Respecto de la cuestión de “empleo y desempleo”, entre 1983 y 1989 en torno a diferentes debates presentados en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, se expresan dos aspectos relevantes que se instalaban en “la agenda pública”; en primer lugar la delimitación de ciertas poblaciones que eran tenidas por más vulnerables ante la crisis de ingresos y de empleo y, en segundo lugar las formas propuestas para intervenir

en el desempleo. En lo referido a las poblaciones a gobernar existía una preocupación singular respecto de los siguientes sub-grupos: a) los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo b) los desempleados con carga de familia c) las mujeres jefas de familia sin empleo, d) los desempleados mayores e) las mujeres embarazadas desocupadas f) los minusválidos g) los ex detenidos y h) los migrantes con dificultades de inserción en el mercado de trabajo (Grondona, 2012: 317). En dicho trabajo analítico se indica cómo el desempleo no se superponía, estrictamente, con el universo de la pobreza, por lo menos no estrictamente en todos los casos, siendo por ej., la juventud un sector de la población considerado relevante a la hora de intervenirlo, para evitar que la misma caiga en “el riesgoso campo del desempleo”. En el trazo de la reforma laboral y el advenir en “pobres de los trabajadores/as jefes/as de hogar”, ambas cuestiones comenzarían a vincularse de modos específicos.

Acerca de los modos de intervención debatidos en el ámbito parlamentario de la época:

...hubo dos lógicas para responder al agravamiento de la crisis económica y sus repercusiones en el empleo: una que respondía a la emergencia con medidas excepcionales y transitorias (al estilo de la Ley 22.572 de la dictadura) y otra que intentaba responder con reformas. Las respuestas del registro de la excepcionalidad estuvieron orientadas a - congelar - las condiciones del mercado de trabajo, en algunos casos, o a acompañarlas con medidas - paliativas -, en otros. (Grondona, 2012: 321).

En el caso del desempleo, de la mano con los diferentes mecanismos y procesos de construcción de conocimiento en torno de la pobreza, también se observaban disputas respecto de las direcciones que debían orientar la acción del Estado. En 1984 se ponía en marcha un subsidio focalizado a trabajadores con cargas familiares, el cual fue extendido poco después a toda la población desempleada. En 1986 este proceso de expansión de la población cubierta, se redefinía con la determinación de la condicionalidad del subsidio a la participación en programas de contraprestación.

Luego del retorno a la democracia entonces, se avizoraban lógicas de perfil neoliberal, en el trazo de programas de gobierno dirigidos a los pobres y desempleados, aunque su esplendor se logre a principio de los 90'. El gobierno de perfil claramente neoliberal se instaló en el marco de la crisis hiperinflacionaria de 1989 que abría diversos campos de experimentación posibles, así como re-configuraba el rol del Estado en una marcada “conversión” del Partido Justicialista, en base a los antecedentes indicados en el capítulo 1. De este modo se instala el “workfare”, como tecnología de gobierno dirigida a las poblaciones desocupadas y pobres. Dicho esquema se articula a partir de la ley N° 24.013

de 1991 bajo la figura de “programas de emergencia ocupacional”, los cuales retomaban las lógicas neoliberales de intervención en el desempleo, instalada en 1983 bajo la figura de “subsidios transitorios”

El *workfare* fue el nombre que recibió la reforma anglosajona del Estado de Bienestar y resulta del juego de palabras entre bienestar (*welfare*)²²³ y trabajo (*work*). Un programa *workfare* requiere que los “beneficiarios”, como contraprestaciones por la asistencia recibida, trabajen o se involucren en sistemas de entrenamiento, capacitación intermediación laboral (Peck, 2001)²²⁴, es decir, participen en programas de trabajo o de fomento de la improbabilidad individual. En esta línea se señala que tanto las leyes para pobres, como el *welfare* y el *wokfare* funcionan, no solo como instancias de moralización y gobierno de la población “fuera” del empleo, sino fundamentalmente como instituciones que inciden en la regulación del mercado de trabajo.

Además el workfarismo reeditaría, en sus tramos programáticos, la articulación entre economía política neoliberal e intervención moral que, según Dean (1999), caracterizó el pasaje del discurso de los pobres del mercantilismo al gobierno liberal de los pobres a fines del siglo XVIII²²⁵:

...en esta redición iba a producirse una resignificación, pues el workfare no creaba trabajo para desempleados, sino trabajadores para empleos que nadie quería, de los que cualquier obrero protegido por las instituciones keynesianas-fordistas hubiera huido (como la peste). (Grondona, 212: 432).

En este sentido, las reconfiguraciones de los criterios de elegibilidad, la duración de los beneficios y los vínculos reactualizados para con el mercado fueron construyendo cuerpos dóciles, flexibles y oscilantes, cuyas conductas se construían en torno de una “cercanía asintónica con el mercado de trabajo” (Peck, 2001:12).

²²³ El *welfare* había constituido derechos –sociales - y mecanismos de seguridad sobre la base del reconcomiendo de la responsabilidad del Estado frente a ciertas necesidades y riesgos sociales.

²²⁴ Siguiendo a Jaime Peck (2001) el *workfare* como una tendencia general de las reformas neoliberales del *welfare* tienen las siguientes características: Individualmente, está asociado a programas de participación obligatoria, orientado a la modificación del comportamiento, que contrastan con los programas *de welfare* basados en derechos; Organizacionalmente, involucra una orientación sistemática al trabajo y la inscripción de los beneficiarios en la población económicamente activa; Funcionalmente, privilegia las políticas activas de empleo, por sobre las de protección pasiva (del tipo del seguro o el retiro voluntario).

²²⁵ Para Dean (1991), las discusiones en torno a la separación de la población pobre trabajadora y la administración de la indigencia en torno del pauperismo de masas, sigue siendo posible desde el campo de la “economía moral” es decir, de una economía que aún no ha visto las abstracciones matemáticas ni ha echado por tierra la teoría del valor-trabajo. Dean no ve en esta discusión en torno del pauperismo la emergencia de “lo social”, sino tan solo una superficie para su emergencia. Desde su perspectiva, el nacimiento del discurso social debería fecharse a mediados del siglo XIX en Europa, momento en el que la preocupación dejaba de ser la separación entre dos tipos de población para su tratamiento diversificado y pasaba a ser el de la “degeneración de la población trabajadora”, el autor refiere a esta cuestión, en relación con el debate de fin de siglo sobre las condiciones de trabajo.

Esta tecnología de gobierno instalada en clave de Desarrollo Humano, fomentó y fortaleció la figura individual del “beneficiario”, mientras que sus dispositivos de intervención dirigidos a ejercer control individualizados de las conductas y los sujetos, orientaron las reformas de la protección social hacia una profunda descentralización, que hizo del ámbito de lo “local y comunitario” un espacio privilegiado de gobierno, así como las prácticas de “focalización” y “contraprestación”. Esto se completaba con sesgadas evaluaciones, monitoreos y diseños logrados mediante indicadores de perfil económico microconductuales, lo cual parecía conjurar una economía política que se consideraba y significaba como una ciencia cada vez más certera y un estudio clínico dirigido a prestar oídos y a estudiar cómo la singularidad individual de cada pobre se articulaba de un modo singular y equilibrado en los dispositivos del *workfare*.

En el caso Argentino²²⁶, las poblaciones objetivos del *workfare* eran los “trabajadores desempleados pobres” de un mercado de trabajo flexibilizado y en crisis. Aquí entra en juego la condición de “desocupado/desempleado”, la cual tiene en nuestros suelos un carácter tardío instado a partir del seguro de desempleo, lo cual implica pensar junto con Topalov (1994), que las instituciones de protección del desempleo resultan fundamentales para su producción como condición posible. En tanto la condición de pobre se superponía a la de desocupado, sin trabajo, lo cual a su vez quedaba en sus propias manos y/o la responsabilidad de su “propia fortuna y su sospechosa moral y cultura de vida”. Esto incluso, frente a diferentes indicadores masivos que mostraban el carácter “estructural y estructurante del problema”.

Este programa de gobierno comienza a delinearse entre las figuras y las conductas de los sujetos que comenzarán a nombrar como “empleables e inempleables, a partir de lo cual cabe preguntar: ¿qué pasa con el *workfare* cuando no hay *work*? (Grondona, 2012; Aguilar y Ves Losada, 1999). Surge aquí una cuestión central llamada de “contraprestación”, que no resulta ni de empleo, ni de desempleo, sino una relación de “correspondencia retributiva” mediante algún tipo de servicio, labor, trabajo comunitario,

²²⁶ En el continente latinoamericano hubo un diseño de políticas sociales para poblaciones desempleadas pionero del *workfare*, que iba a orientar la acumulación y el uso del saber experto en tal sentido. Se trata de las experiencias chilenas del Programa Mínimo de Empleo (PEM) y el Programa para Jefas y Jefes de Hogares (POJH). El primero fue lanzado en 1975 por el gobierno militar chileno, como modo de gobierno de los efectos de una ortodoxa lógica neoliberal de gobierno, cuyo efecto predominante fue el alto índice de desempleo. Ante el recrudecimiento del empleo, en torno del cual no se aplicaba el seguro, sino de modos temporarios y extraordinarios, pues se apuntaba a la construcción de sujetos activos y económicos y/o a su muerte necesaria, en 1982 se aplica el POJH más amplio y con participación masculina, los trabajadores de ambos programas realizan trabajos de mantenimiento de espacios y edificios públicos con mínima inversión en materiales. Ver: Grondona, 2012: 434-35.

entre otros, respecto de lo recibido al modo de ingreso - mínimo -, como “beneficio” para pobres.

En este espacio social de gobierno también resonarían otras racionalidades políticas que construirán la condición de pobre como vergonzante, lo cual era considerado a su vez como una de las posibles causas del desempleo. Así emergen las figuras del “pobre válido, del merecimiento, del no merecimiento”, en torno de diversos dispositivos y sentidos de gobierno e intervención de perfil moral y pastoral.

2.1 El problema del desempleo: empleabilidad e inempleabilidad

En esta línea de análisis es menester adentrarnos en ciertos senderos de aproximación a las cuestiones del “desempleo, la empleabilidad y la inempleabilidad”, en el ejercicio de gobierno de las poblaciones pobres y desocupadas. En tanto, resultan ejes transversales de saber y poder.

El desempleo se constituyó como una “condición” hacia finales del siglo XIX, en tanto tal, podría tratarse de una condición pasajera (por movimientos cíclicos, crisis repentinas o variaciones estacionales) o de una condición permanente debida a factores personales (de un residuo de inempleables). En tal sentido, Dean (1991) entiende que el *desempleo* y el *subempleo* comenzaron a ser objeto de interés en tanto pusieron en riesgo el hogar idealmente autogobernado por el varón de familia, cuyo salario debía reproducir la propia vida y la de sus dependientes. De hecho, la cuestión remitía más que al gobierno del desempleo, “al gobierno del empleo”, ya que, en un capitalismo en expansión, el problema era la constitución y normalización de la relación salarial, antes que el gobierno de los márgenes.

En el caso de los “inempleables” los modos de administración no variarían demasiado con relación a los de las leyes de pobres, en lo que hacía a los “desempleados temporarios” (los genuinamente desempleados) de lo que se trataba era de procurar un tránsito “poco traumático” hacia la nueva condición de empleo, evitando el proceso de degeneración, antes que de gobernarlos. Por tanto, el problema del gobierno de una población desempleada (deberíamos agregar “estructural”), es un problema contemporáneo (Grondona, 2009, 15-16). De hecho, los términos empleable e inempleable utilizados por los programas de gobiernos nacionales y provinciales desde los 90’ y, con cierta radicalidad desde el 2004, provienen de diversas resoluciones programáticas instaladas, ante todo, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien identificamos que para el año 1984 las recomendaciones de la OIT²²⁷ se dirigían a promover la búsqueda del pleno empleo, como forma de garantizar el derecho al trabajo, también observamos cómo comienzan a esbozarse indicios del desempleo, como un problema a gobernar. Esto se visualiza, por ejemplo: en la Recomendación 169²²⁸, en la cual se explicita la necesidad de:

...adoptar políticas y tomar medidas que (...) faciliten la adaptación al cambio estructural a nivel global, sectorial y de la empresa, y el reempleo de los trabajadores que hayan perdido sus empleos como consecuencia del cambio estructural y tecnológico; [...] la reorganización y reducción del tiempo de trabajo; [...] y la protección de grupos particulares. (Puntos 9 al 11).

Se instala, entonces, la necesidad de “atender e intervenir” en torno a aquellos sectores más perjudicados, tal es el caso de las poblaciones indígenas, como consecuencia de las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo y del avance feroz del neoliberalismo incipiente. En tal sentido, emerge la proposición de “políticas sociales de empleo”. Es recién a partir del Consenso de Washington (1989) que comienza a pensarse el problema de la empleabilidad, debido a la profundización de la crisis capitalista-neoliberal y sus consecuencias sociales y de empleo.

De hecho, en 1998 la OIT publicó en el Boletín del Centro Interamericano para la Formación (CINTERFOR) un documento titulado “La formación al servicio de la empleabilidad²²⁹”. Allí se plantea que:

...en la búsqueda de la armonización del progreso económico y el progreso social” la empleabilidad y las políticas de generación de empleabilidad de los trabajadores, es un factor determinante, tanto de la competitividad y rentabilidad de las empresas como de la seguridad de empleo, el progreso personal y profesional, el reconocimiento social y la remuneración de los trabajadores. (1998: 7).

²²⁷ Las recomendaciones de la OIT tenían “el objeto de estimular [...] una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido”. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (N° 122). Adoptado el 9 de julio de 1964 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima octava reunión. Entrada en vigor: 15 de julio de 1966, de conformidad con el artículo 5.

²²⁸ Recomendación 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1984 en su septuagésima reunión.

²²⁹ El Documento, remite a cómo la situación del empleo es verdaderamente sombría en el mundo entero. Según el informe de la OIT titulado “El empleo en el mundo”, 1996, el desempleo viene aumentando desde 1973 en la mayoría de los países industrializados, y desde 1990 ha habido una brusca erupción del desempleo en masa en las economías que eran antes de planificación centralizada y emprendieron el camino que lleva a la economía de mercado (1998: 9) Este documento, inicialmente preparado por la Jefa del Servicio de Políticas y Sistemas de Formación del Departamento de Empleo y Formación de la OIT, para ser presentado ante el Foro Empresarial 96, contó con la colaboración de Ayse G. Mitchell. Por considerársele de interés en relación con el tema de las alianzas estratégicas para la formación fue presentado como documento de referencia para el seminario realizado en el transcurso de la XXXIII Reunión de la Comisión Técnica de Cinterfor.

Este documento y posteriormente la recomendación 195 de la OIT²³⁰, definen la empleabilidad como un atributo que brinda mayores oportunidades y capacidades: “...de engendrar los tipos de competencia y de calificación que permitan a la gente encontrar, crear, conservar, enriquecer su puesto de trabajo, y pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional” (CINTERFOR, 1998)²³¹. El término “empleabilidad” se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un “trabajo decente”²³², progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo (Scarfó; Hopp, Highton 2009: 12).

A su vez, la programática de gobierno que permita alcanzar ciertos niveles de “empleabilidad”, según el Documento trabajado, implica una relación entre Estado, empresas y sociedad civil (en sus diferentes modalidades de organización), remarcando que son las empresas los espacios de articulación para la generación de empleabilidad y el sustento del empleo - calificado -, lo cual dará pie a lo que en la actualidad más cercana - en auge - se conoce como “responsabilidad social empresaria”²³³:

Para que las empresas puedan florecer y asumir progresivamente una proporción mayor de la responsabilidad social, es necesario que el Estado ofrezca un entorno propicio, así como los incentivos y un apoyo que les permita invertir en capital humano, sin contentarse con satisfacer sus necesidades inmediatas. Al mismo tiempo, todos los sectores de la sociedad deben asimilar y apreciar el valor de la competencia, el orgullo de aprender y la audacia de que dan muestras las empresas al abrir nuevas sendas. (OIT, 1998: 17)

En este diagrama de poder y gobierno en torno del desempleo, se inserta el concepto de *inempleabilidad*, que aparece como resultado del desempleo de larga duración. En los extremos de la exclusión por vulnerabilidad, ante todo, se producen estas poblaciones advenidas “inempleables” como ese “otro” riesgoso, cuya capacidad de insertarse en el mercado de trabajo pareciera serle intrínseca en un proceso candente de inversión en

²³⁰ Recomendación 195, OIT, Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 1º de junio de 2004.

²³¹ El concepto de formabilidad corre parejo con el de empleabilidad e implica una sólida base de conocimientos, que permitan acrecentar progresivamente las calificaciones del personal mediante una formación ulterior. Las empresas, como agentes activos en dicho proceso de empleabilidad, tienen responsabilidad, según el valor que atribuyen a sus recursos humanos. La empleabilidad supone que el “desempleo es transitorio” que puede atravesar el tránsito de la vida laboral de las poblaciones, que en torno a la empleabilidad puede permitir encontrar el primer empleo o reinsertarse en el mercado de trabajo, así como posibilitar una movilidad en las empresas que responsablemente accedan a ejercitar las prácticas de capacitación y formalidad laboral, según lo sugerido. Ver: OIT, 1998: 9-12.

²³² La cuestión del “trabajo decente” será trabajada en profundidad en el capítulo 4.

²³³ La Responsabilidad Social Empresaria será analizada, detenidamente, en el apartado II del capítulo 4.

capitales - humanos y sociales - y de mecanismos diversos de asistencia. Cuando, en realidad, la inserción o no depende de condiciones impuestas por el mercado de empleo, es decir reglada, ordenada y controlada por el capital y las lógicas de intervención en tal sentido.

En la Argentina de los 90', de hecho, el crecimiento económico sostenido, expresado en las altas tasas de aumento del Producto Bruto Interno (PBI), no estuvo acompañado del aumento de la ocupación. Por el contrario, se produjo un deterioro sistemático del mercado laboral con el consiguiente crecimiento del desempleo. A partir de 1993 hasta 1996 la desocupación tomó un impulso de crecimiento más fuerte y esto se debió tanto a la presión de la oferta que envió más miembros del hogar al mercado, como a la pérdida neta de puestos de trabajo asociada con la insuficiente capacidad de generación de empleos de la economía. Las transformaciones del mundo del trabajo y de las formas de protección social del Estado, generaron tanto una profundización de la pobreza estructural como la aparición de los llamados “nuevos pobres”, integrantes de la clase media empobrecidos, que a partir de situaciones de desempleo o de deterioro de las condiciones laborales no alcanzaron a cubrir sus necesidades básicas a través de los ingresos (Minujin y Kessler, 1995).

En dicha línea de análisis, el trabajo de Scarfó, Hopp, Highton (2009) recupera algunas afirmaciones de Ernesto Kritz, (en ese momento director-socio de la División de Estudios Laborales de Mora y Araujo y Asociados), quien en una nota del Diario *Clarín* del 11 de mayo de 1997, planteaba que los jóvenes sin educación son virtuales inempleables: “En los partidos del conurbano bonaerense hay 80 mil jóvenes de 15 a 24 años, en su mayoría varones, que no estudian ni trabajan ni están buscando trabajo. De ellos, 66 mil aún no han cumplido 20 años”. Estos jóvenes que no estudian, ni trabajan y tampoco pueden ser sostenidos por sus familias, “constituyen el núcleo duro de la marginalidad urbana”. Para Kritz, los jóvenes en esta situación son considerados peligrosos, ya que “proveen una base social para la violencia, que se expresa en criminalidad”, por ejemplo, en la formación de pandillas o el vandalismo (2009: 10).

Dichos tramos enunciativos dan cuenta de la relación antes señalada entre empleabilidad e inversión en capital humano para la producción de sujetos activos y responsables de su propia existencia, en un tejido societal/vincular en torno del cual las empresas resultan el eje transversal para ejecutar la inversión y reconversión de estos sujetos en empleables: *“Las inversiones basadas en el saber tienen hoy la misma prioridad que las de capital*

material. El desarrollo del capital humano es, pues, el reto crítico para el siglo XXI y tiempos venideros” (OIT: 1998:17).

Por su parte, aquellos sectores de las poblaciones pobres y desocupadas, que por sus condiciones de “extrema vulnerabilidad” resultan inempleables, se consideran altamente riesgosas, peligrosas y desestabilizadoras, a partir del cual se ponen en juego un arsenal de mecanismos de gobierno moral - asistencial y de control – local, comunitario y policial- en torno de las mismas.

Observamos cómo se entrecruzan, en estos discursos dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas, lógicas diversas y diferenciales dirigidas a, por un lado, promover la competitividad en torno a la lógica de la competencia desigual del mercado, a partir de la inversión en capital humano; mientras que por otro, se “protege” a la sociedad del riesgo expreso en la potencial degeneración e inmoralidad de dichas poblaciones, ante todo, en su extremo de vulnerabilidad. Esto se traduce en una apuesta por potenciar y favorecer las redes primarias de sociabilidad, de la mano de inversión en capital social, el fomento de la lealtad, la formación en valores y diferentes mecanismos de asistencia transitoria y/o prácticas de muerte/sacrificio hacia estas poblaciones no deseadas.

3. El *workfare* en Argentina: entre la empleabilidad, la inempleabilidad y la asistencia comunal

En los trazos de las lógicas de gobierno antes descriptas, la traducción Argentina del *workfare* acontece bajo el programa de gobierno instalado entre 1989 y 1999 mediante la creación del *Bono Solidario de Emergencia* (decreto 400/89), otra de las líneas programáticas en tal sentido se encuentra a finales de 1991 bajo el ministerio de Erman González y la creación el “*Plan Llamcay*” (“trabajo” en quechua) que proponía una línea de microcréditos productivos para trabajadores desocupados, el cual se complementaba con el “*Programa de Ayuda Solidaria de Emergencia*, de 1990. Ahora bien en el caso puntual de las poblaciones desempleadas el gran ejemplo, según del BM (1997) del *workfare* fueron los *Planes Trabajar*, como veremos, dicho plan es central en el proceso de construcción del espacio transaccional entre las prácticas de lucha piqueteras y los programas de gobierno nacional y salteño de la época.

En la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los *Programas de Empleo Transitorio*, como dieron en llamar a dichos mecanismos de gobierno, interactúan las áreas de Desarrollo Social y de Trabajo. Los principales planes de empleo se crearon con

los levantamientos de los trabajadores desocupados advenidos piqueteros de Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, a los que le siguieron los de Gral. Mosconi, en Salta²³⁴, que trabajaremos en el apartado III del presente capítulo. Mientras que se reprimía a los desocupados y se los acusaba de delinquir, el gobierno lanzó el *Plan Trabajar I* en el año 1997, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo. Dicho plan tuvo cuatro versiones, y se destinó al fomento de empleo transitorio y la formación profesional de los trabajadores, a través de actividades en su comunidad. Los beneficiarios focalizados eran los trabajadores desocupados más vulnerables, con contraprestación en construcción de infraestructura u obras comunitarias locales. El programa financiaba la mano de obra necesaria, que se efectivizaba a través de un apoyo económico no remunerativo de hasta seis meses, por un monto de \$200 mensuales. El Plan Trabajar estuvo financiado por el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo, además de partidas de presupuesto nacional.

La mayor irregularidad, según diversos documentos e informes, se vio en el clientelismo ejercida por los municipios, líderes sindicales y las ONGs a la hora de otorgar los planes, así como por la falta de coordinación entre las diferentes instituciones, y por el carácter paliativo de trabajo transitorio, no cumplió el objetivo de crear el empleo sostenible. Llegó a cubrir alrededor de 270.000 beneficiarios entre 1997 y 1998. En estos últimos años se implementó el *Plan trabajar II*, con iguales lineamientos que el anterior, pero buscando mejorar los circuitos operativos a fin de aumentar la calidad y pertinencia de los proyectos. En las evaluaciones oficiales, la focalización del programa fue satisfactoria, ya que se detectó, que entre el 75% y el 85% de los beneficiarios eran pobres²³⁵. Esto evidencia la minimalización de la pobreza, y del desocupado, como un sujeto de asistencia y control, en sus territorios comunales locales, a partir de lo cual silenciarlos, contenerlos y evitar quiebres sociales, ante todo.

Entre 1998 y 1999 se implementa el *Plan Trabajar III y IV*, con iguales criterios de selección y contraprestación, con un financiamiento del 50% del BID, se articuló con otros Programas sociales a través de acciones complementarias para promover una utilización eficiente y racional del gasto público y, una mejor focalización de las acciones. Otros programas de la época fueron: el *Programa Intensivo de Trabajo (PIT)*, entre 1993-1994, dirigido al empleo público transitorio, cuya población objetivo eran los

²³⁴ A estas movilizaciones y prácticas de resistencia del sur y norte del país, se le suma, en 1999, el gran levantamiento de La Matanza en Buenos Aires, en el cual se origina el Movimiento Piquetero de La Matanza.

²³⁵ Consultoría CEPAL. (2004), Vinocour. P. y Halperín...op...cit.

desocupados de larga duración alcanzando en 1994 una cobertura total de 310.553; *El programa de Asistencia Solidaria (PROAS)*, desde 1995 *Programa de Entrenamiento Ocupacional (PRENO)* cuyo propósito era generar empleo transitorio mediante la ejecución de obras o prestación de servicios de utilidad pública, entre 1994 y 1997, la población objetivo eran los jefes de Hogar desocupados de larga duración pobres, con una cobertura, en 1995 de 385.020; *El Programa de Empleo de Interés (PROEDIS)*, en 1994, con el propósito de ejecutar obras de interés social o comunitario por ONGs, dirigido a trabajadores a) cuya calificación fuera en ocupaciones obsoletas o en vías de extinción, b) fueran mayores de cuarenta y cinco años y c) desempleados de larga duración; *el Programa AISISTIR*, dirigido a la generación de empleo transitorio para jóvenes, en el año 1995, cuya población objetivo fueron jóvenes desocupados de hasta 25 años, alcanzando una cobertura de 28.000 jóvenes.

También encontramos *los Servicios Comunitario I Y II*, dirigidos a generar empleo transitorio para desocupados en particular mujeres, el I entre 1996-1997 y el II, entre 1987 y 1998, las poblaciones objetivos eran, desocupadas cubiertas por seguro y otros esquemas; *el Programa de Emergencia Laborar (PEL)* orientada al empleo transitorio directo en proyectos comunitarios y a promover proyectos productivos, entre 1999-2000, dirigidos a desocupados no cubiertos por seguro u otros esquemas. Dicho programa se construye, a partir de los componentes de Desarrollo Comunitario y Empleo Productivo Local, cuya cantidad de beneficiarios alcanzó 190.904 concentrados en provincias como Salta, Bs. As, Sta. Fe, Corrientes y Córdoba., y se solventó con financiamiento nacional.

También aquí encontramos *el Plan Jefes y Jefas de Hogar*, desde el 2002, dirigido a generar empleo transitorio y derecho a la inclusión, cuya población objetivo eran los jefes y jefas de hogar desocupados con hijos de 18 años o discapacitados sin límite de edad; así como el *Programa de empleo comunitario* desde 2003, dirigido a generar empleo transitorio, en poblaciones mayores de 16 años sin prestación previsional ni seguro, ni otro programa; ambos programas serán desarrollados más adelante.

Dentro de los *Programas de Capacitación* dirigidos a experimentar la inversión en “capital humano”, en clave de “empleabilidad”, encontramos: *Talleres ocupacionales*, dirigidos a capacitar en talleres organizado por sindicatos u ONGS, desde 1995, la poblaciones desocupadas; *El PRONAPAS* cuyo propósito era capacitar mediante pasantías, entre 1994 y 1996, dirigido a desocupados jóvenes de 16 a 24 años y cesantes de más de 45 y mujeres; *Capacitación ocupacional*, dirigido a la capacitación y el

entrenamiento entre 1995 y 1996, cuya población objetivo eran desocupado de 35 a 55 años; *Capacitación para el Empleo*, con igual propósito que el anterior en el año 1996 y dirigido a desocupados de entre 25 y 55 años; *Los Proyectos Especiales de capacitación* en 1997, dirigidos a la capacitación de un sector o rama de actividad, cuya población objetivo eran los desocupadas trabajadores reactivos de PyMES de 25 a 55 años; *Capacitación laboral para un sector o rama laboral*, en 1998, dirigido a Incrementar las competencias y la productividad, dirigido a desempleados de larga duración con experiencias en actividad de 35 a 55 años y el *Programa de capacitación para apoyar el empleo*, en 1998, cuyo propósito era la recalificación de la fuerza laboral de sectores o regiones en crisis, dirigido a trabajadores de sectores y/o regiones en crisis y beneficiario de programa de empleo.

Y los *Programas de subsidio al empleo privado* entre los cuales se encontraban: el *Programa de Empleo Privado*, entre 1994 y 1998 dirigido a poblaciones desocupadas con una cobertura de 200.007 en 1996, el PELP Y PEP para PyMES (sin datos) y el Programa Forestar, dirigido a promover la ocupación transitoria y aumentar la masa forestal, entre 1995 y 2000 dirigido a poblaciones desempleadas²³⁶.

Observamos cómo se instala el carácter focalizado, mínimo y transitorio de los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres, por un lado mediante prácticas de asistencia de perfil “servicial y comunitario” dirigidas a las poblaciones vulnerables; mientras que a las poblaciones potencialmente empleables se le disponen mecanismos de “capacitación”, dirigidos a la inversión en capital humano, con el propósito de la “re-conversión intergeneracional” de la “condición” - nefasta y riesgosa - de pobreza. Entre tanto, se tejen mecanismos de “contención paliativa y transitoria” para los trabajadores advenidos desocupados y pobres con el objetivo de que, por un lado no se desmorone el “orden social” (tambaleante, por cierto) y por otro, estos sujetos puedan mediante, mínimos y en los márgenes, autoregular su propia existencia de modos “productivos, autogestivos y comunitarios”.

3.1 La crisis, el salto, las continuas discontinuidades: 2000-2002

Un importante salto llegaría luego del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001, a partir de las movilizaciones acaecidas, así como de las propuestas del Frente Nacional

²³⁶ Fuentes: Consultoría CEPAL, 2004,...op...cit.; Síntesis, Grondona, 2012: 440, 41.42: elaborado a partir de Lanari 2003, Revista de Trabajo Septiembre de 1999 MTE y S.S, y Grassi 2003a...op...cit.

contra la pobreza, que plebiscitó la creación de un *Seguro de empleo* y la formación/capacitación de los desocupados. A partir de lo antedicho los programas de empleo dejan de tener el corte de extrema focalización, como el Trabajar, y se crea bajo el efímero gobierno de Rodríguez Saa, en el 2002, el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJHD), implementado finalmente por el gobierno de un año de Duhalde.

Cabe señalar, que también en dicha época, por Resolución N° 555/2002 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se retoma y amplía el *Programa de Emergencia Laboral* (PEL)²³⁷: “...a los fines de promover el empleo de los trabajadores desocupados con el objetivo de afrontar situaciones locales transitorias de emergencia ocupacional”. Dicho programa “atendería” a aquellas poblaciones desocupadas que no reúnan las condiciones para ingresar al PJHD, y se dirigiría a promover actividades de carácter comunitario a ejecutarse en cada localidad.

Según el artículo 1 de la resolución antedicha se aprobarán actividades comunitarias para hasta 300.000 beneficiarios mensuales. Dichas actividades tendrán una duración de hasta tres (3) meses, y la fecha de inicio de las mismas será a partir del 1° de agosto de 2002. La fecha de finalización de las mismas no podrá extenderse más allá del 30 de octubre de 2002 (Art. 2). Los beneficiarios percibirán una ayuda económica mensual de \$ 150, por período máximo de tres meses. Mientras que, las actividades a realizar por provincia, serán aprobadas a través de Resolución Ministerial mes a mes, y los fondos asignados para el pago de las ayudas económicas mensuales, se imputarán con cargo al ejercicio financiero de 2002 asignado a la jurisdicción 75, Programa 16, Subprograma 01, Partida 514 "Ayudas Sociales a Personas", Fuente de Financiamiento 11 "Tesoro Nacional" (Artículos 3 y 4)²³⁸. Dicho programa tiene una importancia relevante en el trazo de las prácticas y estrategias de autogobierno y resistencia de los trabajadores desocupados unidos en la UTD Mosconi.

Retomando al *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados*, señalamos cómo el mismo ha sido el más importante desde el retorno a la democracia, en sus inicios solo fue diseñado y financiado por el gobierno nacional, luego hubo influencias del BM²³⁹. Pero, en sus incisos concentró todos los recursos presupuestarios disponibles originados en los distintos programas de empleo transitorio. Los recursos eran girados por la nación a las

²³⁷ Creado según la Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 23/99.

²³⁸ Dicho programa devendrá, en 2003, *Programa de Empleos Comunitario* (PEC).

²³⁹ A partir del 2003 se suscribió un préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que forman el Banco Mundial, para el financiamiento del PJHD por un monto de 600 millones de dólares para dos años de ejecución. Consultaría CEPAL...op...cit.

provincias encargadas de entregar el “subsidio”, a partir de la tasa de desocupación, el índice de pobreza y la población de cada provincia²⁴⁰. Se otorgó un ingreso de \$150 mensuales a jefes o jefas de hogar desocupados, con hijos menores de 18 años o aquellos mayores de 60 años sin jubilación o pensión, garantizando el derecho familiar a la inclusión social, asegurando la concurrencia escolar y el control de salud de los hijos, la capacitación laboral de los beneficiarios, su incorporación en la educación formal y a proyectos productivos o en servicios comunitarios.

En primer lugar, a diferencia de los múltiples planes previos, el PJJHD no tenía fecha límite para la cobertura, la prestación caducaría ante la obtención de otra fuente de ingreso (o de incumplimiento de la normativa establecida por el programa). También a diferencia de los esquemas anteriores, se establecían cupos por provincia o regiones, es decir que el criterio exclusivo era la - autofocalización - en base a la relación entre el monto del subsidio y las tareas de contraprestación. Al respecto, el decreto original no contemplaba su obligatoriedad, carácter que fue introducido a partir de abril de 2002, mediante la Resolución del MTEySS N° 312/02. En el decreto de creación de enero se hablaba de: “...propiciar (...) la educación formal o su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su futura reinserción laboral, prioritariamente en proyectos productivos de impacto ponderable como beneficios comunitarios” (Art. 3, Decreto N° 165/2002), pero no eran obligatorios. De hecho, se creó un padrón de beneficiarios a través de consejos consultivos locales, práctica que profundizaba las técnicas de “focalización”, en algunos casos estigmatizantes, ya que solo lo recibía quien estaba empadronado y no había dejado de ser “vulnerable”.

El decreto N° 565/2002 que instala el Plan reconocía: “...la gravísima crisis que afecta a nuestro país, que alcanza niveles de pobreza extrema, agravados por una profunda parálisis productiva”; ante lo cual se planteaba la urgente necesidad de:

... garantizar la protección integral de la familia y asegurar el acceso de los hijos que se encuentran en las condiciones previstas a la educación formal y propiciar, en su caso, la incorporación de los jefes y jefas de hogar desocupados a la mentada educación, o su participación en cursos de capacitación, que coadyuven a su futura inserción laboral.
(Considerandos).

²⁴⁰ Frente a este escenario de caos y descentralización asistencial se convoca al Diálogo Argentino, promovido por la iglesia católica y el PNUD, a partir de lo cual se crea una estrategia de carácter universal, y se sanciona el Derecho Familiar a la Inclusión Social, por lo que el Estado Nacional asegura un ingreso para todas las familias.

Ahora bien, probablemente la principal novedad del programa haya sido la masificación de la intervención (llegaría a cubrir cerca de 2.3 millones de beneficiarios/as) sobre la base de un supuesto reconocimiento a los “derechos sociales de inclusión”.

En tal sentido, un trabajo elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales del año 2003, advertía que: “...*si bien la normativa que da origen a este plan refiere la creación de un derecho familiar a la inclusión social (...) en modo alguno los beneficios asignados alcanzan para definir el reconocimiento de un autentico derechos social*” (Pautassi, 2003). El mismo estudio señalaba que dicho plan, más que una herramienta de las políticas sociales, se instalaba y emergía como un mecanismo dirigido a controlar, apaciguar y calmar los conflictos sociales inéditos, que ponían en riesgo y en juego la continuidad del sistema político institucional.

En efecto, en torno del PJJHD, se instalaban diversas tramas enunciativas vinculadas al discurso tecnocrático desarrollista, a la moral pastoral y al de la ciudadanía social. Entre algunas de estas tramas discursivas encontramos las de la Central De Trabajadores Argentinos (CTA), en la cual predominó el juego enunciativo y lógico a partir del cual se relevaba la trascendencia del valor reconocido por la sociedad argentina al trabajo, como ejercicio de un derecho; mientras se subrayaba la necesidad de desarrollar - políticas activas de contención social - y, finalmente, la necesidad de que todos, aún los más necesitados, participen del esfuerzo de creación de riqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad.

Ante todo se reivindicaba, desde diferentes sectores, así como desde informes de evaluación, el “fomento a la demanda” de trabajo, que dicho Plan venía a favorecer y propiciar, de un modo específico, acorde a los lineamientos programáticos antedichos.

También se instalaba el discurso de perfil moral-pastoral y neoliberal por ejemplo en la cuestión de la transparencia y la corrupción. En el caso del discurso moral-pastoral, lo que vemos aparecer es una relación entre la corrupción –como degradación de los valores–, por un lado, y la credibilidad (vinculada al lazo), por otro (Grondona, 2012).

En distintos documentos y declaraciones, la conferencia episcopal y los obispos individualmente, habían venido advirtiendo al gobierno y a la sociedad, que el país se iba disolviendo a causa de la enorme corrupción pública y privada y la falta de credibilidad que ostentaban sus dirigentes²⁴¹. La corrupción no es un acto, sino un estado, estado

²⁴¹ Ver: Febrero 2002, Texto del Saludo de Monseñor Eduardo Vicente Miras a su Santidad Juan Pablo II, durante la visita *ad limina Apostolorum*, en Grondona: 2012: 475.

personal y social, en el que uno se acostumbra a vivir: *“Los valores (o disvalores) de la corrupción son integrados en una verdadera cultura, con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar”* (Bergoglio 2005: 36, en: Grondona, 2012: 477-8). La crisis era ante todo de “valores” y ahí estaban las “fallas” que deberíamos corregir como pueblo mancomunado, en un proceso de crisis que “golpea” al modo de excepcionalidad al pueblo Argentino, cuan “caída del cielo”, sin atender a las procedencias, precedencias, prácticas, lógicas y programáticas nacionales continentales y mundiales de poder, gobierno y verdad.

Los discursos de perfil neoliberal, ante todo dispuestos por los Organismos multilaterales de crédito e intervención, vinculaban la crisis a la corrupción de las instituciones políticas. Justamente, a partir de esta última lectura, se enfatizaría la necesidad técnica de asumir nuevas metodologías de planificación, evaluación, control y *accountability* que debían evitar el dispendio innecesario de recursos, producto de la lógica – desprolija - de las administraciones políticas.

De este modo, es posible avistar como, para la implementación, diseño y puesta en práctica de mecanismos varios dirigidos a gobernar a las poblaciones pobres y desocupadas, sería la racionalidad neoliberal de “combate de la pobreza con participación social” la que orienta su trazo y construcción de la pobreza, como dispositivo de gobierno de la cuestión social. En la Argentina de estas épocas, lo antedicho se concreta mediante diversas prácticas gubernamentales de descentralización en municipios, punteros políticos y ONGs, como referentes de la sociedad civil y la democracia electoral, entre otras cuestiones.

En este diagrama vincular de poder y gobierno en torno del gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, entran en juego las prácticas de resistencia y lucha de los trabajadores desocupados y piqueteros, que serán analizadas en profundidad en el apartado III. En tanto y en cuanto advienen una “alteridad amenazante” que alcanza los planes mediante lo que algunos sectores de gobierno llamaban y, aún llaman: “extorsión, presión, violencia, malas costumbres, etc.”. En dichas tramas de enunciación y práctica política, el trabajador, ahora desocupado, adviene un sujeto de “sospecha e incluso de amenaza” a la hora de identificar, seleccionar y focalizar a los “beneficiarios y receptores” del plan, según criterios enmarcados en lógicas tecnocráticas de empleabilidad.

Así, siguiendo a Grondona (2012), se construye una distribución de los beneficiarios que permita “limpiar y aclarar” el avance peligroso del mundo piquetero, según las actitudes de la población beneficiaria hacia el trabajo, como sus características estructurales (edad, sexo, trayectoria laboral, etc.). Esto tiene como resultado tres grupos de identificación: 1) beneficiarios con bajo nivel educativo, elevada motivación y predisposición para actividades de formación. Para lo cual deberían diseñarse políticas que mejoraran la empleabilidad; 2) beneficiarios con niveles educativos adecuados a los parámetros del mercado, con experiencia laboral. Para ellos cabían acciones de intermediación laboral y; 3) beneficiarios inactivos, especialmente mujeres con hijos a cargo. Éstas eran caracterizadas como una población asociada a las políticas sociales.

A su vez, en este diagrama de poder trazado en el gobierno de las poblaciones pobres y desocupadas con fuertes injerencias en el mundo de los trabajadores desocupados y piqueteros, también se construyen mecanismos como *el Seguro de Desempleo*, que está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que resultan “despedidos”; se crea como una “política pasiva de empleo” y apunta a que el trabajador formal contratado, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo²⁴², esté protegido en el lapso que mediara en su paso de un empleo a otro, en caso de despido. Esta medida, aún vigente, pretendía paliar las situaciones permanentes de movilidad laboral y desempleo creciente.

Ahora bien, estos diversos mecanismos predominantemente “paliativos” de emergencia no solucionaron el problema del desempleo y, en el gobierno de la Alianza, se dio un enorme cimbronazo en torno de los planes de empleo. En primer lugar, porque la cantidad de subsidios bajó de un modo drástico, su mayor volumen se alcanzó en 1997 con 206 mil beneficiarios, lo cual no volvió a repetirse hasta el 2002. Según Svampa (2004) el recorte profundizó la protesta social, ya que dejó sin recursos, no solo a los grupos piqueteros, sino también a la estructura de punteros del PJ. Bajo la gestión de la Alianza los ciclos de protestas iniciado en 1997 aumentaron y reunieron no solo a grupos de desocupados, advenidos piqueteros, sino a intendentes, concejales, empleados públicos de diferentes partidos políticos.

Por lo tanto y, acorde al recorrido realizado en el presente apartado, desde una perspectiva estratégica y heterárquica del poder, consideramos que en el período analizado, la pobreza se instala como dispositivo de gobierno sobre la cuestión social y

²⁴²Dicha Ley es modificada, en el gobierno instalado en 1989, profundizando los mecanismos de flexibilización laboral, acorde al programa de la época trabajado en el capítulo I.

también sobre la fuerza de trabajo, en este caso los trabajadores advenidos pobres y desocupadas:

La fuerza de trabajo, sin embargo, sólo se efectiviza por medio de su exteriorización: se manifiesta tan sólo en el trabajo. Pero en virtud de su puesta en actividad, que es el trabajo, se gasta una cantidad determinada de músculos, nervios, cerebro, etc., humanos, que es necesario reponer. Este gasto acrecentado trae consigo un ingreso también acrecentado. (...) La suma de los medios de subsistencia, pues, tiene que alcanzar para mantener al individuo laborioso en cuanto tal, en su condición normal de vida. (Marx, 1967: 53-54)

Las condiciones históricas de expropiación, señaladas por Marx, fueron las que hicieron posible esta distinción entre la “potencialidad” de la fuerza de trabajo y la “actualidad” de la actividad de trabajar. En tal contexto, bajo la existencia de obreros libres, formalmente libres y materialmente despojados, la fuerza de trabajo adquiere la forma de “mercancía”, en tal sentido la fuerza de trabajo tiene un valor de uso (crear valor) y otro valor cuya magnitud se define en el tiempo socialmente necesario para reproducirla (Marx, 1967). Ahora bien, ¿cómo se produce la fuerza de trabajo?, consideramos junto con Grondona (2009) que se logra produciendo un cuerpo biológico que la sostiene, eso llamado: “corporeidad viva”. La fuerza de trabajo queda supeditada a la producción y/o reproducción, de la vida.²⁴³

A su vez, acorde a nuestra concepción en torno de un ejercicio positivo de poder y gobierno de los trabajadores advenidos pobres, la emergencia de “los mecanismos de seguridad” como modalidades de gobierno de la cuestión social, también tienen como preocupación central e históricamente construida las “condiciones de vida”, “la producción de ciertas condiciones” del trabajo y la vida (Grondona, 2009).

Aquí entra a jugar el aporte foucaultiano en torno de la biopolítica y la posibilidad de poner con ello el gobierno del cuerpo biológico de las poblaciones trabajadoras advenidas pobres. Como ya dijimos, la biopolítica según Foucault designa una forma de ejercer el poder que emerge en el siglo XVIII, preocupada por la administración de las condiciones de vida de la población. El concepto de poblaciones, a su vez, hace referencia a una entidad compuesta de procesos vitales, en la que se intervendrá en pos de producir vida y mejor vida (Dean, 1999: 209).

²⁴³ En clave marxista, dicha fuerza de trabajo, resulta una mercancía muy particular según la cual sin cuerpo no habría trabajo y sin este sería imposible generar plusvalía, es decir pondría en jaque la posibilidad del capital. Así es el trabajo asalariado el que genera una situación tal que lo que es fin y esencia adviene mero medio, la producción de la vida en el capitalismo adviene subsumida al capital; mientras que su subsunción absoluta implicaría, en el límite, la destrucción de la vida misma.

La biopolítica, a su vez, en los albores del liberalismo y sus transformaciones neoliberales actúa dibujando fronteras que delimitan poblaciones a las que les tocará el destino de la muerte (Foucault, 2000^a). En tal sentido, consideramos que la biopolítica y el llamado “racismo de Estado”, en torno del cual se pone en juego la posibilidad de “dar muerte y/o dejar morir” a las poblaciones no deseadas (Foucault, 2000a; Castro Gómez, 2010) son parte de una misma lógica de intervención de las poblaciones.

A su vez, en este diagrama de poder y gobierno, en un heterogéneo abanico de racionalidades políticas, paradójicamente, observamos cómo los sujetos pobres y desocupados fueron y, en algún sentido lo siguen siendo, contruidos al modo de *moribundos*, el cual junto con el ocioso, según De Certeau:

...son proscriptos (autcast) porque son marginales de la institución organizada por y para la conservación de la vida. Un “duelo anticipado” (...) con la muerte en suspenso, el moribundo cae fuera de lo pensable, que se identifica con lo que se puede hacer. (...) Junto con el ocioso el moribundo es inmoral: uno, sujeto que no trabaja; el otro, objeto que ya no se ofrece a un trabajo; ambos intolerables en una sociedad donde la desaparición de los sujetos en todas partes se compensa y de disfraza por la multiplicación de las tareas. (De Certeau, 2000: 208).

En estas sociedades neoliberales contemporáneas, en las que la producción de “sujetos activos” orienta las prácticas de gobierno, la ausencia de trabajo pareciera ser el sin sentido de la vida y la figura del moribundo-desocupado encarna ese sin-sentido, por tanto: “...hay que eliminarlo para que se continúe el discurso que incansablemente articula tareas y que construye el relato occidental del “siempre hay que hacer”...” (De Certeau, 2000: 208). Según el enfoque aquí propuesto consideramos que “eliminarlos” implicaría transformarlos en sujetos activos, empoderados y autogestivos, así como dejarlos morir o echarlos a la muerte en sus propias comunidades locales, en torno de lo cual las lógicas de gobierno los enredan y construyen como sujetos gobernables (empleables e inempleables).

Por lo tanto, el gobierno de las poblaciones pobres desocupadas y de la fuerza de trabajo, se ejercería en la paradoja de intentar controlar, dirigir e incluso eliminar - estratégicamente - aquello y a aquellos que ha producido. En este sentido, también identificamos cómo el sujeto pobre y desocupado es fabricado, por un lado en el entramado discursivo atravesado por la lógica neoliberal dirigida a disminuir la pobreza, promoviendo mecanismos que les permitan salir del estado de “inacción”; mientras que por otro, se despliega una lógica moral-pastoral dirigida a la educación moral y la limpieza institucional interventora. Siempre en el cautiverio sigiloso de la mirada experta,

del cumplimiento de los plazos, las condiciones, y simultáneamente, en un tejido vincular de resistencias y movilizaciones desestabilizadoras.

II A

La singularidad salteña, en los trazos del gobierno de la pobreza y los pobres desocupados.

1. Las políticas sociales y de empleo humanizadas “para” pobres, entre 1995 y 2003

En el diagrama de poder y de gobierno trazado en los avatares de la gubernamentalidad local provincial, los desafíos de las políticas sociales se dirigieron a reducir las condiciones de exclusión invirtiendo en capital humano y programas sociales, asegurando la nutrición, la educación y la atención médica preventiva, para lo cual fue central activar políticas llamadas comunitarias. Esto es en torno de poblaciones a las cuales, generalmente en los documentos y discursos provinciales, no se nombra como “pobres”, sino como “carentes, sectores desprotegidos, vulnerables, débiles, entre otros”²⁴⁴.

Acordes a las racionalidades políticas que regulan el programa de gobierno, según analizamos en el capítulo 1, en torno de las políticas sociales se utiliza el método de la planificación y gestión centrado en el desarrollo humano, el cual: *“Hace equivalente crecimiento y humano, buscando la equidad social y sostenibilidad, el centro del desarrollo es el “ser humano” y el objeto de desarrollo es “ampliar las oportunidades”*.²⁴⁵ Lo que implica, como ha sido trabajado en el capítulo 1, en referencia al Decreto N° 53/95, dejar atrás las políticas del Estado Benefactor que consideraban a la persona como sujeto pasivo centrado en las carencias y las ausencias.

La misión propuesta pretende: Mejorar y Promover la Calidad de Vida de la Población de la Provincia de Salta, en particular de la que se encuentra bajo Línea de Pobreza e Indigencia, mediante acciones de detección, asistencia, prevención y promoción en el marco del Desarrollo Humano como forma de inclusión social. A partir de lo cual los programas y proyectos tienen como ejes referenciales:

-La Persona Sujeto de Desarrollo: Fortalecimiento del Capital Humano y Social; Educación Social; Economía Social.

²⁴⁴ Las categorías analíticas, las enunciaciones y construcciones subjetivas de dichas poblaciones, también se explicitan en las nominaciones de los mecanismos de intervención cuyos nombres remiten a las poblaciones a las cuales se dirigen como: animadores comunitarios, programa social para aborígenes, programa de desarrollo agrícola y social para pueblo indígenas, programas de alimentación y nutrición infantil, programas para personas con discapacidad, programas de ayuda al menor, ayuda social a los mayores, entre otros. Se focaliza en las poblaciones vulnerables, más pobres y en riesgo.

²⁴⁵ Página oficial de Juan Carlos Romero, ver: http://www.romerojuancarlos.com.ar/?page_id=84, consultada julio/octubre, 2011-12.

-La Gobernabilidad: mejorar la capacidad de respuestas a las necesidades sociales

-La Descentralización: Desarrollo Participativo; Articulación de Acciones; Sostenibilidad de las acciones; Integralidad; Concertación Ciudadana. Entonces, las políticas giran en torno de: A) Asistencia que se da en situaciones de Emergencia Social y cubre a personas con necesidades inmediatas (CAI); B) La Asistencia para la inclusión Social.²⁴⁶

Estas lógicas y prácticas de gobierno se entrelazan y relacionan en el armado de programas y planes de intervención, en los cuales los entramados enunciativos sostienen las prácticas dirigidas a la producción de sujetos activos, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, el desarrollo juvenil, la creación del fondo participativo de inversión social, economías humanas de subsistencia, huertas y granjas comunitarias e institucionales, prevención y educación especial comunitaria, programa de promoción del desarrollo local, promoción comunitaria para el interior, entre otras. Entramados enunciativos y categoriales que, en clave de DDH, resaltan el vínculo estratégico entre sociedad civil y Estado, en una apuesta a la inversión en capital social y participación civil comunitaria, como técnicas de gobierno.

Mientras que, se pone énfasis en la inversión en capital humano, resaltando al sujeto “pobre trabajador y empresario-emprendedor”, como el “...*proyecto de emprendimientos productivo para el desarrollo local*” (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 241). Así, se ponen en juego diversas prácticas de gobierno en una paradójica vinculación entre la “asistencia, la ayuda, la promoción y el derecho”, en el ámbito de la sociedad civil, acorde a las relaciones estratégicas antes trabajadas:

La focopolítica nacional apela a la idea de ayuda a diferencia de la asistencia, interpelando a Eva Perón para encuadrar su accionar (Álvarez Leguizamón, 2005), mientras que en la provincia se afirma que ante la carencia de un liderazgo como el de ella se debe transferir a la sociedad civil lo atinente a lo social, o las políticas para pobres. Otro componente es el de reforzar las redes primarias no mercantiles por medio del capital social. (Álvarez Leguizamón, Villagrán, 2010b: 242).

En este sentido, entonces, el DDH brinda, también en la provincia de Salta, un sustento epistémico para pensar que la pobreza se puede resolver a partir de la potenciación de las capacidades de los individuos y de las comunidades - pobres -, así como del correcto aprovechamiento de las oportunidades, que otorga un mundo basado en libertades producidas para necesitar cada vez menos del Estado y/o para morir a lo largo del juego, siempre desigual.

²⁴⁶ Fuente: Documento oficial producido por Adriana Portal. Secretaría de Desarrollo y promoción comunitaria gobernación de Salta, 1998.

2. Las políticas sociales y los programas de empleo: el pobre válido, el pobre capaz, el pobre moribundo.

Acorde a las programáticas de gobierno salteñas, en el marco de la Secretaría de Desarrollo de la Nación (SDS) y con “el objetivo de superar la grave problemática vinculada a la pobreza”, uno de los programas de relevancia puestos en marcha fue el *Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)*²⁴⁷, que comienza a instrumentarse en Misiones y en Salta durante sus primeros seis meses para luego extenderse a diez provincias más. El objetivo fundamental del programa remite a: “...constituirse en un mecanismo transparente de financiamiento de iniciativas comunitarias en las regiones más pobres del país, promoviendo la participación y el compromiso comunitario” (Dcto., SDS, 1995:1). Esto pretende realizarse mediante un proceso de focalización, a partir del cual elaborar “pequeños proyectos” por parte de comunidades ubicadas en departamentos provinciales con alto porcentajes de NBI, y en los barrios “más pobres” de cada capital provincial. La participación comunitaria se plantea como un “nuevo modelo de gestión comunitaria”, articulándose con los diferentes niveles institucionales en la lógica de la descentralización.

Los proyectos que recibirán financiamiento por parte del FOPAR deberán responder a las “necesidades sentidas de los beneficiarios, mejorando su calidad de vida”, ante todo promoviendo la participación y compromiso de la comunidad local en la cual habitan; y desarrollando “habilidades en la comunidad para generar y formular nuevos proyectos, así como para mejorar la capacidad de autogestión de las organizaciones de base, existentes e incipientes, según sea el caso; por último se remarca la impronta dirigida a mejorar la articulación con otros programas y proyectos sociales, mediante procesos de integración local²⁴⁸ de las que denominan “comunidades pobres”.

Observamos cómo dicho programa se dirige a promover mínimos vitales (pequeños, sentidos, básicos) para estas comunidades y poblaciones pobres; mientras que se centra en

²⁴⁷El FOPAR forma parte, junto con SIEMPRO, de una propuesta integral de la Secretaría de Desarrollo social, denominada Programa Participativo de Desarrollo Social (PRODESO). Contaba con financiamiento del Bando Mundial (BIRF) y del Gobierno Nacional. Dcto., FOPAR, 1995, Secretaría de Desarrollo social de la Nación Argentina (SDS). También hemos utilizado como fuentes: Guía de Programas Sociales Nacionales, 1997, 1998, 1999 y SIEMPRO, Presidencia de la Nación, 1997, 1998 y 1999.

²⁴⁸ El programa concentrado en un Núcleo de Beneficiarios, selecciona para el financiamiento de pequeños proyectos comunitarios, la comunidad o barrios, ante todo pobres urbanos, que deben estar previamente seleccionados por un Consejo Provincial Participativo. Mientras que los “miembros más vulnerables” de estas comunidades y hogares pobres, ahora potenciales beneficiarios pertenecen a “grupos vulnerables” mujeres, niños, adolescentes y ancianos, en tanto se encuentran en “condiciones reales o potenciales de alto riesgo”. Dto. FOPAR, SDS, 1995: 5.

las capacidades y habilidades a potenciar y utilizar del pobre advenido sujeto activo y autogestivo, a través del incentivo de los capitales humanos y sociales (reciprocidad entre grupos de base territorial, lazos comunitarios, participación comunitaria, gestión local); en tanto las comunidades – solidarias - se postulan como unidades centrales de intervención y gestión de la pobreza, en un marcado ejercicio de gobierno “de un sí mismo para un otro”.

Por su parte, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia (SDSP) se crea el *Centro de Atención Integral*, que luego se llamará *Centro de Atención Integral al Ciudadano*. Según lo sugerido por Álvarez Leguizamón (2010a) se trataría de atención y no de asistencia, lo cual se sintetiza en una suerte de mayor respeto a la intimidad de la gente que es atendida, teniendo como función “el asesoramiento y orientación individual y colectiva a la demanda social comunitaria”:

A pesar del lenguaje de tutelaje en el asesoramiento de lo que se denomina “demanda social”, en realidad la actividad principal de esta oficina es hacer entrega de “ropa, calzado y otros elementos de necesidad primaria” que son generalmente intermediados por los llamados punteros políticos. La ciudadanía es entonces el equivalente a la ‘población de alto riesgo’. (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 244).

Las autoras antes citadas señalan que, en torno de las prácticas de atención a las poblaciones en riesgo se produce un “lábil proceso de des-ciudadanización”; al respecto y en sintonía con lo trabajado en el apartado anterior, sostenemos que se trata de un proceso de “re-ciudadanización”, en un heterogéneo trazo de construcción de sujetos jurídicos y económicos. En este caso y mediante acceso a mínimos, se pondrían en juego los derechos humanos, paradójicamente, garantizados por el Estado, en su frugal ejercicio de gobierno “para” el mercado y en una apuesta por “controlar y atender” a aquellas poblaciones advenidas vulnerables e inempleables. Por otro lado, se trataría de “producir” sujetos económicos autogestivos, siempre bajo los tramos enunciativos del DDH y el interés que insta “gobernar lo menos posible”. Pues, no se trataría de un ocultamiento y/o una eliminación de la cuestión del derecho bajo la retórica del mercado y su operacionalización en mínimos vitales, sino de una reconfiguración del rol del Estado y del modo de entretelar derechos, gobierno, poblaciones y mercado en torno de la veridicción – del mercado - que emerge del entrecruzamiento entre la utilidad, la autonomía de los sujetos, la regulación y la interacción.

En tal sentido, acorde a los tramos enunciativos y prácticos del DDH, los sectores a los que se dirigen los programas contruídos en los marcos de la intervención-atención-

asistencia antedichos son: las poblaciones infantiles; la población juvenil, ante todo aquella considerada en situación de riesgo; familias jóvenes y madres solteras o jefas/es de hogar. Dichos programas tienen por objetivo atender las necesidades básicas en diferentes áreas; en el caso de jóvenes en situación de riesgo se promueve la rehabilitación, la capacitación, las acciones preventivas, los hogares sustitutos, entre otros. Para aquellos/as y salteños/as que transitan la tercera edad se dispone de ayuda alimentaria y asistencia integral mediante el *Plan Solidario de los mayores*²⁴⁹, huertas y granjas comunitarias. La vejez, como en muchos casos los pobres inempleables, ha dejado de ser una cuestión de interés en el trazo de la gubernamentalidad neoliberal, a partir de lo cual se promueve su autogestión y autorganización entre límites y márgenes, librados a la muerte.

Entre otras denominaciones que nos remiten a una aproximación al DDH en torno de los mecanismos de gobierno dirigidos a atender “situaciones de transitoriedad” de ciertos atributos de vulnerabilidad, encontramos a las poblaciones llamadas “aborígenes e indígenas”, tal es el caso del *Programa Social para aborígenes, Programa de desarrollo agrícola y social para pueblos indígenas, Programa de alimentación y nutrición infantil, desarrollo social para aborígenes y criollos del Chaco salteño*, entre otros. Este último permite identificar el modo en el cual se ejerce el mecanismo de focalización en torno de las poblaciones vulnerables, a partir de la promoción de la autogestión sostenida en el “patrimonio comunitario”, la organización de comunidades productivas y la atención a la “cultura” (Álvarez Leguizamón y Villagrán 2010b: 241). Según un Informe gubernamental sobre dicho programa:

*...el plan de desarrollo social para aborígenes y Criollos del Chaco Salteño, proyectó su actividad sobre 1.075 personas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades aborígenes y criollas a través de la promoción del desarrollo social sostenido, apuntando a la capacidad de abastecimiento alimentario, organizando comunidades productivas acorde al cultura de los beneficiarios y condiciones agro ecologías e introducción de técnicas de mejora en la conservación de los recursos naturales*²⁵⁰.

²⁴⁹ Se desprende del decreto N° 53/95 el *Plan Solidario para mayores*, centrado en la inversión en capital social y participación comunitaria de la población nucleada en la llamada tercera edad. Entre uno de sus puntos referenciales recuperamos los objetivos dirigidos a: “...desarrollar Programas Sociales de Salud a través de las organizaciones que aglutinen a los mayores, propendiendo a la autogestión, teniendo como estrategia fundamental la conformación de Redes de Promoción y Protección Social que tengan como finalidad la solución de los problemas de los Mayores y de sus Familias. Integrando a las organizaciones de jubilados, sus federaciones y confederaciones, organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas y universidades, mediante convenios que posibiliten la potenciación de dichas acciones” (Decreto, 53/95: pto. 5.1)

²⁵⁰ Mensaje del Gobernador J.C. Romero a la Asamblea Legislativa de la provincia de Salta, 2 de Mayo de 1997, pp.: 67. Gobernación de la Provincia de Salta.

Observamos cómo, estos mecanismos de gobierno se dirigen al fortalecimiento de la autogestión y participación de los pobres indígenas, mientras que incorporan lógicas productivas en las prácticas de reposición de la vida de estas poblaciones, lo cual se orientan a “modificar sus formas de vida” (Álvarez Leguizamón, 2010), y a re-adaptarlas a las condiciones globales de mercados abiertos y economías globalizadas, según los avatares gubernamentales trabajados en el capítulo 1, apartado II.

En el mismo sentido, otro programa local es el de “*Fortalecimiento Institucional*”, dependiente de la SDSP, cuya aplicación se basa en el decreto N° 53/95 - Ley N° 6.833. Parte de un diagnóstico que señala que en la zona norte se “acentúa el proceso de extensión y modificación de la pobreza, encontrándose aproximadamente 4000 familias “desvinculadas” del Estado, entre los cuales encontramos a los ex/trabajadores de YPF y de Gas del Estado, haciéndose indispensable el surgimiento o fortalecimiento de nuevas formas organizativas-asociativas que permitan superar el individualismo y trascender al plan de la solidaridad.

El programa procura facilitar la aplicación del decreto N° 53/95 a través de la organización de una red social que facilite y agilice mecanismos de descentralización de la actividad gubernamental, según lo dispuesto por ese decreto: institucionalizando la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales en la atención de necesidades y servicios de la comunidad; la formación y capacitación de *Operadores Sociales y Líderes Comunitarios*, para apoyar y fortalecer la capacidad de gestión municipal y de las organizaciones de base (OCB); el asesoramiento técnico y capacitación a entidades vecinales. El programa incluye tres subprogramas: *Proyecto Red Solidaria*, *Capacitación de Operadores Sociales y Líderes Comunitarios* y *el Proyecto de Entidades Vecinales*.²⁵¹

Estos programas y subprogramas remiten, ante todo, a las actividades comunitarias dirigidas al desarrollo local y al fortaleciendo institucional comunal y local mediante asesoramiento, capacitación y asistencia técnica para implementar proyectos dirigidos por ONGs, cooperativas, asociaciones barriales, escuelas, etc. También a emprendimientos productivos para el desarrollo, capacitación productiva en aspectos como gerenciamiento, producción y comercialización, actividades deportivas para la formación interna y prevención de enfermedades y para promover el denominado “turismo social”.

²⁵¹Secretaría de la Gobernación de Desarrollo Social de la provincia de Salta, 1996.

Por último, en este proceso de des-centralización, limpieza, reformulación, refundación, reforma y reconfiguraciones en torno de la vida - y la muerte - de las poblaciones pobres, siguiendo a Álvarez Leguizamón (2010a), resultan centrales cuestiones como la salud y la educación, las cuales más que un derecho y un bien social basado en la solidaridad, pasaron a ser servicios y/o mercancías o servicios mercantiles regulados por el mercado.

En el marco del proyecto estratégico del gobierno de la época, revertir la situación *sobre la salud* implicaba actuar sobre tres campos: “*En primer término sobre el estado sanitario general de la población; sobre las economías familiares de los sectores más débiles y, finalmente, sobre la capacidad provincial para lograr el crecimiento económico y el incremento de la calidad de vida*” (J.M.U., 1999: 184). Para planificar dicho proceso se cita el Informe sobre Desarrollo Mundial 1993 del BM, denominado “Invertir en Salud”, entre cuyas citas encontramos:

Los efectos adversos de una salud precaria son más graves en los pobres, principalmente porque se enferman con mayor frecuencia, pero en parte también porque sus ingresos dependen por completo del trabajo físico y no tiene ahorros para amortiguar el golpe. En consecuencia, puede resultarles imposible recuperarse de una enfermedad con su capital humano y financiero intacto. (BM, 1993: 22).

A partir de tales entramados enunciativos se realizan, a nivel local, algunas modificaciones institucionales y prácticas, como las de “autogestión hospitalaria, centrada en la eficiencia del servicio. También la conformación de equipos de Agentes Sanitarios, con la intención de ejercer el gobierno indirecto de las poblaciones mediante prácticas de “concientización de la población sobre la importancia de la calidad y de vida y la salud” (nutrición, educación e higiene, alcoholismo, estilos de vida, etc.). En esta línea, se postula invertir en el Nivel Primario de la Salud, lo cual remite a una relación directa entre la unidad prestadora de servicios, los vecinos y sus Centros Vecinales, en el reacomodo de la responsabilidad público-privada y el gobierno de lo social a través de la comunidad. Estos mecanismos de gobierno, entre otras cuestiones, permitirían tener influencia y control sobre la natalidad y mortalidad, en clave biopolítica posibilitarían ejercer un sesgado proceso de regulación de las poblaciones.

Toda esta proyección programática se sostiene en una mayor racionalización y eficiencia del gasto público articulado con la solidaridad social, en el marco del desarrollo humano y el crecimiento económico. Por tanto, en la transferencia de responsabilidades del ámbito público al comunal y privado, se afirma que la salud es una obligación de los individuos

en tanto deber y capital que debe ser asumido, fortalecido y reinvertido por las personas individuales:

En este modelo los aborígenes, los niños y lo pobres son los sujetos de intervención estatal. El mercado se ha establecido como el ámbito donde deben fijarse las reglas del juego para la oferta y demanda de los servicios de salud, con el supuesto que será quien dará una mayor racionalidad a la relación costo-beneficio. (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 224).

La economización de la vida social atraviesa las redes vinculares - primarias - en las cuales interactúan y a partir de las cuales se construyen y controlan las poblaciones pobres. Esto sucede, en tanto se privatizan las prestaciones sociales en el trazo de racionalidades políticas neoliberales de gobierno, y de—la intervención gestiva para potenciar la reproducción- controlada - de la propia vida biológica entre mínimos y márgenes, para luego “medir”: “...*cuantos quedaron vivos y cuantos quedaron muertos*” (Informante 1. Técnico del MDS de la Nación en Salta, entrevista junio 2013).

Sin pretender realizar un ejercicio que deleve “contradicciones” (entre lo que se dice y lo que se hace, entre retóricas participativas de desarrollo humano y prácticas de fragmentación de poblaciones locales, entre inclusión y exclusión...) nos interesa señalar, desde la perspectiva estratégica y heterárquica de poder aquí propuesta, cómo, en los tramos enunciativos y prácticos de dichos programas, se entrecruzan lógicas de gobierno entre tecnocráticas-neoliberales y morales-pastorales. Esto es como, entre la producción descentralizada, focalizada y precarizada de ciertos sectores de la población, “más pobre de entre las pobres” , se promueve la inversión en capitales y se refuerzan los lazos primarios de sociabilidad “natural” para el “despegue”; mientras que se pretende erradicar males vinculados a enfermedades de los cuerpos físicos, sociales y ambientales, así como costumbres y prácticas que entorpecen el proceso de atención, asistencia e incluso re-inscripción en el juego del mercado.

Según dichas racionalidades políticas y programáticas de gobierno, aquellas poblaciones que no logren dar el salto “serían dejadas a la muerte”, y con ello a la reproducción de la pobreza advenida “innata y destinada”; mientras que, aquellas poblaciones que resistan, serían, en muchas oportunidades, “dadas de muerte y/o a la muerte”, a través de violentas represiones. De hecho, cómo veremos en el próximo apartado, estos tramos discursivos y prácticos pretenden “re-adaptar las malas costumbres y la violencia piquetera”, así como dejar “entre sombras y silenciar”, las prácticas de resistencia y lucha que comenzaban a

ejercerse en la zona del Dpto. Gral. San Martín, donde se instalaba, entre otras organizaciones, la UTD Mosconi.

2.1 Programas de empleo “para” trabajadores pobres

En la provincia de Salta, el crecimiento del desempleo alcanzó su pico en mayo de 1996, llegando al 21,04%, como efecto de la aplicación de la Reforma del Estado Provincial, instalada en diciembre de 1995. El incremento abrupto del desempleo se identificó sobre todo en los adultos varones, ante las escasas posibilidades de reinserción en el mercado laboral, producto del endurecimiento de las condiciones de admisión al mismo.²⁵²

Ante el avance de la desocupación y el advenir de los trabajadores en pobres, así como en un ferviente universo de resistencias y movilizaciones de dichos trabajadores ahora desocupados, se elaboran, en concordancia con los programas de gobierno construidos a nivel nacional, diferentes programas de “empleo” dirigidos, siguiendo la figura del “pobre trabajador válido” (Álvarez Leguizamón, 2010a). Esta se diversifica en la figura de los empleables y los inempleables; para los primeros se pretendía incentivar su capacidad para el trabajo, a partir del fortalecimiento y marco para el despliegue del capital humano, sobre todo mediante prácticas vinculadas con la “capacitación, como técnica eficaz de gestión de la pobreza a nivel local. Mientras que los potencialmente inempleables serían asistidos en los márgenes, evitando los riesgos sociales, que parecieran contener en sí mismos.

El marco legal para el diseño e implementación de estos programas es la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 promulgada en diciembre de 1991, a través de la cual se “integran en forma coordinada las políticas económicas sociales”; se establecen los principales lineamientos para la ejecución de este tipo de programas por parte del Ministerio de Trabajo y se crea el Fondo Nacional de Empleo para hacer frente a su financiamiento. En el ámbito provincial se crea la Unidad de Empleo que implementa programas provinciales

²⁵² La distribución de la población ocupada en los distintos sectores provinciales, muestra un profundo proceso de retroceso del sector industrial y una mayor participación de las actividades comerciales y de servicios. La disminución de puestos de trabajo en la industria manufacturera en Salta fue del 24,2%, valor superior a la caída registrada en el total del país. La incidencia del sector público en la estructura laboral de Salta mantuvo en las últimas décadas un crecimiento constante que se puede apreciar en el Censo de 1991, que muestra que el 22,5% de se desempeñaba en dicho sector. En el período 1983-1994, el aumento del empleo público entre estos años es significativo ya que pasa de 46.549 (sin tener en cuenta los municipios, no poseemos datos completos de los mismos) cargos públicos; esto determina que las erogaciones de personal representen aproximadamente la mitad o más del total de erogaciones durante estos años. En los 90 se busca reducir explícitamente la planta de personal intentando transferir los empleados del sector público al sector privado, fracasando en el intento ya que la posibilidad de inserción de los trabajadores en el ámbito privado resulta casi inexistente, dado la estructura y el estancamiento de nuestra economía, incapaz de generar puestos estables. Barbosa, 2009...op...cit.

dentro del mismo esquema nacional; el financiamiento de los mismos se efectúa mediante recursos del Fondo Provincial de Empleo asignados a Programas de Empleo transitorios. (Aguilar y Ves Losada, 1999). Dichos Programas se ponen en marcha de forma sistemática en Salta inmediatamente asume la nueva gobernación, en 1995, y se subdividen en planes de empleo y de capacitación para el empleo o, según Aguilar y Ves Losada, (1999) “fomento de empleo productivo”. El criterio de focalización de beneficiarios remite a la empleabilidad e inempleabilidad (pobre válido y no válido, útil o inútil) de los mismos, según lo trabajado en el apartado anterior²⁵³.

Los programas de empleo temporario comenzaron en 1993 con los *Programas Intensivos de Trabajo* (P.I.T), que alcanzaron en el nivel nacional aproximadamente a 70.000 beneficiarios/as. Hacia fines de la década de 1990 el programa principal es el denominado *Trabajar*²⁵⁴, además de una importante variedad de programas nacionales. En la provincia de Salta se encuentran en ejecución los siguientes: *Programa de Asistencia Solidaria* (PROAS), de *Servicios Comunitarios*, *Forestar*, *Promoción de empleo privado*, entre otros, que atienden a un creciente e importante número de beneficiarios/as, aproximadamente el 50% del total de desocupados (Barbosa, 2009).

En este tejido programático construido en torno del gobierno del desempleo y los/as desocupados/as se instala, a nivel provincial, una traducción local del *Programa Trabajar*, denominado: *Salta Trabaja*²⁵⁵. Dicho programa de carácter “transitorio y como modalidad local del *workfare*” se encuentra atravesado y orientado hacia el Desarrollo humano y local sostenible; en tanto y en cuanto acorde a las condiciones del mercado

²⁵³ La provincia de Salta absorbió, sobre todo en 1996 y 1997, importantes partidas presupuestarias del Fondo Nacional de Empleo destinadas a paliar una situación de preocupante desempleo, superior a la media nacional. De acuerdo con lo previsto por el Ejecutivo Nacional estas políticas sociales se aplicaron en las ciudades o regiones con niveles críticos de pobreza y desempleo. De ahí que Salta recibiese entre 1996 y 1997 un aporte de \$29.999.525, que sumados a asignaciones provinciales (*Programas Salta Trabaja* y *Salta Solidaria*) totalizaron \$37.395.342. Ahora bien, estos montos destinados a cubrir la ayuda económica de los beneficiarios/as deben complementarse con insumos, materiales e infraestructura aportados por la provincia, que suman la cantidad de \$7.175.403. Evidentemente, este importante monto destinado a políticas activas de empleo tuvo su incidencia en la significativa disminución del desempleo registrada entre mayo y octubre de 1996 (alrededor de 5 puntos porcentuales). A este objetivo se sumaron acciones de capacitación tendientes a habilitar a los desocupados de acuerdo a las nuevas demandas del mercado laboral, aunque generalmente éstas son precarias y de bajo nivel de especialización, no cumpliendo con esas demandas.

²⁵⁴ Si bien el Programa Trabajar en sus cuatro versiones ya fue analizado en el apartado anterior, cabe recuperar la siguiente cita: “...se aconseja continuar con la ejecución de programas que brinden una ayuda económica a desocupados en períodos de búsqueda de empleo, a la vez que permitan mejorar sus posibilidades de inserción laboral; mientras que resulta deseable que, a través de los citados programas, se contribuya al desarrollo de la infraestructura económica y social y al mejoramiento de las distintas comunidades existentes en el territorio nacional”. Consideraciones previas presentes en la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 576/95 de creación del Programa Trabajar y en el Decreto N° 2190/96 del Ministerio de la Producción y el Empleo de Salta, creación del Programa “Salta Trabaja”.

²⁵⁵ Decreto N°2190/96, Ministerio de Producción y el Empleo de la Provincia de Salta, creación del programa Salta Trabaja.

laborar de la época y la creciente desocupación, orienta sus acciones a los grupos de trabajadores desocupados más vulnerables, con el objetivo de que, a través de proyectos de infraestructura económica y social, se contribuya al desarrollo de las comunidades y a mejorar la posibilidad de empleabilidad de los beneficiarios en el ámbito provincial.

Dicho programa, como mecanismo transitorio se dirige a generar condiciones de empleabilidad para los trabajadores desocupados y “capaces”, en un proceso - lento y difícil - de reinserción a un mercado laboral precarizado, flexibilizado y en muchos casos, inexistente (*Salta Trabaja*). Mientras, por otro lado, se presentan mecanismos asistenciales (*Salta Solidaria, Asistir, Servicios Comunitarios*,) dirigidos a satisfacer necesidades básicas y a evitar los riesgos sociales en las comunidades locales, al margen de la permanencia e inserción en el mercado de trabajo, las contraprestaciones tienen aquí un valor útil para los sujetos y las comunidades, no para las empresas y demás espacios de potencial inserción laboral. En este sentido, se hace énfasis en la solidaridad comunal de corte mercantil, promoviendo la construcción de sujetos económicos autogestionados, que a su vez se reducen a prácticas gubernamentales activas en la capital provincial y poblados aledaños, sin tener alcance real en las zonas más afectadas por la desocupación, como el noreste salteño, cuya intervención directa fue ejercida por el Programa Trabajar, dispuesto por el gobierno nacional. Mientras, se apunta a minimizar los riesgos vinculados al posible incremento de la violencia social o las externalidades de la pobreza²⁵⁶, que pueden afectar a los que se mantienen integrados.

A su vez los programas dirigidos a la capacitación, como el *Proyecto Joven y Capacitación para el Empleo*, manifiestan que el mecanismo dirigido a la inversión en capital humano permitirá: “mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral” ante todo a través de “pasantías”. Estos mecanismos dirigidos a favorecer el desarrollo de ciertas competencias para la realización de determinadas actividades, se conjuga con la necesidad de “apoyar el crecimiento de las empresas productivas necesitadas de manos de obra capacitada”. Esto denota la relación ya establecida y analizada en torno a lo propuesto por la OIT (1998) entre la inversión en capital humano - generando condiciones de empleabilidad - y las empresas, los Estados, la sociedad civil y la responsabilidad social.

²⁵⁶ Según Amartya Sen, lo que Rein denomina “externalidades de la pobreza” se pueden ejemplificar del siguiente modo: “A las personas no se les debe permitir llegar a ser tan pobres como para ofender o causar dolor a la sociedad. No es tanto la miseria o los sufrimientos de los pobres sino la incomodidad y el costo para la comunidad lo que resulta crucial para esta concepción de la pobreza. La pobreza es un problema en la medida en que los bajos ingresos crean problemas para quienes no son pobres” (Rein, 1971, en: Sen 1992).

De hecho, las propuestas enunciadas en los considerandos de los programas arriba esbozados, reafirman su carácter transitorio, cuya meta se dirige – al menos retóricamente - a avanzar en las reformas estructurales que mejoren la competitividad de las empresas y eleven el nivel de “equidad social”. Las reformas laborales de la época se considera que reformulan las relaciones laborales entre empleador y trabajador a partir de una base – jurídico y política - que legaliza y motoriza la precarización laboral, por un lado rebajando los sobrecostos laborales que deben asumir los empresarios, pero sin “rechazar” los derechos de los trabajadores (Aguilar y Ves Losada, 1999), los cuales advienen sujetos- autogestivos - de derecho, acorde a la perspectiva utilitarista del mismo, que en caso de trabajadores pobres se instala y garantiza entre mínimos, márgenes y umbrales. En este proceso de transición y gobierno de los trabajadores advenidos pobres, la noción de capacidades revaloriza la “destrezas” o “habilidades” de los pobres, desde una mirada centrada en el “interés” a partir de la cual la falta de recursos se relativiza por las capacidades para conseguirlos, transformándolos e intercambiándolos.

Por tanto, las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas no resultarían de contención tutelar, sino de generación de espacios que posibiliten la libre circulación de competencias y habilidades, en torno de las cuales los sujetos “activos, gestivos, y capaces” advengan “empresariales, empleables” y, si no lo logran o no cumplen las condiciones para serlo, “asistidos y/o sacrificables”. En tal sentido, la condición y situación de pobreza traducida, en muchos casos como “sufrimiento” (sentido y expresado por los sujetos pobres), se supone que debería ser transformada por los mismos pobres en el proceso de autogobierno de la existencia, acorde a las técnicas y mecanismos de gobierno puestos en juego en las prácticas de intervenciones directas (técnicos, talleres, capacitaciones, etc.) e indirecta (criterios selectivo, evaluaciones, etc.), en un acentuado ejercicio de racismo de Estado y de reinención de lo social, en tal sentido.

Ahora bien, estos sujetos están siempre en la posibilidad de “no obedecer”, de des-individualizarse y en tal sentido re-subjetivizarse y así desmontar las redes de poder-gobierno y verdad, que se les disponen. Las relaciones entre gobernados y gobernantes resultan estratégicamente libres y móviles, lo cual se evidencia en el territorio mosconense, en medio y mientras tanto los “trabajadores desocupados y piqueteros” unidos en la UTD se levantaban en pie de lucha, construyendo un espacio – otro – de

autogobierno entre lógicas y prácticas heterogéneas y diferentes a las dispuestas, como analizaremos en el apartado que sigue.

III

“Cortar la ruta es abrir caminos”: Estar siendo trabajadores desocupados y piqueteros, los primeros cortes y toma de rutas. La emergencia y consolidación de la UTD Mosconi, autogobierno, trabajo y recreación.

“...el piquetero era desocupado, yo era el piquetero y era desocupado”
(Juan Nievas, 2013).

“Nosotros no seremos millones acá en Mosconi, pero sí somos miles de millones en recursos naturales que van a todo el país”
(Pepino Fernández, 2013)

“Ellos venían avanzando para el pueblo y tiraban gases. Cuando se pasaban un poco, volvíamos a avanzar nosotros y los hacíamos correr ara atrás otra vez. Así luchamos para que no hubiese más víctimas en nuestro pueblo”
(Primitiva Ruiz, madre de Justiniano asesinado el 11 de mayo del 2000)

En el presente apartado pretendemos analizar, críticamente, el tejido relacional configurado entre poder/gobierno y resistencia, mediante una aproximación profunda a la UTD Mosconi, en continuidad con lo iniciado en el apartado III del capítulo 1. Partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego relacional de prácticas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”, así como en un tejido transaccional de negociación, aceptabilidad y transformación. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, se van poniendo en juego diferentes prácticas de subjetivación, re-subjetivación y des-subjetivación, desde la privatización de YPF (1996-1997) hasta la actualidad más cercana, lo cual se refleja en la construcción del sujeto “trabajador desocupado y piquetero”.

El estudio de caso de la UTD Mosconi resulta ejemplificador en tanto nos remite a una experiencia de lucha de los trabajadores desocupados y piqueteros paradigmática, radical, relevante y vigente, que consideramos está siendo entre y frente a los programas y dispositivos de gobierno dirigidas a las poblaciones “pobres desocupadas”, ante todo.²⁵⁷

En tal sentido, no pretendemos realizar una analítica de la acción colectiva y homogénea

²⁵⁷ Cabe mencionar que la región ha sido una zona de luchas históricas. Entre ellas: a) la reivindicación de los Pueblos Originarios por el derecho al territorio, base de la reproducción social y cultural de sus comunidades. Recordemos que la zona involucrada reúne la mayor diversidad étnica y presenta un importante peso de población indígena siendo asentamientos pertenecientes a distintos grupos étnicos, entre ellos: Guaraní, Chané, Wichí, Chorote, Chulupí. b) Las luchas llevadas adelante por los trabajadores organizados en defensa de mejoras en las condiciones de trabajo y, frente a los procesos de tecnificación de las agroindustrias azucareras (fines de los años ‘60 y comienzos de los ‘70), las luchas por la defensa de los puestos de trabajo. c) Las luchas sindicales en contra de la privatización de las empresas del Estado y por la defensa de los puestos de trabajo. d) las luchas anarquistas y de izquierda local (Petz, 2005...op...cit.).

manifiesta en la forma piquete y/o develar una identidad “piquetera”, sino analizar las prácticas que permiten ejercicios cotidianos de diferenciación y afirmación, en el estar siendo de la UTD Mosconi y sus tramas relacionales concretas y siempre abiertas. De este modo, es posible comprender las transformaciones - locales y cotidianas - experimentadas y realizadas en el espacio de la UTD, ya que “...*la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de creación; crear y recrear, transformar la situación, participar en el proceso, eso es resistir*” (Foucault, 1994c: 423). Se trata de analizar cómo la UTD se configura y re-configura en un tejido relacional de prácticas de gobierno, autogobierno y resistencia en el acaecer de su singularidad y libertad.

Para realizar dicho trabajo analítico, en primer lugar reconstruimos las prácticas y ocupación de las rutas, esto es los piquetes, desde 1997 hasta el año 2002 considerando que en dichos espacios la UTD se instala como un espacio central de interacción y lucha; en tanto en el piquete, no sólo se pone el cuerpo en medio de la batalla, también se construyen interfaces transaccionales entre los trabajadores desocupados y piqueteros y los Estados, las iglesias, las empresas, etc. Observamos cómo, en los piquetes advienen topologías diferenciales, en las cuales emergen las prácticas singulares de autogobierno y resistencia en medio de la batalla. Luego, en segundo lugar, nos detenemos en la instalación de la UTD como principal espacio de referencia y construcción de puestos de trabajo en la zona a partir del 2000, y la astuta modalidad de re-crear los planes de empleo transitorios y subsidios para los desempleados en trabajos considerados productivos y dignos, para la comunidad regional y local en su conjunto.

Para abordar lo antedicho recuperamos entrevistas en profundidad realizados a referentes e integrantes de la UTD, así como entrevistas grupales, material logrado en el espacio de taller, diferentes documentos elaborados por la organización y otros archivos inéditos pertenecientes a los momentos iniciales, entre 1997 y 2000, cedidos por Juan Nieves de su archivo personal.

1. Entre la vida, la muerte, la lucha y el trabajo: los días previos al levantamiento “piquetero” de 1997.

Como trabajamos en el apartado III del capítulo 1, la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi Salta emerge en abril de 1996 en un desesperado y empobrecido mundo del trabajo post privatización de YPF y, crisis de los emprendimientos emergidos de las indemnizaciones a los miles de

empleados/trabajadores ahora desocupados y pobres. La UTD resulta una “unión” de trabajadores desocupados como dieron en llamarse resubjetivisándose los ex/ypofianos, y entre las primeras prácticas de resistencia encontramos la toma del Concejo Deliberante, analizada en profundidad.

El 28 de abril de 1997 la UTD Mosconi emite un documento²⁵⁸ que envía a Carlos “el perro” Santillán, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)²⁵⁹ Jujena, promotora de los primeros levantamientos piqueteros en dicha provincia en mayo del mismo año. En dicho documento se comparten un conjunto de datos obtenidos de las estadísticas “caseras” elaboradas por los referentes de la UTD en 1996. En dichas estadísticas se identificaban a los trabajadores y sus diversos oficios, y a los trabajadores desocupados en el advenir de la privatización de YPF, ante todo.

Dichos datos nos muestran un panorama de las realidades locales que no se leía en los diarios, no se comunicaban mediante discursos de gobernación y/o presidencia, no se conocían tal cual estaban siendo sentidas y experienciadas por quienes eran sus protagonistas. La meta de dicho trabajo de identificación y cuantificación de los trabajadores desocupados, se dirigía a reducir al mínimo la cantidad de inscriptos, es decir, mediante la lucha por trabajo digno, los inscriptos en dichos listados debían reducirse. Pues, nos remarcaba Juan: “...no nos interesaba ser un sindicato, en el cual aumentar la cuota y las inscripciones es la meta, al revés, nos interesaba ser cada vez menos, menos pobres y desocupados” (Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013). Sin embargo, las estadísticas y los índices de desocupación aumentaron, con

²⁵⁸ Dicho documento será citado en el cuerpo del texto como: UTD, 1997...

²⁵⁹ La Corriente Clasista y Combativa (CCC) surge a partir de las agrupaciones clasistas, que desde la década del 60 venían trabajando sindicalmente en los gremios del llamado “proletariado industrial y rural, estatales” (incluyendo docentes y judiciales) y de servicios. Agrupaciones que tuvieron por entonces su principal hito en el SMATA (gremio de los mecánicos) de Córdoba. Durante la dictadura, esas agrupaciones se mantuvieron activas, y tuvieron manifestaciones en las luchas de la época. Durante el período constitucional (1983), dentro del gremio de los mecánicos produjo otro hito histórico: la huelga y toma de la fábrica Ford durante 18 días en mayo del ’85. A fines de los ’80 y ya iniciados los años ’90, entre los hechos más destacables, están las luchas del SEOM (sindicato de los municipales) de Jujuy, que liderados por Carlos “Perro” Santillán movilizaron toda la provincia, fueron el corazón del Frente de Gremios Estatales, y en la lucha por salarios y condiciones de trabajo y de vida determinaron la caída de cinco gobiernos provinciales. En el año ’94, las luchas se extendían, dando lugar a que se conformara la Mesa de Enlace sindical, que reunió a por el entonces MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos liderada por Hugo Moyano), por lo que era el CTA (Confederación de Trabajadores Argentinos liderada por Víctor De Gennaro) y Carlos “Perro” Santillán (coordinador general de la CCC), líder de las agrupaciones clasistas. Esa Mesa decidió la primera Marcha Federal, que a través de cuatro columnas marchó desde toda la Argentina hasta la Capital Federal, y llegó a pie a la Plaza de Mayo. Días después de esa marcha, se constituyó formalmente la Corriente Clasista y Combativa como forma orgánica donde se reunían las viejas agrupaciones clasistas y las nuevas que se iban constituyendo al calor de la lucha: “La Corriente Clasista y Combativa no es ni se propone ser una central de trabajadores; es una corriente político-sindical que trabaja en el seno de todas las centrales con una línea de independencia de clase”. Ver: Joaquín Moreno, Diciembre del 2003 en: <http://argentina.indymedia.org/news/2003/12/160770.php>; consultada mayo, 2012.

lo cual los inscriptos eran cada vez más, en medio de lo cual la UTD iba cobrando formas²⁶⁰. En tanto, Juan Nievas, sostuvo siempre que ellos no eran desocupados inútiles, reafirmandose como trabajadores: “*ni inservibles, ni vagos, somos trabajadores, somos trabajadores desocupados, ustedes [el gobierno] y el sistema nos convirtió en desocupados pero nosotros queremos seguir trabajando*”²⁶¹. Entre algunas de las tramas recogidas del documento antedicho encontramos las siguientes:

...tenemos algunos agricultores de algodón, soja, porotos y ganadería en escasa comercialización, éste departamento siempre dependió del eje económico de YPF, hasta su privatización pero luego de consumado el propósito del gobierno nacional con la complicidad de los diputados que alentaron la misma ciento veinte mil habitantes esperan la mentada reconversión que habla éste presidente de la nación sin poder avizorar al menos comida para lograr sobrevivir, es por ello que como Argentinos que interpretamos que todo en la vida es LUCHA hemos comenzado desde hace un año a recorrer el departamento con él único fin de efectuar sondeos que nos aporten lecturas en torno a las problemática sociales. (UTD, 1997).

Esto nos muestra: que: sobre una población de 20.000 habitantes existen 5.796 desocupados (60%).²⁶²

Jóvenes de 18 a 25 años	1.023	Varones
	387	Mujeres
De 25 años en adelante	3.864	Varones hasta 65 años
	522	Mujeres
TOTAL	5.796 DESOCUPADOS	

²⁶⁰ Encontramos varios trabajos que remiten al uso y producción de estadísticas en los movimientos de desocupados y piqueteros, tal es el caso de Manzano (2013) quien muestra cómo la conformación del movimiento de desocupados de La Matanza se inicia a través de la producción de estadísticas, en tanto un proceso complejo de apropiación de un saber sobre las poblaciones que había recaído en manos del Estado pero que en ese contexto, favoreció la apertura de canales de negociación en torno a la entrega de alimentos. Al mismo tiempo, esa producción estadística colaboró en la producción de la desocupación como problema social y del desocupado como sujeto colectivo. También Petz (2010) pone en contrapunto la producción de estadística por parte de la UTD y los operativos para el departamento de San Martín realizados desde la Dirección de Estadística Provincial (1996, 1997 y 2001), comparando por un lado los resultados e índices alcanzados y al mismo tiempo, como lo hace Manzano en el trabajo citado, sosteniendo la importancia de los mismos para la intervención estatal y privada. En nuestro trabajo, resaltamos la producción de estadísticas, en tanto las mismas nos permiten identificar a la UTD cómo la organización de trabajadores desocupados que, por un lado, no es sinónimo de sindicato, ni de clientelismo político-partidario, mientras que se afirmaba como espacio de unión en lucha por el trabajo y por la vida y, a su vez, tejía redes transaccionales para con los estados; considerando tal como dicen las autoras, que la elaboración de las estadísticas caseras tenía influencia, sobre todo en el ejercicio clientelar de gobierno, no por ello, sostenemos, generaba dependencias, más bien abría hiatos en torno de los cuales la UTD iba cobrando formas.

²⁶¹ Año 1997, plaza central de Mosconi, Hipólito Yrigoyen. Palabras extraídas de una de las tantas asambleas que se sucedieron pos privatización. Material cedido por Julio Rojas, periodista de la localidad de Mosconi.

²⁶² La tabla abajo descripta respeta el formato y la modalidad de enunciación elaborada por los integrantes de la UTD en el documento trabajado. La estadística de sondeo señalada se realizó entre abril de 1996 y el 31 de diciembre de igual año y se extendió a las localidades de: Pocitos, Aguaray, Tartagal, Gral. Mosconi, Embarcación y Gral. Ballivián. El documento es firmado por Julio Carrizo, secretario administrativo y Juan Nievas Secretario General de la UTD.

También se remarca la alta deserción escolar, desnutrición infantil, personal adultas anémicas, sin ninguna obra social, con la gravedad de los hospitales públicos sin provisiones de remedios. Se identifica como problema el *Tráfico de Drogas* (en cursiva en el documento), el cual se considera está en ascenso y con la participación de muchos ex trabajadores de YPF, el consumo ante todo se realiza por parte de los jóvenes que “no tienen ninguna posibilidad de trabajar”, lo cual trae aparejado la “prostitución infantil y de personas mayores, en muchos casos madres e hijas”.

En referencia específica a los trabajadores de YPF, ahora desocupados, se remarca: “...*fuimos tres mil quinientos trabajadores que perdimos nuestros puestos de trabajo*” (UTD, 1997). Las empresas dueñas son PLUSPETROL Y TECPETROL que escasamente absorbieron el recurso humano capacitado por YPF, solamente el 7% del total pudo ser absorbido, según señala el documento. Por su parte, REFINOR en la destilería de Campo Durán se quedó con un plantel mínimo de técnicos, ya que antes de ser vendida fue equipada con sistemas computarizados que requieren escasa mano de obra²⁶³:

...como referencia decimos que YPF gastó únicamente en los tres últimos años trescientos millones de pesos y fue vendida en sesenta y cuatro millones, en lo que hace al destino del grueso del personal el (43%) se dedicó a la conformación de cooperativas y sociedades en número fueron 70 quedando a la fecha solo 5 que medianamente se mantienen, esto se debió a la falta de experiencia en el campo comercial y por supuesto los LOBY privados derribaron a bancarota a los emprendimientos de los ex trabajadores de YPF. (UTD, 1997)

El resto del personal, el 50%, se dedicó al comercio independiente (kioscos, panaderías), emprendimiento de transporte, trafics, remises, etc., que también se extinguieron: “...el empobrecimiento comenzó en el mismo momento de recibir los montos por indemnización que fue en el año 91/92 fue sistemática su desintegración, porque el gobierno en ningún momento se abocó al estudio de las consecuencias vividas hoy” (UTD, 1997, resaltados nuestros).

Entre las paradojas que se mantienen hasta la actualidad más cercana se remarca que: “...*las empresas tienen planificado hacer gasoductos al Paraguay y Brasil y nuestros habitantes tienen que comprar gas en garrafa*” (UTD, 1997).

²⁶³ Se remarca cómo las empresas no buscaron alternativas laborales por lo cual sufrieron por ej., consecuencias en épocas de lluvia, como cortes de caminos que dificultaron los traslados de las propias producciones, la destilería de Campo Durán se señala que procesa la refinación de 10.000.000m³ diarios de gas y más de 3.000m³ de petróleo, nafta, kerosene y gases licuados entre otros; y en la carga de embasado que está ubicada en Mosconi, generalmente cargan 120 camiones con destino a los distintos puntos del país. Lo antedicho da cuenta de un metódico conocimiento de la situación zonal y regional respecto de la producción y distribución del gas y petróleo y, con ello de las ausencias de proyecciones laborales por parte de dichas empresas y de los gobiernos de turno.

Al final de documento se explicita el compromiso de acompañar la marcha convocada por la CCC para el 2 de mayo en San Salvador de Jujuy, haciendo referencia a una reunión que habían tenido en el domicilio de Santillán días previos, remarcando que se trata de “...unificar fuerzas para hacer frente a los graves problemas que sufrimos como ARGENTINOS” (con mayúsculas en el documento), en tanto se trata de ser: “...colaboradores que luchan por una patria justa y soberana”.

Los tramos enunciativos recogidos del Documento producido por la UTD dan cuenta de la situación real que atravesaba a la región por aquellas épocas de desguace, privatización y desregulación político-gubernamental. Ante todo, se remarcan los efectos del programa de gobierno de la época centrado en la Reforma y modernización del Estado, entre ellos el marcado empobrecimiento, como consecuencia de la profunda desocupación y ausencia de puestos y opciones de trabajo, como fue señalado en el apartado II.

Retomando lo desandado, también observamos cómo se pone de manifiesto la relación vincular entre diferentes espacios de lucha en la zona y en la provincia, en este caso con al CCC, que en mayo de 1997 sería protagonista del gran piquete en Jujuy. Durante 12 días, entre el 20 y el 31 de mayo de 1997 se realizó el corte de ruta antedicho, la demanda:

...giró en torno al drama de la desocupación que afecta a miles de jujeños. Sobre una población total de 600.000 habitantes y una población económicamente activa de 186.000, existen aproximadamente 56.000 desocupados plenos y subocupados (31%). La mitad de ellos son jóvenes y la otra mitad padres y madres de familia, lo que lleva a 168.000 el número de personas que no tienen a diario lo necesario para vivir dignamente. (PCR Y PTP, Jujuy, 1997)²⁶⁴

El grito exigía: “trabajo, trabajo y trabajo” en concordancia con lo acontecido en Cutral Có²⁶⁵ y luego, en Tartagal y Mosconi, los desocupados eligieron el camino de la lucha,

²⁶⁴ La fuente a la que nos remitimos en un tríptico elaborado por El Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido del Trabajo del Pueblo (PTP) jujeños en mayo de 1997, el mismo lleva por título: “Los piqueteros le torcieron el brazo al gobierno”: Dicho tríptico será citado en el cuerpo del texto del siguiente modo: PCR Y PTP, Jujuy, 1997...

²⁶⁵ En junio de 1996 se había producido el primer corte de ruta en Cutral-Có y Plaza Huincol, provincia de Neuquén, motorizado ante todo por “trabajadores desocupados” (en su mayoría ex/ypefianos) reunidos en una multisectorial comunitaria. Dicho levantamiento tuvo su singularidad en tanto marcó un proceso de autonomización de los trabajadores desocupados respecto de los “funcionarios políticos de turno y de las redes, ante todo, clientelares dispuestas en el ejercicio de gobierno”. Si bien, el conflicto se inicia por la considerada “traición” del gobernador Sapag en referencia al cierre de negociación para la instalación de una planta de fertilizantes de la empresa Agrium en Cutral-Có, esto se enmarca en una larga data de negociaciones oscuras del anterior gobierno (Sobich), que prometía la generación de miles de empleos “transitorios” para localidades desbastadas por los efectos del neoliberalismo, ante todo, en relación a la privatización de YPF. Esta decisión política es tomada como en puntapié inicial para la movilización que terminará en una masiva práctica piquetera de corte y toma de rutas, acompañados de asambleas. Luego de varios días de lucha se firma un acta, que primero fue acordada oralmente, en la cual el gobernador se comprometía a entregar víveres, remedios, colchones y a reinstalar los servicios de luz y gas para quienes lo tuviesen cortado. Esto fue sentido como un logro, una “batalla

cortando las rutas, la respuesta del gobierno provincial y nacional en el primer corte de Ledesma, el 20 de mayo, fue una brutal represión: *“Sin embargo, el pueblo de Ledesma en vez de achicarse, enfrentó a los gendarmes con piedras, hondas y, en un determinado momento, con armas bajo calibre, hasta lograr que la fuerza represiva retrocediera”* (PCR, PTT, Jujuy, 1997). Aparecieron formas incipientes de organización de autodefensa como: “sección baldes”, “sección hondas”, y “sección piedras”. El segundo corte, realizado el 22 de mayo en San Pedro de Jujuy fue el inicio de la generalización el conflicto y el jueves 29 de mayo, se había instalado 23 cortes de ruta, paralizando prácticamente el tránsito de vehículos y personas en todo el territorio provincial. Estos piqueteros serían calificados de *“delincuentes, borrachos y vagos”* por los diferentes estratos gubernamentales y sociales, lo que no permitió en ningún momento un declive de la lucha, sino una reafirmación de la misma.

Con la conformación, el 31 de mayo, de la Comisión de Piqueteros y Desocupados de la Provincia de Jujuy acompañada por el Frente de Gremios Estatales, se lograron los siguientes acuerdos: la creación de 12.579 puestos de trabajo a través del Plan Trabajar y de Obras Públicas, ante lo cual los piqueteros firmaron en disconformidad por considerarlo insuficiente; también se consiguieron subsidios que se entregarían a las mujeres y el registro y ubicación laboral o distribución de tareas de contraprestación acorde al Trabajar serían realizadas por la Iglesia y por la Coordinadora de desocupados, así se afirma:

...el pueblo en general y, en especial modo la juventud, han mostrado el camino para torcerle el brazo al gobierno que, hasta hace poco, aparecía como invencible. Ha quedado demostrado que es posible derrotar esta política de hambre y entrega y, su la lucha es masiva, también a los gendarmes con que pretenden sostenerla. (PCT Y PTP, Jujuy, 1997).

El documento y relato de los trabajadores desocupados jujeños, en consonancia con lo que a continuación trabajaremos sucedía en Mosconi y Tartagal por marzo-abril de igual año, refleja cómo la lucha, a nivel micro, se dirigía a ciertos modos de ejercer el poder y “no por el poder”; a partir de lo cual se ponían en marcha prácticas astutas de resistencia y negociación.

ganada”, pero al poco tiempo se sintieron los efectos de dicho acuerdo, ante todo cuando los productos entregados no alcanzaban para todos y cuando a los días los piqueteros terminaron aprobando el pedido de derogación de la ley que avalaban el contrato con Agrium y el llamado a licitación a la planta de fertilizantes. A menos de un año, en abril de 1997, se realiza otra pueblada en la zona con los trabajadores desocupados al frente y con la decisión de diferenciarse de “aquellos piqueteros” que a través de diferentes mecanismos puestos en juego –clientelismo, cooptación, amenazas, etc. - habían sido tildado de traicioneros, sobre todo por el acta firmada con Sapag, a partir de lo cual se reafirman ya no como piqueteros, sino “como fogoneros”, en referencia a los fogones realizados en las rutas. Esto va a diferenciar a los fogoneros del sur, de los piqueteros norteros. Bonifacio, 2011: 131-160.

1.1 El primer gran piquete: la afirmación de los sujetos trabajadores desocupados advenidos piqueteros unidos en la UTD Mosconi.

“...estamos dispuestas a morir acá”

(Juan Nieves, 2013).

Acorde a lo desandado en diferentes trabajos de investigación que nos anteceden y como fue esbozado, los llamados “movimientos piqueteros” comienzan con las primeras olas de movilizaciones con los legendarios cortes y puebladas de Neuquén, Salta y Jujuy en los años 1996 y 1997 y se extiende hacia el oeste del Gran Buenos Aires (especialmente en La Matanza)²⁶⁶ cuando en 1998 se consolidan las dos grandes “corrientes sindicales del movimiento piquetero tal es el caso de la Federación de Tierras y Viviendas (FTV) y la CCC, que desde ese año hasta el 2003, constituyeron un bloque sólido caracterizado por la fuerte tendencia a la negociación y la institucionalización. En este período también se conformaron los llamados “grupos autónomos o independientes”, Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez (MTR) y El Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano (MTD Solano), en el sur del Gran Buenos Aires, los cuales, ante la falta de soportes serán los más castigados en la confrontación desigual con las estructuras clientelares y la Policía (Svampa y Pereyra, 2003: 340).

En abril de 1997, en continuidad con los primeros levantamientos de 1996 en Mosconi y Tartagal, poco después del primer corte de ruta en Neuquén, los habitantes de las localidades del noreste salteño organizaron un corte, que junto con los descriptos en Jujuy desencadenaron una crisis que se extendió a todo el país. Dicha movilización tiene como condiciones de posibilidad y emergencia la situación antes señalada, de extrema pobreza, desocupación, desamparo, depresión, olvido y violencia post privatización de YPF.

En este contexto, que termina en el corte de ruta en Tartagal y Mosconi y que hace al primer levantamiento organizado de diferentes sectores (concejales, maestros, trabajadores desocupados, etc.) encuentra cierta “inspiración” en lo sucedido en Neuquén, aunque el emergente del conflicto remite a la privatización, más reciente, de la compañía de electricidad local. Dicha empresa pasa a exigir puntualidad en el pago de las facturas a los usuarios, acostumbrados a mantener un retraso de varios meses. Ello genera la movilización de un grupo de vecinos, para evitar los cortes de luz, a lo cual se suman diferentes sectores.

²⁶⁶ Para ampliar, ver: Manzano, 2007...op...cit.

Se organizan varios apagones y una huelga de hambre iniciada por un comunicador social (Marcelo Gerez) y por una concejal de Mosconi, del Frepaso (Graciela Zriki)²⁶⁷ lo cual se transformó en un corte de ruta, de siete largos días:

...le pregunté a “Tilo” era Tomas Santich medico ¿cuánto días crees vos que Marcelino pueda estar allí en huelga de hambre? Y me dijo que no más de 3 días y tomar mucha agua. Empieza el lunes a la mañana frente a la puerta de la Municipalidad de Tartagal y después aparece una puntera política que nada tenía que ver con nosotros, el miércoles levantamos la huelga de hambre pero con una propuesta que hace un compañero del UPCN que es Samuel Tejerina que dice: “Levantamos la huelga de hambre pero con objetivo que vamos al corte de ruta” y bueno seguimos. El día 7 de Mayo nos vamos a la ruta de Mosconi, de Tartagal a Mosconi hay 9 km y hacemos dos piquetes, al sur y al Norte. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013)²⁶⁸.

Es allí, remarca Juan (2013), cuando surge la palabra “piquete” y la radicalidad de la lucha de los trabajadores desocupados norteños, ya que: *“...los de Cutral Có eran fogoneros, porque hacían fogatas y nosotros piqueteros, porque obturábamos todo”*. A su vez, en Mosconi a diferencia de lo acontecido en Neuquén, el levantamiento no se manifestó solo en contra del gobierno nacional y provincial, sino también de las empresas multinacionales asentadas en la zona.

Diversos sectores se fueron sumando al corte hasta consolidar una multisectorial, lo cual favoreció la continuidad del corte: *“Nos reunimos con los sectores más representativos, originario, desocupado, empresario, estudiante, en definitiva la confluencia de todos los sectores. Significaba el arte de saber combinar la necesidad de todo aquel que quería tener respuestas”* (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013). Al mismo tiempo, ligado al intento de justificación del corte emergió el discurso de “reparación histórica” (Pereyra, 2006), lo cual hizo posible que convergieran diversos intereses. Un ejemplo de tal afirmación la señala el referente de la UTD José “Pepino” Fernández (ex/ypefiano, referente del área técnica de la UTD): *“Estamos parados sobre el petróleo, y en nuestras casas cocinamos con leña”²⁶⁹.*

La restructuración de este piquete en la zona de Tartagal y Mosconi parecía repetir las distancias entre los sectores dirigentes ubicados al norte (a la entrada de Mosconi) y, los grupos de desocupados, en el piquete sur (a la altura del cementerio local), ahora bien:

²⁶⁷Frente País Solidario, partido político conformado por una alianza de sectores disidentes del peronismo, izquierda y militantes de los derechos humano.

²⁶⁸En los párrafos que siguen recuperamos, ante todo la voz de Juan Nievas, referente y fundador de la UTD Mosconi, por un lado, porque su relato nos permite reconstruir el trazo histórico y problemático a analizar y desandar y por otro lado, porque dicho relato no ha sido prácticamente trabajado en profundidad en otras investigaciones doctorales que nos preceden. Por tanto, la voz y los saberes manifestos y expresos en las entrevistas a Juan, revisten de originalidad y singularidad nuestro trabajo.

²⁶⁹Clarín, 12 de mayo de 1997. “Deciden mantener el corte de ruta”.

...no solamente había piquete norte y sur sino que además había ocho piquetes internos, esos estaban en el norte. (...) En el piquete sur viniendo de Mosconi a Salta y el piquete sur para Tartagal. Ahí también teníamos piquete internos en diferentes lugares estratégicos, hasta te podría decir con conocimientos de suma importancia. Cuando yo iba imprevistamente como veedor llevando comida para que a nadie le falte la comida ni provisión de agua había mujeres que me quitaban las ganas de seguir escuchando porque era tan emocionante lo que escuchaba de sus bocas, nos defendimos como gatos panza arriba! Salimos a través de los medios de comunicación a pedirles a las escuelas por favor que vengan, a todos los sectores por favor que lleguen, era medio día y empezaron a llegar las delegaciones de estudiantes de la universidad, de todo. (Juan Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

El funcionamiento y toma de decisiones, en el espacio del piquete y alrededor de la UTD, acorde a las resonancias de izquierda que atravesaban a los referente por ese entonces, era asambleario y cada asamblea contaba con la participación de entre 10.000 y 20.000 personas.

Sin embargo, la mayor división se vio a la hora de las negociaciones con el gobierno provincial. Un sector de los piqueteros, representados dentro del grupo de los 20 delegados de la comisión negociadora rechazó la primera propuesta: “...había una estrategia totalmente intransigente hasta que no haya respuestas, todos buscábamos respuestas y el acuerdo era hasta tanto no logremos todas las respuestas juntas no nos íbamos”.²⁷⁰

Retomando la cronología diaria del acontecimiento, el viernes 9 de mayo luego de un día completo de corte ya se hacía referencia a una orden judicial de desalojo en función de la cual actuarían las tropas de la Gendarmería Nacional. En tal contexto se hizo presente un enviado del gobierno provincial en calidad de negociador, se trataba del ya mencionado Sergio Nazario, Secretario de Seguridad que había sido denunciado como represor durante la dictadura militar en 1976. Si bien, el secretario repudió cualquier posibilidad de represión pidió, públicamente, la liberación de la ruta, cuando pasado un tiempo el gobernador reconoció haber firmado el decreto que autorizaba a gendarmería a actuar en el territorio. A tal efecto, el gobierno nacional solo se hizo presente mediante la Gendarmería (Benclowicz, 2013: 184).

Varias horas después del arribo de Nazario y su propuesta de 1000 planes Trabajar a \$100 mensuales, una avioneta “bombardeó” con panfletos a los manifestantes con un mensaje del gobernador, dicho texto contenía contraofertas del gobierno nacional,

²⁷⁰ Síntesis de conversación en los galpones de la UTD con diferentes trabajadores desocupados y piqueteros que participaron de aquel primer gran corte, setiembre 2012.

supuestamente, negociadas por el gobierno provincial e invitaba, entre amenazas veladas de reposición en consonancia con el discurso de la ley y el “abuso del derecho de uno para con los derechos de las mayorías”, al desalojo de la ruta para empezar a instrumentar las medidas. Dicha práctica de gobierno se asemejaba a las “acciones psicológicas de un ejército invasor” (Benclowicz, 2013). En el panfleto se reafirmaba la propuesta de los 1000 planes Trabajar, mientras que apenas mencionaba la creación de subsidios de desempleo en función de la Ley de Empleo, ya trabajada. Nieves nos comentaba, cómo él conversó con el enviado de gobernador, en los siguientes términos: “...*viendo la cantidad de gente que había dice: “yo traigo lo propuesta del gobierno 1000 planes de sociales de 100 pesos”, y yo le dije: ¿usted está hablando en serio?, el tipo me mira soberbio y me dice: “sí es lo que me dijo el gobernador”* (entrevista, 2013). Se pueden avistar las diferentes lógicas trazadas en torno a los modos de gobierno (entre la reforma, la represión y la obediencia) y las lógicas de resistencia, atravesadas de indignación y afirmación de ese “no” a ser gobernados según los modos dispuestos por las políticas públicas codificadas en el Estado.

En este contexto, los piqueteros habían elevado un petitorio que no había sido atendido. El día 10, un sector estaba dispuesto a aceptar las propuestas del gobierno y levantar el corte, posición que fue derrotada en una asamblea cuya resolución rechazó dichas propuestas, exigiendo la presencia del Ministro del Interior Corach, como mediador. De hecho, los petitorios se dirigen, por parte de la Asamblea de Vecinos de Tartagal al ministro del interior. Mientras tanto, se instalaban nuevos piquetes en Aguaray y se cortaban distintos pasos vecinales.

Los diarios locales tildaban a estas manifestaciones de “anárquicas” (el Tribuno, 14/05/1997), lo cual llevó a la radicalización de la protesta, ante todo en el llamado piquete norte, cuando el 11 de mayo un grupo de manifestantes confisca 6.700 ejemplares del diario el Tribuno – propiedad del gobernador - y los queman públicamente.²⁷¹

En el mismo día los docentes aprueban la huelga general en el departamento y, en asamblea popular se aprueba el petitorio definitivo. El petitorio ampliado de 35 puntos se votó en afirmativo en el piquete ocupado por trabajadores desocupados lo cual reafirma el

²⁷¹ La lucha vinculada con el corte y ocupación de las rutas afectaba seriamente a los intereses de distintos sectores económicos, ante todo del petróleo, que tenían cortadas las exportaciones a Bolivia, el transporte y despacho de combustibles hacia el sur y el proceso de refinado, según el Tribuno una de la más afectadas fue Refinor, (12 de mayo de 1997). Ante tal situación, las empresas intervienen intentando ofrecer puestos de trabajos, entre otras cuestiones.

avance de su influencia y posición en el proseo de transacción y afirmación de la lucha y autonomía respecto las disposiciones gubernamentales.

El nuevo petitorio comienza reclamando garantías para que no haya represiones jurídicas ni de ningún tipo, una vez levantado el corte. Después figuran reivindicaciones de los trabajadores desocupados, se exigen: 5.000 fondos de desempleo, la creación de 2.500 puestos de trabajo y por parte del Estado nacional de 400\$ de bolsillo más salario familiar y obra social; la creación de 5.000 puestos de trabajo a través del Estado y las pymes, para las que se pedían créditos blandos. Con estos puestos de trabajo se sugería que se iría absorbiendo a los beneficiarios de los fondos de desempleo que se suponía resultaban transitorios entre la pérdida de un empleo y el encuentro de otro, también se pedía el final de la deuda de los servicios públicos para los desocupados y la cobertura de obra social gratuita para los mismos. Identificamos cómo se consideraba y construía el trabajo, según estas poblaciones en pie de lucha, en torno de la posibilidad de salvar el quiebre social a través de seguros sociales y trabajos dignos, de tipo productivo.

A su vez, dicho petitorio pone de manifiesto las diferentes voces y lógicas²⁷² que formaron parte de este primer gran piquete. Ante todo, se rechazaban los ofrecimientos de los Planes Trabajar, programa fuertemente criticado por la izquierda local de gran influencia en los movimientos piqueteros zonales, y que defendían, en su lugar, la implementación del seguro de desempleo sin restricciones, por lo cual se rechazaban los subsidios de desempleo previsto por la Ley de Empleo de 1991, ya mencionada. Por otro lado, se observa la superposición de dos criterios en el reclamo de puesto de trabajo: en uno se exige al Estado que los cree de modo directo, y en el otro que lo haga mediante pymes, otorgando beneficios crediticios a las mismas. Así la creación de puestos de trabajo, reivindicación de los de trabajadores desocupados, se entrecruza con la de los pequeños y medianos empresarios locales. Dicha mediatización se inclina, finalmente, del lado de la creación de puestos de trabajo directo, en consonancia con la solicitud de los trabajadores desocupados.

²⁷² También encontramos un conjunto de reivindicaciones comunes, por ejemplo: el reclamo de una mejor distribución de regalías se especificó mediante un proyecto de ley que adjuntó al petitorio, y se incluyó otro proyecto de ley referido a la creación de la zona franca adicional a Mosconi. Estas exigencias, sumadas a la condonaciones de intereses por falta de pago de cuotas de préstamos inmobiliarios y la reformulación de los planes de pago, según las posibilidades de los adjudicatarios, el equipamiento de los hospitales públicos, la ampliación de presupuesto para comedores escolares, la suspensión en el departamento de la Ley Federal de Educación, la instalación de un planta de gas envasado en Aguaray, la construcción del dique Itiyuro I, la realización de obras de infraestructura y mejoras de rutas y puentes, etc., formaron un bloque común de reivindicaciones solicitadas por la multisectorial que se nucleaba en el corte de 1997.

También, acorde a lo antedicho, las reivindicaciones dirigidas a las empresas se encuentran en el petitorio, además de la exención de impuestos se reclama la refinanciación y desactivación de medidas de cierre, la refinanciando de deudas bancarias, la condonación de interiores y punitorio y el otorgamiento de préstamos, la adjudicación de tierras fiscales al sector maderero y agropecuario; así como darle prioridad por ley, al desarrollo de empresas de ex/ypefianos y financiamiento de tasas subsidiadas y préstamos blandos para empresas de servicio relacionadas con la industria petrolera. Estas solicitudes se encuentran expresadas en los distintos ítems del petitorio que se reagrupan de modos diferentes entre el primero y el segundo.

El petitorio y las modalidades de solicitud muestran la multiplicidad de relaciones de fuerza y sus respectivas estrategias, puestas en juego en el primer corte y ocupación masiva de rutas.²⁷³ Podríamos identificar en dichos tramos discursivos una clara diferenciación de “clases”, sin embargo, lo que aquí nos interesa, remite a observar cómo se constituye un marcado proceso de autonomización y afirmación de los trabajadores desocupados y piqueteros como tales, en un heterogéneo haz de relaciones que, entre la vida y la muerte, reconfiguran las subjetividades y recrean los espacios de encuentro, unión y lucha.

Ante tal situación, el gobernador J. C. Romero se negó al diálogo y la presencia masiva en la ruta, incluyendo a varios dirigentes políticos y empresarios de la zona impidió que la manifestación fuese reprimida:

No, Romero no venía nunca porque fue un cobarde. Entonces le dijimos valla y dígle a su gobernador que mejore la propuesta porque no tenemos ninguna intención de levantar ningún tipo de medida de fuerza hasta tanto no se mejore este tipo de cosas, y llega Cargniello que ahora es arzobispo acá y él sí interviene. Fíjate la incidencia y la influencia del poder religioso ante todos estos eventos. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Acorde a lo enunciado, avistamos el rol de la Iglesia Católica en los procesos de lucha. En el caso antes señalado, el enfrentamiento también fue impedido por la mediación del Obispo de Orán, Monseñor Cargniello, quien discutió con los funcionarios oficiales y con la comisión de vecinos para que la negociación fuese exitosa. Sin embargo, las prácticas de intervención por parte de dicho Obispo dejan de manifiesto la puesta en juego de diversas estrategias dirigidas a la fragmentación entre lo que bautizaban: piqueteros y

²⁷³ Entre dichas reivindicaciones y solicitudes se encuentran las del sector empresarial que se dirigían al sector patronal, reclamando como, por ejemplo: reducción de aportes, las cuales no fueron aprobadas en tanto son se correspondían con los reclamos de los trabajadores desocupados (El tribuno, 11 de mayo de 1997).

desocupados, cuando para los piqueteros ubicados en el piquete norte, estos eran sinónimos. Entre algunas de las estrategias que dan cuenta de lo antedicho, según el relato de uno de sus protagonistas, el obispo y un conjunto de personas que lo acompañaban habían entablado una conversación, sin previa decisión asamblearia, con un conjunto de desocupados, a quienes diferenciaban de aquellos “piqueteros”, que estaban al frente de las barricadas, se prometía para los desocupados puestos de trabajo que no eran reales:

...estos habían inventado que había 1.500 puestos de trabajo genuino de varias empresas multinacionales, cuando investigamos donde están las firmas no había ninguna firma y ¿cuál era el artificio de monseñor Cargniello? Era ese. Y le dije: “Escúcheme, habíamos quedado que todo lo que se tiene que hablar lo resolvemos previamente en asamblea y usted no lo está haciendo”, y él no me dio bolilla. Entonces él dice: “Vengo a este piquete muchachos porque con los únicos con que no se ha negociado es con los piqueteros”. Mira vos!! Cuando asociábamos piqueteros y desocupados en lo mismo. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Práctica estratégica inicial de fragmentación, que se acompañaba de injurias y represiones directas en torno de estas poblaciones, explícitamente, “no deseadas” entre la moral pastoral, el poder de la ley y la disposición policial del gobierno de Estado, tal cual analizamos en los apartados anteriores.

De hecho, en espacios de conversación y entrevistas grupales se nos remarcaba cómo²⁷⁴:

-...después se desvirtúa, el piquetero era aquél que realmente llevaba como vanguardia la lucha para la reivindicación, después desvirtuaron porque cobraban peaje, saquearon, ¡hacían cosas que vos no podés controlar! y ¿quién aprende eso? el enemigo. ¡El enemigo te tira una damajuana de vino en un piquete y anda a pararlo! Hacían pelear a compañero contra compañero.

-Porque yo veía que había una soberbia, que como habíamos sido trabajadores ellos decían que “nos habíamos gastado la plata de la indemnización en coches, mujeres y en tomar whisky en los cabarets”, pero bueno ¡eso es fácil decirlo!, pero ¡ustedes no fueron capaces de generar desde el gobierno una situación de trabajo para toda la gente, para eso están ustedes! ¿Sino para que están?

En este espacio heterogéneo de relaciones estratégicas, la presencia de los Ministros de Producción y Empleo del gobierno provincial en la zona, también fue recargada con propuestas para los empresarios ofreciéndoles una amplia refinanciación, a partir de lo cual, los sectores madereros y agropecuarios obtendrían créditos y tierras fiscales (El Tribuno, 14/05/1997). Ante dicho panorama, el sector empresarial, en particular, planteó la aprobación y se retiraron del corte el 13 de mayo.

Finalmente, el jueves 15 de mayo, con un enorme dispositivo de “represiva seguridad” en manos de la Gendarmería, y bajo la mediación del obispo, se formó un acta acuerdo y se

²⁷⁴ Síntesis de conversaciones, realizadas al modo de “entrevistas grupales”, en los galpones de la UTD con diferentes trabajadores/as desocupados y piqueteros, que participaron de aquel primer gran corte, en setiembre de 2012.

levantó el corte. Las “actas acuerdos” no solo comprendían la obtención o el aumento en el acceso a planes de gobierno, también tenían entre sus puntos: el pedido de obras de gas, agua y cloacas; la reestructuración de la deuda a los ex/trabajadores de YPF, el reconocimiento de la deuda histórica, la reactivación de los puestos de trabajo, entre otros. Allí se obtienen 5.200 planes de \$220, el otorgamiento de mil fondos de desempleo de 220\$ y 1.400 puestos permanentes en petroleras privadas; mientras que los empresarios, que quieran adherirse al Plan de refinanciamiento de deudas, deberían comprometerse a crear, por lo menos tres puestos de trabajo²⁷⁵, lo cual invirtió el otorgamiento de puestos de trabajo mediante pymes, según lo solicitado en el petitorio.

Ahora bien, el manejo de los planes era ejecutado, en ese momento, ante todo por el municipio local, en torno de lo cual en las entrevistas y conversaciones realizadas a lo largo del trabajo de campo se señala, con constancia, que allí comenzó el juego clientelar de los llamados “punteros”:

Un día teníamos 220 pesos o dólares que hoy serían como 2000 mangos más o menos. Vos ponele el valor de esa época, eran dólares en la convertibilidad (...) yo estaba en Tartagal con Pepe Barraza, Pepe y viene una puntera, una tipa y dice: “Lo de Mosconi es Mosconi y Tartagal es Tartagal” entonces querían bajar de 220 a 160 pesos. Pues, su propuesta era: “Hay una decisión del gobierno de la nación y también de la provincia, ¿Que quieren, que vallamos de nuevo a la lucha? Porque hoy tenemos la oportunidad, ¿cobramos por 2 años 160 pesos o cobramos por 1 mes los 220 pesos?”. ¡Mira vos la jugada que hace! Y no quedó en 160 pesos, sino en 150 pesos, eso fue una maniobra. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Este ejercicio estratégico de manejo y re-manejo de los fondos obtenidos para distribuir, temporalmente, planes que hacían a la gestión de la pobreza extrema en la cual vivan estos hombres y mujeres, da cuenta de los artilugios que, en el suelo local, hacían que la pobreza sea administrada entre los mínimos y básicos, mientras que se abrían canales a partir de los cuales, en torno de las lógicas microconductuales de perfil neoliberal, sean los propios pobres en campos de transacciones desiguales, amenazantes y oscuras, quienes “autogestionen” su pobreza. Sin embargo, la aceptación de los planes y las negociaciones por parte de los trabajadores desocupados y piqueteros, no solo respondieron a la imperante necesidad de apenas sobrevivir, también abrieron campos de transacción creativa y diferente, que iban a reafirmar cada día la subjetividad crítica del trabajador - desocupado y ahora piquetero - en la constante e incansable búsqueda del trabajo digno, en tanto y según enunciaciones nativas: “*los Trabajar, no eran trabajo*”.

²⁷⁵ Acta acuerdo complementaria, entre los representantes del gobierno de Salta y los representantes de las manifestaciones del Dpto. Gral. San Martín, 14 de mayo de 1997.

En tal sentido, observamos cómo el levantamiento de 1997 fue mucho más lejos que el de 1991 trabajado en el capítulo 1, sobre todo por el proceso múltiple, heterogéneo y abierto de voces, integrantes y lógicas que conformaron el espacio llamado multisectorial de lucha y re-subjetivación creativa. En dicho espacio y contexto histórico específico se reafirmó la subjetividad de los trabajadores desocupados y piqueteros “unidos” en la UTD, en el territorio local y comunal de un modo creativo y deferencial al dispuesto por los programas dirigidos a ejercer el gobierno “a través de la comunidad”.

1.2 El desbloqueo, en 1999: entre la lucha, el poder de la ley-espada y los campos transaccionales de relación

“...sabían que eso seguía siendo una hoguera eso...”

(Talleres UTD, setiembre 2011)

El segundo gran corte de ruta, en 1999, comienza por un conflicto con el gremio estatal Asociación de Trabajadores del Estado ATE, puntualmente, por el despido de 162 empleados municipales en Tartagal. El 10 de noviembre, se inicia una huelga y en asamblea se decide dar comienzo al corte:

...iban a despedir 162 empleados municipales de Tartagal y había empezado a movilizarse mucha gente y un día yo pasaba por la municipalidad con Pepino y viene un periodista y me hace una nota, me dice: ¿Cómo lo ve Juan al tema de acá? Mira le digo: La dirigencia sindical de los municipales está confiada que un factor administrativo a través de la justicia de Salta le puede sacar un fallo a favor cuando realmente el que dirige todo esto es Juan Carlos Romero que quiere despedir gente, yo no veo que realmente haya una respuesta favorable a los trabajadores. Si esto no propicia una medida contundente, entendamos por contundente la medida que saben hacer los trabajadores y los desocupados, no habrá respuesta. Eso quedó ahí. Días después, estaba yo en mi casa y viene la negra Inés, jera una negra que pegaba como varón una trompada! (...) yo tenía una casa muy grande hecha con el esfuerzo de mi trabajo y la había hecho a propósito porque tenía un depósito inmenso atrás y a Pepino le gustaba pintar pancartas y se pasaba allí todo el día. Ese día mientras desayunábamos me preguntaron cómo veía yo al tema de la municipalidad de Tartagal y les dije: Estuve escuchando y cada vez se va debilitando más eso, creo que tenemos que ver como participamos si querés vamos ya. Fuimos y copamos la asamblea. (Juan Nieves, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013)

El día 13 de diciembre se cumplían 33 días de movilizaciones, ollas populares apagones de los municipales de Tartagal reclamando la reincorporación de los despedidos. Esa mañana la policía no permitió la instalación de la olla popular por lo cual se produce un enfrentamiento y los manifestantes deciden realizar una asamblea, Juan Nieves referente de la UTD Mosconi quien propone el corte de la ruta nacional 34 para profundizar la lucha, considerando también que el día 31 de diciembre había rumores de que los planes

trabajar caducarían el 31 de diciembre por lo cual los trabajadores desocupados se sumaban a la protesta: Luego se vota el corte:

...Entonces venia encabezando con Pepe Barraza y varias personas de Tartagal para Mosconi, ¡hacía un calor insoportable, yo tenía la frente en carne viva por todos los días que estuve ahí! Allí comienzan a preocuparse ellos porque ven que nuestro objetivo era de concientización y político del pueblo, de la gente. ¡Viene la policía y nos da una biaba! Primero estábamos un grupo de municipales y cuando viene la gente de las zonas periféricas del pueblo que lindan con la ruta, los jóvenes como trofeo decían: “Juan mirá lo que lo logramos” y le quitaban los escudos, les quitamos prácticamente todo. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

En la marcha sigilosa desde Tartagal hasta el lugar del corte había muchas mujeres madres, indígenas, amas de casa, estudiantes, empleados municipales despedidos, desocupados, jubilados, también medios de prensa que acompañaban, la gente se iba sumando e incluso aportando alimentos, agua mineral y demás elementos, para poder resistir en la ruta. Algo a resaltar, que diferencia este corte con el del 97', fue la ausencia de “empresarios locales y/o referentes directos del sector gubernamental”. El cántico que acompañaba la caminata fue: “*Que se prepare el gobierno provincial y nacional porque el pueblo de nuevo va a ganar*”²⁷⁶.

Una vez instalados los piquetes en Mosconi, liderados por la UTD, apareció la policía realizando una fuerte represión mediante bombas de gases lacrimógenos y balas de goma intentando dispersar y confundir, según enunciaciones nativas. Dicha represión conlleva a la detención de Hoyos dirigente local de ATE, la batalla duró unos 40min, la policía se refugió detrás de los camiones hidrantes y a eso de las 16 hs. los manifestantes tomaron como rehenes al comisario Gaspar y el agente Avilés, que fueron desarmados y desvestidos; se los subió arriba de un camión cisterna con combustible, que de alguna manera hacia de barrera para impedir el paso, mientras se lo señalaba como garantía para lograr la libertad de Hoyos:

Nos han reprimido, a mí todavía me duele el lomo por los palos que me han pegado! entonces le dije ¡no tengo nada que hablar con vos, el pueblo va a hablar con vos! hemos hecho parar un camión tanque y lo cruzamos en la ruta y lo pusimos arriba a uno que fue después segundo jefe de la policía de acá, se llamaba Gaspar, la gente le tiraba acullicos, lo insultaban, le hacían cosas, lo han humillado, pero no los dejé que le hagan iniquidades

²⁷⁶ Entre 1997 y 1999 se conformaron diversas organizaciones, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de los planes (SITRAP) fue uno de los principales emergentes, el mismo fue impulsado en Tartagal después de la pueblada del PO y fue la primera organización de desocupados de dicha localidad, predecesora de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) y luego la Coordinadora de Desocupados-Polo Obrero (CTD-PO). Se denota como, en Tartagal, el PO pudo agrupar a diferentes referentes y activista, entre los principales José “Pepe” Barraza, dicha influencia no tuvo una traducción local en términos electorales, sí comunal y, en el 2001 se fragmentó porque varios integrantes-referentes se mantenían en la estructura de militancia del partido justicialista. En el caso de Mosconi, Juan Nievas, referente de la UTD tenía una formación en el Partido comunista, pero no identificaba el proceso organizativo mosconense con el mismo, como sucedió en Tartagal.

¡lo podían matar! Y lo tuvimos que canjear como un gran héroe, un gran dirigente a Fermín Hoyos por ese tipo, cuando Fermín Hoyos llegó a la ruta se metió al furgón de los canas, ese que tienen para llevar presos, entonces ¡mira que injusticia, la historia que lo juzgue después pero esa es la realidad. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Según el documento²⁷⁷ aquí trabajado se considera que: “...la policía de la provincia fue de este modo derrotada y humillada, esto fue el primer triunfo de la gente, que mas allá de amedrentarse se consolidó con firmeza en los piquetes” (Dcto, UTD, 1999).

El martes 14 por la madrugada se hace el trueque de rehenes y en una asamblea se elabora un petitorio de 10 puntos, mientras que se realizan diferentes manifestaciones de solidaridad en la localidad de Gral. Güemes en Jujuy, etc. Por su parte, a través de Sonia Escudero, miembro del gabinete del gobernador Romero, se anuncia que no se va a negociar con los piqueteros y se califica de “absurdo el petitorio” lo cual causa malestar en los participantes del corte.

El petitorio tenía los siguientes puntos:

- Reincorporación de los 162 despedidos del municipio de Tartagal.
- Continuidad de los planes Trabajar, con un mínimo de dos años y un salario de \$400, obra social y aportes previsionales.
- Sanción de una ley provincial que impida el despido en la administración pública.
- Obra social gratuita para todos los desocupados.
- Que las empresas petroleras de la zona cumplan la promesa contraída en 1997, de crear 1.400 puestos de trabajo.
- No a la privatización de los organismos de la administración pública, no a las privatizaciones de la salud y la educación.
- Pago inmediato del programa de desocupados, régimen de jubilaciones anticipadas para todo el personal desvinculado del Estado.
- Renuncia inmediata de todos los funcionarios de la municipalidad de Tartagal.
- No a la persecución de los luchadores y retiro inmediato de las fuerzas que arribaron a la localidad.

²⁷⁷ La reconstrucción de dicho corte y toma de la ruta 34 la realizamos mediante entrevistas en profundidad y a través de un documento escrito que la UTD, en el cual se detalla día a día y hora a hora lo acontecido en el mismo, dicho texto solo tiene por título: “Acontecimientos”. Es el único documento de este tipo encontrado, el resto de los relatos en torno de los cortes se encuentran en los medios gráficos de comunicación y en los relatos orales de quienes participaron de los mismos. Dicho escrito será citado en el cuerpo del texto del siguiente modo: Dcto, UTD, 1999...

-Que las petroleras respeten los convenios colectivos de trabajo realizado con La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).²⁷⁸

Es importante señalar cómo se repiten la mayoría de los puntos elaborados en el extenso petitorio de 1997:

...¡fijate vos como se comprime el desarrollo de todo un plan reivindicativo que no se cumplía desde el noventa y siete al noventa y nueve que recién estalla de nuevo porque desafiamos a través de esta lucha con los municipales! Toda la prensa estaba sometida, sujeta, impedida a través del poder político a decir esto o aquello!. (Juan Nievas, referente-fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

A su vez, en estos piquetes de diciembre a finales de siglo, cuando el programa de La Alianza ya había asumido el poder ejecutivo nacional, las represiones policiales resultan más explícitas y se realizan abiertamente. El poder de dar muerte, además de aquel instalado de “dejar morir” a los pobres incapaces de autogestionar su propia pobreza, se cristaliza en las violentas represiones, así como en las marcadas tendencias a criminalizar y judicializar la protesta.

De hecho “la hoguera estalló” y los trabajadores desocupados y piqueteros dijeron “no” a estos modos de ser gobernados, poniendo en jaque el orden dispuesto, transgrediendo los límites y reconfigurando los espacios territoriales, las subjetividades y las tramas relaciones entre gobernados y gobernantes. En tal sentido, el día 16 de diciembre se decide en Asamblea que cada 3 hs. se permitiría el tránsito por transcurso de una hora, lo cual es acompañado de una orden judicial de desalojo de la ruta, en un marcado proceso de “criminalización e inmediata judicialización” de la protesta, esa noche señalan: “...*fue la noche que más gente hubo sobre la ruta*” (Dto, UTD, 1999). De hecho, ese día los comandantes de gendarmería y el juez a cargo sobrevolaron la zona y se rumoreaba que la gendarmería se movilizaría. Igual día por la tarde, en asamblea, ATE propone que se forme un grupo de 4 delegados para viajar a Bs. As., y negociar, directamente, con el gobierno nacional, la misma fue rechazada por mayoría asamblearia, ya que la asamblea solicitaba que los gobernantes fuesen a la ruta. Sin embargo, el piquete sur accede viajar a Buenos Aires, lo cual es considerado por los trabajadores desocupados aunados en la UTD “una maniobra divisionista de ATE” (Dcto, UTD, 1999); mientras que en ese día el intendente de Tartagal informa la reincorporación de los cesanteados.

²⁷⁸Síntesis realizada por Benclowicz, 2013: 200 en base a resúmenes elaborados sobre los datos publicados en: “Que piden los manifestantes”, El Tribuno 15 de diciembre de 1999; “La clase obrera de Salta comenzó una lucha gigantesca”, Prensa Obrera, N°651, 23 de diciembre de 1999.

Al otro día, en el suelo del corte se modifican las estrategias levantando cada una hora por la mañana y otra por la tarde para el tránsito vehicular. Esa mañana llega a Tartagal el jefe de la tercera regional de Gendarmería con asiento en Córdoba para cumplir la orden de desalojo, los trabajadores desocupados y piqueteros manifestaron: “...*resistir cualquier avance de la fuerza, cruzando en la ruta un camión con dos tanques de combustible*” (Dcto, UTD, 1999).

Luego de la reunión en Buenos Aires, el domingo 19, los trabajadores desocupados que estaban en la ruta consideran que, en torno a la generación de puestos de trabajo las respuestas no fueron favorables y señalan, según lo relatado por Juan Nieves (2013): “...*en Buenos Aires solo se reciben promesas*”, por lo cual deciden continuar con el corte. Al igual que en 1997 los trabajadores desocupados sostienen la lucha. Es el 21 de diciembre cuando arriban a la zona funcionarios nacionales y técnicos del Plan Trabajar y se realizan negociaciones con los mismos.

El 20 de diciembre de 1999, un día antes, Juan Carlos Romero, gobernador de la provincia emite una solicitada en el diario el Tribuno, en la cual deja planteada la posición del gobierno salteño respecto de los acontecimientos sucedidos en Tartagal y Mosconi. En primer lugar, remite al despido de los 162 trabajadores municipales depositando directamente la responsabilidad en el intendente local y señalando que el mismo los ha decidido reincorporar, y en segundo lugar refiere a la solicitud de continuidad de los planes Trabajar, señalando que resultan: “...*emprendimientos que, como se sabe, dependen del gobierno nacional, mientras se indica que las autoridades nacionales se han comprometido a otorgar la continuidad de los mismos*”. En segundo lugar, hace explícita referencia a la judicialización de la situación, amparándose en la Constitución nacional y la ley de seguridad interior para “castigar y declarar ilegal” el corte del tránsito en la ruta nacional, a partir de lo cual afirma: “...*mi gobierno tiene la más absoluta confianza en que el magistrado interviniente, la autoridad nacional y el organismo de seguridad mencionado, sabrán resolver en tiempo y forma, la situación creada*” (J.C.R, en: El Tribuno, 20/12/1999)

A su vez, en dicha solicitada se señala que, el gobierno provincial ha tenido especial “preocupación por mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres del interior de la provincia” y que, puntualmente en el departamento Gral. San Martín ha desarrollado un plan de reactivación para el desarrollo, sobre todo en torno de obras dirigidas a infraestructura de salud y educación, viviendas, agua, luz, más un plan de créditos para

microemprendimientos y pymes para productores. Mientras que se ha destinado al departamento el 80% de los planes “especiales de Trabajo”, tras lo cual se afirma que: “...debemos continuar combatiendo el desempleo, afianzando los programas sociales en marcha”, (J.C.R, en: El Tribuno, 20/12/1999). Observamos cómo las políticas sociales de empleo para pobres, tal como fue trabajado en el apartado IIB del presente capítulo, resultan los mecanismos de “combate” al desempleo, cuyos logros de gestión se depositan en los mismos desempleados pobres y sus comunidades locales, mientras que las realidades de los habitantes de la zona, en pie de lucha, no reflejaban “el desarrollo” promovido.

Ahora bien, en una especie de confesión, el gobernador reafirma que siempre “se ha sometido al imperio de la ley y solo la ley”, tras lo cual:

...respeto toda forma de protesta, personal o sectorial- ello es parte de mi profundo compromiso con el sistema democrático- mientras la misma no esté basada en la violencia, la intimidación, los secuestros extorsivos o la privación ilegítima de la libertad de nuestros comprovincianos. (...) mi gobierno ha dado sobradas muestras de su vocación de diálogo con todos los sectores, pero jamás será cómplice de la violación de los derechos y las normas que nos permiten convivir en una sociedad civilizada (...) no solo comprendo, sino que también me solidarizo con todos aquellos que son víctimas de la exclusión social. Pero no se puede exigir reinstauración de algún derecho conculcado, si en ese acto se violan otros derechos. (J.C.R, en: El Tribuno, 20/12/1999).

Nos detenemos en dichos tramos discursivos, en tanto los mismos nos retrotraen al modo estratégico en torno del cual es utilizado el “poder de la ley y la ley como poder” en los albores del discurso neoliberal, con resonares soberanos, instalados en la Salta de esta época. Esto nos remite a las consideraciones realizadas por Hayek (1995) en referencia a que en el arte neoliberal de gobierno el Estado no desaparece, sino que se reconfiguran de modos singulares recreando las condiciones para que el mercado –competencia, propiedad privada y desigualdad- sea siempre posible, a partir de lo cual el poder de policía también tiene que ser recreado con vigor y visibilidad.

Siguiendo a Foucault (2000a), entonces, el modo en el cual el gobernador salteño de la época utiliza la ley en relación con el derecho remite a un permanente ejercicio de subordinación y, a su vez de condiciones de posibilidad para que los sujetos sujetados advengan, paradójicamente, “sujetos de derecho”, en los marcos y en los ámbitos civiles de un contrato que, artificialmente, asegura libertades individuales en medio de juego de poder, gobierno y verdad “para el mercado”: “...el discurso y la técnica del derecho tuvieron la función esencial de disolver, dentro del poder, la existencia de la dominación, reducirla o enmascararla para poner de manifiesto: los derechos legítimos de la

soberanía, por un lado, y la obligación legal de la obediencia, por el otro” (2000a: 35 - 36).

Por tanto, los tramos discursivos en la Solicitada de 1999 dejan ver cómo mediante la retórica del derecho y el poder de la ley se instala, al modo de “responsabilidad política”, el hecho de poner fin y con ello de sujetar e incluso “dar muerte” a quienes no cumplan con lo pactado y, de este modo, entorpecen el libre juego de individuos aunados en mecánicas hordas de convivencia contractual.

Ahora bien y en simultáneo, en tanto allí adonde hay poder hay resistencia, el campo del piquete – de batallas y transacciones - seguía en pie. Es en la madrugada del jueves 23 cuando, luego de negociaciones varias, se firma un acta acuerdo: con la propuesta de mantenimiento de los 1.963 “planes Trabajar” y el otorgamiento de otros 3.000. Los 2.653 planes provinciales también fueron prorrogados, pero apenas por un mes, 5.000 cajas de alimentos, los 162 municipales reincorporados, la seguridad de que no habría despidos en los planes trabajar existentes y la extensión de los planes provinciales. En una asamblea con más de 5.000 personas se aceptan los ofrecimientos por parte del gobierno y se decide levantar el corte, con un gran festejo popular, después de 10 días de lucha” (Dcto., UTD, 1999).

Si bien se celebraban los logros, efecto de la lucha, no dejaba de considerarse que la problemática de los trabajadores advenidos pobres no se solucionaría con la sola obtención de planes:

...se siguen reconquistando planes, porque lo que se lograba eran planes y cosas así para algunos sectores que no habían cumplido con las peticiones anteriores, (...) fijate vos cómo han ido sosteniendo hasta hoy toda una problemática laboral con los planes asistenciales (Juan Nievas, referente, fundador de la UTD, entrevista, julio 2013).

Entre las procedencias y los comienzos, estos trabajadores desocupados y piqueteros consideraban que los Planes Trabajar, ante todo, resultaban “no trabajo”, tras lo cual todo pedido de continuidad y/u otorgamiento de los mismos iba acompañado de la solicitud de diversos mecanismos que garanticen la seguridad social (obra social y aportes, así como jubilaciones anticipadas), tal cual fue obtenida en los años en los cuales, sobre todo los ahora ex/ypefianos, fueron “trabajadores ocupados y dignos”. De hecho, Juan Nievas, como ya fue señalado, con un marcada formación de izquierda, nos decía respecto de la pobreza, el trabajo y los planes sociales para pobres: “*Vos tenés que ver ¿para qué nos sirve la pobreza? A mí no me sirve ser pobre, pero a algunos sectores que gobiernan sí les conviene*”. *De ningún modo nos transformaríamos en un ejército de desocupados al*

servicio de aquellos que están en el poder” (entrevista, julio 2013) palabras contundentes que cristalizan las diferentes lógicas y prácticas de gobierno y autogobierno local incipiente, que va dando forma, a su vez, al campo de transacciones, en el cual dichas lógicas se yuxtaponen, se entrecruzan, se diferencian y se ocultan.

En este diagrama de poder, gobierno y resistencia, en 1999 y con mayor radicalidad en el 2000 acontece un desbloqueo, a partir de que los trabajadores y piqueteros organizados en la UTD comienzan a gestionar los planes y programas de un modo autónomo, respecto de los punteros políticos y los municipios.

1.3 Los cortes y puebladas de principios del siglo XXI (2000-2001): radicalización, muerte-s y autonomización.

Si bien, los inicios de la UTD se sitúan entre 1996 y 1997, la mayoría de los testimonios coinciden en que el proceso de autonomización de las organizaciones de desocupados comienza entre fines de 1999 y 2000. Sobre todo, a partir del establecimiento de obtención, control y distribución de planes por parte de la organización piquetera local UTD, lo cual le permitió adquirir relevancia y capacidad de maniobra, en el contexto de la política local.

La instalación del programa de gobierno de la Alianza en 1999, según fue trabajado en el capítulo 1 apartado I, implicó un vuelco en algunos de los mecanismos de ejercicio de las políticas sociales. No teniendo la capacidad organizativa necesaria y con la decisión de no dejar en manos del PJ la distribución, ante todo, de planes y programas, se alentó por parte del Estado y sus principios de subsidiariedad, la participación de las llamadas “organizaciones intermedias” (Svampa y Pereyra, 20003).²⁷⁹ En este contexto, la UTD Mosconi comienza a proyectar y concretar sus propias prácticas de gestión de los planes entregados más allá del municipio y los llamados punteros políticos locales. Si bien esto propiciaba el autogobierno de la UTD y su instalación como referente en la localidad y la región, por otro lado o por el mismo, el gobierno nacional reducía significativamente la cantidad de planes sociales, en Tartagal y Mosconi, se habría pasado de un total de 4.192

²⁷⁹ Hacia abril del 2000 se instalaba una disputa política entre el gobierno de La Alianza y el PJ nacional, el primero se negaba a aprobar planes sociales, lo cual afectaba la red clientelar del PJ en todo el país, la cual dependía en gran parte de esos recursos para sostener sus funcionamiento, ante todo en Bs. As. A su vez, el gobierno pretendía aprobar la “reforma laboral” que profundizaba la flexibilidad y precariedad del régimen de trabajo instalado en el programa de gobierno de los años precedentes. Si bien el PJ se manifiesta en oposición a dicha medida, poco tiempo después la Ley de Flexibilidad Laboral fue votada por la mayoría de los diputados justicialistas. Y, tiempo después, salió a la luz la ya señalada práctica de coima bautizada “La Banelco”, en la cual el gobierno nacional recurrió al pago de sobornos a varios legisladores para lograr la aprobación de dicha norma (Ver: Svampa y Pereyra, 2003...op...cit...; Benclowicz, 2013...op...cit.).

planes otorgados en 1999 a 1.917 en 2000.²⁸⁰ (El Tribuno, 20/05/2000). Por tanto, los acuerdos firmados en diciembre de 1999 con los piqueteros no se respetaron ni cumplieron, tras lo cual se organizaron nuevos cortes de ruta entre marzo y abril de 2000.

En Tartagal y Mosconi, el malestar emergido en las disputas interpartidarias a nivel nacional, se manifestó en la instalación de ollas populares frente a la municipalidad de Mosconi y el 2 de mayo se realiza el tercer corte en la ruta 34. Si bien, se recibió el apoyo del intendente local, el corte se inicia por la decisión de mujeres beneficiarias del Plan Trabajar, que solicitaron el apoyo a la UTD para reclamar por la continuidad y falta de pago de los subsidios de contraprestación (Lapega, 2001). El papel de las mujeres siempre ha sido relevante y fundamental en los levantamientos piqueteros, así como en las organizaciones del trabajo diario y la mantención del mismo. El relato de Ana María de 42 años madre soltera de 3 niños da cuenta de la lucha de las mujeres en la zona:

Claro que estoy cansada. Pero no queda otra que venir al piquete. Si no vengo a la ruta, todo vamos a perder el Plan Trabajar ¿Y mis tres hijos?- uno enfermo que van a comer? (...) no pierdo la esperanza de que algo se va a lograr. Aunque después nos tienen “pelotudiando” con los papeles en la Unidad de Empleo. Te hacen ir y venir, te hace esperar y mientras tanto mis hijos tienen hambre. Pero a eso nadie lo ve. O no lo quieren ver. (Ana María Mecías, Clarín, noviembre del 2000).

Dicho relato nos muestra, por un lado el espacio del piquete como un topos de resistencia, configurado según necesidades, prioridades y órdenes de realidad diversos; y por otro, el modo en el cual funcionaban las políticas sociales y de empleo dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, en tanto los tiempos no respondían a la urgencia, ni se adecuaban a las realidades de estas madres y mujeres, entre otras cuestiones ya analizadas.

Los cortes extendidos en la región comenzaron a ser reprimidos por gendarmería Nacional, sin embargo, el de Mosconi y Tartagal seguía en pie. El 7 de mayo, aproximadamente, se disuelve la relación entre referentes políticos locales y los trabajadores desocupados, cuando deciden celebrar el aniversario del primer corte del 97 con pirotecnia y las explosiones hicieron pensar a los pobladores mosconenses que se estaba reprimiendo en la ruta, por lo cual todo el pueblo se manifestó en la misma. Esto denota los lazos solidarios que se instalaban en el torno de la desesperación y la astucia de quienes, en pie de lucha, solo pedían “trabajo y dignidad”.

²⁸⁰ En el momento de asunción del nuevo gobierno nacional, octubre de 1999, había un total de 89.665 beneficiarios de planes Trabajar en todo el país, para mayo del 2000, solo quedaban 29.066 (Svampa y Pereyra, 2003...op...cit.).

Para este entonces desde los ámbitos gubernamentales se constituía un “comité de crisis”, a partir del cual se pretendían realizar desalojos mediante fuerzas policiales y judiciales, aplicando la ley 24.059 de Seguridad Interior ya mencionada por el gobernador en sus solicitada de 1999. La emergencia de dicho comité redunda en las versiones en torno a que, entre los piqueteros se encontraban grupos armados, lo cual fue difundido, entre otros, por el Ministro del Interior de la Nación, Federico Storani. Sin embargo, cuando realizaron la pesquisa policial solo encontraron gomeras, palos y bombas molotov.

Observamos cómo, las prácticas de especulación y represión ejercidas por el gobierno local, la policía provincial y la gendarmería, pretenden imponer la “*ley del desorden*” (De Certeau, 1995: 66). En tanto, en el juego entre poder y representatividad aquellas instituciones y voces oficiales pretendían recuperar algunas estrategias, que le habían permitido alcanzar el posicionamiento y “prestigio” en los lugares de poder instituido. De este modo, poniendo el eje en el “desorden” que, supuestamente causaron las revueltas, puebladas y piquetes, fue y sigue siendo posible fundamentar las dificultades para gobernar, lo cual se profundiza en Salta, mediante la marcada referencia a la “sublevación imprudente e inmoral” de los piqueteros.

En esta línea, el 9 de mayo del 2000, mueren de modo dudoso, dos de los manifestantes: Orlando Justiniano y Alejandro Matías Gómez. En camino a buscar gomas para quemar en el piquete fueron atravesados por una bala. Los integrantes de la UTD y sus madres, respectivamente, sostienen que ambos fueron asesinados brutalmente por la policía provincial. Según relatos nativos, también por la acción policial, el 10 de noviembre de igual año, muere Aníbal Verón y, el 17 de junio del año 2001 de un modo dudoso en un enfrentamiento con gendarmería mueren Carlos Santillán y Oscar Barrios.

Los relatos de las madres de Omar Barrios y de Orlando Justiniano resultan, además de estremecedores, esclarecedores del contexto en el cual se realizan las prácticas de resistencia y se reconfiguran las prácticas de gobierno, entre la vida y la muerte:

...yo puse un médico particular, me dijo que no había ni sangre para afuera. La bala era especial, entro, explotó y agarró todas las arterias a Omar lo mataron cuando fue a ver a los animales él estudiaba en la técnica y dejaba cuando conseguía trabajo. También hacia ciclismo. Luego que vuelvo del hospital de Tartagal los gendarmes me querían revisar les dije un montón de cosas, estaba tan dolida (...) Después, al otro día vuelven a querer revisarme! Todavía no están conformes con lo que hicieron, les dije. Supuestamente la bala vino de arriba de los tanques, de ahí las tiraban. Los piqueteros no van a tener esas balas especiales y no se van a amatar entre ellos.²⁸¹

²⁸¹Reportaje a la madre de Omar Jesús Barrios en: Suplemento seminario *hoy*, del Partido Comunista Revolucionario, 11 de julio del 2001.

Por su parte Primitiva, mamá de Justiniano, comenta cómo la muerte de su hijo el 11 de mayo del 2000 la alentó a participar activamente de las puebladas y piquetes en la plaza del Aguante, relatando que luego de salir a la lucha regresó enferma a su casa y fue internada en el hospital de Tartagal donde relata:

...escuchaba cómo gritaba esos pobres heridos. Yo me recordaba de mi hijo ¿por qué el gobierno tiene que mandar a hacer todas estas cosas? Todo le ha tocado a los chicos jóvenes, a ninguna persona adulta. Esa es la rabia, la bronca del pueblo, porque nos llevan a los jóvenes Seremos una provincia en la que nos llevan las riquezas. Seremos pobres por eso, de nuestra provincia viven muchos países, se llevan la fortuna de nosotros, pero tenemos que pelear, defender, luchar, porque si no vamos a morir de hambre, de necesidades²⁸².

Los tramos enunciativos atravesados de dolor, tristeza, bronca y teñidos de muerte ponen de manifiesto, una vez más, el cruento ejercicio de racismo de Estado encargado de “dar muerte” – y dejar morir - a estas poblaciones, explícitamente, “no deseadas”; mientras se entrecruzan lógicas de gobierno y resistencia en torno de la “pobreza, el hambre, la riqueza territorial ante todo, y la lucha”, siempre en un delgado hilo entre la vida y la muerte.

En tal sentido, en este haz de relaciones estratégicas, el día 12 de mayo la policía provincial y la gendarmería reprimieron violentamente la manifestación, la cual se había organizado previamente por el rumor de que la represión resultaría inminente. La policía y gendarmería lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, palos y perros, mientras que los piqueteros se defendieron con palos, gomeras y piedras, y luego de varias horas los piqueteros retrocedieron hacia el pueblo de Mosconi. Acorde a lo trabajado por Benclowicz (2013), el enfrentamiento se manifestó, según la policía, entre “enemigos”, tal cual guerra, en tanto el gobernador que se encontraba en Israel aseguraba que había piqueteros infiltrados, mientras que el oficial de gendarmería a cargo del operativo aseguraba que: “...habían realizado una operación de limpieza como se les había ordenado”. Infiltración, limpieza, muerte, ejemplo reactualizado del ejercicio neocolonial de racismo de Estado de modo directo. Al amanecer, la policía ingresa a Mosconi y allana hospitales y domicilios particulares buscando a los piqueteros, ahora prófugos y perseguidos en sus propias casas y en sus propios suelos. Dicho acontecimiento terminó por provocar el levantamiento total del pueblo mosconense, bautizado como “pueblada”,

²⁸² Doña Primitiva, Madre de Justiniano, en: Suplemento seminario *hoy*, del Partido Comunista Revolucionario, 11 de julio del 2001.

la cual superó en envergadura y profundidad a cualquier manifestación local, regional e incluso nacional.

En este levantamiento, en la localidad de Mosconi entre vírgenes y gomeras, un grupo de piqueteros tomó la comisaria y, la policía se replegó hacia la ruta nacional, también se incendió la municipalidad, el Concejo y el cajero automático del Banco Macro. Luego se fueron a la ruta, mientras que el pueblo tartagalense también se levantaba y salía de sus casas para manifestarse y solidarizarse. La tregua la logra la intervención de la Iglesia Católica.

El petitorio definitivo armado en el corte de ruta constaba de 31 puntos, entre los más relevantes y en continuidad con los ya enunciados se encuentran: los referidos a la regalías solicitando el aumento del porcentaje de las mismas considerando que prácticamente la totalidad del petróleo de Salta es extraído en dicho departamento.²⁸³ En el acta compromiso establecida mediante delegados, entre los cuales se encontraba José Pepino Fernández de la UTD, se aprueba la intervención de los municipios locales (Mosconi, Tartagal y Aguaray), además de que se garantice la aprobación de 3.000 Planes de Empleo transitorio, entre julio y diciembre, señalando que los mismos estarían bajo el control de la iglesia y de los representantes de los manifestantes; también se solicitaba la reducción de 12 a 8 hs de trabajo en las petroleras para que puedan ser creadas más fuentes de trabajo inmediatos, además de que se retomen los compromisos no cumplidos de las petitorios elaborados en 1997 y 1999, los cuales redundarán a lo largo de la historia de la lucha piquetera, hasta nuestra actualidad más cercana.

Es interesante señalar un punto del petitorio, que aún permanece vigente, y que remite a la independencia del departamento San Martín de la provincia de Salta. Benclowicz nos recuerda que ya para la década de 1930 por las déficits en materia de salud, educación, derechos laborales y condiciones comerciales, se manifiesta la transformación de dicho Departamento en una provincia autónoma, lo cual se justificaba señalando que se encontraban desprotegidos por los legisladores provinciales. Recuperando el siguiente texto del diario La Frontera de 1935: “...en tales condiciones no será extraño que pensemos en valernos de nuestros propios esfuerzos y empezar a vivir una independencia obligada por las circunstancias apuntadas (...) e ahí como más pronto que parece

²⁸³ La comisión oficial estaba integrada por el Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Viqueira, el Secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Bustelo, el Secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Ceballos y los subsecretarios del Interior y de Asuntos Institucionales del mismo ministerio Martucci y García Batallan. También la integraron dirigentes de la CGT regional Salta, de la CGT de la línea oficial Aguilera. Datos Clarín 13 de mayo de 2000, en: Pereyra, 2006: 17.

*Tartagal llegara a ser la capital de una nueva republiqueta o de una nueva republica*²⁸⁴

Dicha solicitud propositiva, en los senderos de la historia de lucha de la región, nos permite identificar las continuas discontinuidades del hoy respecto del ayer.

El corte de mayo del 2000 se presenta como un momento de quiebre cuyo desbloqueo comenzó a instalarse en 1999, en tanto se trastocan las relaciones de poder y gobierno y el llamado movimiento piquetero con la UTD como referente fundamental y fundacional. En tal sentido, la UTD se ha ido configurando en torno de la lucha por el trabajo y en defensa de la vida, lo cual fue atravesando y rebasando a los trabajadores – desocupados -, a modo tal de comenzar a reconfigurar-se como espacio de autogobierno local y comunal, y a partir de lo cual, por ejemplo: ejercer actividades que antes correspondían a los municipios, como la reparación de escuelas, hospitales, la construcción de barrios, calles, entre otras:

Lo que más se conoce son los planes, porque eso lo manejamos y hubo un grupo más grande de gente que estuvo a la vuelta de nosotros. Pero la mayor parte de las obras que se hicieron hasta hoy en día estuvieron pedidas, exigidas por los cortes de ruta. Canalización del río Tartagal, avenidas completas que no tenían pavimento. Puentes baile, había habido una inundación y había golpeado todos los puentes que había a lo largo de la ruta, salvo el del río seco, los otros eran puentes baile donde la gente se mataba porque eran estrechos. Se fueron haciendo. Barrios completos, el hospital de Mosconi. (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista julio, 2013)

La UTD fue, para ese entonces, una de las primeras organizaciones de trabajadores desocupados que concretó la reconversión y reconfiguración de los planes sociales en los llamados “proyectos productivos”, que analizaremos en el apartado que sigue. De hecho, para el 2000 UTD gestionaba 5.000 Planes, entre el Trabajar y el Plan de Emergencia Ocupacional. Y, en el 2001, entre la gestión municipal y UTD la suma pasó a ser de 8.000, con la incorporación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en 2002 de los cuales UTD gestionaba 3.500.²⁸⁵

Para este entonces, en la UTD se instala como referente José Pepino Fernández y Juan Nievas se retira de la organización por diferencias con Pepino, a quien él señala había formado:

...yo no me puedo adjudicar absolutamente nada. Yo les dije a ellos cuando estuvo concluida mi etapa en el 2000-2001 ¡compañeros me voy, yo ya cumplí mi ciclo, yo hice de esto para mí personalmente algo hermoso fue una inquietud, una iniciativa! Entonces quedó la unión de trabajadores desocupados con Pepino (...) No coincidía con Pepino en muchos aspectos. (Juan Nievas, referente-fundador UTD, entrevista, julio 2013)

²⁸⁴ Diario La Frontera, N° 1.410 de agosto de 1935, en: Benclowicz, 2013: 213.

²⁸⁵ Fuente: Rodolfo Chiqui Peralta, UTD. Setiembre-diciembre, 2012

La UTD se instala, como veremos en el apartado que sigue, como aquella “organización desorganizada” y, si bien deja de realizar asambleas internas por esta época, no por ello deja de contar con la participación activa de sus integrantes, en su mayoría trabajadores desocupados ex/ypefianos y mujeres, que luego se diversificaran en hijos de ex/ypefianos, mujeres, ante todo. La UTD, así como la CTD en Tartagal, tenían en común las trayectorias laborales de sus integrantes, además de sus singulares caminos de lucha, en torno de las diferenciaciones con los sindicatos y los Estados, ante todo en oposición al burocrático y clientelar sistema, que marcaba a los mismos.

1.3. a- Uniones y des-uniones piqueteras: las prácticas de lucha y resistencia de noviembre del 2000 y 2001

“Los trabajadores, aunque estén desocupados, no forman hordas despiadadas sin respeto por la vida ni la propiedad ajena, no abusan de niños, mujeres y ancianos ni saquean a sus vecinos”²⁸⁶

Para noviembre del año 2000 se volvió a realizar un corte y pueblada en la ruta 34, la misma emerge porque el pago de los planes Trabajar había disminuido; en agosto de ese año también a través de prácticas de resistencia se habían frenado despidos de 9 trabajadores de transportes Atahualpa empresa perteneciente a Balut cuñado del gobernador Romero; por último, las comunidades indígenas también se organizaron para reclamar la participación en los programas de ayuda social de la provincia y la titularización de sus tierras. En el corte confluyeron los trabajadores desocupados, las comunidades indígenas y los trabajadores de Edesa y Atahualpa. La policía provincial avanzó nuevamente sobre el piquete y, en esta oportunidad cayó muerto Aníbal Verón, ex trabajador de la empresa de transportes Atahualpa que había sido despedido un año antes.

Dichos acontecimientos desencadenaron una nueva pueblada en Mosconi, fueron copadas la comisaria y cuatro policías tomados de rehenes, que luego fueron liberados y se tomó la ruta en camino a Tartagal. El día 13 tras un acuerdo se levanta el corte, en tal sentido las organizaciones paqueteras obtiene 4.000 planes de empleo transitorios y una pensión de \$550 para la viuda de Aníbal Verón.

Para el 9 de diciembre, las organizaciones de trabajadores desocupados de la zona reiteraron el llamado a un Congreso Nacional de Trabajadores y Desocupados y se convocaron en un Congreso de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta, con el

²⁸⁶ Ernesto Katz, empresario local y principal damnificado por los saqueos de noviembre de 2000, El Tribuno, 3 de marzo del 2005.

objetivo de unificar la lucha y discutir un programa común.²⁸⁷ Participaron de dicho encuentro: la UTD Mosconi, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal, la Coordinadora de trabajadores Desocupados de Gral. Mazza (Pocitos) y el frente de Unidad Barrial de Trabajadores Desocupados de Embarcación, los cuales declaran la constitución de la Coordinadora Departamental de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta.

La declaración comienza señalando:

Salta es el país. El Norte de Salta es el país. Somos el ejemplo vivo de un país confiscado por un puñado de monopolios y banqueros, por sus agentes políticos y un régimen que no sirve a los trabajadores. Los desocupados de hoy no son fruto de una ley inevitable, sino el resultado del negocio capitalista que se ha montado sobre nuestro sacrificio y la entrega de los activos que se hicieron sobre la base de nuestros aportes. (Mosconi, 2000, s/r).

Las tramas enunciativas dan cuenta de un marcado proceso de des-naturalización de la situación y condición que hacía de estos trabajadores “sujetos pobres”, como efecto de prácticas de gobierno concretas en el trazo del capitalismo profundo; mientras que da cuenta de su advenir en trabajadores desocupados. A partir de lo cual, se considera que es necesario luchar, resistir y, en tal sentido, transformar, esto es decir “no”, a esos modos de ser gobernados.

Desde sus declaraciones iniciales, las organizaciones que participaron del congreso manifestaron que realizarían un padrón único, cuyo antecedente era la estadística casera realizada por la UTD allá por 1996-1997. En dicho padrón, se elaboraría un listado de los oficios y el grupo familiar de los diferentes integrantes de la coordinadora departamental, en oposición señalan, a las maniobras de los punteros, quienes armaban muchas listas para favorecer la división de los trabajadores desocupados y de la población pobre local, en general. A su vez, se manifiesta la decisión de solicitar el manejo de los planes de trabajo, los puestos que se consiguen en las privadas, los bolsones alimentarios y todo lo que se conquiste para poder repartirlo a quienes lo necesiten y a los que estén comprometidos con la lucha. De este modo, los trabajadores desocupados declaran y realizan un marcado proceso de autonomía, en torno de lo obtenido en los juegos transaccionales, atravesados de fervientes luchas, para con los gobiernos nacionales y provinciales, ante todo.

²⁸⁷ El documento trabajado es: la Declaración: Llamamiento del 1er Congreso de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta, Gral. Mosconi, 9 de diciembre del 2000. El modo de citado en el cuerpo del texto es: Mosconi, 2000, s/r.

Entre otros de los puntos de la declaración en los cuales se repiten muchos de los petitorios ya elaborados, se solicita la liberación de los piqueteros encarcelados y el cese de la persecución, 10.000 planes de trabajo a \$300 para el departamento San Martín; condonaciones la tasa de impuestos municipales y provinciales para todos los desocupados, tarifas subsidiadas de electricidad, gas y agua, combustible subsidiado en todo el departamento al igual que en sur del país, reparto de tierras fiscales ociosas, para los trabajadores desocupados del departamento, para el desarrollo agrario con financiamiento del Estado. Y se declara el 13 de mayo “Día del Piquetero” por la gran pueblada que resistió y derrotó a la represión.

El principal interlocutor sigue siendo el Estado, se le reclama presencia mediante financiamiento y oportunidades laborales concretas, que comenzarían a ser reconfiguradas por parte de estos trabajadores desocupados, ante todo, a partir de sus experiencias laborales previas y de los resultados poco favorables que han tenido los planes y programas a lo largo de estos años de lucha.

En marzo del 2001, cuando renuncian dos ministros de economía: Machinea y López Murphey, el movimiento de piqueteros se encontraba en un momento de candencia importante; asume para ese entonces Domingo Cavallo quien había sido Ministro de economía en el gobierno anterior. Mientras que, en el diagrama local de poder y gobierno, el gobernador salteño expresaba: “...*que los dirigentes políticos del departamento habían sido borrados por los líderes piqueteros*” (Prensa Obrera, N° 702, 11/04/2001).

A su vez, en abril de ese año surgieron algunas diferencias dentro de la Coordinadora departamental en torno a la distribución de los puestos de trabajo obtenidos, lo que produjo el quiebre de la misma. El 7 de abril se realizó un congreso en el cual la UTD no participó. Dicha separación de la UTD no impidió que la misma se solidarizara en los diferentes procesos de lucha y reclamos que existían en la zona, de hecho la UTD desde este entonces no tuvo entre sus objetivos participar de los Movimientos nacionales de desocupados ante todo por diferencias respecto a los modos de trabajo, de resolución de conflictos y problemáticas locales, lo cual se resume en la siguiente afirmación: “...*sí, tenemos relación con el Movimiento Nacional, pero mientras a otros les gustan muchos los micrófonos y las cámaras, nosotros proponemos alternativas*” (J. C. Gipi. Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre 2011).

De ningún modo la distancia de la UTD respecto de la Coordinadora Departamental implicó la distancia de la lucha, por este entonces. En mayo de 2001 los obreros, que

estaban construyendo el Hospital de Mosconi, cuyo trabajo había sido conseguido por la lucha piquetera, declararon huelga con el apoyo de la UTD y el resto de las organizaciones exigiendo que se entrara en vigencia el convenio salarial de \$2,50 la hora. Luego de 14 días de huelga el conflicto derivó en un nuevo corte de ruta y movilización de los trabajadores desocupados de la zona.

Una de las prácticas de lucha que comenzaron a gestarse en este momento de enorme originalidad fueron los piquetes a las empresas petroleras impulsados por la UTD Mosconi. Estos fueron bautizados como “cortes de acceso”. Según la genealogía realizada por Benclowicz, dichas prácticas tienen como antecedente aquellas realizadas por los obreros petroleros de la zona por lo menos desde la década de 1960 y estaba orientada a exigir la contratación de desocupados y reclamar el aumento de salarios. Los cortes de acceso se describen del siguiente modo:

Si, para las serranías están todos los pozos, entonces están todas las entradas y el resto es serranías, entonces el único lugar donde ellos pueden entrar. Entonces vas ahí, te plantabas y no pasaban. Después mandaban la policía, la gendarmería no va a esos lugares porque quedan fuera de la ruta. (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, marzo 2013).

Mientras que se expresa la radicalización de la lucha y la construcción de la autonomía cuando Pepino señala:

Yo no estoy de acuerdo con la manifestación, el acampe, la olla popular. Para mí, es corte de ruta sí o sí. Es la solución, una medida muy extrema. Corte a los yacimientos, ahí sí le duele a la empresa, el corte de ruta no le duele porque afecta al usuario. Le duele porque en un día pierden millones y millones. ¡Entonces cuanta plata hay! Ahí cuando les duele vienen a negociar, hasta los gobiernos vienen. Mucha gente me ha llamado para hacer este tipo de acción. Los mismos diarios me han inflado, no necesito armas, yo no lucho con armas, siempre lucho con la cabeza.²⁸⁸

En estos trazos simultáneos, discontinuos y dispersos entre poder y resistencia, en junio del 2001 se ordena la captura de Pepe Barraza (para ese entonces referente de la Coordinadora) acusado de corte de ruta y sedición; el movimiento responde con un corte y un llamado a paro general, pero el operativo represivo estaba montado a su alrededor y a los poco días detienen a Cesar Raineri, Gustavo Murillos y a Juan Nieves²⁸⁹, mientras se liberaban las órdenes de captura contra el resto de los dirigentes.

²⁸⁸José Pepino Fernández en: Anita Pouchard Serra, Pepino Fernández: “Somos maestros de piqueteros”. under / 04/03/2013 / Entrevistas.

²⁸⁹Para este entonces, Juan Nieves había conformado una agrupación de Trabajadores Desocupados en Mosconi ligados a la CCC, entre algunas declaraciones de dicha organización encontramos las siguientes: “Ayer Menem, hoy De la Rúa, antes de asumir nos prometieron y nos dijeron que había más trabajo y comida para todos: una vez que asumieron hicieron todo lo contrario, aumentó la desocupación y creció el hambre. Romero nos dijo que tendríamos “orden, trabajo y producción”, él también hizo todo lo contrario. Todos acordaron una tregua con

El 17 de junio, luego de 3 semanas de corte la gendarmería atacó de modo sorpresivo a los manifestantes que resistieron con gomas y gomeras. Esta es la ocasión en la cual se difunde que “los piqueteros” estaban armados con armas de fuego, incluso que había francotiradores. Tanto los jueces, como el obispo Jorge Lugones, expresaban que “los piqueteros” eran “sediciosos”, que buscaban el camino de la lucha armada, entre otras cuestiones. En este contexto, la gendarmería bajo orden del juez a cargo del poder ejecutivo nacional con aval del provincial, ingresa a Mosconi actuando como un ejército de ocupación: disparando, allanando, destrozando, etc. Algunos pobladores armaron barricadas, otros iniciaron un procesión con la virgen muy criticada por el obispo por cierto.

En esta ocasión, es la plaza del pueblo bautizada “La Plaza del Aguante”, la cual se tornó un espacio otro de resistencia y convivencia:

La gente fue hasta el lugar donde estaban los piqueteros y los trajo hasta la plaza. En la madrugada la Gendarmería había tomado por asalto la parte de los piquetes que estaban aguantándolo entre las vías y parte del pueblo. Loas había rodeado totalmente. Ahí salió el pueblo, y salimos en defensa de nuestros compañeros de lucha. Nos dirigimos a la plaza, que le pusimos “El Aguante”. La gente los echó, el pueblo dijo basta, ya nos mataron a nuestros hijos. (El viejo Pablo en: Semanario hoy, PCR, 11/07/2001).

Dichos tramos enunciativos nos permiten reflexionar respecto de modo en como, los cortes y ocupación de las rutas no sólo se dirigían a frenar el tránsito vehicular y de mercancías. Los cortes aparentemente solo geográficos, fueron signando y significando cortes más profundos, en las prácticas sociales habituales, en las representaciones sobre el espacio social, etc. En el tejido y juego de estas otras topologías, siguiendo a Aguilar y Vásquez (1997) el corte, primero geográfico también marcó un corte temporal entre el antes y el después, resultó una referencia muy importante en la historia del lugar y su gente, y signo los cortes posteriores y la modalidad misma de resistencia.

A su vez, esta especie de reparación del “nosotros” del común del pueblo mosconense parece ir supliendo otros tipos de cortes, diferencias o divisiones en el interior de la sociedad local, a partir de afirmaciones como “nosotros lo hicimos”, “todos juntos”, con el “apoyo de todo el pueblo”, esto parece haber acortado las distancias entre lo ypefianos

De La Rúa-Cavallo, entre ellos Romero, dicen que tenemos que darles tiempos y que no hay otra salida. Nosotros decimos que hay otra salida “no darles tregua”, no solo hay que pelear por un puesto de trabajo, chapas, comida, etc., sino por un cambio de fondo, cambiar este gobierno para llevar a cabo otra política en beneficio del pueblo más necesitado, que ponga el centro en reactivar la industria nacional, para generar fuentes de trabajo, que es lo que permitiría tener pan, calzado, remedios, comida para nuestros hijos (...) Por ello es necesario hacer que la UTD crezca como gramilla, barrio por barrio o como el pasto, que lo cortan y vuelve a crecer (UTD-CCC, 2001).

(ex) y los no ypefianos, ya que en los cortes el apoyo mutuo es fundamental (Aguilar, Vásquez, 1997).

Tiempo después, en el clamor de la lucha, el jefe de gendarmería reconoció que los únicos extranjeros en la zona, ya que se identificaba a los piqueteros con las FARC de Colombia y el Sendero Luminoso peruano, eran los ejecutivos de las empresas petroleras y el juez de la causa admitió que ninguna persona estaba portando armas. En sintonía, el día 22 de junio con una enorme solidaridad del país entero en torno de la lucha de los pueblos de la región, llega el Ministro de Desarrollo Social de la nación Juan Pablo Cafiero y se reúne con Pepino Fernández y otros dirigentes, que tenían pedido de captura. El Ministro señala “que en Mosconi no hay Estado”, según el diario La Nación el ministro remitía a la intervención del municipio en noviembre del 2000, sin embargo dichas palabras también nos permiten leer cómo se afirmaba el proceso de lucha y las prácticas organizadas por parte de los trabajadores desocupados, acorde a la autonomía que se iba conformando, gestando y configurando.

El día anterior, luego de varios enfrentamientos con gendarmería arribaron a la zona delegaciones de organizaciones de derechos humanos, legisladores, sindicatos y distintos partidos políticos que encabezaron junto con los líderes piqueteros una asamblea multitudinaria en la plaza (Benclowicz, 2013). El 24 de julio se realizó La Primera Asamblea Piquetera Nacional que nucleó, en La Matanza, organizaciones de todo el país, a partir de lo cual se logró la liberación de los piqueteros salteños detenidos.

En setiembre del mismo año se realizó la segunda Asamblea Piquetera Nacional, y el movimiento piquetero logro una sólida consolidación en la mayor parte del país. La UTD Mosconi no participó de dicho encuentro, más bien tuvo, como aún sigue siendo, un repliegue local en la ciudad de Mosconi y las localidades cercanas, aunque siempre en solidaridad y acompañando las luchas combativas de la zona y la nación.

Cabe señalar apenas, que tanto los medios de comunicación locales, como nacionales intervinieron de diferentes maneras para intentar deslegitimar el lugar y la fuerza que había cobrado el movimiento piquetero, en la zona y en el país. En Salta, sobre todo el Tribuno realizaba intervenciones de corte moral respecto de las prácticas de resistencia, a tono con las palabras del gobernador, ya enunciadas allá por 1999. Mientras que, por su parte los diferentes sectores gubernamentales en varias ocasiones no solo pedían represión, ocupación, encarcelamiento, también alentaban las luchas infiltrando sujetos no piqueteros ni trabajadores desocupados, intentando comprar a los dirigentes, lo cual no

era favorable para el movimiento piquetero como espacio que se construía entre y frente a los espacios de poder dispuestos de modo hegemónico y dominante.²⁹⁰ Entre algunos de los relatos que encontramos:

- *Por ahí, me dice el jefe de gendarmería de la séptima brigada que estaba acá: “Juan venga vamos a pasar a un cuarto intermedio yo sé de sus intenciones...” ¡me querían sobar la espalda!: “Sabe que hoy es mi cumpleaños y el mejor regalo para mí sería que usted levante el corte”. Le dije: “Mire la verdad es que es muy buena su propuesta pero yo no dependo de la propuesta de usted, dependo de la aceptación que me dé la gente en la ruta.” Te podes imaginar que si Gerardo Morales de desarrollo social y Walter Ceballos traen 400 planes y hay más de 5.000 personas esperando ahí en la ruta ¡me matan! Y a mí Abel Cornejo me dice: “Juan vamos en el helicóptero a ver como está y levanta” y yo no y no. Por eso me decían intransigente a mí.*(Nievas, referente-fundador UTD, entrevista, julio 2013, en referencia al corte del 2000)

- *Los gobiernos me ofrecieron mucho pero no quise agarrar nada. Acá a la vuelta, cuando salí de la cárcel en la época de Kirchner, me ofrecieron para que sea gerente del Banco Nación. Después una jubilación y pensión del ANSES...yo no me metí en ningún lado porque quería quedarme en ese lugar, la UTD. También la gendarmería me ofreció muchísima plata, estaban llenos de dólares del narcotráfico, para que no hinche más las pelotas. Me ofrecieron hacer una campaña para ser intendente, también una empresa inglesa Pan American Energy me ofreció 50.000 dólares para que no le corte los accesos. Pero nunca acepté y seguí cortando, y se nos dieron muchos resultados, conseguimos mucho así.* (José Pepino Fernández, 2013)²⁹¹

La persistente “campaña antipiquetera” se radicaliza en 2002, cuando según la investigación de Benclowicz (2013), en un período atravesado de crisis comienzan a impulsarse cortes de ruta motorizados, en ocasiones por los representantes gubernamentales de diferentes escalas y partidos. A diferencia de las prácticas de resistencia y lucha llevadas adelante por la UTD y la CTD, esos grupos realizaban reclamos puntuales vinculados con necesidades de quienes, escasamente, participaban de los mismos.

Por lo tanto, a lo largo del presente apartado, observamos cómo la práctica del piquete comprendido como “corte y ocupación de rutas”, no significa una ocupación del lugar de otros y/o una lucha por la toma del poder. En la práctica piquete se ponen en juego: “...resistencias ante el juego y de rechazo del mismo juego (...) No se quiere participar en el juego tradicionalmente organizado e institucionalizado del Estado...” (Foucault, 1994b: 120).

Los “piquetes”, no reproducen los conocidos “piquetes de huelga” ya que se trazan en una tradición local de luchas que desde los años 30, vienen gestándose y transformándose

²⁹⁰ Resulta significativo referir a cómo en noviembre del 2000 se produjeron saqueos a locales comerciales en Tartagal, los cuales fueron alentados por el poder político con el objetivo de dividir y demonizar al movimiento.

²⁹¹ En: Anita Pouchard Serra, 2013...op...cit.

en la zona, tampoco resultan prácticas económicas, en búsqueda de recursos y/ o freno al paso de mercancías.

En tal sentido y acorde a nuestra analítica genealógica y crítica, según enunciaciones nativas, también podemos observar cómo, en primer lugar el piquete resulta un espacio de “lucha, de defensa y de batalla”, esto es un espacio en el cual “se pone el cuerpo”: “...nos pusimos delante de los camiones, hicimos un escudo humano sin piedra, sin amenazarlo, sin nada y lo paramos”²⁹²; “...el piquete es una defensa, ahí nos defendemos de la muerte” (J. C. “Jipi” Fernández, entrevista, julio 2011); Puesto que: “Hay que ser desocupado par ser piquetero, no hace falta ser atorrante ser matón, ser pistolero, si no que hay que saber pelear por un trabajo”²⁹³; “...es una acto de rebeldía”²⁹⁴. En el piquete se pone el cuerpo en medio de la batalla, ahí no hay palabras, siguiendo a Foucault, hay guerra y la lucha es por la vida y contra la muerte de un modo creativo y productivo: “... nosotros cortamos la ruta para abrir caminos”, señala Pepino, (entrevista, julio 2013).

Por otro lado, en la práctica del piquete se construyen y constituyen “espacios de transacción” dinámica y siempre abierta, en los mismos, entre el cuerpo y la batalla se establecen negociaciones y se generan marcos de aceptabilidad y de transgresión en un cruce de lógicas y prácticas divergentes y múltiples. En este “entre” la UTD, como unión de trabajadores desocupados y piqueteros comienza a instalarse, parafraseando a Kusch un “domicilio existencial”, a partir del cual fue posible *tantear el sentido*. Puesto que, en este juego abismoso y acertoso los piquetes se transformaron, ritual y simbólicamente, en ese encuentro, que entre la vida y la muerte iban haciendo posible la re-existencia creativa, en torno de lo cual poder “crear el mundo de vuelta”.

Los cortes y ocupación de las rutas están siendo experiencias de una “transgresión creadora de comunidades” (De Certeau, 1995: 34). La ruta fue ocupada, al modo de la palabra, mediante un grito emergente entre la vida y la muerte.²⁹⁵ Por tanto, los sujetos que ocuparon la ruta no quisieron “ocupar el lugar de otros” y tampoco “tomar el poder”; mediante dichas prácticas instalaron, singularmente, sus voces, verdades y modos de

²⁹² José “Pepino” Fernández, entrevista en: Sacchi, 2004, (s/r)...op...cit.

²⁹³ Carlos, entrevista en: Sacchi. (2004), (s/r)... op...cit.

²⁹⁴ Rodolfo “Chiqui” Peralta, en: Revista de política y Cultura “La Maza”, 2001: 18.

²⁹⁵ Una diferente topología, en tanto práctica de los lugares dispuestos (De Certeau, 2000), ha transformado al menos por momentos los espacios cotidianos de tránsito y de comunicación. Pues, se trata de la emergencia de lugares diferentes y otros. Esto es al modo de un “relato delincente”, que atraviesa e instaura un camino (guía) y pasa a través (transgrede): “*El espacio de operaciones que produce, está hecho de movimientos: es topológico, relativo a las deformaciones de figuras y no tópico: que define lugares*” (De Certeau, 2000: 141)

ejercer el poder y la resistencia, en el entre sigiloso de la vida y la muerte. Así, en este diagrama – múltiple - se afirma y reconfigura la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, como “espacio otro”.²⁹⁶ En tanto, entre prácticas de resistencia y lucha se fueron impugnando y re-creando los órdenes dispuestos, acorde a modos específicos de construcción de espacios, verdades y sujetos.

2. La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi: la cuestión del trabajo, des-sujeción y re-territorialización (1997-2002).

“Hemos hecho algo, como Cristo en su época (...) hacemos una predicación del trabajo”
(J.C. Gipi Fernández, entrevista, julio 2012)

En el recorrido realizado pretendimos describir, identificar y analizar cómo, a través de la lucha advenida piquetera, los trabajadores desocupados fueron resubjetivizándose de modo colectivo en el espacio de unión de la UTD, como una de las principales organizaciones de lucha a nivel zonal, nacional y latinoamericano. El corte y la ocupación de las rutas, como fue enunciado, abre espacios de transacción que entre, la afirmación, la negación y la negociación van recreando el mundo del trabajo y al sujeto trabajador.

En esta línea, en el presente apartado, el objetivo es describir y analizar a la Unión de Trabajadores Desocupados y Piqueteros de Mosconi, como un espacio generador, productor y promotor de trabajo digno.

Para ello realizamos un breve recorrido, según nuestros itinerarios y estadías en el campo, en torno de las modalidades de “organización desorganizada” de la UTD; la distribución de tareas; la enseñanza de oficios; la reconfiguración de planes sociales para trabajadores pobres en proyectos productivos con valor agregado; el ejercicio de re-territorialización de dichos planes; de recreación de la contraprestación de los mismos en dignidad y no en dádiva y, de este modo, en la re-subjetivación de estos hombres y mujeres en trabajadores desocupados en pie de lucha.

²⁹⁶ Los “espacios otros” impugnan el orden que se le dispone, designa y refleja. En tanto: “...*tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos los otros emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados (...) los llamaré, por oposición a las utopías, las heterotopías*”²⁹⁶ (Foucault, 1994e: 434). Dicho de otra manera, según Foucault, “... *no vivimos en una especie de vacío, en el interior del cual podrían situarse individuos y cosas. No vivimos en un vacío diversamente tornasolado, vivimos en un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles los unos a los otros y que no deben superponerse*” (Foucault, 1994e: 434). A partir de lo antedicho, “otro” no remite a la identidad “Otro”, detrás del cual está Dios. Pues, acorde a lo señalado por Castro Gómez (2011) se trata de reconocer el carácter parcial histórico y heterogéneo de todas las identidades, que emergen desde una episteme posilustrada o de post Ilustración, en el sentido de una “producción histórica de la diferencia”.

Partimos del supuesto que la UTD se instala como un espacio - otro - de encuentro, trabajo, lucha y esperanzas. En tal sentido, describimos lo que consideramos la *metis* - inteligencia práctica - de la UTD en su estar siendo cotidiano, local y finito, a partir de lo cual observamos cómo se configura el perfil autonómico de la misma.

2.1- La UTD: un espacio común de trabajo.

En el marco de uno de los talleres realizados en los galpones, en el cual participaron aproximadamente 70 personas integrantes/participantes de la UTD, de diferentes edades, tras el objetivo de realizar un ejercicio grupal a partir del cual reconstruir la historia de la organización, según las experiencias vividas, contadas y sentidas²⁹⁷, recuperamos diferentes relatos. En todos los grupos se resaltó, mediante gráficas diversas, que la UTD resulta, desde sus inicios, un “espacio generador de trabajo, un espacio comunitario que otorga, busca y crea trabajo”. En el gráfico/afiche que seleccionamos para mostrar el trabajo grupal, se remarcó cómo la privatización de YPF había sido, para el pueblo de Mosconi:

“...un fuerte golpe al corazón, pues había no sólo traído consecuencias económicas, vinculadas con la falta de trabajo, sino emocionales, familiares, manifiestas en la violencia doméstica, el alcoholismo, destrucción de hogares, suicidios, etc. Por eso, cuando UTD, mediante la figura de sus líderes, comienza a constituirse como organización, ante todo se encuentra con fuertes trabas, por parte del Estado provincial y nacional, lo cual deriva en represiones y muertes de compañeros. Sin embargo, UTD y todos/as sus integrantes, siguen en pie y comienzan a realizar actividades, como separar los residuos, armar proyectos, etc., a partir de lo cual se comienza a humanizar la vida en la comunidad, se vuelve a tener trabajo, derechos, seguridad para caminar por las calles. Pues, UTD trabaja sin distinción de razas ni religiones, otorgando libertad a sus miembros y apostando a los trabajos óptimos y comunitarios”²⁹⁸.

Lo relatado remite al gráfico que sigue, en el cual se muestra lo que antes se relata, en torno de la UTD, sus comienzos, transformaciones expansiones y recreaciones.

²⁹⁷ En dicho taller, la técnica del armado de grupos se realizó mediante la azarosa distribución de papeles de colores entre los trabajadores y trabajadoras que, luego de su jornada de trabajo, se quedaron en el galpón a compartir esta actividad con nosotros. Se armaron 6 grupos de entre 10 y 15 personas y el trabajo se realizó mediante el uso de material gráfico (diarios, revistas, panfletos, tijeras, plasticolas y hojas) a partir de lo cual mediante imágenes y palabras debían contar-nos y contar-se entre todos/as la historia, los sentidos y sentires que la UTD signaba para cada uno y para la localidad. El taller se realizó en marzo del 2012.

²⁹⁸ Síntesis del relato de los/as integrantes del grupo en el momento de poner en común el afiche realizado.



Observamos cómo la UTD, entre aciertos y astucias, se instala luchando por el trabajo y en defensa de la vida. Por un lado, ante todo se hace referencia al trabajo “genuino” en resonancia del trabajo estable y formal experimentado en YPF. Dicho *trabajo genuino*, si bien a veces resulta temporario, genera beneficios sociales propios del llamado “empleo formal” para los trabajadores, nos referimos a los mecanismos de seguro como obra social, asignaciones familiares, convenios colectivos de trabajo, aportes jubilatorios, etc. En esta línea programática se plantea la formación laboral de oficios para los jóvenes, la recuperación de los saberes y oficios de los ex/ypefianos y la obtención de puestos de trabajo en las empresas petroleras y/o instituciones estatales: hospitales, municipios, escuelas, entre otros.

Por otro lado, o por el mismo, la UTD también pone en juego la cuestión del *trabajo digno*, acorde a una reconfiguración singular heredada de la cultura “aprendida” en YPF, mediante la puesta en juego y la apuesta a modos autónomos de configurar las relaciones laborales, diferenciadas de las relaciones que se disponen mediante programas de gobierno - de perfil neoliberal - dirigidos a gobernarlos como “pobres y desocupados”. Trabajar entonces, no es sólo un derecho adquirido a partir de programas de gobierno que se dispone mediante la “contraprestación de un plan, programa o salario”, según entramados enunciativos de Desarrollo Social y Humano. El trabajo, en la UTD adviene

siendo un modo de “*ganarse el pan*”²⁹⁹; no solo es digno porque es un derecho, sino que “*trabajar es un derecho y eso dignifica*”³⁰⁰, sea o no reconocido por y en los ámbitos jurídicos: “*Hemos hecho algo, como Cristo en su época, aunque sean frases locas, hacemos una predicación del trabajo*” (J. C. Gipi Fernández, referente UTD, entrevista julio 2012).

En tal sentido y, en el cruce entre las reconvertidas herencias del trabajo formal y asalariado experimentado en YPF, en sus prácticas cotidianas la UTD reconfigura de modo singular y creativo los planes sociales, según necesidades y situaciones territoriales concretas. El “trabajo digno” adviene una manera novedosa de autogobierno, a partir de la cual construir la relación laboral, diferente de la sostenida por el modo capitalista (Wahren, 2011: 182). También, en esta reconfiguración laboral, la UTD se alza como una voz y un espacio de lucha por el cuidado y la defensa de los recursos naturales, no solo petróleo o gas, también madera, tierra y agua, elementos fundamentales para cualquier trabajo.

La práctica del trabajo resulta recreada, en el suelo común de la comunidad. En tanto, el orden dispuesto se re-vuelve, pues no se instala el derecho, mediante la disposición jurídica del pacto que insta intercambios, concesiones y acuerdos entre las partes, acorde a derechos fundamentales y/o marcos de utilidad y economización de la vida de los sujetos. La UTD y quienes están siendo parte de este espacio vuelven, en las prácticas cotidianas, a des-individualizarse como “sujetos de derechos” y a re-individualizarse, como sujetos trabajadores y desocupados “con” derechos, más acá o allá de las garantías de los estados.

...en principio lo único que se pedía era un puesto de trabajo (...) al estar desocupados la UTD se constituyó en un movimiento que aglutinó a mucha gente que, con no sólo ya la falta de trabajo sino la falta de todo lo necesario para vivir en una sociedad, porque había un abandono de la política, del gobierno (...) o sea que ya habíamos traspasado el pedido de sólo trabajo. Entonces nosotros nos constituimos en reclamantes de todo lo que hacía falta, que no nos estaban dando los gobernantes, (...) Y se conformó un grupo, que fue la unión de un grupo, el engarzamiento de ideas y bueno, la decisión, el coraje de decir bueno vamos y plantemos. Y cuando había que plantarse, plantarse. Luego resistir, porque no es fácil ir con un grupo de gente y mantenerse ahí... (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, marzo 2013).

En estos vaivenes vinculares entre gobierno, resistencia y autogobierno, la UTD adviene una organización comunitaria: “...una red estratégica de transformación, desorganizada y autónoma del poder gobernante” (J. C. “Gipi” Fernández, referente área técnica,

²⁹⁹ Extractos de entrevistas grupales y trabajos en taller, setiembre 2011 y marzo, 2012.

³⁰⁰ Extractos de entrevistas grupales y trabajos en taller, setiembre 2011 y marzo, 2012.

entrevista, setiembre, 2011). Pues, parafraseando a Kusch para “crear el mundo de vuelta”, se señala que: “...*nuestro poder es la creatividad y no la fuerza*”. (José “Pepino” Fernández, entrevista, referente área operativa, junio 2012). Esto se evidencia en la manera des-organizada en la que se aúnan comunamente, a diferencia del ser dispuesto por lo legal e institucional de las políticas estatales, los sindicatos y otros modelos organizativos: “...*nosotros siempre somos ilegales, desordenados, apartidarios*³⁰¹...*no tenemos una estructura*” (Rodolfo Chiqui Peralta, entrevista, setiembre 2011), “*indisciplinados*”, dice Pepino (entrevista, setiembre 2011).

De este modo, la UTD funciona, desde el 2000, sin espacios deliberativos de decisión orgánica (asambleas, reunión de delegados, comisiones de trabajo; tampoco hay espacios en los cuales se realicen votaciones, elecciones de autoridad, etc.), sino que se construyen mediante prácticas directas, bajo la forma “decisión/práctica”, orientadas por los referentes, mientras que se recrean antiguas y diversas modalidades de sociabilidad y resistencia. En tal sentido, muchos trabajadores sienten suyas las luchas y sus efectos, mientras otros avistan en la organización un espacio generador de trabajo. Aquí entra en juego el estar siendo trabajador piquetero y con los piqueteros (Quirós, 2006), que hace a la singularidad de la organización, en su reconfiguración comunitaria de lo dispuesto para re-existir siendo.

Sin embargo y disintiendo con Svampa (2008), estas modalidades de codificación y organización “en la marcha” de las prácticas y los haceres, no implican un “nuevo paradigma de la política concebido desde abajo”, sino un haz movedizo, múltiple y siempre abierto de relaciones de poder, gobierno y verdad, a partir de lo cual se ejercita la des-sujeción crítica y local/cotidiana de los trabajadores-desocupados. Pues, según nuestros andares en el campo, observamos cómo en el cotidiano, en el cual la UTD cobra formas diversas, no hay un arriba y/o un abajo, un adentro y/o un afuera, sino una enjambre dinámico de relaciones de poder y resistencia, que entre medio y mientras tanto, configuran y recrean espacialidades territoriales y subjetivas específicas, concretas y locales. La UTD no pretende “tomar el poder” de “los de arriba”, pues ha tejido una red de relaciones, no necesariamente horizontales, pero sí de entrecruzamientos dinámicos y fluidos, cooperativos y locales, entre lógicas y prácticas concretas. Pues, si bien se considera que la mayoría de sus prácticas son directas, las mismas no dejan de realizarse

³⁰¹ UTD no apoya candidatura política partidaria alguna. Sin embargo, sus diferentes integrantes pueden realizar actividades políticas instituidas por su cuenta.

según lógicas que responden estratégicamente a objetivos comunes, como la lucha por el trabajo, el cuidado de los recursos naturales, la dignidad de la vida perdida, el deseo del respiro diario.

3. La *metis* cotidiana: los referentes/líderes, las áreas de trabajo y las prácticas

Acorde a lo antedicho, si bien la UTD no tiene una estructura organizativa formal y/o tradicional, funciona con la guía de los “referentes/líderes” por áreas: técnica, administrativa y operativa o gestiva.

Como fue señalado, Juan Nievas se retiró en ese entonces de la UTD - año 2000 - y Pepino Fernández, adviene siendo uno de los referentes/líderes más relevantes. Momento en el cual se observan algunos cambios en las ideas fuerza y en el proceder de la UTD.

Pepino había trabajado 21 años en YPF sin tener militancia política explícita. A finales de la dictadura cívico-militar deja Mosconi para instalarse en el sur del país tras denunciar el uso de fluidos contaminantes por parte de directivos de YPF; allí se ganó el reconocimiento de sus compañeros y se convirtió en delegado sindical. También participó activamente de las luchas contra la privatización, cuando comenzaron los cortes en 96 y 97 participaba en la medida en que se encontraba en Mosconi, de la mano de Juan Nievas. “...21 años trabajé. En todo el país laburé. Era operador de 900 pozos. Claro, yo soy inyeccionista, experto en fluidos y perforación. Hasta en el mar he laburado” (José Pepino Fernández, referente área operativa UTD, entrevista, julio 2013).

Seguí laburando en YPF hasta que se privatiza. Y nunca me quise meter en los sindicatos, sí me metí cuando se privatizó YPF, porque ahí a YPF había que defenderlo. En 1997 se hace un corte grande, ahí me metí, y hasta la fecha de hoy no pude salir. Me quedé con la Unión de Trabajadores, haciendo cortes de rutas y dejé de laburar en las privadas hacia 1999. (José Pepino Fernández, julio 2013).³⁰²

También Rodolfo Chiqui Peralta comienza a trabajar activamente en la UTD, como referente del área administrativa. Chiqui, a diferencia de Pepino, tiene una larga historia de militancia activa en el Partido Intransigente,³⁰³ fue delegado de SUPE como empleado del sindicato, y luego perseguido en la época de la dictadura. Más tarde, es re-contratado como seguridad de YPF y se vuelve a afiliarse a SUPE; formó parte de la Agrupación de Ypeñanos, que jugó un rol central en la lucha contra la privatización, y en la primera pueblada de 1991, según lo trabajado, en el apartado III del capítulo 1:

³⁰² En: Anita Pouchard Serra, 2013...op...cit.

³⁰³ De hecho, uno de los avales de dicho partido presentados a la UTD cuando la toma del concejo en 1996 estaba firmado por Chiqui, quien aún no formaba parte de la misma y ni siquiera participaba de las prácticas de lucha, se incorpora a dichas prácticas en 1999.

Yo sin ser petrolero ya empecé a trabajar en el sindicato, como un empleado. Entonces bueno, entré a conocer a YPF a través de su sindicato y fue en la dictadura, en el 75 entré yo, me agarró toda la dictadura del 76. Y pasé toda la dictadura en el SUPE. Cuando se iban los milicos entregaban a la gente afín a ellos, que eran interventores ya civiles, empleados de YPF. Y bueno, desgraciadamente, no los interventores pero sí otra gente que supuestamente eran gremialistas, pero eran peronistas acérrimos, no les gustó cuando yo en el 82, en el 83 me fui a afiliarme a Salta al PI. Y esos peronistas que no son peronistas en realidad, me echaron a mí porque yo me fui a afiliarme a Salta al partido: - Cómo te vas a afiliarte a un partido de izquierda? ¿qué sos? ¿zurdo? ¿qué sos?!. Me persiguieron de todas formas; después de echarme yo iba a buscar laburo a otro lado, preguntaban referencias y en SUPE le decían no, éste es un zurdo. Y, luego volví a entrar en YPF, lo hablé a Cesio para que hiciera un poco de justicia, me diera un laburo. Porque yo iba a cualquier lado y ya me estaban diciendo ahí de que no servía, era quilombero. Trabajé 8 años, los últimos 8 años de YPF, entré grande yo. Trabajaba en seguridad patrimonial, que es la vigilancia que hacen en la portería. Me meten en seguridad con corbata, pistola. Y bueno, tuvieron la mala suerte de meterme a mí porque yo fue el primero que hizo pelear para que la gente de seguridad, los obreros también, pero muy mentalizados como milicos, tuvieran acceso al gremio. Así que fui el primer delegado gremial de seguridad. Me amenazaron. (...) volví al SUPE como delegado. Participé en elecciones, el listas contrarias, nunca nos votaron asique, bueno. (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, julio, 2013).

Luego, cuando lo echan de YPF le pagan una pequeña indemnización por su corta antigüedad con la cual:

...con un grupo de compañeros, de 20 fundamos una cooperativa, para trabajar con la madera. Traíamos madera de Bolivia para trabajar en una carpintería, traíamos muebles semi, para armar acá, las partes y lo armábamos..., después el error nuestro fue comprarles la madera a los madereros de acá de la zona para acerrar la madera dura que es lapacho, palo blanco, amarillo. Le vendíamos a la gente del sur, de Córdoba, Santa Fe, que nos pagaban con cheques a 90, 120 días y esperabas la plata y te dabas con que eran cheques sin fondo, voladores, nos fundimos. Una experiencia (...) Y en el 95, 96, se asentó todo. Fue una crisis total acá en la zona. No le vendías nada a nadie. No había plata, se acabó la plata de la indemnización. Por eso me quedé en la ruta, porque imagínate no era vida lo que pasábamos. (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, julio, 2013)

Por su parte, Juan Carlos “Gipi” Fernández, hermano de Pepino Fernández, comenzó a formar parte de la UTD a finales de 1999, cuando regresa a Mosconi, luego de trabajar y vivir en diversos países vecinos en el área de hidrocarburos y minería post privatización de YPF. Gipi ingresó en YPF a los 14 años trabajando con sistemas de alta presión:

...ahí aprendí todo lo que me ha ido capacitando, ha sido como una escuela y ha tenido lo que en sus momentos ha sido denominado por los europeos, ante todo por España, la llamada renta básica. La renta básica es todos los beneficios sociales que tiene que tener un obrero como tiene que ser (...). Eso es lo que era YPF, lo que ha sido el verdadero Estado de nosotros. Esa es la diferencia entre nosotros y cualquier parte del país. (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre, 2012).

Gipi estaba en Calama Chile cuando comienzan los estallidos en Mosconi, y en 1999 regresa. Él sostiene que su regreso se debió a la profunda convicción de “tener que

devolver algo de todo lo que este lugar, rico en recursos naturales ante todo, le había dado” y, que desde “afuera”, no solo se aprenden diferentes estrategias de organización del trabajo, sino que todo se ve diferente, sobre todo el valor que estos lugares de nacimiento poseen. Por su parte, reconoce nunca haber quedado por fuera del sistema laboral de seguros, ya que luego de YPF consiguió trabajos en otros espacios, lo que implicó distanciarse de su familia, de sus hijos y de Mosconi, lo cual recuerda con cierta nostalgia y también reafirma como un motivo de su regreso:

No, yo estaba en Calama, en Chile. Entonces como que tenés otra visión de la gente, Yo laburaba en otros países, tenía una visión diferentes del que ya está acostumbrado a este lugar y dice bueno, nos quedamos con esto o morís con esto (...) Yo vine porque siempre había documentales de los problemas sociales que existían y bueno yo he visto que era la oportunidad de devolver algo. Que era la oportunidad que había que hacer algo por el lugar donde viví. Ahora bien, este sistema neoliberal a mí también me ha permitido estar en otros países y venir con algo programado, o sea en el buen sentido de la palabra, es decir, teníamos estrategias de trabajo, que es lo que después podés discutir. Porque las empresas los políticos, no sé, venían y ponían un producto como el Bora que nosotros poníamos en Porto Alegre o a los italianos, o a los chinos o a los mexicanos, no como que vos tenés que tener una pelea de decir cuánto vale tu producto en su momento y cómo lo podés poner en ese mercado internacional. (...) Ellos pensaban que iban a encontrar una persona con una onda o una persona con una vincha y una pluma y no con conocimientos. (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica, entrevista, setiembre, 2012).

Estos tramos enunciativos marcan el lugar que Gipi ocupará en la UTD, lo cual se vincula, según las consideraciones del entrevistado, con la posibilidad de tejer vínculos entre la organización y diferentes espacios de gobierno y/o gestión para con los cuales negociar recursos, puestos de trabajo y la defensa de los recursos naturales. Gipi es quien propone la organización de la UTD según áreas, quedando a su cargo, por un tiempo, del área técnica, encargada de la planificación, la articulación y distribución de los trabajos en el marco, ante todo, de los proyectos productivos por aquel entonces: “...alguien tenía que ocupar ese lugar y bueno, más o menos dentro de nosotros él que más idea de trabajo o predisposición tenía (...), la UTD es el movimiento, es la gente, no somos nosotros,” remarca entre medio.

A diferencia de Pepino, su hermano, Gipi sí ha tenido diversas intervenciones en el ámbito político partidario y gubernamental, ya que él era concejal en el momento en el cual realizamos la entrevista, además de que había sido Secretario de Producción por un año en 2002 y volvería a serlo en 2012-2013, cuando por tal motivo se desliga de la UTD. Además de que en más de una oportunidad, había sido candidato a intendente local por una rama del PJ (el Movimiento Regional del Pueblo) ligado a algunas fracciones internas del Partido Justicialista-Frente para la Victoria de Salta. Si bien dichas candidaturas

resultaron “...*decisiones personales, que pueden ser hoy y mañana no, siempre por fuera de la UTD*” (J.C. Gipi Fernández, entrevista, setiembre, 2012)³⁰⁴, no dejaron de introducir de modo indirecto a la organización, por lo menos a modo de “bandera”, en un terreno en el cual nunca había participado: la política institucional. Más allá de estas exposiciones e identificaciones locales para con la UTD, la misma nunca abandonó su lucha y construcción de un diagrama autonómico de gobierno y resistencia, en el territorio local.

La breve referencia a las historias de vida de los referentes de la UTD, dan cuenta del cruce de sus trayectorias de trabajo, experiencias de lucha, liderazgos de diferentes tipos y perfiles en la zona. Esto nos permite, a su vez, re-pensar las relaciones de poder/gobierno en el proceso de configuración de la UTD, sobre todo en torno de los liderazgos, que Wahren llama: “*personalismos participativos inorgánicos*” (2011: 152). En tanto, las figuras de referencia tienen asignados diferentes roles y funciones, que operan como aglutinadores de la organización, mientras se complementan recíprocamente³⁰⁵. Ahora bien, estos liderazgos, también considerados referentes históricos y en muchos caso naturalizados, van relegitimándose en momentos de visibilidad, como los cortes de ruta, y de gestión, como las negociaciones por puestos de trabajo, por recursos, etc. Ante todo, son valoradas ciertas actitudes y cualidades, como la presencia, el coraje, la entrega, la constancia, la “ejemplaridad”.

3.1- Las reconfiguraciones creativas: Los proyectos productivos, las tareas, las oficinas.

Acorde con lo señalado, observamos cómo las prácticas cotidianas de la UTD, en la cual se entretajan, parafraseando a De Certeau (2000), algo de tacto, algo de gusto, algo de juicio y algo de instinto, se orientan de un modo comunitario, mientras se recrean en la pertenencia al ambiente. En tanto no se trata de “acatar” lo dispuesto, ni de la sola reivindicación de la conciencia: “*Acá no se trata de una idea o de decir sos de izquierda. Acá se trata de sobrevivir*” (J. C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, julio, 2011), sino de luchar para vivir biológica, cultural y moralmente, en el estar siendo cotidiano.

Una de las prácticas que nos interesa analizar, en tanto pone de manifiesto la creativa reconfiguración de los tramos vinculares entre gobernados y gobernantes, acorde a los

³⁰⁴ Cabe remarcar que estas candidaturas de Gipi lo alejaban y distanciaban del trabajo diario en la UTD y de su rol en el mismo vinculado con viajes, negociaciones, distribución de tareas, entre otros.

³⁰⁵ Ver: Wahren, 2011:151.

programas de gobierno dirigidos a los “pobres desocupados”, es el modo en el cual la UTD transforma los planes sociales (programas, proyectos...) en proyectos productivos colectivos, en tanto: “...se orientan a generar algún tipo de valor agregado o producto eventualmente comercializable” (Pereyra, 2006: 31).

Para analizar lo antedicho tomamos como material principal nuestros diarios de campo, entrevistas, material gráfico y relatos de la historia local y de la organización, así como material recogido de nuestros ejercicios de observación acorde a largas e intensivas estadías en el campo. En tal sentido, y sin pretender reconstruir el ayer mediante el hoy, organizamos el relato que sigue mediante un cruce de temporalidades, lo cual nos remite a los comienzos y las sucesiones, entre las continuas discontinuidades, que tejen las tramas vinculares de la UTD, en el momento aquí analizado de su historia y que se extienden, recreándose, hasta nuestro presente.

Como analizamos en relación a la práctica del piquete, al inicio, los planes y subsidios se conseguían mediante los “cortes de ruta”, y desde finales del 2000 se obtienen, mayormente, mediante actividades de “gestión” autónoma por parte de UTD, en un complejo tejido de transacciones³⁰⁶. Ante todo, los referentes de UTD son los que se “mueven y buscan”, lo cual reconocen como un desgaste.

Estas tramas relacionales, que serán analizadas a posteriori, han ido configurando el autogobierno de la UTD y su perfil autonómico, a partir de lo cual ha sido posible generar cierta base de apoyo para que el proceso de generación de trabajo siga en pie: “...en realidad como que nosotros hemos dejado de depender de la dádiva del Estado, lo que nos dio, nos permitió formar una base relativamente económica, te dije no nos da ganancia pero nos permite darnos vuelta e ir empujando el carro” (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, julio 2013).

Cabe aclarar que estas prácticas cotidianas se realizan *sin permiso*, es decir a partir de la decisión autónoma de la UTD para comenzar y desarrollar las obras, lo cual, en algún momento del proceso necesita de la gestión jurídica-gubernamental que es menester realizar en los ministerios, municipalidades, secretarías pertenecientes al Estado u otros organismos, por ej.: habilitar la luz, la apertura de escuelas, la medición de terrenos, etc.

Entre las prácticas más contundentes, sobre todo por el número de gente implicada, se encuentran los emprendimientos ya enunciados: los “proyectos productivos”. La

³⁰⁶ Esto no implica que “no vuelvan a cortar y tomar las rutas”, pues esto permanece latente, como estrategia de lucha ofensiva, que es realizada, según circunstancias específicas.

organización ha ido “tomando y ocupando”, a lo largo del tiempo y, según situaciones específicas, algunos galpones del antiguo ferrocarril. Si bien, los han querido echar, en el 2010 logran mediante comodato con el municipio quedarse en el espacio por ellos reconstituidos como propio. Allí, además de funcionar los proyectos, también se encargan de mantener el predio, cortar el césped, barrer, pintar, etc. En este mismo espacio, están situadas oficinas y maquinarias de las empresas petroleras privadas, así como algunos elementos que pertenecían a YPF³⁰⁷. En este espacio, entonces, la UTD convive con los ingenieros y las maquinarias de dichas empresas, con las cuales tienen diferentes tipos de articulación, sobre todo, la lucha por incorporar a compañeros desocupados en trabajos calificados, lo cual expande el ámbito transaccional de la UTD respecto del Estado.³⁰⁸



Carteles e imágenes con las cuales nos encontramos caminando por el predio del ferrocarril. Foto: Cora Paulizzi, marzo 2012.

³⁰⁷ La UTD recicla algunos materiales y vehículos de la antigua YPF.

³⁰⁸ Estratégicamente, se buscan y gestionan recursos y puestos de trabajo, no sólo mediante negociaciones transaccionales con el Estado, si no con otras instituciones, como las petroleras locales, fundaciones de diferentes tipos, universidades privadas y nacionales, empresas diversas, e incluso comercios locales. Un ejemplo: es la construcción, en 2005, de la escuela de frontera en el poblado de Tremental ubicado a 50km al noroeste de Mosconi al límite con Bolivia. Allí la UTD gestionó financiamientos varios, entre ellos con la fundación de Amalita Fortabat, construye, con sus propia gente, la escuela y la casa de la maestra a quien contrata para que realice las tareas docentes. Tal es el caso, también de la Universidad/Colegio, que funciona desde 2003, en las instalaciones de la ex proveeduría de YPF, en Vespucio, ya que en un primer momento la tarea académica y de formación se desarrolló con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) mediante el dictado de talleres de mecánica, soldadura, también de peluquería etc. Y, desde el año 2011 comenzó a funcionar como una extensión de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, con carreras como Ciencias Políticas, Educación Física, además de las tecnicaturas antedichas. Sin embargo, a mediados del 2013 la universidad no estaba funcionando, en todas las áreas académicas proyectadas, por falta de presupuesto.

En los galpones del ferrocarril se realizan los diferentes proyectos/emprendimientos productivos, cada uno a cargo de un referente de área. Los proyectos son autónomos en su funcionamiento y están mayormente integrados por hombres y mujeres, que reciben algún tipo de plan, subsidio o salario.

Hasta el año 2013 funcionaban los siguientes proyectos, en continuidad desde finales de los 90'e inicios del 2000, respectivamente:

1) La carpintería: en este proyecto se realiza, ante todo, la fabricación de aberturas y puertas para las cooperativas de viviendas, además de muebles que se venden el mercado a través de pedidos puntuales de empresas y particulares. Los muebles se hacen con maderas recuperadas de los desmontes realizados por las madereras y, sobre todo, “los sojeros”, según enunciaciones nativas. Estos muebles son entregados para las viviendas de gente con “bajos recursos”, según lo indicado en las entrevistas grupales realizadas a los/as trabajadores/as de los proyectos. A partir del 2006 hubo un recambio dentro del emprendimiento, y la mayoría de quienes participan actualmente, incluido su responsable son jóvenes integrantes de la UTD. El encargado de este espacio es un joven de no más de 25 años, que aprendió el oficio de su abuelo y lo transmite a sus compañeros, en su mayoría jóvenes varones. Nos acercamos al galpón acompañados de Pepino en un primer momento y, luego nos quedamos solos con los trabajadores, el joven referente nos comentó el modo en el cual trabajan la madera, en su mayoría conseguida de los desmontes, la cual es recogida en camiones comprados mediante algún tipo de gestión, ante todo con el Ministerio de Desarrollo Social, desde el 2004; luego limpian la madera, la pulen y la trabajan. En el momento en el cual visitamos el proyecto había 4 personas trabajando en el lugar, en el que hay diferentes tipos de máquinas que permiten realizar las tareas antedichas, así como mesones y herramientas específicas para tal fin. Los jóvenes varones, nos mostraban sus trabajos terminados y nos comentaban cómo, en su mayoría, los mismos son entregados para las casas que la UTD realiza y realizaba, algunos vendidos y otros almacenados para próximas construcciones. Los más jóvenes rescataron todo el tiempo la importancia del oficio aprendido y señalan que la UTD es en la zona “*el único lugar que siempre da trabajo!*”



2) *Reciclado de plásticos*: para la realización de dicho trabajo la UTD cuenta con una máquina recicladora de botellas de plástico, solo trabajan mujeres y jóvenes varones encargados de seleccionar y prensar las botellas, para luego ser enviadas a reciclar. En nuestro primer encuentro con el espacio de reciclado Pepino nos acompañó al galpón en el cual se embanan enormes bolsones de botellas, que son aplastadas por una máquina conseguida mediante diversas gestiones, para tal fin. Al lado de ese galpón se encuentra un predio rodeado de alambre olímpico, en el cual hay botellas tiradas por el piso, y un conjunto de jóvenes hombres y mujeres, se encargan del cuidado, limpieza y traslado de las bolsas de botellas que se van recolectando durante las largas caminatas por la localidad, ya que: “...no esperamos que nadie nos traiga nada” (José “Pepino” Fernández, entrevista, setiembre, 2011)



3) *Taller de costura-textil*: integrado en su totalidad por mujeres, aproximadamente diez entre 25 y 60 años. Poseen máquinas industriales, obtenidas mediante subsidios gestionados en el Ministerio de Desarrollo Social desde el 2003, la capacitación es realizada de modo cooperativo entre las integrantes del espacio, según experiencias previas en el ámbito laboral específico. Las mujeres cosen uniformes de trabajo, guardapolvos y diferentes prendas que distribuyen entre los trabajadores, las escuelas y los espacios que pueden requerir de su trabajo. Se encargan de buscar los precios de los materiales, así como de comprarlos. El taller de costura se encuentra en uno de los espacios destinados a las oficinas del antiguo ferrocarril, en la entrada de predio, cerca de los baños. En el espacio del taller hay entre 4 y 5 máquinas industriales, una mesa larga, varias ventanas, un ropero y un lugar en el cual se guardan las telas, los hilos, las agujas, las tijeras, etc. Las mujeres nos recibieron con mucho entusiasmo y agradecimiento por ir a conocer su trabajo, ellas nos contaron lo que arriba describimos, mientras que entre las integrantes se encontraba, por ejemplo: la hermana de Justiniano, asesinado en el 2000 como fue señalado en el apartado anterior. Ella se autodenominaba “*una mujer luchadora*”, que había ido a cada piquete y que era “*integrante de la UTD desde siempre*”, quería aprender a hacer algo en su vida y por eso estaba aprendiendo a coser. Otras jóvenes, nunca habían participado de un piquete y estaban allí para aprender el oficio y, “*...porque en ningún otro lado podían aprender alguno*”, ya que no estudiaban, como si es el caso de otros jóvenes que participan de los proyectos productivos. Mientras que, la señora mayor, nos remarca: “*que nunca estuvo en la ruta*”, aunque sí apoyando

desde su casa y desde sus espacios cotidianos de vida todo el camino de búsqueda y lucha por trabajo de la UTD. Con los ojos cubiertos de lagrimas por momentos, sin soltar la tela y la tijera, y con la atención del resto de las mujeres, ella sostenía que estaba orgullosa y agradecida de poder brindar sus conocimientos en dicho espacio y agradecida del: *“trabajo que la UTD siempre brinda en la zona entera”*, mientras que todas remarcaban que *“nada era fácil”* y ponían énfasis en que: *“la UTD realizaba, desde sus inicios, más actividades que el municipio”*.



Mujeres Tejedoras. Foto Cora Paulizzi, marzo 2013.



4) Selección de Porotos³⁰⁹: este proyecto tienen sus inicios a través de un convenio de la UTD con una PYME local “Semillas del Sur”, la cual terciarizaba la clasificación de porotos producida por la UTD. En este espacio trabajan solo mujeres, en la actualidad más cercana, algunas de las poroterías locales les entregan las bolsas de porotos que deben ser seleccionados mediante un trabajo manual de limpieza. Es un trabajo terciarizado, luego de terminado, las empresas se llevan las bolsas y les pagan un plus de \$14 (en el año 2012), excedente utilizado para comprar herramientas, guantes, etc. Nuestro acercamiento al galpón, de las llamadas “poroterías”, fue guiado por quien se encontraba a cargo durante el turno de la mañana, que es en el cual recorrimos el espacio. Cuando



³⁰⁹ Foto Cora Paulizzi galpón selección de porotos. Setiembre 2012

llegamos nos encontramos con tres mesas adentro del galpón cada una con 2 o 3 mujeres que tenían a su lado un pequeño tarro de aluminio, en el cual iban poniendo los porotos “limpios” y el resto en un montoncito al costado de las mesas, luego eso se traslada a bolsas de arpillera, que se cierran y venden a los diferentes espacios para los cuales ellas terciarizan el trabajo, en el marco de los proyectos productivos de la UTD. Afuera del galpón había otras dos mesas, pues el calor es intenso desde temprano, las mujeres llegan al lugar en moto y muchas traen consigo a sus hijos, toman mates y té mientras trabajan y, prácticamente, no emiten palabras. Sin embargo, todas sostuvieron que “...*la UTD es el espacio que da trabajo en la zona*”, algunas estaban allí por ser parte de proyectos del Ministerio de Trabajo y otras por el salario de la Fundación.³¹⁰ Algunas de las mujeres que forman parte del espacio realizan diferentes tareas además de la selección de porotos en la UTD, como cuidar niños, limpiar casas, planchar, entre otros.

5) *Vivero*: este proyecto está ligado al de huertas comunitarias y forestación que la UTD realiza desde sus inicios. Puntualmente, en el mismo, se desarrollan semilleros donde incorporan, entre otras variedades, plantas autóctonas que usan para reforestar la zona; también cuentan con huertas para autoabastecerse. La coordinación del Vivero se encuentra bajo la coordinación de don Padilla un ex/yepifiano, quien también trabaja para el Área de Ambiente de la provincia de Salta. El vivero se encuentra en el espacio verde del ferrocarril, en los bordes de la ruta N° 34 en la cual se instalaban los piquetes.

El lugar está cercado con alambre y se presenta muy bien cuidado, al ingreso nos encontramos con plantas de diferentes tipos y un conjunto de mujeres trasladando plantines, otras regando, otras seleccionando semillas, y Don Padilla revisando las plantas que iban a transplantar; nos mostraron los rosales, las paltas, el modo en el cual riegan, cómo trabajan las plantas para que resistan el calor, entre otras actividades diarias. Tanto Padilla, como el conjunto de jóvenes mujeres, en su mayoría con sus pequeños hijos a cuestas nos comentaban de sus trabajos diarios de 4 a 6hs., en el lugar, del oficio que aprendían, de la forestación local que realizan y cómo utilizan los excedentes llevándoselos a su casa, repartiéndolos entre los demás integrantes de la UTD y entre quienes: “*ellos/as saben que lo necesitaban*”. Padilla nos remarcaba que él siempre había sido un luchador, que la UTD era y es un espacio de trabajo y contención en la zona y, que si bien él tiene un trabajo estable, nunca iba a dejar de acompañar el trabajo de la

³¹⁰ Esto es trabajado en el apartado III del capítulo 4.

UTD. Entre algunos de los objetos que encontramos en el vivero y, que suele ser utilizado para colocar plantines, está el colectivo de YPF que trasladaba a los tabajadores a Vespucio, el mismo está quemado, sin vidrios, sin ruedas, pero cuasi a modo de monumento se conserva allí.³¹¹



6) Taller de soldadura: este proyecto está a cargo de un referente ex/soldador (de alta tensión) de YPF, que está en UTD desde 1996, le enseña a soldar a los “changos” varones. Practican soldadura de alta tensión, pero sobre todo elaboran juegos recreativos para parques y escuelas, refaccionan muebles escolares, entre otras tareas. Poseen maquinarias propias, algunas compradas mediante diferentes tipos de financiamiento, como subsidios y otras mediante gestiones con las empresas locales: “...*Se los sacamos a las petroleras!*” (José “Pepino” Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre, 2012). Cuando nos acercamos al espacio para realizar una entrevista grupal, nos encontramos con un galpón de grandes dimensiones, con una pequeña oficina al

³¹¹Fotos:1- Don Padilla mostrándonos los plantines y modos de forestación de los mismos. 2-Jóvenes mujeres armando semilleros en el vivero. Foto. Cora Paulizzi, marzo, 2013.

costado izquierdo de la entrada al mismo, en la cual hay diferentes tipos de carteles y gráficos, en consonancia con el pañuelo blanco pintado en los portones de ingreso junto a las imágenes del Che a cada costado (Ver gráficas).



Galpón de soldadura (interior y exterior). Foto: Cora Paulizzi, marzo 2013.

Un grupo de jóvenes varones, de entre 20 y 35 años acompañados del referente de soldadura se encontraban realizando diferentes tareas. Cuando ingresamos, ellos se acercan muy amablemente, extienden cada uno su mano a modo de saludo y luego de comentarles qué hacíamos ahí, comenzamos a tener, parados en círculo en el centro del galpón, una larga y apasionada conversación³¹². Todos ellos, sobre todo los hijos de

³¹² Si bien todas las entrevistas grupales fueron grabadas, en este caso recuperamos “notas de campo”, ya que había máquinas encendidas que hacían ruidos y, la mayoría de los integrantes se encontraban “coqueando”- una

ex/ypefianos, refieren al trabajo que la UTD les permite obtener y sostener, ante todo cuando no están trabajando por ej.: en alguna de las empresas petroleras o locales, las cuales suelen contratarlos por 3 o 6 meses. Todos señalan la lucha de la UTD y se reconocen parte de la misma, cuentan orgullosos su trabajo en el espacio, cómo lo aprenden, cómo lo realizan, mientras nos muestran las máquinas, algunos juegos que están en el lugar, etc. Y, las expresiones de sus rostros cambian cuando refieren a su situación de pobreza y de lucha cotidiana por la búsqueda del pan, pero vuelven a brillar cuando todos y cada uno remarca que se sienten parte de este proceso de trabajo común, en el espacio de unión, que es la UTD.

Entre otras actividades que tuvieron lugar entre 1999 y 2002, además de las ya señaladas y aún vigentes, podemos nombrar las *huertas comunitarias*. En un inicio trabajaban entre 20 y 36 personas, dependiendo del ciclo climático y su rotación. Las huertas están ubicadas en diferentes barrios y zonas rururbanas de Gral. Mosconi, Vespucio y alrededores. Tres de estos emprendimientos funcionaban, y así lo siguen haciendo, en comunidades indígenas, otros, en zonas rurales a unos kilómetros de Mosconi. Los grupos de trabajo estaban, en sus inicios, conformados por diez o doce integrantes, en su mayoría mujeres. La UTD contaba con un coordinador general de las huertas comunitarias: “don Bacopé”, ex trabajador jubilado de YPF, quien los proveía de semillas, también coordinaba encuentros de ayuda técnica con el INTA, por ejemplo. Los integrantes, en su mayoría no tenían experiencia previa en producción agrícola, y si bien se identificaban como integrantes de la UTD, no participaban directamente de algunas de sus otras actividades por encontrarse alejados del centro del encuentro: el galpón principal situado en la localidad de Mosconi. La mayor parte de la producción, sobre todo: zapallo calabaza, lechuga, zanahorias, remolacha, especias, sandías, melones, habas, morrones, etc., se usaban para autoconsumo, otra parte se vendía- informalmente, y otra donada a comedores comunitarios, escuelas e incluso hospitales (Wahren, 2011). Dicha actividad, en la actualidad más cercana, se vincula con la ya mencionada del proyecto del vivero y, ante todo realizando distribución de la cosecha, en escuelas/comedores, así como a integrantes de la UTD.

También, en estas épocas, la UTD contaba con una extensión de 350has obtenidas mediante comodato con la Municipalidad local. La zona era conocida como CECAFA y

práctica local muy común en los hombres varones de Salta y Jujuy- por lo cual resulta difícil comprender lo logrado en las grabaciones.

se encuentra a unos 11 kilómetros de Mosconi, en la región del monte chaqueño. El objetivo de la UTD allí era establecer pequeños productores con terrenos de entre 10 y 12 has para que realicen distintos tipos de producción agropecuaria a pequeña y mediana escala. Dicho proyecto resultó finalmente paralizado por desacuerdo entre la UTD y el municipio, sobre todo por desacuerdos respecto a la modalidad de gestión del espacio y el acceso al agua para riego. Para el año 2013, algunos productores quedaban en el lugar, pero desligados de la UTD.

Las ladrilleras fueron por este entonces un proyecto fundamental, al inicio se contaba con 12 ladrilleras artesanales que producían entre 800 y 1.000 ladrillos diarios. La disminución y cierre de la mayoría, a partir de 2004/05, se debió a que sus integrantes pasaron a formar parte de otros proyectos, se desligaron de la UTD y/o pasaron a la órbita de la municipalidad. En 2005 el municipio logró cooptar estos proyectos por medio de la compra directa de la producción. Mediante dichas ladrilleras se realizaron trabajos de abastecimiento de la obra pública, la construcción de viviendas, reparación, entre otras. Así, a las diferentes actividades arriba descriptas, que astutamente realizaba y realiza la UTD en el cotidiano, se le suman: la erradicación de 96 ranchos, la construcción y reparación de escuelas, hospitales, el mantenimiento de baldíos, arreglos del cordón cuneta, forestación local, etc.

Cómo hemos observado, los proyectos productivos y las diferentes prácticas que los atraviesan, complementan y recrean, permiten la construcción de un diagrama territorial y de autogobierno en torno de la formación en oficios, ante todo para jóvenes mujeres y varones, así como posibilitan la réplica de la experiencia previa, sobre todo de trabajadores ex/ypefianos, mientras que permiten el uso de terrenos municipales e incluso de infraestructura de YPF. Esto es, en la permanente construcción singular de trabajo y la economía social y solidaria reconfigurada en el entramado de lógicas disímiles a las dispuestas por el emprendedurismo neoliberal, según lo descripto y analizado. Trabajo digno configurado en un incesante ejercicio de libertad y en los difusos límites de la vida y la muerte.

Ahora bien, siguiendo a Wahren (2011) y acorde al trabajo de campo, caben mencionar ciertas limitaciones y problemáticas que surgen, en este modo comunal y cooperativo de reorganizar el trabajo y el territorio laboral, tales como la distribución de los excedentes, los canales de comercialización, la administración general de los recursos, los bienes y vehículos necesarios para que funcione el proceso productivo de la organización. Por

ejemplo, cuando no se calcula el gasto de uso y se rompen los camiones y/o herramientas quedando fuera de servicio por varios meses, e incluso años. Algunas de estas dificultades surgen porque la organización, si bien se ha reconfigurado una fuerte “cultura del trabajo”, encuentra sus limitaciones en la “administración y gestión del trabajo” (Wahren, 2011: 177-78). Otra limitación, según el recorrido de campo, remite a que los proyectos autogestionados se realizan con cierta discontinuidad, ante todo, según lo observado, por problemas vinculados con los subsidios y/o pagos retrasados y/o postergados por parte de los ministerios con los cuales se negocia. Algunas de estas dificultades pretenderán ser solucionadas mediante la creación de “La Fundación de Trabajadores Desocupados de General Mosconi” (FUNDATRAD), como analizaremos en el apartado III del capítulo 4.

3.1. a- La organización y distribución de tareas y espacios

Respecto a la organización de las tareas y labores diarias, la misma comienzan a distribuirse a mediados del 2000, según referentes por aéreas: a) técnica, encargada de la relación entre los diferentes proyectos y la UTD y otros espacios de gobierno y lucha (universidades, municipios, ONGs, estados, fundaciones, entre otros); b) administrativa, encargada de la organización administrativa y distribución de planes, programas y salarios, según lo obtenido en la práctica piquetera y la autogestión; c) operativa o gestiva, encargada de la gestión directa y la organización del trabajo y las prácticas de resistencia. A su vez, existían encargados de sección cuyo trabajo es autónomo.

Para la época analizada, la UTD manejaba aproximadamente un 10% de los planes sociales, que se producían en torno de las poblaciones pobres y desocupadas, el resto era manejado por el municipio, ante todo; en tal sentido, la negociación para la obtención y distribución, e incluso para la extensión y renovación de los mismos, a veces era directamente con funcionarios/interventores nacionales y/o provinciales, y en la mayoría de los casos con referentes municipales; prácticas que se extienden y renuevan a lo largo de la historia de la organización, mientras que la misma va tomando autonomía y liderazgo, en el proceso autogestivo de dichos mecanismos de gobierno.

En tal sentido, para la re-elaboración y distribución de las tareas, según la reconfiguración de los planes y programas, remarcamos, entre el acierto y la astucia, se ponían en juego lógicas diferenciales a las dispuestas en los manuales y a los criterios de selección de “beneficiarios”, acorde a los dispositivos de gobierno dirigido a estas poblaciones pobres; mientras que, en estos campos transaccionales, las modalidades de

reconfiguración local-regional, también tenían efectos en las lógicas y mecanismos de distribución y constitución de la subjetividad beneficiaria de dichos planes, programas y proyectos de intervención:

...ellos tienen una tipología determinada y nosotros le fuimos cambiando y poniendo en práctica. Porque la cosa es elaborar allá en la oficina... y qué hacer. Cual era lo más factible de hacerlo en realidad. (...) nosotros hemos notado que ellos iban cambiando a medida que lo íbamos conociendo. En un principio la gente que estaba con nosotros en la ruta vino, los anotamos y después el grupo se reunió: a ver éste tiene 5 hijos, le corresponde más que otro que tiene 2. Uno que tiene hijos y otro es soltero, más le damos al que tiene hijos, privilegiamos eso. Después, armar, distribuir territorialmente, a las misiones aborígenes un porcentaje, a los que viven en los cerros otro, a los que viven en el barrio del Milagro allá alejados, en Cornelio, en Vespucio, en Mosconi (R. Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, julio 2013).

De este modo, observamos cómo la UTD cumple una doble función, como formadora de oficios sobre todo para los jóvenes que realizan sus primeras experiencias laborales entre altas y constantes tasas de desocupación, y por otro lado, adviene espacio de gestión para conseguir puestos de trabajo y/o planes sociales mediante prácticas directas de lucha y de gestión para con los ámbitos instituidos en sus diferentes formatos: estados, fundaciones, escuelas, empresas, hospitales, ONGs, entre otros.

Los trabajos en el marco de los proyectos productivos se realizaban, y así continúa siendo, en su mayoría entre 4 y 6hs. diarias (distribuidas acorde a los fuertes calores locales). Las condiciones laborales en los galpones fue mejorando con el objetivo de hacer de ellos un espacio laboral digno, con el paso del tiempo se construyeron baños, duchas (la temperatura entre setiembre y marzo supera los 45°), con posibilidad de calentar agua para mate (cebado) y te. Las herramientas utilizadas permanecen en un salón del galpón principal a unas cuerdas del ferrocarril, se las retira y se las guarda, en igual lugar luego de cada jornada³¹³.

³¹³ Un 40% de los trabajadores de y en UTD son mujeres.

Dicho espacio, en el cual hay un enorme galpón a cielo abierto, se ha tornado a lo largo de los años en algo semejante al corazón de la localidad, ya que en él hay un constante movimiento: ingreso y salida de hombres, mujeres y jóvenes que pasan por allí antes de ir a sus puestos de trabajo distribuidos por todo el pueblo y la zona; de camiones, motos, camionetas, bicicletas. Hemos observado como un grupo de mujeres limpian el predio por la mañana temprano, el mismo cuenta con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres, una habitación con cama y cocina, una pequeña habitación que auspicia de recepción. Pues, muchas son las personas que visitan el galpón, ya sea por problemáticas locales, como para conocer a la organización (investigadores, voluntarios, cineastas, etc.). En el galpón a cielo abierto suelen realizarse diversas actividades, como festejos del día del niño, de reyes, de día de la madre, así como talleres de danza, entre otras.



Predio del Galpón a la mañana temprano Foto: Cora Paulizzi, junio 2013.

En el galpón grande, desde el 2000 también se encuentra la oficina administrativa, donde se lleva toda la contabilidad y administración de la organización, a cargo de Chiqui Peralta y jóvenes mujeres, que realizan tareas diversas.



Oficina administrativa UTD. Foto: Cora Paulizzi, junio 2012

En este breve recorrido por los tramos cotidianos, que van dando forma y deformando a la UTD, en el trazo histórico analizado y hasta la actualidad más cercana, es posible señalar que su experiencia de autogobierno apunta a generar y posibilitar un re-encuentro con el trabajo entre las herencias, las recreaciones y los desafíos que implicaba ese presente. Estas prácticas se configuraron en torno de lógicas que permiten abrir la posibilidad de volver a pensar-se y hacer-se trabajadores/as, y por ende a reconocer-se dignos, puesto que el trabajo está siendo y ha sido reconfigurado de un modo colectivo, así como el uso y la propiedad de los medios de producción, el mercado hacia el cual se orienta la producción y las relaciones sociales de producción que se tejen y destejen en el cotidiano. El trabajo colectivo, las herramientas compartidas, la distribución de los excedentes, el cuestionamiento del uso de tecnologías contaminantes, la lucha por trabajos manuales, han implicado cambios en las cadenas y redes laborales locales (Wahren, 2011: 12). También se ha transformado *“la vida misma”* de los integrantes de la UTD y de la comunidad/región, lo cual conlleva a procesos concretos de re-subjetivación atravesados de cooperación y reconocimiento mutuo.

Por lo tanto, en este diagrama de poder, gobierno, resistencia y verdad, observamos cómo se ha ido construyendo la astuta y acertosa “autonomía” de la UTD. Dicha autonomía se materializa en diferentes prácticas de autogobierno, en tanto es posible en las tramas relacionales que la UTD va tejiendo y que, a su vez, van constituyendo a la UTD, como una organización en movimiento, no necesariamente “contrahegemónica y/o dependiente”. En tanto, dichas tramas de relación, que dan forma al espacio de unión de los trabajadores desocupados, se construyen al modo de prácticas de libertad, entre la apertura y la ruptura, sin permiso, entre prácticas cotidianas, locales, y, ante todo, finitas

de trabajo y lucha, en tanto, parafraseando a Pepino Fernández³¹⁴: “...la UTD se va a terminar, como todo va a tener un fin...yo sé que esto también se va a terminar...”

Esbozos finales

Para la elaboración del presente Capítulo nos guió el objetivo dirigido a analizar cómo se ejerce el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres - desocupadas - en el marco de las lógicas y las prácticas que configuran las políticas sociales públicas, en Argentina y en Salta, (1990-2002), en simultáneo, en campos de transacción específicos, cómo se configuran prácticas y lógicas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”.

En el *apartado I* realizamos una aproximación teórico-analítica a la problematización de la pobreza – producción, reproducción, construcción - y del gobierno de la pobreza. En tal sentido, hacemos referencia a las perspectivas teórico analíticas que nos permiten aproximarnos a la invención y reinención de lo social y la cuestión social, según lo sugerido por la tradición francesa y las herencias argentinas y latinoamericanas, entre otros. Mientras que re-construimos la emergencia del discurso de desarrollo humano en relación con las políticas sociales, y ensayamos una breve analítica de los entramados discursivos y extradiscursivos instalados y propagados por los Organismos Internacionales de Crédito, ante todo el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Observamos cómo, los mecanismos, técnicas y lógicas de gobierno dirigidos a “combatir la pobreza” en clave de desarrollo humano, se dirigen a fomentar, singularmente en las diferentes épocas analizadas en la tesis, del mismo modo que veremos en su desarrollo, a producir e invertir en capitales - humanos y sociales -; mientras se re-torna al espacio comunal-local a través de una construcción del medio de vida y acción de los sujetos pobres, centrada en los lazos primarios de reciprocidad, en torno de lo cual se promueve la autogestión organizada y solidaria de la propia existencia. Recuperamos también lo señalado por Álvarez Leguizamón (2008) acerca de la construcción del pobres como “un otro radical”, así como “la invención del otro”, según lo señalado por Castro Gómez (2002), en el entrecruzamiento heterogéneo y no lineal de racionalidades políticas neocoloniales y neoliberales, a partir de lo cual la cuestión social pretende ser “salvada” de modos paliativos, focalizados y autogestivos.

³¹⁴ Palabras de Pepino Fernández en la Película: “Mosconi. Abriendo los caminos de la resistencia y la dignidad”, de Lorena Riposati. Año, 2011, Bs. As., Argentina.

En los *apartados II y III* del presente capítulo analizamos las lógicas y prácticas de gobierno que en Argentina y la Salta de los 90', fueron ejerciendo de modos singulares el gobierno de las poblaciones pobres en general y pobres desocupadas, en particular. En primer lugar, analizamos la instalación del “problema de la pobreza” y su gobierno, mediante la construcción del Primer Mapa de Pobreza en la década de los 80' en Argentina y sus derivas. En segundo lugar, profundizamos en torno de las reconfiguraciones vinculares entre el Estado y la sociedad civil, a partir de lo cual observamos un retorno a los vínculos primarios de reciprocidad mediante la construcción de diferentes mecanismos dirigidos al gobierno de los otros y de sí mismos, en el territorio de “lo local”; en una compleja relación entre la inversión en capitales - humanos y sociales - y la autogestión emprendedora y focalizada de la propia existencia. Para eso rastreamos, analítica y genealógicamente, diversos programas, planes y proyectos de gobierno dirigidos a construir las condiciones de posibilidad y realidad de vida y subjetivación de los trabajadores desocupados y pobres, mediante una acción de gobierno, generalmente indirecta.

En igual sentido, profundizamos en torno de los programas “*workfare*”, como los *Trabajar* y el *PJJHD*, que en la provincia de Salta son rebautizados como *Salta Trabaja* y *Salta Solidaria*, entre otros. Observamos de qué modo la racionalidad política neoliberal predomina en este trazo de la historia nacional y provincial para fomentar y fortalecer la figura individual del beneficiario, mientras se ejercen diferentes mecanismos micronconductuales de subjetivación y prácticas de control, entre la focalización y la contraprestación. Para esta analítica de las técnicas de gobierno dirigidas a los pobres desocupados, tuvimos en cuenta la influencia de las prácticas piqueteras a la hora de, ante todo, elaborar el perfil de los beneficiarios. A partir de ello hemos podido observar una marcada impronta moral en dicho ejercicio de gobierno y construcción de la subjetividad gobernable, cuando por ej.: se limitan las condiciones de acceso a “evitar los malos caminos y costumbres”, los que remiten, en la mayoría de los casos, a las figuras de los “descarriados piqueteros”.

En este juego vincular entre gobierno y resistencia observamos cómo, en la Salta de los 90' se conjugó el gobierno económico, que construyó sujetos emprendedores, con el gobierno moral de las poblaciones, dirigido a erradicar y asistir “los males de la pobreza y los pobres/carentes”, en el camino de la salvación. Se ejercieron también diferentes prácticas de represión directa, lo cual nos lleva a concluir que hay poblaciones “no

deseadas”, que según ciertas lógicas de gobierno advienen necesariamente sacrificables, en el juego programático, estratégico y vincular de gobierno y resistencia. Esto nos remite a lo ya señalado respecto del racismo - de Estado - en el cruce paradójal de tecnologías biopolíticas, tanatomopolíticas y soberanas de gobierno, entre cuyas subjetividades relevantes analizamos la que damos en llamar “moribundo emprendedor”. En tanto, los sujetos pobres desocupados advienen, recuperando a De Certeau (2000), *moribundos*; por un lado dejados a la deriva en la lucha contra la muerte, y por otro y en simultaneidad controlados y gestionados por programas orientados a re-producir-los como sujetos activos, en sus comunidades locales, entre la vida y la muerte.

Ahora bien, estos sujetos se encuentran siempre en la posibilidad de “no obedecer”, de des-individualizarse y en tal sentido re-subjetivizarse y así desmontar las redes de poder-gobierno y verdad que se les disponen. Las relaciones entre gobernados y gobernantes resultan estratégicamente libres y móviles, lo cual se evidencia en el territorio mosconense, entre medio y mientras tanto los “trabajadores desocupados y piqueteros” unidos en la UTD Mosconi se levantaban en pie de lucha, construyendo un espacio de autogobierno entre lógicas y prácticas heterogéneas y diferentes a las dispuestas.

En tal sentido analizamos, críticamente, el tejido relacional configurado entre poder/gobierno y resistencia mediante una aproximación profunda a la UTD Mosconi, en continuidad con lo iniciado en el apartado III del capítulo 1. Partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego relacional de prácticas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”, así como en un tejido transaccional de negociación, aceptabilidad y transformación. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, se van poniendo en juego diferentes prácticas de subjetivación, re-subjetivación y des-subjetivación, desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana, lo cual se refleja en la construcción del sujeto “trabajador desocupado y piquetero”.

Para realizar dicho trabajo analítico, en primer lugar reconstruimos las prácticas y ocupación de las rutas, los piquetes, desde 1997 hasta el 2002. Acorde a nuestra analítica genealógica y crítica, según enunciaciones nativas, observamos por un lado cómo, el piquete resulta un espacio de “lucha, de defensa y de batalla”, esto es un espacio en el cual “se pone el cuerpo”: ahí no hay palabras, hay guerra, y la lucha es por la vida y contra la muerte, de un modo creativo y productivo.

Por otro lado, en la práctica del piquete se construyen y constituyen “espacios de transacción” dinámica y siempre abierta. Entre el cuerpo y la batalla se establecen negociaciones y se generan marcos de aceptabilidad y de transgresión en un cruce de lógicas y prácticas divergentes y múltiples. En este “entre”, la UTD, como unión de trabajadores desocupados y piqueteros comienza a instalarse, parafraseando a Kusch, como “domicilio existencial”, a partir del cual fue posible “tantear el sentido”. Puesto que, en este juego abismoso y acertoso, los piquetes se transformaron, ritual y simbólicamente, en ese encuentro, que entre la vida y la muerte, iban haciendo posible la re-existencia creativa, en torno de lo cual poder “crear el mundo de vuelta”.

De este modo, nos adentramos en la re-instalación de la UTD como principal espacio de referencia y construcción de puestos de trabajo en la zona a partir del 2000, y la astuta modalidad de re-crear los planes de empleo transitorios y subsidios para los desempleados en trabajos considerados productivos y dignos, para la comunidad regional y local en su conjunto.

Esto se observa, por ejemplo, en el ejercicio estratégico de manejo y re-manejo de los fondos obtenidos para distribuir, temporalmente, planes que hacían a la gestión de la pobreza extrema en la cual vivían estos hombres y mujeres, da cuenta de los artilugios que, en el suelo, hacían que la pobreza sea administrada por los propios pobres en un campo de transacciones desiguales, amenazantes y oscuras, tal es el caso de los “proyectos productivos”. Sin embargo, la aceptación de los planes y las negociaciones no solo respondieron a la imperante necesidad de apenas sobrevivir, también abrieron campos de transacción creativa y diferente, que iban a reafirmar cada día la subjetividad crítica del trabajador desocupado y ahora piquetero en la constante e incansable búsqueda del trabajo digno, en tanto y según enunciaciones nativas: *“los Trabajar, no eran trabajo”*.

En tal sentido, la UTD no resulta “una otredad” con respecto a la comunidad local. La lucha por trabajo en torno del problema del desempleo y la pobreza, de los trabajadores advenidos pobres, fue sentida como una lucha que atravesaba a los trabajadores y los rebasaba, a modo tal de comenzar a reconfigurar-se como espacios de autogobierno local y comunal, a partir de ello, por ejemplo: realizar actividades que antes correspondían a los municipios, como la reparación de escuelas, hospitales, la construcción de barrios, calles, entre otras.

De este modo, la UTD funciona, desde el 2000, sin espacios deliberativos de decisión orgánica, dichos espacios se construyen mediante prácticas directas, bajo la forma “decisión/práctica”, orientadas por los referentes, mientras que se recrean antiguas y diversas modalidades de sociabilidad y resistencia. Muchos trabajadores sienten suyas las luchas y sus efectos, mientras que otros avistan en la organización, un espacio generador de trabajo. Aquí entra en juego el “estar siendo trabajador piquetero y con los piqueteros” (Quiros, 2007), que hace a la singularidad de la organización, en su reconfiguración comunitaria a lo dispuesto, para re-existir siendo.

Sin embargo, estas modalidades de codificación y organización “en la marcha” de las prácticas y los haceres, no implican un “nuevo paradigma de la política concebido desde abajo”, sino un haz movedizo, múltiple y siempre abierto, no necesariamente horizontal, de relaciones de poder, gobierno y verdad, a partir de lo cual se ejercita la des-sujeción crítica y local/cotidiana de los trabajadores-desocupados. Por lo tanto, en este diagrama de poder, gobierno, resistencia y verdad, observamos cómo se construye la astuta y acertosa “autonomía” de la UTD. Dicha autonomía se materializa en diferentes prácticas de autogobierno, en tanto es posible en las tramas relacionales que la UTD va tejiendo y que, a su vez, van constituyendo a la UTD, como una organización en movimiento, no necesariamente “contrahegemónica o dependiente”. En tanto, dichas tramas de relación se construyen en torno del ejercicio de la libertad que, entre la extrema necesidad, la opresión y la muerte, les permite recrearse autónómicamente entre lo que Castoriadis (1998), considera la “apertura y la ruptura”, en el proceso de construcción de mundos según otras leyes y, por lo tanto, crear un nuevo *eídos* (forma) ontológico, otro sí-mismo diferente en otro mundo. Esto supone un ejercicio de “autotransformación” que se construye y cobra formas diversas sin recibir órdenes y normas desde el exterior - partidos, sindicatos, Estados - a partir de lo cual se pone en juego un diagrama “heterónomo” de organización, en sentido amplio, que se sostiene y posibilita en el ejercicio de la libertad constitutiva de las prácticas cotidianas, locales y finitas.

Siguiendo el camino del pensar propuesto, en los andares de una ontología del presente y de nosotros mismos, a continuación damos entrada a la Parte II de la presente tesis: *“Los programas de gobierno y la reconfiguración del rol del Estado en la Argentina y Salta entre 2003 y 2012/13: gobernando la pobreza y a los pobres desocupados, y resistiendo a ser gobernados de ciertos modos. La consolidación de la UTD Mosconi”*. En el Capítulo 3 realizaremos un análisis crítico-descriptivo en torno de “los avatares de la

gubernamentalidad, en Argentina y Salta entre 2003 y 2012/13. Entre recreaciones, reparaciones y resistencias”. En el Capítulo 4 profundizaremos acerca de “las políticas sociales de segunda generación con rostro humano, en la Argentina y en Salta, y las prácticas de resistencia, lucha y aceptabilidad de la UTD Mosconi: mecanismos, estrategias y juegos”.

PARTE 2

Heterogeneidades 2

Los programas de gobierno y la reconfiguración del rol del Estado en la Argentina y Salta, entre 2003 y 2012/13: el gobierno de la pobreza y los pobres desocupados, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de “ciertos modos”.

La UTD Mosconi

CAPITULO 3: ...*Los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta entre 2003 y 2013. Entre recreaciones, reparaciones y resistencias*

En continuidad con lo analizado en los capítulos precedentes en torno de la gubernamentalidad, el gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia de los trabajadores desocupados y piqueteros en Argentina y específicamente en la provincia de Salta entre 1995 y 2002, en el presente capítulo- al igual que en el capítulo 1-, nos guía el supuesto de que las relaciones entre gobernados y gobernantes, en tanto prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y prácticas de resistencia, se desarrollan y construyen en un diagrama más amplio de pensamiento y modos de hacer. Por lo cual es fundamental dar cuenta de los diferentes programas de gobierno que tuvieron lugar en estas épocas específicas, haciendo especial hincapié en la reconfiguración del rol del Estado, las consideraciones en torno de la economía, el mercado y la sociedad civil.

El presente capítulo está organizado en tres apartados. En el *apartado I*, realizamos un breve recorrido por el diagrama geopolítico continental instalado a principios del siglo XXI, considerando que el mismo posibilita comprender la emergencia y singularidad de la gubernamentalidad argentina desde el año 2003.

En segundo lugar, *en el apartado II*, realizamos una reconstrucción crítica de los programas de gobierno y racionalidades políticas instalados y contruidos en la Argentina entre los años 2003 y 2013. Para una analítica expositiva de dicho programa lo dividimos en tres momentos: 2003-2007: El Programa de Gobierno Nacional, primeros pasos; 2007-2011: Profundizaciones, crisis y transformaciones; 2011-2012/13: Hacia la re-nacionalización de YPF.

En *el apartado III*, en la misma línea de análisis realizamos una reconstrucción crítico genealógico de la gubernamentalidad en la provincia de Salta. En primer lugar, hacemos referencia al momento transitorio entre 2003 y 2007, en el cual se profundizan las reformas de Estado y económicas que venían llevándose a cabo desde 1995, en un complejo tejido vincular entre la provincia y la nación. Luego hacemos ingreso a los vaivenes del programa de gobierno salteño instalado en el año 2007; y en un tercer momento analizamos la re-elección y re-creación del programa de gobierno provincial entre 2011 y 2013.

Por último, analizamos y describimos cómo este diagrama de poder/gobierno se construye en torno de técnicas dirigidas a configurar prácticas singulares en torno de la explotación sojera, minera y puntualmente petrolera, haciendo una breve referencia al modo en que el modelo “extractivo exportador” es puesto en juego en la provincia. En tal sentido, observamos cómo, en Salta la re-nacionalización de YPF sólo repercutió en tanto YPF sería una más de las empresas capaces de realizar inversiones a nivel local.

Nos detenemos en reconstruir el diagrama de explotación, extracción y concesión de los recursos naturales dispuesto en la provincia, en tanto nos permite entablar relaciones con los modos en que la UTD Mosconi, en su búsqueda por la “reparación histórica”, se alza como una voz y espacio de lucha por el cuidado y la defensa de dichos recursos, no sólo petróleo o gas, también madera, tierra y agua. En tal sentido, recuperamos el dispositivo gubernamental “Fondo de Reparación Histórica (FHR)” (Ley N° 7691), construido en torno de las regalías petroleras locales, a partir del cual podemos reconstruir las tensas relaciones entre la reparación, la represión y las resistencias.

I.

América Latina: entre el neoliberalismo, las crisis y las transformaciones integracionistas

1-Breves referencias a la geopolítica continental de la época (S. XXI)

Acorde a la perspectiva que atraviesa y sostiene el presente trabajo, para comprender la emergencia, instalación y singularidad de la gubernamentalidad argentina desde el año 2003 hasta el año 2013, es menester referir, brevemente, al contexto y condiciones históricas de posibilidad y realidad acaecidas en el continente latinoamericano, en los últimos años (2004-2012).

Ante todo, siguiendo a Svampa, cabe recordar que: “...*el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha tenido diferentes fases en América Latina*” (2010: 5), sobre todo en torno de una marcada desregulación económica, ajuste fiscal, política de privatizaciones (de los servicios públicos y de los hidrocarburos), así como por la introducción del modelo de agronegocios. Esto conllevó al ejercicio del gobierno indirecto por parte de los Organismos internacionales de crédito e intervención, así como a la construcción de normas jurídicas que garantizando la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, no se dejó de aceptar la normativa creada en los espacios transnacionales. Al mismo tiempo, dichas orientaciones contribuyeron a consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos, al tiempo que profundizaron las bases del Estado patrimonialista, de cara a la fuerte imbricación entre los gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos económicos privados.

Ahora bien, a mediados del año 2000 América Latina experimenta lo que Svampa (2010) ha bautizado como “cambio de época”, en torno de lo cual se han recreado matrices o estilos de gobierno vinculado y entrelazados con lo nacional y popular, el neodesarrollismo, las narrativas autonómicas, las luchas indígenas y las izquierdas militantes”³¹⁵

³¹⁵ Es importante recordar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas de la política institucional. Este se abrió en 1994 con la irrupción del zapatismo, en Chiapas, como el primer movimiento contra la globalización neoliberal, que influyó fuertemente en los grupos y colectivos alterglobalización que se estaban gestando tanto en Europa como en Estados Unidos: “*Pero en rigor, en América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales, arranca en el año 2000, con la Guerra del Agua, en Cochabamba, y tuvo sus*

En este sentido, más allá de las presidencias puntuales y sus orientaciones políticas específicas³¹⁶ cabe mencionar algunas cuestiones que hacen al tejido de un diagrama de poder, en la América Latina y Caribeña. Sobre todo, atravesado y emergido en torno de la disposición, entre mediados de los 90' e inicios del 2000, de distanciarse de las medidas neoliberales extremas. Así, estos gobiernos llamados por algunos “postneoliberales”, no dejaron de entretenerse entre nuevas y viejas racionalidades políticas, que cobran matices locales-nacionales, según historias y procesos propios, sobre todo en torno de prácticas vinculadas a la re-configuración de los Estados y las democracias.

Ante todo, la decisión política de construir y generar espacios de integración Latinoamericana sin, necesariamente, afianzar las reformas neoliberales, encuentra un espacio de emergencia en el paradigmático encuentro entre algunos Estados en la cumbre de Mar del Plata, en el 2005. Ahí se cruzan y establecen una alianza estratégica los presidentes Kirchner (Argentina), Chávez (Venezuela) y Lula (Brasil).

Dicho acto se realiza contra la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a la que asistió el presidente norteamericano George Bush acompañado en su meta de liberalización por su colega mexicano Vicente Fox. En dicho encuentro, los tres presidentes latinoamericanos, que no tenían vinculación política estrecha, sobre todo con Venezuela, se encuentran en una decisión que los aúna e integra, no aceptar que el ALCA quedara constituida en esa cumbre de Mar del Plata:

Los presidentes de los países más grandes de Sudamérica no plantearon esa determinación como predominantemente ideológica, aunque tenía un componente de ese tipo, sino práctica: un ALCA sería contradictorio con el objetivo de reindustrialización y corrimiento respecto de los organismos multilaterales de crédito que buscaban ya en 2005 tanto Brasil como la Argentina, y también Venezuela. Con esa visión sobre el futuro a evitar se movieron los negociadores técnicos del momento... (Diario Página 12, 6/03/ 2013)

momentos de inflexión tanto en Argentina, en diciembre de 2001, Ecuador, en 2005, nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, entre otros” (Svampa, 2010: 4).

³¹⁶ Respecto de las racionalidades políticas, que atraviesan los diversos programas de gobierno en la América Latina de la época, por un lado se encuentran las propuestas socialistas, con sus diferentes matices (Venezuela, Cuba y Nicaragua). Y, por otro lado las políticas “progresistas”, llamadas por algunos de “re-occidentalización”, dispuestas, sobre todo, por Brasil y Argentina, en un intento de retorno a las políticas de bienestar, desarrollo productivo, justicia social con equidad, junto con Paraguay. A este complejo diagrama de poder, se ligan las propuestas Boliviana y Ecuatoriana vinculadas al Estado Plurinacional y la política de corte indígena y alternativa al desarrollo dispuesto. Mientras perduran países cuyas lógicas de gobierno resultan claramente neoliberales, como Colombia y México. Este cuadro sufre cierta modificación entre el 2006 y el 2011, cuando se consolidan Bolivia y Ecuador, pero Chile retorna a un gobierno liberal conservador, y en Uruguay asume un gobierno de Estado de orientación socialista, Paraguay sufre un golpe de Estado parlamentario y retorna a un programa neoliberal conservador, mientras que en el último tiempo Perú, mediante la asunción de un presidente indígena, pretende seguir los pasos de Bolivia y Ecuador. La muerte de Kirchner en Argentina (octubre 2010) y de Hugo Chávez en Venezuela (marzo 2013), cuyo liderazgos centralizados resultaban fundamentales para el tejido y la consolidación de la integración latinoamericana, puso en jaque lo logrado, así como las consolidación y continuación de algunas medidas políticas y económicas, tomadas al interior de cada nación. Al tiempo que los Organismos Internacionales sostuvieron que la crisis desatada en Europa y EEUU, debía ser absorbida por ALyC.

Así, se consolida el proceso de “integración latinoamericana”. Pues, se trata siguiendo a Ferrer (2013)³¹⁷, de una complementación de las soberanías nacionales a través de reglas realistas de integración, en torno de acuerdos convenientes para todos, en diferentes planos (culturales, económicos, políticos y medioambientales); para lo cual era menester profundizar: el desarrollo industrial y tecnológico, integrar cadenas de valor de la producción primaria con la participación creciente de componentes provenientes de nuestro propio acervo, impulsar el protagonismo de las empresas nacionales y regionales para el acceso a los mercados internacionales.

Pues, la integración se pensaba en tres planos: “...*fortalecer las densidades nacionales, la densidad bilateral, mercosureña y sudamericana, fundada en la inclusión social, la eficacia de los liderazgos, la consolidación de la democracia*” (Ferrer, 2013 en: diario Página 12, 27/01/2013). Puesto que, dichas relaciones se tradujeron en los siguientes entrelazamientos y efectos estratégicos, las consolidaciones nacionales, igual a intercambios más fluidos, mayor flexibilidad en las normas, mejores respuestas en situaciones locales y cuanto más solidaria la proyección conjunta hacia la globalización más libertad de maniobra a nivel local y mundial (Ferrer, 2013). Ahora bien, estas lógicas y prácticas de gobierno no dejaron de ser pensadas, enunciadas y realizadas en torno de racionalidades políticas que, de diferentes maneras, pretendían re-crear el ejercicio del gobierno del mercado, con matices locales y continentales. Teniendo en cuenta que, América Latina es uno de los continentes con las mayores riquezas y reservas naturales del mundo y que se encuentra desde hace siglos y, particularmente, en el último enfrentada y bajo la presión de los Estados Unidos como potencia que ha liderado desde comienzo de siglo XX golpes de Estado en todos sus países, golpes ligados a avalar sus intereses económicos, a la vez que ha desplegado y despliega una incansable batalla cultural.

En este diagrama se consolidaron diferentes organismos continentales, ante los cuales cabe mencionar el “Mercado Común del Sur – MERCOSUR (1991), “Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR (2007)”, y “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC (2010-11)”, en la cual se integra a Cuba y no a Estados Unidos³¹⁸.

³¹⁷Ver: Ferrer, A. “Transformaciones de América Latina”. Diario Página 12, 27 de enero de 2013. Opinión.

³¹⁸ El MERCOSUR (marzo de 1991) se orienta a acuerdos económicos regionales, como: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. La

Cabe aclarar que Venezuela no formó parte del Mercosur hasta el año 2012, ya que en el 2006 Paraguay bloqueó su entrada, pero además el presidente Chávez, consideraba que dicho organismo no respondía a intereses tales como los del ALBA³¹⁹.

Estos procesos de encuentros y desencuentros a nivel continental, también se acompañaron de nuevas-otras tendencias en campos vinculados a la cuestión social, sobre todo en torno del problema de la pobreza y las desigualdades-inequidades. A partir de lo cual se tornó un discurso mancomunado, con matices locales específicos, la atención a los sectores más empobrecidos, “la erradicación de la pobreza”, según objetivos del milenio, la educación y el impulso a la cohesión social.

A su vez, esto se acompañó de un interés común por instituir y consolidar la estabilidad del sistema democrático representativo y participativo, sobre todo para alcanzar el desarrollo económico y social. Se plantearon, en algunos países con más éxito y realidad, acorde a la realidad e historia de cada uno de los procesos de re-industrialización, con la incorporación del valor agregado y de tecnología. Esto también implicó una aceptación de inversión de capitales extranjeros, así como un apoyo a empresas nacionales y continentales, sobre todo en el juego conjunto de la apertura e ingreso en nuevos mercados. Se trató, ante todo, de “abrirse al mundo, pudiendo comandar el propio destino” (Ferrer, 2013), pues se considera que esto posibilita el desarrollo económico y social, sobre todo mediante la consolidación de prácticas de gobierno vinculadas con la cohesión e inclusión social, la tecnología, la capacidad de gestión y organización y el afianzamiento de liderazgos firmes.

Por último, consideramos que, más allá de los intentos de transformación ante las hegemonías neoliberales de los 90’, siguiendo a Svampa (2010), Zibechi (2011), Seoane

UNASUR (2007) es un organismo de ámbito regional que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado. Por su parte, LA CELAC (2010) es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del Grupo de Río y la CALAC, la *Cumbre de América Latina y del Caribe*, que promueve la integración y desarrollo de los países latinoamericanos. La población total de los países integrados en la Celac rondaría los 590 millones de habitantes y el territorio una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados (33 Estados miembros). Fuera del ámbito continental, Argentina, Brasil y México son los únicos países de la región que forman parte del Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes); mientras que Chile, México y Perú forman parte de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Finalmente, Chile y México son los únicos que forman parte de la OCDE. MERCOSUR: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras>; UNASUR: <http://www.unasursg.org/es>; celac: <http://www.celacinternational.org/>; consultadas, setiembre, 2011, marzo 2012.

³¹⁹ La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP (en ocasiones denominada por su nombre inicial Alianza Bolivariana para América o ALBA) es una organización internacional de ámbito regional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), impulsada por Estados Unidos.

(2012, 2012), seguimos asistiendo, con variables específicas, en cada país a:

...la generalización del modelo extractivo-exportador, basado en la extracción de recursos naturales no renovables, y la expansión de los agronegocios, necesarios para alimentar el nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente. En otros términos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera agrícola, petrolera, minera, energética, forestal. (Svampa, 2010: 6).

Este proceso ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión del territorio y el medioambiente. Por lo tanto, dichas transformaciones reorientan, no sólo la economía, también los modos de vida de pueblos enteros, así como amenazan en el mediano plazo la sustentabilidad ecológica.³²⁰

³²⁰ La minería a cielo abierto, la construcción de grandes mega-represas, los proyectos previstos por el IIRSA y prontamente los llamados agro combustibles (etanol), ilustran a cabalidad esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual. Un ejemplo de ello es la situación de los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos culturales y territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras o la soja transgénica. Esto, no implica negar todas las transformaciones políticas, económicas y judiciales propiciadas, por ej.: uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas” (Ramírez/ Minteguiaga, 2007). Sin embargo, el resultado no ha sido muy alentador: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró en abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millones de proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista. Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, minimizando el debate acerca de los gravosos efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas (Svampa, 2010... op... cit.).

II

Programa de gobierno en la Argentina (2003-2012/13): prácticas y lógicas

Acorde a nuestra perspectiva crítica en clave de gubernamentalidad, en el presente apartado pretendemos, analizar y describir los programas de gobierno y las racionalidades políticas en la Argentina en el proceso programático de re-configuración del rol del Estado y el gobierno de las poblaciones. Dicho trabajo analítico-descriptivo se realiza a partir de un corpus heterogéneo de archivos, en tanto recuperamos: escritos teórico-académicos, discursos presidenciales (nacionales, de organismos internacionales), notas periodísticas; informes oficiales; manuales; resoluciones ministeriales y ejecutivas; estadísticas, entre otros.

1.- El Programa Nacional de gobierno entre 2003-2007: primeros pasos

Luego de la implementación de recetas neoliberales en los 90' y de la crisis posterior, en el 2001, comienza a nivel nacional un proceso de reconfiguración del rol del Estado y de las tramas vinculares entre gobernados y gobernantes, en una continua discontinuidad entre nuevas y viejas racionalidades políticas. A su vez, sostenemos que la gubernamentalidad argentina de esta época llega a ser posible y advenir real en un campo propicio de condiciones históricas de posibilidad instaladas a nivel nacional e internacional-continental, según lo esbozado al respecto. Si bien se trata de un proceso local de gobierno, no deja de entretenerse con procesos regionales y globales que hacen a la geopolítica mundial y continental.

1.1- Entre transversal y transformador: avances y retrocesos, giros y contragiros (2003-2007)

En el año 2003 el programa de gobierno nacional, se instala bajo la presidencia de Néstor Kirchner³²¹. En el acto de asunción presidencial se sostiene un discurso centrado

³²¹ Néstor Kirchner había sido gobernador de Santa Cruz bajo la bandera del Peronismo - una provincia alejada al sur del país- siendo casi desconocido en la ciudad de Buenos Aires, llegó a ser el candidato presidencial de un heterogéneo frente peronista nominado: “antimenemista”, formado durante la transición presidida por Eduardo Duhalde (enero 2002 - mayo 2003). Para su llegada a la candidatura presidencial se realizaron diferentes alianzas estratégicas y acuerdos, ante todo con el para ese entonces presidente Eduardo Duhalde, los primeros diálogos formales (entre Alberto Fernández, jefe de Campaña de Kirchner y José “Pepe” Pampuro, operador de Duhalde) comenzaron en octubre del 2002, teniendo en cierre-acuerdo en noviembre de dicho año, cuando se conocía que Kirchner triplicaba en las encuestas a los otros candidatos, ante todo a De La Sota (Gobernador de Córdoba) y a

en una transformación de las prácticas y racionalidades políticas y de gobierno; según dichos tramos discursivos se comenzaría a realizar un alejamiento de las políticas neoliberales de la década de los 90`; así resuenan las palabras del presidente ante la Asamblea Legislativa en marzo del 2004:

La política puesta al servicio del bien común, las instituciones reconciliándose de a poco con la sociedad, el Estado tratando de restañar las heridas con asistencia y, sobre todo, con una intensa tarea de promoción social, las variables macroeconómicas bajo control y una proactiva inversión estatal al servicio del crecimiento y promoción de la actividad; el acento puesto en el fortalecimiento de la educación pública para que cumpla su rol de igualadora de oportunidades, forman parte del nuevo escenario que permite recrear la esperanza y las expectativas. (Discurso, 1 de Marzo del 2004)³²²

Esto implicaría una reconfiguración del rol del Estado como “protagonista, presente y promotor” frente al rol subsidiario y ausente, que se consideraba tenía en el programa de gobierno de los 90'. Pues, el modo que asume la gubernamentalidad de los 90' se encuadrada, en el entramado enunciativo del programa de gobierno asumido en 2003, como parte de la “dictadura neoliberal” iniciada en el 76'. Ante esto el programa nacional de gobierno se sostiene como:

... un esquema concreto y coherente de objetivos, instrumentos y estrategias tendientes a garantizar el bienestar y el acceso a los derechos básicos de todos los ciudadanos de un país, en el marco de un Modelo económico y social de inclusión. (...) Esto supone, entre otras cosas, garantizar el pleno empleo, el ahorro nacional, la identidad, el acceso a la vivienda, la salud, la educación, la equidad y la diversidad cultural, entre otros... (M.D.S. Tomo II, 2010: 92).³²³

Como antecedente relevante para el trazo de dicho programa de gobierno encontramos los tramos enunciativos realizados por Kirchner el 19 de junio del año 2002, cuando en un acto preelectoral en Rosario, Santa Fé dijo: “*Voy a ser Presidente de la Nación y Ministro de Economía*” (Kirchner, en: Miguez, 2013: 29). Luego, el 29 de setiembre del 2003 ante

Reuteman (en Santa Fé). Diez días después de dichos encuentros, acompañado de la decisión de los otros dos candidatos de no presentarse a elecciones, el Congreso aprueba el nuevo cronograma electoral para el 27 de abril del 2003 y segunda vuelta el 18 de mayo de igual año. Luego de estos acuerdos imposibles de desarrollar en este trabajo, Kirchner comienza a tomar cierta distancia respecto del llamado “Duhaldismo”, ante todo reafirmando que él no era “chirilota” de nadie y que venía para transformarse en el “presidente de la producción y del trabajo”, según consignas de campaña que realizaba en las provincias y en el Gran Bs. As. En el trazo de esta red de relaciones estratégicos se eligió a Scioli, para ese entonces Secretario de Turismo de la Nación, como vicepresidente. Si bien en las elecciones del 27 de abril la fórmula con mayor caudal de votos (Menem-Romero) obtuvo el 24,45%, mientras que la fórmula en segundo lugar (Kirchner- Scioli) logró el 22,24%, pocos días después estos últimos asumieron la presidencia. Puesto que, el ballottage que correspondía realizarse fue suspendido, ya que Menem desistió, ante todo porque las encuestas de opinión pronosticaban un escaso aumento de los votos durante esta segunda votación y, con ello la posible derrota electoral.

³²² Fuente: Página web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: <http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-se-dirige-a-la-asamblea-legislativa-del-congreso-2004/>; consultada marzo-junio, 2012.

³²³ Con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo, en el año 2010, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, publica dos tomos con el nombre: “Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular”. Dichos textos serán citados, de la siguiente manera: M.D.S. Tomo I o II, 2010. Pp:

los banqueros nucleados en la Asociación de Banqueros Argentinos (ADEBA) el presidente señaló: *“Es imposible un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional”* (idem), lo cual se traduce en un empresariado que se sienta protagonista de un proyecto que vuelve a remarcarse como “nacional”.

En estos enunciados encontramos una proyección política diferente a la dispuesta hasta ahora. En tanto, en la puesta en marcha de la tecnología neoliberal de gobierno en la historia Argentina los Ministros de economía, es decir, la economía política había sido el campo y el saber en torno del cual se configuraban las prácticas de gobierno partiendo de la “verdad” ofrecida por el mercado y de la funcionalidad económica del poder dirigido a las poblaciones. Mientras que la tradición peronista, ante todo aquella que se recuesta en los primeros años del gobierno trazado en base a la doctrina, como ya analizamos en el capítulo 1 apartado I, remite a un gobierno político sobre la economía, lo cual se ejerció de modos singulares en diferentes momentos y condiciones histórico-políticas de posibilidad y realidad, el retorno, por lo menos enunciativo, a estos principios rectores del peronismo temprano no solo remiten a una posible analítica de la “lealtad” (Balbi, 2010), que trasciende nuestro trabajo de tesis, también a una reconfiguración de la relación entre economía y política. Dicha relación, según veremos se traza en los intentos por lograr “la independencia económica y soberanía política” mediante, ante todo, el desendeudamiento y las transformaciones institucionales realizadas en este período de gobierno; mientras que la justicia social y la ayuda social, se proyectan en torno de las poblaciones pobres de modos también singulares, entre “viejas y nuevas” racionalidades políticas y prácticas de gobierno, tal cual analizaremos en el capítulo que sigue.

De hecho, en el período inicial (2003) la propuesta de la “transversalidad” se presentaba como una forma alternativa de representación y participación, en tanto posibilidad de construir nuevos consensos frente a la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales y de la dirigencia política: *“La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes”* (Discurso de Asunción Presidencial, 25 de Mayo del 2003)³²⁴.

³²⁴Fuente:http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/miscelaneas/discurso_de_nestor_kirchner_25_de_mayo_de_2003.php; consultada marzo-junio, 2012. Parafraseando al presidente, lo señalado en el discurso de asunción se profundiza en diferentes entramados enunciativos, como: “...va a nacer un nuevo sistema político”... “es necesario refundar la nación”... “es necesario crear un espacio que exprese lo nacional y lo popular”.

En este sentido, se proyecta la recreación del vínculo promovido por el peronismo entre partido y movimiento en el proceso mismo de reconfiguración del peronismo-justicialista y del Estado. Pues, se trataba de no encerrarse dentro del peronismo como partido único, mientras se tejían redes estratégicas de alianzas y acuerdos.

Ahora bien, la transversalidad como “proyecto político” se fue reconfigurando a lo largo del ejercicio de gobierno y de la inflexión en la racionalidad política; mientras se recreaba como “estrategia de gobierno” puesta en juego a través de tácticas diversas, cuyos efectos giraron en torno del tejido de redes de alianzas y entrecruzamientos de prácticas gubernamentales en diferentes niveles. En este sentido, en 2004 el Presidente postula “las bondades de la re-peronización” con vistas a las elecciones legislativas de octubre y la estrategia de gobierno se empieza a sustentar en la idea de privilegiar alianzas con aquellos que le permitieran ganar las elecciones.

En dicho proceso de reafirmación institucional del programa nacional de gobierno, entonces, los mecanismos de la transversalidad se ampliarían mediante algunas tácticas, que habían tenido impulso al inicio de la gestión, las cuales implicaron el diálogo y encuentro con la Federación de Trabajo y Vivienda liderada por Luis D' Elia (Central de Trabajadores de la Argentina - CTA) y núcleos sindicales de la CTA y del Movimiento de Trabajadores Argentinos, liderado por Hugo Moyano. Paralelamente, se intentaba influir globalmente al movimiento sindical, y para ello le es útil la resolución del Congreso Nacional en febrero de derogar la Ley Laboral 25.250, y la reinstalación de institutos protectores del trabajo y las negociaciones colectivas. En la práctica dirigida a lograr “alianzas estratégicas”, también se realizan esfuerzos para incorporar a sectores empresarios de la Unión Industrial Argentina favorables a la política económica. Y, por último, se pusieron en juego vínculos con las agrupaciones “moderadas” de los movimientos piqueteros (Federación de Tierra, Vivienda y Habitat – FTV- y la Corriente Clasista y Combativa – CCC), al tiempo que se produce un distanciamiento de los sectores “duros” del Bloque Nacional Piquetero y del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJP) de Raúl Castells. Esto también formó parte de la estrategia de construir un Frente para la Victoria, como movimiento socio-político (Godio, 2004).

Dicho proyecto estratégico de transversalidad, también se tejía entre los vaivenes críticos del Partido Justicialista³²⁵, que lo tildaba de “traición”. Mientras que se promovía la construcción de redes vinculares entre Estado y sociedad civil, cuyos referentes inmediatos fueron las organizaciones sociales, algunas ya enumeradas, a mediados de 2003, apenas iniciado el gobierno, el presidente favoreció encuentros con diversas organizaciones sociales, ante todo, con la mayoría de las agrupaciones de trabajadores desocupados del país, intentando entablar una relación directa con ellos.

En estos primeros momentos el encuentro se da incluso con los sectores más díscolos³²⁶, y no sólo con los que mostraban acercamiento político³²⁷, a partir de lo cual algunos autores consideran a estas prácticas de gobierno remiten a una “desterritorialización del Estado” (Gago y Sztulwark, 2014), otros como una “red de relaciones territoriales” (Maneiro, 2012), que posibilitaron cierto apoyo, que será sustancial para el afianzamiento del programa de gobierno en torno de lo cual dichas prácticas vinculares entre gobernados y gobernantes constituyen un incipiente desbloqueo – con giros y contragiros - de las modalidades previas dirigidas a las relaciones con las llamadas “organizaciones sociales”, ante todo las piqueteras, para ese entonces en plena instalación y lucha.

Resulta sugerente constatar la experiencia de la UTD Mosconi, la cual será desarrollada en el apartado III del capítulo 4, cuando comentan el momento en el que en el llamado Congreso Piquetero convocado en 2003, hicieron entrega de una carpeta en manos del presidente, en la que se reunían todas las actividades llevadas adelante por la organización

³²⁵ El peronismo de la época analizada, cuestionaba frontalmente la aspiración de una construcción política transversal, que entre otros objetivos pudiese contener a las organizaciones sociales, ante todo porque estas habían tomado y ocupado las rutas y calles durante los últimos años y aún lo continuaban haciendo. El mensaje de buena parte del peronismo era: “Kirchner debía elegir entre el partido justicialista o los piqueteros”. Dichos acontecimientos se manifiestan mientras el presidente se encontraba de viaje en China cuando Luis D’Elia (referente piquetero) acusando a Duhalde de: “*socavar los avances del proyecto popular*” y la intervención del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien recibió al dirigente piquetero y respaldó sus dichos señalando que: “*Valoramos a quien tiene la capacidad de recapacitar y entender que no es la hora de seguir tomando rutas, ni de seguir ejerciendo violencia en las calles*” (Fernández, en: Miguez, 2013: 96), considerando ciertos acuerdos con este sector del movimiento piquetero bonaerense. De hecho, en ese período el Senado de la Nación, aprobó una declaración de desagravio “a honor y la trayectoria” de Duhalde, lo cual señala un alejamiento entre ambos “mandatarios del PJ nacional”. A esto se suma, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y la ligazón de estos hechos de referentes pertenecientes al entramado duhaldista, lo cual sumó nuevos aditamentos en el proceso pendular y singular de recomposición del rol del Estado y deslegitimación del gobierno instalado entre 1989 y 1999 y los vínculos estratégicos con el principal referente del justicialismo en Bs. As.

³²⁶ Entre los cuales encontrábamos al MST-TV y al Polo Obrero entre las más vinculadas a partidos políticos, así como al MIJD y a los grupos delineados más independientes como: MTR (con varias de sus escisiones, MTR 12 de Abril, MTR.CUBA, MTR-la Dignidad, La Unión de Trabajadores Piqueteros-UTP, etc., algún componente de actual Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y los MTD, que componían la Coordinadora Aníbal Verón. Se encuentra entre quienes con el tiempo tomaron una posición opositora, la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ver: Maneiro, 2012...op...cit.

³²⁷ Entre estas se encontraban el FTV, sumándose luego el movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita (conformados por varios movimientos preexistentes, entre algunos el MTD Resistir y Vencer).

desde 1997. Entre las diversas prácticas laborales descriptas en la carpeta se encontraban los ya analizados “proyectos productivos”, los cuales, según referentes e integrantes de la UTD, son la inspiración para la inmediata creación del Programa de economía social Manos a la obra, el cual será analizado en el capítulo que sigue. Los trabajadores desocupados y piqueteros mosconenses se adjudican como suya la “idea proyecto” de dicho programa “...*el manos a la obra es nuestro*” (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista julio, 2011), en tanto señalan que había sido propuesto por ellos, mediante el ejemplo de sus prácticas e institucionalizado en dicho marco político gubernamental; a partir de lo cual es fuertemente criticado el hecho por no haber sido reconocidos como autores/fundadores de dicha técnica de gobierno dirigida, como veremos, a gobernar-los como “pobres desocupados”.

En relación específica, entonces, a los movimientos de trabajadores desocupados, ante todo en el gran Buenos Aires, lugar este en el que mayor confluencia existía y mayor complejidad relacional se avista, el programa nacional de gobierno promovía una propuesta, resistida por diversos sectores del PJ. Siguiendo a Maneiro (2012) la misma se dirigía en dos direcciones, por una parte: no ejercer represión directa dejando actuar a los trabajadores desocupados, considerando que de este modo los piqueteros, sobre todo “los ideológicos” se desgastarían por sí mismos y se aislarían, ante todo, por el peso de las críticas recibidas desde el resto de la sociedad; mientras que, por otra parte para los movimientos que “colaboren y participen” (los sensatos) se propiciarían estrategias para “emplear” a sus miembros y para participar en el proceso (institucional, ante todo) de gobierno (Maneiro, 2012: 272)³²⁸.

Por tanto, el proyecto de transversalidad instalada por y en la racionalidad de gobierno de este entonces, se re-construye en torno del entramado enunciativo de la “integración” con participación, sobre todo con aquellos sectores “afines, sensatos y seguros”, así como de desgaste de las “tomas y las ocupaciones” (de ruta, de tierras, de fábricas, de empresas,

³²⁸ Cabe señalar que en el año 2004 fue un momento en el cual el sector nucleado en torno de Duhalde, la Iglesia Católica y las cámaras empresariales agropecuarias pedían represión a las “protestas sociales” de los llamados grupos “duros” como: el PO, MTS, Quebracho y la CCC. Mientras que el Estado nacional en una manifestación señalada como “fuerte ataque” de Quebracho al Ministerio de Economía hizo uso de la represión mediante gases lacrimógenos y balas de goma, en donde hubo 102 detenidos y, entre otros Raúl Castells fue detenidos en el Chaco durante una protesta. Mientras que en paralelo iban surgiendo espacios de organización político-social, que por fuera del PJ se alineaban al PNP. El Nuevo Proyecto Nacional aglutinaba al MTV bajo la dirección de D’Elía; a Barrios de Pie, a los entonces diputados Miguel Bonasso y Francisco “Barba” Gutiérrez, al secretario de derechos humanos Eduardo Luis Duhalde y al dirigente de la CTA Depetri. Contando por ese entonces también con el apoyo de la CGT dirigida por Hugo Moyano.

etc.), en la búsqueda de armonía y “conciliación de fuerzas”, en un sostenido proceso de institucionalización democrática.

1.2-Entre economía y política, Estado y mercado: prácticas, mecanismos y dispositivos de gobierno

Acorde a lo apenas esbozado, en este primer momento, las propuestas y prácticas de gobierno del programa nacional se centraron en la intención de refundar el lugar y la acción del Estado, sosteniendo la inversión y así la demanda, es decir, el poder adquisitivo. A su vez, el Estado pretendía gobernar “con” la sociedad civil y las empresas, mediante participación y acuerdos estratégicos, en torno de la fijación de los precios, la inversión social y la productividad.

Entre algunas de las prácticas de gobierno, que hicieron a la reconfiguración del rol del Estado en la Argentina del 2003-2007, ante todo identificamos hechos simbólicos que manifiestan la decisión de integración latinoamericana, cuando el 26 de mayo con una Argentina sumida en el 21,4% de desocupación y 21 millones de habitantes en la pobreza (INDEC, 2003), el presidente se reúne con Lula, Chávez, Lagos y Castro y otros siete mandatarios. Mientras que otros hechos nos remiten a intentos de conciliación laboral y salarial entre medio de conflictos diversos en el país, por ejemplo: en su segundo día como presidente viaja a Entre Ríos para solucionar un problema salarial docente junto con Daniel Filmus, para ese entonces Ministro de Educación, y el mismo día se pasó a retiro a 44 jefes militares lo que produjo una renovación total de la cúpula de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército³²⁹.

Por su parte le siguen prácticas como, la rescisión del contrato de concesión de Correo Argentino en 2003 (que estaba en manos de SOCMA-Macri); La anulación del contrato de concesión del control de espacios radioeléctricos en 2004 (en manos de los franceses de *Thales Spectrum*), que permitió monitorear y cobrar la tasa a usuarios privados del espacio radioeléctrico que utilizan las radios de AM y FM, la telefonía celular y los canales de televisión; la creación de ENARSA (empresa estatal Energía Argentina S.A) para intervenir en el mercado de bienes energéticos y en la cadena productiva de hidrocarburos, petróleo y gas; la anulación del contrato de concesión del Ferrocarril San Martín (controlada por Sergio Taselli)³³⁰.

³²⁹ Se puso frente al ejército a un viejo conocido santacruceño: el general Roberto Bendini.

³³⁰ Para ese entonces, las 500 empresas argentinas más grandes solo controlaban el 20% de la producción total y obtenían el 5% de la rentabilidad empresarial, la extranjeras el 69% y el 84% respectivamente.

También, para este entonces, fueron removidas las autoridades del PAMI y cuestionadas las técnicas de medición del INDEC. Mientras que se puso en marcha el Primer programa de viviendas Plan Solidaridad por el que se construyeron 16.000 casas en ocho provincias del NOA y el NEA. Antes se había lanzado el planes REACTIVAR (en julio, 20.000 viviendas) y REACTIVAR II (en agosto, 26.000 viviendas) y Emergencia habitacional (en setiembre 6.000 viviendas). En los dos primeros las empresas constructoras tenían la obligación de que el personal contratado estuviera compuesto por beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar, mientras que el tercer plan introducía la novedad, que luego analizaremos en el capítulo 4 apartado I, de que las casas serían construidas por cooperativas formadas por los diferentes beneficiarios de los planes nucleados, ante todo en el Ministerio de Desarrollo Social. En tal sentido se perfila, lo que se da en llamar “el paso de la asistencia al empleo”, según sea el caso de sujetos “empleables o inempleables”, lo que se traducirá en el ejercicio de gobierno de las poblaciones pobres, en el marco de la analítica a desarrollar en el próximo capítulo, en una “inversión emprendedora en capitales humanos y sociales locales”; es decir, en el advenir del ciudadano en emprendedor, en torno del dispositivo de la economía social y la disposición del trabajo decente.

En este trayecto del programa nacional de gobierno, la proclamación de la “independencia económica” en comunión con la “soberanía política” se reafirmaba en torno de las negociaciones con el FMI y el canje de deuda iniciado allá por mediados del 2002, cuando es elegido Ministro de Economía Adolfo Prat Gay, economista liberal, fiel al Organismo internacional de crédito³³¹. A punto de comenzar la primavera del 2003 se llegó a un acuerdo con el FMI que refinanció 21.000 millones de dólares. Se fijaron metas de crecimiento del PBI y de inflación, pero no hubo un cronograma de aumento de tarifas ni un plan para compensar a los bancos, como inicialmente pedía el Organismo Internacional. Lavagna, el por entonces Ministro de economía, viajó a Dubai para la Asamblea del FMI y planteó una oferta para bajar la deuda: Argentina pagaría a los tenedores de bonos, pero una quita del 75% que era un porcentaje alto, para luego negociar disminuciones previsibles.

³³¹ Prat Gay, cercano al llamado “duhaldismo” permanece siendo parte de la plataforma del PNP por su perfil liberal y cercanía con el FMI. Sin embargo, tiene un profundo enfrentamiento con la presidencia el 29 de mayo del 2003 cuando se pretendía sostener el dólar a \$3, en tanto el dólar alto le daría competitividad a la economía, según el presidente, mientras que el presidente del Bco. Central, fiel al FMI, seguía a pie juntilla sus propuestas de dólar bajo y suba de impuestos para lograr equilibrio económico. Luego de ser removido del Ministerio de Economía, que pasa a ser ocupado por Lavagna, permanece como presidente del Bco. Central hasta que o suplanta, otro economista de perfil liberal, Martín Redrado.

En su primera participación en la Asamblea de la ONU, Kirchner dijo: “*Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna a los que están muertos*”, mientras propuso un cambio de criterio en torno de las mediciones del crecimiento económico: “*Que el éxito o fracaso de la política económica se mida en términos de crecimiento, equidad, pobreza y desempleo*” (Kirchner, discurso en la ONU, 21 de setiembre, 2003)³³². En sintonía, el 3 de enero del 2004 en la Cumbre de las Américas en Monterrey, México el presidente tuvo otra alocución en torno del FMI: “*...no podemos pagar de un modo que lesione las perspectivas de crecimiento y la gobernabilidad, generando más pobreza y exclusión*”. Mientras que al abrir por primera vez las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, en marzo del 2004 señaló que: “*La deuda es nuestro problema*” (Primer discurso presidencial, ante la sesión ordinaria del Congreso de la Nación, 1 de marzo del 2004)³³³. Para los primeros días de marzo ya se anunciaba un posible *default* por imposibilidad de un acuerdo, en tanto el 5 de marzo John Donswoth representante del FMI en Argentina se entrevistó con el ministro de economía y le presentó la propuesta final con cinco condiciones que exigía el organismo³³⁴. El acuerdo se logra bajo la condición de que Argentina pondría un piso de aceptación de los bonistas a la quita, pero no tan elevada como el 80%, que exigía el FMI, cuando en diálogo directo con la presidenta del FMI el G-7 y el FMI aceptaron negociar.³³⁵ Finalmente, el 3 de marzo del 2005 se anuncia públicamente el llamado “Canje de deuda o reestructuración de la misma, que había logrado que Argentina salga del default, luego de 38 meses de permanecer en dicha situación, con un ahorro considerable logrando un quita nominal del 55%, alargando los plazos de pago a 22 años y reduciendo notoriamente las tasas de intereses³³⁶. En enero del

³³² Fuente: Página web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: <http://www.cfkargentina.com/discurso-de-nestor-kirchner-en-la-onu-2003/>; consultada marzo-junio, 2012.

³³³ Fuente: Página web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: <http://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-se-dirige-a-la-asamblea-legislativa-del-congreso-2004/>; consultada marzo-junio, 2012.

³³⁴ Las condiciones eran: postergar hasta setiembre el acuerdo con los acreedores privados, que privilegiara en la negociación al Comité Global de acreedores (que representaba a determinados tenedores de bonos); que la Argentina no pudiera rescindir el contrato con ningún banco de los que intervenían en la negociación; que la oferta de quita a los acreedores privados fuera acatado mínimamente por el 80% de ellos para que tuviera validez y que la Argentina disminuyera la oferta de quitar el 75% de la deuda privada.

³³⁵ Ese mismo año Prat Gay fue removido de su cargo de presidente del BC, pero como el economista del JP Morgan era apreciado por el FMI, se decidió poner en su lugar a otro economista de perfil liberal, que no genere ruidos en el organismo internacional, tal fue el nombramiento de Martín Redrado.

³³⁶ El 12 de enero (2005) el ministro de economía presentó el canje en la Bolsa de Comercio, bajo la consideración de que con una aceptación del 50% Argentina saldría del default, el FMI había señalado que aceptaría la salida con una aceptación del 75%, cuando el canje alcanzado el 76,15% de adhesión. El país tenía un default del 57% de la deuda, es decir de 152 series de bonos en poder de tenedores privados por un valor nominal de 81.800 millones de dólares. Una vez concretado el canje, la deuda paso a representar el 72,4% del PBI, mientras que en la convertibilidad la relación ascendía al 113% y en el 2001 significaba el 166% del PBI. Cuando en el 2012 la relación estaba en el 41,8% del PBI. Ver: Miguez, 2013: 117-118.

2006, de modo anticipado se cancela la totalidad de la deuda con el FMI en un solo pago de 9.530 millones de dólares provenientes de las reservas monetarias que para ese entonces rondaban los 27.000 millones de dólares. La para ese entonces Ministra de economía Felisa Miceli, señalaba que: “...este pago permite indicar una nueva etapa, donde los argentinos podremos decir sin demasiados cuestionamientos las políticas que llevaremos adelante” (Declaraciones públicas de Miceli, enero, 2006, en: Miguez, 2013: 139); así también se señala que Argentina podría comenzar a formar parte de la economía mundial mientras se refuerzan los vínculos con los países latinoamericanos, ante todo con aquellos con los que se había acordado un ferviente “no al ALCA”. En tal sentido, se logra un paso inicial de desendeudamiento, que permite, según tramos oficiales de enunciación, la pronunciada “independencia económica” y el ejercicio “soberano de la política”³³⁷.

En sintonía con este proceso de reconfiguración del rol del Estado y la relación entre la economía y la política, resultan relevantes los primeros encuentros desencontrados con el luego bautizado espacio de “el campo”. Allá por julio del 2003, como cada año la Sociedad Rural organizaba su exposición ganadera y el presidente no concurrió por cuestiones de agenda, por lo cual fue duramente criticado y realizadas las voces que solicitaban “la eliminación de las retenciones a la exportación”, que habían sido dispuestas en la presidencia de Duhalde, o por lo menos se solicitaba una reducción del porcentaje. En el año 2004, por agosto, el presidente visita la Sociedad Rural y responde, por un lado a los pedidos de poner “límites severos a la protesta social”: “Respetando la convivencia plena entre los argentinos y el derecho a protestar de la población, vamos a aplicar la ley. Lo estamos haciendo pero siempre con un tono disuasivo”, y por otro lado, sobre el pedido de rebaja insistente de las retenciones señaló: “Estamos llevando adelante un sistema económico que ha permitido que el campo resurgiera, que vuelva a tener rentabilidad” (Kirchner, 2 de agosto del 2005, Discurso Sociedad Rural en: Miguez, 2013: 100).

Entre algunas de las prácticas de gobierno en relación con este sector predominante de la “economía nacional”, en torno a una reconfiguración del orden político establecido hasta ahora, una diferencia nos remite hacia finales del año 2005 cuando la inflación era del 12,3% (INDEC, 2005), ante lo cual la principal tarea designada a la Ministra de economía

³³⁷ El pago de la deuda se realizó con diversas críticas por parte de otros sectores que sostenían que “no había que pagar”, tal es el caso de los partidos de izquierda, como del sector peronista nucleado en torno de Rodríguez Saa, entre otros.

era lograr “acuerdos de precios”, mientras que el Ministro de Trabajo debía lograr que las paritarias abiertas no se salieran del cauce con aumentos desmedidos de salarios. Cuando no se llega a un acuerdo en torno de los precios a comienzos del año 2006, ante todo con el precio de la carne vacuna, la harina y la leche (que conforman la tradicional alimentación en Argentina: carne, lácteos y pan) se decidió restringir las exportaciones de la carne, ante todo.

Entre tanto, la creciente demanda exterior y la sojización del campo, que redujo la cantidad de tierras destinadas a la producción ganadera, habían hecho que la oferta para el consumo interno fuera muy baja y los precios altos. Con el freno gradual de las exportaciones, los productores se vieron obligados a firmar acuerdos para precios llamados “populares”, mientras que el Estado se comprometía a liberar, gradualmente, las exportaciones de la carne³³⁸.

A finales del año 2006 se realizó un *lockout* patronal de las empresas agropecuarias nucleadas en la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria, durante el cual no comercializaron carne por nueve días. La medida fue explícitamente en contra: “...de la intervención del Estado en el mercado” (Clarín, 4/12/2006). En un diálogo entre productores agropecuarios y el Estado, este último reclamaba que recuerden los subsidios destinados a mantener alto el dólar y al gasoil que se estaban garantizando y entre un conjunto de pedidos se logró, por parte del sector agropecuario, la reedición de la cuota de las exportaciones y se permitió faenar animales más chicos para aumentar la oferta, mientras que con los frigoríficos se prolongaba la negociación del congelamiento de precios para los cortes de carne mas consumidos.

Pese a estos acuerdo se ratificó el *lockout* por lo cual el Estado nacional dispuso camiones del Ejército para trasladar ganado del mercado de Liniers y evitar el desabastecimiento y el 26 de diciembre, cuando el *lockout* no tuvo el éxito esperado, ante todo por el no apoyo de la Sociedad Rural y de Coninagro, se decide la creación del Registro de Exportaciones a partir de lo cual cada operación debería contar con un permiso de Aduana. Mientras que, para inicios del 2007 se anuncia un aumento de las retenciones de soja y sus derivados para 4%, lo cual es tomado como una “provocación” que derivó en un nuevo *lockout* mediante cortes de ruta motorizado por la Federación

³³⁸ El acuerdo y negociación quedó en manos de Guillermo Moreno, y para quienes no cumplieran con el mismo se aplicarían sanciones, desde multas hasta la clausura, también se estipuló que en caso de incumplimiento se podría poner en vigencia la Ley de Abastecimiento. Días después se lanzó el lineamiento del llamado “Plan Ganadero” para sentar las metas del sector, entre ellas incrementar la oferta y la competitividad.

Agraria ante todo. Se logró un acuerdo, luego de una modificación bajo la promesa de subsidiar a los productores de trigo, dar especial atención a los deudores del Bco. Nación y liberar gradualmente la exportación de la carne, mientras que los productores se comprometían en que su búsqueda de mayor rentabilidad no podía afectar al mercado interno.

Ahora bien, el conflicto no se cerró, en abril de ese año se inició un nuevo *lockhout* promovido por CARBAP que agrupaba a los grandes estancieros de las dos provincias ganaderas más ricas, Buenos Aires y La Pampa. Dicho conflicto se renovarían entre agosto y noviembre y se extendería hasta la Ley N° 125/08.

Nos hemos detenido en el relato de las prácticas de gobierno en torno del sector agroganadero nacional, considerando que allí se avistan algunas señales que demarcan singularidades en el proceso candente de reconfiguración del rol de Estado. En tanto se denota una práctica de intervención de la política en la economía, en el intento de negociar la estabilización de precios y de regular y habilitar el movimiento del llamado “mercado interno”, sin dejar por ello que las exportaciones sigan siendo posibles en clave de rentabilidad y competitividad, para lo cual el Estado otorgaba subsidios, entre otras cuestiones.

En este movedizo tejido vincular, también algunas reformas institucionales resultaron relevantes, ante todo, las vinculadas con ámbitos como la Justicia, los Derechos Humanos y la llamada constitucionalidad político-gubernamental. En el caso de la Corte Suprema, se ejecuta el pedido de juicio al presidente de la corte, por ese entonces Julio Nazareno, en torno del problema de la “mayoría automática” durante la presidencia anterior. También para ese entonces se reforma el sistema de elección de jueces que limitaría las facultades del Poder ejecutivo, y abriría el juego a la sociedad civil al establecer la posibilidad de impugnar la propuesta del/la presidente de turno³³⁹. En esta línea se buscaron mecanismos para que los autores de abusos de represión ilegal durante la dictadura militar de 1976 fuesen juzgados en el país, tras lo cual se constitucionalizó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1995 a la cual Argentina no había adherido. El 14 de junio del 2005 el máximo tribunal decidió que la ley 25.779 era constitucional y que por lo tanto eran inválidas e

³³⁹ También en ese momento se propuso como integrante de la corte a Raúl Zaffaroni, quien había sido muy crítico del llamado “kirchenismo santracruceño”, mientras que dicha designación fue fuertemente cuestionada por la cúpula de la Iglesia católica, desde siempre influyente en el ejercicio de Justicia nacional, por considerar a Zaffaroni como excesivamente garantista de los derechos, ante todo porque los obispos querían que se mantuvieran las leyes de Punto final y Obediencia Debida

inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Dicha medida abrió las puertas a la ejecución de los juicios de los acusados de crímenes de lesa humanidad en un marcado proceso de reivindicación de la Justicia, en Argentina.

También, por ese entonces, se sancionaba a Ley de Educación Técnico-Profesional (N° 26.058), acorde al esquema productivo que pretendía ser puesto en marcha en el país, en tanto las escuelas técnicas abastecerían de mano de obra calificada para las industrias. En esta línea, también se presentaron la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075) y se dio luz verde a una Ley General de Educación (N° 28044), las cuales serían aprobadas por el Congreso en el año 2006. También en el año 2006 las reformas institucionales en torno de la Justicia se avistan en la reforma del Consejo de la Magistratura³⁴⁰ y la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, ley a partir de la cual el Congreso tiene la prerrogativa para darle validez a un decreto o abocarse a su tratamiento legislativo.³⁴¹

Luego de las elecciones de medio tiempo del 2005 - donde Cristina Fernández de Kirchner fue elegida senadora nacional, batiendo a Chiche Duhalde -, el Frente para la Victoria, acumuló suficiente legitimidad y con ella introdujo más cambios, entre algunos de ellos: la anulación del contrato de concesión de Aguas Argentinas -en manos del grupo francés Suez- y la creación de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), encargada de proveer del servicio de agua y cloacas a 11 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense (el 90% en manos del Estado y el 10% en poder de los trabajadores por medio de un Programa de Propiedad Participada marzo/2006); la recuperación y toma de posesión del astillero naval Tandanor (privatizado en 1991); la empresa volvió a la órbita estatal (estaba gerenciada por los propios trabajadores, luego de que el accionista mayoritario se presentara en quiebra). También aquí el Estado es dueño del 90% de las acciones y los trabajadores del 10% (abril/2007).

Si bien, las prácticas de gobierno descritas se realizaron apostando a transformar el rol del Estado, desde la institucionalización democrática y la potencial conciliación de

³⁴⁰ Desde noviembre del 2006 la Corte Suprema, por un proyecto presentado por la por entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner, funcionaría con un total de 5 miembros estableciendo que la reducción se produciría en la medida en que se fueran generando vacantes y las dos primeras no se cubrirían. Mientras que por el lado de la Educación se constituyó el Fondo de Garantía para los Salarios Docentes, el pago del Incentivo Docente y la Ley de Financiamiento educativo. Además de aprobarse la Ley Nacional de Educación Sexual (Ley 26.206) y a Ley Federal de Educación que establecía un sistema educativo único a nivel nacional de una escuela primaria de 7 años y una secundaria de 5° dos niveles de 6 años cada uno; la obligatoriedad de la sala de 5 años.

³⁴¹ Otro punto destacado de las reglamentaciones que no pueden sancionarse decretos sobre materia penal, tributaria o electoral, o sobre el régimen de los partidos políticos.

fuerzas, sin embargo, las redes vinculares que posibilitarían, de modo equilibrado e integral, la fuerza promotora del cambio social³⁴² no se configuraron en relación con espacios de lucha y resistencia organizada, como es el caso de los trabajadores desocupados que, en su mayoría, continúan, hasta nuestros días, siendo gobernados como pobres en sus territorios locales, según analizaremos en el capítulo 4.

En Argentina, por tanto, en estos momentos de inicio, entre la urgencia, la emergencia y la afirmación, el programa de gobierno se configura, singularmente, en relación con lógicas políticas y de gobierno dirigidas al crecimiento, la inversión y el tecnicismo económico político; de la mano de procesos de institucionalización y reafirmación de un Estado protagónico de Derecho, en torno de la constitución de la figura del presidente-dirigente y la centralización de voces y verdades, en ciertos espacios de poder y gobierno.

2.- Profundizaciones, crisis y transformaciones (2007-2011)

A partir del año 2007 acorde a las condiciones históricas de posibilidad y realidad de la época, las racionalidades políticas que codifican las prácticas de gobierno y moldean la gubernamentalidad en Argentina resultan recreadas, ahora con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner³⁴³ (CFK, de ahora en más). En tanto, el programa de gobierno se instala con un discurso centrado en sostener y profundizar lo logrado hasta ahora, ante todo mediante el crecimiento económico sostenido, con la creación de empleo-trabajo y de “inclusión social con equidad”, con la intención expresa de regular la distribución de la riqueza/ingreso y favorecer la creación de oportunidades.

³⁴² Si bien en Argentina se producen medidas y decisiones gubernamentales dirigidas a: re-estatizaciones y procesos político-económicos con perfil nacionalista, sin embargo: “...en términos de políticas redistributiva, elección de socios económicos, modo de pensar la política institucional y sus aparatos, entre otros temas, parecen tener mayor peso que las rupturas efectivamente logradas” (Svampa, 2010: 19), esto conlleva a repensar los programas de gobierno que instan a una “conciliación de fuerzas” y no a un “equilibrio” de las mismas, en tanto propicien el crecimiento competitivo de la economía nacional y con ello el un armonioso desarrollo social ascendente. En tanto, la tradición nacional y popular se instala dando primacía el sistema institucional, mediante el protagonismo del “peronismo”, siguiendo a Svampa (2010) por sobre aquel de los movimientos sociales como agentes del “cambio social”.

³⁴³ Cristina Fernández de Kirchner (1953) estudió abogacía y fue la primera mujer argentina elegida para el cargo de presidenta y la segunda en ejercerlo. Su primer cargo electivo lo obtuvo en 1989 como diputada provincial de Santa Cruz. En 1995, Cristina Fernández fue elegida senadora nacional por la misma provincia, mientras Néstor Kirchner, su esposo, era gobernador. En este período, si bien pertenecía a la bancada oficialista, se opuso a varios proyectos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el proyecto presentado durante el litigio del campo de hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento la Reforma Laboral y la Ley de Hidrocarburos. Permaneció en el cargo hasta el 3 de diciembre de 1997 en que, ya electa diputada nacional por la provincia Santa Cruz, renunció por sus diferencias con el bloque del PJ, y el día 10 asumió en su nuevo cargo. Al año siguiente, sus diferencias con el Gobierno nacional le valieron que fuera desafectada de las comisiones que integraba. Volvió al Senado en 2001 y asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2005 donde fue elegida también senadora nacional pero por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta asumir la primera magistratura desde 2007.

En los inicios de este período de gobierno se profundizan los conflictos ligados a las dinámicas de concentración en los circuitos agroindustriales y la creciente articulación de su poder social, lo que dio en llamarse el “conflicto del campo”. El 11 de marzo del 2008 se anuncia la implementación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de granos y oleaginosas, que en lo inmediato significaban un aumento del 35 al 40%. A continuación de ello el conjunto de Representaciones Gremiales y empresariales Agropecuarias³⁴⁴ rechazaron, activamente la medida: comunicaciones masivas, cortes de ruta-lockout, desabastecimientos urbanos, paros indeterminados y “cacerolazos” a favor del llamado “campo”, entre otras prácticas de protesta.

Luego de varios intentos de diálogo, el Estado anuncia medidas compensatorias para pequeños productores, quienes en la práctica quedan exentos del alza de los impuestos, pero esto no aplaca la situación que conlleva a la renuncia del Ministro de economía Martín Lousteau. Finalmente, el oficialismo logra aprobar el proyecto de ley de retenciones en la Cámara de Diputados por una diferencia mínima (129 votos contra) y lo gira al Senado para su ratificación. Pero, luego de un debate de 18 horas, el vicepresidente Julio Cobos debe desempatar la votación y se inclina por el rechazo al proyecto oficial, en tal sentido el gobierno nacional debe derogar la resolución 125 tras el revés en el Senado³⁴⁵.

Por tanto, en esta etapa el programa de gobierno se reconfigura en un marco de estallidos de una oposición alineada política y económicamente, al interior de los grupos económicos hegemónicos y de derecha neoconservadora argentina, que articula: “...a los agentes económicos y corporativo de un grupo dentro de la fracción productivo-exportadora del capital (ligadas al agro), los principales medios masivos de comunicación y una derecha política con distintas variantes” (Varesi, 2010a: 62).

Ahora bien, no solo se trató de retenciones, sino también de la disposición, por parte de un vasto sector de la llamada “clase media”, en torno del discurso de la “inseguridad”³⁴⁶:

³⁴⁴ Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro - Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

³⁴⁵ En medio del conflicto con las cámaras agropecuarias, con Clarín y sus modos de embestir en torno de las prácticas de gobierno, Néstor Kirchner sostenía que: “*hay que blindar a Cristina*”. A principios de abril del 2007 el ex presidente realiza un acto en el Centro Galicia en el cual sostiene: “*Vengo a asumir la presidencia del PJ y no va a ser para cultivar la teoría de la confrontación, sino del amor. No trabajamos para que a nadie le vaya mal. Que nunca más resolvamos nuestros problemas agudizando las contradicciones*” (Kirchner, 10 de abril del 2007, Bs. As., en: Miguez, 2013: 232). El 23 de abril Kirchner asume la presidencia del partido, según lo confirma la Justicia al frente del Conejo Nacional del Partido y el 24 asume formal en un acto en Ezeiza, lo acompañaron 74 dirigentes entre ellos, Scioli, Capitanich, Moyano, Urribari, entre otros.

³⁴⁶ El caso Blumberg en el 2004 y Cromañón tiempo después, fueron acontecimientos que pusieron en riesgo el ejercicio del gobierno presidencial, bajo el reclamo entrelazado en el discurso de la “inseguridad”. A los cuales se

“...La otredad amenazadora se encarna sobre todo en dos figuras el pobre peligroso y el Estado que, presuntamente a través de diversas maniobras lo ampara. Desde este lugar reviven nuevas formas de racismo...” (Murillo, 2011: 106). En tal sentido, se evidencia la impronta neocolonial, en dichas afirmaciones y lógicas manifiestas en y desde algunos sectores de la población argentina, en tanto el neocolonialismo remite a una tecnología de gobierno dirigida a construir a esos “otros” como riesgosos, peligrosos y en muchos casos, sujetos merecedores de muerte, represión, castigo, paradójamente necesarios para el equilibrado funcionamiento del neoliberalismo.

La crisis financiera mundial estalla en el año 2008³⁴⁷ y, si bien había tenido repercusiones - de humor - en la Bolsa Porteña, no tuvo mayores repercusiones inmediatas en la economía local, ante todo debido al proceso marcado de desendeudamiento iniciado en el 2003 y consolidado en 2006. Las primeras consecuencias se comenzaron a sentir un tiempo después, cuando la crisis había afectado a los principales socios comerciales del país, ante todo a Brasil. La caída de las exportaciones y la presión externa por excedentes de stock de producción serían el principal problema para la administración del Estado argentino, lo cual pretendió ser equilibrado mediante una consolidación del mercado interno, ante la limitación del mercado externo.

El primer discurso de CFK en la ONU deja entrever los trazos de las racionalidades de gobierno que configuran las prácticas y programáticas de la época, ante todo en torno la relación entre el Estado y el mercado, esto es entre la economía y la política:

No nos pone contentos ni alegres esta situación, por el contrario, la consideramos también una oportunidad histórica para poder revisar comportamientos y políticas (...) Se nos dijo a los países de la región de la América del Sur que el mercado todo lo solucionaba, que el Estado no era necesario, que el intervencionismo estatal era nostalgia de grupos que no habían comprendido cómo había evolucionado la economía. Sin embargo, se produce la intervención estatal más formidable de la que se tenga memoria precisamente desde el lugar donde nos habían dicho que el Estado no era necesario, en el marco, además, de un

pueden sumar los cacerolazos realizados por sectores medios y altos de la sociedad argentina (Setiembre, noviembre y diciembre del 2012), en diferentes puntos del país.

³⁴⁷ Desde hacía un año, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, denominada “crisis *subprime*”, el sistema financiero de los Estados Unidos venía tambaleando con picos y bajas constantes, que se habían profundizado desde comienzos del 2008. Para mediados de setiembre de dicho año la crisis bancaria terminó de instalarse en la agenda estadounidense y también en el resto del mundo. El Estado norteamericano toma la decisión de aprobar un millonario paquete de rescate para el sector inmobiliario, ante todo toma control de dos compañías hipotecarias del país: *Fannie Mae* y *Freddie Mac*. En la puesta en juego de este “plan de salvataje” el banco de inversiones *Lehman Brothers* se declara en bancarrota, mientras que otras compañías se absorbían y realizaban diversas estrategias conjuntas para evitar sus quiebras. Con el lanzamiento del rescate las bolsas del mundo se dispararon con subidas records, pero esto duró poco, en tanto la crisis se extendía hacia la economía real de los EE.UU y hacia el resto del mundo financiero. Tal fue el caso de Gran Bretaña en donde el banco hipotecario *Halifax Bank of Scotland* (HBOS) se declaró camino a la quiebra, algo similar a lo que pasaría en Alemania. Este diagrama se complicó aún más, cuando a fines de setiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó el proyecto de rescate financiero. Ver: Miguez, 2013: 303-04.

fenomenal déficit fiscal y comercial. (CFK, Primer Discurso en la ONU 23 de setiembre del 2008).³⁴⁸

Por su parte, en la Argentina de esta época, la lógica “intervencionista” se dirigía a reconfigurar la relación entre economía y política, según lineamientos renovados del peronismo temprano. Con la crisis financiera, de hecho, cuando se pretende reformar al mercado interno, se señala con énfasis que “el empleo no se toca”, bajo la creación de la Mesa de coordinación, conformada por diferentes funcionarios por áreas, además de la CGT y la UIA. Para octubre de este año se anunciaron la intensificación de los controles a las importaciones de productos sensibles con impacto en la industria nacional, luego a estas medidas aduaneras se le sumaría la extensión del régimen de licencias no automáticas a un mayor número de productos, para controlar aun más qué estaba ingresando al país, y eventualmente, demorado. A lo cual se le suma la modificación del método para establecer valores de referencia, para evitar importaciones a precios “mentirosos”³⁴⁹.

Así es como emerge una estrategia dirigida a “alentar la competitividad de los sectores exportadores” entre cuyas medidas centrales encontramos la reducción, por parte del Banco Central de los encajes para los depósitos en moneda extranjera, lo que generó indirectamente que el sistema financiero dispusiera de unos 1.000 millones de dólares extra para financiar exportaciones. Mientras que se mantuvieron reuniones y se crearon acuerdos con sectores empresarios con los cuales el Estado se comprometía a asegurarles mayor protección del mercado interno y más políticas destinadas a la competitividad, ante todo mediante subsidios e incentivos; y los empresarios se comprometían a mantener el nivel de empleo y de precios.

De este modo, se instalaron modos distintos de relación con los llamados “países centrales” mientras se reconfiguraba el rol del Estado en el ejercicio de políticas llamadas “contracíclicas”, que situaban a la región latinoamericana en un punto de contracara en la geopolítica mundial y financiera. En el caso argentino, el acuerdo entre los espacios públicos y los llamados privados, entre los estados, las empresas y los mercados marcaba una orientación político-gubernamental hacía el sostén del crecimiento económico, el

³⁴⁸ Fuente: Página web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: <http://www.cfkargentina.com/mensaje-de-cristina-a-la-asamblea-general-de-la-onu-2008/>; consultada agosto-setiembre, 2012/13.

³⁴⁹ Los primeros 120 “nuevos valores” de referencia para combatir la “subfacturación” de la importación fueron para sectores que son claves en la economía, principalmente por la cantidad de empleo que generan: electrodomésticos, textiles y metalúrgicos.

sostén del empleo y de ciertos modos de gobernar a las poblaciones pobres, como analizaremos en el capítulo que sigue.

A estos avatares críticos se le suma que en el año 2009 el Frente para la Victoria pierde la mayoría en el Senado (2009)³⁵⁰ y luego de la llamada “crisis del campo”, se decide dar un giro, en torno del cual pretenden ser profundizadas las estrategias que daremos en llamar de perfil neodesarrollista. A partir de esto se van consolidando alianzas con el capital productivo ligado a la industria y el procesamiento de recursos naturales (petróleo y minería principalmente), así como se busca apoyo de los sectores llamado “populares”, sobre todo los sindicalizados³⁵¹ y agrupadas bajo la bandera de apoyo al proyecto gubernamental vigente (Varessi, 2010a; Felix, 2014; Paulizzi, 2014a).

En el tejido de este programa de gobierno, se retornó a la puja distributiva, mientras se profundizaron las prácticas de intervención en torno de las poblaciones pobres, como veremos en el próximo capítulo. Algunas de las medidas más importante tomadas, en este momento de la gubernamentalidad Argentina fueron: ante todo, la continuidad en la práctica política de desendeudamiento, cuando en setiembre del 2008 se anuncia el cancelamiento total de la deuda con el Club de Paris, unos 6.706 millones de dólares que fueron pagados con las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Con esta cancelación también se anunció que la Argentina había recibido la oferta de tres bancos – *Citi*, *Barclays* y *Deutsche* - de reabrir el canje de deuda para incluir a los bonistas que no ingresaron en el acuerdo del 2005. El Estado argentino también apostaba a que la reapertura de dicho canje junto con la cancelación del Club de Paris llevarían al detenimiento de los juicios que se llevaban a cabo en Nueva York en el juzgado del juez Thomas Griesa en torno de los llamados “fondos buitres”³⁵²; Otra práctica de gobierno

³⁵⁰ La gran derrota se vivió en el Gran Buenos Aires, en donde Scioli era por entonces gobernador. Néstor Kirchner decidió asumir la derrota renunciando a la presidencia de partido justicialista y promoviendo para ella a Scioli, tras lo cual este quedaría liberado para no asumir la banca obtenida y continuar en el lugar de gobernador provincial. Ante todo, se puso en marcha un discurso que alentaba la discusión en torno de la “lealtad y la traición” en de los llamados “punteros grupos de apoyo”, que no habían apoyado las candidaturas del PNP para ese entonces y sí las promovidas por De Narváez, entre otros.

³⁵¹ Cabe remarcar que a mediados del 2012 el gobierno de Estado rompe relaciones con la Central de Trabajadores - CGT, cuya alianza resultaba estratégica. Mientras abre el juego de vinculación con aquellos sectores “organizados” en torno de los modelos dispuestos por el mismo Estado: cierto sector de la CTA, la Cámpora, la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), la Juventud Peronista (JP), entre otras organizaciones aglutinadas en “Unidos y Organizados” (2011-2012).

³⁵² Un “fondo buitre” es un fondo de capital riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad, que se considera cercana a la quiebra. El *modus operandi* de los fondos buitre consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal, y luego litigar o presionar por el pago del 100% de este valor. El nombre es una metáfora que compara a estos inversores de estos fondos con los buitres al sobrevolar pacientemente, esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Los operadores de mercado prefieren evitar esta denominación con denotación negativa, y en

central fue el rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral mediante la compra de las acciones de ambas compañías (septiembre/2008); La estatización de las AFJPs (noviembre/2008); el Estado pasa a administrar el aporte de los 9.5 millones de personas que se encontraban en el sistema de privado, y se traduce en que \$ 13.000 millones al año dejan de estar al servicio de la especulación financiera y pasan a sostener políticas públicas de inclusión social; La nacionalización de Fábrica Militar de Aviones (Córdoba) privatizada en la década del '90 y en manos de la empresa estadounidense Lockheed Martín (agosto/2009) que vuelve a propiedad del Estado por \$ 67 millones. Así como se expanden los derechos sociales y la proyección de la mentada “ciudadanía” en torno del entramado enunciativo de la “inclusión” con “libertad e igualdad”, en tal sentido se instituyen, en 2009: la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 25.522 y, Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual será analizada en profundidad en el apartado I del capítulo 4.

En el año del bicentenario (2010) entre disputas, trabas e iniciativas se instala el programa “Conectar Igualdad” (financiado por ANSES) dirigidos a achicar la brecha digital a partir de la entrega de una computadora portátil (*netbook*) para alumnos y docentes de la educación secundaria, en esta instancia, que luego se amplía a la primaria; para mayo de este año Néstor Kirchner asume la presidencia del UNASUR; luego de cinco años se anuncia públicamente que se volvería a abrir el canje de deuda para aquellos bonistas que se habían quedado afuera la primera reestructuración en el 2005 y que poseían aun títulos, a partir de lo cual se logró aislar a los “fondos buitres” que continuaron reclamando en los tribunales internacionales para cobrar la totalidad de la deuda “defaulteada” que habían adquirido a un precio irrisorio, luego de estallada la crisis³⁵³; Diversos acontecimientos entre octubre y diciembre del 2010, como la muerte de Mariano Ferreyra³⁵⁴ y los diferentes sucesos de desalojo y represión en el Parque

su lugar los llaman *distressed debto* “fondo de situaciones especiales” (*special situations funds*, en inglés). En finanzas, se llama también a los fondos buitre como *holdouts* (del inglés *to hold out*, quedarse fuera), en referencia a la acción que realiza el tenedor de bonos de deuda pública que se mantiene por fuera de una negociación de amortización. En este caso puntual en Argentina, dos semanas antes a la medida señalada, un “fondo buitre” había trabado un embargo contra una cuenta del Banco Nación en los Estados Unidos. Este nuevo canje, que requirió el tratamiento del poder legislativo para que fuera re-abierto el esquema legal del 2005, recién llega a concretarse en abril del 2010.

³⁵³ Una vez concretado el segundo canje, la Argentina había logrado reestructurar el 92,4% de los 102.000 millones de dólares que se declararon en default en el 2001

³⁵⁴ El 20 de octubre Mariano Ferreyra, un joven militante del Partido Obrero de 23 años, muere baleado por una patota de la Unión Ferroviaria en las cercanías de la estación de Hipólito Irigoyen de la ex línea General Roca. La movilización de la cual participaba se llevaba adelante para reclamar la incorporación como empleados ferroviarios de trabajadores “terciarizados”, es decir que cumplían tareas en empresas proveedoras de ferrocarriles urbanos, una actividad irregular que dio a partir de la privatización de los años 90’.

Indoamericano³⁵⁵, la presidenta anuncia, tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de dicho año, la creación del Ministerio de Seguridad que pasaba a separarse del área de Justicia.

Estas decisiones políticas gubernamentales se refuerzan en torno a ciertas medidas como: las transferencias indirectas hacia el capital, vinculadas con el impulso a las exenciones y rebajas impositivas promoviendo la inversión en capitales e infraestructura, reduciendo aranceles de importación y otorgando beneficios impositivos. También, se gestaron transferencias directas al capital, con el fin de sostener el nivel de empleo, por ej.: mediante el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que otorgaba a empresas en crisis un subsidio por trabajador para completar el salario; se impulsó un incentivo al consumo, mediante créditos a sectores de ingresos medios y altos; se dispuso el blanqueo de capitales mediante la declaración de fondos de diferentes tipos; se realizaron Obras Públicas, sobre todo de la mano del *Plan Obras para Todos* los Argentinos la distribución e inversión de fondos estatales para infraestructura vial, viviendas, energía, minería, etc.

Y por último, cabe mencionar el aumento del salario mínimo, al aumento de la inversión y el gasto público, sobre todo, en los presupuestos de Planes y Programas como Plan Alimentario Nacional, la creación de Argentina Trabaja, y la ya mencionada AUH, sobre todo. (Varessi, 2010b: 157-161).

También remarcamos que para inicios del 2011, año electoral, se pone en evidencia el quiebre y disputa con la CGT dirigida por Hugo Moyano, el cual había comenzado allá por octubre del 2010, quien solicitaba un lugar en el armado de las listas para las elecciones de este año, y en un acto del 29 de abril reclamó que se votara el proyecto de reparto de ganancias de las empresas con los trabajadores, proyecto que había ingresado al parlamento en nombre de la CGT, se explicitaba el cambio de rumbo en la relación entre el Estado y el principal gremio de camioneros de perfil peronista de la Argentina a partir de la presidencia de CFK.

³⁵⁵ Los primeros días de diciembre sucede un episodio en la ciudad de Buenos Aires, vinculado con el desalojo de un grupo de familias que habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano frente al Parque de la Ciudad, en Villa Soldati (que tenía casas construidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo). Luego, la represión que lanzaron desde la policía Federal y Metropolitana a los vecinos de la zona tuvo como resultado dos muertos (uno de nacionalidad boliviana y otro paraguaya) y decenas de heridos; el parque volvió a ser ocupado mientras que desde la intendencia de la ciudad de Bs. As., responsabilizó por lo ocurrido a : “*todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia*” (Declaraciones Públicas de M. Macri, 9 de diciembre de 2010, en: Miguez, 2013: 488-89). Mientras tanto, en el parque se realizaban fuertes enfrentamientos ahora entre dos bandas diferentes de la Villa 20 para determinar quien tomaba posesión del lugar, a lo cual se le sumaron otros dos muertos. Ante este panorama se crea el Ministerio de Seguridad de la Nación, ante todo bajo la impronta de una “*Argentina no xenófoba*”, según lo manifestó, públicamente CFK.

Desde la Casa Rosada en un acto en el cual la presidente anunció que YPF había hallado más petróleo en Neuquén propuso que en los convenios colectivos de trabajo que lo permitieran, se incluyeran cláusulas para repartir con los asalariados una parte de las ganancias empresariales, como lo había hecho por ej.: la empresa de neumáticos *Firestone*. De este modo se manifestó el desacuerdo con el reparto de ganancias según ley: *“Me parece que el convenio colectivo de trabajo es un instrumento muy idóneo para poder discutir el tema por una razón muy sencilla: una ley es algo general, lo general no puede ser aplicado a todo el mundo y a todas las actividades económicas”* (CFK, Acto Buenos Aires abril, 2011, en Miguez, 2013: 522), mientras que en un acto en José. C. Paz sostuvo que: *“...no iba a permitir la explotación de los trabajadores, pero tampoco toleraría la extorsión de los gremios”*. (Miguez, 2013: 522-23). De hecho en las aperturas de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de este año también se había manifestado que: *“...quiero seguir siendo compañera de mis compañeros de los sindicatos y no cómplice de maniobras que siempre terminan perjudicando a los trabajadores”* (CFK, Discurso de apertura de las Sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, 1 de marzo del 2011)³⁵⁶.

A estos conflictos se sumaban otros vinculados con docentes y petroleros en Santa Cruz, así como por el bloqueo de camiones en las refinerías de Buenos Aires que habían dificultado la distribución del combustible, dichos acontecimientos cargados de los aires preelectorales llevaron a un quiebre con la CGT y a una importante redefinición en torno de los trabajadores y la organización de los mismos en el marco de un programa gobierno que comenzaría a trazar políticas a largo plazo, según veremos a continuación.

En este juego vincular entre economía y política, entre Estado y mercado cabe rescatar los tramos enunciativos de una “charla informal que CFK mantenía con un pequeño grupo de funcionarios en el hotel en el que se alojaban en su último viaje al exterior allá por el año 2008. Dichos tramos enunciativos se encuentran transcritos por Miguez en su libro cuando él participó de dicha comitiva en lugar de periodista:

Hay que ayudar a crear una nueva conciencia ciudadana. A veces nos creemos omnipotentes, pero el desarrollo está más ligado al comportamiento de la gente que a las decisiones que podamos tomar como Gobierno. Nosotros podemos tomar muchas medidas económicas para ayudar o para orientar. Pero ¿Por qué insistimos con la defensa de los derechos humanos? No sólo es una cuestión moral. Con discriminación no hay desarrollo posible, sin derechos humanos no hay desarrollo posible, porque para que la comunidad se desarrolle tiene que haber igualdad de oportunidades. (...)Tenemos que apuntar a la capacitación de la gente en las nuevas industrias, las tecnológicas, tenemos que cansarnos de ayudar a los que les poner en valor agregado a las materias primas. Esos son los

³⁵⁶ Fuente: Página web oficial de Cristina Fernández de Kirchner: <http://www.cfkargentina.com/cfk-en-el-congreso-apertura-del-periodo-de-sesiones-ordinarias-2011/>.; consultada agosto-setiembre, 2012 y marzo, 2013.

camino de salida de la Argentina (...) La gente de empresas de informática que están instalándose vienen, más que por las condiciones del mercado o por el apoyo que le podemos dar nosotros, por los recursos humanos. El argentino es inteligente, creativo. Bien encauzados tenemos un gran potencial y ese en un gran momento. (CFK, 2008 en: Miguez, 2013: 326)

Los trazos enunciativos citados, desde una perspectiva de gubernamentalidad, reafirman la heterogeneidad de lógicas de gobierno que configuran el programa de la época. En tanto, desde la afirmación de los derechos humanos para el desarrollo centrado en la “conducta de la gente”, se promueve la inversión en capital humano y la igualdad de oportunidades, lo cual se traduce en beneficios sociales, económicos y morales; que hacen de la justicia social, como veremos en el próximo capítulo - en torno del gobierno de la pobreza y los pobres -, una cuestión de equidad, en tanto acceso a “un piso común inicial” para comenzar a jugar y dar saltos, en los cuales el Estado tiene por rol “ayudar, y orientar”.

3- Hacia la re-nacionalización de YPF: el programa de gobierno nacional entre 2011 y 2012/13

El tercer período del programa nacional de gobierno y el segundo mandato presidencial de CFK (2011-2015)³⁵⁷, se instaló anunciando una profundización sólida y a largo plazo del programa de gobierno iniciado en 2003. Esto se manifestaba en la proyección de la cancelación de deudas que señalaba el Estado tenía con la mayoría de la sociedad, mientras se proponía continuar con la política de reparación en derechos perdidos y la asignación de otros, lo cual se consolidaría en una mayor democratización de la sociedad mediante una reafirmación programática de conceptos como “justicia y equidad”.

Otra línea que marcaría un salto, respecto del 2003 fue que, si bien en aquel entonces las necesidades de los distintos sectores se habían atendido, por parte de la presidencia, con ayuda urgente pero indiscriminadamente; se indicó que, desde ahora en más había llegado la hora de “ordenar las cosas”. En tal sentido, por ejemplo: si los servicios públicos habían sido subsidiados para todos, ahora se consideraba que había que seleccionar racionalmente a quienes, casi 10 años después seguían necesitando tales beneficios; si se habían mejorado sustancialmente los salarios y sancionado leyes laborales siempre en

³⁵⁷ En las elecciones presidenciales de 2011 la presidenta obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928, y los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. Además obtuvo una diferencia del 37,3 % respecto a la segunda lista, la segunda mayor de la historia argentina.

favor de los trabajadores, ahora se podía medir cuándo una ley laboral no podía perjudicar a un sector de la economía y por extensión al conjunto. Por tanto, si bien se señalaba que la tarea finalizaría “cuando no quede un argentino en la pobreza”, se consideraba que era tiempo de ser más cuidadosos y racionales, en la administración de los recursos.

A esta etapa de gobierno se la definió de “*sintonía fina*”, enunciado utilizado por CFK en el discurso en la UIA el 22 de noviembre del 2011, luego de ser reelecta presidenta:

*Entramos en la etapa de la sintonía fina (...) Tenemos que comenzar a analizar los grandes temas: inversión, salarios, inflación, subsidios y utilidades”, también esto implicaba: “...mejorar la competitividad (...) la competitividad solo es sustentable con inclusión social. Lo aclaro porque algunos interpretan que la competitividad se hace a costa de los salarios o con las exenciones fiscales, bajas de impuestos y subsidios (...) nuestro modelo es de crecimiento, trabajo e inclusión, y no de metas de inflación que es el método del Consenso de Washington (Discurso de CFK en el de cierre de la Conferencia Industrial en el Hotel Hilton de Puerto Madero, 22 de noviembre del 2011).*³⁵⁸

Algunas de las medidas que reafirmaron estas decisiones se antecedieron en el anuncio del control a la compra de dólares, lo cual implicaba que los agentes cambiarios tenían que dar a la AFIP los datos del comprador y, solo si su situación fiscal estaba en regla, le podían vender divisas; mientras se ratificaba que nunca se reprimía la protesta social, sí se pidió que las mismas guardaran proporción con el motivo de la demanda. Otra medida de anticipo de la sintonía fina fue la eliminación de subsidios de gas, electricidad y combustible a los bancos, los casinos, los aeropuertos y las empresas de telefonía móvil, las petroleras y las mineras, así como se analizaría el caso de los usuarios particulares de alto poder adquisitivo, mientras se abría un registro para quienes quieran renunciar a dichos subsidios.

3.1 Prácticas y mecanismos de gobierno: la reconfiguración de YPF “Sociedad Anónima”

Los tramos enunciativos y programáticos antedichos reafirman la decisión, por lo menos proyectual, de “continuar profundizando el modelo”, en tanto se considera necesario emprender un ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, a partir de lo cual se toman medidas como: la reforma del Banco Central, eliminando el régimen o posibilidad de convertibilidad, ya que el nuevo proyecto pretende modificar el paradigma de funcionamiento del Banco, ampliando sus objetivos más allá de sostener el valor de la moneda, mientras lo provee de varias herramientas, como créditos, uso de reservas, entre

³⁵⁸Fuente:<http://www.casariosada.gob.ar/informacion/archivo/25556-acto-de-cierre-de-la-conferencia-anual-de-la-ua-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion>; consultada agosto-setiembre, 2012 y marzo, 2013.

otras. Esto se completa con la re-nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (Ley 26.741)³⁵⁹, decisión política estratégica en la cual profundizaremos señalando giros y contragiros, que hacen al trazo práctico del programa de gobierno y el entrecruzamiento heterogéneo de lógicas que lo “ordenarían en el avance de esta sintonía fina” dirigida a la regulación y racionalización.

Argentina era uno de los países de América Latina, en el cual el petróleo y el gas estaban en manos de empresas privadas extranjeras y no estatales. El 16 de abril del 2012 la presidenta decretó la intervención de la empresa y envió al Congreso un proyecto de ley de expropiación del 51% de sus acciones. De las acciones que serían expropiadas, el 51% correspondería a la Nación y el 49% a las provincias petroleras, el resto de los inversores tendrían participación negociada, pero no serían parte de la “gestión”. En su discurso, señaló: *“El modelo que hemos elegido no es el de la estatización, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Vamos a hacer una conducción de la empresa absolutamente profesionalizada”* (CFK, 16 de abril, 2012, Diario Página 12, 17/04/2012. Resaltados nuestros)³⁶⁰.

En este sentido, se promueve el “autoabastecimiento hidrocarburífero”, mediante la apuesta y puesta en juego de un marco económico mixto de inversiones públicas y privadas en los yacimientos a ser explotados y explorados por la actual YPF, según lineamientos de “desarrollo, profesionalismo y valor agregado”, lo cual nos permite pensar, no sólo la decisión política de propiciar el autoabastecimiento energético, sino el modo en cómo esto se realizó. Temática que resulta imposible profundizar en detalle en el presente trabajo, pero que queda abierta para posibles investigaciones futuras.

³⁵⁹ El Estado toma posesión del 51% de las acciones de la petrolera privatizada, entre los años 1992-93.

³⁶⁰ Repsol, empresa a la cual se le expropia el 51% de las acciones, consideró dicha medida como “ilícita y gravemente discriminatoria”, pero la presidenta reafirmó la decisión remarcando que, en la distribución de dividendos y en la no inversión se encontraban las claves del por qué en Argentina se está importando petróleo y gas. La empresa Repsol demandó a Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), por 10.500 millones de dólares. Denuncia que fue inmediatamente discutida por el entonces viceministro de economía Axel Kicillof negándose a pagar, y asegurando que Repsol le debe al Estado nacional 9.000 millones de dólares. La expropiación también recibió fuertes críticas del gobierno de Estado Español en manos de Rajoy, quien señaló que tomaría medidas claras a favor de Repsol, por ej.: frenando la compra de biodiesel a Argentina. El plan oficial de expropiación también tuvo repercusiones en la bolsa de *Wall Street*, donde las acciones petroleras se derrumbaron un 19%, para terminar la jornada del 16 de abril con una baja del 11,16%, de hecho el día del anuncio las negociaciones de las acciones de YPF debieron ser suspendidas para evitar una mayor descapitalización de la compañía. Finalmente, en el año 2014 se llega a un acuerdo de pago con Repsol El “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”. Esto implica, según Zaiat (2014), un pago en bonos a mediano y largo plazo, sin desembolso inmediato de efectivo. Deuda por infraestructura, en este caso energética y nominada como: “Deuda buena”. El discurso completo de la presidenta se puede encontrar en: <http://www.cfkargentina.com/cristina-anuncia-la-recuperacion-de-ypf-por-parte-del-estado-nacional/>; consultada setiembre/diciembre, 2012/13 y marzo, 2014.

El proyecto de ley fue aprobada por la mayoría del Senado, con 63 votos a favor, 3 en contra, entre los cuales se concentraban el del Senador por Salta J. C. Romero, quien fervientemente había apoyando la privatización de YPF, en los 90', el senador Rodríguez Saa de San Luis y Liliana Negre de Alonso por igual provincia; y 4 abstenciones. Mientras que la Cámara de Diputados aprobó la ley el 3 de mayo por 208 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones. Sólo se abstuvieron y no votaron en contra los diputados del llamado "macrismo" (dirección política de la intendencia de capital federal) y la mayoría del advenido peronismo disidente (Miguez, 2013: 595-97). En esta sintonía, la presidenta afirmó que el petróleo "es un insumo básico que genera competitividad y atraviesa todos los sectores sociales y económicos", pidió pensar "por qué" en los 90 se creyó que debía ser "privatizada", y exhortó a "ser muy eficientes y demostrar que el Estado puede administrar bien". Reclamó a los empresarios argentinos que "produzcan" en el país "porque tienen ventajas muy importantes y porque además la han juntado con pala en los últimos nueve años" y recomendó que "la rentabilidad tiene que estar acorde a la sustentabilidad de la economía", porque cuando no lo está "termina implosionando el mundo" (Diario Página, 12, 4/05/2012).

Unos días después de la sanción, Miguel Galuccio³⁶¹ asumió como gerente general hasta que el 4 de junio la asamblea de accionistas lo designó como presidente de la petrolera. Su primera tarea consistió en elaborar un plan para avanzar con la extracción de los recursos no convencionales, en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta³⁶² en torno de lo cual se evidencia la lógica extractivista y la proyección a la inversión de capitales extranjeros en la explotación de petróleo. También debería asociarse con empresas privadas para poder llevar a cabo dicha actividad, dado que los ingresos de la petrolera de

³⁶¹ Galuccio es ingeniero en petróleo, poco después de terminar sus estudios universitarios (1994) fue designado responsable de la operación y desarrollo de los yacimientos de la región sur y, cuando en abril de 1995 YPF compró la petrolera estadounidense *Maxus Energy*, se sumó a la firma. En 1998 es trasladado a Indonesia, donde YPF Internacional tenía a su cargo varios yacimientos. Renunció a su puesto a los pocos meses de la adquisición de YPF por Repsol en 1999, debido a sus diferencias con el nuevo modelo de gestión de la compañía. Luego, trabajó para la firma de servicios petroleros Schlumberger, y fue designado gerente general de operaciones de la empresa para México y América Central.

³⁶² El arribo de YPF a Vaca Muerta se da mediante un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Neuquén, YPF y Chevron-Texaco para la explotación de un área del yacimiento, a través de un decreto que fue elevado a la Legislatura provincial para su consideración y aprobación. La explotación se realiza con medios no convencionales, llamados *fracking*: fractura hidráulica, ante la cual emergieron diferentes prácticas de resistencia y crítica, por las consecuencias ambientales, territoriales y poblaciones (desertificación, desalojos, enfermedades) ante todo, por el uso y abuso del agua, que requiere este tipo de fractura horizontal de la piedra, de la cual se extrae el petróleo. También, se cuestiona el arribo de Chevron-Texaco, empresa estadounidense por diversos conflictos político-ambientales, sobre todo en Ecuador. Más allá de las protestas (algunas fuertemente reprimidas) el acuerdo Chevron e YPF se extiende a Loma Campana, así como a exploraciones en Narambuena, en Neuquén, dentro de la concesión Chihuido de la Sierra Negra.

bandera nacional no eran suficientes para cumplir con la tarea. En una reunión con gerentes de la empresa Galuccio señaló:

Una petrolera demora años en aumentar la producción. YPF lo hizo en seis meses. Los tiempos de una petrolera son lentos, siempre se planifican a mediano y largo plazo, pero lo que logramos es realmente muy importante: no solo frenamos la declinación en la producción de hidrocarburos, sino que, además, aumentamos la producción de combustible líquido con el crecimiento de la actividad de nuestras refinerías; eso nos permite importar menos (Galuccio, en: Miguez, 2013: 598).

Por su parte, de aquel discurso de la Presidenta del 16 de abril, recuperamos sus referencias a los “trabajadores desocupados” post privatización de YPF y a la emergencia, en tal sentido de los “piquetes de Cutral Co”: en torno de lo cual señala que: “ningún otro gobierno, como el de Néstor y el mío, les restituyó a los trabajadores los derechos que habían perdido”, y recordó que la palabra sindicato proviene “de solidaridad, no de secta”; reconociendo a su vez, que muchos de estos ex/ypefianos aún seguían sin trabajo (Página 12, 4/05/2012).

En esta sintonía fina, días después de la presentación del Proyecto de recupero de YPF, la presidenta, en un discurso que brindó en la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena, en el acto de licitación de un complejo hidroeléctrico que se instalará sobre el río Santa Cruz señaló que: “*Con esta recuperación de YPF hemos terminado de pagar la deuda de la historia de los piqueteros que salieron a la vera del camino a pelear por el futuro que les estaban arrebatando*”, aunque consideró que esto: “*...no quiere decir que esto termina con las demandas sociales y el derecho a protestar*”. Sin embargo, cuestionó: “*...estas formas de bloqueo*” y pidió “*nuevas formas de reclamo*”. Por esa razón, pidió a los movimientos piqueteros que: “*...se busquen otras formas de reclamo y dejen de lado los cortes de calle y de ruta que no sólo le complican la vida al resto de los argentinos y, lo que es peor, terminan haciendo el juego a los que los sacaron a la calle como caceroleros y piqueteros*”, reafirmando: “*Nos merecemos la inteligencia de encontrar diferentes formas de protestas y reclamos porque pertenecen a otra Argentina*”, advirtió³⁶³ (Página 12, 21/04/2012).

³⁶³ En este tejido de poder/gobierno en el cual se tejen las relaciones entre gobernados y gobernantes, luego del pedido antedicho y de su reivindicación en torno de la “creatividad” de las protestas, (2014), los diputados del bloque oficialista presentaron un proyecto de ley para regular y restringir dichas protestas. El mismo establece condiciones de legitimidad y obliga a notificar con 48 hs. de antelación las manifestaciones ante la policía, fuerza que no podrá portar armas de fuego. Dicho proyecto clasifica a las manifestaciones de “legítimas” e “ilegítimas”. La iniciativa también considera que una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites previstos en la normativa. Y define como manifestación legítima

Dicho discurso dirigido, ante todo, a las experiencias encabezadas por las agrupaciones piqueteras del Gran Buenos Aires, abre un complejo abanico de discusión y diálogo en torno de los “otros” movimientos piqueteros, ante todo, en referencia a la “solución dada mediante la creación de trabajo” por parte de este programa de gobierno, así como por las diferentes tradiciones y modalidades de resistencia y lucha, cuando, la realidad de los ex/ypefianos salteños, por ejemplo, como veremos al final del presente capítulo y en el apartado III del capítulo 4, no denota el grado de mejora laboral señalado, sino un constante, creativo y cotidiano proceso de resistencia en los márgenes y de luchas por el trabajo y la vida, en un campo transaccional en el cual resultan gobernados como “pobres desocupados”, ante todo.³⁶⁴

Por último y en simultáneo, retomando las prácticas diversas codificadas en los trazos del programa de gobierno argentino, en la época analizada, ante y entre el 2012 sin el crecimiento esperado y la profundización de la crisis internacional, se decide disponer de una mayor intervención y regulación del Estado, así como de la reactivación de las políticas de infraestructura, sobre todo de viviendas, mediante el plan Pro.Cre.Ar³⁶⁵; la regulación del mercado de capitales y los límites en torno del atesoramiento en dólares³⁶⁶.

4- Abanico de racionalidades políticas y lógicas de gobierno, en los trazos del programa nacional

Acorde a lo desandado, podemos sostener que, el proceso analizado a partir de 2003 en Argentina se configura en un complejo, tenso y abierto haz de racionalidades políticas, las cuales se entrecruzan siendo disímiles, sin dejar de serlo.

En tal sentido, en el programa de gobierno de la época analizada, se observan por un lado, racionalidades políticas dirigidas a gobernar “para el mercado y en contra del mercado”, entre el juego de la libre competencia, el crecimiento y la competitividad de modos singulares. Lo antedicho es posible de avistar, por ejemplo: en el sostén de un modelo de “acumulación por desposesión y extractivismo” (Zibechi, 2011), así como, un

la que no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud.

³⁶⁴ La expropiación y anunciada como “re-nacionalización” de YPF se considera una problemática fundamental en el tejido de relaciones entre gobernados y gobernados en la Argentina de la época, ante todo, en torno de las relaciones con los ex/ypefianos y las organizaciones emergidas post privatización de YPF. Temática esta que quedará abierta para futuras investigaciones, por resultar demasiado amplia y compleja.

³⁶⁵ Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”, en la Órbita de ANSES.

³⁶⁶ Entre otras prácticas de gobierno se lanzó la iniciativa de “Argentina Digital”, cuyo objetivo es generar un nuevo marco regulatorio para la estructura de las telecomunicaciones y la transmisión de datos, que por un lado incentive la competencia y la calidad del servicio para los usuarios y por otro lado, evite la formación de monopolios u oligopolios.

modelo “extractivo-exportador” (Seoane, 2012), cuya promoción parece agravar los problemas que se dicen querer resolver, a partir de lo cual, siguiendo a Svampa (2010) se limitan ciertas pretensiones de modificar la estructura de propiedad, ingreso, renta y riqueza en el país, así como se neutralizan proyecciones políticas de lucha y movimientos surgidos, en defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

Si bien observamos cómo, a lo largo de estos años de proyección, configuración e inflexión en las racionalidades de gobierno, no se trata de privatizaciones, aperturas económicas y desregulaciones, como lo había sido en épocas anteriores, sí identificamos ejercicios de apropiación de bienes comunes manifiestos, sobre todo en la minería³⁶⁷ y la producción sojera³⁶⁸, a lo cual se le suma la extraneización de inversiones y explotación, por medios no convencionales, del petróleo.

Por tanto y acorde a la perspectiva que traza el presente trabajo, identificamos cómo las prácticas de gobierno se codifican en el Estado³⁶⁹ dirigido a gobernar “para el mercado y en contra del mercado”, es decir, poniendo ciertos límites morales, políticos y económicos al mercado, mientras se interviene generando las condiciones de posibilidad para que el juego del mercado sea posible (Paulizzi, 2014a). En tal sentido, observamos cómo, en una versión renovada y reconstruida en la singularidad histórico-política argentina, resuenan algunos elementos ya mencionados en torno de la búsqueda de un punto medio entre los extremos del dirigismo estatal, como del liberalismo clásico, a partir de lo cual se promueve una vinculación entre Estado y mercado, centrada en la responsabilidad y el compromiso moral de los jugadores.

En tal sentido, identificamos una tendencia del programa nacional de gobierno a la economía libre de mercado en relación con lo antes señalado, pero a su vez, un intento por poner orden³⁷⁰ y límites al caos generado por las tendencias anarcoliberales que se

³⁶⁷ Las explotaciones y desarrollos mineros nacionales, también concesionados en terrenos provinciales de explotación, gozan de beneficios impositivos y fueron beneficiadas con el veto presidencial a la ley de protección de glaciares en 2008, que procuraba proteger dicho recurso, demorándose el tratamiento del tema hasta la sanción de la nueva ley en 2010. Pues, entre 2003 y 2008 las inversiones mineras (mayormente extranjeras) crecieron un 1000% y la producción del sector un 300%. J. Seoane, 2012: S/d.

³⁶⁸ “La sojización, refiere al cultivo de soja orientado a la exportación que ha desplazado, por su rentabilidad, a otros cultivos orientados a la producción de alimentos. Esto, trae aparejado una crisis en el aumento de los alimentos, así como a la contaminación por fumigación y desmonte, esto último acompañado de desterritorialización de poblaciones locales, de un modo amenazante, brutal y represivo” (Varesi, 2010b: 66).

³⁶⁹ Röpke, en su libro “La crisis social de nuestro tiempo” (1950-2010), defendió la existencia de un “Estado fuerte”, coincidiendo con la idea del Estado total de Carl Schmitt, pero diferenciándose de éste al señalar que no se trata de un Estado intervencionista y omnipresente, sino de un: “...gobierno que tenga el valor de gobernar”. (Röpke, 1950-2010: 246). Dentro de esta misma escuela, Wilhelm Röpke hace hincapié en la defensa de la pequeña empresa, del microcrédito.

³⁷⁰ En sus “Principios de política económica” (1956), Eucken señala la necesaria complementariedad entre lo personal y lo estatal, entre la libertad y el ordenamiento, entre mercado competitivo y regulación político-

remarcan, habían sido impuestas por el programa de gobierno de los 90' y siguen vigentes, en las disputas con diferentes espacios empresariales, como los del “campo”, por ejemplo. Por supuesto que cierta tendencia a la “economía social de mercado”³⁷¹, tal cual lo enunciara la presidente y analizaremos en el capítulo que sigue, – con una singular tradición en Argentina³⁷²– promovida por el ordoliberalismo, no es un reflejo de la Alemania Federal de la época³⁷³.

En tanto, el programa de gobierno argentino, por un lado postula y se construye mediante la intervención del Estado en la economía. Pero, no por medio de acciones directas sobre la misma, sino mediante “acciones reguladoras”, cuya función es crear unas condiciones que garanticen el buen funcionamiento del mercado. Acciones reguladoras que se inscriben en aquellos ámbitos considerados estructurales: la vida de la población, los conocimientos científicos y tecnológicos, la organización jurídica-política de la sociedad, la estructura psicológica de los individuos, entre otros. En esta clave, para crear una estructura competitiva, el Estado debe tomar una posición activa que incentive la competencia y competitividad, evitando, ante todo, la emergencia de monopolios (u oligopolios), que destruirían no sólo las ventajas del libre mercado, sino que posiblemente también afectarían la gobernabilidad, entre otras cuestiones.

Dichas inflexiones de las racionalidades de gobierno en Argentina, entonces, se postulan y construyen en lucha con el “anarcoliberalismo o anarcocapitalismo”, mientras que, en simultáneo se codifican en torno de diferentes prácticas dirigidas a posibilitar “marcos”³⁷⁴

económica. Nace así el concepto de orden o “pensamiento en órdenes”, que insiste en la primacía del derecho, la exigencia de regulación de la economía frente al “orden espontáneo” defendido por los llamados “ultraliberales”. Insiste especialmente Eucken, respecto de que no hay posibilidad de economía libre sin virtudes sociales. Destaca también la necesidad de una constitución económica, en la que el derecho garantice “una economía duradera y digna del hombre”. El “orden” prima sobre el modelo y no es sólo económico.

³⁷¹ El otro representante de la Escuela de Friburgo, Alfred Müller-Armack, fue quien a partir del ordoliberalismo plasma la idea fundamental de la *Economía Social de Mercado* (EMS), como un modelo sociopolítico básico centrado en la combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social. El marco referencial es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia social,

³⁷² La mayor y más explícita influencia del “ordoliberalismo alemán” y sus referentes estratégicos se encarnó, en nuestro país, en la figura de Álvaro Alsogaray, ante todo en su férrea defensa y propagación de la “economía social de mercado”. Recordemos que Alsogaray tuvo vinculación diversa con los gobiernos dictatoriales y el desarrollismo; de hecho entre 1955 y 1956 fue subsecretario de comercio y luego ministro de industria; también fue miembro fundador del Instituto de la Economía Social de Mercado, Ministro de economía y Ministro de trabajo durante el gobierno de Frondizi. Nuevamente Ministro de economía, además de presidente del Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios, durante el gobierno de José María Guido. Luego del golpe de estado de 1966 fue designado embajador en Estados Unidos hasta 1968.

³⁷³ Cabe aclarar que, no es intención traspasar lo que sucedió en Alemania con lo acontecido en la Argentina en la época analizada sino recoger, a modo de caja de herramientas, algunos elementos que el pensar genealógico foucaultiano nos brinda para una analítica de la gubernamentalidad.

³⁷⁴ En tal sentido, el ordoliberalismo hablará de la “*política de marco*” (Foucault, 2007: 172) a partir de lo cual, el Estado no interviene sobre el mercado sino sobre “el marco” para el libre desenvolvimiento de la vida económica, pero sin tocar la vida económica misma, como sí lo propuso el keynesianismo. Crear, pues, el marco a través del

para que el juego de mercado, de un modo singular y local, con diversos límites “morales y económicos”, sea posible. El Estado pretende “regular” promoviendo la inversión, el ahorro y el crecimiento con competitividad, así como controlando precios e inflación; mientras también “ordena” generando las condiciones de posibilidad para que el juego del mercado y la economía abierta sean posible: distribución y acceso de suelo, pautas culturales, técnicas, jurídicas, entre otras.

Así, la recreación del rol del Estado y el proceso de reconfiguración del mismo no dejan de tejerse en torno de los saberes dispuestos por la economía política y la biopolítica, puesto que el poder se intercambia y se con-cede, según la consideraciones del mercado y, paradójicamente, del Estado de Derecho. Mientras se gobierna a través de un complejo ejercicio de control, previsión y medición de las poblaciones, en diferentes escalas y lógicas.

En tanto, se fomenta el consumo, se promueve para ello la competitividad y competencia acorde a principios vinculados con la “responsabilidad social empresarial”, a partir de lo cual sería posible generar valor agregado y con ello ascenso social, mediante políticas de desarrollo identificadas con el crecimiento económico que implica, en el doble juego de la libertad y la moral, poner límites a los avances monopólicos y/u oligopólicos, entre otras cuestiones. Esto, con la aspiración de una mejor calidad de vida de la sociedad entre lazos de solidaridad – orgánica - y ciudadana jurídico-económica para que el tejido diagramático de la economía política configure las redes vinculares y estratégicas de gobierno, a partir de lo cual se re-configura el rol de Estado. En tal sentido, se hace hincapié en el asociativismo, la integración de “ciertas” organizaciones sociales y formas de agrupamiento político, en el tejido de un orden propicio y ascendente. Este conjunto de elementos, orientarían la existencia de la paz social y el bienestar, recogidos en el concepto de “bien común”, ante todo.³⁷⁵

A su vez, y en una vinculación estrecha con las racionalidades políticas antes analizadas, observamos cómo la racionalidad (tecnocrática), que damos en llamar perfil neodesarrollista atraviesa, ante todo, los dos últimos períodos analizados en Argentina. Si bien, no es la “modernización” el horizonte que pareciera ordenar la intervención de esta racionalidad programática en la época analizada, sí lo es el despliegue de un proyecto industrialista, la maximización del consumo, el empleo y el bienestar. En virtud de esto,

cual ámbitos que no fueron vistos antes como estrictamente “laborales” (tales como la agricultura, la ciencia, la cultura, la salud y la educación) puedan funcionar como mercados y vincularse al mecanismo de la competencia.

³⁷⁵ Frisch, 2009...op...cit.; Lescano Gutiérrez, 2008...op...cit.; Foucault, 2007...op...cit.

el Estado debe intervenir en la programación económica, pero debe ser respetuoso de la naturaleza y las dinámicas de sus variables: “...*los fines de la intervención desarrollista se inscriben en un lenguaje político, pero los medios son de la economía*” (Grondona, 2012: 503); entre cuyos ejemplos paradójales encontramos los discursos referidos a la independencia política y el autoabastecimiento energético a través de la renacionalización de YPF y la inmediata apertura a las “inversiones extranjeras” de la mano de Chevron-Texaco en Vaca Muerta; asimismo la realización de intervenciones en torno de la inversión, la productividad, los canales de comercio, el acceso a créditos, mientras se promueve la superación de las condiciones de estrangulamiento, ante las crisis financieras mundiales (2008 y 2011), a partir de una estrategia que hiciera de la industria una alternativa para obtener divisas. Ante todo promoviendo la exportación, lo cual se conjugó con una limitación a la importación en relación con la racionalidad política de perfil neoperonista, y dando lugar al fortalecimiento del mercado interno. Mientras que se realizan “inyecciones de consumo” articulando políticas de estímulo directo a la economía.

En este tejido movedizo, también observamos cómo se abre el espacio para acciones pedagógicas y morales capaces de ayudar a superar limitaciones rutinarias y tradicionales, para auto-superar situaciones que impiden el logro de lo que se da en bautizar “ciudadanía social” centrada en el “comportamiento” de las personas y, como veremos en el próximo capítulo, de la impronta inversión en capitales-humanos y sociales- en el caso de los trabajadores advenidos pobres. Dichas intervenciones locales y comunitarias son inescindibles de estrategias macroeconómicas de programación gubernamental.

Un límite que marca la diferencia del programa esbozado con otras formas - locales y continentales - de reconfigurarse el neoliberalismo y el desarrollismo y, que reafirma su múltiple singularidad, remite a su vinculación heterogénea con la racionalidad política de herencia peronista. Esto se refleja en las prácticas y programáticas políticas dirigidas a proteger al ciudadano mediante políticas de seguro social, proyecciones de pleno empleo y ciertas intervenciones en los precios. Lo antedicho, como veremos en el próximo capítulo, tuvo como efecto, en torno de las poblaciones pobres, una particular y paradójal vinculación entre los sujetos jurídicos y los sujetos económicos en el tejido-vincular que, entre gobernados y gobernantes, se construye en torno del gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos.

Por tanto, la racionalidad política de perfil peronista y en algún sentido neobenefactora, se instala actualizada mediante las prácticas ya enunciadas en torno del impulso por el acuerdo de precios, así como de un diseño de planificación normativa, mediante consensos políticos y de la economía, a partir de lo cual desde el Estado se decidió poner en marcha un marcado proceso de institucionalización, mediante organizaciones e instituciones que realicen, directamente, sus lineamientos y garanticen, de hecho y ante todo, “la ocupación plena”.

Siguiendo a Grondona (2012), en lo que respecta a la cuestión de los derechos sociales y el empleo los mismos se rearticulan desde esta racionalidad programática, diferenciándose del “bienestarismo” de otros contextos, ya que:

...el centro de la escena no lo ocupa el empleo (como condición estable vinculada a la estabilización de derechos) sino el trabajo como instancia de dignificación moral y de inscripción en el proyecto nacional. No se protege al obrero en tanto poseedor potencial de la fuerza de trabajo que se encuentra circunstancialmente en el paro, sino que el Estado toma a su cargo el deber de garantizar trabajo efectivo, lo que supone, como contraparte, el deber de trabajar (2012: 502)³⁷⁶.

El imaginario que atraviesa la constitución de esta forma de gobierno es el “derecho al trabajo”, entendido como un modo de “integración social” y de adscripción a las “fuerzas vivas” que participan de la orientación de la economía. Aquí aparecen elementos que se pusieron en marcha en este período de gobierno argentino (entre 2003 y 2013), como las negociaciones colectivas, las paritarias salariales, considerando que es posible diseñar planes a largo plazo y gestionar conflictos de intereses en mesas de negociación, así como en la proyección de un proceso de adecuación entre capacidades-formación y puestos requeridos de empleo. Ahora bien, según el programa de gobierno nacional, estas relaciones referidas al empleo-trabajo se realizarían en una singular relación entre la “planificación estatal”, las contingencias globales y las capacidades-capitales-habilidades que caracterizan al sujeto nacido en estas tierras, las cuales debieran ser fortalecidas, promovidas y posibilitadas en una integración entre los Estados, los espacios privados y sociedad civil. Sin embargo, algunas de estas prácticas de gobierno no tuvieron el éxito ni el efecto esperado, ante todo en lo referido a la fija de precios y distribución de ingresos y

³⁷⁶ En este punto retomamos la distinción, por ejemplo, trabajadas por: Di Giorgi, 2006 y Grondona, 2012, respecto del “empleo” como forma histórica y particular del trabajo, asociada al estatuto de ciudadanía social en la que el seguro de desempleo ocupa un lugar clave. En este sentido, la Argentina conoció más bien un horizonte de “plena ocupación” antes que de “pleno empleo”. Por cierto, hasta la década de los 60’ el término “empleo” estuvo asociado, casi exclusivamente, al empleo público o a servicios; de hecho en la actualidad más cercana se registran altos índices de “empleo informal o en negro”, mientras que se refuerza la meta de la dignidad que el trabajo trae consigo. Esto puede ser confrontado con las diferentes referencias, según enunciaciones nativas, de los ex/trabajadores de YPF en torno del trabajo digno y el trabajo genuino, ya analizados.

riquezas, tal fue el ejemplo del campo. Tampoco el vínculo con los sindicatos y otros sectores sociales llegó a consolidarse, a partir de lo cual el Estado reconfiguró en más de una oportunidad su rol de “ordenador y regulador” del orden y marco establecido, siempre en la búsqueda del crecimiento económico, con equilibrio y, la institucionalización del proceso político.

Por lo tanto, en los diez años analizados, en el trazo de la gubernamentalidad de la Argentina a partir del año 2003 hasta el 2013, observamos cómo se ejercita un permanente proceso de reconfiguración del rol de Estado. Lo antedicho se realiza y efectiviza de un modo singular, en un heterogéneo haz de relaciones de poder, gobierno y verdad, en torno del cual se visualizan - no se develan - quiebres y diferencias con momentos anteriores de la historia nacional.

Por tanto, un programa de gobierno, tal cual hemos descripto, no se construye en una línea directa entre lo que se dice y lo que se hace, tampoco en torno de una única lógica política, sino en un movedizo tejido heterogéneo y heterocrónico en el cual los pensares, decires, haceres y con ello las problematizaciones y estrategias de gobierno dirigidas a las poblaciones se diversifican, reactualizan reconfiguran y recrean, acorde a condiciones específicas de realidad y posibilidad. Consideramos que lo antedicho encuentra claridad en el ejercicio programático de gobierno dirigido a las poblaciones pobres y desocupadas, en un dinámico haz de relaciones con las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos, tal cual analizaremos en el capítulo que sigue.

III

Programas de gobierno en Salta entre 2003-2013:

Entre las continuas discontinuidades

En el presente apartado analizamos los trazos de la gubernamentalidad, en la provincia de Salta. Profundizamos, críticamente, en los modos cómo las diferentes redes vinculares entre poder, gobierno y verdad en Salta, desde el año 2007 hasta el 2013, ponen en juego lógicas y prácticas disímiles de gobierno, que sin dejar de serlo, evidencian proximidades, continuidades, quiebres y discontinuidades respecto del período de gobierno salteño instalado en 1995 y del Programa nacional de gobierno instalado en 2003.

1- Los vaivenes del programa de gobierno “*Golden Boys*”³⁷⁷ (2007-2013)

En el 2003, en la provincia de Salta, luego de que el gobernador salteño Juan Carlos Romero fuera candidato a vicepresidente de la Nación junto a Carlos Menem, elecciones en las cuales, como ha sido trabajado, Néstor Kirchner resulta elegido presidente en un complejo diagrama de segundas vueltas y renunciaciones; Romero retorna a la provincia, promoviendo modificaciones constitucionales, para poder ser gobernador por tercera vez³⁷⁸.

En dicho período gubernamental, continuando con el proceso de Reforma Provincial, ya en su etapa final, Salta se abocó con decisión en lo que dieron en llamar la “*tercera generación de la reforma*” (2003-2007). Dentro de esta etapa, se continuó con la implementación de sistemas de gestión, a través de lo cual se firmó un convenio y desarrolló un plan estratégico para la implementación del *e-government* y *e-procurement*, cuyos objetivos principales fueron los de hacer más transparente la gestión del Estado, modernizar los servicios del gobierno para los ciudadanos y empresas de la Provincia, así como mejorar de manera significativa la eficiencia de los procesos internos de

³⁷⁷ “*Golden Boys*” es un término utilizado para designar a los “jóvenes dorados”, técnicos sin militancia partidaria, en oposición a los dirigentes históricos del peronismo o a los dirigentes con carrera política, que ocupaban cargos de jerarquía dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo en la Salta de los 90’. Ver: Maidana, 2013...op...cit.

³⁷⁸ A finales de agosto del 2003 la convención local aprobó la reforma del artículo 140 de la Constitución provincial, que habilitó la presentación de Juan Carlos Romero para un tercer mandato consecutivo al frente de la gobernación. La referida reforma se trató de un agregado al artículo 140, al que se le adicionó la posibilidad de que los gobernadores y vicegobernadores a partir de ahora puedan ser electos durante tres mandatos consecutivos.

gobierno³⁷⁹. Se trataba para ese entonces, de profundizar la eficiencia y eficacia en la administración estatal acorde a las lógicas de gobierno de perfil neoliberal y neoconservador ya trabajadas en el capítulo 1, apartado II.

En esta línea programática, se profundizan las medidas que se venían realizando, y se trazan diferentes estrategias para disputar la autonomía gubernamental de la provincia, en un duro cruce de racionalidades y prácticas políticas con el programa de gobierno de corte “nacional y popular” instalado desde el 2003. Lo antedicho responde, sobre todo, siguiendo a Maidana (2013) a que, a diferencia de otros países federales, en Argentina la relación Nación-provincias está mediada por los gobernadores y no por el parlamento.

Por su parte, en el año 2007³⁸⁰ se instala en la provincia de Salta un programa de gobierno que, con ciertas proximidades al Programa de gobierno nacional, proyecta una reconfiguración del rol del Estado, entre y frente a los programas de gobierno de los 90’.

Dicho programa de gobierno tiene como referente a Juan Manuel Urtubey, quien perteneció a los llamados “*Golden Boys*” en los 90’. En su llegada al Congreso Nacional como Diputado en el 2007, genera un vínculo con la entonces legisladora y luego presidente CFK, a partir de lo cual comienza a trazarse un perfil de “joven promesa del kirchnerismo³⁸¹, en el norte salteño”. En su campaña electoral Urtubey se instaló, entonces, como un candidato que proyectaría el “cambio institucional” en la provincia, frente al “continuismo” del FJPV, cuyo candidato había sido hasta entonces el vicegobernador de J.C. Romero (Warhen, 2011: 83).

En tal sentido, el programa de gobierno salteño se instala mediante una alianza del Frente para la Victoria-Partido Renovador Salteño (FPV-PRS, de ahora en más), la cual es

³⁷⁹Fuente: página web oficial de Juan Carlos Romero: http://www.romerojuancarlos.com.ar/?page_id=84; consultada setiembre, 2012, marzo-abril, 13.

³⁸⁰ La provincia de Salta presentaba un panorama político polarizado entre dos fracciones del P.J. Por un lado, la figura de W. Wayar, con el apoyo de J. C. Romero, se presentó como candidato a gobernador por el Frente Justicialista para la Victoria (FJPV). Y, por otro lado, J. M. Urtubey, considerado “disidente y desertor” del llamado “romerismo”, se presentaba en alianza con Zottos perteneciente al Partido Renovador Salteño, en el Frente para la Victoria-Partido Renovador Salteño (FPV-PRS). Cabe remarcar, que pese a las distancias y disputas ambos candidatos apoyaban, en sus boletas electorales, a la candidata a presidenta CFK. Finalmente, Urtubey gana las elecciones con 236.604 votos frente a 231.161 para Wayar, es decir con una diferencia de apenas 5.443 votos (Wahren, 2011, 83). A este resultado ajustado a nivel de gobernación se le sumó que en las elecciones legislativas nacionales los resultados favorecieron al FJPV cuyo candidato a senador era J.C. Romero, lo cual hace a un escenario complejo en la disputa por el PJ local salteño. De todos modos, en las elecciones presidenciales, con la candidatura unificada en torno de CFK el peronismo obtuvo el 75,77% de los votos de la provincia de Salta. Posteriormente, a mediados del 2007, por cuestiones vinculadas a la reafirmación de las autonomías provinciales y las diferencias programáticas se profundizó la división político- partidarias al interior del peronismo provincial.

³⁸¹ “Kirchnerismo” es el modo en el que masivamente se nombra al programa nacional y popular de gobierno instalado en 2003 y analizado en el apartado anterior. Este modo de nominar dicho programa personifica el proyecto en torno de los referentes/presidentes Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner.

señalada, por el PJ local como la “traición” de un “peronismo disidente”. Mientras que, parafraseando al joven gobernador éste reafirma ser “fanáticamente peronista” y llevar en sí “sangre peronista”, a partir de lo cual, a finales de su primer mandato (2010) disputa la presidencia del partido justicialista a nivel provincial y se posiciona a lo largo de los años como referente del peronismo-justicialista “renovado”, en Salta.

En una entrevista realizada a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, surge la cuestión de la llegada del gobernador actual a la presidencia del partido justicialista en el año 2010, y la respuesta inmediata fue: “...*es una tradición que los gobernadores peronistas sean los presidentes del partido (...) la interna con Urtubey no iba a quebrar esa tradición*” (Informante 2 M.D.H provincia de Salta, 2013)³⁸². Se recupera la referencia constante a la “tradición”, que fue leída como “traición y deslealtad” por un sector del peronismo local, así como por “re-novación y re-torno a los principios tradicionales del peronismo” por otros sectores.

Lo antedicho señala cómo, una vez más el peronismo-justicialista se manifiesta como el locus enunciativo predominante y el espacio en y de disputa, que cobra singularidades específicas a nivel nacional y local-regional. En tanto, el peronismo local, desde la reapertura de la democracia (1983) y en su histórica tradición de gobierno, había concentrado la actividad política local en una medida en que la dinámica partidaria y la vida política se superponían y eran similares. Por esto, según Maidana (2013), era muy difícil hacer carrera y mantener una continuidad como político fuera de las filas de ese partido; asimismo sus dirigentes, por esta posibilidad de continuidad y permanencia, en su mayoría eran políticos ya profesionalizados. Una parte de ellos había mantenido una permanencia en cargos –electivos u otros- que se aproximaba a tres décadas y que databa de 1983. Esta especie de monopolio del Partido Justicialista (P.J) en el campo político local se teje en una continuidad entre gobierno y partido. Siguiendo a Maidana (2013) estar en el P.J. era el modo de estar en la política y, sobre todo, diríamos de ejercer el gobierno.

Para comprender las consideraciones en torno de la “disidencia y traición” que parecen marcar al programa de gobierno en la Salta contemporánea, cabe señalar que el resultado de la disputa electoral del año 2007 por la gobernación se veía reflejado en el surgimiento de “nuevos” discursos y figuras, en el ordenamiento de programas de gobierno y del

³⁸² Para referir a dichos funcionarios se va a mantener el anonimato y, se utilizará el modo de referencia arriba indicado.

partido. Pese a que el triunfo de Urtubey suponía una proyección político-gubernamental con figuras de otras filas partidarias, los dirigentes justicialistas mantenían la ocupación de los espacios y cargos como había sido hasta 2007 y una única jerarquía política provincial se ordenaba en torno a ellos. Así puede señalarse, junto con Maidana (2013), cómo la conducción partidaria y los esfuerzos por controlar su estructura fueron temas de preocupaciones compartidas y de acciones específicas de los dirigentes del P.J. local desde 2007 a 2010, cuando asume la presidencia el gobernador J.M. Urtubey, según analizaremos más adelante.

Así, esta disputa de y en el espacio peronista, en este momento local-provincial (2007-2011), se da bajo y entre la cuestión de la “lealtad”, ante todo. Por un lado, el “joven dorado” ahora gobernador, reafirmando su sangre peronista, pone el acento en los principios rectores de la justicia social, la soberanía económica y la comunidad organizada. Mientras que el gobernador saliente, quien contaba con el apoyo del PJ local en el 2007, asentaba su disputa en la tradición, la lealtad y la figura del líder/conductor.

Es preciso, en este proceso de configuración de la figura del soberano, retomar los aportes de Balbi (2010) sobre las maneras que el peronismo entiende la conducción, en relación con la creación e ideas asociadas a “crear a aquellos que conduce”. Desde la óptica del conductor peronista debe haber unidad de concepción, disciplina y encuadramiento en la organización. La capacidad de conducir sería valorada por sobre cualquier otra, a la cual se atribuye la potencialidad de crear realidades políticas y, específicamente, de dar forma al propio peronismo y de generar su predominio en la escena política. El antropólogo indica que, en torno a esa capacidad, se tejerían las relaciones entre los peronistas.

Dichos comportamientos conllevan a producir subjetividades gobernantes y con ello programas de gobierno, que cobran singularidades locales específicas.

2 - El programa de gobierno del Frente Para la Victoria y el Partido Renovador de Salta (2007-2011): alianzas, lógicas y prácticas

En el presente apartado la intención de describir y analizar la configuración de la propuesta programática de gobierno y reconfiguración del rol del Estado, en Salta desde el año 2007 al 2011. Ante todo, pretendemos analizar, críticamente, cómo las heterogéneas lógicas y prácticas de gobierno se entrecruzan, entremezclan e imbrican en un tenso haz de relaciones. Para esto recurrimos a documentos oficiales emitidos por la

gobernación, las cámaras legislativas, los frentes y partidos electorales, así como a discursos y a medios de prensa escrita, ante todo diarios locales.³⁸³

El concepto general, que orientaba la plataforma electoral del Frente para la Victoria (J. M. Urtubey), en alianza estratégico convergente con el Partido Renovador (Andrés Zotto)³⁸⁴ giraba bajo los lemas de la conciliación, el reencuentro y la convergencia, mientras se proclama la bandera del: “...bienestar, el bien común, la acción con ideas claras y convicciones profundas, fieles a la coherencia y a la razón, pero con la sensibilidad humana y respeto por las inquietudes populares. Bajo el sistema republicano y la norma constitucional jurídica” (Documento. Plataforma electoral, 2007: 2); así como la guía de Dios y la Virgen del Milagro: “fuente de toda razón y justicia” (Urtubey, discurso de asunción, 2007)³⁸⁵.

Este frente pretendía conciliar el “fanatismo peronista”, promovido por el advenido “peronismo disidente” considerado “peronismo auténtico y de pura sangre”, según el flamante gobernador, con “el fanatismo renovador” para lograr, sintética y estratégicamente, un “fanatismo argentino” (Urtubey, discurso de asunción, 2007)³⁸⁶, lo cual posibilitaría proyectar la pluralidad de la propia naturaleza humana. Esta conciliación, entonces, sostiene una vocación de diálogo de y entre todas las fuerzas políticas del medio, así como de los representantes de la “comunidad organizada”, cuyo objetivo es el bien común bajo un elevado sentido de “moralidad, eficacia y grandeza, según los tramos enunciativos analizados.

³⁸³ Cabe señalar que no hemos encontrado, en nuestros años de investigación, archivos teóricos algunos elaborados en torno de la época analizada, sólo documentos de perfil “reflexivo y descriptivo” realizados por diferentes integrantes de los partidos políticos y espacios institucionales de gobierno, ya sea al modo de documentos oficiales, como de actas de Congresos o ponencias, pero ningún texto de perfil teórico-analítico, como el aquí propuesto. Por lo tanto, el trabajo de reconstrucción, rastreo, descripción y análisis realizado en la presente tesis respecto de la Salta de los años más próximos, resulta absolutamente original y singular, en tal sentido.

³⁸⁴ El vicegobernador, nacido en la ciudad norteña de Tartagal, cursó hasta 4to año de Cs. Económicas, y se dedicó a lo largo de sus vida a realizar actividades como Productor; Asesor de Seguros y Empresario. Ha desempeñado los siguientes cargos: Vicegobernador de la Provincia de Salta 2011-2015; Vicegobernador de la Provincia de Salta 2007-2010; Diputado Nacional electo por la Provincia de Salta (2005-2009); Diputado Nacional electo por la Provincia de Salta (2001 - 2005); Diputado Provincial electo por el Departamento de Gral. San Martín, de la Provincia de Salta. (1999 - 2003); Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Renovador de Salta. (1999- 2003); Diputado Provincial electo por el Departamento de Gral. San Martín (1995 - 1999); Intendente Interino de la Ciudad de Tartagal (1993); Concejal, integrante del Concejo Deliberante de la Ciudad de Tartagal (1991-1993); Subsecretario de Área de Frontera del Gobierno de la Ciudad de Salta. (Período 1992). También en lo referente el PRS fue Presidente del Partido Renovador de Salta (2006 - 2008); Presidente del Partido Renovador de Salta (2004 - 2006); Candidato a Gobernador por la Provincia de Salta (2003); Integrante de la Mesa Directiva del Partido Renovador de Salta, en: <http://www.andreszottos.com.ar/index.php/biografia-andres-zottos>; consultada marzo-agosto, 2013.

³⁸⁵ Fuente: Página web oficial de Juan Manuel Urtubey, en: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/7/discurso-asuncion-diciembre-2007>; consultada, octubre/diciembre 2012 y marzo-agosto, 2013.

³⁸⁶ Idem

Ante todo, lo antedicho se sostiene en la proclamación de una concepción “humanística o humanista”:

...queremos el desarrollo para crecer en paz y es posible crecer en paz si buscamos el camino de la conciliación, si renunciamos a enfrentamientos que esterilizan nuestra potencialidad y nos condenan al estancamiento. Optamos en definitiva por el magisterio de la Iglesia que en su doctrina social nos está indicando el camino de la armonía, del equilibrio y de la paz a través del desarrollo. (Dto. Plataforma electoral, 2007: 2).

Esto implica promover un desarrollo centrado en la persona humana, garantizando “derechos” (fundamentales) de bienes y servicios para la subsistencia y el desarrollo armónico de la personalidad. Pues, se sostiene que éstas prácticas y lógicas de gobierno permiten el ejercicio responsable de la libertad, para lo cual el Estado debe promover y facilitar la modernización y el cambio, apoyando a la propiedad privada en el proceso de generación de riquezas proveyendo estructuras e infraestructuras que no entorpezcan el camino del desarrollo (Dcto. Plataforma electoral, 2007).

Observamos cómo, en estos tramos enunciativos se entrecruzan los principios que atraviesan la Doctrina Social de la iglesia, guía referencial del PRS, rememorada y señalada también por el gobernador, e instalada como eje transversal en el programa de gobierno de la época, así como enredada en el entramado lógico y discursivo de un proyecto de desarrollo de perfil “humanizadamente progresista”.

A su vez, en la singularidad que cobra la gubernamentalidad en la Salta de esta época, se profundizan y re-crean prácticas de gobierno vinculados a las reformas de Estado y Administración promovidas en el gobierno anterior. Esto remite a la transformación moderna de un Estado gestivo, operativo, eficiente y eficaz capaz de ejercer sus tareas en relación estrecha con la sociedad civil y el ámbito privado para generar un marco político económico acorde a las exigencias del siglo XXI.

En esta sintonía y como paso central para generar una consolidación de la “democracia frentista” se promulga y propone:

Impulsar la reforma política, teniendo como objetivos fundamentales, responder a las demandas de la sociedad, consolidar las instituciones del sistema democrático, estimular la generación de valores superiores en la vida política, incrementar la participación de la población en todos los niveles, tanto de selección de funcionarios políticos como de control de su gestión. Impulsar la reforma del sistema electoral en pos de propender a un mayor vínculo de representatividad. Promover una mayor participación de la población a través de los partidos políticos. Manteniendo la integridad organizada y la revalorización de la militancia partidaria. Propender a una permanente capacitación profesionalizada de sus cuadros. Otorgar mayor transparencia al manejo y administración de los fondos partidarios, impulsando su autonomía. (Dcto. Plataforma electoral, 2007:5).

Ahora bien, para lograr la consolidación institucional, se re-configuran prácticas de gobierno “des-centralizadas”, promoviendo la acción municipal y reafirmando la autonomía de los municipios. En tanto el gobierno provincial aspira a lograr un proyecto sólido de apoyo al fortalecimiento y la modernización de los municipios, para consolidar el proceso de descentralización a nivel municipal en la provincia, a través del desarrollo de un Plan Provincial de apoyo a la gestión municipal (Posadas, 2007). Esto implica recuperar y fortalecer la capacidad operativa de los municipios en lo tributario, cultural, administrativo y social.

Estas modalidades de gestión de los municipios en Argentina se modificaron de manera sustancial en los 90', a través de las llamadas “Reformas de Estado” (Arroyo, 1997) las cuales apuntaron, como ya analizamos, a la privatización de servicios, la desregulación económica, la reducción del gasto público, la reestructuración del aparato Público-administrativo y la modificación de la relación entre la Nación, las provincias y los municipios. Dicho “*repliegue a lo local*” (Campana, 2012:151) puede reflejar la búsqueda de reafiliación, pero también responde a las “reformas del Estado” y al consecuente re-direccionamiento de las políticas públicas, dirigidas a focalizar su acción sobre poblaciones identificadas como “de riesgo”, al tiempo que la descentralización delegaba responsabilidades hacia la escala local. Así, la importancia dada a la planificación con base territorial y el diseño e implementación de políticas públicas territoriales se corresponden, perfectamente, con este panorama (Campana, 2012). En la provincia de Salta, dicho proceso de descentralización, como veremos en el capítulo 4, se profundizará y recodificará en torno de las políticas sociales y el acuerdo con el BID, en referencia a las gestiones municipales.

En sintonía con las re-formas propuestas, en segundo lugar, para sostener la “plataforma”, también se postula la necesidad de generar “recursos humanos” con saberes “de calidad”, lo cual se plasma en la incorporación de la Escuela de Administración Pública (EAP, de ahora en más)³⁸⁷ en el marco del Estado:

³⁸⁷ Desde el año 1998, mediante la EAP se ha capacitado a más de 7.500 personas, entre agentes de la Administración Pública, estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Los cursos brindan una visión global y sistemática de los fundamentos para una gestión de calidad en el Estado (Posadas, 2007). En sus primeras etapas, la EAP se proponía como objetivos principales: 1) identificar las necesidades de capacitación, generales y específicas de los funcionarios públicos que sean necesarias para desarrollarse en las nuevas estructuras y rol de sus organizaciones; 2) diseñar un programa integral de capacitación acorde con las necesidades. Para esto la EAP había seleccionado cuatro líneas de acción: Capacitación, Relaciones Institucionales, Consultoría y Cooperación Técnica, que actúan sobre tres sectores de la sociedad: Administración Pública Provincial; ONG's y organizaciones sociales solidarias y comunitarias y finalmente, el sector productivo privado. Ver: Posadas, 2007...op...cit.

“Para construir un Estado eficiente al servicio de la gente se debe conocer cómo funciona, de esa manera vamos a poder actuar mejor y corregir los errores. Es por ello, que la capacitación en la órbita del Estado es una herramienta fundamental. La capacitación de los recursos humanos es una de las cosas más importantes que se puede hacer desde el Gobierno” (Posadas, 2007: 5).

El gobernador Urtubey fue quien presidió desde sus orígenes a la EAP (1998-2007) y ha sido un partícipe clave de estos procesos de transformación y de cambios con la incorporación de jóvenes a la escuela de “la política, los políticos y la administración pública”. En este sentido, la EAP ha sido un motor fundamental para el crecimiento de la participación, los debates y diálogos, que, según estos tramos discursivos y no discursivos permiten construir una sociedad seria y madura. Según el Gobernador:

La decisión política de fortalecer este tipo de instituciones a lo largo y ancho de la Argentina, marca cuál es la convicción en la cual se están basando no solo las acciones sino esencialmente el pensamiento que luego se plasma en un gobierno que ha recuperado para los argentinos la concepción del Estado. (Urtubey, 1999: 129).

Este marcado proceso dirigido al “eficientísimo y la formación de recursos humanos” se instala en el intento de recuperar el Estado, de un modo “des-burocratizado y eficiente”; lo cual se proyecta mediante un programa de gobierno que propicia y fortalece su capacidad gestiva (empresarial) y también su capacidad de intervención mediante la generación de funcionarios y medios ambientes, espacios y marcos transaccionales entre el ámbito público (figurado por el Estado), la sociedad civil y el ámbito privado, a partir de lo cual, la administración pública es comprendida como instrumento para traducir en acción, las decisiones políticas y disminuir la distancia entre la capacidad administrativa del Estado y las necesidades emergentes, rol que se le asigna, en este caso a la “Escuela de Administración Pública”: *“Son ellos los factores de transmisión de las políticas públicas desde los decisores hacia la sociedad, son los que permiten convertir la decisión en acción y el plan en servicio al ciudadano”* (Posadas, 2007: 7).

En este sentido, la incorporación de la EAP dentro de la institucionalidad orgánica del Estado provincial apunta, básicamente, a lograr que la administración local pueda afrontar con éxito una nueva realidad, una realidad cambiante, siendo necesario que su personal y los funcionarios públicos puedan satisfacer las nuevas demandas de la sociedad. Puesto que, se considera que la estrategia de inserción internacional de la Argentina alienta la descentralización política, favorece a las economías regionales y se orienta a impulsar un crecimiento armónico de todas las provincias y regiones del país. Para lo cual, según el programa de gobierno analizado, Salta y la Región NOA ocupan un espacio estratégico

con serias posibilidades de desarrollo, ante todo mediante la asociación con Brasil y Chile que presenta nuevos mercados y favorece la comercialización internacional de los productos, a través de los puertos brasileños y chilenos.

En este proceso de “impulsar reformas, estimular la capacitación, consolidar las instituciones”, recuperar el Estado implicaría, entre otras cuestiones, formar sujetos capaces de “administrar” la cosa pública, haciendo especial hincapié en los mecanismos estadísticos, funcionales y administrativos que permitan capitalizar recursos advenidos humanos y gestionar, eficientemente, la renovación de un Estado “participativo”³⁸⁸.

En tal sentido, en el incipiente proceso de configuración del programa de gobierno frentista en Salta, las racionalidades políticas de perfil moral-cristiano se entrecruzan con aquellas de perfil neoliberal centrado en la gestión e inversión en capitales humanos, y la descentralización del Estado.

Por su parte, el programa de re-formas antedicho implicaría, a nivel económico, la programación, proyección y realización de algunas actividades como: recuperar el equilibrio fiscal, garantizar la previsibilidad, el crecimiento sostenido y el progreso, promoviendo el desarrollo económico y el turismo, ante todo: “...*vamos a generar las condiciones para crecer, pero para crecer en serio y, para eso vamos a asegurar energía durante los 365 días del año, vamos a impulsar políticas activas de beneficios fiscales y desarrollo del comercio*” (Urtubey, 2007, discurso de asunción)³⁸⁹. Pues, en este proceso de desarrollo moderno, abierto y participativo, según tramos oficiales de enunciación, el Estado va a “promocionar y apoyar”, sobre todo a la actividad empresarial privada, exportadora habilitando, jurídica y técnicamente, el desarrollo de los mercados, su empuje y capacidad. Mientras generara condiciones de infraestructura, que permitan la generación de una economía regional integral, así como la integración con el resto de los países que constituyen la posibilidad de desarrollo bioceánico, mediante el apoyo a los esfuerzos privados para obtener la consolidación de los corredores de exportación, acorde a la lógica global ya mencionada y promulgada en el gobierno de los 90’, en el marco de un modelo económico-político más abierto.

³⁸⁸ Este haz de relaciones y prácticas implica, a su vez, un proceso de “modernización del Estado”, agilizando y haciendo eficiente la gestión, sobre todo mediante la “des-burocratización” de ciertos procesos, como el electoral. En tal sentido, en el 2009, gradualmente, Salta se convirtió en la primera provincia de la Argentina en instalar un sistema de voto electrónico. Este sistema se considera que favorece la “transparencia electoral”, acelera el conteo de votos y provee una mejor accesibilidad para los votantes con discapacidades, contando con los millares de conflictos que trae consigo el conteo, la transparencia, las dificultades técnicas, entre otras.

³⁸⁹ Fuente: Página web oficial de Juan Manuel Urtubey, en: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/7/discurso-asuncion-diciembre-2007>; consultada marzo, 2013.

A este proceso heterogéneo de re-configuración y re-formas, entre la continuidad discontinúa y las promesas de “cambio”, algunos analistas locales han decidido tildarlo de “gatopardismo”, en referencia a la novela de G. Tomasi de Lampedusa llevada al cine en los años 60’, la cual narra la historia del príncipe Fabricio Salina, un aristócrata lúcido que percibe que su mundo, el noble, está destinado a desaparecer ante el irreprimible avance de la modernidad, y elabora para evitarlo un plan que permitiera que los valores de su clase perduren en el nuevo escenario:

El plan es simple: adoptar los cambios que sean necesarios sin poner en peligro los realmente importantes, cambia para que nada cambie. Cuando uno lee las reseñas o los comentarios sobre aquella novela, la analogía entre aquel relato y el escenario político salteño parece inevitable. (Cuarto Poder, el 1/03/2008, en: Avalos, 203: 92)³⁹⁰.

Pero, ¿qué había que cambiar y cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que esta propuesta de “cambio” emergiese, en Salta? Ante todo, el Frente FVP-PRS señalaba que la emergencia y tendencia político-gubernamental instalada en el 2003 obligaba a cambios políticos locales, ligados a divergentes alineaciones³⁹¹ con el Programa nacional de gobierno y vinculados con reformas, disimiles, en torno de lógicas dirigidas a promover el crecimiento, la modernización, el Estado nexa, así como el retorno a una Nación abierta al mundo y promoviendo la participación local-comunal de perfil neoliberal.

Las reflexiones antedichas nos permiten comprender como, para algunos sectores de la población local la llegada del FRV-PRS al gobierno inspiraba un deseo “revolucionario” (de “cambio”), mientras que para otros era “un salto al vacío disidente y desleal”.

³⁹⁰ La reseña señalada parte de una reflexión en torno de una leyenda proselistista, que pintaba una larga pared de la calle Zubiría al 2000 en el año 2007, cuya inscripción decía “Urtubey (en rojo) – Zottos (en celeste)” y con letras grandes, por debajo de la inscripción se desplegaba el conocido eslogan de la fórmula frentista: “NADA NI NADIE PODRÁ DETENER ESTE CAMBIO” Ver: Avalos, 2013: 91.

³⁹¹ Las relaciones entre Nación y provincia, no sólo se realizan mediante las “coparticipaciones”, sino también a través de divergentes alianzas y disputas, según realidades e intereses, que serán señaladas a lo largo del escrito. Por su parte, la Coparticipación Federal es el sistema mediante el cual el Estado Federal y los Estados Provinciales dividen los ingresos obtenidos por la recaudación de impuestos directos o indirectos, determinados por el Congreso de la Nación. Establecido con el nombre técnico de “Sistema de Coparticipación Federal de Impuestos”, este mecanismo tiene rango constitucional y se rige por la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales N°23.548/98. El artículo cuarto reglamenta que la distribución del Monto que resulte por la aplicación del Artículo 3°, inciso “b” (es decir, el monto que corresponda al 54,66% de lo recaudado y que representa las “transferencias automáticas”) se efectuará entre las provincias adheridas de diferentes modos, correspondiendo a Salta el 3,98%. A lo largo de los años, desde 1993, el monto a distribuir a las provincias en forma automática fue perdiendo participación. Pasó del 46% de la recaudación total en 1993, al 42% en el año 1998. Y promedió el 33% entre el 2002 y el 2011, influyó en este período la imposición de nuevos tributos de nivel nacional parcialmente coparticipados, como es el caso del Impuesto al Cheque al igual que el impuesto a las exportaciones agrícolas. Para compensar dichos desequilibrios se construyeron mecanismos como: las Transferencias discrecionales; el Fondo de Desendeudamiento, el Fondo Solidario de la Soja y Fondo del Conurbano Bonaerense. Fuente: <http://www.abeceb.com/web/content/show/668081/lo-basico-para-entender-la-problematika-de-la-coparticipacion>; consultada marzo-julio, 2013.

Cuando, según la propuesta de la presente tesis, lo sugerido implica pensar-nos en nuestra actualidad, no en búsqueda de “telos” emancipatorios (revolución) y/o apocalípticos (destrucción/guerra), sino de analizar las diferencias, los grises, las propuestas paradójales y las prácticas discursivas y extradiscursivas, como eso que “están siendo”: positivities estratégicas y cambiantes, específicas y condicionadas/condicionales, en el trazo heterogéneo y móvil del ejercicio del poder al modo de gobierno, a partir del cual se construyen y constituyen realidades y sujetos.

En tal sentido, entonces, es posible referir a la “moderación” de las programáticas gubernamentales que se llevaron a cabo en la provincia en esa época, en ciertas áreas. Ante todo, mediante la configuración de una red de lógicas de gobierno, preponderantemente centradas en el “buen uso de la razón y la ley hacía la nueva era”, el “cambio irremediable” y “el bien común”; lo cual, a su vez, otorga singularidad al programa de gobierno local, entre medio y más allá de las promesas, los personajes y los “gatopardismos”.

2.1- Prácticas y re-soluciones: entre continuas-discontinuidades

Acorde a lo analizado y descripto y, recordando que no hay investigaciones precedentes al respecto, haremos una breve referencia a algunas de las prácticas y lógicas de gobierno que nos permitan identificar destellos singulares y quiebres, así como continuas-discontinuidades, en torno de un enmarañado complejo y dinámico haz de relaciones, que codifican el rol del Estado, en la provincia de Salta, en la época analizada.

Entre una de las medidas más relevante, en consonancia con el Programa de gobierno nacional y tomando distancia, singularmente, del programa de gobierno salteño anterior encontramos la “re-estatización – mixta - de algunos servicios”. Recuperamos el ejemplo, en el año 2009, de la empresa Aguas de Salta, ya que buscando mejorar el acceso al agua en la Provincia, se firmó un decreto de necesidad y urgencia para rescindir por incumplimiento el contrato con la empresa Aguas de Salta, sin que esta medida implique perjuicios económicos a las finanzas públicas (Decreto N° 2190/09)³⁹². Para la instrumentación de este servicio público, se creó una Sociedad Anónima con

³⁹² Decreto N° 2190/09, del día 22-05-2009. Secretaría general de la gobernación: Rescinde contrato de concesión para la explotación de los servicios de agua potable y desagües cloacales. Aprobado por Dcto. N° 2934/99. Este decreto modifica lo dispuesto en el marco de la Ley N° 6583 de la Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica, en la que se declaró sujeta a privatización la gestión de los servicios de distribución de agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Salta

participación principal del Estado y en la que los trabajadores serán propietarios del 10% de las acciones³⁹³.

En el año 2010, continuando con la política de mejorar los servicios públicos, se rescindió el contrato con la fundación española Santa Tecla³⁹⁴, retornando el Hospital Materno Infantil a la administración por parte del Estado salteño, bajo la figura de “Sociedad del Estado” (Diario El Intransigente, 24/09/2010)³⁹⁵.

Ahora bien, dicha medida gubernamental se materializa como efecto de prácticas de resistencia y protesta al respecto, en tanto le antecede un pedido multisectorial, acompañado de marchas y reclamos por parte de diferentes gremios:

La Salud Pública no se Negocia. No al Gerenciamiento Privado. Fuera la Santa Tecla y toda administración ajena a lo público. En el día de hoy los gremios y asociaciones de salud de la provincia de Salta (APSADES, UPES, ATE, CTA y ASPROMIN) y trabajadores del Hospital de Niños, una vez más marcharon en defensa de la salud pública, en contra de todo Gerenciamiento Privado y toda administración ajena a lo público porque la SALUD PUBLICA NO SE NEGOCIA. Actualmente una gerenciadora española SANTA TECLA, está gerenciando el Nuevo Hospital el Milagro con un alto presupuesto, presupuesto que no cuenta un hospital público. (Parte de prensa: Salta, miércoles 2 de septiembre de 2009).

También le precede, el pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el gerenciamiento privado de la salud en la provincia de Salta y otras cuestiones conexas³⁹⁶. En este contexto de tensión y disputa, la gobernación decide, un año después, re-estatizar la gerencia de los hospitales, puntualmente, del hospital Materno Infantil.

En esta sintonía, en los trazos de relación entre gobernados y gobernados en torno del gobierno y la resistencia, también se ponen en marcha prácticas políticas dirigidas a

³⁹³ El programa de gobierno de la época provincializó el servicio de aguas, que desde 1998 operaba Necon, firma de Juan Carlos Relats, multipropietario de, entre otras compañías, la constructora J.C.R (Juan Carlos Romero), que se especializa en obras viales. A Relats se lo solía comparar con otro empresario del asfalto, Lázaro Báez, destinatario de todas las elucubraciones en torno a la familia presidencial Kirchner; así como la amistad que lo une a Julio De Vido. Relats tiene, a su vez, extrema cercanía con Juan Carlos Romero. Fuente: <http://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-5765228.05.2009>; consultada mayo, 2013.

³⁹⁴ La Fundación Argentina Santa Tecla (con capitales catalanes) fue creada en ocho (8) días, se inscribió y pudo participar en la llamada Licitación.

³⁹⁵ Decreto N° 3962/10, del día 27/09/2010. Ministerio de Salud Pública. Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18444, el día 06 de Octubre de 2010. Se aprueba el estatuto de la sociedad “Hospital público materno infantil sociedad del Estado”.

³⁹⁶ Resol. N° 112 (09/09/2009), N° de Expediente 4331-D-2009, a través de cual se dirigen a la Cámara Nacional de diputados pidiendo se informe, entre varios puntos: si puede responder sobre las razones que llevaron al gerenciamiento privado de la salud en la Provincia de Salta. Motiva este pedido de informes la preocupación por la situación de salud de la población de la provincia de Salta y la implementación de políticas de salud en los últimos años, que no dan respuesta a los problemas graves y urgentes que presentan. En el mes de noviembre del año 2001, se comenzó con un traspaso paulatino de profesionales al inaugurado Nuevo Hospital El Milagro. El mismo funciona con profesionales de Salud Pública que fueron trasladados y cuyos haberes los pagaría el Estado y con profesionales contratados por la Empresa a cargo. En el mismo año 2006 se llama a una nueva licitación y curiosamente se adjudicó a otra empresa española, la Fundación Santa Tecla de capitales catalanes que supuestamente integraban la anterior licitación. Nunca se supo si hubo otros oferentes.

achicar el mercado interno para aumentar saldos exportables, conteniendo a los trabajadores y los sectores populares por medio de una represión que requiere criminalizar la protesta, entre otras cuestiones, vinculadas con la exclusión, la exportación, entre otros. De hecho, en el año 2009 en Orán, los trabajadores toman la planta industrial exigiendo seguridades laborales y aumento en los salarios, tras lo cual la patronal criminaliza la lucha exigiendo que los fueros sindicales se suspendan para obrar, no contra los trabajadores, sino, simplemente, contra delincuentes que obstruyen la producción destinada al mercado mundial.

Por tanto, estas prácticas de gobierno reguladas por lógicas de perfil peronista dirigidas a reconfigurar el rol del Estado en su carácter de “interventor y ordenador del orden social y las instituciones públicas”, se entrecruza en tensión, sin contradicción, con prácticas de perfil neoconservador y neoliberal. En este último sentido, no sólo se reprime a las subjetividades “no deseadas”, también se generan mecanismos de gobierno que permitan producir subjetividades “deseadas y gobernables”. Para esto, entre una de las prácticas de gobierno más controversiales y expandidas a nivel local y nacional encontramos en el año 2008, la decisión del Senado de Salta de convertir en ley la enseñanza obligatoria religiosa en las escuelas públicas. De este modo, se blanqueó la enseñanza de la religión católica, que desde 1978 integra los planes de estudio de la educación primaria.³⁹⁷

Desde entonces, la misma ha sido impartida de manera continuada en las escuelas salteñas, siendo Salta, junto con Jujuy y Santiago del Estero las únicas tres provincias argentinas donde el catolicismo se enseñaba obligatoriamente en las escuelas públicas³⁹⁸. La ley, retoma el texto de la Constitución provincial que, en su artículo 49 sostiene que los padres y en su caso los tutores “tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El mismo inciso aclara que “los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa”, en tal sentido:

³⁹⁷ La Educación Religiosa es un espacio contemplado en la Ley de Educación Provincial N° 6829, modificación N° 7546. Título IV, Cap.II, Art. 27: “La Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una formación integral, básica y común. Son objetivos de la Educación Primaria en la Provincia de Salta: (inciso ñ) “Brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos”.

³⁹⁸ El 8 de marzo de 1978 con la firma del entonces gobernador de facto Capitán de Navío, Roberto Augusto Ulloa, se presentaron las “Bases curriculares para la escuela primaria salteña”. Allí se especifica cómo se enseñará “educación religiosa y moral” para “iniciar al alumno en la profundización de la vida cristiana”. Con la reforma de los 90 se sumó Formación Ética y Ciudadana y se mantuvo la religión cristiana. Para apoyar la Ley, el Consejo Provincial de Educación Católica del Arzobispado de Salta reunió 30.000 firmas. Fuente: [www:http://edant.clarin.com/diario/2008/12/20/sociedad/s-01825769.htm](http://edant.clarin.com/diario/2008/12/20/sociedad/s-01825769.htm); consultada, mayo 2013.

El gobernador defiende la obligatoriedad de la enseñanza religiosa: “La Constitución provincial la establece”, dijo a este diario. Además, agregó, es “una realidad de tiempo inmemorial” en Salta. La gobernación argumenta que podrán retirarse del aula los hijos de quienes rechacen la asignatura. “La obligación es de la escuela de tener oferta de educación religiosa, no del chico de cursar religión...” (Diario Página 12, 1/02/2009).

Ahora bien, en el trazo vincular entre gobernados y gobernantes, dicha decisión no quedó impune, pues se realizaron varias manifestaciones, entre las más relevantes las denuncias de padres en el Ministerio de Derechos Humanos y el INADI, por discriminación y abuso, sin obtener respuesta alguna, y quedando a criterio de los padres y/o tutores el respectivo “permiso” para que sus hijos/as participen o no de las clases de formación religiosa.

Dicho proceso de “religiosidad” de la enseñanza, se entrecruza con las medidas y conflictos en torno de la “Educación sexual” (N° 26.150, 2010), en la provincia. Esta discusión se da en el marco de la promulgación de la Ley de Educación Sexual y las dificultades – trabas - para su implementación en las escuelas salteñas bajo la dirección del ministerio de educación por un representante de la jerarquía católica local³⁹⁹. Se hace referencia a Leopoldo Van Cauwleartl por ese entonces Ministro de Educación (2007-2010) y representante de la jerarquía católica local, con la cual el FV-PRS había realizado diferentes acuerdos a la hora de asumir la gobernación. Dicho Ministro, ante todo se presenta como un ferviente enemigo de la educación sexual en las escuelas haciendo declaraciones como: “*Los estudiantes son todos porros*” o “*...la educación sexual supone la condición de posibilidad de un revolcadero sexual*” (Avalos, 2013: 30, 31); ante estos tramos de enunciación, la educación debe ser congelada en los valores y modalidades católico-medievales viendo al cuerpo como pecaminoso y satánico. También, el

³⁹⁹ La discusión en torno de la educación sexual se inicia cuando en setiembre del 2010 se reglamentó el artículo 6° de la Ley N° 73113/04. Publicada en el Boletín oficial 16968, de *Sexualidad Responsable*, en el marco de la ley nacional de Educación sexual N° 26.150. En Salta, a través de los sistemas de educación formal y no formal, se brindará a los niños, adolescentes y adultos, la orientación y asistencia adecuada en salud sexual para contribuir a la calidad de vida dentro de un proyecto de familia y de crecimiento de la persona. Según el Decreto por el cual quedó reglamentada dicha Ley, la educación sexual será dada en el marco de los diseños curriculares definidos por el Ministerio de Educación, con la aclaración de que se realizarán "adaptaciones en los proyectos educativos institucionales específicos de acuerdo a su realidad sociocultural". Asimismo se agrega que "el Ministerio de Educación arbitrará los medios necesarios para capacitar a los docentes en el marco" de la reglamentación de este artículo, para incorporar en los establecimientos educativos de todos los niveles de educación obligatoria -y en carreras de educación superior que lo exijan-, la educación sexual responsable, trabajando, en forma sistemática, los contenidos a lo largo de su desarrollo y desde la transversalidad. (Diario El intransigente, 22/09/2010). En el inciso h, del art. 2 dicha ley sostiene, de acuerdo a la propuesta “conservadora de la misma”: “*Contribuir a la eliminación de los abortos, concientizando, informando y asesorando a la población en forma permanente y continua acerca de los efectos negativos de las prácticas abortivas que atentan contra la vida y el cuidado de la salud*”. En setiembre del 2011, y bajo el ministerio de López Figueroa, tras la renuncia del anterior ministro, la ley comienza a implementarse de modos esporádicos y poco claros, lo cual suscita fuertes críticas y resistencias, ante todo de La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), entre otros. Ver: Diario Tiempo Argentino, 2/09/2011.

Ministerio de Justicia, estratégicamente, estaba en manos de representantes del mismo orden conservador.

Por tanto, Educación y Justicia áreas negociadas, estratégicamente, para la conformación transversal del frente electoral, acorde a racionalidades políticas de perfil moral-pastoral, entre los comienzos y las sucesiones acorde a los trabajos en el capítulo 1, respecto de la historia salteña y sus configuraciones. En referencia a las relaciones entre gobernados y gobernantes cabe consignar que dichos espacios de gobierno resultan relevantes en el proceso de construcción de las subjetividades gobernables, ante todo en torno a los valores, los deseos, los cuerpos y el “uso de los placeres”, así como de los órdenes sociales y de justicia, seguridad y cohesión en los marcos de la concordia y el orden pre-establecido.

En este haz de relaciones y prácticas de poder y gobierno, otra de las aéreas fortalecidas y sostenidas, ante todo a nivel “económico-cultural”, ha sido el turismo y la cultura en el área ministerial que los cobija. Sobre todo, el turismo es comprendido como una actividad que genera desarrollo y ayuda a la protección de los recursos provinciales, “para lo cual es menester favorecer y fomentar el mercado turístico”, mejorando los servicios turísticos y las asociaciones con las instituciones locales y el sector privado. Tras lo cual el gobierno provincial tiene por objetivo: “*Planificar, ejecutar y controlar los procesos del sistema de gestión de la calidad a fin de mejorar continuamente su eficacia*”. (Objetivos y Misión: Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Gobernación de Salta)⁴⁰⁰. Esto se construye de la mano con la promoción, difusión y gestión de la cultura popular salteña, la protección patrimonial, entre otras.

En tal sentido, siguiendo a Villagrán (2014), en torno de las propuestas y modelos dirigidos a la cultura, el turismo y el patrimonio en la Salta del presente, con diferentes matices desde 1995 hasta nuestros días, se imprime la lógica empresarial y eficientista propia de una racionalidad política neoliberal dirigida a “desburocratizar y eficientizar” el Estado, lo cual no implica hacerlo desaparecer, sino ponerlo al servicio de los mercados encargados de construir precios y verdades. Mientras que a la par de la hibridación de la cultura - como ámbito público/privado - se promueve su “mercantilización”:

Ese es el marco en el cual se enuncia el discurso del patrimonio y se promueve a la ciudad y su gente como “atractivos” turísticos y objetos de contemplación y consumo. La “cultura” sería, entonces, una puerta de ingreso al futuro, un recurso clave para inscribir a Salta en los tiempos globalizados (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 232).

⁴⁰⁰ Ver: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-cultura-y-turismo/8>; consultada marzo/julio, 2013.

Sin embargo, también en lo que Villagrán ha dado por llamar “repertorio patrimonial” (2010b, 2014) en torno de cual la cultura adviene un objeto para ofertar en el mercado turístico, entra en juego el pasado y los modos de encuadrillamiento y reconstrucción de ciertas imágenes, símbolos e identidades, según lo manifiesto por la antropóloga salteña: *“En este sentido nos permite analizar la aplicación de esta lógica, desde un programa de gobierno que rescata el pasado a los fines de la promoción turística, seleccionando, con un criterio mercantil, lo que resultaría “atractivo” y “patrimonializable”*” (Álvarez Leguizamón y Villagrán, 2010b: 232)⁴⁰¹. Esto remite, ante todo, a los modos divergentes mediante los cuales es recuperada la figura de Martín Miguel de Güemes.

A su vez, junto con las clasificaciones y selecciones de imágenes, espacios y/o objetos que ingresan en los repertorios patrimoniales, se ponen en juego operaciones inversas de censura, olvido y extirpación de otros pasados, presentes y futuros posibles, que no serían patrimonializables, y por tanto tampoco protegidos, ni conservados, ni restaurados, como es el caso de las poblaciones pobres, desocupadas e indígenas, en el norte provincial, así como las diferencias de género y sexualidad, entre otras cuestiones.

En este breve recorrido por algunas prácticas de gobierno a modo de ejemplificación, observamos cómo este período (2007-2011) se construye en un abanico heterogéneo de racionalidades políticas que cobran singularidad local. Ante todo, nos topamos con lógicas de perfil neoliberal dirigidas a la desburocratización, la eficiencia y la mercantilización de bienes servicios y patrimonios; entre resonancias peronistas dirigidas a la estatización y regulación institucional de orden público, con cierto perfil neodesarrollista, en tanto no se interviene políticamente en la economía, sino mediante técnicas y principios económicos promoviendo el desarrollo y la modernización, ante todo hacia el afuera de un mundo abierto, global y desarrollado; mientras se profundizan cimientos neocoloniales de perfil marcadamente moral/cristiano asentando valores, principios y modalidades de gobierno de los cuerpos biológicos y los placeres en relación a la construcción de “otros” que, “por no deseados”, deben de ser reconfigurados en su subjetividad - vínculos, cuerpos, deseos - o por lo contrario dejados o dados a la muerte, ya que:

⁴⁰¹ En tal proceso, entre tradiciones, identidades y protecciones, mientras se compra y vende cultura y se globalizan las identidades locales, un elemento estratégico ha sido el “uso político y cultural” generado en torno de la figura del Gral. Martín Miguel de Güemes (Villagrán 2010b, 2014). En las publicidades y propagandas, así como en las paredes e incluso en los taxis locales, el rojo y el negro son el fondo cromática de identificación en torno de la “salteñidad” gaucha, valiente y popular, según lo enunciado por gobierno actual.

Desde la perspectiva de una teoría heterárquica, esto significa que la colonialidad no se reduce al dominio económico y político establecido por las potencias hegemónicas del sistema-mundo sobre los territorios de la periferia (es decir que hablar de colonialidad no es lo mismo que hablar de colonialismo), sino que tiene que ver también, y primordialmente, con los dispositivos de regulación y normalización que operan a nivel gubernamental (las llamadas «herencias coloniales»), así como con las tecnologías de resistencia y decolonización que operan a nivel molecular. Si bien los imperativos económicos de la economía-mundo se vinculan en red, se enredan con otras cadenas de poder que operan en otros niveles (como por ejemplo las relaciones étnicas, epistémicas, sexuales, espirituales, de género y de clase), estas relaciones no son determinadas por las relaciones de trabajo y tampoco son reducibles las unas a las otras. (Castro Gómez, 2007: 167-8).

En tanto, no hay una única colonialidad, sino múltiples, como múltiples son las prácticas decoloniales, en tal sentido.

3-La re-elección y re-creación del legado: el programa de gobierno salteño entre 2011 y 2013

En el año 2011 el programa de gobierno de la Alianza del Frente para la Victoria y el PRS, bajo la dirección de J. M. Urtubey junto con Andrés Zotto resultó reelecto, por más del 57% de los votos.

Este segundo mandato es asumido con un discurso de corte progresista alineado, entre idas y venidas⁴⁰², a los entramados enunciativos nacionales, dispuestos por la presidencia reelecta de CFK, ante todo promoviendo la banderas de la “equidad y la inclusión” en clave de justicia social y bien común, bajo el velo de Dios y el pueblo, según lo manifiesta el gobernador (Urtubey, discurso de asunción, 2011).

Ante todo, en el discurso de asunción, se manifiesta como punto central del programa gobierno, la lucha contra la inequidad a través de crecimiento de todos y todas, para lo cual es primordial:

⁴⁰²De 553.625 votos emitidos en la provincia, 314.948 (57,68%) optaron por la reelección de Urtubey en un escenario político-partidario complejo, con opositores como Olmedo, Romero de la mano de Wayar y con el apoyo de Moyano, que a su vez también contaba con el apoyo de la candidata a presidente en la campaña. Dichos resultados, inmediatamente, y como también sucederá en las legislativas del 2013, llevan a una proyección nacional por parte del gobernador y a un distanciamiento del Programa nacional, el gobernador: “...remarcó su autonomía de la Casa Rosada y evitó alineamientos automático con el proyecto kirchnerista” (Diario La Nación, 11/04/11). El diario Nación, por su parte, en clara oposición con el Programa nacional que: “No es ningún secreto que el gobernador (...) mantiene una difícil relación con el núcleo duro del kirchnerismo, al que suele referirse como la “intelectualidad porteña”. “Les jodo estéticamente”, es la explicación que ensaya ante sus íntimos, tras lo cual postula su crianza en el campo y su educación en el extranjero como dos barreras frente a la pingüinidad” (Diario La Nación, 11/04/11), el gobernador ni confirmó ni desmintió las acusaciones, en su perfil de “político clásico” que traza sus líneas de acciones en torno de intereses específicos, sus intenciones de posicionarse como candidato presidenciable quedaron por encima de cualquier comentario al respecto, que no dejan de orientar los juegos de verdad y las condiciones de realidad hacia ciertos campos en los cuales las disputas por el ejercicio del poder se tornan prácticas de gobierno. Luego de unos meses, el gobernador vuelve a remarcar su apoyo al Programa nacional y se baja de su presidenciable, postulando una posible re-re-elección en 2015.

...El esfuerzo en la asistencia⁴⁰³ a los más desprotegidos es prioridad ahora, lo fue hace cuatro años y lo será mañana. A fondo. Sin descanso. Señoras y señores, la pobreza no es parte del paisaje. La pobreza es una realidad que debe cambiar. Que va cediendo pero que nos va a acompañar un tiempo largo y contra la que debemos luchar todos los días, todo el tiempo. Nuestra historia nos enseña que aquellas batallas que algunos consideran pérdidas, otros las dan y vencen. (...). Estoy acá para decirles que tenemos herramientas para esa lucha. Que desde hace cuatro años las estamos usando (...) junto a nuestra presidente de la Nación la Dra. Cristina Fernández de Kirchner hemos hecho cambios trascendentales y hemos iniciado procesos que no tienen vuelta atrás ya que el pueblo los considera propios. (Discurso de asunción, 2011)⁴⁰⁴

En primer lugar, entre medio de un conjunto de significantes vacíos, apenas señalaremos lo que analizaremos con profundidad en el apartado II del capítulo 4, en torno a cómo la pobreza es considerada a partir de su “combate” acorde a los entramados enunciativos dispuestos por el Discurso de Desarrollo Humano y los Organismos Internacionales de crédito; mientras que la vinculación entre pobreza y asistencia se configura en torno de mecanismos de acción y reacción ante dicho problema, que el gobierno reelecto no solo ha heredado, sino arrastrado desde sus inicios, siempre, según tramos oficiales de enunciación, en camino hacia el “progreso” de la provincia y de los “hermanos salteños”.

A su vez, en dicho discurso se muestra una clara alineación, por aquel entonces, con el gobierno nacional que se teje entre idas y venidas, pues tal como lo señala Avalos (2013) el programa de gobierno salteño resulta y resuelve ser parte del “aparato político partidario” del FVP, pero sin pronunciarse como “militante” de dicho frente movimentista, por lo cual las diferencias, cercanías y lejanías se resaltan todo el tiempo en la arena político-proselitista, ante todo.

Por tanto, el enorme desafío que se avista en este segundo mandato atravesado de conflictos vinculados con el trabajo semiesclavo y la desnutrición infantil⁴⁰⁵, es el de:

⁴⁰³ Si bien lo señalado será trabajado en profundidad en el apartado II del capítulo 4, cabe apenas esbozar que la “asistencia” está siendo considerada a partir de las “enseñanzas, y prácticas conductuales y políticas” ejercidas en el gobierno de Perón, ante todo por Evita. Esto es por el partido justicialista cuya bandera ha sido la lucha por los más humildes: “*porque eso nos enseñó Perón, porque so no puso en el corazón la compañera Eva Duarte de Perón*” (Discurso de Urtubey, en el congreso del P.J., Cafayate noviembre, 2010, Diario El intransigente, 29/11/2010.); para esto es menester una “conducción” fuerte, firme y sólida, acorde al legado y la “sangre peronista” que hace de estos hombre y mujeres “de ley” capaces de “representar a los más vulnerables, débiles y humildes, promoviendo las coberturas, la contención de sectores específicos, la inclusión social y económica bajo el lema de la competencia y la competitividad” (Urtubey, discurso realizado ante 62 organizaciones peronistas, 2010). De este modo, se evidencia la heterogeneidad de racionalidades políticas y la re-actualización singular-local del peronismo justicialista en el trazo múltiple de asistencias, conducciones y lógicas neoliberales.

⁴⁰⁴ Fuente: Página web oficial de Juan Manuel Urtubey, en: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discursos/13/discursos-asuncion-diciembre-2011>; consultada julio, 2013.

⁴⁰⁵ En torno con la búsqueda del “mejor gobierno o del buen gobierno”, en el momento de las elecciones de 2011, a nivel de la gobernación provincial se daban a conocer imágenes y números vinculados con la “desnutrición infantil” que acechaba y acecha ante todo a las poblaciones indígenas de la provincia. Ante y entre dicha problemática, si bien se reconoció, por parte de la gobernación que la desnutrición infantil es un drama latente en la provincia; también se sostuvo que de 30 muertes por año, que se daban en 2007, pasaron a lamentar cinco

“Ser mejor gobernador, hacer un gobierno mejor, escuchar mejor a los que nadie escucha. Los salteños lo necesitan y confían en quien les habla. Y jamás traicionaré esa confianza (...) Y que mi vida debe ser de servicio al prójimo. Es el fin último de la política, y es el primero que olvidamos” (Urtubey, discurso de asunción, 2011)⁴⁰⁶, palabras éstas, teñidas del humanismo cristiano que atraviesa los entramados discursivos gubernamentales desde los inicios del mismo, el trabajo generoso, solidario y hacia el bien común de los hermanos, acompañados de progreso, mercados abiertos y Estados articuladores.

En tal sintonía se promueve la inversión en salud, educación y obras de infraestructura. En el primer caso, mediante el aumento de la cantidad de hospitales, médicos, centros de salud, entre otros, lo que no repercute en la calidad de la atención, los servicios e incluso los salarios de los trabajadores de la salud. Así como, en el segundo caso, se pretende invertir en infraestructura educativa, de vivienda y servicios, ante todo, haciendo hincapié en la educación de perfil neoconservador, según lo dispone la ley instalada en el primer mandato. Por último, en muchas oportunidades el slogan del programa de gobierno de la época fue *“Incluir es hacer obra”*, en referencia a las prácticas vinculadas con la construcción, la mano de obra generada en este sentido y las carencias que la provincia posee en torno del mismo. De hecho, entre 2008 y abril de 2014 la provincia

defunciones de niños en 2010. El gobernador introdujo la explicación acerca del trabajo que lleva a delante para acabar con este flagelo, en el programa Código Político, conducido por Eduardo Van Der Kooy, en TN. A lo cual agregó que se trata, ante todo de una “cuestión cultural”, haciendo responsable al “pobre” de sus males de pobreza: *“Tenemos comunidades de diversas etnias. Hay algunas que son más complicadas, como los Wichis, porque hay cuestiones culturales que hacen difícil abordar una problemática de este estilo adentro de la casa”*, (Diario el Intransigente, 3/02/11). Esto es sostenido y profundizado por Cristina Lobo, secretaria de Nutrición de la provincia, quien insistió en que el problema radica en que la población aborigen no acepta la medicina tradicional; mientras reconocía que el boletín informativo está demorado y que por ese motivo no se conocen las cifras del 2012 que arrojan que la desnutrición descendió significativamente. Especificó que 90.474 niños están bajo vigilancia epidemiológica nutricional, y más de 120 mil bajo cobertura de vigilancia en su desarrollo. A esto responden diferentes espacios y organizaciones político-sociales y gubernamentales, entre ellas la Secretaria adjunta de la CTA, María Lapacet, manifestó que la desnutrición golpea fuerte a las poblaciones infantiles, ya que alcanzó entre un 10% y un 11% en los departamentos de las zonas sur y oeste de la provincia, lo que implica entre 80 y 90 niños desnutridos, en el año 2011. Al respecto de los índices dados por Lobo, Lapacet indicó que lo que disminuyó no fue la desnutrición, sino la muestra representativa de niños en estado de riesgo nutricional. La discusión además de ser “estadística” es política, en tanto el gobierno provincial, según lo señalado por la representante de la CTA, provee de políticas para la comercialización de la soja y “no sea capaz de implementar políticas para alimentos, mientras que desde la gobernación se hace peso en el Programa “Nutrivida”, como mecanismo de gobierno de la problemática planteada. Fuentes: Diario “Que pasa Salta”: <http://www.quepasasalta.com.ar/35131/Debate-por-la-desnutricion-en-Salta-aumento-o-bajo.html>; consultada, julio, 2013; y, Paula López Calvo, “El hambre es un crimen. Salta la linda, Salta la desnutrida”. Artículo publicado en el Periódico de la CTA N° 74, marzo de 2011.

⁴⁰⁶Fuente: Página web oficial Juan Manuel Urtubey: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/13/discurso-asuncion-diciembre-2011>, consultada, marzo-julio, 2013.

entregó más de 14.000 casas y 9.000 soluciones habitacionales (Gobernación del provincia de Salta).⁴⁰⁷

Con respecto al “trabajo”⁴⁰⁸ se hace referencia a “cuidar, acompañar y facilitar” el camino a quienes están encargados de “dar trabajo”, el campo y la industria, ante todo. Por lo cual se pretende generar “trabajo genuino”, el cual para las poblaciones pobres, tal como veremos en el próximo capítulo, se traduce en trabajo “decente”; pero esto de la mano de un programa de gobierno que no genera trabajo, sino que lo facilita abriendo caminos a quienes lo pueden “dar” y “gestionar”.

Estas prácticas se acompañan de otras dirigidas al cuidado y protección de los jóvenes -empleables -, promoviendo la no migración hacia ciudades centrales, así como la capacitación e inserción laboral en fábricas y empresas. Mientras se pretende reforzar y capacitar a los “cuerpos policiales” ante todo, para combatir el narcotráfico y acompañar la lucha contra las drogas: *“Sepan todos, buenos y malos, que no vamos a detenernos, que no vamos a mentir, que la guerra contra el delito y el tráfico de drogas será sin cuartel. Y que la asistencia a las víctimas del delito y de la droga será permanente. Ningún derecho humano será vulnerado jamás, me conocen. Confío en una justicia implacable que castigue a los delincuentes”* (Urtubey, discurso de asunción, 2011).⁴⁰⁹

⁴⁰⁷ A las obras públicas y la relación con el trabajo y los trabajadores haremos referencia en el subapartado referido Al Fondo de Reparación Histórica, del presente capítulo.

⁴⁰⁸ Para el año 2011, en Salta, donde el desempleo creció casi un punto (era del 10,6% un año atrás) y la tasa de ocupados cayó del 40,2 al 39,3% de la población total. Si esa pérdida de puestos de trabajo, no se tradujo en un alza mayor de la desocupación fue porque, siempre en relación con 2010 y según el Indec, hubo menos gente buscando trabajo: la tasa de activos bajó del 45 al 44,4 por ciento. En Mar del Plata ocurrió algo similar: el desempleo subió en el año de 8,3 a 11%, por una caída significativa de la tasa de empleo y, a la par, un achicamiento del universo de la población activa. Los datos muestran una suba del empleo a nivel general del 2,65%, con la creación de 400.000 puestos. Sin embargo, en algunas localidades hubo una caída de las fuentes de trabajo. Fuente: Diario La Nación. 24 de agosto del 2011.

⁴⁰⁹ Fuente: Página web oficial de Juan Manuel Urtubey <http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/13/discurso-asuncion-diciembre-2011>; consultada julio, 2013. Dichas afirmaciones se ven atravesadas por una problemática que viene acusando a la provincia: el “fantasma del narcotráfico”, en el cual se encuentran involucrados policías y gendarmes cuando el Estado parece no quedar ausente, lo que se complementa con la estratégica ubicación geográfica de la provincia. Puntualmente, referimos a los acontecimientos sucedidos en junio del 2011, cuando el personal jerárquico de la policía fuera detenido por traficar 50 kilos de cocaína, corriendo luego la misma suerte dos gendarmes en el norte provincial, los cuales transportaban casi mil kilos de la misma sustancia (Cuarto Poder, sábado 25/06/2011). Dichos sucesos se repiten con cotidianidad en la zona norte de la provincia, acompañados de aumento de consumo y prácticas sicarias. En el 2013, el juez federal de Salta Miguel Medina alertó la necesidad de en el norte del país luchar contra el narcotráfico. Y, en el 2014 se designó (desde la gobernación provincial) al Dr. Abel Cornejo como Juez de la Corte de Justicia de Salta, el cual asumió luego como vicepresidente de la Corte Suprema local: *“es necesario radicar un pacto nacional de seguridad ‘en el combate contra el narcotráfico y también manifestó que debería tratarse el tema de la Justicia federal como un tema de Estado”* (El Tribuno, 8/06/2014). Más allá de las declaraciones y medidas a nivel judicial, a nivel gubernamental las prácticas de intervención se despliegan en marcos discursivos, mientras las prácticas concretas se dirigen, casi exclusivamente a celebrar las captura de “narcopolicías o narco gendarmes”, sin hacer revisión de lo señalado en torno del Estado y los espacios estratégicos para el despliegue de la actividad de narco.

Entre las propuestas instaladas en este camino local de lucha contra el narcotráfico, considerando que el mismo se realiza ante todo en los departamentos norteños de Orán, Rivadavia y San Martín, de hecho los más pobres de la provincia, recuperamos lo sugerido, de modo propositivo, por Ávalos al respecto:

...el objetivo estratégico no debería ser otro que restarle mercado. Para ello, ciertos movimientos tácticos son imprescindibles: recuperar a quienes son víctimas de las adicciones, prevenir el uso indebido de los estupefacientes, y luchar decididamente contra el fenómeno de la precarización de las relaciones sociales en la que se desenvuelve gran parte de nuestra sociedad. Superar el quiebre de las solidaridades sociales, laborales y políticas que fragmenta hasta límites insospechados la experiencia de individuos cuyo único horizonte de vida es la inestabilidad y la incertidumbre (Avalos, 2012: 140).

De este modo, la cuestión del narcotráfico, apenas esbozada en este escrito, no sólo pone de relieve una problemática vinculada con la justicia, la inseguridad, las instituciones policiales, también evidencia la situación de pobreza, inestabilidad, incertidumbre y abandono en el cual se encuentran algunos territorios y poblaciones en la provincia de Salta, tal es el caso del Departamento Gral. San Martín y la localidad de Mosconi, columna vertebral de nuestra analítica vincular.

3.1-La reconfiguración del rol del Estado: entre nexos y eficiencias

Las diferentes propuestas programáticas de gobierno, en continua discontinuidad con el mandato anterior, se tejen en el torno del proyecto de “transversalidad frentista” ya desgastado⁴¹⁰; ante todo, porque el gobernador Urtubey asume, en el año 2010, la presidencia del Consejo provincial del Partido Justicialista local (2010-2014)⁴¹¹. Dicha

⁴¹⁰ Si bien luego nos explayaremos sobre el Fondo de Reparación Histórica, una de las declaraciones más importantes del vicegobernador en torno de su distanciamiento crítico del frente transversal la realiza en Tartagal, cuando promovía y solicitaba una mayor inversión en obras poniendo en discusión la derivación de fondos y actividades del FRH, que en un principio apoyó explícitamente, entre algunas de sus declaraciones hace referencia a la crisis del Frente conformado con el gobernador por lo cual el PRS decide no realizar una coalición electoral, en vista a las legislativas del 2013 con el PJ presidido por el gobernador, considerando que actualmente dicho frente: “...está dirigido por pocas voluntades, a diferencia del 2007 cuando se constituyó bajo los ejes del progreso, la familia y la unidad basada en el respeto a la pluralidad de ideas (...) No estamos dispuestos a vender la dignidad”. Fuente: Cadena Máxima, 18 de julio del 2013: [www. http://cadena_maxima/?p...](http://cadena_maxima/?p...); consultada julio/agosto, 2013.

⁴¹¹ Urtubey asume como el total apoyo del PJ local ya sea para presidir el partido, como para postularse a gobernador nuevamente (Diario el Intransigente, 14/04/2011). El PJ local se ve revuelto, nuevamente, en las elecciones legislativas del 2013, cuando según datos del Tribunal Electoral de la provincia en las primarias abiertas y obligatorias del 6 de octubre del 2013 participaron 920 listas en toda la provincia, de las 44 que competirán en Salta casi un 40% pertenecen al PJ e sus diferentes vertientes (Alternativa Justicialista; Cambio Justicia y Victoria; Con vos por Salta; Frejuvi; Intendencia Isa; Justicia por la gente; Si se puede; Frente plural; Frente Popular; Frente Salteño, entre tantas). Sin embargo Gustavo Sáenz el candidato a senador por el oficialismo justicialista era quien se postulaba como tal en la enorme mayoría de los partidos presentados en las PASO, de hecho salió segundo en las elecciones con un 22,69% de los votos, mientras que “sorpresivamente” el Partido Obrero local ganó las elecciones con un 27,14 de los votos, quedando tercer lugar. El Frente Popular Salteño (bajo la referencia de Romero) con un 15,91% de los votos. En diputados también arrasó el PO con un 26,71%, segundo Godoy el candidato oficialista y presidente de la cámara baja con el 17,43% y en un tercer lugar David

asunción se realiza, luego de la renuncia de J. C. Romero, quien había sido electo por los períodos 2007-2011 y a quien, mediante un acuerdo cerrado, se pretendía destituir. Luego de su renuncia, se da por concluido el “período de paz” entre ambos gobernantes peronistas, y la traición se instala como definitiva, según J. C. Romero: “...*la estrategia de división y atropello a la vida institucional partidaria ha sido coronada con la reciente decisión de constituir un frente electoral con otros partidos políticos de esencia ideológica totalmente opuesta a la nuestra*”⁴¹².

La traición remite a la decisión tomada por el Frente para la Victoria de presentarse a elecciones para gobernador en un acuerdo con el PRS, en tanto dicho partido ha sido desde siempre un ferviente “enemigo” de PJ; así como la continuidad, entre giro y contragiros, con el programa de gobierno nacional. De tal modo, se vuelven a poner en juego las redes y prácticas vinculadas con las traiciones y lealtades entre y frente al *locus* de enunciación del peronismo/justicialista y la configuración de las relaciones políticas y de gobierno.

Así, dicho proceso es bautizado como de “re-peronización” del programa de gobierno local, mientras que en correlación con aquellas enunciaciones de Urtubey allá por 1999 en referencia al continentalismo y la globalización⁴¹³, se promueve un proyecto económico y político de apertura y en concordancia con los avances de la globalización y el desarrollo, lo cual se codifican en torno de racionalidades políticas que se explicitan del siguiente modo: “...*el desarrollo, la modernidad y el crecimiento no se basan sólo en planes económicos, se basan en la asistencia a los que la necesitan, en la salud, la educación y el trabajo. Es desde allí donde se crece. (...) Señores no estamos ni pretendemos transformar la economía. Estamos luchando para transformar la realidad de los salteños con una economía sana y transparente*” (Urtubey, discurso de asunción, 2011)⁴¹⁴. La economía entonces, no es transformable, no es posible de ser intervenida, aunque sí las realidades, los sujetos, las condiciones que posibiliten, siguiendo a Foucault (2007), generar marcos y medio ambientes para que el juego del mercado sea posible; teniendo, siempre, el crecimiento económico como meta, en el trazo de un limpio y no corrupto ejercicio del “buen gobierno”.

del FPS con el 10,14%. Así el PO obtuvo la mayoría en el consejo deliberante capitalino y la inmersión de diputados y senadores. El salto del PO no solo implica un quiebre en las prácticas electorales, también en el cauce de las organizaciones partidarias locales en búsqueda de otros horizontes.

⁴¹² Ver: <http://www.parlamentario.com/noticia-33319.html>, consultado setiembre 2013.

⁴¹³ Ver: apartado II del capítulo 1.

⁴¹⁴ Fuente: Página web oficial de Juan Manuel Urtubey: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discursos/13/discursos-asuncion-diciembre-2011>; consultada julio, 2013.

Lo antedicho se configura en torno de la propuesta de un “Estado Articulador”: “...debemos pensar en el Estado como nexos. La clave es contar con políticas públicas eficientes” (Urtubey, 2013).⁴¹⁵ Para lograr lo antedicho, el trabajo con el sector privado es uno de los ejes que el programa de gobierno salteño considera primordial, mientras promueve la activación de mecanismos para canalizar la participación social haciendo consideraciones en torno de la sociedad civil, como “comunidad y/o sectores de la comunidad”. Esto es en la clave ya señalada de un retorno a los lazos primarios - solidarios - instalados en la sociedad civil y la comunidad, plasmado en la Ley N°6388 promulgada en 1995, que es utilizada frecuentemente por el gobierno de Estado provincial, en el marco de las políticas sociales y públicas dirigidas a la articulación entre Estado y Sociedad Civil. Según lo propuesto: “...el Estado debe requerir la participación del tercer sector y del empresariado. Generar una especie de sociedad entre los tres sectores para impulsar el trabajo vinculado con la responsabilidad social” (Urtubey, 2013)⁴¹⁶. Resuenan en estos tramos de gobierno dirigidos al eficientismo del Estado, tanto las referencias ya mencionadas en torno del Banco Mundial allá por mediado de los años 90’, así como los lo referido a “la sociedad empresa” y, no solo el individuo empresariable en tanto *homo economicus*, en los marcos de la justicia social y el bien común como modos de ordenar las prácticas de intervención del Estado.

Por lo tanto, el Estado codificado en torno de prácticas de gobierno cuyas lógicas se dirigen a la mediación, articulación, colaboración, ayuda, acompañamiento, generación de herramientas que activen e incentiven los nexos vinculares estratégicos y la contención de ciertos sectores generadores de capitales (económicos, humanos y sociales), tiene como objetivo el crecimiento y el progreso en torno de lo cual se promueve la “inclusión” al mercado y para el mercado, juego en el que los sujetos se autonomizan y autogestionan.

A su vez, estos entramados enunciativos y prácticas gubernamentales, entre la re-peronización y re-novación del Estado, se entrelazan con la proclamación de la “conducción política soberana” construida, singularmente, en torno de la figura de Martín Miguel de Güemes:

⁴¹⁵ Disertación del gobernador J. M. Urtubey en el I Congreso Internacional sobre Responsabilidad Social. Octubre 2013. Bs. As., el gobernador disertó sobre: “Políticas públicas como conductoras y ordenadoras del compromiso social”. Fuente, página web oficial de Juan Manuel Urtubey: <http://www.juanmanuelurtubey.com/en-el-congreso-internacional-sobre-responsabilidad-social-propusimos-pensar-en-un-estado-articulador.html>; consultada noviembre/diciembre, 2013. Entre los oradores principales de dicho congreso se encontraban: el premio Nobel de Economía 1998, el indio Amartya Sen, el presidente académico de la jornada, Doctor en Ciencias Económicas Bernardo Kliksberg y los expresidentes de Brasil y de España, Luiz Ignácio Lula Da Silva y Felipe González. Fuente: Gobernación de la provincia de Salta

⁴¹⁶ I Congreso Internacional sobre Responsabilidad Social. Octubre 2013. Bs. As

...un hombre de Estado progresista y visionario. La creación del Fuero Gaucho, el primer antecedente histórico en la lucha por las conquistas sociales que recién un siglo y medio después se verían plasmados en Ley bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón. Además, el General Martín Miguel de Güemes fue el primer Gobernador de Salta elegido directamente por su pueblo, en una suerte de ejercicio espontáneo de la democracia y por aclamación, episodio que lo constituye en un indiscutible hito de liderazgo político y social. Estudiando su vida, mi espíritu se impresionó ante este hombre que contestara al ofrecimiento de los realistas de riquezas y honores con palabras como "Yo, Martín Miguel de Güemes, rico y noble de nacimiento, he sacrificado mi fortuna al servicio de la Patria. Y no hay mayor título que el amor de sus soldados y la estima de sus conciudadanos..." (Urtubey, 2007).⁴¹⁷

Al igual que el gobernador J. C. Romero se recupera a Güemes como figura mítico/ejemplar, sin embargo no se trata en la Salta de la época analizada de llevar adelante la “epopeya güemista”, como en los 90’, sino de reafirmar la lucha “sacrificada” “servicial” y “conciudadana” que posibilite reafirmar la “ley y la democracia”. Otras son las condiciones históricas de posibilidad que hacen que la figura de Güemes sea recuperada de modo singular y diferente, puesto que ya no era una Argentina sumida en el caos y la crisis, ante todo económica, pero sí era una provincia, en la cual se consideraba necesario recuperar el sacrificio por el otro, la ciudadanía, la ley, en tono democrático participativo y moral cristiano.

Lejos de centrar el análisis en la “figura” del gobernador, lo que nos interesa señalar es cómo en la provincia de Salta se produce la construcción del sujeto “soberano” de gobierno, en el entrecruzamiento de lógicas de conducción mediante liderazgos carismáticos/caudillísticos, con otras dirigidas a promover el gobierno de sí mismo y de las poblaciones “para el mercado”; generando para esto marcos y mecanismos a través de los cuales sea posible construir sociedad empresas y sujetos económicos capaces de autogestionar su propia existencia, ya sea entre mínimos básicos, en el caso de los pobres, o entre excesos “bien” regulados en el caso de otros sectores poblacionales. Ante todo, porque estas referencias genealógicas nos permitirán comprender los modos a partir de los cuales se delinearon las estrategias de relación para con las organizaciones de trabajadores desocupados en la zona, lo cual se vincula con diversas y viejas memorias populares que reconstruimos a lo largo de los apartados III de los capítulos 1, 2 y 4.

4- Salta la Linda, la Petrolera, la Sojera y la Minera: desposesión y extractivismo (2007-2013)

⁴¹⁷ Página web oficial, presentación, en: http://www.juanmanuelurtubey.com/informacion/guemes_-mi-ejemplo.html; consultada julio/setiembre, 2013.

Por último, en torno del programa de gobierno trazado en la provincia de Salta, también observamos racionalidades políticas vinculadas al extractivismo exportador y/o economía abierta, con singularidades precisas entre 1995 y 2013. En tanto el juego de la libre competencia, el crecimiento y la competitividad no dejan de ser ejes centrales, en el trazo del proyecto de gobierno y sus codificaciones actuales. Lo antedicho es posible de avistar, tal ha sido el caso del programa nacional de gobierno instalado en 2003, en la profundización y el sostén de un modelo de “acumulación por desposesión y extractivismo” (Zibechi, 2011), así como, un modelo “extractivo-exportador” (Seoane, 2012), puesto en marcha, por el gobierno local, en un complejo y estratégico tejido relacional entre agentes privados, gobiernos nacionales, empresarios locales e internacionales, entre otros. Estas prácticas remiten a la concesión de hidrocarburos, la extracción minera, la agroindustria sojera y la expansión de la frontera agrícola (abuso y uso de las tierras), ante todo.

Nos detenemos en reconstruir el diagrama de explotación, extracción, concesión y explotación dispuesto en la provincia, en tanto nos permite entablar relaciones con los modos en que la UTD Mosconi, en su búsqueda por la “reparación histórica”, se alza como una voz y espacio de lucha por el cuidado y la defensa de los recursos naturales, no sólo petróleo o gas, también madera, tierra y agua, que suelen ser reciclados y protegidos por la organización, según corresponda. Mientras que también referimos, en el caso de la re-nacionalización de YPF, a ciertas prácticas y decisiones llevadas a cabo por las agrupaciones de trabajadores desocupados con la UTD como referente, en relación al esperado advenir del “trabajo y la reparación de y en la zona”⁴¹⁸. En tal sentido, recuperamos el dispositivo gubernamental “Fondo de Reparación Histórica (FHR)” (Ley N° 7691), construido en torno de las regalías petroleras locales.

4.1 El campo y la sojización: entre disputas, desertificaciones y destierros

⁴¹⁸ El Dpto. Gral. San Martín es el tercer productor de soja de Salta, provincia en la cual se han desmontado miles de hectáreas, generando la pérdida de la biodiversidad, destrucción de flora y fauna nativa, inundaciones, derrumbamientos, entre otras cuestiones. Según cálculos de organizaciones ambientalistas y, que funcionarios del gobierno salteño han homologado como reales frente a una audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se calcula que entre 1998 y 2007 se han deforestado alrededor de un millón de has. de bosques nativos en la provincia. Organizaciones de comunidades indígenas elevan esta cifra a 1.200.000has. Ver: Clarín, 19/02/2009 y Página 12, 19/02/2009.

La *Fundación Económica de Desarrollo y Capacitación Regional* (FEDECAR)⁴¹⁹ publica, en febrero del 2009, un informe analítico realizado en torno de las perspectivas económicas de Salta titulado: “*Quo vadis, Salta*” (referencia del latín ¿adónde vas Salta?). El informe señala que: el sector empresarial es identificado como el dinamizador de la economía y, por tanto, ese sector debe ser el objeto de las políticas económicas públicas. FEDECAR, señala que los índices de confianza económica entre el empresariado salteño empiezan a decrecer, y que se estima un alza del desempleo para los próximos meses (FEDECAR, 2009: 6-8); sin embargo, según el informe, Salta estaría en condiciones de sortear varios de los aspectos críticos señalados, el requisito central sería, el: “...*diseño de un plan económico para lo cual deben definirse, entre otras cosas: sectores económicos de interés provincial y medidas para fomentar el desarrollo*” (2009: 9-10), lo cual denota una percepción de “indefinición político-económica” en sentido programático, por parte del gobierno provincial.

Ahora bien, en muchos casos las prácticas de gobierno, se realizan de modo coyuntural con el objetivo estratégico de sostener el “orden logrado”, y poniendo en jaque la esperanza proyectada en las tramas discursivas y prácticas vinculadas con: “...*planear y ejecutar, crear cosas nuevas, producir hechos permanentes que venzan al tiempo*” (JMU, 1999: 76). Sin embargo, la programática de gobierno se codifica y ejerce en torno de objetivos y prácticas concretas. De hecho, el documento analizado señala que, entre las cuestiones más relevantes identificadas, no solo se trata del mantenimiento de órdenes, sino de las reconfiguraciones en torno de los mismos a partir de heterogéneas lógicas agazapadas en proyectos de gobierno que profundizan un marco de explotación y expropiación de recursos naturales promoviendo la acumulación de riqueza en algunas manos y profundizando la inequidad social y económica local.

Entre una de las “medidas gubernamentales” más discutidas y complejas en torno de lo señalado y en referencia al uso, distribución y limitaciones de la “tierra”, realizadas en el primer mandato del gobierno provincial, encontramos, en julio de 2009 la sanción de la Ley Provincial 7543⁴²⁰ de “Ordenamiento territorial”. La propuesta técnica original

⁴¹⁹ FEDECAR, creada en junio del 2007, se presenta como un órgano de la sociedad civil comprometido con la integración y el desarrollo de las regiones que integran el ZICOSUR, aportando para ello diferentes tipos de estudios que ayuden a optimizar los procesos económicos, tanto públicos como privados.

⁴²⁰ La Ley nacional N° 7543, 16 de Diciembre de 2008, promulgada por el Dto. N° 5770 del 18/12/08 – Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Boletín Oficial de Salta N° 18.035, lunes 26 de enero de 2009. A más de un año de vencido el plazo para que las provincias terminen el ordenamiento territorial de sus bosques establecido en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 11 de las 24 provincias – Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, Río Negro,

discutida en numerosos talleres, fue enriquecida con el aporte de los distintos sectores, entre ellos Vida Silvestre y otras organizaciones ambientales, cuyos aportes fueron parcialmente incorporados en el decreto 2785/09. Acorde a su Art. 2º: *“La presente Ley tiene por finalidad promover el aprovechamiento racional, la conservación, el manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos, armonizando el desarrollo económico social y ambiental de la provincia de Salta, en beneficio de las generaciones actuales y futuras”*. Dicha ley marco tendría en la prácticas dificultades varias que se ajustan al modelo de economía abierta extractivista exportadora, ante todo favoreciendo la siembra del monocultivo de soja y la minería en la zona.

Ahora bien, una de las cuestiones que aún no se resuelven, jurídicamente, y que se pone en juego como objeto de modificación en las futuras revisiones del Plan de Ordenamiento Territorial, es la amplia superficie verde (con posibilidad de ser desmontada) en el sudeste del departamento de Anta⁴²¹, que determinaría la completa desaparición de la porción salteña de "El Impenetrable". En dicho Departamento se realiza la mayor y más extendida plantación de soja de la provincia, por lo cual algunos empresarios referentes de la zona solicitan en el año 2008,⁴²² que el “Estado no intervenga” y amplíe la cantidad de hectáreas para desmonte y sembrado de soja, entre otros cultivos. Esto conlleva a la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial y más tarde (2010) a la renuncia del

Salta, San Luis y Tucumán - lo hicieron y sancionaron la ley provincial correspondiente. Ver: http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cuidar_nuestro_mundo_natural/ordenamiento_territorial/ley_bosques/ley_de_bosques__provincia_por_provincia/; consultada setiembre, 2013.

⁴²¹ El Departamento de Anta tiene 21.945 km² y limita al norte con Orán y Rivadavia, al oeste con el departamento Rivadavia y la provincia de Chaco, al sur con la provincia de Santiago del Estero, y al oeste con los departamentos de Metán y General Güemes y la provincia de Jujuy. Está compuesto por tres regiones: Selva Montana, Umbral al Chaco y Chaco semiárido. El Dpto. está conformado por las localidades: El Quebrachal, Las Lajitas, J. V. González; Apolinario Saravia y Gral. Pizarro. Se caracteriza por la actividad ganadera, forestal, agricultura a secado y cultivos bajo riego en ambas márgenes del río Pasaje o Juramento. En cuanto a la producción ganadera existen planteles de cría, recría e invernada, es la zona ganadera más importante dentro de la provincia de Salta. En producción agrícola se destacan: soja, maíz, trigo, cártamo, sorgo, garbanzo, algodón, y productos frutihortícolas, tal como sandía y melón. Información extraída de la Agencia de Extensión Rural del INTA Joaquín Víctor González (Salta), Portal de Salta: <http://www.portaldesalta.gov.ar/anta01.htm>; consultada setiembre, 2013.

⁴²² Hacemos referencia, especialmente, a Alfredo Olmedo, quien se reúne con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dr. En Biología Julio Nasser, perteneciente, junto con Buliubacich entre otros, al llamado “progresismo universitario” que se había “sumado” al proyecto frentista del 2007. La reunión con Olmedo tuvo trascendencia en tanto este último solicitaba una mayor cantidad de has., para la explotación sojera, mientras que el ministro denunciaba el pedido explícito del senador Olmedo de que el “Estado no intervenga” en cuestiones vinculadas con la economía. El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial fue elaborado por un grupo de profesionales y estudiantes expertos en la temática utilizando conceptos y criterios rigurosos de tipo ambiental y jurídico, dicho equipo realizó la ley recorriendo la provincia en búsqueda de la participación de diferentes organizaciones. El resultado, sin embargo, fue modificado hasta romper con el espíritu mismo de la ley, y así fue aprobado por la Cámara de Senadores y Diputados. Era el principio y el fin de Nasser, quien en junio del 2010 queda fuera de su cargo, el cual es ocupado por López Sastre (abogado y procurador, Máster en Turismo y Medio Ambiente. En marzo de 2005 fue designado Cónsul Honorario de Francia para las Provincias de Salta y Jujuy).

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Nasser, Dr. En Biología) y su sustitución por un ministro (Dr. Sastre) cuya formación y perfil profesional se vuelca hacia el turismo sustentable y las leyes. Dicho cambio de perfil, en torno de los saberes experticios que “gobernarían” el área de Medio Ambiente, en un escenario de complejas tensiones por la tierra, conlleva a divergentes efectos de gobierno, en tanto y ante todo se comenzaron a ceder permisos y oportunidades para que la concentración de las riquezas, a costas del medio ambiente y, del mercado interno sigan siendo reales, mientras se fortalece una lógica económico-política desigual y competitiva, abortando así la posibilidad de generar empleos genuinos y multiplicando la exclusión, imbricado en un discurso de “sustentabilidad y responsabilidad social”.

Estas prácticas de gobierno se entrelazan con los acontecimientos electorales del 2009 cuando, según lo ya analizado en el apartado I del presente capítulo, las elecciones legislativas ponen en jaque y en boga los múltiples tejidos de relaciones en la provincia y en la Nación, momento este en el que el FPV pierde su mayoría en el senado nacional y en la provincia las piezas de tablero político se reconfiguran en el marco de la lógica dispuesta por la racionalidad política heterogénea.

Definitivamente, el escenario se complejiza cuando en el 2009 se suma a la disputa el empresario ya enunciado, Alfredo Olmedo⁴²³, quien junto al PJ dirigido por J.C. Romero alcanzan un 40% de los votos en las elecciones legislativas⁴²⁴. Lo que interesa a fines del trabajo propuesto no es la figura de quienes “representan” tales o cuales vertientes

⁴²³ Olmedo, con el casi 18% de los votos accedió a una banca de Senador Nacional para la provincia; él pertenece a una familia sojera ubicada en el Dpto. de Anta en la provincia de Salta, considerando a dicho dpto. como “el puerto deseado”. Así, la presencia de Olmedo en el campo político da cuenta de cómo también la soja avanza y arrasa en Salta. Ahora bien, la lógica monocultivista no es novedad, por ej.: desde la campaña 1998/99 las toneladas de soja allí producidas no ha dejado de multiplicarse, pasando de 392.850 en 1999 a 1.291.020 en 2007 (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación), según la dirección de Estadísticas de la provincia, en el año 1999 el valor exportado de productos salteños tenía en las oleaginosas solo el 2,1% del total, porcentaje que llegó al 10,3% en 2007. Cifra solo supera por el rubro “combustibles y aceite minerales” (42,7%) y “hortalizas y legumbres” (13,7%). Rubro este último que, sin embargo, en 1999 representaba el 24,4%. Desde entonces las oleaginosas aumentaron su presencia, hacia la “reprimarización del economía provincial y el avance del monocultivo sojero”. Ver: Avalos, 2013...op...cit.

⁴²⁴ El 50% del electorado capitalino optó por fuerzas, que desde el 2007 se posicionan en contra del oficialismo: el romerismo que incluye a Olmedo, el Acuerdo Cívico y Social y el Partido Obrero. El oficialismo solo llegó al 35% del cual un 14% correspondió a fuerzas aliadas. Fuerzas que no solo no se suman a un frente con el PJ, sino que también se encuentran sumidas en profundas crisis (Frente para la Victoria con el 2,3% y el PRS con el 6,7%, o con posturas encontradas con el ejecutivo a nivel provincial (Libres del Sur 5,2%). En las elecciones nacionales del 2009, junio: el 20,81% de la capital, por fuera de los espacios hegemónicos de disputa, estuvo repartida de la siguiente manera: Partido Obrero (11,61%), Libres del Sur (5,4%), Frente para la Victoria (1,94%) Frente Grande (1%). En setiembre de ese mismo año a nivel provincial, el 21% obtenido era parte del 8,94% del Partido Obrero, el 5,15% de Libres del Sur, el 3% de Memoria y Movimiento (encabezada entonces por Tupac Puggioni) un 2,36% del Frente para la Victoria, un 0,8% del EPA-CTA y el 0,80% del MST. Esto muestra un fuerte avance de la izquierda, que se consolidará en las elecciones legislativas del 2013. Fuente: Junta electoral, provincia de Salta. Gobernación de la Provincia de Salta.

político-partidarias y su reubicación en el tejido electoral - gubernamental -, sino cómo, en ese juego de “re-acomodos, re-ajustes y re-configuraciones” las racionalidades políticas de perfil neoliberal dirigidos a, en este caso el monocultivo en el marco de los *comoditties* sojeros, cobran preponderancia y claridad en la realidad salteña y en el escenario político local.

Cabe recordar que en estas redes vinculares resuenan los avatares del llamado “conflicto del campo”, cuyos efectos a nivel local tuvieron efectos similares que a nivel nacional. En el sentido de que el sector del campo dedicado a la agroindustria exportadora, dueño de grandes cantidades de tierra dirigidas al monocultivo sojero, ante todo, comenzaron a, no solo elevar voces, poner trabas económicas y practicar la resistencia, si no que ocuparon “puestos y apuestas” político-electorales estratégicas, a los fines de una economía abierta y un Estado que “gobierne lo menos posible”, mientras permita los marcos jurídicos y legales para que el juego de la competitividad de los *comoditties* sea posible.

En tal sentido, las estrategias programáticas instaladas por los referentes del sector de “el campo” consistieron en, ante todo, una lucha por señalar la inconstitucionalidad de las retenciones y la necesidad de diálogo, tras lo cual se proclaman como “el Partido del Campo”, a partir del señalamiento, entre otras cuestiones de que el diálogo franco, sincero y periódico, domestica la violencia a la que “nos” arrojó el partido del Frente para la Victoria⁴²⁵.

El secreto de este tipo de desarrollo ha sido explicitado por el ya mencionado empresario sojero local, integrante del “partido del campo”: “*Tenemos que observar qué consume el mundo y ver si se puede producir en nuestra zona*” (A. Olmedo: en el Diario la Nación, 18/11/06), puesto que, se sostiene que: “...*el mercado mundial quiere soja y Anta se las puede dar*” (Idem) lo cual se traduce en: rentabilidad, tecnología de punta, deforestación monocultivo y mano de obra precaria, que se sostiene, “sobra”.

Así se enuncia que el Estado tiene que otorgar tierras para deforestación y cultivo, lo cual fue fácil de conseguir en el gobierno anterior⁴²⁶, mientras que la actual gestión

⁴²⁵ Tal es el caso de intervención en torno de la ya mencionada “*Ley de Ordenamiento Territorial*”, en virtud de la cual se podrían desmontar 1.592.366 hectáreas en la provincia, mientras que otras 5.393.018 podrían aprovecharse forestalmente”, es el tiro de gracia al espíritu de una ley que, originalmente, preveía que las hectáreas utilizables para ambos rubros no superaría una superficie mayor de 1.600.000 has. Ver: Ávalo, 2013: 164-168.

⁴²⁶ El programa de gobierno anterior (1995-2007) proveyó desorbitadamente de tierras a ciertos sectores, entre los casos paradigmáticos están: en el año 2005 el de los lotes 32 y 33 de Gral. Pizarro (Anta) desafectados en condición de “reserva natural provincial protegida” a la que se había accedido en 1995. La ley de desafección pedida por el poder ejecutivo basada en informes técnicos, que advertían cierta degradación del monte en zonas de esos lotes, en vez de iniciar actividades de recuperación y protección de las áreas se promulga la ley 7.272 que

gubernamental en la explícita tensión de limitar y a su vez posibilitar, que el juego del mercado sea posible, por un lado eleva la Ley que limita el uso abusivo de las tierras, mientras que, por otro, permite las modificaciones finas que amplían la cantidad de hectáreas cultivables, a la vez que promueve un discurso de sostenibilidad y responsabilidad social.

Entre algunas de las cuestiones específicas que entran en juego en este tejido de gobierno se encuentra el antecedente del proyecto de ECODESARROLLO y Salta Forestal S. A. Esta última se conforma en el año 1974 mediante decreto a través del cual la provincia y Fabricaciones Militares convenían formar la sociedad con el objetivo principal de generar “el aprovechamiento general del bosque” a fin de: “...generar una base de operaciones de incalculables efectos multiplicadores para la economía de la provincia y que hará un significativo aporte a un objetivo fundamental de la Reconstrucción y Liberación Nacional, cual es el del abastecimiento siderúrgico” (Boletín oficial, 27/12/75: 200)⁴²⁷. Sin consideraciones medioambientales algunas, dicho decreto instala los marcos gubernamentales neoliberales, que en los 90’ llevarían, mediante la Ley de Emergencia económica y de Reforma de Estado a la declaración en 1994 de la privatización de “Salta Forestal” (Decreto N° 754), a partir de lo cual se iba instalando la racionalidad política según la cual los “agentes privados empresariales” pasaban a ser un eje vertebral en el tejido de relaciones el poder y gobierno a nivel provincial.

En 1997 aparece la firma ECODESARROLLO S.A propiedad de la familia Olmedo, y es en 1998 cuando presenta un proyecto de licitación por Salta Forestal, que el gobierno provincial declara de interés público (Decreto N° 1140-98), en 1999 el gobierno le otorga la licitación (Resol. N° 188/99) para, finalmente, tomar la posesión del predio en el 2000.⁴²⁸ Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el

autorizaba al PEP a vender los lotes 32 y 33 subsidiados en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una, a un valor de \$500 la hectárea. Datos del INTA de entonces, señalan que Anta contaba con 234.420 hectáreas sembradas de soja, 50.000 has. más que el dpto. que le seguía en todo el noreste (Moreno en Sgto. del Estero) y con una ocupación promedio de un trabajador cada 500 has. El Anuario de Estadísticas de la provincia de Salta del 2004 indicaba también que el índice de NBI del ejemplo “nacional de desarrollo” era de 43,9 superior en 12,3 puntos al promedio de la provincia, con índices de desnutrición que llegaban al 13% y un analfabetismo del 9,4%. Por entonces, las áreas sembradas de soja, maíz, girasol y trigo habían crecido en los últimos diez años un 46,77% en el país, mientras que la población activa disminuía de 1.600.000 trabajadores a 900.000. Ver: O. Seggiaro, 2005, “Las venas abierta de Salta”. En: *Revista Política y Cultura*, Junio.

⁴²⁷ La primera aportaba 339.371 has de tierras; la segunda \$32.500.000 que garantizarían el registro legal de la empresa y las inversiones que permitieran cumplir sus objetivos. Para esto se necesitaba de la producción de carbón vegetal producido en los Altos Hornos Zapla.

⁴²⁸ Ecodesarrollo S.A. fue la empresa con la que Agropecuaria Olmedo ganó una licitación pública en 1998 para obtener 360 mil hectáreas de monte pertenecientes a Salta Forestal, ubicada en una zona privilegiada para la producción agropecuaria. Los terrenos estaban en proceso de liquidación por parte del Estado, en medio de la ola privatizadora que impulsó el programa de gobierno salteño de los 90’. A. Olmedo padre y Néstor Cervera

cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución gubernamental, el Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera S.A. a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales shoppings del país.⁴²⁹ En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada por año, lo que representa más de un millón trescientos mil pesos. Olmedo nunca aceptó sentarse a negociar, aduciendo que no se respetaba “la letra del contrato”⁴³⁰. En este sentido, entonces, se remarcan algunos límites y diferencias singulares entre la Salta de ayer y la de hoy, en torno del rol del Estado.

Ahora bien, estos intentos de poner ciertos límites “económicos y morales” al modelo agroexportador vigente, se tejen, a su vez en un tenso tejido de relaciones que hacen, como ya ha sido señalado, que en la provincia de Salta, así como en el resto el país se concrete un proceso voraz de “agriculturización” de los mundos rurales⁴³¹.

presentaron una “iniciativa privada” para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto se le otorgó al proyecto una ventaja del 7% y dejó la licitación sin competidores, el contrato se firmó el 16 de mayo de 2000. El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión no debía ser menor a 36 millones de dólares y, a partir de 2021, Ecodesarrollo S.A. debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las obligaciones que estableció el pliego y, que se incumplieron, estaba la de mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes, mejora de la infraestructura y forestación. Ver: Página 12, 14 de febrero del 2011.

⁴²⁹ En las 230 mil hectáreas que están bajo el control de los Olmedo ya se desmontaron cerca de 30 mil para plantar soja. La Legislatura aprobó en 2010 una ley que los intimó a pagar un 10% de su producción, algo insuficiente ya que Olmedo, a su vez, arrienda parte del territorio y cobra un 30% de lo cosechado a productores de menor escala.

⁴³⁰ En octubre del 2010, en el Centro Cívico del Grand Bourg se pone en marcha la empresa estatal Salta Forestal SA., encargada de administrar las tierras fiscales productivas de la provincia de Salta y regularizar la situación de los ocupantes. En mayo del 2011 el gobernador Urtubey, anunció que a través del decreto N° 2478 se procedía a la revocación del contrato con Salta Forestal por declararlo lesivo para los intereses de la provincia. Si bien, es la fiscalía quien determina la rescisión, también anunció el decreto N° 2476 mediante el cual se revocan los contratos con los inmuebles de los lotes fiscales de Tolloche. Ver: Diario el Intransigente: 21/120/2010 y 30/05/2011.

⁴³¹ La superficie implantada en la primera y segunda ocupación en el total del país y para el conjunto de los cultivos- cereales, oleaginosas, industriales, frutales, forrajeros, hortalizas, etc.-, creció en un 14,7% entre 1998 y 2002; frente a este promedio nacional de aumento de la superficie bajo cultivo, la ampliación de la frontera agropecuaria se evidencia fundamentalmente en la región noroeste argentino (NOA) cuya superficie implantada creció un 48% entre 1988/2002, frente al 5,2 del resto del país; este proceso de “agriculturización” del NOA es responsable de casi la mitad de la expansión nacional y se concentra en las provincias de Santiago del Estero y particularmente en Salta; entre ambas dan cuenta del 40% del aumento del área bajo cultivo del país” (Slutzky, 2005:2, en: Wahren, 2011: 790-80). Esto dio paso, como ya ha sido señalado a diferentes esquemas productivos ganaderos y agrícolas de gran escala, intensivos en capital y orientados hacia la exportación de “*commodities*” dando lugar a un voraz proceso de “expansión de la frontera agropecuaria” cuya producción paradigmática ha sido la soja transgénica RR (Teubal, Domínguez y Sabatino, 2005).

Por tanto, desde la sanción de la Ley de Bosques N° 26.331 (2007) a nivel nacional, ya se desmontaron 400.000 hectáreas de bosques nativos, de las cuales 120.000 eran zonas protegidas. El Poder Ejecutivo provincial autorizó desmontes donde la ley nacional no lo permite, la simple solicitud del titular de las tierras, y valiéndose de dos decretos (el N° 2211/10 y el N° 3136/11) que violan esta norma, se otorgaron, para el año 2014, desmontes en más de 125 mil hectáreas de bosques protegidos. La deforestación, además de generar un importante impacto ambiental, afecta seriamente a comunidades campesinas e indígenas que dependen del bosque para subsistir⁴³².

Un informe de la Auditoría General de la Nación destaca que en el caso de Salta “su situación va en contra de lo especificado en el art. 9 del Decreto N° 91/09 y de los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente N° 25.675 (2002). Advierte, que “algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta, donde se han realizado recategorizaciones que implican pasar de una categoría roja a amarilla o verde. Esta situación va en contra de lo especificado en el art. 9 del Decreto 91/09 y de los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad de la “Ley General del Ambiente”. En esta simonía resuenan las palabras del gobernador J. M Urtubey cuando haciendo referencia “lobbista” en torno del tabaco, otra área de producción importante en la provincia señala que: “*Gran parte de mi tiempo se lleva la pelea para que no se le pongan restricciones al proceso de desarrollo de las actividades productivas*” (El Tribuno, 7/02/2014, subrayados nuestros).

Por lo tanto observamos cómo, en un proceso de re-novación, re-acomodo y re-configuración de un perfil neoliberal y reprimarización de la economía, siempre atravesado por la moral cristiana, la singularidad del rol del Estado codificado a partir del 2007 se encuentra en el intento de devolverle al mismo una función “articuladora, nexa”, lo cual no es posible de ser leído como un intento por “intervenir políticamente en la economía”, sino por posibilitar los marcos - sociales, jurídicos, técnicos, morales y

⁴³² Cabe señalar que la ley de Bosques N° 26.331, normativa nacional reglamentada en el año 2007, no permite realizar recategorizaciones prediales de los OTBN, y su decreto reglamentario dicta que: “en caso de duda respecto de la afectación de un predio en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación”. También la reglamentación establece que la modificación de los ordenamientos debe realizarse cada 5 años. Sin embargo, es importante advertir que disminuir las categorías de conservación de los mismos, y por ende de la superficie boscosa, viola la normativa nacional y sus principales objetivos: “a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”. Ver: <http://www.saltaconbosques.org/quienes-somos.html>; consultada octubre, 2013.

filosóficos - para que la economía política, abierta y de mercado sea posible. En tal sentido, se realizan prácticas dirigidas a la re-conversión de ciertos procesos realizados a partir el principio de subsidiariedad del Estado instalado por las reformas de los gobiernos previos, mientras que se modera y gestiona, eficientemente, la extracción, explotación y el cuidado de ciertos sectores privados a la hora de programar las prácticas económicas, en referencia a la tierra, el territorio y el medio ambiente, según lo analizado.

4.2- Minería en Salta: ¿sustentable?...

Las prácticas políticas y de gobierno, en torno del modelo agroexportador extractivista se aparejan, no de un modo contradictorio, si no en un heterogéneo haz de relaciones “compensatorias, competitivas y singulares”, con la extracción minera⁴³³. Acorde al Documento oficial “Salta 2030” (2012), muy utilizado por la gobernación para referir a sus planes de gobierno, sobre todo a partir del 2011, se propone que la “minería sustentable” debiera implicar y contener, diferentes ordenamientos jurídicos, legales, económicos y sociales. El plan de gobierno prevé: 1.- Encarar una enérgica política de preservación del Medio Ambiente y Humano⁴³⁴. La provincia debe velar porque la actividad minera genere un desarrollo económico y social sustentable, mejorando la calidad de vida de la población local y asegurando simétricamente la preservación del medio ambiente. 2.- Se debe realizar una enfatización de las políticas de Seguridad Jurídica - 3.- Se abordará el Diseño y puesta en marcha de un programa de captación de inversiones mineras. Las inversiones mineras están regidas por la Ley Nacional 24.196, norma que reconoce una serie de ventajas tributarias a los inversores que se han inscripto en el Registro nacional creado por la ley. Establece para los inversores registrados la estabilidad fiscal por un plazo de 30 años y posibilidad de acceder a la exención del

⁴³³ Según datos proporcionados por la Secretaría de Minería de Salta, la producción de minerales aumentó considerablemente en los últimos años. En 2009 se produjeron 238.000 toneladas, en 2010 se incrementaron a 374.379 Ton., y en el primer semestre de 2011 la producción aumentaba un 57% sobre el mismo período del año anterior. Las inversiones proyectadas se incrementaron en un 50% entre 2.010 -\$ 100 Millones- y 2.011-\$ 150 Millones-. En cuanto a las exportaciones, hubo un incremento del 18,5% con un total de U\$ 71.071.572, que marca una tendencia fuertemente ascendente. Los destinos de estos productos benefician a 42 países y son bien diversificados: Minerales de cloruro de litio, ácido bórico, hidroboracita, bórax pentahidratado, bórax anhidro, octoborato de sodio, ulexita anhidra y perlita. Algunas empresas están explorando activamente yacimientos de oro, cobre, plata y litio (la Puna Salteña y Jujuy concentran el 22% de las reservas totales de litio del mundo). En trabajos exploratorios, durante 2010 se invirtieron \$ 100 Millones. Pero para los próximos 3 años se esperan inversiones por más de U\$ 500 Millones en los proyectos de Rincón, Quevar, Lindero y Diablillos, sobre todo por los minerales de litio, potasio y sulfato de sodio. Las tendencias al crecimiento de esta actividad se registran en forma invariablemente ascendente desde 2.001. Fuente: Dto. oficial Salta 2030, 2012: 157-58.

⁴³⁴ La ley Nacional N° 24.585 y la ley provincial N° 7070 establecen el plexo normativo de la preservación del Medio Ambiente que se aplica en el ámbito del territorio de Salta.

impuesto sobre los activos y sobre la importación de equipos y bienes de producción. La mencionada norma fija un tope máximo de las regalías que pueden percibir las provincias que será de hasta un 3% sobre el valor a “boca de mina” sobre el mineral extraído. 4.- Debe formularse un plan que contemple la realización de las obras de infraestructura que requiere la expansión de la actividad minera. 5.- Se priorizará la realización de los proyectos de Minería Social y generación de fuentes de trabajo alternativas (Capacitación continua y asesoramiento técnico) (Dto. Salta 2030, 2012: 157-163, resaltados nuestros)

Dichos marcos jurídico-normativos programados en torno de las prácticas de gobierno codificadas en el Estado, en relación con empresas privadas y el ejecutivo nacional señalan la relevancia otorgada a la “producción minera”, así como la sumisión a la ley de regalías y explotación sin beneficios directos a la economía real y la adjetivación de “sustentable” a una actividad, que de suyo explota y extrae elementos, minerales, recursos “no renovables”, por cierto, generando consecuencias nocivas para los territorios y poblados aledaños a las mismas.

En tal sentido, cabe detenerse en el ejemplo que muestra la producción de litio en la provincia, cuyos avances resultan vertiginosos. Dicha producción tiene profundos impactos sociales en la Puna Salteña. Según Avalos (2012: 148), Olocapato, una localidad ubicada a 3.900msnm y a 150km de San Antonio de los Cobres, *ADY Resources Limited*⁴³⁵ inauguró en el 2010 una planta de carbonato de litio con una producción de 1.200 toneladas anuales y una inversión de US\$ 88 millones. La novedad tuvo ciertos impactos: *“Doscientas personas que antes vivían del pastoreo, ahora trabajan para la minera extrayendo litio del Salar del Rincón, el sitio más avanzado, en Salta, de ese tipo de producción”* (Diario la Nación 13/06/2010).

Ahora bien, estos tramos de enunciación sugieren que los pobladores del lugar, sin dejar de estar preocupados por el conflicto ambiental, también identificaban la llegada de cierto “progreso”, discurso en el cual el gobierno local sostiene y proyecta sus políticas de intervención minera hasta nuestros días. Galli, jefe del Proyecto de extracción minera de litio de ADY, explicó que el dinero que la provincia recibirá en concepto de regalías mineras se va a incrementar, con lo cual es necesario redefinir la finalidad de las mismas y hasta sugirió que esos fondos deberán emplearse para que, en la zona de Olazapato y

⁴³⁵ La empresa realiza actividades en la zona desde el 2009, considerando que en la puna argentina hay más de 400.000 has de salares con potencialidad de litio. El proceso de producción es químico y económico, utilizando la luz solar para evaporar parte de la salmuera que albergan los piletones de lo que luego sale el mineral en forma de polvo.

Pocitos, se levanten “centros de desarrollo e investigación”, donde se trabaje con gente del lugar y vayan aprendiendo cómo evolucionar en las prácticas de tratamiento de minerales de la zona (El tribuno, 12/09/2011). Este discurso se traza en torno de la cuestión del desarrollo como evolución y crecimiento, estrictamente, económicos.

En tal sentido, en ningún momento se discute el 3% de regalías que reciben las provincias por concesión minera, como un monto insignificante ante las ganancias obtenidas, sino que el discurso que prima es que, por el asentamiento de una mayor explotación minera (“más minas”) ocurrirá un incremento en la actividad y con ello se obtendrá el “desarrollo”. Por tanto, no se discuten las leyes de coparticipaciones y concesiones de la tierra.

Por su parte, las prácticas económico-productivas y políticas a nivel provincial se articulan con las propuestas a nivel nacional, ya sea mediadas por intereses y/o estrategias o intereses estratégicos o estrategias interesadas en torno de lo que uno puede “dar y recibir” a nivel económico y/o proselitista partidario y electoral. En este último sentido, cabe mencionar que Salta no es una provincia de mayor relevancia para el programa de gobierno nacional, entonces en curso, más bien un “aparato” del estado provincial alineado, con diferencias diversas, en torno de un proyecto, que a nivel nacional nucleaba al peronismo en su vertiente progresista.⁴³⁶

Ahora bien, las alianzas vinculares no solo tienen un perfil “proselitista”, también uno económico, esto se ejemplifica cuando en julio del 2010 la presidenta de la nación invitaba al gobernador salteño a formar parte de la delegación, que la acompañaría en la Cuarta Cumbre del G20 (24 de junio) y al Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional (27 de junio) en Canadá, también irían los gobernadores de San Juan, Stgo. del Estero, La Rioja y Jujuy. En esa instancia, los gobernadores antedichos tuvieron una almuerzo de negocios con empresarios del sector minero canadiense, evento organizado por el fundador de *Barrick Gold*, Peter Munk, dicho acontecimiento no fue

⁴³⁶ A modo de ejemplo de lo antedicho, cabe mencionar el acto de junio del 2010, cuando N. Kirchner visita la ciudad de Salta (recordemos que en estos meses el programa nacional había realizado diferentes actos en el Chaco, con igual tono que el salteño y otro en Ferro, encabezado por CFK y dirigido, directamente, a la base militante), el mismo pasó desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos y disidentes, lo cual también fue leído por medio locales (Cuarto Poder, 12/06/2010) como un acto de justicia mediática ante la “tibiaza del mandatario salteño” quien acuerda y desacuerda con el proyecto nacional de modo ambulatorio. Ahora bien, el gobierno provincial se alinea políticamente con el nacional de un modo estratégico, ante todo porque el ejecutivo considera que Salta no es un frente controversial importante, sobre todo para las elecciones 2011, mientras que el gobernador local mantiene sus proyecciones presidenciales. De ahí que las vinculaciones se dan ante todo en el marco del llamado “aparato político” y no en torno del llamado “pueblo o la base militante”. El aparato salteño mantiene las formas, las enemistades y las alianzas estratégica (político-económicas), que permiten a ambas partes “acumular y administrar discursos y recursos, en torno del locus del PJ nacional bajo la presidencia de N. Kirchner.

casual, las provincias allí sentadas poseen ricos yacimientos mineros y sus legislaciones no prohíben diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto, a diferencia de Chubut, Rio Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis o Córdoba. En dicho almuerzo, tanto la presidencia, como las gobernaciones garantizan inversiones mineras en sus subsuelos (Avalos, 2012: 118-19)⁴³⁷. Finalmente, el gobernador salteño J, M Urtubey fue el seleccionado para dar la conferencia de prensa, entre cuyos enunciaciones señaló que: *“La Argentina está dispuesta sr uno de los principales jugadores, si no el número uno del mundo, en lo que refiere al desarrollo de la industria minera”* (Telam, 26/06/10).

Estos tramos enunciativos y prácticas de gobierno, no solo señalan el encuentro-desencuentro con el programa de gobierno nacional, también las lógicas y prácticas en rededor de la explotación minera se verán atravesados a lo largo de los últimos años, con el programa de “responsabilidad social empresaria” y el desafío de un Estado codificado como “nexo” entre las empresas privadas y los sectores públicos, entre lo privado y la sociedad civil, entre las inversiones y las ganancias. Un Estado provincial que, “gobernando lo menos posible”, se encarga de construir el marco para que el mercado, en el juego epistémico dado por el saber de la economía política sea, no solo un espacio transaccional posible, sino un campo de veridicción de y para las prácticas gubernamentales, en una paradójica apuesta a la “sustentabilidad” minera.

4.3.- Petróleo e Hidrocarburos: YPF, las inversiones, concesiones e invasiones.

La Provincia de Salta, tal cual ha sido descripto y analizado en el capítulo 1 y 2 cuenta con una industria de hidrocarburos significativa, pues se encuentra ubicada en la Cuenca Noroeste, la cual se abastece de gas y petróleo a diferentes provincias, así como también, por medio del gasoductos y oleoductos, a países limítrofes, principalmente Chile y Bolivia, resultando una de las cinco áreas de Argentina en las que se realiza exploración y producción activa de hidrocarburos. Como ya ha sido trabajado, el programa de gobierno instalado desde 1995 al 2003 apoyó abiertamente la privatización de YPF en la década de los 90’, tras lo cual diversas empresas internacionales, arribaron a la zona con intenciones

⁴³⁷ Cabe recordar que, el marco conceptual en el cual se basan el resto de las leyes que regulan la actividad minera a nivel nacional remiten la ley de Inversiones Mineras N° 24.196 emitida en 1993, la cual permite a las mineras gozar de estabilidad fiscal durante 30 años, estar exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales, impuestos al cheque y al gasoil. Permite también deducir en ganancias todas sus inversiones e importar libremente insumos y bienes de capital, Luego Giogia, en ese momento gobernador de San Juan y presente en la reunión, impulsó la ley 25.161/99 a fin de deducir del 3% de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina, por la cual las provincias vieron disminuidas las regalías.

de explorar y explotar, muchas de ellas sin demasiado éxito y con graves efectos de desempleo y pobreza estructural, aún vigentes.

Por su parte, para el 31 de diciembre de 2009, la Cuenca Noroeste representaba aproximadamente un 1,83% de las reservas de petróleo comprobadas y aproximadamente un 16% de las reservas de gas comprobadas de Argentina (SEN, Salta 2030, 2012: 77-78). Se registran caídas tanto en la producción de petróleo como de gas natural en la Provincia desde 2006: 1. La producción de petróleo se redujo un 19%, de aproximadamente 4.601.116 barriles en 2006 a aproximadamente 3.716.152 en 2010; y 2. La producción de gas natural se redujo un 24%, de aproximadamente 6.961 millones de m³ en 2006 a aproximadamente 5.315 millones de m³ en 2010. Por su parte, la producción de gas de Salta pasó de 7.011 millones de m³ en 2006 a 5.363 millones de m³ en el 2010, lo que representó una caída del 23%. Solo el año 2010 cayó un 14% respecto de 2009. A nivel nacional, la producción también cayó pero un 9%. En el año 2006, Salta producía el 13,6% del gas del país, en el 2010 produjo el 11,4%, es decir que también cayó la participación de Salta en la producción del país (Dcto. Salta 2030, 2012: 77-80).

Además siguiendo los datos de la Secretaría de Energía de la Nación⁴³⁸, la participación de la provincia de Salta en la extracción petrolífera fue decayendo con respecto a otras provincias, esto se avista por ej.: en la participación de la provincia de Salta en las regalías petroleras que ha sufrido una baja sostenida en los últimos diez años, pasando del 2,25% del total de regalías del país en 1999 a apenas una participación del 1% del total en el año 2007. También en torno de las regalías gasíferas se observa una baja en la participación, aunque si bien hubo una suba en términos absolutos, en términos relativos con otras provincias gasíferas decayó, ya que en el año 1999 tenía una participación del 15,70% alcanzando el pico de casi el 19% para bajar en 2003 y llegar en el 2007 hasta el 14,78% de participación total de las regalías (Wahren, 2011: 79).

La promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la Ley Corta N° 26.197 (2006)⁴³⁹, ambas bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cerraron el proceso de transferencia del dominio de los hidrocarburos y dieron paso a una nueva ampliación de fronteras. No sólo

⁴³⁸ Ver: www.energia3.mecon.gov.ar, consultada, 20 de agosto del 2013.

⁴³⁹ La ley “corta” de hidrocarburos transfiere a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito. El para ese entonces el titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, César Gioja, remarcó que: “*esta ley contiene un alto voltaje político, ya que resuelve con madurez democrática un viejo conflicto entre la Nación y las provincias*” (Diario Página 12, 23/11/2006). Un mes antes el Congreso sancionaba la denominada “ley larga”, que creaba un régimen en el que se otorgaron las nuevas áreas de exploración y explotación.

las 10 provincias petroleras⁴⁴⁰ iniciaron una agresiva campaña para atraer al capital privado - otorgando exenciones impositivas - hacia nuevas áreas de exploración y explotación, sino también las trece restantes, que sancionaron el marco jurídico para el desarrollo de esta actividad otorgaron bloques en concesión. Esto se vio reflejado particularmente a partir del Programa de Desarrollo Exploratorio 2010/2014 de YPF, lanzado en 2009. Ese año 20 provincias, sobre 23 en que se divide Argentina, cerraron sus cuentas en rojo, mientras la explotación de hidrocarburos se presentaba como una salida en el mediano plazo.

En 2006 y 2007 el gobierno salteño realizó rondas licitatorias y adjudicó 16 áreas, mientras que otras 11 fueron cedidas de manera directa a través de la empresa REMSA, controlada por la provincia⁴⁴¹.

Hasta el año 2013 operaban en el yacimiento noroeste: *Pan American Energy* (PAE), operadora del área de Acambuco; *Pluspetrol*⁴⁴², operadora del área de Ramos; *Tecpetrol*, concesionaria del área de Aguaragüe; *Presidente Energy*, operadora del área de Puesto Guardián Rivadavia Banda Sur; J.H.P. (China) Pizarro; *High Luck* (China) Morillo-Tartagal y Mosconi; *Madalena Energy* (Canadá) Santa Victoria; *Petrobras Argentina Chirete*, empresas que tienen concesiones y licitaciones hasta finales del 2015 o más.

Ahora bien, como señalamos en el apartado anterior, en el año 2012 se dio lugar a la renacionalización de YPF, argumentando que así se orientarían los objetivos de la petrolera hacia los intereses del país. Esto se concretó a través de la compra del 14,9% de las acciones de Repsol -porcentaje que más tarde ascendió al 25,46%- por el Grupo Petersen, controlado por la familia argentina Eskenazi, proceso del cual Salta quedó

⁴⁴⁰ Las 10 provincias 'productoras' son Salta, Jujuy, Formosa, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

⁴⁴¹ Esto originó conflictos en los departamentos Rivadavia y Gral. San Martín, ya que dichas concesiones y obrajes afectan a las comunidades wichí nucleadas en la Organización Zonal Tch'ot Lhamejenpe y la Federación Wichí de la Cuenca del Bermejo. La Federación Wichí presentó ese mismo año (2010) un recurso de amparo y una medida cautelar para frenar fueron rechazados por la Justicia salteña. También, produjo malestar en las comunidades wichí ubicadas a la vera de la ruta nacional 86, zona que sufrió grandes desmontes para la ampliación de la frontera agroindustrial. Este bloque también fue otorgado sin participación indígena y las tensiones generadas por el ingreso de la petrolera se dirimieron en acuerdos entre representantes de las comunidades y de la operadora, propiciados por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que no se ajustaron a la legislación indígena.

⁴⁴² La empresa Pluspetrol, que llega a Salta, como contratista de YPF en 1977 bajo el nombre de la Ingeniería Tauro, ganó en 1990 las concesiones de las aéreas Ramos y Palmar Largo, a partir de allí se expandió a nivel continental y mundial (África) como una poderosa multinacional petrolera. Dicha empresa, anunció en el 2014 su parcial retiro de los yacimientos del noroeste salteño, vendiendo a la empresa China *High Luck* el área operativa de Tartagal en el borde fronterizo de Formosa con el departamento salteño de Rivadavia. De hecho, Pluspetrol, mantiene el área de Ramos con instalaciones de equipos compresores para elevar la producción de otro de los pozos que opera la empresa en Coronel Cornejo, cuya fecha de conexión estimada era para marzo del 2015. Mientras tanto, la empresa apuesta realizar inversiones, también, en Vaca Muerta, Neuquén.

exceptuado, pues el yacimiento noreste no resultó expropiado, sino “con-cedido” (Scandizzo. H., 2014)⁴⁴³. Puesto que, en la provincia de Salta, la renacionalización de YPF, solo repercutió en tanto YPF sería uno más de los entes/empresas capaces de realizar inversiones a nivel local. Puesto que, no se han frenado las concesiones, ni expropiado territorios de y/o para exploración y explotación, los cuales siguen en manos de las empresas privadas asentadas, desde hace años en la zona, así como de las nuevas empresas que parecen querer asentarse en la misma.

Entre tanto, cabe señalar que Salta, en los últimos años, perdió terreno como resultado de la declinación natural de los reservorios que llevan años en operación y también de la ausencia de una política, ante todo de los precios del gas en boca de pozo que incentivaría la llegada de nuevas inversiones en la región. Frente a ese escenario, la gobernación puso en marcha un ambicioso plan para revertir la tendencia declinante de la producción. En ese sentido, la provincia está relevando datos geológicos de más de 15 áreas de exploración, con vistas a lanzar, durante los primeros meses de 2015, una licitación de los bloques hidrocarburíferos.

En palabras del Ministro de Ambiente y Producción Sustentable:

La provincia de Salta ha venido desarrollando la actividad hidrocarburífera durante los últimos 40 años. En su transcurso, hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos relacionados con la geología de nuestros terrenos y los aspectos relevantes de la explotación (...). Hemos llegado ahora a un punto de inflexión: se nos manifiesta la madurez de nuestra cuenca del Noroeste y la consecuente declinación en la producción de hidrocarburos, lo que nos obliga a detenernos y vislumbrar el horizonte con una mirada estratégica, con el objetivo de atraer nuevas inversiones orientadas tanto a lo convencional como a lo no convencional. La nueva Ley de Hidrocarburos⁴⁴⁴ (...) representa un marco jurídico más que adecuado para el logro del escenario deseado; esto es, el autoabastecimiento energético. (...) En este contexto, la provincia de Salta ha estado trabajando, en conjunto con las empresas operadoras, con el objeto de propiciar un

⁴⁴³ Scandizzo.H., 2014, YPF, nuevos desiertos y resistencias. De la privatización a los no convencionales”. En: Agencia de Noticias Redacción (ANReD) <http://www.anred.org/spip.php?article6134>. Jueves 17 de abril del 2014; consultada, mayo, 2014.

⁴⁴⁴ La ley de Hidrocarburos aprobada en octubre del 2014, reforma una norma de 1967 que no contemplaba la explotación de los recursos no convencionales, promoviendo: un nuevo sistema único de licitación y adjudicación de las áreas de explotación, incorporando el criterio de volumen de inversión en la propuesta de cada empresa; nuevos plazos para las concesiones, elevándolos a 30 y 35 años en el caso de exploración y producción off-shore y no-convencional respectivamente. Esto es fundamental para promover la explotación de yacimientos que no fueron contemplados cuando se redactó la actual Ley; un modelo único de renta petrolera para las provincias estimado en un 12% a título de regalías. Además, se pondrán límites a lo que las provincias pueden cobrar como Ingresos Brutos, estableciendo este máximo en un 3%; En cuanto al tema ambiental, se establecerán presupuestos mínimos que las explotaciones deberán cumplir en todas las provincias, incluyendo las operaciones de fracturación hidráulica o *fracking*. La propuesta incluye sumar a la Ley el espíritu del Decreto 929/13, que promovía y favorecía inversiones en el sector energético por más de 1000 millones de dólares. Este régimen de promoción de inversiones fue el que permitió la participación de Chevron en Vaca Muerta. La idea es que se lo institucionalice con el peso de la ley, bajando el monto mínimo de las inversiones a 250 millones de dólares y con un plazo máximo de 3 años. También el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural se incorporará para darle status legal. Ver: Gallegos, 2012...op...cit.; Palermo, 2015...op...cit...

escenario más promisorio en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Como resultado de estos trabajos, Salta se prepara para licitar la exploración de 17 áreas libres. Asimismo, YPF ha presentado una iniciativa privada para la exploración de una de ellas, el Área Desecho Chico. En definitiva, avizoramos la llegada de un tiempo de oportunidades, para posicionar fuertemente la provincia de Salta en el concierto energético nacional y regional. (Baltasar Saravia, 2014, resaltados nuestros).⁴⁴⁵

Dichas alocuciones, promueven el “autoabastecimiento energético”, según los entramados discursivos y programático emitidos desde el gobierno nacional, mientras se promulga para ello, no la “renacionalización” de los pozos antes del yacimiento noroeste, antes de YPF nacional, sino el “incentivo de la inversión privada”, entre las cuales YPF juega como una empresa más que pretende invertir en un área específica. En este sentido, entonces, se entrecruzan (no se contradicen) diferentes racionalidades políticas, de preponderante perfil neodesarrollista dirigido a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que trazan el diagrama de gobierno en torno a la explotación hidrocarburífera, con énfasis en el gas, para lo cual es fundamental la construcción de un armamento tecnocrático y tecnicista de hacer y saberes que no dejan de liberar las economías competitivamente, sosteniendo las desigualdades y las pobreza, aunque en el trazo de discursos que promueven la igualdad de oportunidades, lo cual no implica igualdad de logros, en un cristalino gobierno económico de las poblaciones y de los territorios.

Siguiendo a Palermo (2015), la nacionalización de YPF promete cambios y un proceso novedoso respecto de la industria del petróleo. No obstante, es interesante señalar que los procesos sociolaborales no están en la agenda de discusión pública:

...en ciertos espacios en el que incluyen a los trabajadores del oro negro se han abierto debates que marcan la necesidad de remendar los retrocesos en materia de relaciones laborales que se efectivizaron con la privatización de YPF. A pesar de ello, en materia de relaciones sociolaborales encontramos en este proceso, aún prematuro, continuidades respecto del largo período privado de la empresa. También cabe agregar que la nacionalización volvió a darle dinamismo a organizaciones de ex trabajadores de YPF que fueron despedidos durante los años '90 y que hoy reclaman la incorporación de sus hijos/s a la empresa (Palermo, 2015: 57).

Tal fue el caso de las voces que se levantaron, resistieron y aún persisten en la “esperanza” de retorno de YPF como las de los trabajadores desocupados (ex/ypefianos, en su mayoría) agrupados en diferentes espacios organizativos, como analizamos en diferentes apartados del presente trabajo. Entre estos se encuentra la UTD de Mosconi, que ha presentado una carta-notificación a la presidencia nacional proponiendo la

⁴⁴⁵ En: *Revista Petroquímica, Petróleo, Gas, Química & Energía*, 19 diciembre, 2014, en: <http://revistapetroquimica.com/salta-relanza-su-politica-hidrocarburifera-con-una-licitacion-de-areas-petroleras/>; consultada diciembre, 2014.

elaboración, en conjunto, de un plan estratégico que permita reactivar la explotación gasífera y petrolífera en la zona a partir de los saberes y capacidades instaladas entre los exypefianos y los jóvenes locales, ante todo. Evitando, de este modo, que los pozos se pierdan, se sequen por abandono, cierren y generen ausencia de trabajo, en uno de los suelos más ricos del país⁴⁴⁶, pues los pozos están vivos, tal como vemos en la foto. En tanto las mismas nos muestran a un ex/trabajador ypefiano (técnico industrial) y ahora referente indígena, quien en el patio de su casa (un rancho de madera en el cual viven él, su esposa y sus diez hijos), hay una boca de pozo de petróleo. Con sus saberes como ex trabajadores de YPF, construyó un sistema que le permite sacar el petróleo para por ejemplo: utilizar su cocina a leña y calefón. Dicha realidad nos muestra, entre otras cuestiones, cómo la pobreza extrema se configura en la extrema riqueza del suelo y el territorio.



Boca de pozo de petróleo, en el patio de una casa - de un exypefiano- en Campamento Vespucio. Foto: Cora Paulizzi, julio 2014

⁴⁴⁶ Información obtenida mediante entrevistas, observación participante, así como de documentos con integrantes de la UTD Mosconi, setiembre, 2013.

Retomando, lo referido a las propuestas realizadas por referentes de la UTD, las mismas no obtuvieron repuesta alguna por parte de los gobiernos de la época, los cuales, por un lado ponen el acento en las explotaciones del sur, y por otro en las empresas privadas y sus míseras regalías pretendiendo “compensar”, a nivel provincial, mediante el Fondo de reparación histórica, los desmanes y vacíos que hacen de los departamentos petroleros provincial los más pobres del país. Por ello, siguiendo la propuesta de Palermo (2015) repensar las problemáticas sociolaborales, en tanto materia pendiente aún, es un debate imprescindible.

Para finalizar, cabe cuestionar las técnicas de gobierno en boga en la provincia de Salta, tales como la denominada “Responsabilidad Social Empresaria”, que analizaremos en profundidad en el apartado II del capítulo 4, las cuales, según Palermo (2010) no han aportado soluciones a las problemáticas sociolaborales persistentes en los enclaves petroleros. Por ello, se torna conveniente diseñar y aplicar prácticas políticas de intervención social apropiadas a cada una de las localidades donde se encuentra la empresa y donde se proyecta, tal es el caso de yacimiento Norte, como inversora. Por lo tanto:

...comprender estos fenómenos y afrontarlos amerita un abordaje más amplio y profundo que, no solo recupere políticas virtuosas de intervención durante la etapa estatal de YPF, sino que se consoliden muchas otras estrategias, que deberán ser materia de un proceso de creación novedosa a partir de este nuevo contexto. (Palermo, 2010: 59).

5-Entre Reparaciones y Resistencias: Fondo de Reparación Histórica, en el Dpto. Gral. San Martín

En correlación con lo antes trabajado en torno de una analítica de los tramos vinculares entre gobernados y gobernantes, a continuación la intención es describir y analizar la propuesta y ejecución del llamado Fondo de Reparación Histórica (FHR), en Salta. En tanto, partimos del supuesto de que a través de dicho mecanismo de gobierno y de sus efectos, se ponen en jaque diferentes lógicas y prácticas a través de las cuales las relaciones entre gobernados y gobernantes pueden ser observadas y analizadas, en la tensa y múltiple red vincular que los atraviesa, entre gobierno y resistencia.

En la Provincia de Salta, a través de la Ley N° 7691⁴⁴⁷ sancionada el 17 de noviembre del 2011 y promulgada el 24 de noviembre del mismo año, fue autorizada la emisión de

⁴⁴⁷ Boletín oficial N° 18.722, 30 de noviembre del 2011. En el mes de marzo de 2012 se materializó la colocación de Títulos en el mercado internacional por U\$S 185.000.000 a una tasa del 9,5% anual a 10 años. Salta tiene una transacción estructurada y garantizada por las regalías de gas y petróleo, que ha “negociado crediticiamente” por 10 años para la obtención del monto antedicho. Las aéreas predeterminadas que garantizan el 80% de regalías

títulos de deuda por un monto de hasta USD 220.0000.000 garantizados con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas.

Acorde a un Informe Oficial⁴⁴⁸ emitido en mayo del 2013, ese dinero integraría el denominado *Fondo de Reparación Histórica* (FRH) para la realización de obras en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Obras necesarias y que por derecho les correspondían a estos departamentos:

Al asumir su primer mandato, este gobierno heredó un stock de deuda que representaba el 73% del presupuesto. Hoy, incluso contabilizando lo que representa el Fondo, apenas alcanza el 27%. (...). Todas las obras que ejecuta este gobierno desde el Fondo se hacen por licitación. Tal vez los firmantes se hayan quedado en el pasado y creen que las cosas se hacen como antes del 10/12/07. Estoy a disposición de la ciudadanía, del periodismo y de cada uno de los organismos de control para contestar, aclarar y evitar falsedades sobre una obra magnífica y necesaria, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan” (Rodolfo Urtubey, 2012)⁴⁴⁹.

Cabe señalar que en la zona también existen los aportes realizados por el Fondo Federal Solidario, también llamado “Fondo Sojero”⁴⁵⁰.

Los fondos destinados por el FRH serían utilizados para obras consensuadas con autoridades municipales y representantes de organizaciones intermedias. Para coordinar la actuación de los organismos que participan en la ejecución de las obras, supervisar su marcha y ejercer un enlace con la Comisión Legislativa Bicameral de seguimiento, se

comprometidas incluye Aguarague (considerando Sierra de Aguarague, Rio Pescado, Campo Duran-Medrejones y la Bolsa); Ñicatimbay, Palmar Largo, Ramoa, Acambuco, Puesto Guardián, Tartagal Oeste, Agua Blanca, El Vinalar, Cuchuma-Lumbrera, San Antoni Sur, Valle Morado e Ipaguazú. Estas transacciones están sujetas al índice inflacionario anual en creciente; estos fondos a cambio de regalías se encuentran en un listado de Revisión Especial con implicancias negativas de calificaciones, en tanto: “Las notas de autorización garantizada por US\$ 185 millones de Salta no han empezado a realizar pagos de principal y solamente están cubriendo intereses. El primer pago de principal vence en diciembre del 2013” (Fuente: www.iprofesional.com e Infobae.com).

⁴⁴⁸Informe al 02/05/2013 - Gobierno de la Provincia de Salta, en: www.salta.gov.ar/descargas/archivos/informe-FRH-al-02-05-2013.pdf; consultada diciembre, 2013.

⁴⁴⁹ Rodolfo Urtubey era para ese entonces Director Ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica y los tramos enunciativos fueron recuperado de una Solicitada oficial: “Sospechosas Falsedades” emitidas desde la Gobernación de la provincia de Salta. También ver: <http://www.elintransigente.com/salta/2012/9/27luego-couestionamientos-rodolfo-urtubey-solicitada-148494.html>; consultada, setiembre, 2013.

⁴⁵⁰ Este Fondo fue decretado en marzo del 2009 por la presidenta CFK (decreto 206/2009). Según el art. 2° inciso “a” de la constitución, y la ley N° 23.548 de coparticipación Federal de Recursos Fiscales se adopta la medida de crear FONDO FEDERAL SOLIDARIO que tiene por destino: “financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales.(...) Los estados provinciales adherentes deben repartir, al igual que la nación, de manera automática y sin costos hacia sus municipios de conformidad a los porcentajes que la coparticipación federal de impuestos les corresponda, que en ningún caso podrá ser inferior al 30% del total de los fondos que por adhesión reciba la provincia. En Salta, el gobernador Urtubey, en abril del 2009, firmó convenios con intendentes de 13 municipios para hacer efectivo un primer adelanto de los fondos provenientes de las retenciones a la exportación de soja, con el objetivo de que se inicien en forma inmediata trabajos de infraestructura en toda la provincia. De los 120 millones de pesos que recibiría en este concepto, la provincia decidió girar el 50% para los municipios con el fin de realizar las obras que decida cada localidad. La Provincia depositó a ese grupo de 13 comunas el 30 % de los 60 millones que serían destinados a las obras que se harán con ejecución municipal. Gobernación de la provincia de Salta 21/04/2009, <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/el-gobierno-giro-fondos-de-las-retenciones-a-la-soja-a-otros-13-municipios-731>; consultada, setiembre, 2013.

creó la Unidad Coordinadora del Fondo de Reparación Histórica, bajo la dirección ejecutiva del Ingeniero Juan Carlos Galarza.

Ahora bien, al FRH le quedaba hasta 2015 para cumplir su ambiciosa promesa. Sin embargo, para 2013 había completado el 17% de los proyectos; 46 no habían sido licitados; otros estaban atrasados aunque el Gobierno no lo admitía y millones de pesos se perdieron por la inflación y las decisiones financieras de los funcionarios.

Hasta finales del 2013, de las obras prometidas solo se hicieron 33. Entre ellas hay nueve que en realidad nunca se terminaron. Los montos por estos proyectos finalizados totalizan \$135.781.960. La suma, en la que se incluyen los casi \$84 millones que costó la línea eléctrica construida para solucionar deficiencias prestacionales de la empresa Transnoa, representa el 16% del presupuesto global del Fondo de Reparación Histórica. Del resto de las obras, según la información oficial, hay 15 que estaban en proceso de llamado a licitación; 17 tenían convenios firmados, 2 estaban en etapa de adjudicación; 9 fueron adjudicadas; 16 debían iniciarse y había 49 en ejecución. Pero, otras 46 obras todavía no tenían pliegos, algunas de las cuales resultan emblemáticas, como las terminales de ómnibus para Mosconi, Rivadavia Banda Sur y Morillo (El Tribuno, 17/10/2013).

De los 33 proyectos que figuran como terminados en el sitio oficial de la gobernación salteña hay nueve que fueron inaugurados a medio construir. Para ser presentados como finalizados, el Gobierno los fragmentó en etapas, fases o convenios. El ejemplo más patente es el de los trabajos de “infraestructura y nuevas urbanizaciones” para cinco barrios de la ciudad de Orán. La ley del FRH destinó 15 millones para eso, sin embargo, solo se completó la primera etapa en el barrio Taranto por menos de 2 millones. Pero la obra se dio por concluida y figura como inaugurada en la página oficial del Fondo. Con estos datos, el retraso se hace más evidente (El Tribuno, 17 de octubre del 2013). Juan Carlos Galarza, director ejecutivo del FRH, no reconoció la tardanza: *“Para que exista un retraso debe existir un plazo. La ley 7691 establece puntualmente en el artículo 3 que el Ejecutivo puede determinar la oportunidad de la ejecución de cada una de las obras”* (Idem, El Tribuno). Sin embargo, la ley también en su artículo primero, indica que el plan “será ejecutado durante el período 2012-2015”.

Cabe remarcar que la recesión económica y la caída en la recaudación se empezaron a sentir en Salta. Ya en mayo (2012) el Ministro de Economía, Carlos Parodi, admitió que las cuentas empezaban a mostrar luces amarillas. Esta situación llevó a la gobernación a realizar un giro de timón y “reprogramar obras” - según las palabras del propio Parodi -

para cuidar los fondos de manera de garantizar los sueldos y aguinaldos a mitad de año. En las principales ciudades de la provincia, los intendentes aseguraron que la obra pública no sufrirá parates ni reprogramaciones, aunque admiten que la situación económica es difícil (El Tribuno 9/07/2014). De hecho, varios intendentes hicieron uso del Fondo Solidario “de la Soja”⁴⁵¹ y de otros ingresos previstos para obras para poder abonar el medio aguinaldo a los trabajadores municipales.⁴⁵²

Entre los retrasos, las adjudicaciones selectivas y los discursos entrecruzados, ante todo las modalidades y mecanismos que permitirían la ejecución del FRH han sido muy cuestionados por las diferentes organizaciones locales, sobre todo de trabajadores desocupados, en la zona del Dpto. Gral. San Martín. Se cuestiona, la lentitud y ausencia de fondos para la realización de las obras prometidas, así como la falta de mano de obra intensiva para las mismas y/o los despidos a causa del freno de las obras; ya que para la ejecución de las mismas se contratan “empresas privadas y/o cercanas” a la gobernación, cuando la zona cuenta con mano de obra calificada y organizaciones antaños de trabajadores que podrían realizar las tareas a nivel local.

Varias fueron las voces que se levantaron y pusieron en juego en el reclamo y pedido de la correcta aplicación del FRH en la zona del Dpto. Gral. San Martín, así como diferenciados fueron los modos de tratar la cuestión ya sea por parte de los medios de comunicación, la gobernación, la gendarmería, la infantería y las policías (locales, provinciales, nacionales), las empresas privadas, entre otros. Este haz de entramados discursivos y extradiscursivos desplegado en torno de la candente cuestión del FRH permite una proximidad analítica a la relación entre gobernados y gobernantes en su heterogéneo vaivén de puntos de vista y realidades.

⁴⁵¹ La distribución del monto otorgado por dicho “Fondo Sojero”, también ha tenido vaivenes vinculados a las prácticas productivas y exportadoras realizadas por los dueños de los campos y la producción a gran escala. En el 2013 se redujeron los niveles de exportación, ya que se guardaron en los silos toneladas de soja que no fueron exportadas, por temor al proceso de caída del cepo cambiario y las crisis inflacionarias. Por su parte en el año 2014 los Derechos de Exportación registraron, tras cuatro meses de caída, una variación positiva de 34.7%. Este crecimiento de la recaudación repercutió inmediatamente en las provincias que recibieron fondos extras en un 48% en total, lo que seguramente deberá repercutir en los acuerdos salariales que se debatirán en los próximos días. La Coparticipación Federal a las provincias, alcanzó en enero \$22.744 millones, registrando una suba del 44%. Durante el año hubo una notable variación de los fondos otorgados por la Nación a la Provincia. Por ejemplo: en marzo del 2013, los recursos crecieron hasta un 33%, cayendo cerca de fin de año a menos del 20% y al mes siguiente, en enero, llegaron a un tope del 44%. El Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) acumuló \$501 millones en el mismo período. El crecimiento fue mucho más fuerte y llegó a un 151% al cabo de un año. Ver: gobernación de Salta, Fondo Solidario y <http://www/jujuyalmomento.com/>- Crecieron notablemente los aportes de Coparticipación y fondo de la soja 10.02.2014

⁴⁵² Ver: Diario “Que pasa Salta”: <http://www.quepasasalta.com.ar/29572/Intendentes-usan-el-Fondo-de-la-Soja-para-aguinaldos.htm>, consultada setiembre, 2013.

En este sentido, entre los discursos de *reparación*, resuena eso de que algo hay que “arreglar algo, que se ha roto” en estos lugares en los cuales el FRH interviene. Esto se vincula, inmediatamente, con las historias locales de pobreza y desocupación, sobre todo, luego de la privatización de YPF, tras lo cual se hace especial hincapié en cómo el FRH utiliza dinero proveniente de regalías hidrocarburíferas. Mientras que, estos discursos se entrecruzan con otros en torno de la resistencia a los modos dispuestos para realizar estas reparaciones. En tanto se ejecutan prácticas de represión (directa e indirecta) atravesadas de olvidos y pretensiones de desmovilización de las organizaciones en pie de lucha, sobre todo, utilizando el instrumento retórico que pretende “quitarles peso comunal, peso político y peso gubernamental en la zona”. De este modo, las relaciones heterogéneas y tensas entre gobernados y gobernantes codifican el rol de Estado, construyen y problematizan subjetividades pobres, trazan sentidos y marcos discursivos en torno de verdades impuestas, dispuestas e inversas, mientras que, en un ejercicio estratégico entre libertades se ponen en juego prácticas de resistencia y des-sujeción crítica, que reacomodan los espacios y los órdenes en torno de otras lógicas y otras metas.

Una de las voces, respetadas y recuperadas por el Diario El Tribuno, así como por otros diarios locales, fue la del delegado de la Uocra en Tartagal, Américo Villa, quien afirmaba sobre la paralización de la construcción de la “Red colectora y nueva planta depuradora zona Sur de Tartagal”, una de las obras del Fondo de Reparación Histórica (FRH): *“A los trabajadores ya les liquidaron el ítem desempleo y les dieron los papeles de la baja. Es preocupante la situación, queremos que se reactiven los trabajos”* (El Tribuno, 17/10/2013). Villa precisó que seis obreros, el pañolero y el capataz quedaron sin su fuente de trabajo: *“ya que la empresa decidió poner un freno en la obra por problemas técnicos”*. *“Son excusas, yo creo que hay problemas de recursos”* (El tribuno, 17/10/2013).⁴⁵³ Por lo menos 16 trabajadores fueron echados luego de varios disturbios emergidos, porque la empresa pagaba fuera del horario laboral, así como se sostiene, que las empresas vinculadas al FRH no depositan en el Banco Nación el fondo de desempleo, realizando dicho pago en mano de los trabajadores.

Sin recibir el mismo trato mediático, otro de los espacios y voces elevadas en pie de lucha fueron los Movimientos piqueteros y de trabajadores desocupados de la zona (ante

⁴⁵³ La obra fue adjudicada a la empresa Juan Pedro Garín Construcciones y el monto del contrato se fijó en \$18.888.391, con un plazo de 18 meses. Los trabajos empezaron en el segundo semestre de 2012 y lleva más de un 10% de ejecución. Se realizaron reclamos formales ante el ministro de Trabajo, Eduardo Costello y al coordinador del FRH, Juan Carlos Galarza.

todo Tartagal y Mosconi), así como de las comunidades indígenas que habitan el departamento.

Los cortes de ruta, como práctica de lucha y resistencia entre y frente a las modalidades de implementación e intervención llevadas a cabo a través del FRH, comienzan a tener continuidad a partir de abril del 2013. Bajo el pedido de que los trabajadores desocupados y locales sean contratados para las obras del FRH, sobre todo porque esa había sido “la promesa” del ministro (Redacción Iruya, 22/04/2013). También se organizó un grupo de trabajadores que desde Tartagal, se dirigieron a la capital salteña para realizar una protesta solicitando los trabajos prometidos en torno del FRH la cual fue frenada por la policía provincial, que impidió la libre circulación a un grupo relativamente numeroso de manifestantes.

Un epicentro de lucha fue la localidad Gral. Mosconi, donde los cortes fueron coordinados por grupos de piqueteros (de la línea de Rearte y Tayson Fernández, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), resultando reprimidos en la mayoría de ellos. En junio del 2013, Infantería desalojó violentamente la ruta 34 ocupada por 200 manifestantes, los “desocupados”, como nombra el Tribuno a este grupo de trabajadores y piqueteros, exigían trabajo en obras del Fondo de Reparación Histórica. Hubo detenidos y heridos de ambos bandos, corridas, tiros y pedradas fueron condimentos de la “violenta jornada”, según el Tribuno, en General Mosconi sobre la ruta 34. Infantería desalojó con gases lacrimógenos a los manifestantes, bajo la excusa de que los mismos tenían bombas molotov y armas, cuando, en resonancia con lo analizado en el apartado II del capítulo 1 y dos, según Reartes: “*Apenas teníamos gomeras*” (El Tribuno, 05/06/2013), estos cortes se continuaban y acompañaban con otros realizados en Cornejo, Tartagal y Mosconi, en su mayoría en la ruta 34.

En el caso de Gral. Mosconi, cabe señalar que a los acontecimientos en torno del FRH se le suman, desde el 2012, conflictos en el interior del municipio por falta de pago a los trabajadores y malversación de fondos, por lo cual se dieron varios días de paro y reclamos mediados por diferentes gremios, entre ellos ATE; UPCN, SOEM y la UEMM. Los dirigentes de estos espacios a mediados del mes de enero del 2013 hicieron un contacto telefónico con el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Marcelo Cil, quien les dijo que: “...se instalará en Mosconi con tres contadores para el análisis económico financiero de la comuna” (El Tribuno, 17/01/13). De hecho, el 23 de ese mismo mes el municipio fue “intervenido” mediante la disposición provincial de disponer

un gabinete de gobierno local y auditoría municipal integrado por un equipo de técnicos de la Secretaría de Asuntos Municipales, con el objetivo de “recomponer el descalabro económico y financiero de la comuna norteña”. El intendente Albarracín⁴⁵⁴ tuvo que aceptar el co-gobierno, aunque recalcó que no se trataba de “intervención”.

Entre quienes se opusieron a la intervención provincial, sobre todo en reclamo de deudas de la provincia y del municipio, fue UTD Mosconi, de hecho en el proceso de firma del reconocimiento de obras realizadas por la misma, fue el referente de la UTD Pepino Fernández quien señaló: “*Estamos cansados de las intervenciones porque lo único que hacen es robar*”, mientras exhibía una carpeta con documentación: “*El gobernador Urtubey nos debe miles de pesos y el intendente también nos debe, y para colmo se niega a firmarnos las certificaciones de obras que hemos realizado*” (El Tribuno, 23/01/13).

Por su parte, resulta interesante señalar el modo en el que el diario el Tribuno refiere a Pepino Fernández, como: “...*el siempre dirigente, agresivo, duro...*”, al cual el funcionario de Estado, Amella, tuvo que “*explicar y convencer*” de que solo venía a brindar asistencia técnica. Por un lado, es relevante analizar la situación crítica del municipio mosconense, el cual según declaraciones extraoficiales del propio intendente (julio 2013) supera el 60% de desocupación, así como los “reclamos y protestas” por parte de la UTD, mientras que se le da un trato diferencial y específico, desde los medios y desde el gobierno de Estado provincial, al proceso de organización y lucha de los trabajadores desocupados en la zona.

En julio de ese mismo año, 2013, el corte en la ruta 34 a la altura de Gral. Mosconi se amplió y tuvo como protagonista a la UTD Mosconi, la organización de trabajadores desocupados y piqueteros más relevante de la provincia, que hacía largo tiempo no salía a “cortar” la ruta⁴⁵⁵.

En Mosconi, el corte en reclamo de mano de obra y ejecución de presupuesto del FRH se organizó en 3 barricadas ubicadas en dirección al acceso sur de General Mosconi y recién luego de un primer encuentro con el secretario de Empleo, Javier Massafra, los manifestantes accedieron a levantar el corte de ruta a partir de las 16.30 (iniciado a las 8 AM de ese mismo día), según Pepino Fernández:

⁴⁵⁴ Cabe señalar que a la crítica situación laboral en General Mosconi se sumó, por este entonces, la indignación por el discurso del intendente Julián Albarracín en el día de la fundación, en donde instó a: “...*olvidar el petróleo como fuente para generar trabajo y buscar nuevos horizontes*”. Palabras éstas en las cuales resuenan, no sólo las intenciones de no generar, ni promover trabajo a través de la explotación de recursos hidrocarburíferos para la población local; también la intención persuasiva de frenar las prácticas de resistencia y lucha de los trabajadores, luego desocupados y piqueteros que, históricamente, han girado en torno del petróleo y el gas en la zona.

⁴⁵⁵ Esto será ampliado en el apartado III del capítulo 4.

El pedido de los funcionarios era que querían reunirse con nosotros en Orán; después propusieron hacer una reunión en Ballivián, pero desde el principio estuvimos firmes en la postura de que quienes tenían que venir a dialogar con nosotros, pero aquí en Mosconi, eran los funcionarios (El Tribuno, ídem).

En la reunión con el secretario de Empleo, de la que participaron Pepino Fernández, Mario Reartes y Ramón Contreras, entre otros referentes, los principales pedidos fueron: la inmediata inversión de los recursos que la Provincia tiene disponibles por el Fondo de Reparación Histórica, en especial los casi 600 millones que destinará a la ruta provincial 54; la reactivación de los pozos someros en Vespucio y sus alrededores y la ejecución de otras obras previstas en el FRH en las diferentes localidades del departamento San Martín, que se encuentran prácticamente suspendidas: *“Necesitamos soluciones de fondo, que los recursos beneficien a los pobladores del departamento San Martín y no a las empresas amigas del Gobierno provincial”* (Pepino Fernández, referente área gestión UTD, entrevista, julio 2013).

De hecho, luego de estas instancias de corte y reuniones oficiales la UTD decide retirarse de los procesos de “negociación” por considerar que los demás referentes piqueteros y de las organizaciones de desocupados tenían cierta predisposición a negociar por un monto de dinero mínimo y sin tener en cuenta la imperante necesidad de generar mano de obra humana, a “pala” y sin maquinarias y/o contrataciones terciarizadas por empresas privadas. En este sentido, el pedido de la UTD remite a que los fondos se bajen a las organizaciones y, que estas puedan distribuir tareas acorde a la mano de obra humana y disponible, maquinarias, materiales, etc. (Pepino Fernández, referente área gestión UTD, entrevista, julio-agosto, 2013).⁴⁵⁶

El diario el Tribuno, en todos los casos, se encargó de comenzar las noticias señalando el *“inconveniente, molestia y caos”*, según el histórico tratamiento que el diario ha dado a la cuestión piquetera como: *“violentas, de las malas costumbres y agresivas”*, señalando: *“Largas colas de automóviles y camiones debieron esperar por varias horas a la altura de General Mosconi. Los manifestantes cruzaron un camión con combustible y amenazaban con prenderle fuego”* (El Tribuno, 18/07/2013). Sin embargo, esto se cruza con el uso estratégico que este diario local, a sabiendas posicionado fuertemente “en

⁴⁵⁶ Dicha información también remite a un trabajo de observación directa y participante, pues nos encontrábamos en Mosconi cuando se realizaba la reunión entre los dirigentes que negociaban con el ministro/gobernación. Mientras estábamos en la casa/oficina de Pepino, conversando y esperando el momento para poder realizarle una entrevista grabada, varios eran los hombres y mujeres que entraban y salían haciendo referencia a la reunión, la situación específica, etc.

contra” del programa de gobierno de turno⁴⁵⁷, ha dado a los piquetes relevando, en el tratamiento de la noticia también, el “mal uso, tardanzas, frenos y implicaciones” en torno de la aplicación del FRH.

Otros sucesos locales que ponen en disputa, juego y reacción dinámica las relaciones entre gobernados y gobernantes, fueron los acaecidos en Tartagal en torno de las prácticas gubernamentales de la mano del Intendente Leavy⁴⁵⁸; quien desde sus inicios como intendente tuvo conflictos diversos con los movimientos y organizaciones piqueteras locales, así como ha sido protagonista de diferentes conflictos en torno de su administración pública⁴⁵⁹. En abril de 2012, el intendente anuncia que se mudará, recluirá, junto a su familia en el Regimiento 28 e Infantería Juana Azurduy, para vivir allí por lo menos un año, luego de recibir amenazas de muerte dirigidas a su persona y a una de sus hijas (El Tribuno, 10/04/2012). El Intendente sostiene y anuncia que dichas amenazas “mafiosas” provienen de grupos piqueteros, ante todo de aquellos coordinadores de las cooperativas a nivel local, en el marco de las declaraciones del intendente de que: “...no se otorgarán mas obras públicas a grupos piqueteros con lo que los deja afuera de los trabajos que se emprenderán por el FRH” (El Tribuno, ídem).

La intendencia tartagalense prácticamente ha “militarizado” la zona, tiene enormes gastos (\$40 mil pesos adicionales en policías) por seguridad policial, ante todo ubicada en la municipalidad, puesto que se sostiene que la “violencia, agresión e inseguridad que provocan los piqueteros y desocupados es permanente”, sobre todo recordando los procesos de aquellos años 90’cuando las ciudades de Tartagal y Mosconi, según estos entramados enunciativos, se encontraban en: “...llamas y ellos pudieron, mas tarde

⁴⁵⁷ El Tribuno pertenece a la familia Romero, y debido a la fragmentación instalada en el año 2007, entre el exgobernador J.C.Romero y el I gobernador desde 2007, J.M.Urtubey, el diario se ha constituido como un espacio de oposición a la gobernación vigente en ese entonces.

⁴⁵⁸ Leavy llegó a ser intendente de Tartagal en el 2007, oriundo de Metán, militante del peronismo y empresario, en el 2003 de la mano del Frente para la Victoria llegó a ser diputado provincial, cuyo padrino político fue y sigue siendo el gobernador J. M. Urtubey.

⁴⁵⁹ En el año 2009 Leavy había protagonizado un escándalo por un supuesto “narco crimen”, cuando se esfumaron \$200 mil destinados a obras por el alud que atravesó a la zona, en tanto en denuncias varias e investigaciones documentales se comprueba que parte de ese dinero había sido cobrado por el cuñado y la esposa del intendente, mientras otras versiones sostienen que se utilizó el facturero de un plomero para alquilar maquinarias a la municipalidad (16 órdenes de pago y 16 cheques por 200mil pesos). De hecho, la justicia allanó la oficina de obras públicas, asesoría legal y tesorería del municipio mientras se decidían fechas y lugar del juicio político al intendente, que siempre se sintió muy seguro y realizó fuertes críticas a la prensa local (Diario Perfil, 3/08/2009). El 13 de agosto se aprueba, en el consejo, el juicio político. En el mismo año, pero en enero, el intendente había denunciado una “industria piquetera” en Tartagal, cuando se habían realizado más de 10 protestas simultáneas en la localidad. Se acusaba a los líderes piqueteros de lucrar, obligar y amenazar a las familias de desocupados si no participaban de los cortes de ruta, por lo cual pedía seguridad y justicia. Fuentes: 31 de enero, 2010, en: <http://www.ambto.com/noticia.asp?id; Informato Salta, 22 de setiembre 2010>.

instalar la paz, todo era un infierno, inseguridad, violencia, saqueos, y los intendentes de la zona junto con los ministros pudieron devolver la paz al lugar, ante la amenaza piquetera” (El Tribuno, 16/04/2013), además de señalar que: “...los líderes piqueteros sacan provecho (viven de...) los trabajadores desocupados, lucran con esta gente” (Infórmate Salta, 17/04/2012).

Ante todo, estos entramados enunciativos relatados, desde y en espacios específicos de gobierno, productores de realidad en un juego de verdad sujeto a lógicas represivas, evasivas y autoritarias privan de considerar, entre otras cosas, que se trata de un Tartagal convertido en una especie de espacio vital para empresas constructoras que ven en los \$800 mill del FRH la oportunidad, casi irrepetible: “...de amasar mucha rentabilidad” (Avalos, 2012: 240). Lo cual evidencia la decisión político-estratégica, en resonancia con las prácticas de resistencia y las solicitudes de las organizaciones de trabajadores desocupados y piqueteros, de evitar que los trabajos y fondos queden en manos de “actores no empresariales”, es decir, dichas organizaciones.

Estas lógicas de gobierno se ponen en juego, a su vez, mediante tecnologías biopolíticas y tanatonopolíticas, en un marcado ejercicio de racismo de Estado, por un lado mediante el intento de “aislar” sentenciando a los piqueteros como violentos incorregibles, terroristas mafiosos y personaje siniestros, del resto de la sociedad-comunal, sosteniendo que el “pueblo” ya no quiere saber nada con esas prácticas. Cuando, según nuestra experiencia de trabajado de campo, puntualmente en la localidad de Mosconi, observamos que existe un profundo reconocimiento comunal y local de la lucha sostenida por la UTD, sobre todo por el proceso de generación de trabajo y sostenimiento del mismo, cuando en la zona nadie más lo hace de modo sostenido, tal cual analizaremos en el apartado III del capítulo 4.

Y, por otro lado, las lógicas empresariales atraviesan y se ejecutan en el marco del FRH, mientras se “da muerte” (directa e indirectamente) a los movimientos y organizaciones piqueteras, silenciando y dejando solapada la historia y el proceso de conformación y reconfiguración de las mismas desde los años 90’, luego de la privatización de YPF. Cuando sin estas prácticas de resistencia, no solo no habrían sido posibles los acontecimientos del 2001, con efectos diversos en torno de las racionalidades políticas y prácticas de gobierno que reconfiguraron el rol del Estado; tampoco hubiese sido posible, durante todos estos años la producción de obras a pequeña escala y la generación de mano

de obra permanente (limpieza de calles, construcción de casa, erradicación de ranchos, fulminaciones, forestación...) en la zona.

En este juego de gobierno, de generación de espacios y marcos vinculares estratégicos, el programa de gobierno provincial, desde el 2007, ha instalado la práctica discursiva y extradiscursiva de quitarles, públicamente, “fuerza de acción”, en tanto se mantengan en “paz, en silencio y sin levantarse”. El gobernador así lo dice: “*organizaciones no democráticas ni representativas del conjunto social (...) que tenían algunos privilegios que ahora están perdiendo*” (Interpelados TV, Canal 9, martes s 10 de abril del 2012). Estos privilegios, según el gobernador, fueron dados por el Estado provincial anterior a su mandato, del cual él fue parte durante todo el proceso de conformación de las organizaciones piqueteras, y ante las cuales la principal intervención gubernamental fue la represión directa a través de infantería, gendarmería y policía.

Así, en la provincia de Salta se sostiene y construye un programa de gobierno que “deja a la muerte y da muerte” a estas subjetividades pobres, desocupadas y en pie de lucha, bajo el slogan de su “agonía y falta de apoyo por parte de la población local”. Mientras que, cuando los “piqueteros desocupados” deciden levantarse y cortar, ocupar y/o tomar las rutas son “reprimidos, desalojados, sacados, impedidos”, por parte de los cuadros policiales diversos, que la gobernación y las intendencias locales manejan a despojo.

Por último, estas prácticas de gobierno se tejen a su vez, en relación con prácticas impulsadas y coordinadas con y por las corporaciones privadas, en el uso indiscriminado e injusto de la regalías petroleras: “...*monopolizando la obra pública respetando poco las cláusulas contractuales e invirtiendo menos para lucrar en demasía*” (Avalos, 2012: 244). Es decir, mediante una lógica empresarial, que pretende extenderse a todo el cuerpo social, así como codificar las prácticas de intervención individual propiciando la autogestión de la propia existencia, que en el caso de las localidades de los Dptos. San Martín, Orán y Rivadavia resultan pobres, extremadamente pobres.

Esbozos Finales

En el Capítulo 3, perteneciente a la Parte II del trabajo de tesis, nos detuvimos en una minuciosa analítica en torno de los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta (2000-2013). Nos ha guiado el supuesto de que las relaciones entre gobernados y gobernantes, se desarrollan y construyen en un diagrama más amplio de pensamiento y modos de hacer.

En el *apartado I*, en primer lugar, realizamos un breve recorrido por el diagrama geopolítico continental, considerando que el mismo posibilita comprender la emergencia, instalación y singularidad de la gubernamentalidad argentina en la época analizada. En dicho recorrido hicimos referencia al contexto y condiciones históricas de posibilidad y realidad acaecidas en el continente latinoamericano, en los últimos años, identificando el diagrama de poder y gobierno que se instala en la América Latina de estos años entre integraciones, acuerdos, diferencias, acercamientos, y diversos discursos mancomunados, con matices locales específicos en la geopolítica continental.

En segundo lugar, *en el apartado II*, realizamos una reconstrucción crítica de los programas de gobierno y racionalidades políticas instalados y construidos en la Argentina entre 2003 y 2013). En primer lugar, observamos cómo, en sus inicios, el programa de gobierno nacional, se instala promoviendo la reconfiguración del rol del Estado como “protagonista, presente y promotor”, frente al rol subsidiario y ausente, que se considera tenía en los 90’, mientras se fomenta el crecimiento, la inversión y el tecnicismo económico político. En este primer trazo histórico - 2003-2007 - una de las estrategias de gobierno remite a lo que dio en llamarse “transversalidad”, construida entre y frente a las críticas del Partido Justicialista y la articulación con organizaciones sociales, sobre todo de trabajadores desocupados. En esta relación específica, observamos cómo se promovía una propuesta dirigida en dos direcciones, por una parte: no ejercer represión directa dejando actuar a los trabajadores desocupados, considerando que de este modo los piqueteros se desgastarían por sí mismos y se aislarían, mientras que, por otra parte, para los movimientos que “colaboren y participen” (los sensatos) se propiciarían estrategias para “emplear” a sus miembros y para participar en el proceso instituido de gobierno (Maneiro, 2012).

Entre prácticas y dispositivos nos adentramos en un segundo momento (2007-2012), en el cual entre crisis y re-toques se profundiza la racionalidad política configurada en torno de un discurso centrado en el crecimiento económico sostenido con la creación de empleo-trabajo e “inclusión social con equidad”, con la intención expresa de regular la distribución de la riqueza/ingresos y la creación de oportunidades. Hicimos referencia, en tal sentido, a algunas de las prácticas de gobierno más relevantes de la época señalada, bajo el supuesto de que las mismas se construyen y entretejen en la puesta en juego de lógicas y prácticas “para el mercado y en contra del mercado”, a partir de las cuales se ponen ciertos límites morales y políticos al mercado, mientras se generan las condiciones

de posibilidad para que el juego del mercado sea posible. En Argentina, por tanto, estas prácticas de gobierno, en el cruce disímil de racionalidades políticas, permiten no rebasar el neoliberalismo y tampoco abandonar el peronismo.

En este recorrido, reconstruimos un tercer momento (2011-2013), que dimos en llamar *Sintonía Fina*. Es cuando, desde el programa de gobierno nacional, se propone profundizar lo logrado e instar a un ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, entre cuyas prácticas estratégicas rescatamos “la re-nacionalización de YPF” (Ley 26.741). Al respecto, realizamos una muy breve aproximación a cómo el modelo elegido no es el de la re-estatización, en tanto se continúa con la figura formal de “sociedad anónima”, con una apuesta a la profesionalización de la empresa nacional. También observamos el modo en que lo resuelto se realiza en un haz de relaciones entre las cuales se encuentran las dirigidas a sostener un modelo “extractivo-exportador” (Seoane, 2012), abierto a inversiones extranjeras, dilatando la pretensión de modificar la estructura de propiedad, renta y riqueza en el país, y neutralizando prácticas de lucha surgidas, en defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

En tal sentido, hicimos una breve referencia al modo en que la re-nacionalización de YPF instó, por parte de referentes del PNP, solicitudes dirigidas a “transformar las protestas” – piqueteras emergidas post privatización. Observamos cómo, estas prácticas discursivas y extradiscursivas reconfiguran las prácticas de criminalización, proyección y represión de las protestas, mientras se dirigen, ante todo, a las agrupaciones piqueteras del Gran Buenos Aires, abriendo un complejo abanico de discusión y diálogo en torno de los “otros” movimientos piqueteros, considerando que la realidad de los ex/ypefianos salteños, por ej.: no denota esa mejora sugerida por el “acceso al trabajo en la década ganada”, sino un constante, creativo y cotidiano proceso de resistencia en los márgenes y de luchas por sobrevivir.

En la misma línea de análisis, ingresamos al *apartado III* del presente capítulo, en el cual realizamos una reconstrucción crítico-genealógica de la gubernamentalidad en la provincia de Salta (2003-2012/13). En primer lugar, hicimos referencia al momento transitorio entre 2003 y 2007, en el cual se profundizan las reformas de Estado y económicas que venían llevándose a cabo desde 1995, en un complejo tejido vincular entre la provincia y la nación. Mientras que en 2007 se instala un programa de gobierno que entrecruza el peronismo local con la propuesta renovadora-humanista, entre lo que dimos en llamar las tres “t”: tradición, traición y transición.

Observamos cómo, en Salta en la época analizada, entre alianzas y discursos de perfil “humanizadamente progresista”, se profundizan y re-crean programas de gobierno vinculados a las reformas de Estado y Administración mediante la reconfiguración del rol del Estado hacia la gestión, la operatividad y la eficiente eficacia en el ejercicio del gobierno, el cual sólo es posible en relación estrecha con la sociedad civil y el ámbito privado para generar un marco político económico acorde a las exigencias del siglo XXI. Mientras que son re-codificadas prácticas de gobierno dirigidas a la descentralización, mediante la promoción de la autonomía de los municipios, lo cual nos remitirá luego a la descentralización de las políticas sociales en la actualidad provincial. Dicho “repliegue a lo local” puede reflejar la búsqueda de reafiliación, pero también responde a las “reformas del Estado” y al consecuente re-direccionamiento de las políticas públicas, dirigidas a focalizar su acción sobre poblaciones identificadas “de riesgo”, al tiempo que la descentralización delegaba responsabilidades hacia la escala local, tal como analizaremos en el próximo capítulo.

En este juego analítico reconstruimos un segundo momento (2011-2013) del programa de gobierno salteño, en el cual consideramos que se promueve una re-creación del legado peronista y frentista promoviendo la banderas de la “equidad y la inclusión”, en clave de justicia social y bien común, según re-traduccion del actual programa nacional y popular.

Esto es posible, con la singularidad de ejercer el gobierno “bajo el velo de Dios y el pueblo”, en lo que damos en llamar un tenso proceso de “re-peronización humanizada”. Este programa se proyecta mediante la apuesta a la apertura y en concordancia con los avances de la globalización y el desarrollo, así como una descentralización política hacia los espacios sociales, civiles y privados. Al igual que en el apartado anterior, para una analítica de las prácticas de gobierno seleccionamos un conjunto de mecanismos puestos en juego en el proceso de construcción del complejo y dinámico haz de relaciones que codifican el rol del Estado en interacciones diversas y divergentes con otros espacios de gobierno.

Por último, analizamos y describimos cómo este diagrama de poder/gobierno se construye en torno de técnicas dirigidas a construir una “Salta la linda, la sojera, la minera y la petrolera”, haciendo una breve referencia al modo en que el modelo “extractivo exportador” es puesto en juego, sobre todo mediante la fomentación y permisos de desmonte para siembra de soja y extracción de maderas, así como la promoción,

aprobación y concesión de la llamada “minería sustentable” y de la explotación hidrocarburífera. En tal sentido, observamos cómo, en la provincia de Salta, la “re-nacionalización” de YPF solo repercutió en tanto YPF sería una más de las empresas capaces de realizar inversiones a nivel local. Pues, no se frenaron las concesiones, ni expropiaron territorios de y/o para exploración y explotación, los cuales siguen en manos de las numerosas empresas privadas asentadas en la zona. Mientras tanto, queda pendiente la discusión y programación, en torno a las problemáticas sociolaborales en la zona.

Nos detenemos en reconstruir el diagrama de explotación, extracción, concesión y explotación dispuesto en la provincia, en tanto nos permite entablar relaciones con los modos en que la UTD Mosconi, en su búsqueda por la “reparación histórica”, se alza como una voz y espacio de lucha por el cuidado y la defensa de los recursos naturales, no sólo petróleo o gas, sino también madera, tierra y agua, que son reciclados y protegidos por la organización. Mientras que también referimos, en el caso de la re-nacionalización de YPF, a ciertas prácticas y decisiones llevadas a cabo por las agrupaciones de trabajadores desocupados con la UTD como referente, en relación al esperado advenir del “trabajo y la reparación de y en la zona”.

En tal sentido, recuperamos el dispositivo gubernamental “Fondo de Reparación Histórica (FHR)” (Ley N° 7691), construido en torno de las regalías petroleras locales. Los fondos destinados por el FRH son utilizados para obras consensuadas con autoridades municipales y representantes de organizaciones intermedias, a partir de lo cual observamos que en el tramo de implementación de dicho Fondo las obras no se ejecutan en su totalidad, se frenan, se olvidan y redistribuyen acarreado consigo diversas problemáticas y revueltas en las tramas vinculares entre gobernados y gobernantes. Analizamos las varias voces que se levantan y ponen en juego en el reclamo y pedido de la correcta aplicación del FRH en la zona del Dpto. Gral. San Martín, así como diferenciados son los modos de tratar la cuestión, ya sea por parte de los medios de comunicación, las gobernaciones, la gendarmería y las policías, las empresas privadas y las organizaciones de trabajadores desocupados, como la UTD.

Reconstruimos, entonces, cómo entre los discursos de “reparación”, resuena eso de que algo hay que “arreglar, en tanto se ha roto” en estos lugares en los cuales el FRH interviene. Esto se vincula, inmediatamente, con las historias locales de pobreza y desocupación, sobre todo luego de la privatización de YPF, tras lo cual hicimos especial

hincapié en las prácticas de resistencia re-emergentes frente al uso que el FRH realiza del dinero proveniente de regalías hidrocarburíferas. Mientras que, estas prácticas se entrecruzan con otras dirigidas a la represión (directa e indirecta), ante todo hacia los movimientos de trabajadores desocupados de la zona. Represiones atravesadas de olvidos y pretensiones de desmovilización de las organizaciones en pie de lucha, utilizando el instrumento retórico que pretende “quitarles peso comunal, peso político y peso gubernamental en la zona”. Veremos más adelante, la marcada injerencia que ello significa en la construcción de los programas de gobierno dirigidos a la pobreza y los pobres desocupados.

De este modo, damos entrada al último Capítulo, 4 de la tesis, en el cual realizaremos un análisis crítico en torno del gobierno de la pobreza que damos en llamar “de segunda generación con rostro humano”, en la Argentina y en Salta entre 2003 y 2013, y los procesos de reafirmación y recreación de la UTD Mosconi, en un múltiple y tenso diagrama de relaciones de poder, gobierno y verdad.

CAPITULO 4: *El gobierno de la pobreza con rostro humano, en la Argentina y en Salta entre 2003 y 2012/13, y los procesos de reafirmación y recreación de la UTD Mosconi.*

Dando continuidad al análisis realizado en el capítulo anterior y en el capítulo 2, en el cual hicimos un recorrido analítico en torno del gobierno de la pobreza y su problematización en los años 90', en relación con las prácticas de resistencia, lucha y autogobierno de los advenidos trabajadores desocupados y piqueteros. En el presente capítulo reconstruimos críticamente cómo se configura, en torno del gobierno de la pobreza, el campo de lo social re-inventado, en el proceso de instalación y diagramación programática de las que damos en llamar “políticas sociales con rostro humano”, entroncadas en discursos “inclusivos, equitativos y justos”, en Argentina y en Salta (2003-2012/13). Esto implica un análisis crítico de racionalidades políticas y prácticas codificadas en los programas y mecanismos de gobierno dirigidos a la pobreza, así como a la construcción y constitución de las poblaciones pobres de modo genérico y, a las poblaciones pobres desocupadas, de modo específico.

En un ejercicio relacional, en el último apartado que se titula: “No queremos ser incluidos”, acorde a las lógicas de gobierno de la época (2003-2013), hacemos puntual, especial y rigurosa referencia a las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi, en el presente más cercano. Partimos del supuesto de que las prácticas de lucha, resistencia, gobierno y autogobierno local de la UTD resultan “astutas y acertosas”, en medio de realidades y condiciones no siempre favorables, ni fáciles de afrontar para poder “trabajar, sobrevivir y vivir con dignidad”.

I

Los avatares del gobierno de la pobreza y las políticas sociales en la Argentina, entre 2003-2012/13

1-Entre sujetos jurídicos y sujetos económicos: un singular re-torno al trabajo decente y humano

En el marco del Programa de gobierno argentino instalado entre 2003 y 2013 la transformación de los trabajadores en pobres reinstala la cuestión social en términos de pobreza de un modo singular, puesto que lo realiza recuperando la impronta nacional del discurso de Estado. En tal sentido, los entramados discursivos de las políticas sociales públicas y sus programas de gobierno consideran que el “trabajo” es el mejor “antídoto para luchar contra la pobreza”, a partir de lo cual el gobierno de la pobreza se ejerce en el complejo dominio de lo configurado como “lo social” y como “unidad nacional”, promoviendo lo que consideramos resulta una complementación paradójica entre sujetos jurídicos y sujetos económicos en los trazos enunciativos del Discurso de Desarrollo Humano.

Lo referido a sujetos jurídicos y económicos nos remite a los planteos foucaultianos en torno de la relación entre la economía y el derecho, cuando en su clase del 17 de enero del 1979-2007 señala que, en el siglo XVIII y comienzo el XX la vinculación entre derecho y economía hacía del primero una facultad del segundo. Esto, en la medida en que la economía política avanzaba poniendo límites internos a la Razón de Estado (S. XVI) y en tal sentido se trazaba el proceso de gubernamentalización del Estado, mientras que el derecho quedaba vinculado a los límites “externos al ejercicio del poder político público” (Foucault, 2007: 62-67).

Dicha problemática en torno del “límite externo” del poder es trabajada, genealógicamente, por Foucault señalando que el mismo tomó dos caminos⁴⁶⁰: “el revolucionario” y “el radical”. El primero, también llamado “rousseauiano”, se centra en la figura jurídica del contrato para postular al pueblo como constituyente primario y a los ciudadanos como sujetos de derecho, que deberían ser garantizados por el Estado,

⁴⁶⁰ Por tanto, si bien ambos caminos se interrelacionan permanentemente, se diferencian en tanto el primer camino pone como límite (aparente) una ley universal por encima de los particulares, y el segundo se basa en las costumbres, es decir en decisiones jurídicas previas y ya no en leyes universales.

mientras que no se pueden sobrepasar los límites del poder jurídico (tripartición del poder) y se deben respetar las libertades concedidas y cedidas (Foucault, 2007: 58-9).

El segundo camino es el del “utilitarismo inglés”⁴⁶¹, que luego se expande a Estados Unidos. El límite externo al ejercicio del poder soberano ya no es la ley traducida en derechos, sino el mercado: “...*el poder estatal se extiende ya no hasta donde lo permite la ley, sino hasta donde la actividad libre de los individuos lo permite. Los gobernados son vistos como “sujetos económicos”* (Castro Gómez, 2010: 144). Esto último se encuentra en medio de una nueva tecnología de gobierno “el liberalismo”, el cual según Foucault, en el siglo XIX intenta conciliar los dos caminos anteriores, aunque señala que son inconciliables ya que los dos tienen un origen histórico diferente y conllevan una heterogeneidad.

Para comprender lo antedicho cabe recordar que la propuesta foucaultiana aquí retomada y recreada propone el ejercicio de un pensamiento estratégico, el cual vincula heterogeneidades y no contradicciones, pues no se trata de una “tensión dialéctica”, sino de: “...*una relación de fuerzas en las que las estrategia jurídicas entran en juego con las estrategias económicas*” (Foucault, 2007: 61-62). En tal sentido observamos cómo, con el avance del neoliberalismo en el siglo XX, el mercado se convirtió en el ámbito en el cual se definía la ciudadanía, según Castro Gómez: “...*el ciudadano ya no es más un asunto de derechos, sino un asunto de emprendimientos*” (2010: 146).⁴⁶²

Por tanto, la sociedad civil, dominio en el cual se engloban a ambos sujetos (jurídicos y económicos)⁴⁶³ sin reducirse a ninguno de los dos (Foucault, 2007: 335), no es una extensión del Estado, su aparato ideológico, tampoco la esfera pública que pone límites a la acción del Estado, porque analizar de este modo a la Sociedad civil y el Estado implica, siguiendo a Castro Gómez: “...*considerarlos objetos que existen con independencia de las prácticas que lo generan*” (2010: 158). Se trata de desnaturalizar tanto a la sociedad civil como al Estado, mostrar genealógicamente cuándo y cómo aparecieron como objetos

⁴⁶¹ Ver: Foucault, 2007: 59-69.

⁴⁶² En este proceso genealógico Foucault desentraña las dos líneas que se vienen trazando desde la antigüedad, la de la totalización encarnada en la razón jurídica y la de la individuación encarnada en la razón pastoral, para mostrar cómo convergen en el liberalismo. Considerando, como lo señala Castro Gómez, que en el liberalismo a diferencia de lo ocurrido en la Razón del Estado, se invertirá la relación: “...*el singulatum prevalecerá sobre el omnes*” (Castro Gómez, 2010: 146).

⁴⁶³ En palabras de Foucault: “...*como realidades en transacción, es decir: precisamente en el juego de las relaciones de poder y de lo que sin cesar escapa a ellas, de alguna manera en la interfaz de los gobernantes y los gobernados, nacen esas figuras transaccionales y transitorias que no son menos reales por no haber existido desde siempre, y que en este caso podemos denominar sociedad civil, en otro caso locura, etc.*” (2007: 337).

a los que se les asigna un valor. Pues, la sociedad civil y el Estado son resultado de un conjunto de técnicas, objetivos, reflexiones y estrategias.

Siguiendo el camino propuesto por Foucault y Castro Gómez, en el presente capítulo pretendemos analizar el proceso de “re-invencción de lo social” a partir del gobierno de la pobreza entre 2003 y 2013. Partimos del supuesto de que el gobierno de la pobreza cobra singularidad en la época analizada en Argentina, cuando la fuerza potencial y creadora del Estado implica una inversión de los roles asignados al mismo. Según el entramado discursivo del programa de gobierno de la época, el Estado toma un rol protagónico en el proceso de “inclusión” de los sujetos desplazados, excluidos y pobres mediante la generación de ciudadanía, esto es, la producción de sujetos jurídicos (de derecho), lo cual diferenciaba el hoy, respecto del ayer (década de los 90’, ante todo). Esto se lograría, a su vez, a través de la potenciación del sujeto económico-trabajador-emprendedor, a partir de lo cual los pobres podrían demostrar “quiénes son y todo lo que pueden hacer”, desde un suelo mínimo y común de oportunidades y servicios, en torno del dispositivo específico de la “economía social”⁴⁶⁴, entre otros.

Si bien observamos un retorno discursivo y extradiscursivo a lo nacional, popular y laboral como ejes de intervención, gestión y gobierno de las poblaciones pobres, consideramos que de un modo singular, en el dominio de lo social, la economía sigue siendo el saber que habilita la producción de los tejidos relacionales entre gobierno y verdad, en el proceso de construcción de las subjetividades gobernables y las condiciones de gobierno.

2-Las políticas sociales “humanizadas e inclusivas”: entre el desarrollo, la justicia social, la comunidad y la solidaridad emprendedora

Las políticas sociales con rostro humano, en el marco del programa de gobierno argentino instalado en 2003: “...*tienen eje en la persona, la familia y el territorio, tendiendo al desarrollo humano y buscando la reconfiguración del tejido social, mirando al individuo como parte de una sociedad que lo contiene*” (M.D.S, Tomo I, 2010: 43- 44).

⁴⁶⁴Se parte del supuesto de que la “economía social”, promovida por el discurso oficial, no resulta una alternativa a la economía capitalista, sino que: “...*coexiste con esta última, es decir, forma parte de las transformaciones en los procesos de acumulación de capital y los heterogéneos procesos de subsunción del trabajo al capital*”. (Presta, 2011. s/d).

Dichas políticas promueven la “inclusión social”⁴⁶⁵, desde la cual hacer del ciudadano pobre o del pobre ciudadano “sujeto jurídico”, como:

...la manera de participación en la democracia, y consiste en la implementación de políticas públicas encaminadas a la vinculación de todos los miembros de la sociedad, para la participación de los beneficios, que ésta adquiera. (...) Se vincula directamente con la noción de “desarrollo humano” (...) se convierte en el marco de los derechos civiles y sociales y construye un elemento para la construcción de una sociedad más igualitaria. (M.D.S, Tomo II, 2010: 52-3).

Si bien el programa de gobierno de la época, en el trazo de las políticas sociales dirigidas a las poblaciones pobres, se distancia de un proyecto de gobierno de Estado de tipo anarcoliberal recupera y readapta a las realidades locales, para el diseño y diagrama de los dispositivos y mecanismos de intervención los entramados enunciativos y las lógicas promovidas por los Organismos internacionales - PNUD⁴⁶⁶, ante todo. Dicho programa (PNUD) configuran el ejercicio del gobierno de la pobreza mediante lógicas y prácticas dirigidas a su combate, en vinculación con la teoría de capital humano en torno de la autorrealización integral y cooperativa de los sujetos-personas, en los albores del DDH, como analizaremos en los próximos apartados. En los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres se pone el eje en las personas (no números), en las organizaciones, en las potencialidades y oportunidades y se critica el modo estigmatizante, focalizado y objetivante mediante el cual, la racionalidad política de Estado desplegada en la década de los 60´ atendió a los pobres.

En tal sentido, la pobreza es un “problema” gestado entre relaciones de poder específicas: *“...entendemos que este problema no surge de la nada, que hay actores sociales involucrados y que existen personas que padecen esta situación, hay quienes también se benefician con ella”* (M.D.S., Tomo. II. 2010: 82). El gobierno de Estado reconoce el

⁴⁶⁵Para comprender la noción de inclusión enunciada, es menester referir a la de “exclusión”, pues los sujetos contruidos para resultar incluidos, se supone que resultan sujetos excluidos, cuando la misma es comprendida como: *“...Situación en la que se lesionan derechos y se inhibe la realización humana y social. Es la pérdida de posibilidades de estudiar, de formarse, de ser parte de la sociedad, de sentirse integrado. Desocupación, pobreza, precarización del trabajo y destrucción del sistema productivo son los elementos fundamentales para la exclusión, y determinantes del modelo neoliberal* (MDS, II, 2010:42).

⁴⁶⁶ El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) posee, en Argentina de la época analizada, influencias considerables. En consecuencia con la lógica de des-endeudamiento promovida por el Programa de gobierno trabajado, lo cual lo diferencia del instalado en los 90´ y 2000, el PNUD recibe prácticamente, la totalidad del financiamiento de parte del Estado nacional, mientras que interviene en el diseño, diagrama, monitoreo, evaluación de proyectos, programas y planes dirigidos a los pobres, así como en la capacitación de equipos técnicos expertos. El PNUD (2009, 2011) concentra el enfoque de desarrollo humano en las *personas*, sus capacidades y habilidades, según lo promulgado por Sen (1987), a partir de mejoras en la *calidad de vida*, lo cual no apunta a la adquisición material de bienes o dinero. La pobreza es calificada como estado de privaciones injustas, o sea como la ausencia de funcionamientos centrales para la vida. En tal sentido, la vinculación estrecha con el PNUD no se realiza con la impronta de una globalización “hacia arriba y hacia afuera”, sino con la intención de “vivir con lo nuestro hacia adentro y los alrededores”, esto implica la puesta en juego de prácticas y lógicas de gobierno y verdad en el trazo de glo-calidades nacionales y regionales, ante todo.

carácter político estructural de la pobreza, a partir de lo cual se pone en juego un heterogéneo tejido de lógicas y prácticas cuyas estrategias⁴⁶⁷ conducentes y conductuales promueven la unidad nacional, la justicia social, el Estado social y la sociedad integral.

Esto implica, según declaraciones oficiales, una política social “integral y reparadora de las desigualdades sociales reconociendo al ciudadano como protagonista del cambio social”, en tanto identificación de las diferencias “injustas”. Pues, se pretende gobernar a través de lógicas trazadas en torno de la justicia social, en el marco de la cohesión y el orden, en palabra del PNUD:

...todos los procesos que no son equitativos son injustos: las oportunidades de todas las personas a llevar una mejor vida no debieran verse restringidos por factores que escapan a su control. Las desigualdades son particularmente injustas cuando algunos grupos son discriminados de forma sistemática por motivos de género, etnia u origen geográfico. (PNUD, 2011: 1).

En tal sentido, se ponen en juego mecanismos diversos que permiten la construcción de ciudadanía bajo la figura del pobre como “sujeto de derecho”, en relación con la “autoresponsabilización”, como la otra cara de este tipo de derechos. Parafraseando a la presidenta, “el gobierno de todos y todas” resulta pensado, proyectado y ejercido en pos de la justicia social y distributiva (material, humana y social) y por ende de “equidad”⁴⁶⁸. Esto opera discursivamente a partir de la expansión de las “opciones de la gente” y el gobierno de ciertas “desigualdades-inequidades” advenidas peligrosas para un orden social integral y ascendente. Pues, según la inflexión en las racionalidades políticas operada a partir de 2003, se sostiene el “problema es la inequidad”, a partir de lo cual se instala un discurso centrado en la ampliación y expansión de las oportunidades, opciones y posibilidades de cada uno de los integrantes de la sociedad-pueblo advenido gobernable,

⁴⁶⁷ Siguiendo a Foucault sabemos que no existe un *telos* en el ejercicio del gobierno, si no dirección y guía en el trazo de estrategias y tácticas codificadas en torno de prácticas concretas. Por tanto, en la puesta en marcha de los programas de gobierno los rellenos estratégicos se modifican, diversifican y recodifican acorde a condiciones históricas de posibilidad, así como la red de prácticas de intervención y gobierno.

⁴⁶⁸ El coeficiente de Gini mide los grados de equidad, y se construye a partir de la medición de los salarios y otras fuentes de ingreso de la población, sin considerar la variación de los precios, de modo que está exento de los cuestionamientos sobre el Indec y el Índice de Precio. Así dicho coeficiente que mide el “nivel de desigualdad” siendo el cero el mayor grado de equidad y uno el máximo de inequidad e ubico en 0,434 en el tercer trimestre del 2012. En igual período del 2011 fue de 0,437, mientras que en el 2003 fue de 0,534. Además la diferencia entre los ingresos que perciben las familias más pobres y las más ricas fue de 21 veces, también similar al ratio del año 2011. En el 2003 la brecha era de 56 veces. Ahora bien, otra medida utilizada para evaluar la distribución del ingreso es qué porción se apropia cada franja de la población dividida en deciles, es decir, en diez grupos con igual cantidad de personas. En el tercer trimestre del 2012 el 10 % más pobre obtuvo 838 millones de pesos, mientras que la porción más rica casi 18 mil millones. La distancia sigue siendo considerable. Fuente: Diario Página 12; jueves 27 de diciembre. Cabe aclarar que “equidad” no es sinónimo de “igualdad”, en el sentido que ha sido comprendida en el proceso de instalación de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la constitución de las Naciones. La equidad, ante todo en relación con la “meritocracia” promovida por los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención, remite y gestiona las desigualdades injustas, que no implican siempre acceso a derechos, garantías de ejercicio y de movilidad social soberana/ciudadana.

para poder alcanzar, según sus propios deseos, intereses, valores y metas, una mejor vida, una vida buena, una mayor calidad de vida.

Esto implica, por un lado una expansión de la responsabilidad social a partir de la solidaridad y la instalación de los derechos sociales para garantizar y posibilitar la “libertad” de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, cuyo derecho resulta adquirido, por el sólo hecho de haber nacido en una nación soberana. Por otro lado implica, por parte del Estado, la intervención en cuestiones *básicas* como salud, educación y vivienda, mediante la puesta en juego de diferentes planes y proyectos de carácter compensatorio y autogestivos.

Ahora bien, a diferencia del programa de gobierno analizado en la década de los 90’ e inicios del 2000, según las líneas del PNUD, en el programa de gobierno que se inicia en el año 2003, ya no se trata de políticas sociales focalizadas, si no de un salto logrado por la ampliación de oportunidades⁴⁶⁹. Ahora bien, en el caso de las poblaciones pobres, el suelo común de equidad y con ello la ampliación de oportunidades, debe ser garantizado por la protección del Estado mediante la administración de los básicos, a partir de los cuales poder re-integrar-se en la sociedad o lo social re-inventado, en el proceso mismo del gobierno de la pobreza:

...concibiendo como imperativo ético a la persona y su realización. El objetivo es apuntar al desarrollo social, para generar condiciones de justicia social y sustentabilidad intergeneracional. Se considera que el desarrollo de las personas, las familias o las comunidades guarda relación directa con una concepción integral de la ciudadanía. Todos los derechos son interdependientes, sin un mínimo de bienestar económico, social y cultural no hay respeto a los derechos humanos. (M.D.S., Tomo II, 2010: 52.).

La actividad protagónica del Estado, según discurso oficial, remite a la regulación y el orden que habilita la autorrealización para el progreso social y el crecimiento económico con sustentabilidad y equidad. Por tanto, en el resonar de los saberes analizados, la intervención del Estado en pos de una política de equidad y justicia social, no sólo debe ser posterior (compensatoria y paliativa) a la acción del mercado, sino que debe ser previa y/o concomitante para evitar inequidades en el mal funcionamiento del mismo. Esto implica, entre otras cuestiones evitar situaciones de inequidad derivadas de posiciones dominantes, como las dispuestas por los grandes monopolios y/o corporaciones, tras lo

⁴⁶⁹ Cabe recordar que, según lo trabajado en el apartado I del Capítulo 2, “la igualdad de oportunidades” según lo sugerido por Friedman & Friedman (1980), remite a un piso desigual de inicio y de llegada, en tanto dicha igualdad no debe ser interpretada liberalmente, sino como una carrera abierta a los talentos y a la capacidad. Enfatizando, así, el rol protagónico de los “individuos” en el desarrollo de su propio bienestar e integridad.

cual las políticas de equidad deberían velar de manera preventiva por el “adecuado funcionamiento de los mercados en condiciones competitivas” (Novak, 2013)⁴⁷⁰.

En tal sentido, la heterogénea red de racionalidades políticas que confluyen en el programa nacional de gobierno se manifiesta en el proceso de re-invencción de lo social. Por un lado, se promueve la construcción de tejidos sociales - locales, comunales y cooperativos - que permitan la construcción de ligaduras y posibiliten el correcto aprovechamiento de las oportunidades otorgadas. Por otro lado, se apuesta al “gobierno de sí” - emprendedurismo, autogestión, participación - de un modo eficiente, esforzado y solidario a partir de lo cual cada sujeto - individual o colectivo-organizado - pueda autorealizarse, según sus propios intereses y capitales, en torno del gobierno de su propia vida:

El Estado tiene que construir confianza y ocupar el lugar que le corresponde como autoridad social en la aplicación de las políticas públicas y hacerlo junto a las organizaciones sociales y al sector privado, desde un ejercicio de responsabilidad social, común, con eje en la gente. (...) Las personas y las comunidades son agentes activos a la hora de determinar las formas y los medios de vida que más valoran. (M.D.S., Tomo II, 2010: 48-50).

2.1 El Discurso de Desarrollo Humano y local sostenible: la comunidad y la sociedad

Acorde a lo enunciado, las políticas sociales públicas se configuran en los tramos de saber propios del Desarrollo Humano, cuyas prácticas discursivas y extradiscursivas que operan como:

...el conjunto de dimensiones, condiciones y principios que, en el marco de las libertades civiles y considerando a los individuos como protagonistas de su desarrollo establecen: Una profunda valoración de la vida; la libertad de cada persona y de cada Nación de elegir la mejor manera de vivir, según sus parámetros culturales; el fortalecimiento de las capacidades de las personas en todas las dimensiones: personal, social, económica, política, cultural, educativa y otras. (M.D.S., Tomo II. 2010: 30).

Según diferentes tramos del discurso oficial, el Desarrollo Humano comprende la conjunción y satisfacción plena de tres elementos básicos que permiten medir las condiciones de vida, estos son: la supervivencia (salud, higiene, agua potable, medicina); acceso a la educación y acceso laboral. (M.D.S., Tomo II. 2010.).

Siguiendo los lineamientos propuestos por Amartya Sen⁴⁷¹, ante todo, y por la “teoría del capital humano” (Foucault, 2007), “el capital social y humano” de los sujetos gobernados

⁴⁷⁰ Novak Daniel. “Igualdad y Equidad”, en el diario Página 12, 12 de febrero del 2013. Cabe aclarar, que Novak perteneció al gabinete económico durante la presidencia de Néstor Kirchner, bajo el ministerio de Lavagna (2003-2005). En el año 2013 ejercía tareas como Coordinador de Desarrollo Inclusivo en PNUD, Argentina.

por las políticas sociales implican confianza, relaciones sociales, compromisos, vínculos, comunicación, organización y participación en las políticas institucionales, puesto que se trata de:

...un Desarrollo que tenga como protagonistas a los sujetos, fortaleciendo sus capacidades (capital humano), las redes sociales o tejido social, a través de las distintas formas de organización (capital social) y promoviendo la solidaridad, como eje central de estas nuevas costumbres, valores, tradiciones (ética). (M.D.S Tomo II. 2010: 41).

Este intento por incluir las voces de los excluidos, acorde a la perspectiva analítica sugerida y promovida por los pensadores anglofoucaultianos, pone el eje en las personas y comunidades como “agentes activos” capaces de determinar las formas y medios de vida, que más valoran. En tal entramado enunciativo también resuenan, con matiz local y nacional, las últimas olas de reformas del BM centradas en la “inversión en la propia gente”, el desarrollo integral y democrático. Pues, según el BM: “ellos tienen derecho a lo mismo que nosotros” (Zoellick, 2011), a partir de lo cual se trata de inversión social, en capitales de los sujetos pobres. En palabras del programa nacional de gobierno, de invertir en la generación de oportunidades “para crear activos patrimoniales, familiares y comunitarios”⁴⁷².

Sin embargo, las racionalidades peronistas-benefactoras también orientan las prácticas de gobierno de los otros y las recomendaciones para el gobierno de sí giran en torno de la solidaridad social, la integración y cohesión social:

Desde un Proyecto Nacional, como es el caso de nuestro país, se trata de crear las condiciones y oportunidades para el desarrollo de las capacidades, porque como bien se dijo –y hay que repetirlo “nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”. (...) Por eso la mirada debe ser nacional. (M.D.S., Tomo II, 2010: 56)

Según lo señalado por el DDS (Discurso de Desarrollo Social) argentino, el Desarrollo Humano se realiza en los “territorios locales”, por lo cual se trata de promover políticas sociales de “desarrollo local”, en el marco de:

...un proceso socio-político y económico integral, que coloca como eje a la comunidad más que a los proyectos. Interesa el crecimiento desde un desarrollo a escala humana, con una mirada local, (...) Adquieren importancia las redes sociales y productivas, siempre y cuando apunten al desarrollo humano (M.D.S. Tomo I. 2010: 48).

⁴⁷¹ Amartya Sen, considera que: “Una habilidad sería un logro, mientras que una capacidad es la habilidad para lograrla. Las habilidades constituyen diferentes aspectos de las condiciones de vida, las capacidades, en contrate, son nociones de libertad en el sentido positivo del término: las oportunidades reales que se tiene respecto de la vida que se puede llevar” (1987: 36). En este sentido, la posesión o acceso a bienes no son criterios para definir el nivel de vida, ya que la tasa de transformación de bienes y servicios a habilidades varía de persona a persona.

⁴⁷² M.D.S. Tomo II. 2010: 40.

De este modo, las comunidades se enuncian como “espacios de integración”, a partir de lo cual consideramos se neutraliza el conflicto y se descentraliza a escala local la “autogestión” de la existencia comunitaria e individual. Pues, aprovechando las oportunidades, en el suelo local de la comunidad es posible participar en *la gestión de la autogestión* de la propia vida, pobreza y desarrollo (Álvarez Leguizamón, 2008). Ante todo, promoviendo el valor singular de la “solidaridad”⁴⁷³ el cual, según dichas lógicas, permite ejercer de un modo relacional, las prácticas de gobierno dirigidas a los otros y al sí mismo.

La comunidad entonces, acorde al heterogéneo cruce de racionalidades políticas ya enunciado, si bien se ha convertido en un territorio de gobierno mapeado, calculado, medido y en tal sentido gobernable. A su vez, en el diagrama de poder trazado en el programa nacional, la comunidad, localidad o territorio local, advienen dispositivos de gobierno, en el proceso de re-configuración del tejido social para la integración nacional. Esto se promueve entre la promoción de redes locales colectivas, prácticas micro de intervención, crecimiento y mediación que no dejan de trazarse y hacer-se en torno del organicidad social y/o societal colectiva, en el marco discursivo de un territorio nacional unificado en orden y armonía⁴⁷⁴. Puesto que:

⁴⁷³La noción de “solidaridad”, en el entramado discursivo del Programa nacional es retomada de Durkheim, en tanto “solidaridad orgánica” que por ese carácter implica la cooperación y la organización, para lo cual se toma como modelo la constitución peronista del 49’: “...En definitiva, la solidaridad es conciencia social, construye organización, es una práctica de vida y da sustentabilidad al sistema democrático. Creemos también que no puede haber solidaridad, si esta no se ejecuta con reciprocidad social, porque: a) El bien común pertenece a la acción humana; b) La igualdad de derechos implica crear oportunidades para los que menos tienen; c) La conciencia moral es la valoración de la justicia social; y d) La responsabilidad social es parte de la justicia distributiva” (M.D.S. Tomo I, 2010: 40-41). Además de Tönnies y Weber usaron la fórmula comunidad - sociedad de manera explícita, otros pensadores diseñaron lo que De Marinis llama “equivalentes funcionales” de la misma, como es el caso de Durkheim quien formuló la oposición entre solidaridad mecánica y orgánica, cuando en realidad refería a una misma mutación histórica fundamental desde la tradición hacia la modernidad. En tal sentido, la sociedad era un registro básico de una totalidad, de un todo constituido por partes necesariamente interconectadas entre sí; una configuración estructurada alrededor de una matriz básica de solidaridad y, que disponía de una noción demarcatoria fuerte de la normalidad y la normatividad. Ver: De Marinis, 2005:4-10. Esta es la postura que encuentra como mayor referente a Durkheim, cuya cita es la otorgada por el Discurso de Desarrollo Social tejido en el Estado Nacional para referir a la sociedad y solidaridad que guía las prácticas e intervenciones gubernamentales en torno de las poblaciones pobres y sus territorios.

⁴⁷⁴ Esto no impide observar ciertas técnicas propias de los mecanismos disciplinares de intervención y control, sobre todo en el advenir de ciertas comunidades locales, como espacios de “control y encierro”, en torno del cual ejercer el gobierno de los cuerpos y del “riesgo”. Acerca de los dispositivos de seguridad, según los estudios genealógicos que han analizado *el riesgo*, en el siglo XIX implicó modos de entender y actuar sobre la desgracia en términos de riesgo. En el caso de Argentina, las “poblaciones de riesgo y en riesgo” tuvieron su auge como sujetos de gobierno en la década de los 90’; a partir de 2003, dicho gobierno se despliega en la construcción o generación de condiciones de posibilidad para el desarrollo y la integración social; donde el seguro social es considerado un beneficio ciudadano, produciendo efectos morales de responsabilidad, regularidad de los hábitos del trabajo, de la cultura del trabajo y obligaciones sociales. En tal sentido, en el gobierno de las poblaciones pobres en la Argentina de la época analizada, no se ejerce solamente un vuelco hacia la autorregulación prudente del riesgo, que implica la desprotección del Estado y la muerte de lo social, ya que no se trata en este caso puntual

*Es necesario trabajar desde una política social integral, desde un Estado en movimiento, con el centro puesto en la persona, no como un individuo aislado, sino como colectivos humanos y desde sus singularidades, atravesados por la trama social en la que están inmersos, buscando la construcción de un 'espacio inclusivo' que fortalezca los derechos ciudadanos políticos, económicos, sociales, culturales y la equidad territorial. Esto implica que la comunidad no puede ser mera receptora, depositaria pasiva de programas focalizados y estancos, porque si no se toma a la persona y sus derechos como un fin en sí mismo, se corre el riesgo de repetir las políticas concebidas desde una única mirada, con una concepción fragmentaria y utilitarista del todo social (M.D.S, Tomo I, 2010: 109-110).*⁴⁷⁵

Lo antedicho supone un Estado activo con inversión social y promoción del desarrollo humano, el que, a partir del desarrollo local y la equidad territorial se orienta a:

*...repotenciar la educación, la salud, la generación de empleo, los vínculos solidarios desde los lugares territoriales de convivencia, la familia, el barrio, el municipio, la escuela, la empresa, los sindicatos, las cooperativas, los movimientos sociales, los partidos políticos, las iglesias. Desarrollo local es para nosotros, tener una visión estratégica de crecimiento con desarrollo humano, centrando nuestra mirada y nuestra acción en un Proyecto Nacional que contemple una mejora distributiva estructural, trabajando desde el territorio en un país federal, buscando su integración interna y avanzando en la integración continental. (M.D.S., Tomo II. 2010: 58).*⁴⁷⁶

3. Dispositivos de Intervención: entre empleables e inempleables, decentes e indecentes, la familia y el trabajo.

En el trazo del Programa de gobierno analizado, es posible identificar dos grandes ejes de intervención en el campo de las políticas sociales: “el trabajo y la familia”, los cuales se materializan en dispositivos diversos y divergentes.

Bajo la ya señalada consigna de que “el trabajo es la mejor política social”, Alicia Kirchner, la Ministra de desarrollo social, partía de reconocer que: “la pobreza es compleja, hay múltiples facetes que inciden”, ante lo cual señalaba:

... por eso nosotros trabajamos en función de la realidad de cada lugar (...) vamos con el Plan Ahí a las localidades más vulnerables en función de las capacidades del territorio y la gente que está allí (...) Nuestra política social apunta a dos ejes: uno es la protección de la familia- a través del Plan Familias y de las pensiones no contributivas- y el otro es generar empleo mediante la economía social. (Diario Página 12, 22/02/ 2009)

de una privatización de los seguros para prever el futuro, sino de un protagonismo del Estado como regulador y ordenador de los mecanismos de intervención y gestión del gobierno hacia y a través de la comunidad.

⁴⁷⁵ Discurso de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el Ministerio de Desarrollo Social, Mayo 2005. La Bisagra, 2007...op...cit.

⁴⁷⁶ Para la puesta en marcha del Desarrollo local humanizado propuesto se diagramaron diferentes mecanismos de gestión pública en el territorio con el objetivo de crear herramientas transversales con eje en la familia y en el trabajo, se diseñaron espacios públicos que buscan transformar la realidad en pos de la inclusión social, profundizando el desarrollo local. Según tramos oficiales de enunciación, se buscó consolidar un modelo de gestión pública integral en el territorio que tienda al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a partir de acciones interdisciplinarias. Así se crearon en todo el país los Centros de Referencia, los Centros Integradores Comunitarios, las Mesas de Gestión, el Plan de Abordaje Integral “Ahí, en el lugar”, acompañados con trabajo social y con la formación de cuadros en articulación con las Universidades Nacionales. Ver: M.D.S., Tomo I, 2010: 79-126.

El *Plan Ahí en el lugar* (Decreto 621/2008)⁴⁷⁷, es presentado como un “abordaje integral para combatir la pobreza” y pretende intervenir: “...en los núcleos duros de la pobreza para promover el ejercicio e los derechos sociales”. El plan promueve: “...el desarrollo social y humano de las personas, familias y comunidades en situación de alta vulnerabilidad sociales, a través de la implementación de políticas públicas integrales” (MDS, I, 2010: 145).

Las políticas sociales “integrales”, según lo ya señalado se asocian al objetivo de “desarrollar las capacidades humanas”, por tanto el desarrollo social, que es a su vez local, según la ministra:

*...no se resuelve con el solo acceso a un ingreso social; lo más importante es desarrollar las capacidades humanas para poder colocarse delante de los procesos (...) si me permiten la metáfora, las políticas sociales no son, precisamente, como el horno microondas que calienta rápido, pero ¿a quién se le ocurre cocinar en él un buen guiso?.*⁴⁷⁸

Relevantes resultan las palabras de la Ministra, considerando que, en las tramas del discurso de capital humano centrado en las personas, sus capacidades y el gobierno microconductual de las conductas, el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres adviene un “pulsado guiso”, en el cual se entrecruzan diferentes lógicas y prácticas desplegadas entre lo local, lo popular, lo social de la economía, la educación y el desarrollo.

Antes de recorrer los diferentes dispositivos que, en primera instancia, se construyen en torno a la reconfiguración del PJJHD, cabe referir al Decreto N° 1506/2004⁴⁷⁹, el cual estableció una clara demarcación entre “empleables e inempleables”⁴⁸⁰, acorde a lo

⁴⁷⁷ El *Plan Ahí* se articula en 4 polos: 1-Polo de prestaciones y servicios (salud, educación y trabajo) 2. Polo de Infraestructura social (infraestructura y equipamiento) 3. Polo de organización social. 4. Polo productivo y de servicio. Estos polos se trazan en una red vincular entre las mesas de gestión cuya nominación remite a la “comunidad organizada”, la vinculación interministerial, la vinculación entre los Estados municipales, provinciales y nacional y el Estado, con presencia en el territorio.

⁴⁷⁸ Discurso de la Ministra Alicia Kirchner en: http://www.desarrollosocial.gov.ar/Discurso_asl.asp?idprensa=4, consultada, setiembre 2013.

⁴⁷⁹ Según el decreto se pretende: “Prorrogase, a partir de la fecha de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2005, la Emergencia Ocupacional Nacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar. Establécese un plazo para que los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social realicen una clasificación de los beneficiarios del citado Programa de acuerdo a las condiciones de empleabilidad que, eventualmente, reúnan los mismos”. Bs. As., 28/10/2004

⁴⁸⁰ Fijase un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del 1° de enero de 2005 para que los MINISTERIOS de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de DESARROLLO SOCIAL en forma conjunta y sobre la base de los datos con que a la fecha cuentan ambas jurisdicciones, realicen una clasificación de los beneficiarios del PROGRAMA JEFES DE HOGAR de acuerdo a las condiciones de empleabilidad que, eventualmente, reúnan los mismos. A tal fin definirán los requisitos y perfiles que deban acreditar los interesados. Dicho plazo podrá ser prorrogado por igual término y por única vez por resolución conjunta de los citados Ministerios (Art. 3).

trabajado en el apartado I del capítulo 2, para disponer que quienes tuviesen posibilidad de empleo continuarían percibiendo el ingreso a través del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social:

Los beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que entenderá en todo lo atinente a la inserción y reinserción laboral de los destinatarios, a través de programas específicos y/ o acciones de empleo transitorio, formación profesional y promoción del empleo privado. (Art. 4, resaltados propio).

Mientras que aquellas poblaciones más vulnerables y por ende, inempleables, serían derivadas a programas dependientes del MDS:

Los beneficiarios del PROGRAMA JEFES DE HOGAR que no fueran calificados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º del presente, podrán ser incorporados a los PROGRAMAS destinados a la atención de grupos vulnerables, la mejora de ingresos y de desarrollo humano creados o a crearse en el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. (Art. 5, resaltado propios)

Los “empleables”, de acuerdo a lo señalado por la Ministra Alicia Kirchner, serían redireccionados hacia los senderos de la economía social:

...la economía social no mueve la aguja de la economía, pero crea toda una organización social, una organización comunitaria, una organización familiar (...) que la política esté dirigida al tejido social, que tenga sentido en el desarrollo humano y que tenga sentido de una comunidad organizándose. (Página 12, 21/09/2008).

Resuenan en estos tramos enunciativos algunos elementos propios de la racionalidad política moral-pastoral, dirigida a la reconstrucción de vínculos morales centrados ante todo en la familia, así como de la racionalidad tecnocrática con matices de capital humano dirigida a la autogestión de la propia vida, mediante la inversión de capitales sociales y humanos, ante todo en los tejidos de sociabilidad primaria comunal y la racionalidad peronista-benefactora, en los resonares de la cultura del trabajo y la comunidad organizada, según criterios de dignidad y del trabajo, como dinamizador social.

3.1- La re-edición del PJJHD: Plan Familia, Plan Manos a la Obra, Programa Nacional de Capacitación y Empleo

En primer lugar haremos referencia al “*Plan Familia*” (PF, de ahora en más)⁴⁸¹ en el proceso de “desactivación de la población activada” por el PJJHD. El PF, en el área del

⁴⁸¹ Para el 2003 de los 76 programas dispersos y superpuestos que existían en el ámbito de desarrollo social se diseñaron cuatro líneas programáticas: Plan Familia Plan 3. Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social. 4. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 5. Plan Nacional de Recreación y Deporte Social. Para el 2010 se integran en lo que el Ministerio llama dos “marcas y/o ejes de acción”: Argentina Trabaja Familia Argentina. Éste último continúa en la línea del Plan Familia en torno de las siguientes líneas de Acción: Niñez; Juventud; Adultos Mayores; Pensiones No Contributivas; Comunidad; Seguridad Alimentaria; Deporte y

Ministerio de Desarrollo Social se dirigió a las “familias” con hijos menores de 19 años o embarazadas (Decreto N° 825/04) con jefaturas “inempleables”. La migración y/o traspaso “optativo” de los/as beneficiarios/as al PF dependía de que se cumpliera el requisito de tener a cargo hijos menores o discapacitados, de que el nivel de escolaridad de quien fuese jefe/a fuera menor a la secundaria completa y que, en caso de tratarse de varones, que no hubiese una mujer adulta en el hogar. Por tanto, se trató de un Plan orientado a “mujeres vulnerables” con baja “calificación educativa y niños a cargo”.

El Programa resultó una reformulación de un esquema puesto en marcha en 1996, el Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV., Res. SDS. 1588/96) financiado por el BID desde 2002, cuando sería renombrado como “Programa de Atención a Grupos Vulnerables-Ingreso para el Desarrollo Humano” (PAGV-IDH).

En el rediseño que dichos programas antecesores cobrarían a partir del 2004, el PF, como un programa de reperfilamiento y migración del PJJHD, el mismo constaría de tres componentes; el primer componente era el de un ingreso no remunerativo cuyo monto se incrementaba de acuerdo a la cantidad de hijos (hasta 5); el segundo era de “promoción familiar y comunitaria”, destinado a brindar acciones de promoción, servicios y prestaciones sociales a las familias en educación, salud, capacitación para el trabajo, desarrollo comunitario y ciudadano y consolidación de redes sociales primarias. El tercero, en igualdad de condiciones que los anteriores, era denominado “componente de fortalecimiento institucional”, cuyo objetivo era mejorar la eficacia y la transparencia de los procedimientos mediante la evaluación y monitoreo de los sistemas de administración.

La contraparte requerida a los/as beneficiarios/as era la vacunación de los menores a cargo del titular (acorde al “Plan Nacional de Vacunación”), los controles bimestrales del embarazo y la asistencia regular de los niños a las escuelas. Dicho Plan, dirigido y centrado en “la reconfiguración y fortalecimiento de la familia”, como espacio de integración a la sociedad y la comunidad local inmediata, responde ante todo al discurso instalado en la época en que el neoliberalismo afectó el quiebre familiar y los lazos sociales, ante todo mediante una, lo que se considera una “erosión moral”, que debería ser recompuesta. Esto pretendía ser logrado mediante el discurso pastoral-moral y católico-social puesto en juego en torno de la necesidad de que los niños vuelvan a comer en

Recreación. Las cuales se realizan mediante programas y actividades específicas. MDS. Tomo I, 2010: 169-70 y 206-242.

familia y no en los comedores comunitarios. En sintonía, se apostó al discurso peronista a partir de una remitencia a la constitución del 1949, en la cual se señalaba que la familia era el “centro” de integración y cohesión social y política”.

El PF, entonces, representaba un paso atrás, siguiendo a Grondona (2012) respecto del camino iniciado en 1996 por el programa *workfare* “Servicios Comunitarios” (complemento del Plan Trabajar) que, aunque orientado a mujeres, impulsaba la contraprestación laboral/comunitaria. En tanto, a partir de las conclusiones post evaluaciones y monitoreos globalmente validados se había “aprendido” que organizar espacios de contraprestación tenía un costo, en su mayoría, demasiado elevado.

A su vez, la activación de población tradicionalmente inactiva, como consecuencia de la masificación del plan, impedía que el subsidio cumpliera un papel como estímulo al empleo, pues estos sectores no “pagaban ningún costo” por acceder a los que se considera un “beneficio”. En tal sentido se ejerce un proceso “fino” de racionalización de la intervención, bajo el lema de reorganizar la dispersión de planes y beneficiarios dispersos y superpuestos en las décadas anteriores.

Ahora bien, dicho Plan también puso en juego la teoría de capital humano - de perfil neoliberal - dirigida a la inversión en “capitales humanos y sociales”, ante todo humanos, redescubriendo y reconstruyendo a la “familia” como dispositivo de perfil empresarial que posibilitaría la contención e inversión en el futuro, que además permitiría alivianar la gestión del siempre alarmante crecimiento de jóvenes por fuera del trabajo y de la escuela. Desde este discurso el PF entraría dentro de las *Conditional Cash Transfer* (CCT), cuyos ejemplos latinoamericanos transforman el programa mexicano “Progreso/Oportunidades” (1997) o el brasileño “Bolsa Familia” (1996). Si bien los programas de transferencias condicionadas, suelen, en algunos casos considerarse “superadoras” de las políticas neoliberales, se construyen en continuas discontinuidades con dichas racionalidades de gobierno.

Según Madariaga (2009) las condicionalidades (educativas, de salud, entre otras) de estos programas tienen el objetivo de generar un cambio de conducta positivo en las familias hacia la inversión en capital humano, además del efecto inmerso de las transferencias mismas, se pretende generar un efecto de sustitución. Esta sumatoria entre transferencias+condicionalidad resultaría una inversión en capital humano, ante todo el de los niños a largo plazo, mientras que en lo inmediato las transferencias monetarias buscarían superar momentáneamente las barreras que impiden a dichas familias pobres

invertir en dichos capitales. La sumatoria de la condicionalidad extiende la transitoriedad de la transferencia hacia un largo plazo posibilitando la acumulación de capital humano, que en unidad con la capacitación e información, parte también de las condicionalidades, posibilitaría superar la pobreza intergeneracional, ante todo.

La familia “empresa” debería realizar inversiones racionales, siempre y cuando cumpla la condición de no superar el salario mínimos para acceder al beneficio, lo cual se complementa con la contraprestación obligatoria (estímulo a la inversión en capital humano) vinculando los roles familiares y de cuidado de los niños y jóvenes. Ahora bien, dicha condición referida a los ingresos mínimos y una obligación que pareciera marcar la ausencia de escolaridad, como responsabilidad familiar, confluye en la construcción del “pobre beneficiario” como responsables-culpable de su condición de pobre.

Pues, a este ejercicio de gobierno “microconductual neoliberal” (Grondona, 2012: 488), se le suma la noción y tarea de la “corresponsabilidad”, en torno de la cual se sustentan estas políticas “sociales” que promueven la responsabilización de los beneficiarios. Según el BM, se sostendría que las transferencias condicionadas proveen dinero a las familias pobres a cambio de un “contrato social” que las compromete, discurso que resultaría impugnado desde la lógica del “derecho”, ya que supondría una responsabilización frente a lo que resultaba una falta de protección de derechos sociales por parte del Estado.

En el caso argentino, donde se entrecruzaban ambos discursos y racionalidades políticas, el PF aplicaba una “carta de compromiso” en la que los/as beneficiarios/as, no solo asumían la responsabilidad de cumplir con las contraprestaciones, sino que también renunciaban al “derecho de reclamo alguno”, en caso de ver suspendido el “beneficio”. Desde la perspectiva del CELS (2007) se trataba de una medida inconstitucional, en virtud de lo cual elevaron un pedido de informe y rectificación al Ministerio de Desarrollo social.

Otra estrategia programática de reperfilamiento del PJJHD promovida en el 2003 fue el *Programa Manos a la Obra* del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido al fomento del asociativismo como “salida” de la pobreza (vigente hasta 2013). Ya hemos enunciado que dicho programa es un efecto del llamado “gabinete piquetero” al cual convocó el presidente apenas asumió, bajo un discurso de transversalidad y participación activa de las organizaciones sociales de trabajadores desocupados en la planificación y cogestión de programas dirigidos a producir ciertos tipos de “trabajos/empleos”, en los territorios locales y en el dispositivo de la economía social.

Este programa se puso en marcha en 2003 con el fin de: 1) contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social en todo el país, 2) promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero; 3) fortalecer a organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y redes, a fin de mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social, mejorar su efectividad y generar mayores capacidades y opciones a las personas, promoviendo la descentralización de los diversos actores sociales de cada localidad (Res. MDS: N° 1.375/04). El programa se organizaba a partir de tres componentes, uno de apoyo económico y financiero, el segundo de asistencia técnica y capacitación y el tercero de fortalecimiento institucional.

Nuevamente, en las tramas de relación de los diferentes elementos que constituyen el Programa, entre los cuales se encuentra la lucha piquetera, hacen del mismo un dispositivo atravesado por los discursos en torno de la subsidiaridad del Estado y el valor de la independencia, desde un perfil, nuevamente pastoral-moral y neoliberal, tecnocráticos, siguiendo a Grondona (2012). La meta era romper “el neo”-liberalismo de las prácticas individualistas y sectarias, hacia una ética social y de responsabilidad social, así como lograr el desarrollo humano solidario, ese que se construye en vínculo con el otro. Del mismo modo, aparecen tramas enunciativas, que en las resonancias que recuperan la centralidad del trabajo como “formador moral”, ante todo en el intento por fomentar y recuperar la “cultura del trabajo”, cuando los efectos de gobierno la destruyeron o invisibilizaron, imposibilitando el trabajo u otorgando trabajo que no es trabajo, según enunciaciones nativas.⁴⁸²

También en este proceso de re-edición del PJJHD se encuentra la gestión individualizada de los desocupados “empleables”. Ante todo bajo el principal programa que operaría en esta estrategia: el *Programa Nacional de Capacitación y Empleo*. Dicho programa asignaba mensualmente una suma de 225 pesos a cambio de que el/la beneficiario/a concurriera a la Oficina de Empleo Municipal para desarrollar un plan de búsqueda de empleo, mientras que se solicitaba la participación en actividades de orientación, formación y práctica laboral, y en los restantes servicios que le ayudasen a mejorar su “empleabilidad” y que aceptara las ofertas de trabajos “adecuados y decentes” a su experiencia y calificación. El/la beneficiario/a accedía a servicios de orientación laboral al desempleado y apoyo a la búsqueda de empleo, a una “intermediación laboral que vincule las demandas de las empresas y las capacidades de los desempleados”, a la formación y

⁴⁸² Ver: Arroyo, 2005...op...cit.

capacitación laboral y entrenamiento para los desocupados, a la finalización de estudios primarios y secundarios, a una derivación a servicios sociales en caso de detectar un perfil más “vulnerable que “empleable” (Decreto N° 336/2006). El ingreso al Seguro de Capacitación y Empleo era voluntario y el plazo de permanencia era de dos años.

Las oficinas de Empleo⁴⁸³ fuertemente expandidas a nivel nacional, respondían a un esquema de intervención en el desempleo y el gobierno de las poblaciones desocupadas, así como en la necesidad de movilizar esta fuerza de trabajo “empleable” en el área del Ministerio de Trabajo, bajo la sospecha de que había recaído en la dependencia generada por la subsidiariedad del gobierno anterior.

Así, estos mecanismos de intervención y gestión del desempleo y las poblaciones desocupadas y pobres, por un lado contienen a los vulnerables propiciando una inversión en capitales y un ejercicio de gobierno de “un sí mismo para otro”, entre la colonización ético-moral y la productividad de los cuerpos; mientras crean “puentes” para el mercado de trabajo. Entre las contenciones y los puentes, las ofertas de empleo resultaban y siguen resultando, paradójicamente inestables, insuficientes y a veces nulas. En muchos casos, se siguen produciendo “sujetos trabajadores” para trabajos que no existen o que duran meses o que se caen por el solo hecho de que los sujetos, individuales y/o colectivos, de gobierno, no pueden sostener, debido a las condiciones inestables de los planes y programas, de las cooperativas y/o espacios asociativos de trabajo, en el campo diferencial de la economía social, tal como analizaremos en el apartado III.

Ahora bien, este esquema de gobierno dirigido a las poblaciones desocupadas y pobres, parece sufrir un viraje con la AUH a partir del 2009. La extensión del Seguro de desempleo a un inédito 12% de la población desempleada y de institutos de protección sociales a poblaciones excluidas de ella (servicio doméstico, etc.) pueden ser indicadores de lo que podría ser considerado una configuración singular a nivel del gobierno de las fuerzas de trabajo. Diagrama este en el cual la reconfiguración cobra una singularidad específica entre discontinuas continuidades que reamoldan, a su vez, el rol del Estado y profundizan, entre tanto, lógicas dirigidas a la administración gestiva de la pobreza, entre otras cuestiones.

⁴⁸³ Según Grondona, las oficinas públicas de colocación fueron uno de los primeros modos de gestión del desempleo en Argentina en los albores del siglo XX, y estaban asociadas, a diferencia de la actualidad, a un mercado de trabajo signado por el empleo estacional y la necesidad de movilidad geográfica de la población (2012: 492).

Ante todo, cabe resaltar que los índices de medición numeral de desempleo, pobreza e indigencia disminuyeron bruscamente, en el período analizado. Ambos alcanzaron un único dígito⁴⁸⁴ durante casi una década, más allá de las cuestiones diferenciales de los modos y esquemas de medición.

3.2- La Asignación Universal por Hijo/a: entre el salto y la universalidad condicionada de la transferencia

Un nuevo escenario parece abrirse e instalarse con la Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH), creada bajo decreto presidencial N° 1602/2009 cuyos considerandos hicieron hincapié en lo establecido en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, acerca de garantizar su ejercicio y disfrute, empleo, efectivo y permanente.

El decreto establece que la AUH consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abona a uno solo de los padres, tutores curadores o parientes por consanguineidad hasta el tercer grado, por cada menor de dieciocho años que se encuentre a su cargo, o sin límite de edad cuando se trata de un hijo discapacitado. El art. 1 incorpora la Ley 24.724 de Asignaciones Familiares:

...un subsistema no contributivo de Asignaciones Familiares por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentran desocupados o se desempeñan en la economía informal.

La AUH complementa, de este modo, el régimen de Asignaciones Familiares, al incorporar un subsistema no contributivo que tiene en cuenta la situación de aquellas familias con trabajadores informales o desocupados, con niños menores de 18 años.

El programa comenzó otorgando una prestación monetaria no contributiva de 180 pesos (el mismo monto que cobran los trabajadores formales) de carácter mensual, que se abona a uno solo de los padres o tutor por cada niña o niño menor de 18 años a cargo, o sin límite de edad, cuando se trate de un hijo discapacitado. Entretanto uno de sus objetivos principales es garantizar igualdad de acceso a quienes tienen empleos no registrados o

⁴⁸⁴ Sin pretender realizar un análisis riguroso de los índices de pobreza, cabe señalar que Argentina era el país con menores índices de toda la región latinoamericana, según la CEPAL. En el segundo semestre del 2012 el número de personas bajo la línea de pobreza bajó al 5,4% a diferencia del 6,7% de igual período 2011. Así el índice de indigencia, en el período de julio a diciembre, bajó al 1,5% del 1,7% en igual período 2011. Y, a lo largo del año 2012 la desocupación quedó en 6,9%. Fuentes: presidencia de la Nación; CEPAL; ONU. Cabe aclarar que será motivo de otro escrito el análisis de dichos mecanismos de “medición” de las poblaciones y sus movimientos, pues han sufrido algunas variantes, estratégicas, desde el 2003 hasta el período analizado en el caso puntual del INDEC.

están desempleados y a las personas que se desempeñan en el servicio doméstico⁴⁸⁵.

El 80 por ciento del monto es abonado mensualmente a los titulares vía transferencia bancaria y a través del sistema de pagos de la ANSES. El veinte por ciento restante se acumula en una caja de ahorro a nombre del titular y se percibe a través de una tarjeta magnética una vez por año y sólo con la condición de entregar los certificados de salud y educación⁴⁸⁶. Puesto que, se establece como requisito/contraprestante la obligatoriedad de los controles sanitarios y del plan de vacunación para los niños menores de cuatro años de edad, así como la concurrencia a establecimientos educativos públicos para los niños de cinco a 18 años de edad. Los logros conseguidos con esta medida han sido extremadamente importantes, a partir de lo cual ingresa nuevamente el juego de “transferencia+condicionalidad”, según lo ya analizado, aunque con un halo de “universalidad” “paliativa”, según el decreto.

En el 2011 se suma la Asignación por Embarazo para la protección Social, que incluye a las mujeres embarazadas a partir de la décima segunda semana de gestación, incorporando la asignación por embarazo en el decreto modificatorio de la Ley N°24714, dentro del subsistema no contributivo.

Un grupo considerable de “beneficiarios/as” fueron quienes migraron automáticamente

⁴⁸⁵ Las discusiones en torno a la pérdida de poder adquisitivo que implica un monto fijo, en un contexto como el de la época analizada de inflación moderada y sostenida, fueron clausuradas con el aumento otorgado a fines de julio del 2010, cuando junto con el aumento establecido en la Ley de Movilidad de las jubilaciones mínimas, también se otorgó un aumento del 22,2% a las asignaciones familiares y a la AUH, llevando el piso a \$220 a partir de agosto del 2010. No obstante, el régimen de asignaciones familiares establece montos diferenciales de acuerdo al ingreso del jefe de hogar y a la zona de residencia. Para los residentes en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida Islas del Atlántico Sur los montos van desde \$271 a un máximo de \$388, es decir, 1,5 a 2 veces más que el monto base. En el caso de la AUH, el monto no tiene ninguna variación para los residentes de estas regiones. En los primeros cuatro años de funcionamiento de la AUH, el monto pagado ha sido aumentado anualmente, mediante decretos presidenciales. Para 2012/13, época analizada, los montos ascendieron a \$340 para las Asignaciones Universales y por Embarazo para Protección Social a \$1.080-, para hijos/as discapacitados/as. Ver: Campana, 2012...op...cit.

⁴⁸⁶ Estas asignaciones son una suma fija mensual, destinada a: grupos familiares que se encuentren desocupados, es decir, que no perciben ninguna suma de dinero en concepto de prestaciones contributivas o no contributivas, nacionales o provinciales; a trabajadores no registrados que se desempeñen en la economía informal, percibiendo un salario menor al Salario Mínimo Vital y Móvil; a trabajadores inscriptos en los planes “Argentina Trabaja / Manos a la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social o “Programa de Trabajo Autogestionado” “Jóvenes con Más y mejor Trabajo”, “Programa Promover la igualdad de Oportunidades”; “Programa de Inserción Laboral” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributistas Sociales, a trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, incorporados por Resolución 393/2009 de ANSES. Hacia fines del 2010 también fueron incluidos trabajadores de temporada, en relación de dependencia que se encuentren con reserva de puesto de trabajo a mes completo y que no perciben ninguna suma de dinero durante ese período (agro, zafreiros, cosecheros, recolectores, guardavidas, empleados de hoteles o comercios de temporada alta, etc). También aquellas personas que se encuentren privados de su libertad, incluyendo a quienes desempeñen tareas dentro de las Unidades del Servicio Penitenciario Federal, inscriptas dentro del “Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE)”, y dentro del “Servicio Penitenciario Provincial”, siendo determinante la condición procesal de los internos. Fuente: <http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-83>; consultada: setiembre, 2013.

del PF, sin ningún trámite extra. Hubo además una importante incorporación de nuevos/as beneficiarios/as, considerando que la gestión del turno para solicitar la AUH es individual y puede hacerse personalmente, vía el portal de internet de la ANSES o mediante el envío de SMS desde teléfonos móviles.

Encontramos diferentes evaluaciones que nos permiten observar los alcances y efectos de dicha medida, sus debilidades y fortalezas. Por un lado, un grupo de investigadores⁴⁸⁷ de diferentes centros académicos, modeló un escenario para medir el impacto de la AUH sobre cuatro dimensiones del bienestar: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa. Según dicho informe, el impacto de las transferencias de dinero hace caer en forma contundente la cantidad de personas y hogares en situación de pobreza e indigencia, reduciendo, por ende los niveles de desigualdad y permitiendo que algunos sectores “condenados” a la indigencia, tengan otras oportunidades para “escapar” de la situación. Según dicho estudio, la AUH tendría un importante impacto al mejorar el desempleo de las cuatro dimensiones del bienestar señaladas, es decir, que a partir de la AUH habría menos personas, algunas, en situación de pobreza por ingresos, muchas menos en situación de indigencia, mientras que se reduce la desigualdad y la vulnerabilidad relativa de amplio sectores (Agis, 2010).

Otro estudio de la época fue realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos. En el mismo se argumentaba que no puede considerarse universal un programa que tiene claros criterios de selectividad y condicionalidad. En tal sentido se hace hincapié en la “condicionalidad” de la transferencia, señalando que el monto de la AUH sufre una retención del 20% por parte de ANSES, que queda condicionado al cumplimiento de los controles sanitarios y escolares. Dicho monto es liquidado una vez al año, si se cumplieron, bajo estricto control, las condiciones establecidas. Según el informe, dicha cláusula instala criterios diferenciales entre los hijos, según se trate de padres con empleos registrados o no, por otro lado, el art. 9 de la reglamentación establece que aquellas asignaciones son exigibles a la totalidad de los niños del grupo familiar, independientemente de que reciban, o no, el beneficio. Por tanto, una familia con más de cinco hijos, solo recibe el beneficio por los cinco primeros, pero debe garantizar el control sanitario y escolar de todos (Lozano,

⁴⁸⁷ El informe llevó por título: *El Impacto de la Asignación Universal por Hijo* (Agis, Cañete y Panigo, 2009). El mismo se escribió a partir del datos de la EPH, lo cuales en ese momento correspondían al segundo trimestre de 2009, se suprimieron los efectos de los montos efectivamente transferidos en diciembre de 2009 como si hubieran sido efectuados en ese segundo trimestre.

2010, en: Campana, 2012: 140).

Por su parte, un estudio realizado en el marco de ANSES señala que la AUH se enmarca en los programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (TCI):

...Los argumentos principales a favor de las TCI son aliviar la pobreza de corto plazo, por un lado, e incentivar la formación de capital humano para enfrentar la pobreza a largo plazo, por el otro. (...) Así, la AUH representa una de las políticas más relevantes de los últimos años en lo que se refiere a Protección social, con un fuerte impacto. En particular el programa tiene como objetivo luchar contra la pobreza e incentivar la inversión en capital humano. (Calabria, Calero, D'Elia, Gaiada, y Rottenschweiler, ANSES, 2011: 15, resultados propios).

Acorde a lo antedicho, en el mapa geopolítico de la época (esbozado en el capítulo 3) la AUH se manifiesta como la medida de “protección” social universal que, por un lado a diferencia de los otros programas de TCI se plantea como formando parte de los Sistemas de Seguridad Social y además su financiamiento proviene de fondos de los trabajadores activos (Álvarez, Leguizamón, Ibarra y Naharro, 2010). En tal sentido, la AUH expande las políticas sociales a espacios “no pobres o no tan pobres” y deja de lado la práctica focalizadora de las políticas de intervención, mientras que por otro lado se instala, bajo la lógica de la teoría de capital humano. A su vez, siguiendo a Campana (2012) podemos considerar, por un lado, que dicha medida resulta “universalizante”, no universal, es decir, posee un alcance territorial extendido y flexible a los cambios que se producen en las familias, dado que se mantienen abiertas las posibilidades de baja e incorporación de nuevos/as beneficiarios/as. En tal sentido, una de las innovaciones consideradas relevantes es la relación directa del ciudadano para con el Estado en la gestión del recurso, a través del ente ANSES, mientras que también se produce una mutación en la construcción y constitución del “sujeto de gobierno e intervención”, en tanto: “...antes era el mérito y la necesidad lo que lo demarcaba y en el caso de la AUH, aparece el derecho de ciudadanía por sobre el mérito” (Campana, 2012: 140). Esto marca una discontinuidad con las políticas sociales instaladas por el programa de gobierno de los 90’ analizado en el capítulo 2, de perfil predominantemente, focalizante, asistencial y autogestivo empresarial de la propia existencia.

En tal sentido, resuenan los criterios instalados por Andrenacci (2010) para caracterizar a los regímenes de bienestar en Latinoamérica:

En cuanto a la inclusión problemática a través del mercado, la AUH podría comprenderse como un esfuerzo de regulación de la economía a través del mecanismo de formalización del empleo, de generación de empleabilidad y de regulación del comercio y del consumo favorable al sostén o a la reducción el costo de vida. Por otro lado, con respecto a la subordinación negativa por la política social, la generalización de la transferencia

condicionada de ingreso representa un avance en forma de reconocimiento de una suerte de derecho al consumo. (Andrenacci, 2010, en: Campana, 2012: 141).

Cabe consignar, que no solo se trata de programáticas de gobierno trazadas en los albores actuales de perfil benefactor y las prácticas de gobierno dirigidas a la regulación estatal del empleo y promoción del consumo, bajo los criterios de la ciudadanía social. También tal cual lo enunciaba el informe de ANSES en torno del as TCI se trata de inversiones en “capitales humanos”. De este modo, la condición de la transferencia del ingreso a partir del control de la salud y la educación no solo remiten a derechos que las poblaciones pobres poseen y ejercen, con la garantía del Estado, sino también, en el cruce múltiple de lógicas y prácticas de gobierno, a una inversión en capitales que permitirían a dicho sujetos advenir “dueños de sus destinos” y protagonistas del desarrollo local y humano. En este cruce y singularmente, resultan configuradas subjetividades - pobres - bajo el perfil de “ciudadanos emprendedores”.

Lo antedicho remite ante todo a la sumatoria entre transferencia y condicionalidad, y en advertir que lo universalizante no es universal. A su vez, esto también nos lleva a preguntarnos si los “servicios” educativos y de salud ¿podrían absorber la nueva demanda, de un modo que no derive en una mayor precarización de las prestaciones?

De hecho, en los considerandos del decreto de la AUH la misma es señalada como “paliativa”, por ende, no se dirige a una erradicación y/o garantiza de solución estructural del problema de la pobreza:

...esta medida por sí no puede garantizar la salida de la pobreza de sus beneficiarios (...) una medida de tal naturaleza tiene, sin embargo, una indudable relevancia en cuanto significa más dinero en los bolsillos de los sectores postergados. No implica necesariamente el fin de la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta reparadora a una población que ha sido castigada por políticas económicas de corte neoliberal. (Considerandos).

Puesto que, la racionalidad política que atraviesa esta práctica de gobierno sostiene que es el crecimiento económico y la creación de trabajo resultarían la mejor política social, sumado a los servicios, por lo menos básicos de salud, educación y vivienda hacia y en torno del entramado discursivo y programático del desarrollo humano, en clave de mínimos biológicos (Álvarez Leguizamón, 2008).

Por tanto, y en concordancia con lo planteado por Campana, (2012) una de la cuestiones más controversiales sigue siendo la del carácter de “transferencia condicionada” que constituye la medida. En tanto, siguiendo a Castel, 2000, la condición se refiere a que los sujetos deben demostrar un déficit respecto del régimen común, mientras que la

“contraprestación” alude al principio según el cual los/as beneficiario/as deben colaborar para con los dispositivos que les son propuestos para “ayudarlos/as”.

La AUH, como dispositivo de gobierno, se teje entonces, en tramas vinculares de elementos y lógicas que, entre la paradójal complementariedad del sujeto económico y el sujeto jurídico, ha logrado expandir y transformar el perfil del “pobre intervenido” hacia un universo más amplio. Esto ha sido posible, singular y diferencialmente respecto de décadas anteriores, en un tejido vincular entre las lógicas de la transferencia y la condicionalidad, la inversión en capitales y el acceso a derechos-sociales; mientras que para acceder a la AUH se regulan, controlan y disciplinan a los cuerpos y las poblaciones a partir y siempre que, se verifique y mantenga la condición de “vulnerabilidad, informalidad y pobreza”.

4- El trabajo “decente” y la Economía social: dimensiones éticas, jurídicas y económicas de gobierno.

Acorde a lo analizado hasta aquí y en complementariedad, nos introducimos en la cuestión del “trabajo decente y la economía social”, comprendidos como mecanismos de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres – ante todo empleables - que ponen en juego una singular relación entre las dimensiones éticas, jurídicas y económicas de gobierno.

Según lo des-andado, desde el programa de gobierno de la época en torno de la equidad y el acceso a oportunidades, se promueve el poder “vivir mejor” para lo cual es central tener acceso a provisiones. Para lograr lo antedicho, el Estado encargado de asegurar ciertos básicos comunes recurre al “trabajo-empleo”, que es enunciado como “la mejor política social”; a partir de lo cual sostenemos que, potenciado el sujeto económico, se crean las condiciones para que las poblaciones pobres, obtengan las garantías del ejercicio y el acceso a derechos, al modo de sujetos jurídicos.

En tal sentido, se promueven, como ejes centrales para el desarrollo: “el trabajo y la familia”, en palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “...*el mayor antídoto contra la pobreza es lograr el trabajo y un régimen de pleno empleo en la Argentina, con trabajadores en blanco y salarios dignos, ese es el eje del verdadero combate contra la pobreza*”⁴⁸⁸.

El trabajo parece recuperar protagonismo en esta época, lo cual marca una diferencia con

⁴⁸⁸ CFK, Julio 2009. Acto de Recupero de la Actualidad y Garantía de la Paz Social; en: <http://www.cfkargentina.com/cfk-recupero-de-la-actualidad-y-garantia-de-la-paz-social-2009/>. Consultada setiembre 2013.

el ayer. En tanto se proclama el “trabajo-empleo” con la intención de recuperar el protagonismo del empleo perdido en la década de los 90’, y para ello se recurre a la declaración de la OIT (2000) referida al “trabajo decente”: “...como un fin en sí mismo, como un medio para alcanzar el objetivo de la reducción de la pobreza, porque de esa forma se hace frente a las causas básicas de la injusticia social” (M.D.S., 2010:106, resaltados propios).

El “trabajo decente”, que ya era enunciado en los 90’, se recrea entonces, como un eje transversal de saber que configura el diseño y aplicación de las políticas sociales y de empleo, públicas, dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, en su potencial empleabilidad. Para profundizar al respecto tomamos como referencia el documento del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, puntualmente el capítulo elaborado por Lanari, M. E. (2011): “*Trabajo decente: significados y alcances del concepto. Indicadores propuestos para su medición*”⁴⁸⁹, en el cual se realiza una minuciosa reconstrucción de antecedentes y programáticas en torno de dicho concepto y su problemática. En tal sentido señala que:

La noción de trabajo decente no significa una ruptura, no obstante su enunciación ha sido apropiada para reinstalar el debate sobre el derecho al trabajo y no de cualquier trabajo, sino aquel que le de seguridad, en un sentido amplio, a hombres y mujeres por igual. Desde esta perspectiva, lo ético es tener acceso a un trabajo y que este sea digno, posición que se enfrenta a las ideas dominantes de las últimas décadas. En consecuencia, el anhelo de trabajo decente se ha transformado en una herramienta de cambio respecto a las tendencias deterministas (2011: 113).

La noción o concepto meta del trabajo decente, se formula en un contexto geopolítico mundial atravesada por dos ejes, los impactos de la globalización (Giddens, 2000, Stiglitz, 2002) y la “profecía del fin del trabajo” de la sociedad salarial, de su carácter central en las relaciones sociales (Gortz, 1980, de la Garza 1999, en: Lanari, 2011: 107). Según el documento analizado los efectos de ambos fenómenos, interrelacionados entre sí, sobre el bienestar de las personas y la estabilidad de las instituciones motivó a que en 1995 en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social reuniera en Copenhague a los países miembros de la ONU con el propósito de reflexionar y evaluar los impactos del nuevo orden mundial.

Dicha convocatoria proclamaba:

El desarrollo social es indisociable de la democracia, el respeto de los derechos humanos implica la participación de la sociedad civil, especialmente mediante el diálogo entre los

⁴⁸⁹ Dicho Documento, publicado en el marco de Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la nación, remite al trabajo realizado por María Estela Lanari en el marco del Proyecto PNUD 04/034.

interlocutores sociales (...) Es necesario incluir actuaciones estructurales, a escala nacional e internacional, en las políticas económicas, para garantizar la durabilidad del crecimiento y prevenir la aparición de desigualdades excesivas (Lanari, 2001: 107-8).

Entre los resultados de dicho encuentro se destaca la aplicación de las normas fundamentales del trabajo: libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, eliminación de las formas de trabajo forzado y obligatorio, abolición del trabajo infantil y de discriminación en el ámbito del empleo y la profesión como modo de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la cumbre. Así se promueve que los Estados deben promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas sociales y económicas.

Por tanto, lo que parece como un “hallazgo” para “revertir los impactos negativos de la globalización” es la revitalización de los conceptos ya acordados como propósitos liminares de la OIT, en torno de las normas internacionales del trabajo: *“el mejoramiento de las condiciones de empleo e ingreso, la aplicación de la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”*⁴⁹⁰

En igual texto se formula que la:

...pobreza en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos, la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y el esfuerzo internacional continuo (...) a lo cual se le suma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tiene derecho a perseguir su bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades (Lanari, 2011: 108).

Encontramos, en dichas tramas discursivas, evidentes rasgos de la DSIC, en torno a la configuración del sujeto trabajador en la promoción del equilibrio entre lo espiritual y lo material garantizando la libertad individual del mismo, mientras que el Estado orienta y garantiza medios de combate al “mal” de la pobreza para el logro de la prosperidad común.

Todas estas referencias dan forma y sustentan la noción de “trabajo decente”, que resulta una meta a alcanzar en los países “desarrollados” y aquellos, que aún se encuentran en “vías de...”, según lo postula el documento analizado en el marco del MTySS de la Nación. De este modo:

...el trabajo decente surge como una clave para construir futuro. Claro está que el hecho de amortiguar los actuales problemas del empleo y recuperar la dimensión social del trabajo con las mismas apelaciones de principio del siglo XX nos evoca la visión cíclica de

⁴⁹⁰ Texto del preámbulo de la Constitución de la OIT Conferencia de PAZ de 1919, donde se constituye la ORI, la cual constituye la parte XIII del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y es la respuesta orgánica frente a la “cuestión social” de la época.

la historia y nos predispone también a reiterar la vigencia de nociones como equidad y justicia para abordar la actual cuestión social, que aunque más compleja, mantiene como entonces la demanda esencial de afrontar la exclusión (Lanari, 2011:109).⁴⁹¹

En los países en desarrollo, en clave de desarrollo humano dirigido a las poblaciones pobres, el trabajo decente, como meta hacia la cual se tiende, se traduce en el marco de la equidad y la autorregulación de la propia vida en un suelo común de oportunidades que hacen del ingreso, no solo un bien material, también social y humano. En el caso argentino, la decencia del trabajo se aproxima a la dignidad⁴⁹², según la cual los sujetos-pobres pueden producir “al menos lo que consumen”, en una singular relación entre el sujeto jurídico y el sujeto económico.

El siguiente cuadro sintetiza lo señalado, así como marca las líneas de trabajo a realizar en el marco de una programática gubernamental respecto del gobierno del desempleo y las poblaciones pobres desocupadas. Cabe señalar que el documento analizado remarca que dicho programa de gobierno debería lograrse en vínculo estrecho- tripartito- entre los Estados, los empleadores-empresarios y los trabajadores, ante todo sindicalizados, para lograr con ellos un adecuado marco de acción que genere las condiciones de empleabilidad y trabajo decente, en el sentido antes dicho.

⁴⁹¹ Entre quienes abordan el desafío de interpretar el término “trabajo decente” encontramos a Amartya Sen (1999) quien comenta que el acierto del vocablo es su sentido universal, ya que alcanza a todos los trabajadores. También lo es su visión ampliada, que permite a la vez realizar análisis económicos y éticos. El trabajo decente, afirma, es un derecho que va mas allá de la legislación laboral vigente, en tanto tiene el sentido de reconocer “derechos básicos” y que permite una comprensión mucho más alentadora de las necesidades de las distintas instituciones y las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de los trabajadores (Sen en: Lanari, 2011: 110).

⁴⁹² El documento realiza un rastreo de antecedentes acerca de los conceptos “digno y genuino” en relación a “decente” y, si bien remarca diferencias, por ejemplo, en torno del carácter cristiano que atraviesa la construcción del trabajo como “digno”, considera que: “*Aunque las diferencias existan el nudo de la cuestión aún los conceptos. El reclamo por trabajo digno, genuino, trabajo decente, no es más que la necesidad de trabajo en cantidad y calidad suficiente para que los seres humanos puedan realizarse socialmente*” (Lanari, 2011:115).

ANTECEDENTES	CONCEPTO	DIMENSIONES	PROPIEDADES
Preámbulo de la Constitución de la OIT	<i>El trabajo decente es aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana</i>	Empleo	Alto contenido ético
Declaración de Filadelfia		Aplicación de las normas internacionales del trabajo	Carácter integrador
Declaración Universal de los Derechos Humanos		Protección social	Aspiración universal
Convenio 87° OIT Ingresos dignos Herramienta analítica		Igualdad de oportunidades	Dinámico
Convenio 98° OIT Libertad Meta - objetivo		Ingresos dignos	Herramienta analítica
Cumbre Mundial de Desarrollo Social (1995)		Libertad	Meta – objetivo
		Diálogo social	Plataforma para el diseño de políticas
			Estrategia para instalar el debate de los derechos fundamentales del trabajo
			Instrumento contra la Exclusión
			Criterio de equidad

Fuente: Dto. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, puntualmente el capítulo elaborado por Lanari, M. E. (2011); Pp.: 118

Por tanto, el trabajo decente, promovido como meta en el proceso de “combate a la pobreza”, es decir el trabajo decente diferencial y “para pobres”, pretende generar no solo inserción en el mercado, productividad, crecimiento, empoderamiento y autogestión, también garantizar derechos sociales y derechos mínimos de acceso. Esto se promueve,

como veremos a continuación en la Argentina desde el 2003 y, en resonancia con los discursos y decursos internacionales, desde un Estado protagónico cuyo rol es la protección y gestión, que posibiliten la solidaridad social, los derechos sociales, el seguro social a desplegarse en las comunidades territoriales locales para generar ligaduras, que promuevan la cohesión social, la paz social para la unidad nacional y organizada. Mientras se potencia el carácter emprendedor y autónomo de los sujetos, capaces de autogestionar su existencia/vida en los espacios “sociales” diferenciales para los pobres o generados para gestionar la pobreza, hasta que se logre la inclusión a la sociedad, que contiene liberando y al mercado, que libera produciendo.

Ahora bien, en el entramado discursivo de estas prácticas políticas, resuena una impronta biopolítica (Foucault, 2007, 2000a), puesto que se hace de la vida biológica de la población una cuestión política, en la cual se interviene, a la cual se contiene y se otorgan estructuras institucionales de seguridad. Se trata de “hacer vivir” a la población activa y productiva, bajo la lógica de que el trabajo es el eje y el dinamizador social fundamental para aumentar la productividad, el empleo decente y, así lograr que los pobres produzcan, vendan y consuman. De esta manera sería posible re-insertar a los pobres en el mercado mientras se re-activaría el mercado interno y se lograrían disminuir los índices de desocupación y pobreza. Se supone que los sujetos pobres desocupados deben poder y saber aprovechar las oportunidades para poder alcanzar el desarrollo y “vivir mejor”, que no es sinónimo de “vivir bien”.⁴⁹³ Algo así como “dejar de ser moribundos”, pero en sus territorios locales y según sus capitales, en los cuales es menester invertir e intervenir.

4.1 Economía Social y trabajo para pobres: dispositivos de gobierno

En el programa de gobierno de la Argentina desde 2003, acorde a lo antes analizado, la cuestión del trabajo es puesta en juego a partir del dispositivo de la economía social⁴⁹⁴ y

⁴⁹³ El término “vivir bien” es utilizado en el texto como herramienta conceptual, remite a la noción aymara “*suma qamaña*” y quechua “*suma kawsay*”, que se traduce como “vivir bien” o “vivir en plenitud”, que en términos generales significa “vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia”. En este sentido, según palabras de los integrantes de los pueblos indígenas, el Vivir bien se diferencia del “vivir mejor”, considerando, que en el mundo contemporáneo neoliberal neocolonial, la humanidad está sumida en el *vivir mejor*. En el caso planteado, “vivir bien” implica poner en juego fuerzas creadoras, a partir de las cuales poder crear otros modos de vida, con otras lógicas, otras redes y otros sentidos. Ver: Huanacuni Mamaní, 2010...op...cit.

⁴⁹⁴ Si bien el concepto de economía solidaria tiene más de dos siglos de historia, en América Latina tiene apenas dos décadas. El primero en formularla fue Luis Razeto, economista chileno ligado a los movimientos urbanos. A comienzos de los 80, cuando vuelve de su exilio, se propuso comprender cómo hacia la gente en los barrios populares de Santiago para sobrevivir, en medio del tremendo desempleo. Cuando arreciaban las protestas de los pobladores, que cobijaron ollas populares y una amplia gama de emprendimientos para la sobrevivencia. Razeto observó prácticas económicas diferentes a las hegemónicas, basadas en valores y racionalidades como la

diferencial dirigida a las poblaciones pobres, lo que no garantiza “buenos salarios y condiciones de empleo estable”. La economía social y solidaria instituida en el marco del Estado, promueve un discurso no consumista y diferente al de la “racionalidad instrumental del capitalismo”, mientras que se pone el énfasis en que sean los propios sujetos pobres los encargados de construir sus iniciativas de trabajo, así como de sostenerlas.

Esto último se vincula con las diferentes estrategias asumidas por el PNP desde el 2003, en torno a tejer redes vinculares transversales para con los movimientos de trabajadores desocupados, ante todo, a partir de lo cual se decide no reprimir el conflicto, sino procesarlo y canalizarlo para mantener su gobernabilidad. Como ya fue enunciado, se generaron espacios de diálogo e integración con referentes de estos espacios organizados, en torno de prácticas de economía social⁴⁹⁵. Un ejemplo paradigmático es el de la creación del Gabinete Piquetero, en el 2003, a partir del cual se concretan diferentes encuentros con las organizaciones piqueteras más importantes del país (MTD de Cutral Co y Plaza Huincul en Neuquén, UTD Mosconi-Salta, MTD Lozano, etc.) para compartir experiencias, comentar prácticas y lógicas de acción territorial de las organizaciones, dando por resultado la elaboración del Proyecto Manos a la Obra, y la disolución del gabinete.

El ejemplo permite observar, por un lado, que dichas prácticas de contención y conciliación llevadas a cabo por el programa de gobierno de la época, no se realizaron con el sólo sentido de usar a las organizaciones “piqueteras”, como apoyo o vehículo de las políticas sociales, sino con la intención cooperativa y de integración ya planteada⁴⁹⁶. Y, por otro lado, estas prácticas tuvieron como efecto, en muchos casos, la institucionalización y el control del conflicto y la lucha social re-voltosa, a partir de lo cual, dicha vinculación estratégica con los movimientos y organizaciones sociales,

donación, la cooperación y la frugalidad, que no se encontraban en la economía capitalista. Sin embargo, Razeto rechazó el camino estatal de argumentos, lo cual lo acerca al zapatismo, aunque sea previo, puesto que sostienen que el primer error es buscar un cambio global, es decir, una reestructuración completa de la sociedad, para lo cual serían necesarios los mecanismos de poder que sólo ofrece el Estado. Pues, no se busca tomar el poder, no se pretende la concentración de ese modo de ejercer el poder. Ver: Zibechi, 2011: 42-43.

⁴⁹⁵ Esto suele ser considerado, por un ciertos saberes orgánicos, que respaldan las técnicas del Programa nacional como un signo destacado de las políticas sociales de segunda generación, pues: “...la movilización social abre las puertas a nuevas articulaciones territoriales para plasmar políticas sociales, en las que se destacan los municipios, las iglesias, las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales tradicionales (sindicatos, asociaciones de fomento, cooperativas) y los nuevos movimientos (piqueteros, asambleas barriales)” (Zibechi, 2011: 105).

⁴⁹⁶ El Estado aporta recursos y personal especializado, y las organizaciones de base aportan el conocimiento territorial y las relaciones cara a cara con otro pobre con los que se relacionan horizontalmente y con confianza.

también resultó y resulta un modo estratégico de inversión en eficacia, eficiencia y mano de obra.

De este modo, si bien las políticas sociales tejidas en el entramado de relaciones antedicha modificaron condiciones estructurales de la crisis, también influyeron en las relaciones micro-internas de los movimientos y las organizaciones sociales. Tras lo cual, el ejercicio del gobierno de la pobreza instalado en el 2003, en el campo de acción del Estado, implicó estratégica y pragmáticamente una renovación en las prácticas y los mecanismos de gestión del conflicto y la contención de experiencias novedosas.

Así, la economía social instalada por las organizaciones señaladas, como prácticas de resistencia y lucha, adviene en el juego de gobierno una “economía social de mercado”, instituida en el campo del Estado. Esto no significa, de ninguna manera, que las organizaciones sociales, así como los movimientos y los grupos de protesta, dejen de resistir a ser gobernados de este modo y, continúen en pie de lucha, desde los 90’ hasta la actualidad⁴⁹⁷.

Por tanto, en este heterogéneo cruce entre gobernados y gobernantes, entre lógicas y prácticas, la economía social instalada en el campo de las políticas sociales públicas funciona como dispositivo fundamental en las estrategias del gobierno de los otros y de sí:

*...no como economía informal, sino el conjunto de actividades económicas desarrolladas con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales, como inmateriales. En este sentido, trasciende la solo obtención de ganancias materiales y está estrechamente vinculada con la reproducción ampliada de la vida, a través de valores como la reciprocidad y la cooperación. (M.D.S, Tomo II, 2010: 36).*⁴⁹⁸

En este sentido, según el entramado discursivo tejido en el programa nacional la economía social es comprendida, acorde a las resonancias ordoliberales, como “economía social de mercado⁴⁹⁹”, en palabras de la presidenta: “...Son, en definitiva, 165.000

⁴⁹⁷ Esto pone en juego y en evidencia que el gobierno implica una relación atravesada de libertad y lucha, entre los gobernados y los gobernantes. Puesto que, la racionalidades políticas indican la manera en que es pensada la materialidad práctica del gobierno, pensable y practicable, tanto para los que la ejercen como para aquello en torno de quienes es ejercida.

⁴⁹⁸ En estas definiciones y pronunciamientos oficiales acerca de la economía social, que se torna una técnica de intervención, subyacen las concepciones sugeridas por Coraggio, para quien la misma llegaría a ser hegemónica gracias a la superación de la fragmentación, que caracteriza a la economía popular, a través de programas que permitan extender y consolidar redes de cooperación e intercambio, lo que con apoyo del Estado le puede permitir ejercer poder en el mercado y en la administración pública. Aunque defiende la autonomía de los emprendimientos “...se propone incidir crecientemente en la encarnación de sus valores en el seno de la administración pública y del sistema público” (Coraggio, 2004: 288, en: Zibechi, 2011: 44-45).

⁴⁹⁹ Como fue enunciado en el capítulo anterior, siguiendo a Foucault, el neoliberalismo en su versión alemana, dispone, regulando y ordenando, de la sociedad empresa: “...o una política de economización de la totalidad del

*unidades productivas, que han generado 247.000 puestos de trabajo de la economía social de mercado (...) Y esta economía social de mercado, que ha generado trabajo y que va a seguir generando trabajo...*⁵⁰⁰ (resaltados propios).

Lo antedicho permite suponer, por un lado el despliegue de lo que puede llamarse un actual modelo de gestión empresarial de la propia pobreza⁵⁰¹, en el campo de lo social y sus ligaduras. Sobre todo, cuando el eje pasa a estar puesto en el trabajo y en los deseos, las aspiraciones y potencialidades de un grupo de trabajadores cuyas capacidades, luego de las medidas neoliberales de los 90`, ya no eran requeridas en la agenda del Estado y los privados. Y, por otro lado la configuración de un Estado que regula y ordena el marco para que el juego sea posible, un “Estado social, protagónico y responsable”.

En este ejercicio de gobierno de Estado, consideramos que se realiza una “interpelación ética de los sujetos” (Presta 2011), a partir de lo cual resultan “colonizados los afectos” (Presta, 2011) y las prácticas, poniendo como valor central la solidaridad - orgánica - la comunidad y la persona. A su vez, en el espacio de lo social y solidario, según disponen los mecanismos diferenciales de gobierno dirigidos a los pobres y la pobreza, la realización exitosa o no, de los emprendimientos de economía social se centran en la potencialidad subjetiva de quienes forman parte de los mismos, mientras son garantizados algunos mínimos comunes, en palabras oficiales:

En la concepción de la economía social, los emprendimientos productivos sociales tienen como función ayudar a construir o reconstruir circuitos de producción y circulación de bienes enriqueciendo el entramado social, sirviendo de punto de incorporación de los sectores marginales excluidos, ampliando el acceso al trabajo, captando y potenciando las capacidades sociales existentes, colaborando en la emergencia de nuevas fuerzas emprendedoras, facilitando la autonomía de las personas al producir, promoción laboral autosustentable, mejorando la formación para el trabajo en equipo, produciendo lazos de solidaridad y cooperación. (M.D.S. Tomo II. 2010: 38)

En este sentido, las prácticas de reciprocidad “no” mercantil, como la solidaridad, la ayuda mutua, el cooperativismo, la autoconstrucción de la vivienda propia, entre otras, remiten a la cohesión, la integración y la inclusión social, lo cual se economiza⁵⁰² cuando

campo social, de viraje hacia la economía de todo el campo social”. (Foucault, 2007: 278). Esto implica la puesta en juego de la “Economía Social de Mercado”, la cual no remite únicamente a una explicación de la vida y convivencia económica de los individuos (competitividad, libertad individual responsable), además plantea elementos de legalidad, justicia social, participación democrática, legitimidad política e institucionalidad.

⁵⁰⁰ CFK, Mayo 2012. Acto entrega de Microcréditos. Diario Página 12, 30/05/2012

⁵⁰¹ A modo de ejemplo, en tal sentido son definidas las “cooperativas de trabajo” como: “...una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (M.D.S, Tomo II, 2010: 24)

⁵⁰² Con esto se hace referencia, no tanto a la “economización” de técnicas y mecanismo de intervención y gestión por parte del Estado, si no al advenir económico el ejercicio de gobierno dirigido a las poblaciones pobres.

se trata de fortalecer y generar “capitales” en los sujetos, ahora advenidos protagonistas de su propio desarrollo, acorde a un enfoque de Desarrollo Humano. A su vez, estos mecanismos de poder permiten mantener el orden y así favorecer el crecimiento económico, mientras se van paliando, sosteniendo y evitando situaciones desfavorables. (Álvarez Leguizamón, 2008).

Por tanto, la dimensión ética y jurídica se conjugan con la económica, ya que en el interior de los dispositivos de intervención de la economía social, el mercado⁵⁰³ sigue ordenando las prácticas, a partir de lo cual hacer de sus asociaciones económicas locales, sociedades empresariales. Pero, con la presencia de un Estado que interviene mediante créditos y gestiones institucionales precisas, así como ejerce un fuerte control sobre la población, generando mapeos, índices, estadísticas y seguimientos. Un Estado que produce las condiciones generales de marco para que el juego sea posible, en el proceso de re-inversión de lo social mediante la eficaz gestión de la pobreza, acorde a los programas dirigidos a la unidad nacional, la soberanía popular y la ciudadanía social.

A continuación analizaremos, crítica y descriptivamente, los diferentes dispositivos de intervención, gestión y gobierno, que orientados por la noción-meta de trabajo decente y economía social, se dirigen a las poblaciones pobres y desocupadas ante todo, empleables.

4.2- El trabajo decente y Argentina Trabaja: entre la dignidad, el emprendedurismo, la cooperación y los lazos primarios de solidaridad.

En el trazo del programa de gobierno nacional en Argentina, acorde a los lineamientos antes señalados en torno del “trabajo decente”, en el 2009 se crea en el Ministerio de Desarrollo Social, en vinculación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la llamada “marca registrada”: *Argentina Trabaja*, cuyas herramientas programáticas son: Monotributo Social⁵⁰⁴; Microcrédito; Marca Colectiva⁵⁰⁵; Talleres Familiares y de Grupos Comunitarios; Proyectos integrales socio productivos Comercialización y Compre Social; Eventos promovidos por el Ministerio de Desarrollo

⁵⁰³ La casi totalidad de los programas de economía social se organizan según una lógica de oferta y demanda, canales de comercialización, de compra venta, marcas registradas, ingreso en mercado y cadenas comerciales nacionales e internacionales, generación de valor, entre otros, es decir, una lógica mercado. Lo cual, se complementa con un conjunto de capacitaciones y formaciones centradas en las personas y sus capacidades, potencialidades y capitales, para organizarse y poder ser menos pobres, en sus territorios locales.

⁵⁰⁴ Se realiza, en el marco del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, desde el 2004

⁵⁰⁵ Está regulado por la Ley Nacional de “Marca Colectiva” N° 26.355/2009 y Decreto Reglamentario N° 1384/2008.

Social de la Nación para el desarrollo de la Economía Social; Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST-2009).

En el marco de dispositivos dirigidos a las poblaciones pobres desocupadas, “Argentina Trabaja” parte de la consideración del “trabajo decente -”, como la mejor política social, ya que el trabajo es un organizador e integrador social, además de que permite el desarrollo de la persona, sus capacidades, sociabilidad y dignidad⁵⁰⁶.

Dentro de *Argentina Trabaja* es muy importante el *Programa de Ingreso Social con Trabajo* (PRIST-2009), el cual responde a la necesidad de la inclusión desde el trabajo, a partir de un enfoque cooperativista. Sus antecedentes se encuentran en la crisis del 2000-2001 y del 2008-2009, desde donde es posible rescatar experiencias importantes, a partir de la creación de cooperativas, según un enfoque solidario. También en el 2004 le anteceden la formación de cooperativas para la construcción de los CIC⁵⁰⁷ y, las cooperativas de obras y servicios públicos. Puesto que, como fue anunciado en el apartado I del capítulo 3, a pocos días de la Asunción de Néstor Kirchner, se toma la decisión política estratégica de implementar la ejecución de la obra pública nacional con cooperativas de trabajo, conformadas por personas en situación laboral vulnerable, preferentemente, titulares del PJHD⁵⁰⁸ en el Ámbito de la Secretaría de Obras Públicas.⁵⁰⁹

⁵⁰⁶ Para finales del año 2010 el Ministerio de Desarrollo Social realiza una síntesis de su trabajo afirmando que: “la pobreza debe ser abordada, no solo desde la generación de empleo decente, sino: “...con educación y salud, trabajando en el acceso de oportunidades (...) Todas las personas deben construir su destino; el Estado debe promover las oportunidades” (MDS I, 2010: 278). Según datos oficiales de esa época se señalan que existían: 212.600 personas en el Seguro de Capacitación y Empleo; 142.000 personas en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Desde 2003, más de 3,8 millones de personas atendidas con políticas de sostenimiento de ingresos, promoción del empleo y programas de ocupación transitoria. Más de un millón de personas participaron de procesos de formación y entrenamiento para el trabajo o retomaron estudios formales. Seguro de Capacitación y Empleo máximo 148.000 destinatarios en 2009. Constitución de Red de servicios de empleo y fortalecimiento de 330 oficinas de empleo municipales, que prestaron servicios de orientación e intermediación laboral a aproximadamente 600 mil trabajadores desocupados. Consolidación de la Red de Formación Continua y constitución y fortalecimiento de los Consejos Sectoriales como ámbitos de diálogo y consenso en materia de formación profesional para el trabajo. 357.967 Efectores de la Economía Social: Emprendedores unifamiliares y de gestión asociada o cooperativas son monotributistas sociales (Ley 25865). Tienen inclusión en la A.F.I.P. y en la seguridad social. Antes se los consideraba beneficiarios. 135.000 de esos monotributistas están incluidos en el nuevo programa de cooperativas de trabajo y otros se están inscribiendo en este momento. 600.000 empleos de la Economía Social que significa un ingreso del 10 % del P.B.I. 124.000 microcréditos a 100.000 emprendedores, entre otros. Fuente: MDS, I 2010: 267-278.

⁵⁰⁷ Centros Integradores Comunitarios (CIC) se construyen en todo el país, no sólo para asegurar prestaciones sociales y de salud, sino también para que las comunidades cuenten con un espacio de encuentro y puedan participar activamente, discutir, priorizar y decidir las acciones que transformen su realidad cotidiana, teniendo como ejes de trabajo los derechos humanos, y la economía social. M.D.S, 2010: Tomo I...op...cit.

⁵⁰⁸ Nace así el Programa de Emergencia Habitacional, en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Vivienda, especialmente diseñado a tal efecto. Las cooperativas originales se conformaron con 16 integrantes, 12 de los cuales debían ser Jefes de Hogar y cuatro desocupados.

⁵⁰⁹ El proyecto es coordinado desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y lleva tres etapas de ejecución para el año 2013: 610 CIC, 370 edificios terminados y 240 en obra, en todo el territorio nacional. M.D.S. Tomo I. 2010: 196.

Dicha línea programática está destinada a personas en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, que no cuenten con prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes de ingreso nacionales o provinciales. Este programa persigue como objetivos principales la inclusión social a través del trabajo, la capacitación desde una perspectiva integral y la promoción de la organización cooperativa.

Así, dicho Programa no es comparable a un plan de ingresos, como el Plan Jefes de Hogar (crisis 2001-2002) o al Programa de Empleo Comunitario (PEC). Tampoco es un plan de obras públicas; como se dijo, el objetivo es “recuperar la dignidad del trabajo”. No se realizan inscripciones masivas⁵¹⁰, sino que se inscribe un número limitado, según el cumplimiento de requisitos, y también porque la cantidad de cooperativas y, por lo tanto, de cooperativistas, depende de las obras a realizarse. Los cooperativistas perciben mensualmente una transferencia monetaria, que se deposita directamente en su cuenta bancaria con tarjeta de débito, vinculada con el desarrollo de los procesos asociados de realización de las obras y capacitación.⁵¹¹

Esto significa que hay que trabajar para que ese dinero le sea depositado, en palabras de la Ministra “el que no trabaja no cobra” (MDS, Tomo I, 2010). Así, el programa de Ingreso social con trabajo apoya emprendimientos productivos, influyendo en grupos vulnerables para que puedan insertarse en el mundo productivo y generar vínculos con el sector privado para consolidar procesos productivo sustentable: *“En Argentina hay 21.729 cooperativas y 7.396 mutuales matriculadas que conforman apenas una de las tres vertientes de la economía social, las otras son las empresas recuperadas y el mundo del emprendedurismo y autoempleo, sea individual o asociativo”* (Arroyo, 2009, en: Zibechi, 2011: 39-40).

A su vez, recuperando la cuestión del vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales se considera que, el “Argentina trabaja” se teje en el deseo político de generar organización, mientras que tiene contundente incidencia en los Movimientos Sociales, pues para 2011:

⁵¹⁰Se les ofrece una capacitación mínima para trabajar en cooperativas que realizaran obras públicas de mediana y baja complejidad. El trabajo se efectúa en cuadrillas a cargo de un capataz.

⁵¹¹Esto pretende evitar el clientelismo y punterismo político, como aconteció en el gobierno de Estado precidido por Menem. A su vez, en febrero del 2012, la presidenta, junto con la Ministra de Desarrollo Social, anunciaron un aumento en el salario de los inscriptos en el plan, así como un nuevo condicionamiento para la continuación de la tarea, mediante la aplicación del presentismo, según asistencia o ausencias al lugar del trabajo. Pues, la fundamentación fue la necesidad y decisión de inculcar la “cultura del trabajo”, para que estos sujetos, puedan insertarse en el mercado, en el entramado de esta economía alternativa y luego de la economía real.

...crea 200, mil puestos de trabajo en cooperativas, con un mínimo de 60 integrantes que perciben, 1300 pesos mensuales (335 dólares) (...) Las organizaciones sociales más fuertes como el Frente Darío Santillán, reconocen que es un plan ambicioso y que varios integrantes de la organización han dejado laburo precarios para inscribirse en el plan” (Zibecchi, 2011: 41)

Esto es ampliado y profundizado en el apartado III del presente capítulo, en torno de la UTD Mosconi.

Ahora bien, dicho Programa no llega a todas las provincias de igual manera y si lo hace no es distribuido por los diferentes lugares de la mismas⁵¹²; así como, salvo en el entramado de las organizaciones como la antes señalada, que se ven atraídas por la gestión de las cooperativas con la esperanza de poder hacer de éstas proyectos propios y, así lograr una autonomía real; en su mayoría, las cooperativas formadas tienen varias aristas, que hacen dudar de que resulten puestos de trabajo genuino, ya que son dispuestas por los técnicos interventores, los miembros no se conocen con anterioridad, lo cual fomenta el trabajo precario o “desestabilizante”, en palabras de Gipi Fernández (entrevista, setiembre, 2011), referente técnico de la UTD Mosconi, por solo seis o tres meses, en los cuales pueden utilizar la figura de cooperativa.⁵¹³

Otros de los ejes programáticos de la Marca Registrada Argentina Trabaja, en el marco del *Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social* se encuentran: el *Monotributo social* y el *Modelo de Gestión Asociada*. El primero fue creado en 2004 y está orientado a personas físicas y jurídicas asociadas en torno a las actividades de la Economía Social, cuya situación de vulnerabilidad social les impida competir y producir con criterios de escala y diferenciación: “*Se trata de facilitarle al emprendedor su salida del mercado informal e inserción en el mercado formal a través de la facturación en blanco y el acceso al beneficio de prestaciones sociales y de seguridad social*” (MDS, I, 2010: 172)⁵¹⁴. El monotributista, parafraseando documentos oficiales (2010, 2007), como “nuevo sujeto económico”, en tanto emprendedor y perteneciente a la “...*población socialmente vulnerable que está llevando actividades dentro de la economía social*” (La Bisagra, 2007: 197), se construye para dejar atrás los fantasmas de la “economía

⁵¹² Lo señalado será trabajado en profundidad en el apartado que sigue.

⁵¹³ Así, también algunos investigadores sostienen que: “*En las provincias y conurbano bonaerense se usa mucho el programa para aventurar el clientelismo...*” (Zibecchi, 2011: 41-42)

⁵¹⁴ El régimen simplificado para Pequeños Contribuyentes “Monotributo Social” se regula a través del Decreto N°189/2004, Ley N°25.865 modificada mediante decreto N° 82/2004 y Ley N° 26.223 (2009) y decreto N° 204/2004 para régimen de contrataciones de la Administración Nacional para personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro. Dichos sujetos económicos “monotributistas sociales”, tienen inclusión en la A.F.I.P.y en la seguridad social, puntualmente acceden a una obra social. Cabe recordar que solo podrá acceder al monotributo social toda población que “mantenga y certifique su condición de vulnerabilidad”.

informal”, mediante su singular configuración en sujeto jurídico. Esto es, según tramos discursivos oficiales, mediante mecanismos de gobierno dirigidos a “pequeños contribuyentes” en el campo diferencial de la economía social, a partir de lo cual el programa nacional sostiene que, estos sujetos podrían insertarse, en el mercado económico y de trabajo, aportando al desarrollo local.

Por su parte el eje de *Microcrédito*⁵¹⁵ dispone:

*La ley de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, tiene como objetivo la promoción y regulación del sector a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil. Facilita el acceso a crédito para aquellas personas y sectores que están excluidos del sistema bancario para el acceso a créditos (MDS, I, 2010: 173).*⁵¹⁶

El Microcrédito se instala en la agenda la política pública como una herramienta de promoción social y construcción de un “modelo económico de crecimiento con inclusión”, para lo cual se promueven los “emprendimientos” micros, que posibiliten un aumento de ingresos a las familias “más necesitadas”. El Estado asume, en tal sentido, el compromiso de promover microcréditos con fondos públicos y establece como medida regulatoria una tasa de interés de hasta el 6% anual para su entrega.

Así desde los tramos discursivos del PNP se señala que la distribución de créditos micro se corresponde con una distribución del ingreso, mediante una cogestión con las organizaciones sociales de la economía social y familiar, considerando que es el trabajo el integrador social más vincular y el camino para el desarrollo personal; mientras que la solidaridad lograda en el esfuerzo conjunto se mancomuna con la distribución equitativa y los espacios comunitarios de convivencia y solidaridad local:

La metodología de microcréditos ha demostrado mundialmente cómo el impulso de los emprendimientos socioproductivos permite, a escala masiva mejorar los ingresos familiares, brindando la posibilidad de valoración personal y reconociendo social, la manifestaciones cultural expresada en la transformación de materia la valoración del producto artesanal y manual como fuente de realización y desarrollo social (...) muchos prestarios consiguieron insertarse nuevamente al mercado de trabajo y conseguir un empleo. Otros generan su propio emprendimiento y reconocen su capacidad emprendedora y muchos valorizan las actividades solidarias que caracterizan al trabajo comunitario. Todos pelean diariamente en mejorar sus productos, conseguir mejores precios ajustar sus costos y concretar ganancias (MDS, I, 2010: 174)

Inmediatamente la presente cita indica los cruces de lógicas, discursos y prácticas que construyen la programática del microcrédito, en el ámbito de las políticas sociales

⁵¹⁵ Ley 26.117/2006 y decreto N°1305/2006.

⁵¹⁶ Bajo la ley 26.117 del 2006 se crea la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) bajo la órbita del MDS.

públicas en el trazo vincular entre gobernados y gobernantes. Por un lado, la lógica moral-pastoral promueve y propicia un encuentro con el “valor moral, cultural y común/social” del trabajo manual, de la labor ancestral del propio “micro” trabajo; mientras que se señala la “dignidad” del trabajo como integrador social y antídoto ante el mal de la pobreza. Esto, bajo un discurso de perfil benefactor considerando que de tal modo se pretende transformar la situación de explotación y vulnerabilidad laboral, también es menester señalar que dicho trabajo emprendedor nos remite a aquella afirmación dirigida a “por lo menos producir lo que se consume”; así como, se pone en juego la construcción microconductual de sujetos emprendedores mediante lógicas dirigidas a invertir, no solo en capitales humanos, sino en este caso en capitales sociales, en los tramos locales y comunitarios-sociales de relación primaria.

La construcción de sujetos económicos, capaces de dar el salto, tiene como meta la de su inserción, según meritos y esfuerzos personales/colectivos, en el juego del mercado-laboral y económico, punto de llegada hasta adonde el Estado acompaña y posibilita. El camino de la inclusión supone la realización del sujeto como emprendedor y con valores culturales y sociales orientados al trabajo digno y la solidaridad social de corte orgánica. Lo cual se atraviesa de un discurso “liberador” sumido en la “fuerza social del sujeto de la economía social”, su compromiso, solidaridad y la posibilidad con ello de generar otras riquezas.

En sintonía, partiendo de principio de complementariedad y cooperación de lo que se denominan ámbitos públicos y lo privados, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se asumió un “modelo de gestión asociada” para la aplicación del microcrédito, como un proceso de construcción colectiva y de mirada integral del territorio, de relación multiactoral, que genera una nueva institucionalidad en la relación Estado-Sociedad. Esto es, pensando siempre desde la perspectiva del “punto de llegada”, no como requisito previo de formalidad para la gestión financiera, sino como proceso de construcción de la política pública para posibilitar la distribución de la riqueza (MDS, I, 2010: 176). Estos modelos de gestión asociada para la aplicación del microcrédito funcionan a través de los *Consortios de Gestión local*⁵¹⁷, las *Redes de Gestión Asociada*⁵¹⁸ y el *Banco Popular de*

⁵¹⁷ Se conforman de instituciones públicas y privadas, del sector social y del productivo, que forman parte del Consejo de Administración y que presentan Proyectos del Consorcio para actuar como Organización ejecutoras del microcréditos.

⁵¹⁸ Estas se conforman como entidades afines, que a su vez ejecutan microcréditos; son organizaciones que trabajan en una o más provincias o tienen pertenencia sectorial, con antecedentes específicos en la temática de

la Buena Fe⁵¹⁹, lo cual permitió contar con una base importante de Organizaciones Ejecutoras para su expansión y promoción territorial y de acceso.

Este diagrama relacional entre Estado y Sociedad (ONGs, tercer sector, organizaciones sociales, comunitarias, entre otras) desde las políticas sociales públicas de segunda generación con rostro humano, procura instancias de promoción y desarrollo para favorecer la integración social, a partir de lo cual el dispositivo de la economía social adviene un mecanismo dirigido a configurar lo social, como espacio de relación y cogestión integral y para la integración.

En tal sentido, el sistema de microcréditos articula con la *Ley de Marca Colectiva* (N° 26.355/2009, decreto reglamentario 1384/2008), el objetivo de esta ley remite a mejorar la capacidad de venta de los agrupamientos de las Unidades Económicas, organizar estrategias comunes de producción y comercialización, desarrollar en escala la producción, visibilizarla, diferenciarla e identificarla cualitativamente mediante signos distintivos de identificación y nombre propio, ejecutando campañas de marketing, exposiciones, ventas: “...toda marca colectiva representa valores, métodos productivos comunes y estándares acordados o compartidos para cada uno de sus productos” (MDS, I, 2010: 181). La producción pequeña, original propia, colectiva y basada en la recreación de la cultura del trabajo comunitario y familiar, se “patenta” para poder visibilizarse y moverse en el mercado diferencial de trabajo, a partir de lo cual los “jugadores/as” podrían dar el salto hacia el gran y real “juego de mercado” basado en la competencia y la desigualdad.

A su vez, estos programas y lineamientos se vinculan con los *Talleres Familiares y Grupos Comunitarios*, como un programa que provee de equipamiento e insumo a emprendimientos familiares y comunitaria básicos. Apunta a generar “cadenas productivas o proyectos integrales de desarrollo local”, bajo la puesta en marcha de actividades a “pequeña escala” basadas en “oficios o saber hacer”, que le permita a las “familias” generar ingresos. Se orienta al “autoconsumo y autosustentamiento” con la posibilidad de generar excedentes. Recordamos como la familia es el eje de revalorización y crecimiento mancomunado, y a su vez resaltamos como “lo pequeño, lo

microcréditos diferenciándose por la selección de destinatarios, por la rama de actividades o por la localización de sus programas y metodología de aplicación

⁵¹⁹ Dicha experiencia se desprende de una línea programática del Manos a la Obra, que conforma un entramado asociativo entre las organizaciones regionales (administradoras) y los bancos locales (organizaciones ejecutoras) de alcance nacional, que nuclea al mayor número de emprendedores, promotores y organizaciones de base.

micro, lo asico, “es lo que moviliza a este tipo de proyectos y actividades para los “pobres” capaces.

En esta línea también se encuentran los *Proyectos Integrales Socioproductivos*, que comprenden la articulación y gestión asociada entre los emprendedores de cada localidad o región “...la estrategia es la inclusión social de personas, sujetos de derecho en situación de vulnerabilidad” (MDS, I, 2010: 182). Entre sus líneas programáticas se encuentra la generación, asistencia y fortalecimiento de las Unidades Económicas, que deben vincularse entre sí. Y el propósito de esta herramienta tiene por objeto promover o financiar bienes de uso, capital de trabajo y pequeñas obras de infraestructura a Emprendimientos de la economía social, a fin de mejorar los procesos productivos de gestión, de transferencia de tecnologías adecuadas y estrategias de comercialización y mercadeo. Mientras que se contempla el “fortalecimiento” de los emprendedores.

Aparece en estos entramados enunciativos la cuestión del “sujeto de derecho/jurídico” en situación de vulnerabilidad, lo cual nos remite a que la misma puede ser “superada, sanada, saltada o perpetuada”. Mientras que se hace hincapié en la construcción y fortalecimiento del sujeto trabajador-emprendedor, con la especificidad del trabajo decente en el dispositivo de la economía social, considerada un puente hacía el sujeto jurídico de derecho a partir de lo cual se invoca el acceso a derechos universales, que debieran ser otorgados y reconocidos por el Estado. Este cruce de elementos y prácticas de gobierno hace a las tramas vinculares heterogéneas entre racionalidades políticas y juegos de poder, gobierno y verdad, en torno de los cuales las poblaciones pobres, excluidas, vulnerables, así como la pobreza, el trabajo, lo social, la solidaridad y el Estado se codifican y configuran de modos relacionales, a veces yuxtapuestos, a veces discontinuos, a veces ensamblados, pero siempre de modos dinámicos y positivos.

Por último, en el tramo de Argentina Trabaja encontramos la *Línea de Comercialización y Compre Social*, la cual comprende proyectos de fortalecimiento de espacios comerciales y de procesos de comercialización de producto. La finalidad de la estrategia de comercialización es mejorar la articulación entre las actividades productivas, las de intercambio y las de consumo. Se busca que: “...los emprendimientos de la economía social incorporen estrategias de mercado, comercio justo y consumo responsable, fortaleciendo los canales comerciales” (MDS, I, 2010: 184).

En el caso de *Compre Social* su objetivo es generar y fortalecer canales de desarrollo de proveedores y productores de la Economía Social, vinculados con la capacidad de compra

que poseen los organismos públicos y los tres niveles del gobierno. Esto se completan con los *Eventos* promovidos por el Ministerio para el desarrollo de la economía social, así como con el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTYS), decreto N° 812/98, a partir del cual los emprendedores-cooperativistas incluidos en la marca registrada Argentina Trabaja puedan ser identificado por dicho sistema permitiendo a través de bases activas definir la “transparencia” en el acceso a el Plan. En tal sentido, el registro, el seguimiento, la evaluación y la transparencia siguen siendo ejes referenciales para la ejecución y control de las poblaciones intervenidas en torno de lo social de la economía y la sociedad a escala micro.

Por su parte, existen diferentes planes y programas dirigidos a promover el empleo digno, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)⁵²⁰, con el objetivo de Promover la cultura del trabajo y mejorar la empleabilidad e inserción laboral.⁵²¹ Con la intención de superar el carácter asistencial y de emergencia del PJHD se instalan políticas activas de trabajo, para lo cual se generan diferentes líneas de acción y transferencia⁵²².

También en el campo del Ministerio de Trabajo se construyen diversos mecanismos de intervención en torno del trabajo decente, las políticas sociales y de empleo de corte inclusivo. Entre los más relevantes destacamos el Programa de Inserción Laboral y el Plan Integral para la promoción del empleo, el Seguro de Capacitación y Empleo y el Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo, en tanto se constituyen en el trazo de las lógicas de gobierno analizadas.

El *Programa de Inserción Laboral* y el *Plan Integral para la promoción del empleo*, se crean mediante la Resolución ministerial N° 45/2006 y acorde a la ley N° 24.013, en el marco de promoción para el empleo. El objetivo principal de dicho programa remite a:

⁵²⁰Todos los programas o planes tienen requisitos, de y para con los destinatarios, es decir, condiciones para la recepción de los mismos, entre los cuales predominan: las edades, la residencia, el ser o no receptor de otro plan o programa, la condición de desocupado, de trabajador informal, mujer, anciano, niño, analfabeto, etc. Desde una mirada general de dichos planes y programas, las líneas de acción varían entre capacitación, inserción laboral en empresas de diferentes tipos, entrega de un monto de dinero, promoción del autoempleo, mediante emprendimientos productivos, cooperativas, etc. Para lo cual es necesario, no solo cumplir con las condiciones antedichas, sino, en muchos casos realizar actividades de contraprestación, ya sea alguna actividad productiva local, como las referidas al cumplimiento de calendario de vacunación, finalización de estudios primarios o secundarios, entre otros.

⁵²¹En virtud de la coyuntura económica y financiera resultado de la crisis que afectó a la argentina, fue necesario prorrogar - mediante el decreto N°1506/04 - la vigencia de la emergencia ocupacional nacional, así como el PJHD hasta el 31 de diciembre de 2005.

⁵²²Entre otros se puede hacer referencia a la incorporación en el Plan Familia de mujeres madres solas, el traspaso al Plan Adultos Mayores a los adultos de más de 70 años, que no reciban ningún otro plan.

...contribuir a la generación sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de distintas políticas públicas instrumentadas por el Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social y otros organismos de gobierno nacional, provincial y municipal, así como favorecer la reinserción laboral de los trabajadores desocupados, beneficiarios de los programas sociales”(Considerandos Res. N° 45/2006).

El Programa de Inserción Laboral se desarrollaría a través de dos líneas de acción: 1) *Promoción de Empleo Asalariado*, dirigida a fomentar la inserción laboral de los beneficiarios del PJJHD y del PEC A través de diferentes modalidades de contratación de acuerdo con la ley laboral vigente. 2) *Línea Promoción de Autoempleo*, dirigida a fomentar el desarrollo en oficios y o el desarrollo de emprendimientos individuales o asociativos de trabajadores desocupados beneficiarios de los planes arriba mencionados (Artic. 2). El Ministerio abona a los beneficiarios el monto correspondiente al bono otorgado por el plan y/o programa del que sean receptores y el empleador, en el caso de la línea 1, tiene la responsabilidad de abonar la diferencia de dinero correspondiente, sin por esto generar vinculación laboral alguna con el ministerio.

Por su parte, mediante el Decreto presidencial N° 336/2006 se creó *El Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE)* el cual resulta:

...de base no contributiva como parte de una estrategia más inclusiva que atienda la contingencia del desempleo, fortaleciendo las políticas activas de promoción del empleo y formación profesional. Que, para alcanzar los objetivos descriptos precedentemente, el Gobierno Nacional articulará sus acciones con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, a través de acuerdos que permitan optimizar los recursos disponibles. Que, en una primera etapa, dicho seguro estará orientado a los/as beneficiarios/as del PROGRAMA JEFES DE HOGAR que opten por incorporarse al mismo. Que dichas incorporaciones se realizarán en forma gradual a través de las Oficinas (Considerandos).

Dicho seguro se instala como una política activa de empleo para la inserción laboral promovida por el Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social de la Nación. Es un esquema integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar a las personas en la búsqueda activa de un empleo adecuado, a través de la actualización de sus competencias laborales y de su inserción en empleos de calidad.

Acorde a las modificaciones reglamentarias instaladas mediante la resolución ministerial N°1100 del 18 de junio del 2012 los requisitos, que deben cumplir quienes accedan al seguro son: Ser mayor de 18 años; Encontrarse desocupado y en búsqueda activa de empleo; Residir en forma permanente en el país; Contar con Libreta de Enrolamiento (L.E.) Libreta Cívica (L.C.) o Documento Nacional de Identidad (D.N.I.); Contar con la acreditación del Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L); Encontrarse

habilitado para el ingreso según la normativa vigente; No percibir otras asignaciones y/o subsidios del estado nacional, provincial o municipal, excepto la AUH y AE sin vinculación con el PIL y las otorgadas en razón de ser Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur (Artic 2, Resol. N°1100).

En torno de las acciones (prestaciones) que se pueden realizar si se participa del SCyE encontramos: Finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega de Certificación de Estudios Formales, siempre y cuando la persona sea mayor de 24 años; Actividades de formación profesional y capacitación laboral; Servicios brindados por la oficina: Orientación Laboral (OL); Apoyo a la Búsqueda de Empleo (ABE); Orientación al Trabajo Independiente (OTI); Participación en los cursos de Trayectos de Orientación Laboral (TOL); Profesionalización del Trabajo Doméstico.

El objetivo central de la iniciativa *Búsqueda de Empleo* (BE) *Orientación al Trabajo Independiente* (OTI) remite a la: Participación en los cursos de Trayectos de Orientación Laboral (TOL); Profesionalización del Trabajo Doméstico. El objetivo central de la iniciativa es jerarquizar y profesionalizar a las personas beneficiarias del seguro que realizan tareas de trabajo doméstico, también se dirige a posibilitar el acceso a financiación para emprendimientos independientes, el apoyo a la inserción laboral en el sector público, privado y ONGs según la cantidad de horas de actividad diarias y generar condiciones de entrenamiento para el trabajo en el sector público, privado y ONGs. (Capítulo 1, Resol. N° 1100)

Por último, se considera que el asegurado percibirá una prestación monetaria mensual a lo largo de 24 meses. En el transcurso de los dos años deberá actualizar sus competencias laborales mediante la finalización de sus estudios primarios y secundarios, o bien realizando cursos de formación profesional y/o asesorándose para emprendimientos de empleo independiente. Contra la participación y aprobación de los mismos percibirá un adicional monetario mensual. Además el tiempo de permanencia en el seguro será computado para su futura jubilación, sin que se acrediten aportes o montos de remuneraciones.

Por último, el *Programa Jóvenes con más y mejor Trabajo* fue creado en el año 2008 acorde al Expediente N° 1.263.873/08 del Registro del Ministerio de Trabajo empleo y seguridad social, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la Resolución de la entonces Secretaria de la Pequeña y mediana empresa N° 24 del 15 de febrero de 2001 y sus modificatorias, y bajo los considerandos de que:

... los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional se han traducido en una sostenida mejora en la economía, haciendo eje en la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Que es necesario profundizar esta estrategia para enfrentar la situación de desempleo que aún afecta a las y los jóvenes de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años de edad con estudios formales incompletos; consolidando el conjunto de instituciones y acciones en ejecución y creando nuevas herramientas para la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de los mismos. Que las y los jóvenes adquieran un valor trascendental y preponderante como actores estratégicos del desarrollo integral de la sociedad, siendo la educación, la formación y los procesos de apoyo a la inserción en empleos de calidad las llaves para el logro del mencionado objetivo (Considerandos, Resol. N° 497/2008).

Por ello, se señala que resulta pertinente la creación del programa *Jóvenes con más y mejor trabajo* con el objeto de:

...generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo. (Artic. 1. Resol. N° 497/2008).

El Programa implementará un conjunto de acciones de orientación e inducción al mundo del trabajo, de certificación de estudios primarios y secundarios, de formación profesional, prácticas calificantes en ambientes de trabajo, de apoyo a la búsqueda de empleo, de acompañamiento para el diseño e implementación de emprendimientos independientes y de inserción laboral, junto con las prestaciones dinerarias que se establezcan por la participación en cada una de las mencionadas acciones. Podrán participar del Programa las y los jóvenes de dieciocho a veinticuatro años de edad, con residencia permanente en el país, que no hayan completado el nivel primario y/o secundario de educación formal obligatoria, se encuentren en situación de desempleo y suscriban un convenio de adhesión en las Oficinas de Empleo Municipales que forman parte de la Red de Servicios de Empleo (Artic. 2, Resol. N° 497/2008).

Cabe destacar cómo, los diferentes mecanismos de gobierno dirigidos a gobernar a las poblaciones pobres desempleadas-desocupadas se orientan, en el marco de las políticas públicas instaladas en el MTEySS, en torno de la lógica emprendedora dirigida a la inversión y promoción de la inversión en capitales humanos, ante todo. Puesto que fomentan y posibilitan las condiciones para que las capacitaciones, que permiten acceder a la categoría de “empleabilidad decente e independiente”, sean siempre posibles.

Por ende, el recorrido realizado en el presente apartado nos permite comprender, críticamente cómo, en la Argentina del período analizado, los territorios y las poblaciones pobres, marginales y excluidos, resultan gobernados mediante prácticas y lógicas de

inclusión diferencial, poniendo el eje en el sujeto activo, pero también promoviendo los tejidos sociales, que bajo la lupa del Estado y la orientación de técnicos expertos, no sólo permitan lograr la reinserción o inclusión social, también la económica. En tal sentido, sostenemos que el gobierno económico de las poblaciones bajo la guía de mecanismos de mercado no dejan de orientar las prácticas de gobierno dirigidas al pobre desempleado-desocupado, promoviendo el trabajo decente y emprendedor con la impronta singular, que diferencia a este programa de gobierno de los analizados en el capítulo 1 y 2, de la justicia social, la ciudadanía social y la unidad nacional.

Por tanto, retomando el camino propuesto en el presente apartado sostenemos que, en la Argentina de la época trabajada, las racionalidades políticas sociales, benefactoras y promotoras del capital humano en clave de desarrollo se entrecruzan y recrean en los procesos y las prácticas de construcción de espacios sociales y comunitarios, en el proceso de re-invenición de lo social mediante el gobierno de la pobreza. Esto implica la construcción y gestión de sujetos de derecho, lo cual se realiza poniendo en juego el gobierno económico de las poblaciones a través de DDH local y sustentable, potenciando al sujeto económico agente activo de su propio desarrollo, trabajador y consumidor.

II

Las políticas sociales en Salta: El gobierno de la pobreza y la re-inversión de lo social, entre la equidad humanizada, la sociedad empresaria y la solidaridad natural (2007-2013)

En el presente apartado, el objetivo es describir y analizar las lógicas y prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y a la pobreza, en la provincia Salta. Acorde al enfoque propuesto se trata de dar cuenta, críticamente, de los ensamblajes que tejen y destejen las relaciones entre gobierno, sujeto y verdad, en el campo específico de las políticas sociales y de empleo públicas. Para esto, recuperamos archivos documentales, pertenecientes a organismos oficiales y no oficiales, discursos varios y notas periodísticas, además de entrevistas semiestructuradas en profundidad a técnicos de desarrollo social y coordinadores de programas locales.

1-Aproximación inicial: Desarrollo Humano, poblaciones pobres, carentes y débiles

En el marco de la historia salteña reciente la “lucha y acción asistencial”, según entramados discursivos oficiales, se organizaba en un primer momento en el Ministerio de Desarrollo Humano (2007-2011), en el que se nucleaba la “acción social, la asistencia y ayuda” en el marco de las políticas sociales y el desarrollo social “integral e inclusivo”, como se adjetivan a las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres.

Por su parte, la “misión”⁵²³ del Ministerio de Desarrollo Humano remitía a: “*Generar un Estado al servicio de las necesidades de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y riesgo social, garantizando el acceso a sus derechos, revalorizando su rol y promoviendo la reconstrucción del tejido social*” (Resaltados nuestros)⁵²⁴. Un Estado “al servicio”, no es un Estado promotor o protagónico, es un Estado atento a “dar, otorgar, ayudar” a quienes se encuentran entre las poblaciones “más pobres de entre las pobres”, vinculadas al riesgo y la vulnerabilidad; en torno de lo cual emerge la nominación de “derecho” en

⁵²³ El Ministerio de Desarrollo Humano se conformaba, orgánicamente, a partir de: la Secretaría de Políticas Sociales; Secretaría de Promoción de Derechos; Secretaría de Lucha contra las Adicciones; Secretaría de Abordaje Territorial; Secretaría de Deportes.

⁵²⁴ Ver: Ministerio de Desarrollo Humano, gobernación de la provincia de Salta, 2011, en: <http://www.salta.gov.ar/ministeriodedesarrollohumano/mision>; consultada setiembre/diciembre, 2012 y marzo 2013.

relación con la promoción de capital social y derechos sociales, en torno del gobierno de la pobreza en la Argentina actual. Los derechos sociales, según los tramos discursivos oficiales, promueven la reconstrucción solidaria de tejidos sociales con una activa participación de estos sujetos advenidos “de derecho o con derechos”, en el marco de programas de gobierno específicos.

Así, la “visión”, que instaba a la “meta o finalidad estratégica se dirige a:

Promover el bienestar de la comunidad, buscando soluciones efectivas y adecuadas para la solución de la problemática social y el desarrollo humano. Fomentar la participación y el desarrollo humano de la ciudadanía en su conjunto de manera coordinada e integral promoviendo la formación integral de las capacidades y calidad de vida del hombre y la sociedad (Resaltados nuestros).⁵²⁵

Ahora bien, según lo antedicho ¿qué se entiende por Desarrollo Humano, como lógica de gobierno de las poblaciones pobres? todo parece indicar que remite a la consideración de DH ya trabajada en la última etapa del programa gobierno anterior (2003-2007), cuya finalidad dispone la inversión en capitales - sociales y humanos - para que los sujetos pobres, a partir del “buen uso, reinversión y aplicación” de los mismos puedan, en sus comunidad y en base a los tejidos sociales, salir de su situación de pobreza, que no se centra solamente, en cuestiones materiales.

Esto conlleva al “bienestar de la comunidad”, como espacio de gobierno al cual se dirigen las políticas sociales, mientras que el desarrollo humano propicia la mejor calidad de vida de la sociedad, pues permite la reconstrucción de tejido en su campo primario, a través del cual se gobierna a las poblaciones pobres. En lo que respecta a lo que se denomina “Acción Social”, la programática de gobierno señala, para su implementación, el uso eficiente de los recursos disponibles, “propendiendo” a la eliminación de la pobreza estructural y marginación.

En tal sentido el programa de gobierno en torno de las poblaciones pobres tiene por objetivo específico:

Entender en la promoción del desarrollo social y económico de los pueblos indígenas; Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a la niñez, la adolescencia, la tercera edad, género y las personas con capacidades diferentes; Entender en el desarrollo e implementación de políticas sociales activas e integrales de protección de la familia y acceso a una vivienda digna; Entender en lo referente a la satisfacción de necesidades básicas de la población vulnerable y de alto riesgo social, con bienes y servicios necesarios a través de la contención y educación; Integrar una red de articulación de acciones con organismos provinciales a fin de brindar respuestas eficaces a las problemáticas sociales; Brindar apoyo y fortalecimiento a las organizaciones no

⁵²⁵Ver: Ministerio de Desarrollo Humano, gobernación de la provincia de Salta, 2011, en: <http://www.salta.gov.ar/ministeriodedesarrollohumano/visión>; consultada diciembre, 2012 y marzo, 2013.

gubernamentales de acciones comunitarias; Entender en la recuperación de la cultura del trabajo, favoreciendo la participación familiar y comunitaria en prácticas de manejo de unidades productivas de autoconsumo; Entender en la implementación de sistemas de información para la administración de todos los programas sociales, estableciendo una base de datos única que permita obtener indicadores relevantes sobre grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, y que faciliten la identificación, selección y registro único de familias o individuos beneficiarios reales o potenciales; (...) Entender en la planificación e implementación de políticas que tiendan a conectar la actividad física y el deporte con la promoción de la salud y la recreación; (...) Coordinar con el área correspondiente del Ministerio de Educación, la implementación de una política deportiva escolar. (Resaltados nuestros).⁵²⁶

Acorde a lo antedicho y ya anticipado, las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres tienen en los albores del programa de gobierno salteño, un perfil “focalizado y focalizante”. Se invierte en salud, educación y deporte-recreación, como capitales humanos que en el suelo local de la comunidad posibilitarían la construcción de los tejidos sociales necesarios para que los pobres se “desarrollen en armonía”. A partir de lo cual, también, la cultura del trabajo pretende ser “recuperada” mediante la implementación de prácticas de “autoconsumo”, entre los márgenes y los mínimos biológicos. Mientras que se reprograman mecanismos biopolíticos dirigidos a planificar las políticas de desarrollo humano mediante la medición, identificación y selección de poblaciones pobres y vulnerables a intervenir, asistir y/o dejar morir.

En este diagrama de poder, ante todo, según lo sugerido en el Documento oficial Plataforma electoral 2007, se pone como eje la salud comprendida como derecho, el cual se sostiene debe ser asegurando en el “nivel adecuado” (básico) para las poblaciones pobres permitiendo, ante todo, en clave biopolítica “la sostenibilidad del índice de la esperanza al nacer”. No sólo se trata a la salud desde la perspectiva biológica, también desde la “ecológica”, en la que interviene el medio ambiente, estilo y condiciones de vida, pautas culturales, aspectos económicos y geográficos, así como la contaminación ambiental, la falta de elementos y comodidades “básicas”, el aislamiento, la falta de educación sanitaria y la pobreza, que son factores determinantes del deterioro de la salud pública (Dto. Plataforma electoral, 2007:4).⁵²⁷

Lo antedicho pone de relieve la consideración en ejercicio de una “medicina social” dirigida a producir poblaciones “sanas”, es decir útiles, productivas y eficientes. Ahora bien, para lograrlo no se debe regular sólo el cuerpo biológico de las poblaciones, sino los

⁵²⁶ Ver: Ministerio de Desarrollo Humano y Justicia, gobernación de la provincia de Salta, 2011, en: <http://www.salta.gov.ar/organismos/ministerio-de-derechos-humanos-y-justicia/4>; consultada diciembre, 2012.

⁵²⁷ De ahora en más: D.P.E, 2007: Pp:...

espacios de vida, el medio ambiente. Prácticas estas que, en el caso de “las poblaciones pobres, vulnerables, en riesgo, de riesgo o peligro social”, se traducen en mecanismos de prevención, rehabilitación, readaptación, educación especializada para posibilitar una existencia integrada, digna y útil (D.P.E, 2007: 5). Ante todo, en clave de desarrollo humano, para ejecutar los programas señalados se ponen en marcha mecanismos de control y garantía eficiente de la llamada “salud primaria” (centros de salud, salitas, agentes sanitarios, hospitales públicos).

Según lo enunciado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (2007), la concepción de “contención social” será reemplazada por la de “desarrollo humano”; refiriendo a la juventud dice que ya no vamos a contener a nuestros chicos, si no a propiciar la: “...*explosión de los adolescentes en el sentido que puedan construir su propio destino*” (Discurso de asunción de J. M. Urtubey, 2007).⁵²⁸

En tal expansión de las prácticas de salud y educación dirigidas a ciertas poblaciones, como los jóvenes, se entrecruzan entramados discursivos y extradiscursivos propios y provenientes del “desarrollo humano”, que promueven la “autogestión de la propia existencia mediante la promoción e inversión en capital humano, que permita a los pobres, en sus diferentes perfiles, advenir “sujetos de desarrollo”; con otros entramados y racionalidades políticas tamizadas con las lógicas dispuestas por la doctrina social de la iglesia y el humanismo moral cristiano, en tanto se trata de la producción de sujetos creadores de su propio destino, en tanto: “...*somos hombres libres, creados a semejanza de Dios, ser moral, dueño de sus actos y artífice de su destino*”, a lo cual se dirige la educación en libertad, la igualdad de oportunidades y el cuidado de la “familia” como organización básica que permite la realización del individuo y su inserción comunitaria, la articulación entre lo personal y lo social. (D.P.E, 2007: 6).

Mientras que, dichas prácticas también son entendidas en el ejercicio del “poder de policía del Estado”, en orden a la correcta construcción, equipamiento y habilitación de servicios asistenciales privados y de obras sociales, mutuales y organismos similares, fiscalizando su funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos mínimos que se establezcan. Así, el control del ejercicio del poder de policía del Estado se enmarca en: “...*las profesiones encuadradas en el arte de curar*” (D.P.E, 2007:5).

⁵²⁸Discurso de Asunción de Juan Manuel Urtubey (2007), en: <http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/7/discurso-asuncion-diciembre-2007>; consultada marzo, 2013.

La educación entonces, también resulta un eje central en esta inversión y proyección para el desarrollo humano integral, pues la misma permitiría la: “...*realización del individuo, la reconstrucción del tejido social, el libre desenvolvimiento de la peculiaridades del hombre hacia el progreso de la humanidad toda*” (D.P.E, 2007: 6)

Así, en tramas discursivas y extradiscursivas diferentes a las trazadas en y por el programa nacional de gobierno, en Salta la construcción de los ensamblajes de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres, sus problematizaciones, subjetivaciones, objetivaciones e intervenciones se propicia y promueve, por un lado el desarrollo comunitario, pero también la intervención de las organizaciones de la sociedad civil como articuladoras y promotoras del desarrollo y gobierno “a través de la comunidad”; mientras se generan mecanismos biopolíticos y focopolíticos de control, medición y estadística dirigidos a estas poblaciones para “identificar beneficiarios potenciales y reales”, en una clara reconfiguración local y singular de las políticas sociales de desarrollo humano. Todo esto, en la configuración de las prácticas de gobierno codificadas en torno del “principio de subsidiariedad del Estado” promovido por la Doctrina Social de la Iglesia (DSIC), según lo analizado en el capítulo 1.

Recordemos, junto con Murillo (2011), que la DSIC sancionaba el principio de subsidiariedad del Estado que le da a la sociedad civil un lugar importante, pues este principio sostiene que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema y que el Estado sólo debe actuar cuando nadie pueda hacerlo y exista la posibilidad de que el bien común sea afectado⁵²⁹. En cuanto al Estado, se proponía que éste lograra una administración propicia para que de ella: “...*brote espontáneamente la prosperidad, tanto de la sociedad como de los individuos*” (Rerum Novarum: 11).

Por tanto, en la configuración de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a los pobres y la pobreza en Salta, entran en juego los “dispositivos de seguridad”, a los cuales refiere Foucault (2006-07), para indicar cierta articulación de relaciones de poder, en torno del gobierno de las poblaciones a partir de la gestión probabilística y preventiva del riesgo y

⁵²⁹ Este concepto, es el fundamento sobre el que se basa la actual idea de democracia participativa, idea sustentada en el concepto postulado por la Doctrina de la Iglesia acerca de que el verdadero y genuino orden social requiere que los distintos miembros de la sociedad se unan entre sí por algún vínculo fuerte que no sea sólo el de las relaciones laborales. Una fecunda política social sería precisamente aquella que impulsase a la conformación de este tipo de organizaciones comunitarias de la sociedad civil. La aspiración última es que no sólo a nivel nacional, sino internacional: “*Todo el cuerpo compacto y unido por todos sus vasos, según la proporción de cada miembro, opere el aumento del cuerpo para su edificación en la caridad*” (Quadragesimo Anno: 23). Para ampliar ver: Murillo, S. (2011)...op...cit.

los riesgosos. Puesto que, se trata de detectar “grupos de riesgo” (enfermos potenciales, inmigrantes, desplazados, indigentes, pobres, etc.) a fin de ejercer un gobierno eficaz sobre ellos. En este sentido, según Foucault: “...lo que caracteriza en esencia el mecanismo de seguridad es, creo, la gestión de esas series abiertas y que, por consiguiente, solo pueden controlarse mediante un cálculo de probabilidades” (Foucault, 2006: 39-40). Entonces, gestión de series abiertas y de acontecimientos probables e intervención no directa sobre el cuerpo, sino indirectas, mediante la creación de un “medio ambiente” (*milieu*) artificial, que busca favorecer y regular cierto tipo de movilidad y de conducta⁵³⁰. Por tanto, se trata de la construcción del “marco”, a partir del cual producir las condiciones de existencia de una población: “con el fin de ejercer un gobierno económico sobre la conducta de los individuos” (Castro Gómez, 2010: 7).

Ahora bien, estas prácticas de gobierno se ejecutan también, en el trazo de lógicas dirigidas a la “protección, contención, ayuda y asistencia”, que instala un marco jurídico, que por un lado se dirige a la construcción de “sujetos de derecho” y por otro a la “tutela asistencial” en torno de las poblaciones “más vulnerables”. Dicha “acción social asistencial” promovida por el programa de gobierno salteño se realiza, en resonancia con el programa anterior (1995-2007) en torno de la ejemplificadora acción social realizada por Eva Perón centrada en y desde el Estado, así como por la impronta “servicial y conectora”, que se concibe posee el Estado, en relación con el potencial que la sociedad civil ofrece en el ejercicio de gobierno. Puesto que, el Estado según lo analizado más arriba en torno del “principio de subsidiariedad”, tiene como función estratégica y específica la “ayuda, contención y asistencia” para propiciar el “bien común”, mediante la eficaz gestión de recursos y problemáticas. Pero, la sociedad civil es la herramienta extensiva y natural de solidaridad, que permite la concreción y resolución real de dichas problemáticas y poblaciones, ejerciendo, a su vez, el gobierno “a través de la comunidad” (Rose, 2007).

2- Tejidos vinculares entre Estado y Sociedad civil: estrategias de gobierno, gobiernos estratégicos, estratagema.

En continua discontinuidad con la lógica de gobierno dispuesta en los años 90’, en junio del 2008 se resuelve crear, en el Ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, el

⁵³⁰ Lazzarato (2006) ha referido a la noción de “acción a distancia” para mostrar que la producción del “medio ambiente”, en las sociedades de control, supone una modificación no directa, sino indirecta, de los estilos de vida, las maneras de vivir, de comer, de divertirse, entre otros.

“Registro único y Permanente de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia de Salta”⁵³¹. En tal sentido se define a “Las Organizaciones De la Sociedad civil”, como:

... un conjunto de organizaciones no estatales sin fines de lucro que actúan con arreglo a sus instrumentos constitutivos y las normas que regulan su existencia. Con el fin de llevar a cabo acción que propicien procesos de “prevención e inclusión social destinados a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas que viven en la provincia de salta, otorgando subsidios y ayudas pertinentes a personas en forma directa y a Organizaciones de la Sociedad Civil que desarrollan actividades afines con los objetivos sociales mencionados, es que el otorgamiento de los subsidios a dicha organizaciones se regula por la ley ante dicha en el marco del ahora creado Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil (Resolución N° 302/08, párrafos 3ro y 4to).⁵³²

Dicha resolución pretende aportar celeridad, eficacia y eficiencia a la gestión administrativa en el otorgamiento de subsidios y resolución de problemas sociales, según lo manifestado en la Ley N° 6833. Lo antedicho se sostiene en torno del proceso de “descentralización” de las políticas sociales, en el campo de la “solidaridad, cobijo, protección y cuidado/ayuda” que la sociedad civil, como ámbito “público no estatal”, puede ejercer en torno del gobierno de las poblaciones pobres.

En tal sentido, es importante retomar algunos rasgos que adquiere la problematización de la sociedad civil (Brizuela, Ginga, Manfredi, Tombolini, Campana y Giavedonia, 2012) a partir de estas prácticas. Un elemento reseñado y a recordar es cierta “espontaneidad o naturalidad” adjudicada a la sociedad civil y a los lazos que se constituyen en su interior. Espontaneidad presentada como un ámbito libre de control y conflictos mientras, que, retomando a Foucault, la sociedad civil se constituye en ámbito privilegiado de gobierno, como “dominio de interacción”, según lo ya trabajado.

Un segundo elemento de análisis remite a cómo la sociedad civil es colocada por separado respecto de otras esferas, como el Estado o el mercado, depositaria, ante todo de los “ideales modernos”; o por lo menos como un espacio/entidad en la cual pueden llevarse a cabo la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, etc. A partir de lo cual se ponen en juego cuestiones tales como la promoción de la participación social de los “vecinos y/o ciudadanos”, así como la “rendición social” de cuentas motorizada por un grupo heterogéneo conformado por ONGs, empresas privadas, espacios de organización local, instituciones de culto, de deportes, centros vecinales, etc. Entre dichas prácticas y lógicas de gobierno la sociedad civil raya con el mundo pleno y paradisíaco

⁵³¹ La continua discontinuidad se da en tanto dicho registro se regula por la ya trabajada, en el apartado II del capítulo 1, Ley N°6833: “Estableciendo Nuevas Relaciones del Estado con la Sociedad Civil”, que tiene como antecedente fundacional el ya analizado, decreto N° 53/95.

⁵³² Resolución N° 302/08, publicada en boletín oficial 17886, gobernación de la provincia d Salta

del sin conflicto, armónico y sin coerciones, en el que los seres humanos se “sociabilizan” naturalmente, para llegar a ser personas antes de ser miembros de una comunidad o de participar del mercado, inclusive (Cortina y Conill, 1998).

Por tanto, según lo antedicho y la perspectiva que traza el presente trabajo, no se trata, de un proceso de “privatización” de lo público, como pretendían los Organismos Internacionales apenas instalado el DDH y el proceso de des-socialización en los 90 (Álvarez Leguizamón, 2008); también se pone en juego un ejercicio de gobierno indirecto, específicamente, a través de la comunidad, construida como espacio de contención, riesgo e intervención que tiene como metas constituir “sujetos ciudadanos”, ya no a través de derechos, si no de “emprendimientos y empoderamientos autogestivos”. Estas prácticas de gobierno pretenden enmarcarse en el discurso de la “inclusión y la equidad”, que en torno de las racionalidades políticas de perfil, predominantemente, neoliberal, con matices singulares, no son sinónimo de “igualdad”, ya que el gobierno ejercido directamente o indirectamente a través del Estado y/o de la sociedad civil, genera las condiciones, los marcos, el medio ambiente para que el juego de la desigualdad sea siempre posible. En el caso de los pobres, se trata de un juego entre mínimos y márgenes, entre supervivencias, autoconsumos y tutelajes promocionales. La sociedad civil en Salta, entonces, sigue siendo considerada como el dominio transaccional (Foucault, 2007), en el cual se ejerce el gobierno “indirecto” de lo público bajo el valor natural de la solidaridad.

2.1- Des-centralización de las Políticas sociales en Salta (2009-2010): gubernamentalización del gobierno de Estado

Acorde a lo trabajado en el capítulo 3, en las prácticas de gobierno salteño el rol de los “municipios”⁵³³ ha sido de gran importancia en el proceso que da en llamarse de: “federalización y descentralización” de la “ayuda social, el gasto social, la acción social y las políticas sociales.

⁵³³ En febrero de 2010, el acuerdo estratégico con los municipios se profundizó aún más con el anuncio de la descentralización de la ayuda social. Por entonces, supuso la transferencia de \$109.000.000, que, administradas primero por el Ministerio de Desarrollo Humano, pasaron, desde entonces a engrosar las arcas de los municipios. A partir del presupuesto 2011 los incrementos a los municipios se institucionalizaron: a los montos coparticipables se sumaban \$122.669.853 de “Aportes a Gobiernos Municipales” (descentralización de la ayuda social), más \$135.282.186 del Fondo Federal Solidario. En el presupuesto 2012, los montos por descentralización aumentaron a \$194.098.987 mientras los FFS treparon a \$166.767.248. Otra contratapa volvió a referirse al tema en el Cuarto Poder N°832 del 24 de julio de 2010: “La genial impostura es justamente eso: esconder objetivos oscuros en medio de una maraña de informaciones demasiado hermosas, como para que alguien se cuestionarlas”. Avalos, 2012: 183.

En una primera etapa de descentralización de las políticas sociales, iniciada en 2008, se puso énfasis en la obra pública y la intención política de generar trabajo-empleo a través de la misma, así como en la generación de “pequeñas y medianas empresas” de construcción a nivel local-municipal. También, esta primera etapa se vio atravesada por la profundización y extensión municipal del *Plan Provincial Alimentario*, dirigido, ante todo a combatir la “desnutrición” en el entramado discursivo oficial de la “lucha contra la pobreza” acode a resonancias del Desarrollo Humano; así como se extendió, tal cual veremos en el próximo subapartado, el uso de la Tarjeta social y el Nutrivínculo, sobre todo controlado y cuantificado en derredor del “aumento” de beneficiarios, que acceden a los planes y la búsqueda de reducción y buena gestión de índices, en torno de las poblaciones más pobres de entre las pobres.

A esta primera etapa se le suma la adhesión provincial a la AUH, así como la elaboración de la propuesta del “Censo social”⁵³⁴, el cual es considerado como un apoyo en este proceso de descentralización de las políticas sociales, con la intención de: “...*saber cuáles son las necesidades de los ciudadanos de toda la provincia, es por ello que pusimos en marcha el Censo Social, que es una herramienta formidable para conocer los problemas de las personas y buscar la manera de solucionarlos*”. (J. M. Urtubey, 2010)⁵³⁵. Dicho Censo fue financiado por el Banco Interamericano De Desarrollo, en el marco el Programa de Mejora de la gestión municipal (BID N° 1855/OC-AR. Agosto 2010) y en el marco del Programa de Fortalecimiento Municipal Provincial, en la órbita

⁵³⁴ El censo que se llevó a cabo desde 2010 hasta 2012 en 160 barrios capitalinos pretendía extenderse, de manera ensayística, en zonas urbanas y dos comunidades aborígenes de la localidad de Tartagal, para luego continuar - en una segunda etapa - en Santa Victoria. Ante todo, tenía como finalidad recabar información para mejorar la calidad de vida de los salteños mediante una mejora en la política pública (Ministro de economía Parodi, gobernación d a provincia en: <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/funcionarios-del-gobierno-analizaron-las-acciones-para-el-censo-social-en-el-interior/14495>, consultada, marzo 2013. El único informe que se conoció fue a principios del 2010, cuando el gobernador los presentó en el Centro de Convenciones. De las 12 mil personas censadas en siete barrios de la zona norte, sólo 2 mil trabajan de forma eventual, 300 son empleados públicos y 4 trabajan en cooperativas. Además, 10 mil aseguraron no recibir ninguna ayuda social por parte del estado. Otras 500 personas dijeron no saber leer ni escribir y 2 mil no quisieron responder a esa pregunta. Los barrios censados fueron 15 de Septiembre, Juan Manuel de Rosas, La Tradición, 17 de Octubre, La Unión, Balneario y Patricia Heitmann. Según lo manifestado en el *Cuarto Poder*, dicho informe también contaba con los datos que se señalan a continuación y, que no fueron indicados por el gobernador en conferencia de prensa: “*el mismo solamente se relevaron los datos de siete barrios de la capital salteña (17 de octubre, Juan Manuel de Rosas, La Unión, 15 de septiembre, Tradición, Patricia Heitman y el Barrio Balneario). Dicho relevamiento arrojó resultado sombríos: 75% de la población sin acceso a cloacas (Barrio 15 de Septiembre 98%, Barrio Balneario 99%); 7% sin acceso al agua; 35% de las viviendas no se encontraban en terreno propio; 81% de las viviendas no se encontraban escrituradas; 66% de los trabajadores en negro; 65% de la población sin cobertura de salud; 32% de la población receptoras de viandas alimenticias; 9% de analfabetos*”. (Cuarto Poder, 11/03/2013). En todos estos años se ha dado a conocer ningún otro informe de modo oficial.

⁵³⁵ Gobernación de la provincia de Salta, en: <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias> 26/07/2010; consultada, diciembre, 2012/marzo, 2013.

de la Subsecretaría de Financiamiento Ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la provincia de Salta.

Para lograr los objetivos propuestos se indica que es menester: Fortalecer la mejora de la gestión municipal mediante la capacitación permanente a los municipios del interior a través del uso de las nuevas tecnologías; Fortalecer la capacidad administrativa y financiera de los municipios, con adecuados sistemas de gestión; Consolidar las reformas implementadas en materia de Recursos Humanos, contando con el diseño de un sistema de carrera pública provincial orientada a premiar el mérito, la formación y el desempeño; Fortalecer las estrategias y políticas de acción social a nivel provincial y municipal; Disponer en los ámbitos municipales de instancias que faciliten el acceso a una justicia rápida y efectiva; Mejorar la gestión turística municipal; Promover la formulación de un Planes Integrales de Desarrollo Urbano Ambiental (P.I.D.U.A.); Fortalecer la unidad ejecutora provincial para que adquiera una mayor capacidad de gestión de los proyectos y programas que administra; Generar un espacio institucional de concertación y articulación a nivel intermunicipal, a través de la Gestión Asociada Regional (GeAR); Mejorar la accesibilidad a los servicios del ciudadano y posibilitar una administración orientada a éstos en la municipalidad de Salta⁵³⁶.

Estas reformas producidas en el aparato administrativo municipal y provincial a nivel estatal iniciadas en los 90', recodificadas en el 2007-08 forman parte de lo que Campana (2012) llama, siguiendo a los anglofoucaultianos, "proceso de gubernamentalización del gobierno", agregaríamos del gobierno de Estado. A través del cual los propios mecanismos de gobierno son objeto de problematización y reforma. En tanto, de los estudios de gubernamentalidad emana que la gubernamentalización del Estado – proceso por el cual el gobierno del Estado comenzó a ocuparse del cuidado de la población - se encuentra y es parcialmente desplazado, reinscripto y recodificado por otra trayectoria, en la cual los mecanismos de gobierno de Estado son ellos mismos sujetos de problematización. Es esa reconfiguración del gobierno del Estado sobre sí mismo lo que se define como gubernamentalización del gobierno: *"...es posible transformar la sociedad actuando sobre los mecanismos a través de los cuales ella es gobernada"* (Campana, 2012: 159).

⁵³⁶ Fuente: Dto. BID Y M. D Finanzas y Obras Públicas de Salta, 2010, PCH24082010: 27-28.

Esto significa, siguiendo a Dean (1999), que la reforma de la *performance* de las instituciones y técnicas de gobierno existentes se transforma en un objetivo central del gobierno; significa la puesta en marcha del imperativo de desarrollar instituciones y mecanismos gubernamentales que apunten a la eficiencia, la *accountability* y la transparencia, empleando para ello tecnologías de *performance*. En tanto la gubernamentalización del gobierno opera en dos conjuntos de tecnologías: las de *performance*, que se presentan como técnicas de restauración de la confianza y transparencia en los servicios públicos, buscan aumentar la eficiencia, transparencia, capacidad y responsabilidad de las instituciones y mecanismos gubernamentales (cogestión, democratización de la administración pública, etc.); Y, paralelamente las *tecnologías de agencia*, que trabajan sobre lo individuos, con el objetivo construir ciudadanos “activos”, consumidores “responsables”, sujetos “autónomos. Dentro de las tecnologías de ciudadanía estas últimas engloban las múltiples técnicas de *empowerment*, consulta y participación que suelen ponerse en juego cuando ciertos grupos, individuos y/o comunidades se identifican como “poblaciones objetivo” (Dean 1999, en Campana 2012: 159-160).

Desde tal punto de vista, entendemos la estrategia de “descentralización y modernización” como tecnología de *performance*, ya que tiene por objeto aumentar la eficiencia, transparencia, capacidad, responsabilidad de las instituciones y mecanismos gubernamentales, presentándose como vía de restauración de la confianza hacia las instituciones políticas, la democracia participativa y la re-territorialización, a escala local, del programa de gobierno público.

De hecho, el objetivo principal del Plan de Mejora de la gestión municipal, firmado con el BID señala pretende:

...mejorar las capacidades institucionales de los gobiernos locales consideradas desde diversos planos sectoriales, de gobierno, planificación y gestión y desde una preocupación por su desarrollo, modernización y la atención al ciudadano-vecino. Este objetivo se concreta por diferentes y simultáneas vías institucionales, tanto provinciales como municipales, a partir de la formulación y ejecución de proyectos específicos. (Dto. BID Y M. D Finanzas y Obras Públicas de Salta, 2010, PCH24082010)⁵³⁷.

⁵³⁷ Dentro de los componentes específicos del programa se encuentra el de “Fortalecimiento de estrategias de políticas sociales municipales”, en torno del cual se ejecutan las políticas de descentralización y de “recaudación y ordenamiento de información específica”, como el censo social, en tanto: “*Es fundamental para la toma de decisiones por parte de las altas autoridades del Gobierno Provincial y municipal la identificación de la situación actual social y necesidades de la población. Para ello resulta de gran utilidad el manejo de datos estadísticos obtenidos sistemáticamente en temas referidos a Salud, Educación, Trabajo, Asistencia Social y Programas Sociales, entre otros, disponiéndose de información actualizada*”. Dto BID Y M. D Finanzas y Obras Públicas de Salta, 2010, PCH24082010: 24.

De igual modo, estos esquemas de participación social derivados de la estrategia de descentralización o descentralizadora, funcionan como *tecnología de agencia*, que buscan mejorar las capacidades de participación, acuerdo y acción de los individuos, ante todo en el discurso vinculado con la “ciudadanía” en clave de autogestión, empoderamiento, consulta y negociación participativa del sector público y privado, así como de las poblaciones pobres los vecinos y los beneficiarios. Así:

...tanto las tecnologías de performance como las tecnologías de agencia dan contenido al proceso de gubernamentalización del Estado y, como tecnologías de gobierno, son procedimientos y técnicas a través de las cuales se pretende conformar, guiar, instrumentalizar, encauzar la acciones y decisiones de los sujetos . (Campana, 2012: 16).

Observamos cómo, dichas prácticas de descentralización, modernización y eficientismo del Estado, promueven la rearticulación entre el Estado y la sociedad a escala local, mientras que se reactivan e instrumentalizan a través de diversas prácticas, procedimientos y técnicas que apuntan a “los barrios, las poblaciones locales, las comunidades y los individuos”, en un diagrama trazado, también, por los marcos y prácticas de planificación, evaluación y gestión de las políticas públicas, ante todo.

2.2. Mecanismos de intervención y gobierno de las poblaciones pobres y vulnerables: programas, planes y proyectos (2007-2011)

Entre los programas y planes más importantes llevados a cabo en Salta a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para “la contención, la promoción y el desarrollo de las personas, de manera integral”, encontramos: En el marco de los *Programa de Seguridad Alimentaria*, entre 2007 y 2009: a) *Tarjeta Social*: Antes de la implementación de este sistema en Salta se entregaban 50.000 bolsones federales cada dos meses, a partir de la implementación de la Tarjeta Social los beneficiarios pueden adquirir los productos con los que desean alimentar a su familia todos los meses; b) *Kit Nutri-Vida*: Consiste en un módulo alimentario de alta densidad calórica para niños en riesgo nutricional, desnutridos y en recuperación nutricional. Además se provee a los beneficiarios de suplemento polivitamínico y un tratamiento antiparasitario; c) *Pancita*: se entregan tickets alimentarios a mujeres embarazadas y de bajos recursos, d) *TBC* (tuberculosis): módulos alimentarios; e) *Bolsones Celíacos*: para beneficiarios de escasos recursos; f) *Bolsones de Emergencia*; g) *Pan Casero*: para grupos de madres que producen pan para autoconsumo

o para la venta y su consecuente ayuda económica en el hogar. También se encuentran en este rubro los *Comedores Infantiles y Comunitarios*⁵³⁸.

Dichas políticas alimentarias se dirigen a las poblaciones más vulnerables, con el objetivo, no solo de “ayudar a saciar el hambre, por lo menos entre los mínimos”, también, parafraseando tramos discursivos oficiales para que los pobres “pueda elegir qué y cómo comer y/o cocinar”; a través de lo cual observamos cómo se remarca el gobierno microconductual e indirecto del “el interés, e incluso el gusto”, mediante un discurso centrado en la ampliación de oportunidades por un lado y, en el gobierno de acceso a los mínimos, por el otro.

A su vez, en un marco de co-coordinación de políticas sociales entre provincia y nación, se ejecuta en *Plan Ahí* en la Provincia de Salta, el cual se lleva a cabo en 26 localidades de la provincia que tienen menos de 13.000 habitantes. Dicho Plan entrega pensiones nacionales a madres con 7 hijos, por invalidez o a la vejez, construye CIC (Centro Integrador Comunitario), se entregaron ayudas urgentes familiares, tanques de agua para escuelas, mientras que se promueven actividades productivas para autoconsumo⁵³⁹. También la gobernación provincial adhirió al *Plan Nacional de Accesibilidad* mediante la firma de un convenio con la Comisión Nacional Asesora para personas con Discapacidad, CONADIS, a través del cual los municipios contemplados en el Plan Ahí, tendrán financiadas en su totalidad las obras que permitan crear las condiciones adecuadas para la circulación de personas con discapacidad permanente o transitoria, en los circuitos urbanos. Así, desde el programa de gobierno provincial se sugiere que se

⁵³⁸ A partir de septiembre del 2009 los “titulares de derecho”, como se hace referencia a los “sujetos beneficiarios” de este programa, podrán contar con un aumento cuyos montos varían entre los \$65 y los \$130. En total con este sistema, ingresan \$60.000.000 anuales al circuito comercial de la provincia. En el Kit Nutri-Vida se contaba en 2009 con 40.000 beneficiarios, de 6 meses a 6 años, por mes; Pancitas: 10.000 beneficiarias mensuales; TBC: 650 beneficiarios por mes; Bolsones Celiacos: 100 beneficiarios de escasos recursos mensualmente en toda la provincia; Bolsones de Emergencia número variable por mes. Este año ya se entregaron 14.000; Pan Casero: 7.000 bolsas de harina por bimestre, cada bolsa contiene 50 kg. En lo referente a los “comedores” se contaba con 173 en toda la provincia llegando a 15.300 beneficiarios. Durante 10 años la Provincia pagaba a los comedores infantiles \$0.60 por día y por niño, a partir de la decisión de esta gestión se destina \$1.20 por día y por niño que asiste a diario a los comedores. Durante la gobernación dirigida por Urtubey se incrementó poco más de un 129%, casi un 130%, en valores nominales, la inversión en políticas alimentarias, comparando la inversión realizada en 2007. Respecto a la inversión en materia alimentaria y de políticas sociales en el año 2007 fue de \$32.623.675,99 distribuidos en los siguientes. Durante el año 2008 la inversión del Gobierno de la Provincia de Salta respecto a los programas de Seguridad Alimentaria, Comedores Comunitarios, Asistencia Alimentaria y Políticas Sociales fue de \$41.735.355,00. En tanto en el año en curso, 2009, la inversión es de \$74.704.990,07. Ver: Dcto. Oficial, “Acciones y políticas sociales del Gobierno de Salta”, 2009, Gobernación de la provincia,...op...cit.

⁵³⁹ En la localidad de Hipólito Irigoyen se encuentra en ejecución un proyecto integral para la cría de cerdos, apoyo a las unidades productivas y apoyo a la comercialización; también se encuentra en ejecución un proyecto en la localidad de El Galpón también para la cría de cerdos, producción de alimentos procesados y carnicería comunitaria; en la localidad de El Carril se encuentra también en desarrollo un proyecto productivo integral de servicios. Cada uno de estos proyectos implica una inversión de hasta \$300.000.

ejercita la “presencia del Estado, en el territorio”, mientras que consideramos se promueven y generan las condiciones pertinentes para que los tejidos sociales primarios y locales posibiliten al pobre “salir” de su propia pobreza.

2.3- Programas de Empleo: emprendimientos, capacitaciones y cooperación

Acorde a lo señalado, en el presente subapartado haremos referencia a la cuestión del gobierno de las poblaciones pobres y desocupadas, mediante una analítica de los mecanismos dirigidos a gestionar el empleo, el desempleo y la pobreza.

En la *Secretaría de Políticas Sociales* también se nuclean los programas de empleo concentrados en el dispositivo de la economía social, tales como: a) *Programa Microcrédito*, b) *Programa Manos a la Obra* y c) *Escuela de Oficios*.

El microcrédito, según lo establecido por ley nivel nacional y lo ya analizado en el apartado I del presente capítulo: “...es una herramienta para el desarrollo social que no sólo integra a la persona a través de un emprendimiento productivo sino que recupera el trabajo que dignifica y da esperanza para el fortalecimiento y la transformación de la provincia”⁵⁴⁰, el mismo se construye en la órbita del “pequeño emprendedor” advenido “trabajador” con derechos diferenciales en torno de su condición del pobre vulnerable”. El programa Manos a la Obra se orienta a proyectos de desarrollo local y que apuntan a la comercialización de los productos, de los beneficiarios.

Estos programas dirigidos a “poblaciones vulnerables, en riesgo y riesgosas” se articulaban allá por 2008, con la *Secretaría de Promoción de Derechos* dirigida ante todo a la “prevención” de violencia familiar, jóvenes en conflictos con la ley penal y el fortalecimiento del programa familia; Convenio Nacional para cuidadores domiciliarios, en torno de convenios con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, lo cual se complementa con capacitaciones en artes y oficios y diferentes actividades y mecanismos dirigidos a las poblaciones “discapacitadas”, como la creación de una Junta de Evaluación y Certificación de la Discapacidad. También resulta un campo de intervención el ámbito de las “adicciones”, donde se trabaja articuladamente con ONGs de la sociedad civil, la iglesia Católica y la Evangelista previniendo, conteniendo, capacitando, gestionando la problemática que impide, según se lo señala, la re-inserción social de los jóvenes. Esto se complementa con actividades “deportivas”, también

⁵⁴⁰ Dcto. Oficial, “Acciones y políticas sociales del Gobierno de Salta”, 2009, Gobernación de la provincia...op...cit.

promovidas por el MDS de la Nación, por considerar al deporte como una actividad que fortalece la individualidad y los tejidos sociales más cercanos, para la inclusión e integración de los jóvenes, ante todo⁵⁴¹.

Puntualmente, en lo referente a *programas de "empleo"*, en el año 2008 se genera un *Programa de Promoción de Empleo Salta*.⁵⁴² El Programa se orienta a "políticas concretas para fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado de la provincia de Salta, se pretende abordar, en toda su dimensión, el problema del desempleo y buscar la solución en el crecimiento sostenido de la economía, pero entiende también que el incentivo no siempre llega a determinados grupos de la población con la velocidad y la contundencia deseada (considerandos, decreto N° 4951/08). Se anuncia como antecedente la Ley N° 7517, que establece la exención del Impuesto a las Cooperadoras Asistenciales a favor de las personas físicas o jurídicas que produzcan un incremento en su nómina de trabajadores, con la finalidad de que a través de la disminución de la presión tributaria se colabore con la generación genuina de nuevos puestos de trabajo; por lo cual se decide.

El nuevo plan promete "incluir" a los llamados "excedentes de la Administración Pública Provincial" (un colectivo de agentes públicos cesados de forma fulminante en 1995 por el gobernador Romero y su entonces secretario de Empleo), a beneficiarios de programas sociales de trabajo, como Salta Trabaja o Salta Solidaria (programas instalados en los años 90) y a jóvenes, "que accederán a becas para la finalización de estudios"⁵⁴³.

⁵⁴¹ La nueva gestión transformó el Plan Provincial de Adicciones en una Secretaría de Estado; los convenios se llevaron adelante junto a ONGs de la sociedad civil, la iglesia Católica y la Evangelista. Se firmó convenio con el Foro de Intendentes de la Provincia para la puesta en marcha en una primera etapa de capacitación a personal en la prevención de adicciones y la posterior realización de talleres en todos los municipios Programa "Quiero Ser", capacitación a docentes de capital (120) y del interior (50) en el marco de las actividades del Septiembre estudiantil. Prevención de adicciones. En el marco de la Secretaría de Deportes se creó el Primer Centro de Rehabilitación deportiva que tendrá sede en 5 localidades del interior de la Provincia, destinado a niños, adolescentes y adultos con cualquier discapacidad. Mientras se articuló con clubes salteños a través del Programa Nacional "Nuestro Club" Torneo Nacional Evita Escuelas Deportivas Provinciales.

⁵⁴² Decreto N° 4951/08 del día 04-11-2008, Boletín Oficial de Salta N° 17999. Publicado el día Martes 25 de Noviembre de 2008

⁵⁴³ El gobernador anunció, que estaban en condiciones de jubilarse 392 de aquellos excedentes, y que podrán obtener los beneficios correspondientes antes de fin de año, gracias a un convenio entre el gobierno provincial y la Administración Nacional de Seguridad Social. El plan prevé también que el resto de los excedentes pueda acceder a un empleo privado, en cuyo caso el gobierno asume la obligación de subsidiar su salario a razón de 600 pesos mensuales durante dos años y de gestionar la disminución de las cargas sociales para estos contratos. La otra parte de la iniciativa está destinada a los beneficiarios de programas provinciales de trabajo como *Salta Trabaja o Salta Solidaria*, a quienes la el Estado provincia abonará \$350 como parte de su salario en el sector privado. El mandatario también aclaró que las personas que no consigan su inserción en el mercado laboral, continuarán cobrando su plan de \$ 150. Fuente: <http://noticias.iruya.com/salta/index.php/economia-mainmenu-746/empleo/16895-urtubey-presenta-un-programa-de-promocin-del-empleo-en-salta.html>; consultada marzo, 2013.

Los voceros y documentos emitidos por el programa de gobierno provincial aclararon que los subsidios se abonarán directamente al trabajador y que serán "remunerativos", es decir, que se pagarán a cambio de trabajo efectivo y cotizarán a la seguridad Social, este "pago directo" no supondrá - según lo dispuesto - la existencia de "relación alguna" entre el gobierno y el trabajador, es decir no existirá relación "contractual" entre ambos (trabajadores y Estado), por tanto tampoco tiene el trabajador derecho a reclamo, seguridad social ni nada que pueda, en tal sentido, ser otorgado por el Estado⁵⁴⁴.

Dicha medida gubernamental en torno del empleo re-instala, singularmente, el rol asignado al Estado desde el 2007, como mediador, articulador y gestor de políticas inclusivas en relación directa con los ámbito privados vinculados ante todo al empresariado local y la sociedad civil. El Estado no es "generador de empleo, promotor del mismo, la política del pleno empleo no le es propia"; si no más bien de los mecanismos que posibiliten, por un lado el marco para que el desempleo no sea un problema estructural garantizando estabilidad y crecimiento económico sostenido, y por otro generando las condiciones para que el "desempleado" advenga, por sí mismo y a partir de sus capacidades sujeto económico y jurídico con empleo. El Estado articula, acompaña y ofrece oportunidades, hasta que los sujetos se autogestionen y autonomicen en el campo laboral "decente"⁵⁴⁵.

En esto de la puesta en marcha del trabajo "decente", empresarialmente apropiado y socialmente responsable, desde el 2010 se profundizan los programas de empleo vinculados a la "capacitación", orientados hacia el desarrollo humano de los sujetos "desempleados o jóvenes en búsqueda de empleo" ante todo, profesionalizando las tareas, dando herramientas para la búsqueda y el encuentro del trabajo (Armado de CV., Entrevistas laborales, etc.), capacitaciones en oficios que propicien la salida rápida y, en su mayoría informal, en torno del empleo, así como la autogestión autoempleable, emprendedora y autogestionaria de los sujetos económicos, ahora sujetos de trabajo.

Ante todo, estos dispositivos se ponen en marcha en relación con empresas y agentes del tercer sector encargados de "transmitir conocimientos efectivos eficientes, profesionales y precisos", sobre ciertas "actividades que resultarían, no solo remunerativas, también redistributivas del capital humano y social" (Ministerio de Trabajo y Previsión Social de

⁵⁴⁴Cabe aclarar que, al subsidiar un porcentaje del sueldo de los trabajadores, los mismos tendrán siempre la consideración de acreedor del Estado provincial en virtud de un título administrativo, por las cantidades previstas en el Programa para los subsidios a su salario.

⁵⁴⁵Fuente:<http://noticias.iruya.com/salta/index.php/economa-mainmenu-746/empleo/16895-urtubey-presenta-un-programa-de-promocin-del-empleo-en-salta.html>; consultada marzo/mayo, 2013.

la provincia de Salta)⁵⁴⁶. Estas prácticas de gobierno de Estado, en el campo de la economía social, hacen a la problematización y construcción de los sujetos pobres en sujetos económicos-empleables potencialmente con derechos.

Entre los programas, planes y proyectos más relevantes, en tal sentido, se encuentran: a) *El Programa de Formación para el Trabajo*:⁵⁴⁷; b) *Programa de Orientación y Formación para el trabajo*⁵⁴⁸; c) *Línea de Crédito Fiscal del MTEySS de la Nación*; d) *Curso de Hormigón Elaborado*⁵⁴⁹; e) *Curso de Higiene y Seguridad Alimentaria*; f) *Programas de capacitación articulados con empresas mineras, azucareras, tabacaleras, en el arco de la Responsabilidad social empresarial*⁵⁵⁰; g) *Programa Gas en casa*; h) *Programa Descentralizado de formación para el trabajo*⁵⁵¹; i) *Empleo Joven*:⁵⁵²; j)

⁵⁴⁶Fuente, Ministerio de Trabajo y Previsión social de la provincia de Salta: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-trabajo/11>; <http://www.trabajosalta.gob.ar/>; consultada marzo/mayo 2013.

⁵⁴⁷ Mediante El protocolo adicional N° 5 al convenio 49/08 firmado entre el Gobierno de la Provincia y el MTEySS de la Nación, prevé la ejecución del Programa de Formación para el Trabajo, que tiene como objetivo “incorporar y promover la certificación en cursos de formación profesional”. A los efectos de cumplimentar con lo convenido se inscribieron a 600 participantes en distintas líneas de formación profesional en oficios y servicios, de acuerdo al contexto productivo local de los municipios participantes, y a las instituciones capacitadoras, provenientes del Tercer sector. Fuente, Ministerio de Trabajo y Previsión social de la provincia de Salta, en: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-trabajo/11>; <http://www.trabajosalta.gob.ar/>; consultada abril, 2013.

⁵⁴⁸ Entre algunos ejemplos de coordinación institucional con Instituciones Capacitadoras y Empresas, se trabajó con la Fundación UOCRA. Se ejecutaron en forma conjunta 36 cursos de Capacitación en oficios del sector construcción en capital y algunos municipios del interior, donde el MTyPS proveyó elementos de protección personal, kit de herramientas, y realizó asistencia técnica y supervisión de los mismos; capacitando un total de 875 beneficiarios. También, se conformó una agenda conjunta que se inició con la firma de un Convenio de Cooperación Mutua entre la Secretaría de Empleo, Secretaría de Minería y Recursos Energéticos, la Secretaría de Pymes y la Cámara de la Minería de la Provincia, donde las partes se comprometieron a realizar capacitaciones en oficio para los desocupados, sub ocupados y jóvenes de los Departamentos de Los Andes y La Poma. Desde el mes de Octubre a Diciembre de 2010, se capacitó a 200 personas en: Albañilería Tradicional; Carpintería de Obra; Soldadura; Electricidad; Seguridad Minera: Técnico minero; Voladura. Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión social de la provincia de Salta: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-trabajo/11>; <http://www.trabajosalta.gob.ar/>; consultada marzo/mayo 2013.

⁵⁴⁹ En el marco de la implementación de la Unidad Intersectorial de Certificación de Competencias de la Secretaría de Empleo, en pos de la Promoción del Empleo Decente, se ejecutó el “1° Curso de Laborista de Hormigón Elaborado”, en coordinación con la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado.

⁵⁵⁰ Tal es el caso de Alliance One, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de esta empresa tabacalera, se presentó en la Secretaría de empleo una propuesta de capacitación para la realización de cursos en oficios destinados a pobladores del Municipio El Carril, Ingenio El Tabacal, Pichanal e Hipólito Yrigoyen. El proyecto incluyó los siguientes cursos: Soldador de arco con electrodo revestido; Tractorista; Preparador y colocador de agroquímicos; Operador de Fresa Tradicional; Operador de Máquina con Instrumental Electrónico. Ver: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-trabajo/11>; <http://www.trabajosalta.gob.ar/>; consultada marzo/mayo 2013.

⁵⁵¹ En el marco del Programa de Descentralización Provincial, con el fin de potenciar el desarrollo local a partir de la transferencia de recursos a los municipios y a sus comunidades, la Secretaría de Empleo inició la implementación del Programa Descentralizado de Formación para el Trabajo (PDFT), a través de la capacitación de los Gestores de Cambio Municipal. Fuente, Ministerio de Trabajo y Previsión social de la provincia de Salta, en: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-trabajo/11>; <http://www.trabajosalta.gob.ar/>; consultada marzo/mayo 2013.

⁵⁵² Se trata de un programa destinado a jóvenes que no hayan completados su estudios primarios, secundarios y que se encuentren en situación de desempleo. Los beneficiarios de este programa son incorporados a los cursos de Formación para el Trabajo, correspondientes al Protocolo Adicional N° 05/10 – Convenio 49/08.

Autoempleo es la actividad de una persona que trabaja para ella misma de forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.; k) *Obra Pública Local*: Este es un programa de ejecución municipal, con fondos nacionales y provinciales, que prevé la incorporación de beneficiarios de planes sociales en pequeñas obras de infraestructura en los municipios.⁵⁵³

Ahora bien, sobrevolando los números porcentuales encontramos como entre 2003 y 2012 el déficit global de trabajo decente se redujo en Salta. Sin embargo, si se compara con otras provincias, Salta está entre las de peores índices. Esto se desprende de una investigación del *Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico* (Ielde) de la Universidad Nacional de Salta, que remarcó las mejoras en trabajadores que perciben una cobertura social y cuyos derechos laborales son más respetados, pero que no pudo negar lo desalentadora que resulta la comparación con el resto de las provincias. El informe (2012), que llevó adelante la investigadora Mónica Jiménez destaca el hecho de que Salta es la quinta provincia con mayor desempleo en el país y la primera en la que sus trabajadores presentan algún tipo de insatisfacción, para remitir al trabajo decente se utilizaron los siguientes indicadores: “trabajo bien remunerado, cobertura de la seguridad social y acceso de empleados a derechos laborales”. Según este último indicador, el 29% de los ocupados salteños se encuentra insatisfecho con su trabajo. En cuanto a un trabajo bien remunerado, este todavía tiene bajos índices: del total de los salteños ocupados, el 18% percibe un salario no decente. Es decir, por debajo del salario mínimo vital y móvil.⁵⁵⁴

En esta sintonía se reconoce por parte del programa de gobierno local que existe una gran demanda de personas que luego de una Capacitación no encuentran salida o inserción laboral en relación de dependencia, motivó a esta secretaría a implementar programas que proveen asistencia técnica y capacitación para emprendedores. Esto pone en evidencia la

⁵⁵³ La Nación aporta un 70% de los materiales y herramientas de trabajo, mientras que la provincia se hace cargo del 30% restante y la contratación del tutor.

⁵⁵⁴ Según dicho informe, donde hubo una mejora fue en lo que refiere a cobertura de la seguridad social, si bien el indicador permanece bajo. Porque si en 2003, el 59 por ciento de los asalariados no estaba registrado, en 2012 ese porcentaje era del 45 por ciento. Sin embargo, este porcentaje es apenas dos puntos porcentuales menores al observado en Santiago del Estero, última en el ranking nacional. Algo similar ocurre cuando se considera el porcentaje de empleados sin derechos laborales. Según este indicador, Salta es la tercera provincia con mayor déficit. De hecho, según el INDEC, en el 2007, cuando asume el gobernador Urtubey en el 2do trimestre la desocupación era de 10,5 y en el 4to de 9,6, mientras que en el 2011 variaba entre el 11 y el 11,7% haciendo que Salta se encuentre entre las provincias con mayor desocupación en el país. No se cuenta con datos precisos en torno de los departamentos regionales, pero por lo obtenido en el trabajo de campo, las cifras estimadas de desocupación en Gral. Mosconi alcanzan aproximadamente al 70% de la población.

apuesta, poco lograda en torno del “trabajo decente” para poblaciones pobres, ante todo, en el proceso de construcción de empleabilidad y oportunidades. A partir de lo cual, en este diagrama programático dirigido a las poblaciones desocupadas, entre capacitaciones, formaciones, asistencias, empleo y autoempleo se pone en marcha un conjunto de dispositivos de inversión en “capital humano”, acorde a lo analizado en el apartado I del capítulo 1. En tanto, acorde a los dispositivos antes descriptos y las lógicas correspondientes, en este enjambre vincular estratégico de inversiones y asistencias el pobre desempleado y/o el sujeto desempleado-desocupado se considera que podría encontrar herramientas, elementos, capitales a partir de los cuales dar el salto - individual y autónomo al “mercado de trabajo”-; esto es, entre las guías, los nexos y la asistencia del Estado - en sus diferentes niveles - y las organizaciones de la sociedad civil específicas para tales fines, entre las cuales se encuentran algunos sindicatos.

3- Segunda etapa en el Plan de Políticas sociales: descentralización, planificación y abordaje foco-federal-asistencial-humanizado (2010-2013)

En los trazos del programa de gobierno salteño dirigido a las poblaciones pobres, en un segundo período o etapa del llamado: “Plan de Políticas Sociales” (2010 - nuevo diseño de abordaje y planificación), se profundiza la descentralización de las mismas, para lo cual, según informe oficial:

...se crea un área específica para articular la relación público-privada en el marco de la responsabilidad social empresaria: asimismo la estrategia de la política social es focalizada actuando en conjunto con los intendentes quienes son lo que conocen las particularidades de las poblaciones y regiones (resaltados nuestros).⁵⁵⁵

Para la Segunda etapa, en febrero del 2010, el gobernador firmó un decreto de “descentralización de la políticas sociales de todos los municipios de la provincia (Decreto N°472/10).⁵⁵⁶

Dichos tramos normativos de enunciación indican que se avanza en el camino irreversible de mejorar la calidad institucional, evitando el clientelismo y aumentando los

⁵⁵⁵ Ver: Gobernación de la provincia, 4/02/2010, en; <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/comenzo-la-segunda-etapa-del-plan-de-politicas-sociales/4262>; consultada abril, 2013.

⁵⁵⁶ Boletín oficial de Salta N° 18286, publicado el día 10 de febrero del 2010. En noviembre de este año, en consonancia con los aportes programáticos realizados en torno de Programa de mejora municipal del BID, también se firma el decreto N° 4784/10 aprobando el protocolo específico entre la gobernación de la provincia de Salta y la Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el crecimiento (CIPPEC). Considerando que dicha fundación desarrollará los Módulos “Apoyo al Consejo de Auditoría Ciudadana para el monitoreo y la promoción de la rendición de cuentas” Y “Sistematización político-técnica de la experiencia de Salta en la descentralización de las políticas sociales”. Boletín Oficial de Salta N° 18480, publicado el 30 de noviembre del 2010.

niveles de eficiencia, eficacia y operatividad gubernamental, en lo referido a la cuestión de la pobreza. Se considera que el objetivo de la medida pública de gobierno es, acorde a los entramado enunciativos del DDH en resonancia del discurso propuesto por el PNP nacional, lograr que la eficiencia permita una “equidad” en la distribución de los recursos, eliminando la intermediación política, distribuyendo y descentralizando a nivel municipal los recursos para la acción social para lo cual:

*...deberán profundizar el trabajo en cada municipio para potenciar el desarrollo de cada una de las localidades utilizando la herramientas de la economía social (...) estamos trabajando en un esquema de gobierno que busca afianzar la participación de todos los actores de la sociedad civil, profundizando la distribución equitativa de los recursos.*⁵⁵⁷

En la sintonía con lo antes dicho, en torno de la gubernamentalización del gobierno de Estado y a lo dispuesta en los 90’, pero ahora con resonancias de “equidad, inclusión y redistribución de recursos”, el marco estratégico del dispositivo de la pobreza se codifica y construye en un vínculo múltiple y complejo, tenso y heterogéneo, entre el Estado, la sociedad civil y el mundo privado empresarial. En este marco, el decreto N° 472/10, que dispuso la descentralización de las políticas sociales y la creación del Consejo de Auditoria Ciudadana” para la transparencia de la acción social⁵⁵⁸:

...resulta conveniente ahondar en el proceso de descentralización operativa de las políticas sociales través de la colaboración institucional de los Municipios, procurando de ese modo generar una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución y gestión de los programas gubernamentales en todo el territorio de la Provincia. Que a fin de garantizar una efectiva y transparente gestión de las políticas sociales al descentralizarse, se estima oportuno establecer el adecuado control mediante la participación ciudadana a través de instituciones y organizaciones de la sociedad civil de prestigio (Decreto párrafos 4 y 5).

Las instituciones y organizaciones de prestigio son: la Iglesia, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica, la Cámara de Comercio e industria y organizaciones no gubernamentales registradas. El Consejo bajo dependencia directa del ganador tiene como finalidad coordinar y articular la implementación de programas y planes dirigidos a cubrir necesidades y promover tanto desarrollo individual como comunitario. En tal sentido, se reedita “lo público” en una singular red vincular entre lo estatal y lo privado, con

⁵⁵⁷ Ver: <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/provincia-y-municipios-profundizan-la-descentralización-de-las-políticas-sociales-/4931>; consultada abril, 2013

⁵⁵⁸ En el marco de dicho decreto también se modifica la estructura del ministerio de DH, se unificaron la Secretaria de Abordaje Territorial y la de Políticas Sociales en la Secretaria de Planificación, Gestión y Articulación de Programas, que también dependerá del Ministerio de D. H. Se garantizó, pese a la modificación, la estabilidad laboral de los empleados, aunque cambien las funciones. Según la modificación ministerial, las políticas sociales se encuadran en el marco de la planificación y gestión de programas de intervención, y la lucha contra la pobreza.

resonancias heredadas de la DSIC y la economía social de mercado, acorde a lo ya enunciado.

La descentralización eficaz se orienta hacia el desarrollo humano y económico o económico humanizado, que en el caso de los pobres, está focalizado en los márgenes y mínimos, generando marcos, que propicien condiciones de existencia de modo tal, que las poblaciones pobres, logren satisfacer necesidades mínimas, adquirir capitales a nivel individual y comunal para autogestionar su propia vida. Los dispositivos de seguridad, ejerciendo una acción a distancia, prevén, calculan y diagnostican los límites soportables de riesgo, inversión y acierto, mientras los sujetos pobres y la pobreza son problematizados en torno de pensamientos y prácticas de corte neoliberal, empresarial y gestivo.

Identificamos, en torno a las prácticas analizadas un proceso en el cual se ponen en cuestión los propios mecanismos de gobierno y se instrumentaliza mediante dos conjuntos de tecnologías: de performance y de agencia, entre las cuales se encuentran las tecnologías de ciudadanía. En tal marco se ensamblan las prédicas y prácticas en torno de la eficiencia de servicios públicos, el acercamiento a los barrios y las comunidades por medio de planes, programas proyectos territorializados. Así como se resaltan los elogios a la co-gestión entre el Estado y la sociedad civil, la promoción de canales formales de institucionalización de la participación social, la democracia participativa y la insistencia en la construcción de “ciudadanía activa y responsable”, en la traducción local del DDH.

En tal sentido, la lógica que codifica la prácticas de gobierno reconfigura el rol del Estado y lo social a partir de un vínculo estratégico entre lo público y lo privado, haciendo de la sociedad civil, los municipios, la iglesia, las escuelas y las empresas, entre otros organismos, sectores en torno de los cuales y con los cuales se tejen redes de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres.

4- Re-toques, transformaciones, re-nominaciones del marco gubernamental-institucional: la otra faceta de la gubernamentalización del gobierno de Estado y la sociedad civil (2011-2013)

En este proceso de configuración y re-configuración de las políticas sociales, luego de las elecciones del 2011, puntualmente, en diciembre de ese año, se realizó un profundo retoque “estructural-institucional” en el marco de los Ministerios. En concordancia con la

Ley 7694⁵⁵⁹ y bajo decreto N° 5114/11 el Ministerio de Desarrollo Humano pasa a llamarse “Ministerio de Derechos Humanos”. Dicho cambio no remite, simplemente, a una transformación nominal o por lo menos no lo es en sentido general y genérico; puesto que, ante todo se manifiesta como una estrategia política vinculada a la ampliación del desarrollo hacia los marcos del “derecho humano” promovido a nivel nacional por el PNP y los Organismos Internacionales de Intervención y Crédito. Quizá, según informantes de dicho ministerio, como “un guiño de alianza”, quizá como una decisión de intereses e interesada acorde a conveniencias, acuerdos, premios, etc., que en tal sentido pueden ser recibidos, otorgados, coparticipados desde la provincia.

Lo importante, en torno del trabajo aquí planteado, se centra en la “ampliación” que se denota, por lo menos en la misión, visión y objetivos federales/funcionales de dicho ministerio. Puesto que, en la Misión se sostiene la finalidad estratégica ya expresada, dirigida a: “*Generar un Estado al servicio de las necesidades de los ciudadanos, garantizando el acceso a sus derechos y revalorizando su rol y promoviendo la reconstrucción del tejido social*”⁵⁶⁰. Como es de notar se extrae de dicha enunciación la referencia a los “más vulnerables y en riesgo”, podríamos decir que se resta “focalización” en el entramado enunciativo del gobierno enmarcado en dicho ministerio.

Mientras que en la Visión, que hará referencia a la racionalidad política se mantiene el mismo objetivo dirigido a: “... *promover el bienestar de la comunidad en la colaboración de soluciones a las problemáticas sociales y el desarrollo humano, fomentando la participación y el desarrollo humano de la ciudadanía realizando tareas coordinadas e integrales*”; es decir, el DDH sigue siendo el que codifica y orienta la prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y no pobres, en este caso.

Ahora bien, “compete” al Ministro de Derechos Humanos:

...asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las políticas referidas a los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, propendiendo al desarrollo del ser humano, su integración social,

⁵⁵⁹ La Ley N° 7694; Expte. N° 90-20.362/2011 fue sancionada el 22/11/2011 y Promulgada el 02/12/2011. Publicada en el Boletín Oficial N° 18.727, del 07 de Diciembre de 2011. Corresponde a la “Ley del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado, Subsecretario de Estado”, en torno de la cual, según Art. 33: El Gobernador podrá crear en el ámbito del Poder Ejecutivo las Secretarías y Subsecretarías de Estado que estime necesarias, asignando mediante decreto las funciones y atribuciones de cada una de ellas. El total de Secretarías de Estado no podrá exceder de cuarenta y cinco (45).y, Art. 34.- Autorízase al Gobernador a efectuar todas las reestructuraciones orgánicas y presupuestarias que fueren menester para la mejor ejecución de esta Ley.

⁵⁶⁰Ver: Gobernación de la provincia de Salta, Ministerio de Derechos Humanos; <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-derechos-humanos/5>; consultada julio, 2013.

a la prevención, asistencia y recuperación en casos de vulnerabilidad social y a la asistencia ante situaciones de necesidad y urgencia (resaltados nuestros).⁵⁶¹

Como ya se destacó, las “acciones” dirigidas a los más pobres de entre los pobres, remiten a “prevenir, asistir y recuperar” para lograr “el desarrollo del ser humano”, por lo cual la ampliación enunciativa en torno del derecho se enreda en un complejo entramado de prácticas, con los tramos de saber dispuestos por el DDH. Para esto se configura un tejido de colaboración, apoyo y guía entre el Estado y la red de organismos, organizaciones público-privadas, que hacen al dispositivo estratégico de la pobreza, en la provincia.

En este marco, el “organigrama del ministerio” deja entrever las propuestas de organización y los programas dirigidos a las poblaciones pobres. El Ministerio cuenta con la secretarías de: Gestión administrativa, de Derechos Humanos, de Desarrollo Comunitario, de Asistencia Crítica, de Deportes e Igualdad de Oportunidades, como se avista las nominaciones instaladas modifican, las dispuestas en el Ministerio del Desarrollo humano.

En el marco de la *Secretaría de Derechos humanos* se encuentra el Consejo provincial de la mujer cuya meta es proteger y promover derechos humanos, a través de la asistencia integral a víctimas de delitos y la promoción y formación de derechos humanos, para lo cual también se articula con el sistema de justicia penal juvenil. La *Secretaría de Desarrollo comunitario* (creada por decreto N° 3899/12)⁵⁶² realiza actividades vinculadas al desarrollo rural: inclusión socio-económica en áreas rurales, gestión y articulación institucional, promoción de derechos en áreas rurales y promoción para el fortalecimiento de instituciones locales. Mientras que articula programas en torno de los Pueblos originarios a través de la gestión y articulación institucional, la educación y cultura

⁵⁶¹ En tal sentido, los primeros objetivos y funciones del Ministerio se centran en los Derechos Humanos: en la elaboración o modificación de normas o programas vinculados a los Derechos Humanos, así como realizar los estudios necesarios para recomendar modificaciones o el dictado de nuevos preceptos en la promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes, en el marco del respeto por la diversidad, implementación de políticas de asistencia a las víctimas de delitos y de abuso; asimismo se profundiza en la articulación de acciones con organismos públicos y privados a fin de brindar respuestas eficaces a las problemáticas sociales, particularmente en situaciones críticas. El resto de las funciones señaladas son las mismas que se promovían en el marco del Ministerio de DDH vinculadas a las políticas sociales activas e integrales: la satisfacción de necesidades básicas, en el caso de las poblaciones vulnerables y de alto riesgo social con bienes y servicios necesarios a través de la contención y la educación; las respuestas eficaces a las problemáticas sociales, ante todo en situaciones críticas; el sostenimiento del andamiaje informativo y estadístico para la obtención de indicadores relevantes sobre los grupos poblaciones más vulnerables ante todo facilitando su identificación y registro único de beneficiarios; la articulación del desarrollo comunitario, social con el de la salud física, el deporte, la integración social y la educación. Ver: Gobernación de la provincia de Salta. Ministerio de Derechos Humanos: <http://www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-derechos-humanos/5>; consultada julio, 2013.

⁵⁶² Decreto N° 3899/12. Publicado en Boletín Oficial N° 18982 el 7 de enero del 2013.

indígena, la promoción de los derechos y las funciones esenciales vinculadas a salud y medio ambiente, ante todo.

La *Secretaría de Asistencia Crítica* (decreto N° 3899-011) concentra las acciones dirigidas a las poblaciones pobres en torno de las Políticas Alimentarias, ante todo en un trabajo de diagnóstico e informático/estadístico vinculado a la identificación de necesidades llamadas “críticas”: sociales alimentarias y socio-sanitarias, relevando y articulando programas nacionales, como el microcrédito y el *Manos a la obra*, en el campo de la economía social y el emprendedurismo. Dicha Secretaría articula los programas alimentarios ya enunciados, los cuales se “focalizan” en poblaciones específicas, mientras que los otros se expanden a sectores poblacionales pobres y riesgosos, más amplios, pero igualmente focalizados. A su vez, se realizan actividades vinculadas con la asistencia crítica y la emergencia social, mientras se asiste a las intendencias municipales y se articula con actividades de economía social, en la órbita del Ministerio de trabajo (Organigrama, Ministerio de Derechos Humanos, Gobernación de la Provincia de Salta).

Cabe resaltar que las políticas de “asistencia crítica” se dirigen a las poblaciones “más” pobres e indigentes, dando asistencia y respuestas rápidas para, ante todo, impedir que más hogares y personas caigan en tal situación. Puesto que, aquellas poblaciones por debajo de las líneas de pobreza e indigencia son objeto y producto de prácticas gubernamentales de intervención “crítica”⁵⁶³, en absoluto de “solución de problemas y erradicación de la pobreza”; más bien de un “buena gestión” del riesgo extremo, para evitar aumentos y desproporción en los “desastres”.

La *Secretaría de Igualdad de Oportunidades*, por su parte, se dirige a las poblaciones consideradas “vulnerables”, es decir a los más pobres: niños, ancianos y discapacitados, para lo cual se promueve el fortaleciendo familiar y comunitario, la gestión y articulación de dispositivos de “protección”, mediante la “gestión y supervisión” de centros de inclusión transitoria, de centros de desarrollo infantil; También tiene como eje las políticas sociales dirigidas a los “discapacitados” y los adultos mayores”, en el primer caso realizando una constante evaluación y certificación de la “condición de discapacidad”, mediante abordajes llamados integrales y sociales. En igual sentido, se trabaja con los adultos mayores, sobre todo en el marco de la Universidad Abierta para la

⁵⁶³ Ver: Dto. De la Dirección Nacional de Asistencia Crítica e Inclusión Social (2007). Ministerio de Desarrollo Social. Montevideo Uruguay. En: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/05/LIBRILLO.pdf; consultada julio, 2013.

Tercera Edad, gestionando y promoviendo las diferentes organizaciones para adultos mayores, así como las residencias.

La *Secretaría de Deportes*, que se engloba en el bienestar físico y en tal sentido en la salud, que no solo implica sanidad e higiene, si no un “cuerpo sano, saludable y fuerte”, mediante un proceso práctico de integración local, social y comunitaria. De este modo, consideramos que el deporte resulta una tecnología específica de gobierno, dirigido, ante todo a poblaciones jóvenes y vulnerables, como los discapacitados. En tal sentido, se promueve la administración de estadios, los deportes en el marco de la “inclusión social, comunitaria, recreativa y educativa (recreación, rehabilitación, turismo social), a lo cual se suma el objetivo de aportar a la planificación deportiva (juego, fiscalizaciones, entre otros).

Por lo tanto, desde sus inicios allá por el año 2007, el programa de gobierno provincial dirige sus prácticas de intervención social a la “lucha contra la pobreza”⁵⁶⁴, reafirmando que, la “acción social” es la mejor herramienta. Se señala el carácter “focalizado y descentralizado de las políticas de intervención” en torno de poblaciones pobres claramente identificadas y clasificadas entre los más pobres y vulnerables: mujeres, niños, ancianos y discapacitados, poblaciones indígenas y los considerados “pobres con oportunidades”, ante todos los jóvenes y desocupados en edad activa

5. Las políticas sociales y la cuestión del trabajo decente, las fábricas sociales y la responsabilidad social empresaria: hacia el ciudadano emprendedor

En lo que respecta a las políticas de “empleo” para pobres dirigidas a gobernar el “desempleo”, además de lo ya enunciado, cabe introducirnos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la provincia de Salta⁵⁶⁵. Al igual que lo sucedido en el Ministerio de DDH, con la sanción de la Ley Provincial N° 7.694/2011, queda derogada la Ley N° 7.483

⁵⁶⁴ En esta lucha, cabe una breve remitenencia a las estadísticas como una arista que atraviesa el análisis realizado, aunque no lo determina. Para remitir a los índices actuales de pobreza e indigencia hemos decidido relevar la información otorgada por el Índice Barrial de precios (Movimiento Barrios de Pie, 2013) considerando que la provincia de Salta está atravesada por diferentes organismos no gubernamentales dedicados a la medición de la pobreza, ante todo cuestionando, precisando y/o diferenciándose de lo propuesto por el INDEC y la Dirección de Estadísticas de la Provincia, en igual línea que el INDEC. Según el informe 2013 de Barrios de Pie, el nivel de pobreza era de 35,70% y el nivel de indigencia de 6,80%. Ello significa que había 199.039 personas que viven bajo la línea de pobreza y 37.643 que lo hacen bajo la línea de indigencia.

⁵⁶⁵ Mediante la Ley Provincial N° 7.483, promulgada en fecha 7 de diciembre de 2007 y el Decreto N° 1461/2008, se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con dos Secretarías a cargo: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que hasta entonces dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia, y La Secretaría de Empleo, anteriormente a cargo del Ministerio de la Producción y el Empleo. Asimismo, y ante las competencias delegadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se crea la Subsecretaría de Previsión Social en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

y sus modificatorias, y cambia su denominación a Ministerio de Trabajo, otorgándole nuevas competencias:

*Entender en la formulación de políticas públicas vinculadas a la economía social, fomentando la formación y el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas y su inscripción en un registro especial. (...) Entender en la formulación de políticas orientadas a los jóvenes que permitan su inserción efectiva en el ámbito socioeconómico, cultural, recreativo y, especialmente, en el laboral, fomentando su asociación con fines productivos. (...) Fomentar la participación familiar y comunitaria en prácticas de manejo de unidades productivas de autoconsumo.*⁵⁶⁶

Ante todo y en tal sentido, el Ministerio busca:

*...velar por el trabajo decente y prevenir riesgos laborales, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral vigente, concientizando y acompañando a los empleadores en su cumplimiento a fin de contribuir al desarrollo integral en materia de trabajo, empleo, formación y seguridad social*⁵⁶⁷

Esto se complementa con el trabajo de “asistencia previsional”. Por tanto, el dispositivo de la “economía social” se nuclea en dicho Ministerio y programáticas, ante todo atravesando la construcción de sujetos económicos, mediante: capacitaciones, cooperativas, asociativismos, productivismos y prácticas de autoconsumo en las localidades y en torno de las familias, ante todo, en el caso de las poblaciones pobres.

Es importante detenerse en la referencia al “trabajo decente”, como objetivo y meta de gobierno provincial en concordancia con lo sugerido a nivel nacional y analizado en el apartado I del presente capítulo. Puesto que, partimos del supuesto de que en torno del mismo se elabora un ensamblaje de gobierno que, estratégicamente, construye y problematiza a ciertas poblaciones, espacios y condiciones para favorecer, propiciar y hacer real el juego del mercado y sus verdades, ante todo.

La cuestión del “trabajo decente” se instala, en la provincia, a partir de un acuerdo realizado con la OIT en 2004 y ratificado en 2009 y 2011, por parte del programa de gobierno provincial⁵⁶⁸, ante todo con la intención preliminar de generar mayores

⁵⁶⁶ Para operativizar las nuevas competencias encomendadas, el Decreto N° 5114/11 establece la estructura ministerial con vigencia desde el 10 de Diciembre de 2011. De esta manera, el Ministerio se compone de: La Secretaría de Trabajo, con la Subsecretaría de Fiscalización (coordinaciones, relaciones laborales y fiscalización y control) a su cargo, y La Secretaría de Economía Social y Empleo, que tiene como actividades centrales las referidas a gestiones técnicas y financieras, así como a asistencia institucional. Mientras que la Subsecretaría de Empleo se centra en actividades en torno de la Responsabilidad social empresaria; las cooperativas y mutualidades y la economía social a su cargo y la Subsecretaría de la Juventud, anteriormente dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. Ver: Organigrama Ministerio de Trabajo Ley 7694 – Dcto. 5114/11 y Decreto N° 3351/13. Publicado 26/11/2013, Ministerio de Trabajo, Expediente: 233-72.809/13-0. En: <http://www.trabajosalta.gob.ar/index.php/antecedentes>; consultada julio, 2013.

⁵⁶⁷ Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, misión, en: <http://www.trabajosalta.gob.ar/index>. Consultada julio, 2013.

⁵⁶⁸ En el año 2004: se firmó el Memorando de Entendimiento entre la OIT y el Gobierno Argentino, en el marco de la 92° Conferencia Internacional de Trabajo, en Ginebra. En el 2005: en la Cuarta Cumbre de las Américas

oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes, buscando erradicar la pobreza y fortalecer la democracia participativa.

En la red gubernamental en derredor del “trabajo decente”, en el año 2010 se crea, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la *Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente*. Mientras que en el 2011 se firmó el Acta Compromiso del 1º Objetivo, tratado en el año anterior. La *Mesa Tripartita* está conformada por: gobierno, empresarios y trabajadores, el objetivo prioritario de dicha mesa, en el marco del acuerdo con la OIT es: “*Procurar el trabajo registrado y formal para los trabajadores de la provincia, promoviendo la inclusión y ocupación de los trabajadores desempleados*” (Acta compromiso mesa tripartita, 27 de setiembre del 2011), para lo cual es necesario: “*Estimular la capacitación y cultura del trabajo fundamentalmente en los jóvenes salteños*” (Acta compromiso, 2011: objetivo 2. Resaltados nuestros); mientras que es tarea, ante todo del Estado gobernante: “*...promover y procurar las condiciones económicas y políticas que permitan la plena actividad comercial y productiva*” (art.4, resaltados nuestros).

En el caso de la meta de “erradicación de la pobreza”, en el real proceso de “gestión” decente del trabajo se pretende: “*Erradicar el trabajo infantil, eliminar la exclusión social y reducir la pobreza*” (art. 7). Así, lo ético/moral se conjuga con lo económico en el ámbito de la economía social y “la decencia” del trabajo, ya que el trabajo/empleo generado, propiciado, permitido y producido, sobre todo, en torno del sujeto pobre desocupado implica, no la sola generación de ingresos y/o producción de bienes materiales, sino la generación de condiciones para que el sujeto advenga capaz de “incorporar la “cultura” del trabajo bajo parámetros vinculados con la empleabilidad-

realizada en Mar del Plata se generó el compromiso por parte de los Jefes de Estado de adoptar el Programa de Trabajo Decente a fin de: crear trabajo, enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. En el 2006: en la XVIª Reunión Regional Americana de la OIT, en Brasilia, se asumió el compromiso tripartito de promover una Década de Trabajo Decente en las Américas, en la que se señalan metas y objetivos concretos, atendiendo a las realidades de cada país y sus regiones. En el 2009: se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la OIT para la creación de una Mesa Tripartita para el Trabajo Decente, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Al firmarse este Memorando de Entendimiento, Salta se convirtió en la 3ª Provincia de Latinoamérica en adherirse a la normativa internacional. En el año 2010: se creó, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente. Y, finalmente en el año 2011: se firmó el Acta Compromiso del 1º Objetivo, tratado en el año anterior. Ministerio de Trabajo y Previsión social de la provincia de Salta: Mesa Tripartita. A su vez, se desarrolla una agenda para la comunidad del trabajo, representada por sus mandantes tripartitos, con el fin de movilizar sus considerables recursos para crear esas oportunidades y colaborar - mediante los diversos Programas de Trabajo Decente desarrollados en los países miembros de la Organización - a la reducción y eliminación de la pobreza. Más allá de los Programas de Trabajo Decente Nacionales, la OIT desarrolla programas con las Provincias como es el caso de la Provincia de Santa Fe y el de la Provincia de Salta. Ver: Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, en: <http://www.trabajosalta.gob.ar/index.php/mesa-tripartita>; consultada julio/agosto, 2013.

empresaria (jóvenes ante todo), por un lado, y con la reconstrucción de los tejidos sociales primarios, por el otro (familias y comunidades pobres, sobre todo).

Si bien, en el programa de gobierno nacional una de las finalidades estratégicas dirigidas a las poblaciones pobres es el “pleno empleo”, considerando que el trabajo es un “dinamizador social” central en el proceso de “combate contra la pobreza” y la proyección de las políticas sociales, dicho entramado discursivo no deja de construirse, con las singularidades antes dichas en la provincia de Salta, entre contradicciones y tensiones heterogéneas que conjugan, de un modo singular, a los sujetos económicos con los sujetos jurídicos, en el marco dispar de la “inclusión y la equidad” para el mercado y en contra del mercado.

Puesto que, en la provincia de Salta, el trabajo decente gira en torno del “combate al desempleo” y la “formación de sujetos empleables, empresarios, autoempleables y productivos”, según el tipo de población al cual pertenezca y/o con el tipo de población con el cual sea “identificado, cuantificado y/o encuadrado”. Todo esto en torno del saber y los entramados enunciativos y prácticos del Desarrollo Humano, siguiendo los tramos discursivos del programa de gobierno nacional: “...a partir del cual cada individuo recibe los beneficios del desarrollo, según sus méritos, necesidades y las de los demás individuos” (La Bisagra, 2007: 142). Se trata de un Estado que individualiza, categoriza y construye “condiciones justas” para iniciar el juego y/o para sobrevivir entre tanto y entre medio.

Entran así en juego prácticas discursivas y extradiscursivas vinculadas, por ejemplo, con la “democracia participativa” y “la participación ciudadana”, en torno de lo cual se presentan y justifican perfiles de descentralización en la práctica gubernamental, así como de co-participación en el ejercicio de gobierno con otros sectores de la sociedad civil, empresarios, entre otros. Pues, según lo enunciado a nivel nacional:

Una efectiva redistribución democrática del poder permitirá movilizar los recursos de la comunidad toda: el Estado deberá acompañar estos procesos desde una voluntad descentralizada que va más allá de la descentralización de recursos, como sostienen los que solo ven el desarrollo desde el recurso económico” (La Bisagra, 2007: 143).

En la provincia de Salta, como ya fue analizado, los procesos políticos y gubernamentales descentralizados y participativos advienen flexibles y posibilitan la participación integral de la comunidad local, así como la planificación y gestión de los recursos (económicos y humanos-sociales).

Acorde a lo establecido en la provincia, para la puesta en juego del dispositivo de economía social y la construcción del ciudadano emprendedor, es central “la Responsabilidad Social Empresaria”. En el marco del Estado provincial, puntualmente, del Ministerio de Trabajo se crea, en el 2011, la Dirección *de Responsabilidad Social Empresaria* (RSE, de ahora en más) cuyas finalidades son:

*...analizar, promover, difundir, sensibilizar y replicar herramientas, instrumentos y experiencias para generar y desarrollar espacios de cooperación entre el Gobierno, empresas, ONGs, para articular y coordinar acciones sinérgicas hacia un objetivo fundamental y estratégico como es la mejora de la calidad de vida de los sectores vulnerables de la estructura social provincial.*⁵⁶⁹

Antes de continuar con la analítica en torno de la RSE, cabe mencionar que la misma encuentra sus procedencias en la ya trabajada Doctrina Social de la Iglesia Católica. Dicha doctrina, siguiendo a Murillo (2011), manifestaba el grave problema de la cuestión social y proponía un plan que partía fundamentalmente de la libertad individual y la necesidad de una profunda reforma de las costumbres y las instituciones. La iglesia era clara en sus afirmaciones: el conflicto social, dice, no puede eliminarse totalmente, dado que los patronos y los trabajadores deben necesariamente existir, pero sí puede limarse. Para ello, tanto trabajadores como patronos deberían hacerse mutuamente responsables,

⁵⁶⁹ Como antecedentes y actividades, en el marco de la “Dirección de Responsabilidad Social empresaria” del Ministerio de Trabajo, encontramos que: La provincia de Salta emitió el Decreto N° 517/11, en el cual se establece la aprobación del marco conceptual de la Responsabilidad Social y Balance Socio Ambiental firmado oportunamente por el Gobernador de Salta, los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Finanzas y Obras Públicas y de Desarrollo Humano. En el mismo se establecía el marco Conceptual de La Responsabilidad Social y Balance Socio Ambiental con el cual se otorga a las organizaciones que certifiquen el Balance Socio Ambiental en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta diferentes beneficios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta fue eje fundamental para el éxito de esta articulación Público - Privada al adoptar la normativa (Resolución N° 36). Salta avanzó aún más y con la emisión del Decreto N°4799/11 (Boletín Oficial de Salta N° 18715 Publicado el día 18 de Noviembre de 2011) y el acta acuerdo entre el gobierno de la provincia de Salta, la municipalidad de la ciudad de Salta, la el Consejo profesional de Cs. Económicas de Salta, la comisión de Balance social de la Federación de Consejos profesionales de ciencias económica. El Decreto establece la creación de una Comisión Técnica para la elaboración del Balance Social en el Sector Público. Esta Comisión elevó al Poder Ejecutivo el día 15 de Octubre bajo expediente N° 11/191924 un Proyecto de Ley que versa sobre la Responsabilidad y Balance Social en la Provincia de Salta. Como corolario de este impulso, finalmente los días 22 y 23 de Noviembre del 2012 se realizaron en Salta las “1° Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance Social” con el lema: “Desafíos Futuros”. A su vez, los programas de RSE suscriben al Pacto Global de Naciones Unidas, para conciliar los intereses de las empresas, con las demandas de la sociedad, en el marco de un instrumento de las Naciones Unidas que fue anunciado por el secretario general de las mismas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999. Su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas con los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales. Ver: Dto. Primera Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance Social, “Futuros desafíos”, Dcto. Final. Salta, Noviembre, 2012, en: <http://www.lsqa.com/pacto-global>; Dcto. El Mapa de RSE en el país”, 2013, Fundación observatorio de Responsabilidad Social, en: www.ors.org.ar/.../El%20mapa%20de%20la%20RSE%20en%20el%20pa; consultadas agosto, 2013.

de modo que más que enemigos se transformasen en socios (*Quadragesimo Anno*). También la DSIC exhortaba, no sólo a multiplicar las obras de caridad, sino a la conformación de nuevas instituciones, mediante las cuales los sacerdotes, los empresarios, los obreros, los artesanos, los agricultores y los asalariados de toda índole se prestaran mutuo auxilio y ayuda (*Quadragesimo Anno*). En tal sentido: “...la obligación de los ricos se relaciona con la responsabilidad social que según la Doctrina de la Iglesia se vincula al diálogo, a suavizar las condiciones de salario de los trabajadores y a dar limosna, en tanto todo esto no haga peligrar la estabilidad de la empresa” (Murillo, 2011: 100, resaltados nuestros).

Respecto de los trabajadores se ponía el acento en los derechos de los mismos en cuanto “sujetos individuales y libres” y por otro lado se postulaba la necesidad de reformar las instituciones, sorteando la centralidad del Estado través de conformar nuevas asociaciones de carácter intermedio, acorde al ya mencionado principio de subsidiariedad del Estado. Así “la libertad –individual- y la responsabilidad individual” resultan centrales. A partir de lo cual se puede señalar que: “...si bien todos los seres humanos son igualmente creados por Dios, no todos serán iguales en su desarrollo mundano, dado que el propio ejercicio de la libertad les brindará oportunidades diferentes” (Murillo, 2011: 100-101).

En sintonía, la RSE en la provincia de Salta, se instala como una tecnología de gobierno que propicia el vínculo sensible, cercano y firme con el sector privado (empresarial) para articular “premisas y programas”. Esto es en el marco de lo se denomina “desarrollo inclusivo, sustentable y con justicia social de la sociedad salteña”, lo cual no es sinónimo de “redistribución equitativa de los ingresos y las riquezas, así como de los recursos” (económicos, humano y sociales”); sino una puesta en juego de condiciones de posibilidad y dispositivos que propicien la construcción de sujetos mediante la “generación de oportunidades, y la igualdad de oportunidades” para que, aquellos que están en condiciones desfavorables, por lo menos cuenten con un piso mínimo y básico, para comenzar el juego. Esto es en clave de “equidad”, de “trabajo decente”, de “sustentabilidad”, “capacitación y empleabilidad”, en tanto: “Desde el gobierno continuamos apostando a la igualdad de oportunidades en todos los sectores públicos y privados, con el fin de que cada persona pueda tener oportunidades y expectativas para crecer y desarrollarse en su propio lugar de hábitat”, expresó el Ministro de economía Parodi (Discurso, 1ras Jornadas de Responsabilidad y Balance Social, 2012).

Entre los objetivos centrales se pretende, según el Ministro: *”Propiciar la inclusión de grupos sociales postergados y excluidos (jóvenes, mujeres, discapacitados) al medio socioeconómico y productivo”* (Idem); el “médium” apropiado de “inclusión, inserción e integración” es el económico-social y productivo, es decir, el propuesto y dinamizado en el marco de las transacciones mercantiles, que hacen de los sujetos pobres, sujetos económicos y que ponen en juego, por ende, diferentes prácticas y mecanismos, como la RSE, para gobernarlos en el campo de la “economía social”.

Según el programa de gobierno nacional, el potencial de la RSE se pone en juego con relación al desarrollo económico. Este significa también una vinculación de reciprocidad de la economía de un país con la economía social, un ámbito vinculado a innumerables formas de asociación, que, codificadas en torno de lógicas empresariales/empresariales construyen sujetos emprendedores, cooperativistas, asociativistas, productivistas, etc. (La Bisagra, 2007: 183-84). Así, los sujetos pobres, entre ellos los más vulnerables, resultan problematizados y fabricados mediante mecanismos específicos de Desarrollo Humano, promoviendo el básico común inicial para poder ingresar en el juego, sí y sólo si las oportunidades son aprovechadas, utilizadas e invertidas de un modo apropiado, sobre todo, mediante el uso racional, interesado y estratégico de las herramientas (económicas, morales, culturales, humanas, etc.) otorgadas por el Estado y los organismos públicos privados que construyen redes y ensamblajes de gobierno, creando medios y modos para que la pobreza no sea erradicada, sino gestionada, disminuida, sostenida y soportable.

En tal sentido, en este marco de “reciprocidad económica”, que apunta al desarrollo nacional según la RSE, resuena lo sugerido por la DSIC según lo cual la empresa es tratada como una persona que debe ser humanitaria, es decir, se troca la relación capital – trabajo (económica), en una relación ética que obtura la obtención de plusvalor. Más aún, se considera que el empresario tiene derecho a generar el mismo y que en todo caso debe tener alguna consideración “de misericordia” hacia los pobres. En tal sentido, el proceso de “construcción y producción” de pobres y pobreza implica, entre otras cuestiones, en el ejercicio de la tecnología de gobierno (RSE), otorgarles limosnas. Mientras que las grandes empresas, según lo señalado, en torno de la libertad individual y el acceso a oportunidades, en un cruce con la responsabilidad individual, quedan exceptuadas del vínculo de explotación, y de sus responsabilidades para con el medio ambiente y los seres humanos mismos. Esto quiere decir, que la RSE no corresponde a los pobres, sino que actúa como tecnología de gobierno de las poblaciones, y que tiene para con las

poblaciones pobres y la pobreza el efecto señalado de caridad, producción empresarial y paradójal responsabilidad-ética-irresponsable.

Por tanto, en la tensa y múltiple relación entre trabajo decente, empleabilidad, inempleabilidad y responsabilidad social empresaria, se trata, en el caso de las poblaciones pobres y el problema de la pobreza en la Salta contemporánea, de la puesta en juego de mecanismos de gobierno que conjugan, por un lado, la intervención del Estado en la generación de marcos y condiciones básicas e iniciales para que los sujetos puedan “autoregularse, autogobernarse, autogestionarse” y, por el otro, la radicalización de la forma empresa a nivel individual y local societal, en tanto configuración de “sujetos empresarios de sí”. Puesto que, siguiendo lo propuesto por Foucault (2007), en el proceso de fabricación y problematización del sujeto pobre como “sujeto económico”, el “trabajador” considera al trabajo como un elemento constitutivo de sus racionalidad, no es algo “externo, que se vende” (en el mercado como “fuerza de trabajo”). Es un capital inicial, en el cual el trabajador invierte en una transacción económica específica, que en el caso analizado pretende ser posibilitada por un marco de regulación (jurídica, económica y social) estatal, en el ejercicio de gobierno de poblaciones específicas, como las pobres, a través del trabajo digno, la economía social y, como veremos, las fábricas sociales.

Así, en clave de capital humano, el salario es ingreso y la fuerza de trabajo es capital (Foucault, 2007: 258; 262). Por tanto, el problema del “desempleo” y del sujeto desempleado, advenido pobre implica, por un lado la puesta en juego de condiciones de posibilidad para que el sujeto “advenga empleable”, lo cual se logra, como vimos, mediante la gestión estatal y programática a través de la creación de redes de empleabilidad en interacción con empresas privadas, subsidios estatales y limosnas; y mediante prácticas de producción de subjetividades dirigidas a la creación de “actitudes autogerenciales”, en los sujetos económicos desempleados. En tal sentido, se ponen en marcha, ante todo, “técnicas de capacitación”, de aumento de competencias: intelectuales, profesionales, entre otras, por medio de la educación, los cursos, las capacitaciones comprendidas, en el cúmulo de programas y planes antes descriptos.

En tal sentido, se justifica y construye también el discurso gubernamental de la “cultura del trabajo, de la dignidad del trabajo, de la autosuperación mediante el trabajo”, ya que los sujetos se: “....superarán a sí mismos, cultivarán sus potenciales, gestionarán sus propios intereses y capitales y se convertirán en “ciudadanos libres” (Castro Gómez, 2010: 207). Por ende, según resonares de la DSIC, en el trazo de la RSE, el desarrollo

“humano y mundano” serían posibles, en tanto, el propio ejercicio de la libertad les brindará oportunidades diferentes.

5.1- Sujetos económicos y Empresas-Fábricas sociales: ¿economía social, economización de lo social, fabricación social de lo económico, fabricación económica de lo social?

Entre las prácticas programáticas y gubernamentales más importantes, que dan cuenta de lo arriba analizado, en el marco de la economía social, la RSE y el trabajo decente se encuentran las llamadas “Empresas-Fábricas sociales” (2012).⁵⁷⁰ Desde la Dirección General de Responsabilidad Social Empresaria, se promueve la inclusión laboral, mediante la creación de empresas sociales: “A través de la secretaría de Economía Social, estamos generando fábricas sociales, pudiendo cumplir con las demandas de las empresas, que, con respecto a la tercerización, tratamos de que se genere en la provincia y no afuera”, afirma Jorgelina Bellagamba, (2013, directora general de RSE, del Gobierno de Salta)⁵⁷¹.

Explica Bellagamba:

Dentro de las políticas sociales hay planes y programas, pero hay un sector de la sociedad que queda descubierto y trabajamos para que los jóvenes, sobre todo para aquellos que terminaron la secundaria pero no realizaron ningún estudio universitario ni consiguieron trabajo, no tomen una conducta inadecuada. Apuntamos a esta franja de jóvenes para que trabajen en estas empresas de servicios, desde donde se genera la inclusión y se educa (2013: 10)⁵⁷².

Las fábricas o empresas sociales son un modelo de producción centrado en el desarrollo de los grupos más vulnerables, según tramos discursivos oficiales. Se enmarcan en el concepto de economía social, siendo un mecanismo de inserción laboral privado. En estos casos, el Estado provincial actúa como generador de empleo al promover y acompañar la formación, desarrollo y posicionamiento de los emprendimientos.

⁵⁷⁰ Hasta el año 2013 eran más de 50 las fábricas sociales en la provincia, en su mayoría dedicadas a tareas textiles, de construcción y obraje, fabricas de dulces y conservas, servicios de albañilería, plomería, gas, pintura y electricidad, empresas de bloques ecológicos, de calzados, entre otras. Cada fábrica puede estar conformada por promedio de 30 personas/integrantes, que una vez constituidas reciben: financiamiento y acompañamiento en el desarrollo de proyectos productivos o de servicios para que tengan sustentabilidad, calidad y competitividad en el mercado, según las líneas establecidas por la ley de microcréditos. El Ministerio suele otorgar financiamiento para remodelación edilicia, compra de maquinarias para los procesos productivos, equipamientos, capacitaciones insumos y asesoramientos en la ejecución puesta en marcha, mientras que los municipios suelen otorgar la mano de obra y financiamiento de la estructura edilicia para la ejecución de las fabricas. En el marco legal, se elaboró la reglamentación de la Ley N° 7744 de Contrataciones que incluyen en el artículo 13, inciso “n”, la contratación directa con empresas sociales. Diario El Intransigente, 22/04/2013.

⁵⁷¹ Dcto. El Mapa de RSE en el país”, 2013, Fundación observatorio de Responsabilidad Social...op...cit.

⁵⁷² Idem.

Desde el Ministerio de Trabajo se busca incorporar al mercado laboral al segmento social conformado por personas desempleadas, que habitan en zonas geográficas de escasa actividad económica, sin capacitación técnica o profesional, sin formación o herramientas suficientes para conseguir por sí empleo o para desarrollar proyectos productivos sustentables.

En tal sentido se indica que, en base a una idea proyecto que aportan los futuros asociados, la Secretaría de Economía Social y Empleo analiza su viabilidad, capacita laboralmente a los trabajadores, los organiza en cooperativas o empresas, les otorga el financiamiento necesario y los acompaña en el desarrollo de proyectos productivos o de servicios para que tengan sustentabilidad, calidad y competitividad en el mercado. De esta manera, los trabajadores no sólo se incorporan al mercado laboral, sino que además devienen en “verdaderos empresarios”.

En palabras del gobernador:

Desde el gobierno se busca trabajar siguiendo un modelo distinto, que es el de garantizar que cada habitante pueda ser dueño de su propio empleo: (...) venimos trabajando con la sola premisa que es la de hacer que a la gente le vaya mejor. Queremos que haya polos de desarrollo en cada uno de los municipios de la provincia, fortificando sus procesos económicos y logrando su autonomía (resaltados nuestros).⁵⁷³

En tal sentido, se apuesta a la fábrica social para crear un círculo “virtuoso de desarrollo, progreso e inclusión”. Por tanto: “...*Con estas empresas sociales buscamos que cada pueblo sea empresario y desde su propio esfuerzo convertirse en artífice de su destino*” (Urtubey, Diario El Intransigente, 15/05/2013, resaltados nuestros), mientras se sostiene que las fábricas sociales son un ejemplo de “sustentabilidad”: “...*como herramientas para el cambio social, en tanto no solo generan puestos de trabajo genuinos sino que también son rentables y contribuyen a solucionar problemas sociales latentes*”⁵⁷⁴. Darle sustentabilidad al modelo de economía social implica, en gran parte y según el gobernador, lograr que: “...*organizaciones del pueblo colaboren con el gobierno en el armado de las empresas sociales, en tanto esto genera dignidad y autonomía, de ser dueños de sus trabajos*” (resaltados nuestros), no solo como inserción al mercado económico y laboral generando mano de obra calificada y valor agregado a la productividad local, también posibilitando una mejora en la calidad de vida mediante el

⁵⁷³ Juan Manuel Urtubey, discurso de inauguración en La Viña de un emprendimiento de servicios de albañilería pintura, gas y plomería, página web de la gobernación: <http://www.salta.gov.ar/prensa/noticias/mas-de-1000-saltenios-ingresaron-al-mercado-laboral-a-traves-de-45-fabricas-sociales/29269>; consultada agosto/setiembre, 2013.

⁵⁷⁴ J. Massafra, Secretario de economía social y empleo, en el marco del seminario: “La sustentabilidad como herramienta de cambio social, económico y ambiental”, 21 de octubre el 2013, Salta capital.

tan remarcado discurso de la: “...*igualdad de oportunidades y la inclusión*”.(Urtubey, Diario el Intransigente: 16/05/2013 y 24/07/2013).

De este modo, se sostiene que: “...*el Estado siembra donde antes había olvido y postergación*” (Urtubey, Diario El Intransigente, 25/07/2013), pues el Estado, en vinculación estratégica con el ámbito privado (empresarial) y local, está presente en el territorio comunal generando el desarrollo y el progreso autogestivo y empresario. Por último, se afirma que: “...*se trabaja para que el débil pueda hacer valer sus derechos (...) tratamos de poner el equilibrio que necesita la sociedad para poder crecer y salir adelante, acercando las herramientas para que cada salteño pueda desarrollarse con su propio esfuerzo*”; se “apuesta a la cultura del trabajo y a la sociedad más justa” (Urtubey, Diario el Intransigente 31/12/2013).

A partir de los tramos de enunciación descritos, observamos cómo el dispositivo de gobierno “Empresas-Fábricas sociales” se dirige a configurar al sujeto pobre desempleado acorde a las racionalidades políticas neoliberales y pastorales cristianas. Esto es, entre sujetos económicos empresarios, capaces de invertir, reinvertir y acumular capitales (económicos, sociales y humanos) con la colaboración “inicial” del Estado y demás organizaciones privadas y públicas, en un programa de gobierno dirigido a las poblaciones “débiles, pobres, vulnerables, carentes”. En dicho programa, el criterio no es la legitimidad o ilegitimidad, sino el éxito o fracaso de la acción gubernamental, en tanto aquello que debe dejarse-actuar por sí mismo, remite a la acción de los individuos. Mientras que se promueve la “salvación”, con ayuda del Estado, de aquellos sujetos débiles, pero dignos.

Ahora bien, esta programática de gobierno se realiza en una singular y estratégica tensión heterogénea entre sujetos económicos y sujetos jurídicos, los cuales pretenden instalarse bajo el discurso de la inclusión y el derecho, considerando que el mercado es el ámbito desde el cual se define la ciudadanía, por ende, en el neoliberalismo, parafraseando a Castro Gómez (2010), el ciudadano ya no será más asuntos de derechos, sino asuntos de “emprendimientos”.

En estos dispositivos - de seguridad, ante todo - no se pone en juego la aplicación de “derechos humanos”, sino la “eficacia” con que pueda cumplirse el objetivo central de la práctica gubernamental, a saber, que los hombres se comporten “económicamente” y sean capaces de desplegar su libertad conforme a los intereses de una comunidad económica específica. Así se verían favorecidos también los intereses del Estado cuyo rol es:

impulsar, apoyar, articular y anexar sectores, prácticas y condiciones para que el juego sea posible.

Ahora bien, en este juego transaccional heterogéneo y múltiple, en el cual se denota la tensión entre sujetos económicos y sujetos jurídicos, entre sujetos empresarios y sociedades empresariales, entre derechos y utilidades, con la singularidad propicia y real ejercida e instalada en el ejercicio del gobierno de las poblaciones pobres en Salta, identificamos como las racionalidades políticas neoliberales se reorganizan y reconfiguran en el campo de las prácticas abarcando, no solo el gobierno de la vida económica, también el de la vida social e individual, tal es el ejemplo de la economía social manifiesta.

Por tanto, el Estado no es eliminado, *“...sino que se convierte en un instrumento para crear la autonomía del mercado”* (Castro Gómez, 2010: 178). El problema no es intervenir o no intervenir, sino “saber cómo intervenir”, considerando que el mercado no es “una realidad natural”, sino que requiere de “intervención política, igual puede con “la competencia” que requiere de una intervención, unas condiciones, un marco, en tanto, como ya fue anunciado, se “interviene, ante todo, sobre las reglas del juego, no, “dirigiendo estatalmente la economía”, sino: *“...creando estructuras competitivas que garanticen la regulación económica sin dirigismos específicos”* (Castro Gómez, 2010: 184)

Por tanto, el objetivo de este tipo de racionalidades políticas no es “la igualdad”, sino la “equidad” como esa garantía de que todos los ciudadano tienen derecho a jugar desde “un punto de partida mínimo”, tras lo cual “las desigualdades” son consideradas “funcionales” a la economía, ya que, ante todo disparan la creatividad y permiten la competencia (Castro Gómez, 2010, Murillo, 2013).

Ahora bien, estas racionalidades políticas y programas de gobierno dirigidos a la inversión en capital humano y social, acorde al DDH vigente, hacen de las racionalidades neoliberales, siguiendo a Castro Gómez, también “estrategias biopolíticas”, con la singularidad que implica la extensión de la biopolítica liberal al neoliberalismo ampliando el concepto y el uso que el pensador francés (Foucault) le da al mismo.

En tal sentido, se trata de ampliar las técnicas y prácticas de intervención biopolíticas a niveles más moleculares, en el caso del neoliberalismo (esto es, no limitarlo al juego de la población, la muerte y la enfermedad), como por ejemplo: disponer ejercicios de gobierno de la “vida íntima” con decisiones cotidianas como las referentes al “cuidado del

cuerpo (comidas, deportes, hábitos nocivos, entre otros), cuidado de los hijos, relaciones amorosas, sexuales, potenciar los emprendimientos personales, medicalización de las emociones, entre otras:

Decisiones cotidianas que se convierten en estrategias económicas orientadas a la optimización de sí mismo como máquina productora de capital. Hablamos, pues, de una biopolítica que median el multiplicación de la forma-empresa hacia ambo son económicas tiene como objetivo el gobierno de la intimidad (Castro Gómez, 2010: 20).

Así, advenir empresario de sí, es moverse en un ámbito de “inseguridades, tras lo cual la lógica emprendedurista implica innovación”, sobre todo ante y entre el riesgo.

Por tanto, la vida misma puede y debe ser “auogestionada” y, en el caso de no lograrse, en mucho casos esta biopolítica se traduce en Racismo de Estado, ya que “da muerte y deja morir” a enormes masas poblacionales, advenidas “sacrificables o moribundas”. En el caso del gobierno de la pobreza salteño, cabe hacer referencia a cómo se establece un sector de la población considerada “vulnerable” (mujeres, niños y discapacitados) que reciben, más allá de las promociones autogestivas/emprendedoras, las “compensaciones” asistenciales, por parte del Estado, a partir del cual, ante todo se pretende evitar la “pobreza absoluta”.

A su vez, en el tejido relacional entre gobernados y gobernantes acorde a los programas de gobierno provinciales dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas, se continúa ejerciendo un gobierno vinculado con la generación de poblaciones moribundas o dejadas a la muerte, como es el caso de las “organizaciones de desocupados” ubicadas, ante todo, en el noreste de la provincia. Sin embargo, en el tejido estratégico de redes para gobernar, empresarial y responsablemente a los pobreza y las poblaciones en riesgo, no se consideran a estas organizaciones y/o grupos de los llamados “trabajadores desocupados y en muchos casos piqueteros, rebautizados como terroristas”, según analizamos en el capítulo 3. Mientras que, en las realidades “pobres” locales y cotidianas de estos municipios y ciudades del “rico” noreste salteño, estos espacios de lucha han sostenido un nivel relativo de pobreza en la región, mediante la generación de puestos de trabajo, ante todo. Pero, esto ha sido logrado, como veremos en el último apartado del presente capítulo sin intervención, ni directa ni indirecta por parte del programa de gobierno provincial.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la anulación de estos sujetos, como posibles co-partícipes de las redes de gobierno, no solo resulta un efecto de las prácticas autonómicas de resistencias a ser gobernados de ciertos modos. También implican a nivel

gubernamental, un ejercicio de gobierno, que insta a “la muerte de estas poblaciones” moribundas, sobre todo, en el proceso represivo, de aislamiento, olvido y negación de las protestas y diferencias en el marco del gobierno de poblaciones, que si bien están siendo “pobres”, pisan y habitan suelos ricos, millonarios y biodiversos, que pretenden ser regulados, en torno del programa de gobierno provincial, bajo la lupa de la explotación extractivista y empresarial de mercado abierto.

6- Entre, la Provincia y la Nación, esbozos: encuentros, desencuentros, saberes, técnicas y técnicos

En el presente apartado, en continua discontinuidad con lo esbozado hasta aquí, pretendemos realizar una breve aproximación a las estrategias vinculares entre las prácticas y lógicas de gobierno, así como entre los programas y dispositivos dispuestos por y desde la nación y aquellos expresos en la provincia de Salta, según el abordaje analítico, expositivo, descriptivo y crítico realizado.

A lo largo de nuestro trabajo de investigación hemos encontrado diversas vinculaciones entre los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas en la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entre los espacios más referenciales encontramos los “Centros de Referencia”; mientras que los planes como *Argentina Trabaja*, *Ellas Hacen*⁵⁷⁵, entre otros, son ejecutados por la provincia con presupuesto nacional, al igual que el *Plan Ahí*, así como el *Progresar* y la *AUH*, entre otros, los cuales se instalan, ante todo en el territorio de la capital salteña y localidades aledañas.

Respecto de *Argentina Trabaja* y sus lineamientos analizados en el apartado I del presente capítulo, en la provincia, en una entrevista con Federico Kosiner⁵⁷⁶ el coordinador de dicho plan en la provincia, que nos comentaba:

⁵⁷⁵ Por Resolución N° 2176 de marzo de 2013 de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional se incorporó a los lineamientos del Programa de Ingresos Social con Trabajo- “Argentina Trabaja” la línea programática “*Ellas Hacen*”. Dirigido a mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad para que accedan a oportunidades de trabajo. *Ellas Hacen* prioriza a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia. Las titulares de *Ellas Hacen* reciben un ingreso mensual. Entre los objetivos y prácticas de dicho programa encontramos: acompañar a las mujeres para que puedan acceder a terminalidad educativa o cursos de alfabetización, en caso de que no sepan leer y escribir; promover su acceso a estudios terciarios y/o universitarios, si finalizaron la escuela; brindar oportunidades de formación en oficios, talleres de género, prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva entre otras temáticas; integrar a las mujeres en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar actividades productivas; fomentar su participación en actividades que mejoran el hábitat y las redes comunitarias: salud, actividades culturales e infraestructura urbana. Ver: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: <http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen>; consultada julio/agosto, 2013.

⁵⁷⁶ La entrevista fue realizada por la Lic. Paula Milana y compartida para la realización de este trabajo.

... en Salta comenzó a aplicarse aproximadamente desde mayo del 2011, se abrió en ese momento una inscripción de personas que iban a estar interesadas en esto, se trabajó con organizaciones sociales también (...) y a partir de mayo comenzó una primera etapa de capacitación de las personas después de este período de inscripción, se conformaron las cooperativas de trabajo porque el programa prevé que las personas integren en cooperativas de trabajo (...) el programa está diseñado en módulos que la nación establece, cada cooperativa que la integran 60 personas a cada una (...) En distintos lugares de la ciudad y distintos tipos de tareas, los módulos se desarrollan en períodos de cuatro meses y se van renovando automáticamente cada cuatro meses en la medida que se verifique que la cooperativa cumple con el trabajo y con los objetivos que se han fijado (...) en Salta aproximadamente son 1020 personas, distribuidas en 17 cooperativas, en Salta capital por el momento. La idea es poder llevar el programa al interior de la provincia al menos. (Kosiner, entrevista de Paula Milana, 2012).

Cabe aclarar que “el alta” a la cooperativa y sus integrantes lo otorga la Nación mediante un cruce de datos entre: Anses, Afip, Siempro, entre otros.

Acorde a las políticas de desarrollo social dispuestas a nivel nacional, el coordinador, salteño del PAT señala que:

...el objetivo final que tiene es obviamente la inclusión de estos sectores de la sociedad, la incorporación de la cultura del trabajo como tal, y permite también que la cooperativa más allá del programa en sí, donde la persona recibe un incentivo económico como contraprestación de su trabajo que es lo que lo diferencia de otros programas, no es un subsidio, acá hay un pago contra un trabajo. Más allá de esto el programa permite que la cooperativa quede conformada como tal, como una persona jurídica que es y contrate por fuera del programa cualquier tipo de actividad. (...) el esquema de cooperativa y todo lo que es el cooperativismo en sí tiene muchas ventajas sobre lo que es el esquema y la estructura de una empresa formal. Eso es ya dependerá de cada cooperativa en cuanto a la capacidad de trabajo que tenga, la capacitación que tenga, el compromiso de involucrarse en eso... (Kosiner, entrevista de Paula Milana, 2012).

En cuanto al “rol del Estado”, en este proceso de “generación de trabajo y de sujetos económicos que puedan “realizarse solo dependiendo de sus capitales y capacidades, se señala que:

...tenemos que seguir fortaleciendo a la cooperativa y fortaleciendo al grupo; no el Estado, sino la cooperativa misma, yo creo que el rol del estado en esto es acompañar y ofrecerle las herramientas que pueda tener el estado a disposición pero lo valioso sería que cada cooperativa logre superar las dificultades propias de su armado, de su desarrollo y de su actividad. Eso va a ser lo que la fortalezca y la consolide (Kosiner, entrevista de Paula Milana, 2012).

La mayor inserción de cooperativas, en el año 2011, en la provincia se dio en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo: “Más de mil hombre y mujeres se organizaron y fueron capacitados en diversos oficios por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), lo que les permitió adquirir saberes específicos

valorados en el mercado laboral".⁵⁷⁷ Para la ejecución de las tareas se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia, así como se articuló con los municipios más cercanos a la capital salteña, mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para establecer un cronograma y programa de formación, capacitación y organización de las cooperativas. Dicho proceso de organización de cooperativas se realizó y realiza en conjunto con las "empresas-fábricas sociales" antes analizadas, mientras que éstas últimas tienen una mayor extensión territorial, el PAT posee una extensión situada en la capital salteña y localidades aledañas, como San Lorenzo, Cerrillos, entre otros; no así en los territorios ubicados en el noreste salteño, como el Dpto. Gral. San Martín en el cual la desocupación sostiene los índices de la década de los 90', y el trabajo de cooperativas es gestionado y realizado, ante todo, mediante las organizaciones de trabajadores desocupados de la zona.

Por su parte, la otra gran inserción del MDS en la provincia se instituye en torno de los *Centros de Referencia* (CDR), desde mediados de 2003, y con mayor profundidad a partir de 2007. Parafraseando algunos tramos oficiales de enunciación al respecto se señala, acorde a lo trabajado en el apartado anterior, que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha venido direccionando su política territorial en pos de potenciar el rol protagónico de la población a la hora de definir prioridades, generar propuestas y nuevas prácticas sociales. Ante todo, se remarca el cambio de la perspectiva de la política social, dando un paso desde el escritorio al territorio. Este pasaje no fue lineal y, menos aún, fácil. La definición de este cambio implicó "darse cuenta" de que el Ministerio no podía ni debía definir centralizadamente las estrategias de abordaje (La Bisagra, 2007).

Para su organización institucional, se remarca que fue necesario adecuar recursos humanos, financieros, edilicios y administrativos, así como recrear modalidades de trabajo y de comprensión de las realidades locales. Los equipos del Ministerio en el territorio fueron capacitados en un perfil polivalente, promoviendo espacios interprogramáticos, interregionales e interdisciplinarios, con el fin de transformar prácticas de intervención, proponer nuevas metodologías participativas y elaborar planes de trabajo apropiados para cada lugar (La Bisagra, 2007), lo cual ha sido analizado en el apartado I del presente capítulo.

⁵⁷⁷ Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: <http://www.desarrollosocial.gob.ar/Noticia/argentinatrabajaensalta/464>; consultada julio/agosto, 2013.

En sintonía, en la provincia de Salta entre el período 2007-2011 se apuntó a la consolidación de los *Centros de Referencia y de Articulación* (CDR, de ahora en más) como dispositivos territoriales de gestión, implementación y seguimiento de las políticas sociales en todo el país. El principal objetivo fue la generación, promoción y sostenimiento de la organización comunitaria, con ejes en las familias y el trabajo (MDS, 2012: 6-7).⁵⁷⁸

Los CDR, entonces, son espacios conformados por equipos interdisciplinarios que articulan las diversas líneas de acción de Ministerio para construir, junto con la comunidad, estrategias de desarrollo local y provincial desde un abordaje integral: participemente y desde todas las miradas. Distribuidos en todo el país, los CDR funcionan como delegaciones locales del nivel central, cuya forma de trabajo es articular políticas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en lo que se denomina Red Federal de Políticas Sociales, ya que se considera que ningún actor puede trabajar solo, se necesita construir estrategias que recuperen los saberes y las experiencias de todos y todas. Las diferentes áreas técnico-administrativas de MDS apoyan a los CDR en el planteo de estrategias que faciliten la implementación de las políticas sociales integrales, en el territorio (La Bisagra, 2007: 293-306).

En la provincia de Salta se instala en 2007 un CDR central que funciona ejerciendo la coordinación de las actividades programadas en torno de la Secretaría de Necesidades de Niñez y adolescencia y familiar; Oficio de efectores sociales (efectores de la economía social en el marco del monotributo social); Promotores para el cambio social; INAI; Programa ex FOPAR, Programa de abordaje territorial; Microcréditos y Planes de Abordaje Integral. Se considera/supone que, formalmente, estos CDR deberían tener articulaciones directas y cotidianas, además de planificadas y organizadas, con los gobiernos locales (provinciales y municipales), así como con el Ministerio de Derechos

⁵⁷⁸ En este proceso de organización institucional se encuentra el Consejo Nacional de Coordinación de Política Sociales integrado por todos los ministerios, coordinando estrategias de intervención y compromisos comunes, mientras se promueve la participación de la comunidad y del sector privado en el desarrollo, fomento y auditoría de las políticas sociales. El Consejo Consultivo nacional de políticas sociales fue creado por decreto N° 15/005 e integra organizaciones de la sociedad civil (Foro del Sector social y Federación argentina de municipios); organizaciones confesionales (AMIA, CARITAS, Consejo Nacional Cristiano Evangélico); el Estado Nacional (Ministerios de trabajo, desarrollo social y economía); Organizaciones de trabajadores desocupados (CCC Y FTV); organizaciones sindicales (CGT, CTA); corporaciones empresariales (Sociedad rural, Unión industrial; Asociación de Bancos de la Argentina, Asociación de Bcos. Públicos y privados de Argentina. Dicho consejo se complementa con la organización institucional de la política “en el territorio” mediante Los Centros Integres comunitarios (CIC), ante todo. Fuente: Dcto: *Territorios. Huellas y Horizontes de una Institucionalidad de la Políticas Sociales. Publicación colectiva de los Centros de Referencia y Articulación*, 2012, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Humanos, ante todo, y los Ministerios de Economía y Trabajo, en el marco de la economía social.

Ahora bien, según testimonios de entrevistas realizadas a miembros de los CDR en Salta, dicha articulación programática de gobierno no resulta tal: “... *la provincia trabaja ejecutando presupuesto nacional, mediante programas específicos como los ya nombrados, pero sin articular con los CDR*” (Informante 1 miembro del CDR Salteño, entrevista, 2013).⁵⁷⁹ En este sentido, sostienen que existe un: “...*vacío gubernamental en la Salta actual, respecto de las políticas sociales y las intervenciones en el territorio*” (Idem).

Otras cuestiones que fueron resaltadas en las entrevistas remiten a la realidad de los equipos de trabajo en el territorio local-provincial, los cuales son una sumatoria de técnicos pertenecientes a las estructuras institucionales locales que confluyen en el espacio de las políticas sociales provinciales desde los 90’, yendo y viniendo de un lugar, puesto, proyecto, institución a otra, pero sin dejar de pertenecer al ámbito en cuestión y, en muchos casos, sin dejar de ejercer el trabajo de intervención y gestión de las poblaciones pobres con iguales lógicas y mecanismos que en la década de los 90’:

...ahora han recibido un conjunto de capacitaciones con lógicas participativas, integrales e inclusivas, pero siguen siendo los mismos sujetos-técnicos, con iguales trayectorias difíciles de recrear en las condiciones actuales de las políticas sociales provinciales (Informante 2, entrevista integrante CDR Salta, 2013).

Lo antedicho pone en jaque ciertas diferencias entre el programa de gobierno local-provincial y el nacional, ya que el primero se proyecta regulado por lógicas de gobierno asentadas en la teoría de capital humano de perfil neoliberal, ante todo, en el juego de producción de sujetos “empresarios de sí”, mientras que en y desde el programa de gobierno nacional se proyecta un discurso inclusivo e integral en torno del derecho y la justicia social. Aunque cabe recordar que en ambos casos, es el Desarrollo Humano el saber que configura y da forma a las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres. Las diferencias se configuran en torno de las condiciones y realidades que advienen posibles, según diferentes y dispares mecanismos y lógicas de gobierno, las que, aunque pretendan superponerse e incluso imitarse, no dejan de tener matices disímiles, lo cual nos permite señalar, siguiendo a Foucault (2007), que en el trazo de la lógica analítica estratégica “lo disímil se vincula con lo disímil, sin dejar de serlo”.

⁵⁷⁹ Por pedido de dichos/as informantes hemos decidió mantener su anonimato.

Otra cuestión relevada y relevante en el ejercicio del saber técnico y la programática provincial de ejercicio de gobierno dirigido a las poblaciones pobres- y desocupados en particular, remite al “centralismo” decisorio que se instaló en los marcos institucionales del MDS a nivel nacional, ante todo en torno de la figura de la Ministra Alicia Kirchner, lo cual, según palabras de los técnicos: “...*por un lado pinta un bello discurso de participación, inclusión, equidad, y por otro, en la práctica que nos toca a nosotros nos cuesta muchísimo realizar lo que se nos dice, así como es muy difícil llegar a la ministra rodeada de sus secuaces*” (Informante 2). Lo dicho, no solo señala una contradicción entre lo dicho y lo hecho, si no un complejo y heterogéneo ensamblaje de prácticas discursivas y extradiscursivas, así como de lógicas de gobierno que se construyen, instalan y generan en el ejercicio cotidiano, político y local de las políticas sociales, mientras que “los pobres siguen siendo pobres”.

Por tanto, en este breve recorrido en torno de las cuestiones vinculares entre la llamada nación y la provincia, observamos cómo las prácticas políticas y de gobierno se entrecruzan y enredan entre lo dispuesto, lo otro y lo propio, en tanto la nación establece mecanismos de gobierno según racionalidades de perfil nacional, que no coinciden con las modalidades de gestión directa y que se recrean en los territorios locales-provinciales acorde a los presupuestos, las limitaciones, la tradiciones y traiciones. Esto nos muestra, una vez más, que los programas de gobierno se dirigen a construir sujetos y realidades de modos singulares y diferentes, mientras que las poblaciones pobres y desocupadas, en sus territorios locales, entre el gobierno y la resistencia, configuran prácticas de des-subjetivación y re-subjetivación, en defensa del trabajo y la vida, tal cual lo analizaremos en el apartado que sigue.

III

“...No queremos ser incluidos”: Las Prácticas de resistencia y Autogobierno de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, ex/ypefianos, organización en movimiento, trabajo y Estado-s (2003-2012/13).

“...nosotros ayudamos a la gente, inventamos cosas”
(J. Pepino Fernández, setiembre 2013)

1-La reconfiguración singular de los trabajadores ex/ypefianos en trabajadores desocupados y piqueteros: entre las resistencias, los Estados, las transacciones y las luchas

En un ejercicio relacional, dinámico y en fluida relación con el resto de los apartados trabajados, en el presente hacemos referencia a las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD⁵⁸⁰, Mosconi entre los años 2003 y 2012/13. En tal sentido, en referencia a nuestro trabajo de campo, ponemos en diálogo, analíticamente, las perspectivas teóricas con las perspectivas nativas respecto de las experiencias enunciadas y practicadas por la UTD en torno de los diversos programas de gobierno, los piquetes, los piqueteros, las modalidades de trabajo propuestas y codificadas en este espacio de unión comunal, la emergencia de prácticas diferenciales de vinculación con los Estados, con las empresas, con el trabajo, entre otros.

Por tanto, en el presente apartado, analizamos cómo los procesos de subjetivación del trabajador Ypefiano ante todo, se recrean en relación con la organización de las tareas y trabajos, así como con la obtención de recursos, mientras que se re-configuran las relaciones y consideraciones en torno de los “Estados” ya que, según perspectivas nativas, existen “el Estado gobernante, que somos todos nosotros” y “el que administra”, ese que en muchos casos “nos obliga a morir”. Así rastreamos cómo, en un diagrama de prácticas y lógicas singulares de diferenciación y afirmación, la UTD construye su autonomía como

⁵⁸⁰ Tras la disolución de la CTD, a mediados del 2001, comenzaron a surgir numerosos grupos de desocupados sobre todo en Tartagal. Uno de ellos es el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) liderado por el varias veces mencionado: Tyson Fernández, vinculado al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) liderado por Raúl Castells, que fue desplegando una actividad creciente en la zona. En Mosconi, el MTD también realiza actividades diversas, pero la UTD no tiene relación directa con él. A principios del 2000, en Mosconi-funcionó por un tiempo el núcleo de la CCC liderado por Juan Nieves, e incluso un grupo vinculado con la CTD de Tartagal, pero solo la UTD logró sostenerse en pie. Ver: Benclowicz, 2013: 246.

“práctica de libertad” (Foucault, 1994d), mientras ejerce un autogobierno local, en el espacio de unión en el que se ha ido constituyendo.

En este ejercicio genealógico y crítico reconstruimos la experiencia de la Fundación de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (FUNDATRAD) que desde 2006, y con mayor visibilidad desde 2008 forma parte de la UTD, instalando una singularidad relevante en dicho espacio de unión y trabajo. En tanto FUNDATRAD pretende dar respuesta a diferentes “grietas” que mantenían a la UTD en las márgenes de la legalidad requerida para la gestión de recursos, así como de la “autoexplotación” (Wahren, 2011) vinculada con las condiciones laborales y el acceso a seguros, obras sociales, asignaciones, entre otros.

A lo largo del apartado observamos cómo, en estos juegos de gobierno y resistencia, los trabajadores desocupados unidos en la UTD resisten a “ser gobernados de ciertos modos” y con ello a “ser incluidos” (Pepino Fernández, entrevista, julio 2013), según los parámetros y lógicas dispuestas, ante todo para con los Estados, en un tenso y complejo tejido transaccional, entre la aceptabilidad y la transgresión.

2-Las prácticas del piquete-piqueteras y sus singularidades, en torno de la UTD Mosconi entre 2003 y 2013

En continuidad con lo trabajado en torno de la práctica del piquete a mediados de los años 90’, cuando se encontraban en su esplendor, en este breve recorrido por la actualidad más cercana, haremos referencia a las transformaciones y modalidades de lucha y resistencia de la UTD. Diferentes trabajos refieren a dicho período de lucha de la UTD como de “repliegue” (Benclowicz, 2013) y/o de “período de latencia” (Wahren 2011). Entretanto, nosotros consideramos que se trata de modalidades divergentes de lucha y resistencia, según condiciones de posibilidad, realidad y necesidad que, en la época analizada, hicieron que la UTD se vuelque hacia la búsqueda y creación de puestos de trabajo, la reactivación de la comunidad-región, el sostén de lo logrado y también la posibilidad que encontraron en ciertos vínculos estratégicos con el gobierno nacional y las diversas prácticas vinculadas con otros sectores con los que negociaban fondos, trueques, puestos de trabajo, permisos, entre otros. Las prácticas del piquete, si bien disminuyeron en tiempo e intensidad, no dejan de ser consideradas prácticas de lucha en las cuales “poniendo el cuerpo de un modo radical”, se puede obtener lo necesario para seguir en pie

y de pie. El piquete es una práctica más en los tramos consolidados de autogobierno que la UTD ha ido construyendo a lo largo de su historia de vida.

En este sentido, identificamos hacia noviembre del 2003, cómo la UTD realizó “un corte de ruta y un corte de acceso”, cuya demanda manifiesta remitía al pedido de trabajo genuino y a la efectivización del pago de la deuda que contrajo con ellos el Estado en el momento de la privatización, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF. En medio de estas manifestaciones, los trabajadores desocupados fueron duramente reprimidos y se produjo el encarcelamiento de algunos referentes. Este hecho llevó al levantamiento de la población de Mosconi, que tomó las sedes de *Tecpetrol* (perteneciente a *Techint*) y *Pluspetrol* (perteneciente a Repsol). Varios de sus dirigentes fueron apresados, lo que motivó una numerosa marcha para exigir la libertad de los detenidos y repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad y la criminalización de las luchas sociales. (Bneclowicz, 2013).⁵⁸¹

En el espacio de lucha antedicho se realizó la quema de una de las sedes de la empresa petrolera *Tecpetrol*, que se encuentra cerca de la entrada de Mosconi, al borde la ruta. Si bien no se ha hecho público quién o quiénes fueron responsables de dicha prácticas⁵⁸², resultó un material valioso para dar inicio a una importante campaña contra los movimientos piqueteros en los medios de comunicación, lo que se fue instalando como práctica común a lo largo de los años, según lo trabajado. Los piqueteros fueron presentados como “vandálicos”, provocando, de ese modo, el rechazo de una parte importante de los habitantes de Tartagal y Mosconi.⁵⁸³

Luego de casi 5 años sin estar en la ruta por una jornada de más de un día, la UTD realiza un corte entre el 25 y el 30 de marzo del 2009. Las demandas que muestran los petitorios repiten las ya señaladas años anteriores y remarcan algunas vinculadas con situaciones

⁵⁸¹ En noviembre del 2003, el movimiento de piqueteros de Tartagal-Mosconi tenía 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados por la justicia federal y la provincial. De hecho, para julio del 2011 José Pepino Fernández tenía más de 300 causas penales en su contra, considerando que pasó varios meses en la cárcel de Devoto, cuando lo apresaron en las puertas del Senado de la Nación y, que cotidianamente resulta apresado. Esto es, por el lapso de horas y/o días, cuando se acerca a Orán y/o Tartagal ante todo por el delito penal de: “Interrupción de la vías de comunicación, según el Art. 194 del C.P”. UTD: Informe de situación de Gral. Mosconi. Departamento Gral. San Martín, (2003). Mimeo. Pp.: 18.

⁵⁸² Los referentes de la UTD sugieren, que los mismos se realizaron mediante “instigadores”, en vinculación directa con la policía provincial.

⁵⁸³ En el verano del 2006, en el marco de una visita del por entonces vice gobernador Walter Wayar, varios integrantes de la UTD y jóvenes universitarios de Buenos Aires fueron reprimidos con golpes y balas de goma y encarcelados, así como denunciados como “agentes subversivos” por funcionarios provinciales. Mientras que José Pepino Fernández y Rodolfo Chiqui Peralta durante el año 2007 recibieron diferentes amenazas de muerte que incluyeron entre las más contundentes y graves disparos a la casa de Peralta y un intento de atropellamiento a Pepino Fernández. En ambos casos los provocadores eran civiles con alguna relación con el poder local y/o la policía provincial. Ver: Wahren, 2011...op...cit.

puntuales de lucha y resistencia; ante todo remiten al pedido de puestos de trabajo para los habitantes de la región, la prevención contra el dengue, el cese de desmontes producidos por empresas sojeras, petroleras y madereras en la zona y prioritariamente la realización de las obras públicas prometidas. Esto último disparó el ingreso a la ruta, cuando se suspendieron las obras de infraestructura llevadas a cabo por la UTD que pretendían ser retomadas por empresas pertenecientes, - según lo reafirmado en la diversas conversaciones al respecto con referentes de la UTD - al ex gobernador de Salta, Juan C. Romero y al intendente de Mosconi Isidro Ruarte (Partido Renovador). Puesto que UTD tenía la concesión de la obra y decidió derivar los excedentes hacia pagos diferenciados a desocupados, y tareas anexas en la construcción de las viviendas, entre otras. Luego de varias solicitudes de devolución de la obra a la UTD, por diferentes canales (nota, cartas, etc.), como medida última se realiza el corte de la ruta 34 (2009), donde también los integrantes de UTD fueron reprimidos.

En sintonía con lo antedicho, son recuperadas las siguientes palabras:

*...el intendente Isidro Ruarte, llamó en estos días a la población a través de la F.M. "Profesional" de Sergio Torres, a colaborar con la gendarmería para reprimir a las "lacras sociales, delincuentes, borrachos, vagos que no quieren trabajar" o los "extraños personajes, que hacen caja para armarse", como dice Torres. Como los fondos para las obras conseguidas por la UTD Mosconi, deben pasar por la firma de Ruarte, se imaginan cómo debemos atravesar las "horcas caudinas" para lograr la liberación de pagos o la instalación de los servicios en los barrios en construcción. Entienden también porqué, en una oportunidad, en un acto criminal, tiró su 4x4, contra Pepino Fernández (que sólo resultó con golpes) y rápidamente el juez que recibió la causa determinó la falta de mérito. Trabajar por la comunidad tiene estos avatares.*⁵⁸⁴

Dicho comunicado resume las modalidades y motivaciones para la lucha, las prácticas realizadas en el camino de construcción de la organización y las resoluciones de problemáticas locales cotidianas, a largo y a corto plazo. Así también pone de manifiesto las trabas y las desdichas padecidas, atravesadas y resistidas en sus vínculos con los gobiernos locales, que se imponen y disponen. Ante todo el tipo de adjetivaciones utilizadas para referir a los trabajadores desocupados: “lacras sociales, delincuentes, borrachos, vagos que no quieren trabajar”, constituyen fuertes prácticas de subjetivación atravesadas del estigma, que “marca, diferencia y excluye” a estos sujetos y poblaciones, según los tramos discursivos y extradiscursivos de los gobiernos locales. Este modo de configurar la subjetividad pone en jaque la relación tensa y conflictiva entre unos y otros y/o de los unos hacia los otros.

⁵⁸⁴ Comunicado presentado por UTD, noviembre 2009.

De hecho, durante el tercer día de corte, se detuvo a J. C. Gipi Fernández, quien se encontraba negociando en la capital provincial algunos de los puntos del petitorio, con funcionarios gubernamentales. Al mismo tiempo que detenían a Gipi mientras abandonaba la Casa de gobierno provincial, el Juez Federal de Orán libraba una orden de captura para otros quince integrantes de la UTD, reflatando varias de las causas judiciales ya acusadas. Todas estas prácticas de judicialización y criminalización de la protesta acentuaron el conflicto. Entre las manifestaciones encontramos el comunicado antes transcrito. En tanto los medios de comunicación, locales y provinciales realizaron la cobertura de dicho corte, no así los medios nacionales, lo cual remite, según Wahren (2011), a la re-creación de un “cerco informativo” en torno de las prácticas de lucha de la UTD.

El momento que lleva al levantamiento del corte se produce al quinto día, luego de una reunión con referentes y representantes de la UTD y miembros del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, donde, según lo comunicado por la UTD, fueron amenazados con que “*tendrían que lamentar varios muertos*” si no suspendían la medida de lucha. Mientras esto acontecía en suelos locales, en Buenos Aires se realizaban actividades de solidaridad con la UTD y sus demandas, ya que diferentes organizaciones sociales y personalidades de cultura y la academia, se manifestaron en la Casa de la Provincia de Salta para exigir la liberación del referente detenido, así como el cumplimiento del petitorio planteado por la organizaciones salteñas de trabajadores desocupados (Wharen, 2011: 145).

En la noche del 30 de marzo, J. C. Gipi Fernández fue liberado y esa misma noche levantado el corte de ruta por parte de la UTD. Respecto de los acuerdos obtenidos, se logró la reactivación de algunas de las obras de infraestructura que habían sido suspendidas, se firmaron acuerdos por nuevos puestos de trabajo, y se reactivó la campaña contra el dengue en la zona del Dpto. Gral. San Martín.⁵⁸⁵

En el 2010, se dio el cruce por la propiedad y pertenencia de los galpones de la “zona industrial”, donde la UTD realiza varios de sus proyectos, según lo trabajado en el apartado III del capítulo 2. En tanto, dichos galpones pertenecían a YPF empresa del Estado y quedaron bajo la jurisdicción municipal luego de la privatización. En los terrenos donde funciona el taller de soldadura y el vivero había una antigua estructura de

⁵⁸⁵ Para más información sobre esto último, ver: “Informe sobre Campaña contra el Dengue en Gral. Mosconi, en la provincia de Salta, en el Norte Argentino. Un estudio del primer semestre del 2009”,...op...cit.

perforación de YPF reclamada por un empresario local. La UTD se niega a entregarla, ya que la considera una “propiedad colectiva de los ex/trabajadores de YPF”. En tal sentido, el intendente local Isidro Ruarte comienza una serie de acciones legales y una campaña en los medios de comunicación local y provincial para que los galpones de la UTD vuelvan a ser de gestión municipal.

En dicho proceso de resistencias, negociaciones - imposiciones y disposiciones - Pepino Fernández resulta detenido, acusado de “*resistencia a la autoridad*”. Mientras se producían estos acontecimientos varios fueron los cortes de ruta, así como los enfrentamientos con la policía. Finalmente, llegan a un acuerdo con la municipalidad y se firma un convenio mediante el cual los galpones quedaron en manos de la UTD.

Por último, a principios del mes de julio de 2013, la UTD salió a cortar la ruta luego de varios años sin hacerlo, fueron más de mil doscientas personas al piquete, cuando en todos los cortes y ocupación realizados por otras organizaciones a lo largo del último año, no sumaban más de cien manifestantes. Luego del corte, cuando la provincia aceptó sentarse a negociar un petitorio, en el que hay puntos que datan de los años 30’, la UTD a través de su referente Pepino Fernández, no quiso negociar por diez millones de pesos para obras que debían repartirse entre las organizaciones dirigidas por Tayson Fernández, Mario Rearte y UTD. La radicalidad en la decisión se sustenta en la necesidad de lo que los tramos nativos de enunciación nombran como “*trabajo a mano, mano de obra o trabajo a pala*”, que remite al trabajo no maquinizado, en tanto el primero permitiría la distribución de mayor cantidad de hombres y mujeres con trabajo, hasta el final de la obra.

Al respecto, nos encontrábamos en la oficia/casa junto con Pepino, cuando en la tarde de un día de julio de ese año, en medio de los cortes mencionados, ingresó un referente que había ido a negociar junto con Tyson Fernández y Rearte el modo de continuación de las obras sin maquinización. Era un hombre joven, corpulento, quien le comentó apasionadamente a Pepino las dificultades de negociar los diez millones de pesos (que antes enunciábamos), y la necesidad de cortar la ruta para poder manifestar el pedido. Pepino lo escuchó y remarcó con la cabeza que su postura era radical, no se negociaba con nadie, que si “los otros” querían entregar algún porcentaje para máquinas o negociar números de trabajadores empleados, era cuestión de ellos. La UTD se mantendría intransigente en la petición y medida. De hecho, mediante los cortes de no muy larga duración y las negociaciones en el marco antes mencionado, se logró un porcentaje

considerable del dinero para obras, ante todo para su continuación, como los núcleos húmedos y ampliación de viviendas que la organización venía construyendo desde 2009. En estos avatares, que se entrecruzan con las ya mencionadas luchas y negociaciones en torno del Fondo de Reparación Histórica desde 2011 hasta nuestros días, observamos cómo se fortaleció la estrategia de los diferentes espacios de poder instituidos a nivel municipal y provincial, para generar “aislamientos y enfrentamientos” de la UTD con el resto de la sociedad local y provincial, así como la profundización del proceso de judicialización de la protesta social para habilitar la intervención represiva que genere el menor “costo político” posible a las autoridades de la provincia. Si bien la UTD generó lo que Wahren (2011) llama un “arco de solidaridad”, que le permitió sobrellevar estas estrategias diversas, en la época analizada los cortes de ruta y su ocupación se realizan en casos muy puntuales. Pues, la UTD no apoya a otras organizaciones piqueteras locales y su actividad está, ante todo, centrada en el sostén y gestión del trabajo logrado a lo largo de los años de lucha.

3- Las prácticas cotidianas, en el tiempo y el espacio de la UTD: des-sujeción y re-territorialización

Las prácticas cotidianas de la UTD, en las cuales se entreteje, parafraseando a De Certeau (2000) algo de tacto, algo de gusto, algo de juicio y algo de instinto, se orientan de un modo comunitario, mientras se recrean en la pertenencia al ambiente (Kusch, 2000c). En tanto no se trata de “acatar” lo dispuesto, ni de la sola reivindicación de la conciencia: *“Acá no se trata de una idea o de decir sos de ‘izquierda. Acá se trata de sobrevivir”* (J.C. Gipi Fernández, entrevista, junio: 2011), esto es, luchar a favor de la vida y contra la muerte, en el estar siendo cotidiano.

En el apartado III del capítulo 2 trabajamos en torno a los proyectos productivos, en tanto prácticas estratégicas de reconversión de los planes obtenidos en pie de lucha. Desde mediados del 2000, la obtención de diferentes planes y programas se logra, sobre todo, mediante actividades de “gestión” autónoma por parte de UTD en un complejo tejido de transacciones. Los referentes de LA UTD son los que se “mueven y buscan”, reconociéndolo como un desgaste. En la actualidad más cercana, esta modalidad de “autogestión autónoma” interpela las prácticas “inclusivas” dispuestas en el programa de gobierno nacional y provincial, cuyos entramados discursivos se dirigen a “todos y

todas”, según discursos contruidos en torno de la equidad y el sostén epistémico del Desarrollo Humano (Paulizzi, 2015), acorde a lo ya trabajado.

En esta interface vincular entre gobernados y gobernantes, en el año 2005 la UTD recibe la última visita de técnicos expertos para evaluación del trabajo a nivel nacional, así como la visita de la Ministra de Desarrollo Social, en el 2009. En una caminata por las obras en construcción, Pepino Fernández nos comentó sobre aquella—visita de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Recordaba que cuando regresaron de mostrarle los proyectos de los galpones, ella dijo: “...a esta gente hay que ayudarla”, palabras que por un lado fueron valoradas por el referente de la UTD, en tanto reconocen su trabajo, y por otro, descalificadas, considerando “que si ellos no se mueven”, el trabajo “decente” según enunciados del Ministerio, nunca llega a la localidad.

A su vez, la UTD sigue sosteniendo una vinculación muy escasa con el gobierno provincial y local, lo cual nos vuelve a marcar una diferencia entre el programa de gobierno nacional y el provincial en torno de la relación para con las poblaciones pobres y desocupadas. En la provincia, los piqueteros, ante todo pretenden ser silenciados, olvidados, dejados a la muerte, mientras que de modos variados el programa de gobierno provincial otorga herramientas para que estos sujetos y poblaciones logren la autogestión local necesaria, que permita el desarrollo social comunitario en este vínculo singular de relación de “los unos a los otros”, según improntas “naturales” de solidaridad y economías sociales de mercado.

En esta línea, para los años 2013-14 la UTD había gestionado, además de Seguros de Desempleo, diferentes Planes dirigidos a jóvenes, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, cooperativas promovidas por el Ministerio de Vivienda e Infraestructura de la Nación y diferentes tareas en el marco de la Fundación. En las cooperativas, ante todo, se realizan tareas de construcción de casas barriales, con las ladrilleras propias, mientras se arreglan cordones cunetas, se corta el césped, se llevan a cabo tareas de forestación local y fumigaciones contra el dengue. También, algunos trabajadores hacen diferentes tipos de actividades en escuelas, centros de salud locales, en ocasiones ingresando a planta permanente y en otras con trabajos de contraprestación y extensión. De igual modo, resultan contratados, temporalmente, por las empresas petroleras:

En este momento estamos construyendo casas que la Subsecretaría de Vivienda había abandonado en 2008-9, lentamente porque no contamos con los recursos, en base a nuestros propios proyectos productivos. También estamos fabricando baños y cocinas para viviendas carenciadas, no tenemos el Plan PROCREAR porque es difícil que nosotros lleguemos a cumplir los requisitos, hacemos nuestros propios ladrillos, tenemos ripio y

arena y conseguimos el cemento. Aunque construimos despacio, las terminamos, no como el gobierno nacional y provincial que las abandonó. También tenemos más de 120 huertas y criaderos de animales donde sembramos toda clase de verduras orgánicas, choclo, zapallo, melón, sandía, y criamos chanchos, cabritos y corderos. Tenemos vacas para leche y apicultura. Recuperamos madera con la que hacemos muebles, camas y modulares. Tratamos de vivir con nuestros propios recursos. Somos muy perseguidos porque empleamos cerca de 3.500 personas, 1.300 con salario de zona 4 con \$ 1.300 por hijo más la ayuda escolar. La AFIP y el ANSES también nos persiguen por esto. Los políticos dicen que organizamos mucha gente y eso nos da mucho poder. Todo esto lo hacemos sin pedir un peso al gobierno nacional ni provincial ni municipal, orientado a la gente de bajos recursos. En vez de ir a cortar rutas para pedir subsidios nos hemos dedicado al desarrollo de estos proyectos productivos. La jornada de trabajo familiar es de 4 horas. Creo que ningún sindicato tiene un régimen laboral parecido.⁵⁸⁶

Dicho relato nos muestra como, la UTD se autonomiza de ambos programas de gobierno - el nacional y el provincial-, en el ejercicio singular de prácticas de autogobierno, que en un complejo tejido transaccional recrean el trabajo y las economías, resubjetivizan a los trabajadores desocupados y reterritorializan las herencias, los espacios y las labores.

En base a lo antedicho, el siguiente cuadro pretende graficar, sintéticamente, los diferentes planes y programas a través de los cuales la UTD ha ido realizando las prácticas laborales cotidianas, que dan sustento, forman y transforman a la organización en un “espacio que otorga trabajo y lo sostiene, en la región entera.”

FECH	PROGRAMA	CANT	ZONA	SUBSIDIO	COORDINADORES
2007	Plan Familia – Programa de Empleo Comunitario (PEC antiguo PEL)	700	Mosconi	\$80 por cada hijo y \$150 PEC	UTD: PEC: 700 – municipio, Plan Familia)
2009	AUH/FUNDATRA D	-	-	-	-
Set. 2010	Seguro de Capacitación y Empleo (SCYE, PEC, que pasaron a SCYE)	400	Mosconi	\$225	UTD
Nov. 2011	Ultimo pago de los PEC	350 y 100	Mosconi	\$150	UTD- Municipio
2012	SCYE (antiguo)	250	Mosconi	\$225	Municipio

⁵⁸⁶ Entrevista a José “Pepino” Fernández en el 18º aniversario del movimiento piquetero. Por Mario Hernández. Por ANRed- E. 3 de julio de 2014

	PTA-Mas y Mejor Trabajo	270	Mosconi	\$600	UTD (Fondos, MTySS de la Nación)
	SCYE (nuevo)	69	Mosconi	Pasan a cobrar \$220 por 24 meses	UTD
	SCYE (nuevo)	23	Mosconi	Pasan a \$220 y luego a \$750	UTD
	Cooperativas Ayudantes	200	Mosconi	\$750	UTD (Fondos MINPLAN: viviendas, cordón cuneta y cloacas)
	Cooperativas Oficio	30	Mosconi	\$1200	UTD (Fondos MINPLAN: viviendas, cordón cuneta y cloacas)
	FUNDATRAD	414	Mosconi	\$540 por hijo	UTD (Fondos Salario Familiar ANSES)
2013	Algunas Cooperativas y programa MTySS pasan a la Secretaria de producción y empleo municipal a cargo de Gipi Fernández, que se desvincula de UTD, por este tiempo.				

Esquema realizado en base a información otorgada por la oficina administrativa de la UTD, entre setiembre del 2012 y 2013. Para la elaboración del mismo respetamos los modos nativos de enunciación y presentación de los datos

Además de lo transcrito, Chiqui Peralta (2012) comenta que:

...hay una bolsa de más de 300 trabajadores desocupados con altos conocimientos que están parados por que las petroleras están paradas en la zona. Más de 500 trabajadores con oficios medios. Y, finalmente más de 500 jóvenes con estudios secundarios a la espera de una oportunidad.

Mientras agregaba, en referencia a la dispersión de la población trabajadora local desde la privatización de YPF:

Tengo cuatro hermanos y sus grupos familiares en Neuquén, cuatro sobrinos también con sus grupos familiares, un cuñado en Colombia, Rusia, África, un hermano que va a Chile y otros lugares a trabajar. Así que verás cómo fuera de las informaciones de las estadísticas Mosconi tiene esa característica, que lo hacen inmanejable (R. Chiqui Peralta, referente área administrativa, entrevista, setiembre, 2012).

Según los datos recogidos en el esquema y los relatos antedichos, observamos la diversidad de población que integra a la UTD: jóvenes en edad activa para el trabajo; mujeres jefas de hogar; hombres y mujeres en situación de desempleo y edad avanzada cuya figura se traduce en pasivos; jóvenes mujeres madres solteras y diferentes trabajadores temporarios. Las condiciones de estos últimos resultan de la imposibilidad de conseguir trabajo en otros espacios como petroleras, escuelas, hospitales. También cuando “se caen” los programas o planes que los sustentan y es necesario gestionarlos nuevamente o redistribuirlos.

También observamos el vínculo con el gobierno de Estado nacional, tanto en torno de las prácticas de gestión, mediante una dinámica vinculación con las áreas de vivienda, infraestructura, obra pública, trabajo y desarrollo social, así como programas dirigidos, ante todo a “poblaciones empleables” en tanto “pobres desocupados activos”, acorde a lo trabajado en el capítulo 2 apartado II. Esto resulta reconfigurado en los suelos locales mediante modalidades singulares de distribución y organización del trabajo. Los “inempleables”, por su parte, reciben Seguros de desempleo y en el caso de madres solteras la AUH, mientras que el vínculo más estrecho con Desarrollo Social - espacio que nuclea a las poblaciones “inempleables” - se da en el marco de la gestión para obtención de maquinarias e insumos, según el dispositivo de la economía social ya analizada.

Si bien, analizamos el modo como se organizan las tareas y se construyen los perfiles del trabajo de los/las trabajadores/as, en este punto nos interesa rescatar de qué modo la distribución de los planes no se realiza acorde a lo dispuesto por los “manuales”, sino que se reordena territorialmente, según el conocimiento de las necesidades vigentes y quienes trabajan y pertenecen a la organización: *“Es más sentido común que otra cosa, aparte uno ya tuvo una práctica laboral (...) te das una leída a algunos de los puntos principales (...) son palabreríos que escriben los tipos ahí...”* (R. Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, setiembre, 2013).

También observamos cómo, la UTD se expande territorialmente hacia las comunidades más cercanas entre las cuales hay diferentes misiones indígenas, reafirmando la “práctica

del territorio” (Wahren, 2011)⁵⁸⁷ y el criterio de territorialidad para la distribución y organización de los planes y programas obtenidos, en el proceso de gestión directa. Así también avistamos un acceso al Seguro de desempleo, ante todo para los ex/ypefianos, en una transformación del ya señalado Programas de Empleo Comunitario, mientras que un conjunto de la población resulta migrante e incluso exiliada de su territorio local debido a las condiciones de extrema pobreza, exclusión, y vulnerabilidad, en la que se encuentran la mayoría de sus habitantes.

Por último, el recorrido por el campo a lo largo de los años de trabajo, las conversaciones, la información obtenida y lo observado nos permiten afirmar, que la UTD realiza en su territorio local y su labor cotidiana, diferentes gestiones y tareas que sobrepasan al municipio e incluso a la gobernación, no solo se trata de “protestar con propuestas” como ya fue señalado, sino de “realizar y concretar” los trabajos propuestos en el cotidiano, que van dando formas-deformes a la organización.

Por su parte, en este juego astuto de reconfiguración creativa, resulta relevante analizar el modo en que se obtienen los recursos, insumos y maquinarias para la realización de los trabajos antedichos, mediante el ejercicio de “gestión directa”. En una conversación con Pepino⁵⁸⁸ nos relata cómo consiguió en Bs. As., un camión y un conjunto de herramientas para la UTD, cuya gestión le llevó un par de meses de estar en la ciudad, a veces sin comer y sin dormir, nos decía. Como fue esbozado en el capítulo anterior, en una de las oportunidades de diálogo con el Estado nacional, puntualmente en el año 2005, Pepino tuvo la oportunidad de acercarse al presidente Néstor Kirchner y entregarle una carpeta con las diferentes actividades que la UTD venía realizando desde sus inicios. Acorde al relato de Pepino, el presidente lo llamó y le pidió sus datos, y desde ese momento sus

⁵⁸⁷ Wahren remite a los “territorios practicados”, cuando señala que el comienzo del proceso de territorialización de la UTD se configura a partir de los escasos recursos obtenidos por medio de las acciones colectivas de protesta. A partir de lo cual, plantea la interrelación entre los momentos de visibilidad y latencia de la acción colectiva, señalando que la reconfiguración del territorio se refuerza durante los momentos de visibilidad y se construye cotidianamente desde los momentos de latencia, es decir, planteando respuestas alternativas y situadas en el territorio a los problemas de alimentación, salud, educación, trabajo, etc. Dichas acciones implican, por tanto, una intervención política, económica y comunitaria del movimiento social sobre el territorio determinado. En tanto frente a la desconfiguración territorial y social que significó la privatización de YPF, la UTD ha intentado recuperar el tejido social resquebrajado por las privatizaciones, la desocupación y la pauperización de la infraestructura económica y social de la región y sus habitantes. La UTD actúa en el proceso de reapropiación territorial, ha “marcado y nominado” el territorio tal como lo hacía anteriormente YPF tanto en el aspecto productivo, como social y cultural comunitario. (Wahren, 2011: 179-80).

⁵⁸⁸ Pepino, según sus relatos, había ido a Buenos Aires a “reclamar 250.000 dólares que se había robado Cavallo en la época de De La Rúa y que eran de YPF, por lo cual lo metieron preso. Él nos comentaba que antes de que Berni le insistiera para ir a la reunión él le dijo: -“¿Qué pasaba con la plata que se había robado Cavallo?”; y que Berni le dijo que ya verían qué hacían con eso, que él se iba a encargar de darle \$50.000 para los changos y para el camión.

conversaciones comenzaron a ser con “un tal Berni⁵⁸⁹, que era amigo de los Kirchner”, según sus palabras, a quien insistió que no conocía y nunca supo “bien” quién era:

Y estábamos ahí en desarrollo social has visto y viene un tipo: -¿vos sos Pepino? Si, le digo, ah que tal como andas, vos sos famoso me dice, y bueno, y agarra y viene y me dice, che necesitamos que estés en la reunión, va a estar este Berni, y va a estar el presidente y va a estar la ministra acá en la reunión con todos los piqueteros y queremos que vos también estés. Entonces voy a la reunión, le doy la mano a Kirchner le doy la carpeta. Acá tengo la carpeta. Al rato me llama Kirchner, yo estaba con otro piquetero, me llama y me dice: -che, mira, vos me das la carpeta y todo pero falta lo más importante, ¿quién sos vos? dice. (...) Y agarra el tipo Berni me veía todos los días, estuve hasta el último, a veces sin comer y estaba ahí por esperarlo, él tiene mucha actividad. Dice ¿¿qué pasa con los proyectos?, y el proyecto ya estaba armado, pero así nomás has visto. Entonces agarra y dice como vos me has hecho quedar bien porque han parado los piquetes, todo gracias a vos, a ustedes, un ejemplo lo que hacen ustedes, (...) cuando vengo aparezco con el camión, con dos camiones grandes así y he llenado todo esto de herramientas, he hecho un desfile por la plaza. (J. Pepino, Fernández, referente área gestión UTD, entrevista, setiembre: 2013)

Resulta relevante el relato antedicho para dar cuenta del modo cómo se conseguían y aún consiguen las diferentes herramientas, maquinarias e insumos de trabajo, mediante el trato directo, en este caso con ministros, secretarios y demás funcionarios-políticos del gobierno nacional. En otros casos – como los de la Escuelita en Tremental y la Universidad Popular - la relación se estableció con Fundaciones, Universidades, Iglesias, etc. A su vez, observamos cómo se construyeron en este tiempo, las estrategias de relación del programa de gobierno nacional con los movimientos de trabajadores desocupados y piqueteros ya trabajadas en el apartado I del capítulo 3. Por un lado, mediante la apertura de espacios de diálogo y transacción dinámica con las organizaciones de trabajadores desocupados, por otro lado, pretendiendo frenar y/o transformar la práctica del piquete como modalidad de protesta y/o lucha, en tanto se “otorgaban premios – merecidos - a quienes frenaban los piquetes”, tal cual se lo hace saber Berni a Pepino, cuando le dice que: “*él había cortado los piquetes por eso merecía la gestión del camión y las herramientas*”. Dichos insumos y maquinarias fueron

⁵⁸⁹ Sergio Berni es médico militar, y ha tenido incursiones en el ámbito político desde inicio de los 90', mientras residía en Santa Cruz. Formó parte del gobierno presidido por N. Kirchner en el área de Desarrollo Social como director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial, llegando luego a ser viceministro y secretario de gestión y articulación en dicho ministerio. En las elecciones legislativas del año 2011, Berni fue electo segundo senador de la Provincia de Bs. As. por la Segunda Sección Electoral. En diciembre de ese mismo año asumió como vicepresidente primero del Senado, y comienzos del año 2012, fue designado por la presidenta C. Fernández de Kirchner como Secretario de Seguridad de la Nación, en reemplazo de C. Camaño y con la intención de “aumentar la capacidad de respuesta a las demandas que la sociedad produce”. En el cumplimiento de dicha función Berni realizó fuertes críticas a las prácticas de “corte de ruta” realizadas por los piqueteros, ante todo ubicados en la provincia y ciudad de Buenos Aires. Fuente: Diario La Nación 8 de marzo del 2012 y 1 de julio del 2012.

comprados con fondos del Ministerio de Desarrollo Social a cientos de miles de pesos y trasladados a Mosconi por Pepino quien, como comenta más arriba, realiza un desfile/paseo por la localidad, sobre todo para que la intendencia “vea” que ellos pueden trabajar sin su apoyo.



Fotos Cora Paulizzi, junio 2013, camiones materiales de la UTD

Observamos aquí cómo se entrecruzan lógicas, prácticas y estrategias divergentes, diferentes y múltiples en un mismo trazo de relaciones transaccionales entre gobernados y gobernantes. En torno de la UTD observamos cómo astutamente el objetivo, que era obtener el camión para poder trabajar mejor en sus territorios fue el que sostuvo, guió y apuntaló cualquier tipo de negociación, e incluso pretensión de persuasión por parte de los gobernantes. De hecho, el reconocimiento del freno de los cortes no influyó, de ningún modo, en la posibilidad de que volvieran a cortar, cada vez que fuese necesario. En tal sentido y en sintonía con lo antedicho en torno del trabajo, la gestión de recursos y las tramas vinculares entre gobernados y gobernantes, la UTD no deja de ejercer la crítica a ciertos modos de ser gobernados, en tanto: *“Hoy los planes son en negro, el Estado paga en negro (...) El trabajo no es un trabajo estable, es desestabilizante porque puedes estar 3 meses, 6 meses bien y después te quedas Sin nada”* (J. C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012). Mientras que Pepino nos remarcaba:

...el plan trabajar es una cagada. La cooperativa también. Porque las cooperativas no producen has visto, como tienen que producir. A vos te dan, te sale una plata, vos agarras

toda la plata para hacer cien casas, con esa plata que te dan a vos, que te demora, vos haces el presupuesto que te dice ahí, el presupuesto, cuando la bolsa de cemento valía 10 pesos, cuando te dan la planta la bolsa ya sale 15 o 20 pesos, la bolsa (entrevista, julio: 2013).

Otro ejemplo de reconfiguración creativa y astuta ante los avatares de los tiempos burocráticos y abstraídos de las realidades cotidianas, urgentes y vitales, encontramos el siguiente relato:

El Programa Trabajo Autogestionado se puede conseguir a partir de la Línea “Ayuda a los Socios”, eran \$1000 y hoy ya son \$800. La línea II de 90 mil pesos por cooperativa para compra de herramientas, insumos o materiales, nunca lo pudimos conseguir con las coopes de ahora ni con las del 2006 al 2009, por las exigencias de papeleríos que la gente de las coopes no está acostumbrada a hacer. Así que todos los materiales, herramientas, insumos, instalaciones, camiones y gastos de servicios también los pone la UTD a través de la Fundación que es la que tiene personería jurídica. (R. Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, setiembre: 2012)

Por lo tanto, estas afirmaciones permiten avistar las diferencias yuxtapuestas entre las lógicas de gobierno que fabrican a los pobres desocupados para gobernarlos, según discursos específicos como los del “trabajo decente y la economía social (de mercado), y las percepciones, prácticas y realidades de estos sujetos advenidos “pobres”. Quiénes, en sus prácticas cotidianas de lucha, resistencia y autogobierno transforman estas estrategias políticas de intervención, reapropiando-las y re-inventando-se, según tramos nativos de enunciación: “... *haciendo política de Estado, del verdadero*” (J. C. Gipi Fernández, entrevista, setiembre: 2012).

3.1- La Fundación de Trabajadores Desocupados (FUNDATRAD) y su singularidad: entre legalismos, salarios, liderazgos y saltos...

“Nosotros queremos ir más arriba y conseguir que el trabajo nos dé más, nosotros no somos empresas tampoco”
(J. Pepino Fernández, referente área técnica UTD y presidente Fundatrad, entrevista, julio 2013)

En este tejido movedizo de prácticas de gobierno y resistencia en torno del trabajo, en el año 2006 se instala la Fundación de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (en adelante FUNDATRAD). Dicha Fundación pretende dar respuesta a diferentes “grietas” en torno de las dificultades avistadas en la organización colectiva y cooperativa del trabajo, las cuales mantenían a la UTD en las márgenes de la legalidad requerida para la gestión de recursos, así como de la “autoexplotación” (Wahren, 2011: 117), vinculada con las condiciones laborales y el acceso a seguros, obras sociales, asignaciones, entre otros. En el intento por salvar lo antedicho y como una “táctica astuta”, se crea en el 2006

FUNDATRAD, a través de la cual fue posible obtener la personería jurídica y con ello realizar la gestión directa de diferentes tipos de planes, programas y proyectos de perfil laboral y social. A partir del 2008 FUNDATRAD ingresa en ANSES bajo la figura de “empleador” y comienza a pagar a sus miembros-empleados el monto correspondiente a las asignaciones familiares, que ofrece dicho organismo.

La Fundación resulta la figura legal de la organización UTD Mosconi.⁵⁹⁰ El 23 de agosto del 2006 se aprueba el estatuto social de la Fundación, y se le otorga la personería jurídica correspondiente.⁵⁹¹ Es presidente José Pepino Fernández, Secretaria: Sandra Zerda y Tesorera María Acosta (Doña Mary). El 31 de julio de 2007, fecha de inscripción en AFIP, es el día de inicio de actividades formales. El concepto que figura es el de “actividades económicas” y “servicios de asociaciones”, en actividades declaradas. En igual año, reciben el certificado de habilitación por parte del Municipio local (Expte. N° 83932/07). El 30 de junio de 2008 es incorporada al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) del ANSES, en tal sentido, para ANSES la fundación adviene: “...una empresa incorporada al Sistema Único de Asignaciones Familiares por medio del cual sus trabajadores percibirán Asignaciones Familiares en forma directa a través de este Organismo a partir del devengado junio del año 2008” (notificación ANSES, N° 7649). Dichos tramos enunciativos serán puestos en cuestión por la UTD, según analizaremos más abajo.

También en el 2008, la Fundación gestiona la certificación oficial de inscripción en el registro general de contratistas del Estado Provincial (Certificado N° 16075) bajo la figura de Fundación y/o asociación sin fines de lucro. El 8 de octubre del 2008 FUNDATRAD celebra un “Convenio de Colaboración entre la Provincia de Salta y la Fundación (Decreto N° 4415), dicho convenio tiene por:

...finalidad la asistencia y cooperación con los recursos humanos, técnicos, financieros que demanden la ejecución de distintas obras en la localidad de Gral. Mosconi y su zona de influencias (...) considerando también que la Fundación “FUNDATRAD” podrá contar con apoyo para la ejecución de distintas obras... (Considerandos).

Este convenio queda legalizado en el marco de la ley N°6838, a la que hicimos referencia en el apartado II del capítulo 2, la cual fue reglamentada en gobierno de J. C Romero y

⁵⁹⁰ Previo a la creación de la Fundación, la UTD realizaba diversas tareas de gestión de planes y proyectos mediante la personería jurídica que el Club Madereros les “prestaba” para tal fin. El Club Madereros es un importante club barrial de fútbol en la localidad de Mosconi.

⁵⁹¹ Res. N° 312, Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Salta.

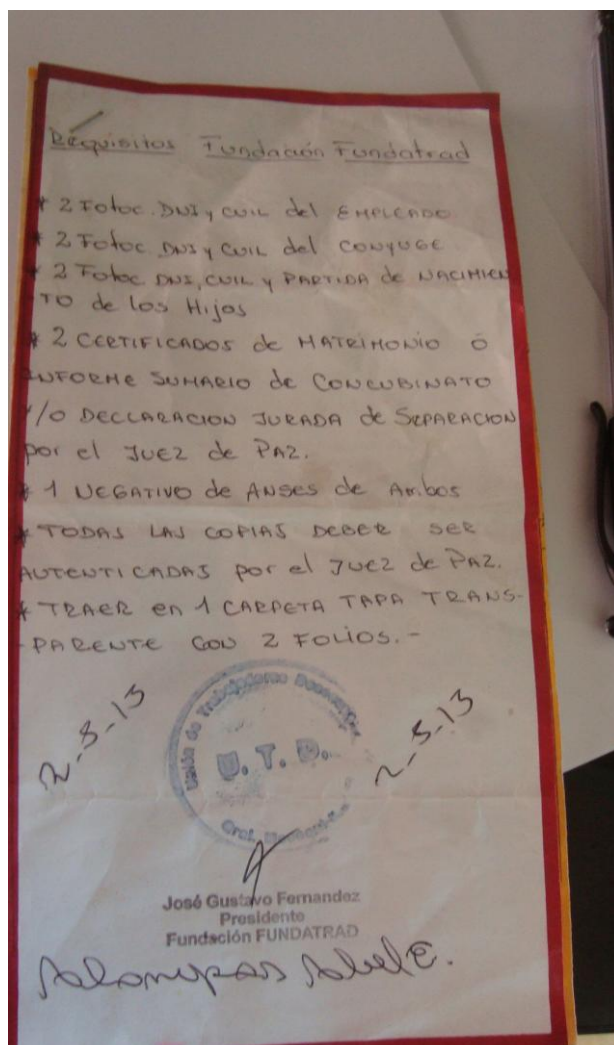
revalidada a posteriori, para reorganizar los vínculos entre el Estado y la Sociedad Civil en el proceso de reformas de Estado de perfil neoliberal.

A su vez, cabe remarcar, que lo decretado no corresponde con las realidades político - gubernamentales locales, ya que la UTD tiene confrontaciones añejas con la provincia en torno de la realización de obras, esto se cristaliza en las dificultades para realizar las obras en el marco del Fondo de Reparación Histórica. Por último, en abril de 2011, por Resolución N° 2251, 15 de marzo del 2011, FUNDATRAD resultó acreditada como Organización Administradora por el Registro Único de Organizaciones Administradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Como fue señalado, en el 2008 FUNDATRAD-UTD ingresa en el régimen de “empleadores” dispuesto por ANSES, ente del cual reciben los aportes dirigidos al pago de asignaciones familiares. En ese entonces, FUNDATRAD contaba con un total de 14 empleados, luego pasó a 74 y en el 2013 más de 600, resultando uno de los pocos lugares que “toma” gente, en la zona. Así, entre el acierto y la astucia, la fundación ha sido instalada de un modo “clandestino”, “...aprendiendo de los grandes...las empresa contreras” (Rodolfo “Chiqui” Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, setiembre: 2012), a quienes, por un lado la UTD les pedía algún subsidio para los talleres, y por otro luego les solicitó el blanqueamiento de los empleados. A partir de esto comenzaron a notar que dichas empresas rendían en ANSES, entidad ante la cual eran “empleadores”, un mínimo del monto a pagar que figuraba en el recibo de sueldo (en blanco), siendo otro el monto en bruto (en negro) que recibían los contratados. De este modo, las empresas pagaban menos aportes. Ante esta situación, los dirigentes de UTD se dirigieron a ANSES y, estratégicamente, gestionaron advenir empleadores, sin dependencias externas “entre” lo dispuesto y lo otro:

Nosotros le buscamos la vuelta sin joder al estado, y le pagamos al estado, nosotros somos todos autónomos. La fundación es autónoma Porque nosotros hacemos todo así, vamos y si nos dicen no se puede hacer la escuela, la hacemos de prepo, no le pedimos permiso a nadie. Para hacer el barrio hemos tomado las tierras de prepo y después arreglamos, construimos primero, hacemos y después agarramos y vamos a negociar con el intendente, con el dueño de la finca, (...) las tierras las pagamos 25 pesos por metro y tierra hay de sobra en Mosconi, es el que más tierra tiene. Entonces hay que ocupar la tierra. Entonces hay gente que viene acá, que por los hijos, nos lloraban que hagamos las casitas, que cuesta mucho hacerlas, e hicimos las casas. (...) El Estado da subsidios y se los gasta en otras cosas. Esto no es un subsidio porque yo pago la AFIP, pago la DGI, pago la contadora, pago todo, para la dirección de trabajo, pago todo. Es legal. Hay los que trabajan 3 o 4 horas, el mínimo, y es un sueldo que es el mismo. Y nos quiso meter la ART, la ART que es un negocio, también redondo, una ART que tenés que pagar casi 200 mil 300 mil pesos por mes, nos exigen la obra social, obra social que no podemos tener, es

cara, tenés que pagar 250 mil pesos.(J. Pepino Fernández, referente UTD y presidente Fundatrad, entrevista, setiembre: 2013)



La gráfica nos muestra los requisitos y documentos que deberían entregar quiénes pretenden recibir el “salario” otorgado por la Fundación, según enunciaciones nativas, acorde a lo solicitado por ANSES, entre los cuales encontramos: dos copias del DNI y del CUIL del empleado; dos copias DNI y CUIL del cónyuge, dos copias DNI, CUIL y partida de nacimiento de los hijos; dos copias de certificado de matrimonio, y/o informe sumario de concubinato y/o declaración jurada de separación firmada por el Juez de Paz, un negativo de ANSES de ambo,; todas las copias deben estar autenticadas por el Juez de paz y quienes realizan el trámite de ingreso deben entregar una carpeta transparente con dos folios.

En una de nuestras estadias en el campo, mientras estábamos en la oficina administrativa, fueron varias personas, ante todo, hombres varones, quiénes se acercaban a preguntar por la fundación y a entregar los papeles, los que solo se reciben entre las 16 y las 18hs de cada día. Mientras Chiqui Peralta los recibía, revisaba y completaba las carpetas, les consultaba acerca del por qué iban en ese momento y la mayoría de ellos decía: -porque se había frenado la cosecha del limón, ante todo por la sequía y por las condiciones económicas en dicho rubro, por eso se habían quedado sin trabajo y ellos siempre sabían que la UTD era un lugar que “tomaba gente”, aunque fuese temporalmente. Venían de Tartagal, de Cornejo, de algunas comunidades indígenas más o menos cercanas, algunos hombres varones de entre 30 y 40 años, otros jóvenes de no más de 20, que en medio de la entrega de papeles y sacada de fotocopias nos comentaban que también estudiaban, ya sea terminando el secundario o en el terciario en Mosconi o en Tartagal.

Una vez entregados los papeles correspondientes, en la oficina administrativa se arman las carpetas y luego Pepino y Sandra realizan un tipo de evaluación parcial, según se cumpla o no con los requisitos. Luego, desde la oficina administrativa de la UTD, todo se ordena en folios y se lleva a la oficina de ANSES, cuya sede central se encuentra en Tartagal, al igual que AFIP, entre otros. Por lo cual, diariamente Chiqui Peralta, así como Pepino viajan a Tartagal, en camioneta y/o en moto, para realizar diversos trámites administrativos.

También nos resulta relevante señalar que la nota informativa en la cual se puntúan los documentos que hay que certificar y entregar para poder ingresar a la Fundación y cobrar el salario está firmada por Pepino Fernández como presidente y lleva el sello de la UTD Mosconi. Observamos cómo, entonces, FUNDATRAD es parte de la UTD y ésta, a su vez, es el espacio de legitimación, reconocimiento e identificación, por su trayectoria, sus tareas, sus modos de trabajar, otorgar y generar trabajos en la zona, para aquellos/as quienes se acercan en búsqueda de algún tipo de labor y/o para el cobro del salario en la fundación.

3.1.a- FUNDATRAD-UTD y la cuestión del trabajo

En este vaivén de relaciones dinámicas, finitas y movedizas, FUNDATRAD, según su estatuto, tiene por objetos, primordialmente en la provincia de Salta: cooperar con las instituciones públicas y privadas, fomentar el cooperativismo y el estudio de los problemas, promover planes, programas y proyectos, estudios de investigaciones y toda

iniciativa que contribuya al desarrollo económico, cultural y social de la provincia y la región, crear y mantener o contribuir en su sostenimiento a institutos, departamentos o centros de estudios de carácter técnicos científicos, tendiendo en especial óptimo conocimiento del medio económico y mejoramiento de los métodos de trabajo y al adelanto técnico de los medios de producción, mejorar el bienestar de la comunidad, en especial de los sectores de escasos recursos y situaciones de desventajas, mediante la generación de proyectos económicos sociales y servicios en general, entre otros.⁵⁹²

En el marco de los objetivos estatutarios, disposiciones ministeriales antedichas y las prácticas cotidianas de la Fundación, en el siguiente cuadro realizamos un recorrido por las diferentes prácticas realizadas por la FUNDATRAD-UTD desde el año previo a su instalación. Dicho cuadro es fiel al presentado por la Fundación en su marco legal de constitución y descripción laboral específica y, fue otorgado a modo de información por la oficina administrativa de la UTD.

AÑO	ASUNTO	RES.
2005	Notas construcción Esc. Albergue “El Trementinal”	
2005	Creación de 20 cooperativas. Con 16 socios para construcción viviendas y otras	
2006	Estudio epidemiológico de Gral. Mosconi	
2006	Comunicado lanzamiento taller de cine	
2006	Encuentro por la soberanía de Gral. Mosconi : sociólogos de EE.UU, España, Italia, etc.	
2006	Entrega informe taller de cine del 19 al 27 de agosto, con Inst. Goethe : cineasta alemana Jeanine Meerapfel	
2006	Entrega copia nota de referencia N°3719/06 por beca conseguida con Madres para la carrera de agroecología en la Universidad de Venezuela, al joven Lucas Cabana	
2006	Entrega nota N° 3807 a Dinacri, presentación 22 proyectos Manos a la Obra 1ra y 2da etapa	
2007	Pozo de agua potable B° San Francisco-Mosconi	Proy. 4521/07- PROPAS A-IPV S.A.
2007	Donación máquinas de escribir centros de jubilados y otros	
2007	Apoyo de cineastas europeos recibido por atentado a miembro de la UTD	
2007	Acta ex/trabajadores de YPF con Ministerio de economía	

⁵⁹² Estatuto, Art. Segundo, resolución N° 312/agosto/06. Ministerio de gobierno y justicia de la provincia de Salta.

2007	Vialidad Nacional solicita donación de máquina para F.F	
2007	Presenta copia nota del 6/12/07 de ENARSA contestando nota del 23/11/07, S/ construcción gas NEA, cuando comiencen las obras se reunirá con el Sr. Pepino Fernández	
2007	Inauguración B° San Francisco. 1° etapa de viviendas a cargo del ministro Julio De Vido	
2007	Inauguración de la Universidad Popular Madres Plaza de Mayo "JU.VE.GO.SA.BA." subsele Vespucio C7 Hebe de Bonafini	
2008	Pozo de agua potable Misión Cáceres (Dec. 4415/08)	125/1755 8/08- O.P.S.A
2008	Construcción de 5 módulo habitacionales en Pozo Bravo, Chaco Salteño	714-IPV- S.O.P. S.A
2008	Revestimientos canal B° La Merced-Mosconi 1° etapa (DEC. 4415/08)	125- 17666/08- S.O.P.SA
2008	Construcción Cordón Cuneta Avda. Güemes. B° Güemes Mosconi DEC. 4415/08	125- 17953/08- S.O.P.SA
2008	Convenio Colaboración, por obras públicas con la provincia de Salta	
2008	Construcción Obra Centro de Erosión- A° Q. De Galarza	Constr. Dir. 13/08 D.N.V
2008	Entrega nota 4169/08 al C. Delib. de Mosconi, solicitando reparación ruta a Campamento Vesp. "con fresado y rap., gratis	
2008	Presentación entrega formularios con clave personal del "régimen de transferencia electr. de datos de la FF en el AFIP"	
2008	Solicitud-Permios V.N para ocupar predios con fines sociales. Negativo	
2008	Convenios de asistencia y cooperación entre provincia de Salta y la Funda. RECHAZADO	
2008	Decreto Provincial N° 4415/08 aprobación convenio de mutua asistencia y Cooper. Provincia y fundación	
2008	Donaciones deportivas	
2008	Cédula de nota de Min. De Fin y Ob. Pub, de la provincia para inicio de obras públicas	
2008	Entrega de convenio con Bomberos Voluntarios sobre ejecución de futuras obras/cuartel de bomberos	
2009	Construcción de 25 núcleos húmedos de la provincia	S.O.P. S.A
2009	Entrega copia nota N° 3539 a Desarrollo Social de la Nación pidiendo construcción de 20 Viv. por el temporal	
2009	Puesta en marcha del Py. "Vamos por mas educación y aprendizaje, etc" con asistentes sociales de Mosconi	
2009	Confeción y solicitud del Py. De 80 Viv. para Misión Aborigen "La Esperanza"	
2009	Construcción de vivienda para a familia con casa incendiada	

	Sr. Ruiz Díaz	
2009	Taller y presentación del film “Tierra Sublevada” de Pino Solanas	
2010	Construcción de Esc. Albergue Paraje El Tremontinal-Mosconi	
2010	Construcción de 4 aulas albergue para 100 niños alojamiento para maestros, cocina, baños, etc.	Particular - FORTAB AT
2010	Construcción de 3.000 mts cordón cuneta B° San Francisco, La Esperanza y Cornejo 1° etapa	1270/08- S.O.P. Min. De Planif. Federal
2010	Construcción de 20 viv. Misión Wichi, Mamposterías y Madera	Fundatrad . DINACRI
2010	Seminario para integrantes de la fábrica de ropa UTD, con el INTI	
2010	Donación de Chapas y madera para misión wichi por tornado	
2011	Convenio Programa Federal de Integración comunitaria, continuación del programa	
2011	Convenio para construir 150 núcleos húmedos del Programa Mejor Vivir (sale en 2013)	
2012	Construcción cordón cuneta B° San Francisco. La Esperanza, Cornejo 2° etapa	1270/08 P.F.I.S
2013	FUNDATRAD empleadora con 600 empleados registrados	
ANU AL	Campaña de lucha contra el dengue en forma anual	
	Donación anual de 2.000 guardapolvos a los escolares de Mosconi	
	Agasajo anual del “Día del Niño”	
	Agasajo anual del “Día de la Madre”	
	Agasajo anual del “Día del Trabajador”	
	Agasajo anual del “Día Internacional de la Mujer”	
	Donación permanente de plantines de especies nativas del vivero propio para reforestación de la zona	
	Refacción y construcción de viviendas para familias de escasos recursos en forma permanente	

Entre algunas de las actividades que se mencionan en el esquema y que dan cuenta del cruce de lógicas y prácticas en el espacio de la Fundación y la UTD, en referencia al intento por “recuperar” YPF, se advierte la pretensión de complementar trabajo y educación para generar más trabajo en condiciones de dignidad, y las diversidad de prácticas astutas, en el juego vincular de gestión y obtención de recursos para la producción creativa de sus objetivos, realidades y subjetividades, además del proyecto

de la escolita de frontera de Tremental al que ya hicimos referencia, se encuentra el de La Universidad Popular de Mosconi. Dicha institució, con altibajos, funciona en las instalaciones de la ex proveeduría de YPF, en Vespucio. Allí, en un primer momento, mediante convenio con la Universidad Católica de Salta, se dictó la carrera de Técnico en Cría Animal, así como diferentes cursos con profesores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Luego, con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se dictaron talleres de mecánica, soldadura, peluquería entre otros. Desde el año 2011 comenzó a funcionar como una extensión de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, con carreras como Ciencia-Política y Educación Física, además de la formación en los oficios antedichos. Si bien, para el año 2013 la Universidad se encontraba desfinanciada y casi sin actividades, se mantiene en pie con un espacio físico amplio, ajustado a la situación, con una planta docente transitoria y alumnos que se van incorporando a las diferentes carreras (la universidad está abierta a toda la comunidad, no solo a integrantes o simpatizantes de UTD). Según las palabras del rector, Juan Carlos “Gipi” Fernández: “...*lo que prima y guía el proyecto es la fuerte convicción de que la construcción del conocimiento es la pata que falta para la liberación y reafirmación del proceso organizativo de UTD*” (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2011).

Entre otras actividades de tipo cultural se encuentra la recuperación del cine que pertenecía a YPF, en las cercanías de la proveeduría de Vespucio, finalmente llevada a cabo por un grupo de jóvenes locales con el apoyo de la UTD. Por último, ligado al trabajo comunitario junto con las comunidades wichí, la UTD ha desarrollado con los artesanos indígenas y “criollos”, un proyecto de recuperación, enseñanza y comercialización de las artesanías de la región.

Las diferentes actividades, tareas y tramos vinculares descriptos dan cuenta de la superposición que la UTD y la Fundación, en tanto espacio jurídico-legal de la organización, tienen en su realización, de hecho:

Tanto los empleados de la Fundación como de las cooperativas utilizan la infraestructura de la UTD. Con la gente de la Fundación se hicieron entre setiembre del 2013 y del 2014 núcleos húmedos para el Programa Mejor Vivir de la Subsecretaría de viviendas de la Nación, que solo giró la primera partida para 15 núcleos, se terminamos igual los otros 15 y más de la mitad de una posible segunda etapa (...) ¿¿con qué?! con recursos de la fundación generados con nuestros proyectos. (R. Chiqui Peralta, referente arrea administrativa UTD, entrevista, setiembre: 2014)

En tal sentido, la experiencia singular de la Fundación en el espacio de la UTD y sus lógicas, también pone en jaque la relación clásica entre “capital y trabajo”, según palabras de su presidente, Pepino Fernández: *“No somos una empresa nosotros, somos un grupo solidario (...) ANSES, AFIP y el Ministerio de trabajo nos persiguen, porque nosotros no capitalizamos, nosotros hacemos trabajo social y eso no genera capital”* (J. Pepino Fernández, referente área gestión UTD y presidente Fundatrad, entrevista, julio: 2013).

El trabajo social se traduce en trabajo “para y con” la comunidad (construcción de casas, limpieza, fumigaciones, forestación, etc.)⁵⁹³, y el pago a ANSES se realiza mediante los ingresos generados por los otros proyectos, y el cobro de un monto mínimo a los empleados o socios. En tanto, para que la fundación pueda funcionar es necesario que se realice una pequeña colaboración (\$60 mensuales), pero no todos lo hacen y no todos los meses, lo cual implica buscar por otro lado, cómo pedirle al carnicero o al verdulero, y redistribuir los fondos obtenidos de la producción local, por ejemplo: de los proyectos productivos, entre otras actividades.

En esta red local de poder, gobierno y verdad, cabe apenas mencionar que a medida que FUNDATRAD se fue consolidando, en los últimos años (2012-2014) se configuró como un espacio que, sin dejar de ser “un logro de la UTD”, así como de funcionar en las oficinas de los galpones y de organizar las tareas del modo en que la UTD lo ha hecho siempre, fue cobrando cierta autonomía. Lo antedicho se avista en cómo la gestión y administración se ha centrado en la figura de uno de sus referentes históricos. Esto conlleva a re-pensar las relaciones de poder/gobierno en el trazo de la UTD, en torno de la re-configuración de los liderazgos, ya analizados al modo de “personalismos participativos inorgánicos” (Wahren, 2011), considerando que las diferentes figuras de referencia tienen asignados distintos roles y funciones, que operan como aglutinadores de la organización, mientras se complementan recíprocamente⁵⁹⁴. Son valoradas ciertas actitudes y cualidades, como la presencia, el coraje, la entrega, la constancia, la “ejemplaridad” (Svampa y Pereyra, 2003: 136).

Ahora bien, lo antedicho implica también señalar que la UTD se encuentra atravesada por diferentes herencias patronales, algunas heredadas de YPF, otras de los modos serviles, feudales y de explotación que han tejido las relaciones laborales en la provincia

⁵⁹³ También la Fundación realiza trabajos con y para las pymes locales, que se acercan a UTD en búsqueda de gente, así como actividades changarinas, como cagar ripio, las cuales se pagan diariamente luego de terminada la jornada de trabajo.

⁵⁹⁴ Ver: Wahren, 2011:151.

de Salta, desde mediados del siglo XIX-XX⁵⁹⁵. En este enjambre relacional que teje el espacio de la Fundación, comprendida como un “espacio que toma gente, que da empleo” y que es parte del “movimiento UTD”, la subjetividad del líder es re-configurada, entre “ejemplaridad, entrega y astucia”, a partir de lo cual se instala como jefe y/o patrón de referencia, a quien se le debe respeto, escucha y consulta:

Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, somos los que realmente nos esforzamos (...) yo soy el responsable de toda la fundación. Yo soy el que agarra y da de baja y alta, los hago trabajar a todos, hago toda la parte operativa, cosa que a nadie le tiren la bronca, si le quieren tirar la bronca o amenaza de muerte a mí, a ningún otro más, a ninguna otra persona (J. Pepino Fernández, referente área gestión UTD y presidente Fundatrad, entrevista, setiembre: 2013).

Sin embargo y en sintonía, en la heterárquica relación de poder, gobierno y resistencia, existen discusiones cotidianas para con las decisiones tomadas por parte de estos referentes. De hecho, en varios viajes de campo pudimos observar discusiones respecto de la distribución de tareas en la fundación, por ejemplo: acerca del uso de las maquinarias vivimos una ferviente discusión, cuando no hubo acuerdo respecto de una solicitud de trabajo realizada por Pepino, presidente de Fundatrad, y una modalidad para el ejercicio del mismo establecida por el trabajador.

La experiencia de la Fundación, según lo descripto y analizado pone en juego, en jaque y de manifiesto, el movedizo haz de relaciones que la UTD ha ido construyendo a lo largo de los años y de los procesos de lucha. Puesto que, se negocia y se establecen vínculos laborales de gestión, organización y trabajo con diferentes espacios instituidos y no instituidos, estatales y no estatales, religiosos, deportivos, empresariales, entre otros; mientras que se resubjetivizan en relación con los roles a cumplir, las tareas a desarrollar, las responsabilidades a distribuir y/o acaparar. La Fundación, entonces, construida bajo la modalidad organizativa de la UTD, marca una singularidad, una diferencia del hoy respecto del ayer en el espacio de Unión de la UTD Mosconi, en tanto se ponen a jugar de modos astutos las lógicas de la legalidad, la formalidad y el patronazgo, entre la lucha infinita por trabajo en los senderos finitos del viviendo.

3.2- Organización del trabajo: Tareas, actitudes, herencias y re-creaciones

En este diagrama de autogobierno local y laboral, y en continuidad con lo trabajado en el apartado III del capítulo 2, otro punto a señalar y analizar es cómo se organiza la actividad laboral diaria. Como ya fue consignado, existen referentes por áreas: técnica,

⁵⁹⁵ Ver: Benclowics, 2013: 27-52 y 67-71.

administrativa y operativa o gestiva, y a su vez encargados de sección. Los trabajos se realizan en su mayoría entre 4hs y 6hs diarias (distribuidas acorde a los fuertes calores locales). Las condiciones laborales en los galpones, en los cuales funcionan los proyectos productivos ya analizados, resultan dentro de lo que se considera digno, pues tienen baños, duchas y posibilidad de calentar agua para mate y te. Las herramientas utilizadas para las diferentes tareas (palas, máquinas de cortar césped, carretillas, mezcladoras, etc.) permanecen guardadas en un salón del galpón principal, se las retira y se las guarda, en igual lugar luego de cada jornada.⁵⁹⁶ Dicho galpón también sirve de depósito para los muebles que hace la carpintería y que suelen, además de ser distribuidos en las casas construidas por la UTD, vendidos a diferentes individuales y/o empresas.

Particularmente nos interesa analizar el modo en el cual, en la actualidad más cercana, la distribución de las actividades y las modalidades de trabajo, denotan cierta herencia de la organización – disciplinar - trabajo en la empresa-fábrica YPF, lo que se entrecruza, según enunciaciones nativas, con “la docencia” que deben realizar los referentes ante todo, para con el cumplimiento del trabajo, así como para su distribución horaria.: “... *una cierta disciplina donde vos vas imponiendo, le guste o no le guste a la gente, vos vas imponiendo con tu trabajo y también con la indicación y vas haciendo docencia*” (Rodolfo “Chiqui” Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, setiembre: 2012). Entre la ejemplaridad y la docencia, entre las resonancias del trabajo fabril, antes y luego de ingresar a realizar las tareas correspondientes, se “tarja”, es decir se firma en un cuaderno el ingreso y el retiro. La tarea de “tarja” está a cargo de grupos de jóvenes mujeres cuando corresponden a proyectos productivos y los derivados de los Ministerio de Trabajo, Infraestructura y Desarrollo Social de la Nación. En el caso de la Fundación la tarja es llevada a cabo por una de las encargadas, puntualmente la Secretaria Sandra Zerpa, considerada “gente de confianza” de Pepino.

⁵⁹⁶ Un 40% de los trabajadores de y en UTD son mujeres.



Fotos, Cora Paulizzi. Oficina y momento de firma, tarja de ingreso, a la mañana temprano. Julio, 2013.

También los trabajos, ya sean los que se disponen en el marco de programas y planes sociales, como las tareas de la Fundación, suelen distribuirse según edades, género, tipo de actividad, pero ante todo, según las “actitudes” de las personas, lo cual se traduce en: las ganas, el entusiasmo y la perseverancia: *“Y el que no demostraba ganas bueno, no se le daba la baja, nada, sino que se iba a otros lugares, no le gustaba la parte de oficina, iba a la huerta, entonces así hacemos una redistribución con la gente de acuerdo con las actitudes”* (Rodolfo Chiqui Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista setiembre, 2012). La “actitud” señalada como fundamental para uno de los referentes de la UTD, entonces, no remite a un “capital”. En la práctica concreta y cotidiana de construcción y constitución, observamos cómo se entrecruzan lógicas estéticas y éticas, entre el gusto, el deseo, el bienestar y ciertos modos de estar siendo en el mundo y con otros, según lo que se consideran pasos firmes hacia el trabajo digno y las condiciones genuinas de trabajo.

En este sentido, en recorridos de campo, así como desde un trabajo de entrevistas grupales, también observamos los múltiples modos en los cuales “los/as” trabajadores de la UTD seleccionan, modifican, sostienen una tarea/trabajo. Las tareas se distribuyen según la necesidad, lo que se sabe hacer y con ello las actitudes, así como las

posibilidades, ya que, en más de un caso, en especial las mujeres, habían rotado en varios de los trabajos, debido a situaciones personales como los horarios de escolaridad de sus hijos, trabajos extras para limpiar casas, cuidar niños, por estudio, porque se dieron cuenta que no les gustaba lo que habían elegido al principio o se les había designado, etc. Mientras que los hombres varones, en su mayoría nucleados en la carpintería, en el taller de soldadura de alta tensión, en el de reciclado de plásticos, en la construcción y la mantención de los espacios verdes, se encuentran en dichos lugares de trabajo por herencia familiar, por conocimiento previo del oficio y/o bajo la figura de aprendiz del mismo.



Fotos, Cora Paulizzi, julio: 2013 Diferentes trabajos /obras - núcleos húmedos, ampliación, refacciones, de la UTD y la Fundación.

En el caso de los trabajadores por el “salario” de la fundación, se distribuyen, ante todo, en actividades de desmalezamiento, albañilería, fumigación, mientras que las mujeres realizan algunas tareas administrativas, otras algunas labores en los proyectos productivos de los galpones del ferrocarril. También forman parte de la UTD comunidades indígenas que realizan diferentes actividades en el trazo de los programas de autogestión comunitaria, como en la Fundación:

Tenemos más de 150 empleados blanqueados en la Fundación, Guaraníes de Cherenta, Yacuy, Tranquitas, Municipio de Tartagal y las Sierra Mosconences, Tremental, Madrejones, Yrigoyen, Cornejo, Embarcación. Trabajan en sus chacras y huertas o en las construcciones de ellos o de otras personas en Tartagal y Mosconi. Más de 30 Matacos y

Tobas de Mosconi y del cruce en Mosconi. En igual proporción de salarios de Fundación y de planes. (Rodolfo “Chiqui” Peralta, referente área administrativa UTD, entrevista, julio: 2014)

Estas modalidades múltiples de organizar el trabajo, ponen de manifiesto la construcción abierta y movetiza de la UTD en el espacio local y regional, territorializando las prácticas y expandiendo las proyecciones laborales, en una astuta afirmación de su estar siendo trabajadores desocupados en pie de lucha.

4- Las prácticas de transacción, negociación, discusión y la transgresión: *El Estado verdadero y el Estado Gobernante*

“Nosotros inventamos las cosas o hacemos de prepo, nosotros no dependemos del Estado”

(J. Pepino Fernández, referente UTD y presidente Fundatrad, entrevista, julio: 2013)

“....Y vamos al revés del país, porque cuando otros dicen se va todo, ya no va más, nosotros decimos no, nosotros creemos que sí va más”

(J.C. Gipi Fernández, referente UTD, entrevista setiembre: 2012).

Las prácticas astutas y cotidianas que tejen el entramado vincular de la UTD se realizan, como ha sido señalado, en relación con técnicas y mecanismos de intervención codificados en el Estado y dirigidos a las poblaciones “pobres desocupadas”. Dichas tramas relacionales, no solo implican la negociación por gestión de planes, que más bien construyen campos transaccionales (Manzano, 2009), en torno de los cuales la resistencia no se ejerce en suma cero, sino que en la relación entre gobernados y gobernantes se construyen redes vinculares de aceptación, recepción, acatamiento, transformación, recreación, reconfiguración, también de negación y transgresión. En este juego transaccional, como interface entre gobernados y gobernantes, la UTD también pone en jaque el reconocimiento de su lucha y trabajo, entre otras cuestiones.

En este sentido, cabe referir a como se construyen y consideran, según nociones nativas, los Estado-s⁵⁹⁷, con los que en simultáneo se articula, ante y entre los cuales se lucha, transforma y rebasan.

⁵⁹⁷ La recuperación de categorías nativas se entrelaza con la consideración que, en torno del Estado, se ha planteado en la introducción de la presente tesis, esto es desde las peripecias de la gubernamentalidad. Este enfoque discute tanto con la perspectiva normativa del Estado, como con aquellas que piensan en clave de “estatalización de la sociedad” y del binomio “Estado-Sociedad”. Por tanto, las prácticas astutas de la UTD no son consideradas cuando se enuncian como “estado verdadero”, como prácticas ciudadanas o prácticas sociales de petición legítima de representatividad o denuncia de errores del Estado, más bien se trataría de prácticas de resistencia y des-individuación crítica, que toma este modo de nombrar-se en el siendo cotidiano.

Por un lado, se considera que existe el “Estado gobernante”, el elegido en votación democrática, encargado de la administración pública y de las decisiones, en torno a la distribución de presupuestos, ordenamiento territorial, etc. Por otro lado, se encuentra el *Estado verdadero*, el que es menester recuperar y del cual todos somos parte: “*Estado autónomo de todos nosotros, nos permite que esto sea así.*” (J.C. Gipi Fernández, entrevista, setiembre: 2012).

Entre los tramos enunciativos contruidos por la UTD encontramos una marcada insistencia en la “recuperación del Estado” que fue YPF, lo cual inmediatamente se asocia con la “recuperación de la familia y de la vida”. La UTD se instala como un espacio territorial de unión y reconfiguración presente del entramado social y comunitario que implicaban las prácticas de intervención de YPF en tanto empresa-fábrica estatal, según lo trabajado en el apartado III del capítulo 1. La UTD, en coincidencia con Wahren (2011), intenta ser un factor de reactivación económica, laboral y social en la región con la característica peculiar de que, en general, sus modos de organización operan por fuera de la institucionalidad estatal, lo cual remarca la heterarquía en los trazos analíticos de las relaciones de poder, gobierno y verdad analizados:

Entonces nosotros no nos hemos ido del objetivo y ha habido algunas cosas que hemos ido desarrollando, es decir, ¿cómo tenés viva a YPF? y nosotros como pensamos que tener viva a YPF es tenerlos a los edificios y las actividades, porque cuando... es como el ser humano, cuando el ser humano deja de funcionar, deja de tener actividad, deja de caminar, y bueno, se va muriendo. Entonces nosotros no hemos dejado que se muera YPF. Porque constantemente en todos estos últimos años que han pasado se ha hablado constantemente de Mosconi, de una forma u otra. Y dentro de eso hemos ocupado esos espacios físicos que ha habido, esas estructuras que ha habido de YPF para que se desarrollen diversas actividades. Eso ha permitido que YPF se sostenga (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, julio: 2012)⁵⁹⁸.

Lo antedicho, nos invita a pensar los modos locales y finitos a partir de los cuales se recrean aquellos lazos sociales, que las prácticas de gobierno de perfil neoliberal destruyeron y/o recrearon bajo un perfil empresarial, acorde a la figura del sujeto pobre como “hombre económico”, ante todo, así como moribundos. Ahora bien, siguiendo a Svampa (2003) y a Wahren (2011) estas referencias de la UTD también remiten a un Estado que funcione como una especie de “ordenador social” de los beneficios de los

⁵⁹⁸ A lo largo de nuestro trabajo de campo hemos observado por ejemplo: que la UTD mantiene en su logos los colores y formatos de letra de la antigua YPF, entre azul y blanco pintado cada uno de sus espacios físicos, herramientas, cartelías y sellos.

ciudadanos, lo cual se traslada a la posibilidad de transformarse en el espacio de gobierno municipal/local. De ahí, la definición, también de la UTD, como un Estado municipal paralelo:

...funcionamos como un municipio paralelo, para nosotros hay un Estado que gobierna, y otro Estado que somos todos, por eso tomamos decisiones, muchas veces sin consultar, vemos los problemas y buscamos la manera de resolverlos con lo que tenemos y podemos conseguir (J.C. Gipi Fernández, entrevista, setiembre: 2012).

Si bien, estas categorizaciones nativas en torno del Estado, por un lado se ven atravesadas de la percepción local del “Estado paralelo”, que también significó YPF en la época de su esplendor económico y social; por otro lado, remiten a las diversas modalidades a través de las cuales este Estado, que según enunciaciones nativas “somos todos”, se construye cuando se señala que la UTD: “*es el Estado de los movimientos sociales*” (José Pepino Fernández, entrevista, setiembre: 2012). De este modo consideramos que se ejercita un proceso de des-individualización por parte de los trabajadores desocupados y piqueteros, como sujetos pobres y desocupados de gobierno, ante todo mediante la reconfiguración, el desplazamiento, el re-ordenamiento y la impugnación de prácticas y espacios que los disponen como tales. A partir de lo cual, la unión heterárquica y heterocrónica que configura a la UTD no responde a un lazo orgánico, que une individuos jerarquizados, sino a un constante generador de prácticas de re-configuración y re-subjetivación siendo.

En este sentido, los integrantes de UTD consideran que el mejor sistema que puede aplicar el:

Estado que somos nosotros, es el Movimiento, ¿Cómo lo desarrolla? Con estrategias, cuando vos tenés un pueblo que ha atravesado la privatización se va muriendo, y al no generar un movimiento se sigue muriendo. Entonces, nosotros tenemos que generar ese movimiento, por ahí con protestas, por ahí con formas de trabajo, y eso es esta organización (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012)

En este diagrama de poder y gobierno, entre otras cuestiones, la Unión de Trabajadores desocupados de Mosconi se ha mantenido al margen de los intentos de cooptación, por parte de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, así como le ha puesto el cuerpo a los hechos de represión, ya sea mediante la desmovilización, la encarcelación de sus referentes y hasta la muerte: “*...Salta es muy feudal, no puede ser que hoy en democracia te sientas perseguido, porque sos perseguido, en cualquier movimiento que realizas te meten preso, o te persiguen a la familia.*” (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD entrevista, setiembre: 2012)

Sin embargo y como ha sido trabajado, en este juego de transacciones, la organización sí mantenía vínculos directos y específicos con algunos ministros del gobierno nacional, como la ministra de Desarrollo social Alicia Kirchner, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y de Obras Públicas De Vido. Sobre todo, se reconoce desde el 2003 hasta el 2009 aproximadamente, una ampliación al diálogo y la negociación con el gobierno nacional. Sin embargo, en el juego de fabricar-se y de ese modo des-hacer-se como sujetos gobernables, señalan: *“Acá vos no les estás pidiendo nada, ni dádiva, ni nada, le estás pidiendo única y exclusivamente lo que a vos te corresponde”* (J. C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD entrevista, setiembre: 2011). La UTD, entonces, no apuesta al juego que instala el gobierno de la pobreza en los tramos vinculares para con los estados, y con ello las prácticas políticas de la “inclusión”, los avatares de la desigualdad, de los derechos impuestos, el juego de la estadística, del gobierno de la seguridad y la asistencia, cuyos objetivos remiten a la racionalización económica y estabilización política, a partir de lo cual sostienen que: *“...no queremos ser incluidos”* (J. Pepino Fernández, referente área gestión UTD, entrevista, julio: 2012).

Esto va de la mano con la singularidad autonómica de las prácticas de resistencia de UTD, en tanto se inscriben en el seno de una historia sólida, real y concreta, que es inmediata, que se acepta y se re-crea. Pues, lo que está en cuestión es el poder y los modos de ejercerlo, sobre los mismos sujetos y/o territorios, a partir de lo cual, en el caso planteado, se tejen otras redes y otros modos de ejercer dicho poder, astuta y tácticamente, por ejemplo *“...se negocia o se dialoga con objetivos y con pruebas, vas hablar con pruebas con hechos demostrando y después vas con las propuestas y les decís “mira lo que se puede hacer”* (J.C. Gipi Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, julio: 2012). Así se afirma la autonomía de la UTD, en un haz movedizo de prácticas entre vínculos astutos, resistentes y cotidianos, entre la negociación, decisión, articulación, desarticulación y reconfiguración. Para esto, el lema que parece atravesar el estar siendo de la organización desde sus inicios hasta la actualidad, con las singularidades analizadas es el de: *“Protestar con propuestas”*.

En tal sentido, la UTD se posiciona respecto de la re-nacionalización de YPF en abril del 2012. Cabe recordar lo trabajado en el capítulo 3 en referencia a las pocas repercusiones que dicha decisión político-gubernamental tuvo en el yacimiento norte, ubicado en la provincia de Salta, cuyo epicentro es el Departamento Gral. San Martín.

La resolución política en torno de YPF fue considerada por la UTD como efecto de la lucha, la resistencia y la insistencia de los trabajadores desocupados ex/ypefianos, organizados en diferentes espacios. Dicho acontecimiento fue celebrado en Mosconi el 16 de abril del 2012, mediante una masiva marcha hacía las tres cruces, en la cual se reivindicó el logro común y comunal de la renacionalización de YPF.

El 24 de abril del mismo año, en un acto de inauguración de una escuela secundaria en Areco⁵⁹⁹, Gipi Fernández⁶⁰⁰ le hizo entrega a la presidenta CFK de una muestra de petróleo de 1906⁶⁰¹, y de un cuadro de reconocimiento con los proyectos realizados, entre los que se encontraba la Universidad Popular. También le entregó una carta/nota en la que se solicitaba la reactivación del yacimiento norte para la generación de mano de obra, acompañada de producción y comercialización del petróleo y el gas, es decir de la reactivación de todo el sistema económico-productivo de la zona. Si bien no hubo respuesta de la mandataria a dicho pedido, los trabajadores desocupados y ex/ypefianos unidos en la UTD y en otros espacios de organización continuaron manifestando el logro que implicaba la renacionalización, parcial, de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A.

En tal sentido, diferentes tramos nativos de enunciación señalan, entre otras cuestiones, que YPF nunca se fue, que permaneció a través de las prácticas de lucha, trabajo, recuperación de los edificios, entre otras cuestiones. Esto ha permitido que Mosconi, pueblo petrolero, siga siendo partícipe de la historia nacional: *“La hemos mantenido viva, entonces hay una llama y una esperanza de que YPF iba a volver. Cuando todos decían no vuelve, por ahí siempre repito o digo lo mismo, que nosotros estamos al revés del país”* (J.C., Gipi, Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012).

Pepino señala, a su vez que: *“El gobierno ha hecho algo positivo, y después de todo el abandono que provocaron estas multinacionales se puede generar un nuevo auge de trabajo (...) A la larga la lucha da resultado. Se han tomado decisiones que había que*

⁵⁹⁹Se trata de la inauguración de la Escuela Secundaria N°3 de Villa Lía en San Antonio de Areco, provincia de Bs. As, el 24 de abril del 2012. En dicho discurso la presidenta refiere a la re-nacionalización de YPF del siguiente modo:- *“Nosotros que hemos levantado y estamos levantando una Argentina industrial, y que además queremos industrializar la ruralidad, porque también queremos agregar valor a la materia prima que se produce aquí, en el país profundo, para que los productores participen más en la cadena de valor necesitamos de la soberanía hidrocarburífera”* Fuente: presidencia de la Nación, en: <http://www.casarsada.gob.ar/informacion/archivo/25824-inauguracion-de-escuela-secundaria-en-san-antonio-de-areco-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion>; consultada setiembre, 2013.

⁶⁰⁰Gipi Fernández nos comentó, al pasar, en una entrevista en profundidad, que días antes de la renacionalización de YPF algunos dirigentes pertenecientes al programa de gobierno que presidía el país lo habían llamado por teléfono para conversar con él respecto de las programáticas en torno de las YPF que se venía, luego de la decisión estratégica tomada al respecto.

⁶⁰¹La muestra simbólica de petróleo entregada a la presidenta pertenece al primer pozo descubierto en 1906, bajo la coordinación de Francisco Tobar.

tomar para enfrentar a los grandes capitales”; Ahora bien, cuando se le pregunta acerca de los riesgos, Pepino responde: *“Queremos un cambio de fondo, no queremos que le den esto a los amigos de ellos sino a gente capaz, gente idónea, para que esto no sea sólo una esperanza, sino que funcione”*. (J. Pepino, Fernández, referente área gestión UTD y presidente Fundatrad, entrevista, abril: 2012).

Por lo tanto, con la renacionalización, se considera que YPF vuelve y ellos, los trabajadores desocupados unidos en la UTD, tienen que estar preparados para eso; remarcando que al 51% expropiado se le suma el 10% de las indemnizaciones históricas de los trabajadores exypéfianos que aún permanecía siendo una deuda del Estado, tras lo cual se considera imperante recuperar el otro 49%, qué está en manos de empresas privadas.

En tal sentido, según tramos nativos de enunciación el recupero de YPF y la puesta en marcha de un proyecto económico-productivo, no solo es considerado responsabilidad del Estado nacional, sino de “todos nosotros”. Se trataría entonces de reafirmar la autonomía de, en este caso puntual, la UTD y su lucha histórica por el trabajo, así como por el cuidado del medio ambiente y la insistente promoción de la explotación hidrocarburífera bajo el lema de:

...los pozos están vivos y que los están dejando morir las multinacionales instaladas en la zona (....) Confiamos en que se puede recuperar, pero hay que confiar en uno mismo, que es lo que yo te estaba diciendo. Bueno, si vas al revés del país, tenés que ir en busca de eso, tengo que ir en busca de lo que nosotros podemos hacer, no de lo que pueden hacer otros, sino que nosotros, por haber estado dentro de esto tan grande que es la parte del recurso natural del hidrocarburo, que por ahí esta denominado como recurso no renovable, y digo que hay muchísimas posibilidades, de generar muchas fuentes, más en la zona esta. (J. C. Gipi, Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012)

Gipi también nos decía respecto del proyecto económico-productivo a poner en marcha:

El país está preparado para eso. La economía de los carburíferos te da varias cosas, cuando hablamos de esto tenemos que hablar de una economía de comercialización, de una economía de productividad dentro de lo que es gas y petróleo, y cuando hablamos de esa economía de comercialización, de productividad, no hablemos únicamente de lo que es gas o de lo que es un pozo de perforación, el petróleo, hablemos lo que estoy hablando yo, que son las cadenas. Las cadenas éstas de comercialización, de productividad, ahí estamos hablando de todo el valor agregado, de una refinería, de plantas industriales, estamos hablando de cómo son las separaciones del gas, las separaciones del petróleo, hacia donde va y cuáles son las formaciones que tenés dentro de estas cadenas que te estoy hablando yo de las cadenas de comercialización y productivas, como por ahí vos hablas si, el campo somos todos, no. El campo no se mueve si, en el caso de YPF o cualquier otra empresa, y acá por lo menos la empresa más grande que tenemos, porque los agroquímicos salen del gas, del petróleo, de estos derivados salen todas estas cosas, entonces todo esto, cuando hablamos en el volumen este de las cadenas de comercialización y productivas, pasa todo esto, entonces sí o sí hay que tomarlo desde esa envergadura, no desde la envergadura de

decir –che, es esto no -. Qué es lo que vamos a generar con todo lo que nosotros tenemos. Acá tenés 600 pozos en....600 pozos marginales, dentro de esos pozos que te pueden dar 10 metros, te pueden dar 15 metros. (J.C. Gipi, Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012).

Dichas programáticas propositivas por parte de los dirigentes ex/ypefianos de y en la UTD se sostiene que fueron pensadas y proyectadas a partir de su condición de estar siendo ex/ypefianos integrantes y fundadores de una “organización social”; lo cual implica pensar en el trabajo, en la generación de mano de obra calificada, en el modo en el cual la tecnología ha suplido el trabajo humano y en cómo ir movilizándolo a los trabajadores para que puedan ocupar diferentes espacios en la cadena arriba descripta:

Hay plantas industriales que antes se manejaban con más de 100 personas y hoy se manejan con 12 operarios, con nada. Entonces vos siempre tenés que ir pensando cómo vas a ir generando las demás actividades, las que han quedado vacías. Porque si a ese recorrido que vos lo tenés ahí, hay que ver en qué lo implementas, en qué espacio lo pones, a esa persona. Entonces digo yo que los procesos tecnológicos que han hecho que el ser humano haya quedado, no puede ser que la máquina te gane a vos, si son construidas por el ser humano, no te pueden ganar nunca! Jamás te puede ganar! Entonces si vos sos el que pensás, no es la máquina la que piensa. (J.C. Gipi, Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, setiembre: 2012).

Estas afirmaciones en el espacio de unión de la UTD se enmarcan en las tramas nativas referidas a ese Estado que “somos todos nosotros”. A partir de dicha lógica política se remarca que es posible que YPF se desarrolle, recupere, ante todo señalando que ellos proyectan con esta decisión político-gubernamental prácticas laborales y económicas “desde otros horizontes”.

Kusch (2000c) nos recordaba, que la semilla lleva en sí misma a la planta entera, que nace, madura y muere, para volver a la tierra como semilla. El trabajo de la UTD en estos años, el trabajo aprendido, el trabajo reconfigurado, el trabajador luego desocupado, ex/ypefiano y también piquetero norteño sintió, pensó, se ilusionó con la renacionalización de YPF y puso en juego sus saberes, haceres y prácticas de organización en tal sentido. Sin embargo, YPF comenzó a trabajar en el sur, puntualmente en Vaca Muerta, bajo prácticas no convencionales de extracción y explotación, mientras que en el norte, acorde a lo ya trabajado, se llevan a cabo cada vez más concesiones, y los estados gobernantes están cada vez más distanciados de las luchas de los trabajadores petroleros y piqueteros⁶⁰²; mientras que se reafirma la autonomía de la UTD y las

⁶⁰² Cabe señalar que un importante grupo de trabajadores ex/ypefianos, no integrantes de la UTD, se reunieron con el gobernador Urtubey por los días de la nacionalización para conversar en torno del pago del 10% de indemnización nunca resuelta, hasta noviembre del año 2014. También, para este entonces se consolida la

prácticas de resistencia, lucha y autogobierno en tal sentido: “*La UTD no nació por un plan social, ni nos van a llevar por un bolsón de comida. Somos una organización con autonomía, para pelear por el trabajo, el derecho, la soberanía y la naturaleza*” (J. C. Gipí, Fernández, referente área técnica UTD, entrevista, abril: 2012).

Por lo tanto, acorde a lo desandado en el presente apartado y esbozando una primera conclusión, es posible referir a cómo las prácticas políticas de resistencia y autogobierno de la UTD resultan productivas y creativas, *poiéticas* y *poéticas* diríamos, lo cual se resume en las siguientes palabras de uno de los referentes de la UTD: “...*nuestro poder es la creatividad, no la fuerza...*” (J. Pepino Fernández, referente área gestión UTD presidente Fundatrad, entrevista, julio: 2012). Juego éste en el cual emergen y se instalan procesos de invención siempre fluida, en la cual hay papeles que pueden modificarse, reglas que pueden transgredirse y/o constitución de espacios en torno de la transgresión y la clandestinidad, así como la transacción y la aceptabilidad, la mutua configuración, la concesión, la necesidad y las libertades. Esto es, en la puesta en juego de un haz de relaciones, que pasando de un punto al otro ejercitan un proceso que a su vez también pasa, se mueve se desarma y se rearma, de un modo inmediato a veces y provisorio otras. A partir de lo cual se impugna el orden que se les dispone y/o gobierna, en un espacio de simultaneidades heterogéneas y heterocrónicas, mientras también se impugnan a sí mismos, en el constante proceso de des-sujeción crítica, entre discursos múltiples e identidades heterogéneas.

Esbozos Finales

En el presente capítulo, nos guió el objetivo dirigido a analizar cómo se ejerce el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres –desocupados - en el marco de las lógicas y las prácticas que configuran las políticas sociales públicas, en la Argentina y Salta, (2003-2012/13) y, en simultáneo, cómo en el espacio de unión, de la UTD Mosconi, se configuran prácticas y lógicas - transaccionales - de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”.

Al inicio del capítulo, analizamos cómo en la Argentina de la época abordada, la transformación de los trabajadores en pobres reinstaló la cuestión social en términos de pobreza de un modo singular, puesto que lo hizo recuperando la impronta nacional del

Coordinadora Nacional de ex trabajadores de YPF, cuya lucha y reclamos se centrarían en el pago de la histórica indemnización.

discurso de gobierno. En tal sentido, desde los tramos discursivos del gobierno de Estado se sostiene que el trabajo es el mejor “antídoto para luchar contra la pobreza”; a partir de ello consideramos que el gobierno de la pobreza se ejerce en el complejo dominio de “lo social” y por la “unidad nacional”, promoviendo lo que dimos en llamar la complementación paradójal entre sujetos jurídicos y sujetos económicos, en los trazos enunciativos del Discurso de Desarrollo Humano.

La actividad protagónica del Estado, según discurso oficial, remite a la regulación y el orden que habilita la autorrealización para el progreso social y el crecimiento económico con sustentabilidad y equidad. Por tanto, en el resonar de los saberes analizados en torno de la Escuela de Friburgo y la economía social de mercado, la intervención del Estado en pos de una política de equidad y justicia social, no sólo debe ser posterior (compensatoria y paliativa) a la acción del mercado, sino que debe ser previa y/o concomitante para evitar inequidades en el mal funcionamiento del mismo. Esto implica, entre otras cuestiones, evitar situaciones de inequidad derivadas de posiciones dominantes, como las dispuestas por los grandes monopolios y/o corporaciones, tras lo cual las políticas de equidad deberían velar de manera preventiva por el “adecuado funcionamiento de los mercados en condiciones competitivas”.

En dicho diagrama entra en juego el dispositivo de la economía social, en lo que consideramos el entrecruzamiento de un gobierno ético, moral y económico dirigido a las poblaciones pobres y desocupadas. En torno de dicho dispositivo recuperamos el vínculo con las diferentes estrategias asumidas por el gobierno desde el 2003, a partir de las cuales se tejen redes vinculares y transversales para con los movimientos de trabajadores desocupados, entre cuyos resultados encontramos la elaboración del Proyecto Manos a la Obra.

En sintonía reconstruimos algunos de las técnicas de gobierno, que en el dispositivo de la economía social, el desarrollo local humanizado y el trabajo decente, se dirigen a los constituidos como sujetos empleables e inempleables, decentes e in-decentes, entre la familia y el trabajo. Observamos cómo se realiza un ejercicio “microconductual de gobierno”, al que se le suma la noción y tarea de la “corresponsabilidad”, en la cual se sustentan estas políticas “sociales”, que promueven la responsabilización de los beneficiarios. Esto es posible entre las “transferencias condicionadas”, los derechos sociales y los contratos sociales, que se entrecruzan con los discursos de Estados protagónicos y de sujetos responsables.

Por tanto, en Argentina de la época trabajada, las racionalidades políticas sociales, benefactoras y promotoras del capital humano, en clave de desarrollo, se entrecruzan y recrean en los procesos y las prácticas de construcción de espacios sociales y comunitarios, a partir de lo cual se re-inventa lo social, mediante el gobierno de la pobreza. Esto implica la construcción y gestión de sujetos de derecho, lo cual se realiza poniendo en juego el gobierno económico de las poblaciones a través de DDH local y sustentable, potenciando al sujeto económico agente activo de su propio desarrollo, trabajador y consumidor.

En igual línea de trabajo, referimos a los programas de gobierno que, en el ámbito de las políticas sociales públicas, se dirigen a las poblaciones pobres y desocupadas, en Salta (2003-2013). Analizamos desde sus inicios el programa de gobierno provincial y el modo de dirigir las prácticas de intervención social a la “lucha contra la pobreza”, reafirmando que la “acción social” es la mejor herramienta. Señalamos el carácter “focalizado y descentralizado de las políticas de intervención”, en torno de poblaciones pobres claramente identificadas y clasificadas. Observamos cómo los diversos dispositivos y técnicas de gobierno se construyen en torno de una heterogénea y paradójica vinculación entre lo ético y lo ecológico, lo saludable y lo higiénico, la contención y el desarrollo humano, la libertad, la creación y el emprendedurismo, la intervención y la autogestión, la educación y la inversión en capitales humanos y sociales. Mientras que estas prácticas de gobierno se ejecutan en el trazo de lógicas dirigidas a la “protección, ayuda y asistencia”, según las labores realizadas por Eva Perón, que instalan un marco jurídico dirigido, por un lado a la “tutela asistencial”, por otro a la construcción de “sujetos – emprendedores - de derecho”.

No se trata, simplemente de un proceso de “privatización” de lo público, como pretendían los organismos internacionales apenas instalado el DDH y el proceso de des-socialización en los 90’; también se pone en juego un ejercicio de gobierno indirecto, específicamente, a través de la comunidad, construida como espacio de contención, riesgo e intervención que tiene como metas constituir “sujetos ciudadanos”, ya no a través de derechos, si no de “emprendimientos y empoderamientos autogestivos”.

La sociedad civil, entonces, sigue siendo considerada como el dominio transaccional (Foucault, 2007), en el cual se ejerce el gobierno “indirecto” de lo público, que cobra singularidad en Salta, bajo el valor natural de la solidaridad.

En este recorrido realizamos una reconstrucción de prácticas específicas de gobierno materializadas en diferentes técnicas programáticas de intervención: programas, planes y proyectos. Profundizando en los mecanismos de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas, nos detuvimos en lo que da en llamarse “el triángulo de la responsabilidad social empresaria en relación con las empresas/fábricas sociales y los diferentes programas de capacitación” dirigidos, ante todo, a jóvenes – empleables - desocupados.

Observamos las técnicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas y la manera en que se re-codifica el rol del Estado en Salta, no como “generador de empleo”, sino como propulsor de mecanismos que posibiliten, por un lado, la construcción del marco para que el desempleo no sea un potencial riesgo de “quiebre del orden establecido”, y por otro, para que el “sujeto desempleado” advenga, por sí mismo y a partir de sus capacidades, sujeto capaz de empleo y autoempleo. Observamos también, cómo en el proceso de construcción del “perfil del beneficiario”, según las condicionalidades de acceso y distribución, se recupera de un modo negativo la figura del “piquetero”, acorde a las lógicas y tramos relacionales trabajados en el capítulo 3 apartado II, en tanto son re-utilizadas, re-semantizadas y recreadas las figuras de estos sujetos considerados “mal arriados y de malas costumbres”, para reconstruir los modelos de sujetos empleables moral y políticamente correctos.

Por tanto, en clave de capital humano, en la tensa y múltiple relación entre trabajo decente, empleabilidad, inempleabilidad, responsabilidad social empresaria y empresas/fábricas sociales, se trata, en el caso de las poblaciones pobres y el problema de la pobreza Salta de la puesta en juego de mecanismos de gobierno que conjugan, por un lado la intervención del Estado en la generación de marcos y condiciones básicas e iniciales para que los sujetos puedan “autoregularse, autogobernarse, autogetionarse” y, por el otro, la radicalización de la forma-empresa a nivel individual y local societal, dirigida a la configuración de “sujetos empresarios de sí”. Así se justifica y construye también el discurso gubernamental de la “cultura del trabajo, de la decencia del trabajo, de la autosuperación mediante el trabajo”. Pues, según resonares de la DSI en el trazo de la RSE, el desarrollo “humano y mundano” serían posibles, en tanto, el propio ejercicio de la libertad les brindara oportunidades diferentes.

De este modo llegamos al último apartado, en el cual en un ejercicio relacional, con el resto de los capítulos, analizamos las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD

Mosconi (2003-2012/13). Partimos del supuesto que las prácticas de lucha, resistencia, gobierno y autogobierno local de la UTD resultan “astutas y acertosas”, entre medio de realidades y condiciones no siempre favorables, ni fáciles de afrontar para poder “trabajar, sobrevivir y vivir con dignidad”.

Observamos cómo los procesos de subjetivación de los trabajadores ypefianos ante todo, es recreada en relación con la organización de las tareas y trabajos, también con la obtención de recursos, mientras que se re-configuran las relaciones y consideraciones en torno de los “estados”, ya que, según perspectivas nativas existe “el Estado gobernante, que somos todos nosotros” y “el que administra”, ese que en muchos casos “nos obliga a morir”. Así rastreamos el modo en que, en un diagrama de prácticas y lógicas singulares de diferenciación y afirmación, la UTD construye su autonomía como “práctica de libertad”, mientras ejerce un autogobierno local en el espacio de unión que significa. En el cotidiano, entre propuestas, prácticas concretas y memorias activas, son rediscutidas y reconfiguradas, entre otras, las programáticas gubernamentales de perfil “inclusivo” en torno del “trabajo decente”; esto se refleja en el modo de re-construir, por ej.: las disposiciones encontradas en los Manuales que se le entregan a la organización para la ejecución de “planes y programas” bajo su gestión, así como en la re-edición de la organización de las cooperativas, los liderazgos, los movimientos en el interior de los espacios organizados de trabajo, la vinculación con los excedentes, con la producción y ejecución de las tareas, y con el consumo.

En este ejercicio genealógico y crítico reconstruimos la experiencia de la Fundación de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (FUNDATRAD), que desde 2006 y con mayor visibilidad desde 2009 forma parte de la UTD. La experiencia de la Fundación, según lo descripto y analizado, pone en juego, en jaque y de manifiesto, el movedizo haz de relaciones que la UTD ha ido construyendo a lo largo de los años y de los procesos de lucha. Puesto que, se negocia y se establecen vínculos laborales de gestión, organización y trabajo con diferentes espacios instituidos y no instituidos, estatales y no estatales, religiosos, deportivos, empresariales, entre otros; mientras que se resubjetivizan en relación con los roles a cumplir, las tareas a desarrollar, las responsabilidades a distribuir y/o acaparar. La Fundación, entonces, construida bajo la modalidad organizativa de la UTD, marca una singularidad, una diferencia del hoy respecto del ayer en el espacio de Unión de la UTD Mosconi, en tanto se ponen a jugar de modos astutos las lógicas de la legalidad, la formalidad y el patronazgo, entre la lucha infinita por trabajo en los senderos

finitos del viviendo.

Por lo tanto, las prácticas políticas de resistencia y autogobierno de la UTD resultan productivas y creativas, *poiéticas* y *poéticas* diríamos. Las redes vinculares entre gobernados y gobernantes se construyen en un diagrama relacional de prácticas de resistencia, impugnación, autonomía y transacción, así como de aceptabilidad. Por lo tanto, en el proceso de problematización de las relaciones establecidas, de una genealogía de las prácticas y de los procesos de subjetivación la UTD, como espacio singular y heterogéneo no agota, en absoluto, las prácticas de libertad. En su localidad, territorialidad y cotidianeidad, la UTD abre espacios de libertad concreta y con ello de transformaciones posibles.

CONCLUSIONES

*“... ¿Y si uno no es igual a uno?
El signo igual parece a veces
la duplicación ensimismada
del menos”.*

R. Juarroz (2001: 42)

El final de un proceso, de un camino, en este caso de la escritura. Final, que conlleva en sí otros comienzos mediados por un salto. Final, entonces, que comienza dejando abiertos senderos bifurcos por andar y des-andar, entre los avatares de la pregunta y la búsqueda. Puesto que, un final se inicia a lo largo de un proceso que nos permitió encontrar respuestas, recrear sentidos, reconfigurar metas y objetivos, asombrar-nos, detener-nos, pensar, pensar-lo y pensar-nos; un final que deja grietas y se construye entre hiatos. Un final, que es el salto hacia otros comienzos, otros senderos del pensar, siempre fluido, abierto, des-centrado, con otros y en el suelo.

I-

En este camino del pensar, el hacer y el sentir, el presente trabajo de tesis estuvo guiado en su punto de partida, por la intención de realizar un ejercicio en términos de una historia del presente a partir del cual mostrar la persistencia, transformación, reactualización y/o desaparición de una serie de elementos, que constituyen aquello que hemos dado en llamar “gobierno de la pobreza” y prácticas resistencias a ser gobernado de ciertos modos. De hecho, pretendimos reconstruir y analizar, desde una perspectiva crítica y de gubernamentalidad, los modos en que se configuran las relaciones entre gobernados y gobernantes, mediante una analítica de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, en Argentina y, específicamente en la provincia de Salta, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos, atendiendo al caso testigo de la UTD de Gral. Mosconi, entre 1995 y 2013. Relación ésta que se tiñe de reciprocidades, transacciones, aceptabilidades en torno de un *locus* de simultaneidades heterárquicas y heterotópicas, que reconfiguran espacios y sujetos.

No obstante, nuestro objetivo no pretendió generalizar a partir del análisis del caso a abordar, sino reflexionar acerca de las relaciones entre gobierno y resistencia en torno de un eje transversal, que permite la subdivisión y delimitación propuesta: la “privatización de YPF”. Consideramos que dicho acontecimiento nos permitió abordar e identificar dos

dimensiones analíticas: por un lado, el advenir de los “trabajadores en pobres y desocupados” y con ello a la emergencia, instalación y propagación de múltiples programas de gobierno dirigidos a gobernar la pobreza de la mano de la desocupación; y por otro lado, – pero en simultáneo – la emergencia, instalación y diversificación de las prácticas de resistencia piqueteras en el norte de nuestro país, entre las cuales recuperamos la singular, relevante y vigente experiencia de la UTD Mosconi.

A este desafío inicial y general se vincularon, ante la necesidad de una mejor comprensión del objeto de investigación, otros quizás más ambiciosos, por un lado identificar, reconstruir y con ello reconceptualizar las prácticas y lógicas singulares que, codificadas en diferentes programas de gobierno, configuran lo que hemos denominado “gobierno de la pobreza”. Esto es, en los campos – discursivos y extradiscursivos - de las políticas sociales públicas, en un esfuerzo por sostener la coherencia respecto a la perspectiva teórica asumida. Si se pretendía evitar esencializar al Estado, era preciso también abandonar el abordaje institucional-sectorial de la política social. De este modo, buscamos poner a prueba una grilla analítica que comprendiera la política social como enfoque (Campana, 2012) y como discurso, a partir del cual fue posible detectar un conjunto de funciones de las intervenciones sociales del Estado, entendiendo por función la prosecución de determinados objetivos estratégicos, en torno del dispositivo de la pobreza. Nos guió, el supuesto de que en los programas de poder y gobierno construidos en las épocas des-andadas en Argentina y en Salta, se produce, de modos singulares - entre continuas discontinuidades - la re-invenición de la cuestión social en términos de pobreza, puntualmente en el campo discursivo de las políticas sociales y de empleo públicas y los trazos enunciativos del Discurso de Desarrollo Humano. En torno de lo cual identificamos cómo este saber transversal, el DDH, si bien resulta recreado, acorde a las diversas condiciones históricas de realidad y posibilidad analizadas y descriptas en el trabajo de tesis, no es rebasado a lo largo de la historia nacional y provincial en el proceso de configuración estratégica de programas de gobierno dirigidos a poblaciones pobres y desocupadas.

Por otro lado y en simultánea línea de análisis, asumimos que para una analítica de las relaciones sugeridas entre gobernados y gobernantes, es preciso comprender la dinámica de apropiaciones y transformaciones en las que se basa el juego del gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia. Así, desandamos el desafío de considerar que las relaciones de poder, interpretadas bajo la noción de gobierno forjada por Foucault, se

ejercen y construyen como “acciones sobre acciones”, en tanto relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades. A partir de lo cual, pretendimos analizar y describir – de un modo ilustrativo y crítico - la heterogeneidad de prácticas con las cuales se configura el tejido relacional entre las políticas - sociales y de empleo - destinadas al gobierno de la pobreza y los pobres – desocupados - y las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi, en Salta.

En tal sentido, un aporte de nuestro trabajo se encuentra en que, sin intenciones de abordar lo propuesto desde una analítica de la “acción” colectiva - y homogénea - manifiesta en la forma piquete y/o develar una identidad “piquetera”, ante todo de perfil clasista, apostamos a analizar las prácticas y las lógicas que permiten ejercicios cotidianos de diferenciación y afirmación, en el estar siendo de la UTD Mosconi y sus tramas relacionales concretas y siempre abiertas. En tanto, así como el poder es el punto terminal de una multiplicidad de relaciones de fuerza, las resistencias son múltiples en la medida en que se producen en esa multiplicidad de relaciones de poder.

De este modo, mediante una original combinación de perspectivas de investigación, nos acercamos a la cotidianeidad de las políticas y prácticas de autogobierno de la UTD. También, identificamos cómo la resistencia se vincula con la vida, con la creación, en la medida en que el ingreso de la vida en la historia supuso constituirla como plataforma de las luchas políticas y económicas, proceso que se profundiza con el surgimiento y expansión del capitalismo. En tanto, parafraseando a Foucault, la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de creación; crear y recrear, a partir de lo cual transformar, hacer sin permisos, tomar y ocupar espacios, rutas, accesos, participar de los procesos, eso implica resistir, al mismo tiempo que re-existir.

Ahora bien, la resistencia se practica en un múltiple tejido de relaciones de poder y gobierno, a partir de lo cual los sujetos gobernados construyen espacios de convivencia, lucha y trabajo entre relaciones dinámicas de autogobierno, transformación y transacción para con las técnicas y dispositivos dirigidos a gobernarlos como pobres desocupados, sin necesariamente resultar dependientes y/o dominados. Por tanto, en este tejido relacional entre poder/gobierno y resistencia hemos asumido el desafío de considerar que la UTD Mosconi, se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego relacional de prácticas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”, así como en un tejido transaccional de negociación y aceptabilidad. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, son puestas en juego diferentes prácticas de subjetivación,

re-subjetivación y des-subjetivación, desde la privatización de YPF (1996-1997) hasta la actualidad más cercana.

Por tanto, consideramos que el principal aporte de nuestro trabajo es habernos enfocado, en clave de gobierno, en aspectos que no suelen ser abordados como objetos de investigación de un modo relacional, esto implica desarrollar una analítica de las prácticas vinculares entre gobernados y gobernantes, construidas en diagramas heterogéneos y estratégicos de poder, profundizando en la relación entre poder y resistencia. A su vez y, en sintonía, otro aporte remite a desandar el problema de investigación planteado en relación con racionalidades políticas, técnicas, prácticas y tecnologías de gobierno ejercidas en y de espacios de intervención social ante todo de los Estados, sin por esto caer en las perspectivas de la disfuncionalidad, la retirada y la ausencia del mismo, sino identificando los procesos de configuración dinámica del rol del Estado, en condiciones históricas concretas de posibilidad y realidad. Y por último, pensar en clave de gobierno permite desandar la posibilidad de negarse a ser gobernados de tal modo. En tanto, si se piensa el gobierno como la conducción de las conductas, un elemento no solo importante sino constitutivo de dicha noción, es el de “libertad”, a partir de lo cual analizamos las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi.

En tal sentido, nos orientó a afirmar lo antedicho un hallazgo entusiasta en estos tramos de escritura, investigación, meditación y búsquedas, aquél que encontramos en la impronta de la simultaneidad de relaciones, lógicas y prácticas que en lugares diversos hacían, por un lado a la configuración de modos de concebir la economía, el mercado, el Estado y así la cuestión social y la pobreza, en el espacio de las políticas sociales públicas dirigidas a los pobres empleables e inempleables, siempre en clave de desarrollo humano. Esto se configura, según lo trabajado, en un haz múltiple de racionalidades políticas que recrean y reconfiguran prácticas y programas, acordes a condiciones de posibilidad y, por ende a realidades diferentes y singulares.

Y, por otro lado, que no deja de ser el mismo, dichas tramas del poder y el gobierno se configuraron, simultáneamente, con prácticas de resistencia, que en “espacios otros” y diversos-divergentes se fueron construyendo y reconfigurando a lo largo de la historia nacional y provincial. Acorde al trabajo realizado, nos referimos a las prácticas de resistencia de los sujetos específicos que advinieron trabajadores desocupados luego de haber sido ypefianos, de haber disciplinado su cuerpo y prácticas laborales con derechos, tiempos, espacios, actividades y saberes específicos, concretos y diferenciados, se

convirtieron en espacios organizados de lucha y autogobierno liderados por referentes que suelen naturalizarse, pero también diferenciarse entre sí y para sí. Partiendo de la decisión de luchar por la vida y contra la muerte, de “existir para re-existir” pusieron en juego lógicas diversas y situadas que gestaron diversos procesos de subjetivización y reterritorialización, sin tomar el poder.

Las simultaneidades heterárquicas, que a veces avistamos en campos transaccionales, otras de modos subalternizados, otras mediante prácticas hegemónicas y jerarquizadas, otras a través de aceptaciones y negociaciones paritarias, otras mediante luchas explícitas y enfrentamientos directos; dan cuenta de que las prácticas de poder, gobierno y resistencia se configuran y codifican en lugares concretos y tiempos específicos, en y entre diversos niveles –según puntos de vista –, conviven y se entrecruzan. A veces, estas prácticas y lógicas, que hacen a la relación entre gobernados y gobernantes, se universalizan o hegemonizan de modo colonial y único. Sin embargo, nos ha guiado la convicción teórico-política de que no hay una *hybris* del punto cero (Castro Gómez, 2005)⁶⁰³, que hace, por ejemplo, que las políticas de públicas emerjan de lugares sin lugares y sin historias y de ese modo se dispongan sobre mundos sin lugares e historias previas, paralelas y yuxtapuestas. Las realidades, con sus lógicas, prácticas, subjetividades e historias se entrecruzan, chocan, se niegan y rebalsan recreándose unas a otras.

Por tanto, en nuestro intento por desnaturalizar la instalación hegemónica de lo público, en la época analizada, consideramos que estos espacios, prácticas, lógicas y discursos se configuran a partir de y en contraluz con las prácticas de resistencia. Contraluz que, en muchos casos, pretende ser subalternizada, eliminada, silenciada, invisibilizada, así como utilizada estratégicamente, pero que esta ahí resonando, resistiendo, recreando,

⁶⁰³ La *hybris* del punto cero remite a las consideraciones de Castro Gómez en su trabajo doctoral, con ello refiere al imaginario según el cual, un observador del mundo social puede colocarse en una plataforma neutra de observación que, a su vez, no puede ser observada desde ningún punto. Dicho observador estaría en la capacidad de adoptar una mirada soberana sobre el mundo, cuyo poder radicaría precisamente en que no puede ser observada ni representada. Los habitantes del punto cero, según el filósofo colombiano: científicos y filósofos ilustrados, están convencidos de que pueden adquirir un punto de vista sobre el cual no es posible adoptar ningún punto de vista. Esta pretensión, ejemplifica la *hybris* del pensamiento ilustrado. Los griegos decían que la *hybris* es el peor de los pecados, pues supone la ilusión de poder rebasar los límites propios de la condición mortal y llegar a ser como los dioses: “La *hybris* supone entonces el desconocimiento de la espacialidad y es por ello un sinónimo de arrogancia y desmesura. Al pretender carecer de un lugar de enunciación y traducción, los pensadores criollos de la Nueva Granada serían culpables del pecado de la *hybris*”. (2005: 18 y 19)

golpeando, recreándose y recreando eso que adviene siendo “lo público”, en el suelo común de la comunidad.

En los avatares de una analítica de las gubernamentalidades, apostamos a la perspectiva heterárquica y estratégica del poder, por considerar que las relaciones entre gobierno y resistencia resultan múltiples, heterogéneas y siempre abiertas, que operan en diferentes cadenas de poder y en distintos niveles de generalidad. Así como existe una permanente producción autónoma de las subjetividades, que hace a la des-sujeción y re-subjetivación crítica y nos animamos a esbozar, decolonial. Puesto que, la decolonización no depende de las revoluciones molares (aunque no las excluye) (Castro Gómez 2007), sino de las transformaciones que, en condiciones históricas de posibilidad y realidad singulares, se instalan y recrean en cruces dinámicos de diferentes modos de estar siendo en el mundo y con otros, en torno de lo cual el poder/gobierno se ejerce hacia sí mismo, como de sí mismo hacia otros.

Quizá, una de las mayores dificultades con la cual nos tropezamos en tal apuesta, que no dejó de ser un desafío asombroso en el proceso mismo de escritura, fue la exposición de los contenidos. El amplio y minucioso trabajo de archivos, mediante un ejercicio de rastreo y reconstrucción genealógico, nos llevó a establecer un orden de exposición que puede resultar demasiado rígido. Confesamos que por momentos pensamos en un texto al modo de “Rayuela, de Cortázar”, como formato dinámico que permita desandar la multiplicidad y simultaneidad de ensamblajes y tramas, que hacen y des-hacen al trabajo de investigación realizado. Pero, acorde a las disposiciones de un trabajo académico, decidimos organizar los contenidos del modo en el que han sido presentados, con dos grandes partes y cuatro capítulos subdivididos a su interior. Los capítulos se construyen como simultaneidades que se vinculan de modo fluido en la lectura misma. Cabe remarcar que una genealogía de las prácticas en el sentido sugerido de la mano con un ejercicio arqueológico, y en el cruce de metodologías y técnicas cualitativas múltiples de investigación y análisis, requiere de un inmenso y arduo, además de riguroso trabajo de archivos, de observación, de entrevistas, de reconstrucción de la información obtenida, entre otras cuestiones, por lo cual los detalles no dejan de ser relevantes en el proceso de reconstrucción de las procedencias y las diferencias del hoy respecto del ayer, en este intento de desandar las grandes cuestiones en torno de quienes somos, como llegamos a ser lo que somos y cómo podemos dejar de serlo.

II-

Con la intención de detenernos en las cuestiones más relevantes, que hacen al trabajo de tesis, realizaremos una breve recapitulación de lo desarrollado a modo de reflexión final y salto hacia otros comienzos del pensar, el saber y el hacer diversos y posibles.

Acorde a lo antes esbozado, en la **Parte 1** del trabajo de tesis pretendimos analizar los programas de gobierno y las políticas sociales “humanizadas”, en la Argentina y la Salta, haciendo especial hincapié en YPF – despliegue, privatización- y el acontecer piquetero entre 1995 y 2003.

Para la construcción del **Capítulo 1** nos guió el supuesto de que las relaciones entre gobernados y gobernantes, en tanto prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y prácticas de resistencia, se desarrollan y construyen en un diagrama más amplio de pensamiento y modos de hacer, por lo cual es fundamental dar cuenta de los diferentes programas de gobierno que tuvieron lugar en estas épocas específicas, haciendo especial hincapié en la reconfiguración del rol del Estado, las consideraciones en torno de la economía, el mercado y la sociedad civil.

Al inicio del capítulo mediante un breve recorrido genealógico por la gubernamentalidad de perfil predominantemente neoliberal, que desde los años 70´ hasta los 90´ se instaló y radicalizó en la Argentina, observamos cómo, en la Argentina de los 70´, la muerte y la amenaza de muerte desplegadas por la violencia ejercida en y desde el Estado codificado al modo dictatorial, no dejaron de fomentar y posibilitar el ideal de la libertad individual, como uno de los sostenes fundamentales de la gubernamentalidad liberal y neoliberal.

Luego, nos adentramos en el programa de gobierno construido y dispuesto entre 1989 y 1999 mediante una revisión crítica de los procesos y prácticas de reformas, como las de los Estados, así como la emergencia económica, la ley de convertibilidad y los efectos vinculados con las privatizaciones, las prácticas de la flexibilización, tercerización y precarización laboral, y el problema del desempleo, iniciados a principio de los 90´. Hicimos especial hincapié en cómo ciertos discursos y prácticas se dirigen a combatir el desempleo mediante la flexibilización, como una entrada al mercado de trabajo, entre otras cuestiones.

Por su parte, en el trabajo analítico, los diversos cruces y recuperos singulares de las múltiples lógicas de gobierno que trazaron los programas de gobierno analizados, no se pretendió realizar una determinación del pasado por el presente, ni un presagio de lo que

vendrá a partir de lo diagramado, pues esto impediría identificar qué hay de diferente, de singular, en el hoy respecto del ayer; así como llevaría a perder de vista las diferentes prácticas de resistencia y lucha, que en muchos casos configuraron - al modo de efecto - las prácticas y lógicas de gobierno dispuestas en la época de los 90', y a su vez fueron efecto de dichos programas de gobierno, como corolario y correlato.

Por tanto, las transformaciones propuestas y realizadas en los 90' re-configuran el rol del Estado, ante todo, mediante un proceso de des-centralización, focalización, flexibilización y frugalidad de los espacios y ejercicios instituidos de gobierno. En tal sentido, enfatizamos el modo singular en que se puso a jugar el principio de subsidiariedad heredado de la DSIC, aplicando recetas y técnicas traídas de los países potencias, desarrollados y neoliberales. Esta re-codificación de las prácticas de gobierno de Estado, no fue realizada desde una lectura teórica del mismo a partir de su “retirada, desguace y desaparición” acorde a las posturas funcionalistas y normativas al respecto, puesto que el Estado se re-configura a partir de diversos ensamblajes de prácticas de gobierno y lógicas específicas, y no a la inversa.

En este caso puntual del proceso de “descentralización subsidiaria” del rol del Estado, resultó un proceso de re-configuración del mismo y extensión del gobierno a sectores, como la sociedad civil, los municipios, las ONG, entre otros. Mientras que, fueron contruidos diversos mecanismos dirigidos a ejercitar prácticas represivas, ante todo sobre las organizaciones que se constituían resistiendo a los dispositivos impuestos, se complementó con una creciente política de racionalización de los trabajadores, sobre todo en las empresas tendientes a la privatización, entre las cuales el caso de YPF resulta uno de los más claros y crueles ejemplos. De hecho, las privatizaciones conllevaron a una renovada manera de poner en juego diversos mecanismos de intervención y conducción de las acciones de los sujetos advenidos gobernables, mediante la introducción de una profunda reconversión dirigida a ejercer un gobierno económico de las poblaciones, en una reafirmación del mercado como espacio de veridicción y gestión de las libertades.

Como experiencia central para el trabajo analítico de tesis, en los avatares de las gubernamentalidades de la época estudiada, reconstruimos el proceso de “privatización de YPF”. Consideramos la privatización de la empresa estatal, como un acontecimiento inaugural entre cuyos efectos encontramos el advenir de los “trabajadores en pobres”; a partir de lo cual se abren dos dimensiones de análisis en torno de la reconfiguración de, por un lado, las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y

desocupadas y, por otro lado, la emergencia e instalación de las prácticas de resistencia y lucha piqueteras.

En este ejercicio crítico de análisis realizamos un recorrido genealógico por los albores de la instalación de la empresa estatal YPF, hasta sus diversas transformaciones y privatización a mediados de los 90'. Hicimos especial hincapié en cómo el paso de las empresas estatales a manos privadas se da mediante un ejercicio de gobierno de “privación y privacidad” (Wahren, 2011), ejercido en una profundización eficientista, empresarial y competitiva del rol del Estado. Entre cuyos efectos inmediatos observamos la racionalización de los trabajadores y la transformación de sus espacios de vida, lo cual se traduce en despidos masivos, recambios de fuerzas de trabajo, implementación de nuevas organizaciones empresariales y renegociación de convenios colectivos, además de persecuciones en el lugar de trabajo, despidos encubiertos y desarticulaciones de instituciones dirigidas a la seguridad del trabajador.

Las prácticas de gobierno y políticas construidas en torno del petróleo en Argentina han sido, y siguen siendo altamente complejas, puesto que reviven en las mismas diferentes intereses, perfiles y lógicas que tejen el múltiples y heterogéneos diagramas de gobierno entre el poder y las resistencias.

Luego del programa de gobierno de perfil neoliberal de los 90', en el año 2000 se instala, en Argentina, un programa bajo la bandera de lo que se llamó “La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación”. Al respecto realizamos un breve recorrido por dicho programa de gobierno, haciendo especial hincapié en las continuidades y discontinuidades, las crisis y los retoques, que en la Argentina de esta época llevaron ante todo a la profundización de la racionalidad neoliberal instalada en los 90'. Mientras identificamos cómo en este diagrama de relaciones de poder y resistencias, según las condiciones de posibilidad y realidad brevemente señaladas, varios fueron los efectos, entre ellos, una gran masa de los trabajadores desocupados y desesperados – urbanos - advinieron “cartoneros”, mientras se extendían las prácticas económico-populares diversas como el trueque, las asambleas barriales, la toma de fábricas, y se profundizaban los “piquetes” como prácticas de lucha en torno de la ocupación y la toma de las rutas y los espacios de circulación. Asimismo se profundizó la migración desde el campo a la ciudad, conformando espacios muy pobres en las márgenes, en y de los grandes y medianos aglomerados. Lo cual llevó a que en diciembre del año 2001 se desatara la

mayor crisis social, política y civil de los últimos años, bajo el lema: “que se vayan todos” la cual desembocó en la renuncia del entonces presidente.

Por último, identificamos cómo a pesar del candente clima de los años 2000 y 2001, las elecciones del 2003 se consolidaron en las principales candidaturas políticas que ya habían ocupado cargos importantes, al tiempo que generaron poca adhesión de aquellos que se identificaban con la “nueva política”, enfrentada, entre todo, con los “aparatos partidarios” tradicionales.

En los avatares de la investigación propuesta y con igual objetivo, nos introducimos en el programa de gobierno que desde 1995 a 2003 se desplegó y codificó en Salta. Luego de reconstruir precedentes diversos, identificamos la singularidad del programa de gobierno analizado, enfatizando en cómo las diversas reformas se realizaron en sintonía y consecuencia con lo dispuesto en el diagrama nacional de gobierno, aunque a nivel local, lo hicieron en una yuxtaposición de racionalidades políticas de perfil neoliberal y peronista atravesadas de matices pastorales y soberanos. A su vez, en un ejercicio de gobierno que consideramos resultó neocolonial, se construyó un programa de gobierno en los avatares del racismo de Estado, entre la producción de vida activa, la salvación y el poder de la espada.

Mientras que, observamos cómo las re-convertidas relaciones entre los estados y la sociedad civil respondieron a una clara tendencia dirigida a ejercer el gobierno mediante un re-torno a los vínculos primarios de solidaridad, en tanto la sociedad civil advino un “ámbito natural” para con el cual tejer tramas de gobierno y verdad, entre las disposiciones de un Estado reformado y un mercado empoderado. Consideramos que lo antedicho se ve reflejado, ante todo, en el ejercicio del gobierno dirigido a las poblaciones pobres, en un proceso marcado y profundo de re-primarización, des-socialización y re-mercantilización de los vínculos (Álvarez Leguizamón, 2008), las subjetividades y las relaciones de gobierno. De este modo se construyeron, dominios transaccionales de regulación pública y privada, a través de los cuales la felicidad del individuo – ciudadano - ya no se recostaba en la felicidad del Estado-Nación, sino en su propia individualidad-emprendedora.

En sintonía, arribamos en el apartado III, en el cual mediante una aproximación teórica, analítica y práctica reconstruimos, brevemente, la historia del petróleo en Salta y con ello la instalación de YPF, en el departamento Gral. San Martín. Para esto recorrimos el mundo del trabajo que trazó la “comunidad fábrica YPF” (Palermo, 2010), la cual se

instaló como una “comunidad imaginada” (Anderson, 1983) construida en el ejercicio autónomo del poder/gobierno en y de los territorios, en los cuales la empresa se asentó y, en su enclave vincular con los recursos naturales en juego, ante todo petróleo. Observamos cómo en este período se generó un relativo bienestar económico y social para la población local a partir de la YPF considerada “Estado dentro del Estado” (Wahren, 2011, Giarraca y Wahren, 2009), lo cual será recuperado por la UTD a lo largo de su historia y sus prácticas, tal cual analizamos a lo largo del escrito de tesis. Nos ha guiado el supuesto de que estas breves aproximaciones genealógicas nos permiten comprender la re-configuración de los sujetos y territorios “ypefianos y ex/ypefianos”, advenidos, estos últimos trabajadores desocupados y piqueteros unidos en espacios territoriales y comunes, como lo será la UTD Mosconi.

Así, hemos dado cuenta críticamente de cómo, en estos tramos vinculares se constituían y configuraban sujetos, territorios y prácticas de trabajo como los ypefianos y la familia ypefiana, para lo cual tuvimos en cuenta los diferentes estudios referidos a la segregación y/o exclusión (Wahren, 2011, 2009) que entre “nosotros y los otros” (Aguilar, Vázquez, 1997) instaba la organización socio, territorial y política dispuesta por YPF, así como la construcción de la empresa fábrica como un espacio instituido y complejo de relaciones de poder/gobierno, resistencias y verdad. En tal sentido, identificamos cómo YPF se torna un dispositivo, que se cierra sobre sí mismo con sus lugares específicos, sus reglamentos propios, sus estructuras jerárquicas cuidadosamente diseñadas y una relativa autonomía funcional. Mientras que, YPF resulta una empresa estatal, lo cual denota cómo las relaciones de poder se elaboran, racionalizan y centralizan bajo la forma o bajo los auspicios de instituciones estatales; lo cual nos invita a pensar cómo YPF se instala al modo de uno de los tantos aparatos que tienen como efecto el Estado e incluso como uno de esos aparatos que cobra en sí mismo la forma Estado y de ese modo construye mundos, sujetos y verdades.

En tal sentido, si bien la comunidad ypefiana estaba anclada en la práctica del trabajo petrolero, también estaba profundamente marcada por la acción territorial y gubernamental a nivel cultural y social por parte de la empresa petrolera; mientras que dichos tramos de relación instalaban una comunidad en comunión con el ambiente haciendo posible la construcción de lo que dimos en llamar un “*ethos* ypefiano”. En el caso salteño, pudimos observar cómo, en un cruce heterogéneo entre las lógicas de gobierno, precedentes y provenientes de la llamada oligarquía local y el “desarrollo

nacional”, hacían de YPF un espacio, relativamente, singular en cuanto a su organización y ofrecimiento de libertades.

Acorde a una de nuestras principales afirmaciones relativas a que el gobierno se ejerce en una tensa, dinámica y múltiple relación entre poder/gobierno y resistencias, en este ejercicio de reconstrucción ensayamos una aproximación a las tradiciones y prácticas de resistencia precedentes a los levantamientos piqueteros y las organizaciones de trabajadores desocupados, en el norte salteño. Recuperamos la procedencia de algunas de las prácticas de resistencia que, en los años 80´ se ejercieron en el territorio del Dpto. Gral. San Martín en Salta, como la “toma del aeropuerto”, en una disputa tensa al interior del Sindicato Unido de Petroleros del Estado (SUPE) y para con el sindicato. Analizamos y describimos las prácticas de resistencia y lucha que se instalan contra la privatización en 1989 al interior de la fábrica y del sindicato, a partir de lo cual referimos a la conformación de la “Agrupación de Trabajadores Ypefianos”, constituida por quienes luego serían los “fundadores” de la UTD Mosconi, entre diferentes perfiles políticos, partidarios y heterogéneas tradiciones de lucha. Por último, nos remitimos a la primera pueblada en Tartagal y Mosconi, allá por setiembre de 1991, como los últimos destellos de lucha contra la privatización, cuando esta ya era inminente (Benclowics, 2013).

En este tejido vincular entre las tradiciones precedentes y las reconfiguraciones singulares en los acontecimientos de 1991 acaeció lo que damos en llamar un desbloqueo de las prácticas de lucha en la zona, a partir de un trastrocamiento en torno de las tendencias hasta ahora vigentes y comunes, lideradas por los sindicatos y los clientelismos políticos, así como por los partidos de izquierda. En tanto esta primera pueblada pone en juego diversas tradiciones locales de lucha y resistencia, que rastreamos, reconfiguran otras prácticas ejercidas allá por los años 30´, en el territorio local, las que a su vez serán re-codificadas y re-creadas en y por los espacios de organización y lucha “piquetera” emergidos en 1996/7, entre la vida y la muerte, como veremos en el capítulo que sigue.

Según enunciaciones nativas, entonces, en el proceso de privatización de YPF, a la desocupación repentina le siguió la desesperación, la angustia, la ausencia de oportunidades y el olvido mediante la puesta en juego de mecanismos diversos de ocultamiento, represión y encierro a los cuales fue sometida la población local/regional, en sus propias comunidades. Los ex/trabajadores YPF se tornaron trabajadores-desocupados y moribundos.

Por tanto, en este momento histórico y como efecto de la privatización de la empresa-fábrica YPF acorde a los programas de gobierno des-andados, no sólo se modificó el espacio social y político, sino la visión de mundo y el lugar de la propia vida. En esta historia local, es en 1996 que comenzará a instalarse de modo emergente, y astuto, la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi. La “muerte moribunda”, entonces, instó a “luchar por trabajo y en defensa de la vida”, a germinar comunal y singularmente.

En los tramos de la gubernamentalidad desandada en la década de los 90’ y principios del siglo XXI, acorde a la perspectiva y los objetivos sugeridos, dimos entrada a una analítica en torno de los programas de gobierno dirigidos a lo que damos en llamar “gobierno de la pobreza”. Para la elaboración del **Capítulo 2** nos guió el objetivo dirigido a analizar cómo se ejerce el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres – desocupadas - en el marco de las lógicas y las prácticas que configuran las políticas sociales públicas, en Argentina y en Salta (1995-2003) y, en simultáneo, cómo se configuran prácticas y lógicas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”, en campos de transacción específicos.

En primer lugar realizamos una aproximación teórico-analítica a los diferentes tramos conceptuales y de investigación que, en torno de la problematización de la pobreza y del gobierno de la misma, nutren nuestro trabajo. En tal sentido, hicimos referencia a las perspectivas teórico analíticas que nos permitieron aproximarnos a la invención y reinención de lo social y la cuestión social, según lo sugerido por la tradición francesa y las herencias latinoamericanas y argentinas. Mientras que reconstruimos la instalación del Discurso de Desarrollo Humano en relación con las políticas sociales, y ensayamos una breve analítica de los entramados discursivos y extradiscursivos manifestos por los Organismos Internacionales de Crédito, ante todo el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Desde una perspectiva estratégica y heterárquica del poder, abordamos la pobreza como dispositivo, puntualmente como dispositivo de gobierno sobre la cuestión social. Pensar la pobreza en términos de dispositivo refiere a un conjunto de elementos heterogéneos entre sí, pero interrelacionados: discursos, instituciones, reglamentos, leyes, enunciados científicos, enunciados filosóficos y morales, entre otros. Así hemos podido observar el modo en que se ha problematizado un fenómeno, es decir, la manera en que algo se ha constituido y construido como problema.

En tal sentido, por “pobreza” no referimos a ese fenómeno tangible relevado en sus

rasgos cuantitativos por la Línea de Pobreza o las Necesidades Básicas Insatisfechas, sino a ese dispositivo conformado por trabajos científicos, políticas públicas, técnicas diversas, saberes y tecnologías específicas para su abordaje, apreciaciones morales sobre los sujetos, entre otras.

El gobierno de la pobreza nos permite pensarla entonces, no como problema en sí misma, sino como soporte y apoyo de diversas técnicas para la regulación y el gobierno de este sector de la población. El dispositivo de la pobreza remite a un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que construyen lo social como pobreza, con matices diferenciales entre los períodos analizados a lo largo de la tesis, asignándole características personales e individuales, interviniendo sobre situaciones concretas y problemas específicos, y diluyendo cada vez más la discusión sobre las causas estructurales, en un marcado proceso de “naturalización” de la condición y situación de la pobreza y de los pobres. Sostenemos, por tanto, la “problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza” y la pobreza como dispositivo de gobierno sobre la cuestión social y también, sobre la fuerza de trabajo.

En tal sentido, remarcamos cómo la fuerza enunciativa que posee el discurso sobre la pobreza la ha independizado de la cuestión del trabajo en los 90’, y la ha re-vinculado en clave de “empleabilidad, inempleabilidad y decencia”, en la actualidad más cercana. A su vez, las modalidades de gestión, en la línea analítica propuesta, ante todo en relación con estas poblaciones trabajadoras advenidas pobres se dirigen a contenerlas de posibles “desbordes”. Siguiendo a Deleuze (1995), nos ha sido posible pensar cómo estas “sociedades de control”, propias del capitalismo avanzado, se construyen en torno a diversas estrategias de poder, haciendo posible diferentes y novedosas modalidades de sujeción y/o estados de dominación vinculados ante todo, con los aprisionamientos y encierros en lo que hemos dado en llamar las “comunidades locales”.

De esta forma y como señalaremos, el Estado como centro de codificación de las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres, ante todo en y desde la década de los 90’, controla a través de la articulación de políticas sociales y políticas sociales de empleo públicas más o menos focalizadas, y de redes comunitarias, la vida y reproducción de la vida de millones de personas pobres, en Argentina y en Salta. En tanto, las políticas sociales públicas, en sus diferentes formas discursivas y de reciprocidad dan cuenta de las lógicas y prácticas de intervención del Estado en lo social y, con ello de la gubernamentalización de lo social. De hecho, resultan un permanente intento - a veces

fallido - de suturar la cuestión social.

Siguiendo este planteo, entendemos que las prácticas discursivas y extradiscursivas entretejidas en el *Discurso de Desarrollo Humano* (DDH), desde la década de los 90' posibilitan la construcción, sujeción e intervención en torno del advenido "problema de la pobreza", cuyo gobierno se ejerce en el campo de las políticas sociales y de empleo "para" pobres, atravesadas por el *Discurso de Desarrollo Social* con rostro humano.

Por tanto, la perspectiva de gubernamentalidad sugerida, aporta herramientas útiles para pensar la constitución discursiva y no discursiva de los fenómenos sociales en el marco de mecanismos específicos de poder (tal es el caso de documentos y programas como los elaborados por el BM, PNUD, las políticas sociales, las evaluaciones realizadas por trabajadores y asistentes sociales, manuales ministeriales, etc.), configurando el programa de una manera específica (enunciándolo, caracterizándolo, midiéndolo, construyéndolo, enmarcándolo, evadiéndolo, etc.) y, como correlato, interviniendo sobre el mismo también de un modo singular en función de aquella caracterización.

Observamos cómo, desde la década de los 90' los mecanismos, técnicas y lógicas de gobierno dirigidos a "combatir la pobreza" en clave de Desarrollo Humano, se orientan a fomentar, producir e invertir en capitales - humanos y sociales - , mientras se re-torna al espacio comunal-local, a través de una construcción del medio de vida y acción de los sujetos pobres, centrado en los lazos primarios de reciprocidad, en torno de lo cual se promueve la autogestión organizada y solidaria de la propia existencia. En tal sentido, también recuperamos lo señalado por Álvarez Leguizamón (2008) en torno de la construcción del pobres como "un otro radical", así como "la invención del otro", según lo señalado por Castro Gómez (2002), en el entrecruzamiento heterogéneo y no lineal de racionalidades políticas neocoloniales y neoliberales, a partir lo cual la cuestión social pretende ser "salvada" de modos paliativos, focalizados y autogestivos. El DDH trasparenta las estrategias antedichas, y define, de modos diversos y singulares, a la política social como tecnología para el combate a la pobreza comprendida como dispositivo de poder.

Por tanto, con la gubernamentalidad neoliberal, y los diversos matices con los cuales hemos sido colonizados, se instala una mutación y quiebre respecto de los modos de ejercer el gobierno de la pobreza en el campo de las políticas sociales. Siguiendo a Álvarez Leguizamón (2008), sostuvimos cómo lo antedicho implica una reconfiguración hacia las formas más clásicas de asistencia para el tratamiento de las necesidades básicas,

que según la autora se manifiesta en tres procesos de: reprimarización, desocialización y mercantilización.

De este modo, consideramos que el discurso dirigido a “*combatir la pobreza*” no pretende erradicarla, sino gestionarla, de modos diversos y singulares reproduciéndola en el mismo momento en que pretenden aliviarla. Puesto que, según nuestra analítica en torno de los Organismos Internacionales de Crédito, así como diferentes programas de gobierno y lógicas diversas, se trataría, ante todo en la década de los 90’, de un ejercicio de gobierno de la pobreza, en tanto gestión y administración de dicho problema advenido riesgoso, con el fin de ejercer un gobierno económico y moral sobre la conducta de los individuos y su medio ambiente. Esto nos remite, a su vez a que las relaciones de poder al modo de gobierno presuponen la libertad de aquellos a “quienes” se gobierna, para los cuales, por un lado “se crean las condiciones de libertad necesarias” y, por el otro, estos quienes están todo el tiempo en la posibilidad de resistir, de decir no.

Acorde a las perspectivas sugeridas, analizamos las lógicas y prácticas de gobierno que, en la Argentina y la Salta de los 90’, fueron ejerciendo de modos singulares el gobierno de las poblaciones pobres en general y pobres desocupadas, en particular. En primer lugar, nos concentramos en la instalación del “problema de la pobreza” y su gobierno, mediante la construcción del Primer Mapa de Pobreza en la década de los 80’ en Argentina y sus derivas. En segundo lugar, profundizamos en torno de las reconfiguraciones vinculares entre el Estado y la sociedad civil, a partir de lo cual, en concordancia con la gubernamentalidad de la época, observamos un retorno a los vínculos primarios de reciprocidad mediante la construcción de diferentes mecanismos dirigidos al gobierno de los otros y de sí mismos, en el territorio de “lo local”; en una compleja relación entre la inversión en capitales - humanos y sociales - y la autogestión emprendedora y focalizada, de la propia existencia. Mediante un rastreo analítico y genealógico de diversos programas, planes y proyectos de gobierno, observamos cómo, regulados por las lógicas antedichas, los mismos se dirigen a construir las condiciones de posibilidad y realidad de vida y subjetivación de los trabajadores desocupados y pobres, mediante una acción, generalmente indirecta de gobierno.

Por tanto, en un intento por desplazarnos de las discusiones en torno de los debates sobre el campo externo dirigido a la medición y las lecturas de indicadores específicos en torno de la pobreza, analizamos cómo, desde el Mapa de la pobreza, allá por 1984, las yuxtaposiciones de dimensiones político-analíticas transforman la retórica de los derechos

en una operacionalización de mínimos vitales (Álvarez Leguizamón, 2005). Consideramos que dicha operación se daría en un entramado discursivo que pone a jugar aquellos “límites dispuestos al poder público”, desde el derecho en sus dos versiones. Según lo indicado por Foucault (2007), esto es la construcción de “sujetos jurídicos-económicos” libres y autónomos (utilitarismo inglés), en torno y a partir del juego desigual y competitivo del mercado y, por otro, los sujetos jurídicos o *legalis*, que se constituyen en la imperante necesidad del “reconocimiento universal de los derechos” (liberalismo rousseauiano).

En tanto, según la perspectiva que sostiene el presente trabajo no habría un “falseamiento u ocultamiento” de los derechos, sino otros modos de construcción, legitimación y puesta en práctica de los mismos, diríamos, en torno del mercado como espacio de veridicción, las poblaciones – pobres - como blanco de intervención y la predominancia del derecho de perfil utilitarista como modalidad práctica de poner límites - externos - al ejercicio frugal de gobierno de Estado (Foucault, 2007).

En tal sentido, profundizamos en torno de los programas “*workfare*”, como los Trabajar y el PJJHD, que en la provincia de Salta son rebautizados como Salta Trabaja y Salta Solidaria, entre otros. Observamos cómo la racionalidad política neoliberal predomina en este trazo de la historia nacional y provincial para fomentar y fortalecer la figura individual del “beneficiario”, mientras se ejercen diferentes mecanismos microconductuales de subjetivación y prácticas de control, entre la focalización y la contraprestación. En esta línea, se instala el carácter focalizado, mínimo y transitorio de los programas dirigidos a las poblaciones pobres, a las cuales se subdivide entre “inempleables-vulnerables” mediante prácticas de asistencia de perfil “servicial y comunitario”, mientras que se disponen mecanismos de “capacitación” otorgando “oportunidades” de inversión en capital humano para la “re-conversión intergeneracional” de la “condición - nefasta y riesgosa - de la pobreza, sobre todo a aquellas poblaciones que entre los 15 y los 50 años se consideran “empleables”. Entre tanto, se entretejen mecanismos de “contención paliativa y transitoria” para los trabajadores advenidos desocupados y pobres con el objetivo de que, por un lado no se desmorone el “orden social” (tambaleante, por cierto) y por otro, estos sujetos puedan mediante mínimos vitales y en los márgenes autoregular su propia existencia de modos “productivos, autogestivos y comunitarios”, siempre bajo el discurso de Desarrollo Humano “para” pobres y el “combate a la pobreza”.

En este juego vincular entre gobierno y resistencia observamos cómo, en la Salta de los 90' se conjugó el gobierno económico, que construyó sujetos emprendedores, con el gobierno moral de las poblaciones, dirigido a erradicar y asistir “los males de la pobreza y los pobres/carentes”, en el camino de la salvación. Las prácticas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas tal cual analizamos se manifestaron en programas diversos como los ya mencionados: Salta Trabaja, Salta Solidaria y, diversos canales de capacitación y también de asistencia y ayuda, con resonancias del peronismo local renovado, los que no resultarían simples mecanismos de contención tutelar, sino de generación de espacios que posibiliten la libre circulación de competencias y habilidades, en torno de las cuales los sujetos “activos, gestivos, y capaces” advengan “empresariales, empleables” y, si no lo logran o no cumplen las condiciones para serlo, “asistidos y/o sacrificables”.

En este caso y mediante acceso a mínimos, se pondrían en juego la construcción de sujetos jurídicos y económicos, ya sea mediante la promoción del discurso de los derechos humanos, garantizados por el Estado, en su frugal ejercicio de gobierno “para” el mercado y en una apuesta por “controlar y atender” a aquellas poblaciones advenidas vulnerables e inempleables. Y, por otro lado, se trataría de “producir” sujetos económicos autogestivos, siempre bajo los tramos enunciativos del DDH y el interés que insta “gobernar lo menos posible”.

Así, desde la perspectiva estratégica y heterárquica de poder aquí propuesta, hemos dado cuenta de cómo, en los tramos enunciativos y en las prácticas de los programas provinciales de gobierno, se entrecruzan lógicas entre tecnocráticas-neoliberales y morales-pastorales. Esto es, cómo entre la producción descentralizada, focalizada y precarizada de ciertos sectores de la población, “más pobres de entre los pobres”, se promueve la inversión en capitales y se refuerzan los lazos primarios de sociabilidad “natural” para el “despegue”, mientras se pretende erradicar males vinculados a enfermedades de los cuerpos físicos, sociales y ambientales, así como costumbres y prácticas que entorpecen el proceso de atención, asistencia e incluso re-inserción en el juego del mercado. Según dichas racionalidades políticas y programáticas de gobierno, aquellas poblaciones que no logren dar el salto “serían dejadas a la muerte”, y con ello a la reproducción de la pobreza advenida “innata y destinada”; mientras que, aquellas otras que resistan, serían, en muchas oportunidades, “dadas de muerte y/o a la muerte”, a través de violentas represiones. De hecho, estos tramos discursivos y prácticos pretenden “re-

adaptar las malas costumbres y la violencia piquetera”, así como dejar “entre sombras y silenciar”, las prácticas de resistencia y lucha que comenzaban a ejercerse en la zona del Dpto. Gral. San Martín, donde se instalaba, entre otras organizaciones, la UTD Mosconi.

Esto nos remite a lo ya señalado respecto del racismo - de Estado - en el cruce paradójico de tecnologías biopolíticas y soberanas de gobierno, entre cuyas subjetividades relevantes analizamos la que dimos en llamar “moribundo emprendedor”. En tanto, los sujetos pobres desocupados advienen, recuperando a De Certeau (2000), *moribundos*; por un lado dejados a la deriva en la lucha contra la muerte, y por otro y en simultaneidad, controlados y gestionados por programas orientados a re-producir-los como sujetos activos, en sus comunidades locales, entre la vida y la muerte. Así, tomando cierta distancia de lo planteado por Foucault (2000a), consideramos que la biopolítica y el llamado “racismo de Estado” en torno del cual se pone en juego la posibilidad de “dar muerte y/o dejar morir” a las poblaciones no deseadas, son parte de una misma lógica de intervención en las poblaciones.

Ahora bien, estos sujetos – pobres y desocupados - están siempre en la posibilidad de “no obedecer”, de des-individualizarse y en tal sentido re-subjetivizarse y así desmontar las redes de poder-gobierno y verdad que se les disponen. Las relaciones entre gobernados y gobernantes resultan estratégicamente libres y móviles, lo cual se evidencia en el territorio mosconense, en medio y mientras tanto los “trabajadores desocupados y piqueteros” unidos en la UTD Mosconi se levantaban en pie de lucha, construyendo un espacio de autogobierno entre lógicas y prácticas heterogéneas y diferentes a las dispuestas. En tal sentido analizamos, críticamente, el tejido relacional configurado entre poder/gobierno y resistencia mediante una aproximación profunda a la UTD Mosconi, en continuidad con lo iniciado en el apartado III del capítulo 1. Partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego relacional de prácticas de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”, así como en un tejido transaccional de negociación, aceptabilidad y transformación. Mientras que, en un dinámico haz de relaciones locales y cotidianas, se van poniendo en juego diferentes prácticas de subjetivación, re-subjetivación y des-subjetivación, desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana, lo cual se refleja en la construcción del sujeto “trabajador desocupado y piquetero”.

Para realizar dicho trabajo analítico, en primer lugar reconstruimos las prácticas y ocupación de las rutas, los piquetes, desde 1997 hasta el año 2002. En tal sentido y acorde

a nuestra singular analítica genealógica y crítica, según enunciaciones nativas, observamos por un lado cómo, el piquete resulta un espacio de “lucha, de defensa y de batalla”, esto es un espacio en el cual “se pone el cuerpo”, ahí no hay palabras, hay guerra y la lucha es por la vida y contra la muerte de un modo creativo y productivo. Los “piquetes”, no reproducen los conocidos “piquetes de huelga” ya que se trazan en una tradición local de luchas que desde los años 30’ vienen gestándose y transformándose en la zona, tampoco resultan prácticas económicas, en búsqueda de recursos y/ o freno al paso de mercancías.

Por otro lado, en la práctica del piquete se construyen y constituyen “espacios de transacción” dinámica y siempre abierta. Entre el cuerpo y la batalla se establecen negociaciones y se generan marcos de aceptabilidad y de transgresión en un cruce de lógicas y prácticas divergentes y múltiples. En este “entre” la UTD, como unión de trabajadores desocupados y piqueteros comienza a instalarse, parafraseando a Kusch, como “domicilio existencial”, a partir del cual fue posible “tantear el sentido”. Puesto que, en este juego abismoso los piquetes se transformaron, ritual y simbólicamente, en ese encuentro, que entre la vida y la muerte, haciendo posible la re-existencia creativa, en torno de lo cual poder “crear el mundo de vuelta”. Las prácticas transaccionales - entre gobernados y gobernantes, ante todo - no tenían como efecto sólo vínculos signados por la dependencia, sino puestas en juego de libertades transformadoras y de creatividades emergentes en los procesos cotidianos, finitos y siempre abiertos para la reconstrucción del desocupado en un trabajador desocupado y de los territorios desbastados en espacios habitables, no meramente “de supervivencia”.

De este modo, nos adentramos en la instalación de la UTD como principal espacio de referencia y construcción de puestos de trabajo en la zona a partir del 2000, y la astuta modalidad de re-crear los planes de empleo transitorios y subsidios para los desempleados en trabajos considerados productivos y dignos, para la comunidad regional y local en su conjunto.

Lo antedicho se observa, por ejemplo, en el ejercicio estratégico de manejo y re-manejo de los fondos obtenidos en pie de lucha, tal es el caso de los “proyectos productivos”. La aceptación de los planes y las negociaciones no sólo respondieron a la imperiosa necesidad de apenas sobrevivir, también se abrieron campos de transacción creativa y diferente, que iban a reafirmar cada día la subjetividad crítica del trabajador desocupado y

ahora piquetero en la constante e incansable búsqueda del trabajo digno, cuando, según enunciaciones nativas: *“los (planes) Trabajar, no eran trabajo”*.

En tal sentido, la UTD no resulta “una otredad” con respecto a la comunidad local, la lucha por trabajo en torno del problema del desempleo y la pobreza, de los trabajadores advenidos pobres fue sentida como una lucha que atravesaba a los trabajadores y los rebasaba, a partir de lo cual comenzaron a reconfigurar-se como espacios de autogobierno local y comunal, y por ejemplo: realizar actividades que antes correspondían a los municipios, como la reparación de escuelas, hospitales, la construcción de barrios, calles, entre otras. De este modo, la UTD funciona, desde el 2000, sin espacios deliberativos de decisión orgánica, sino que se construyen mediante prácticas directas, bajo la forma “decisión/práctica”, orientadas por los referentes, mientras que se recrean antiguas y diversas modalidades de sociabilidad y resistencia. Muchos trabajadores sienten suyas las luchas y sus efectos, mientras otros avistan en la organización un espacio generador de trabajo. Aquí entra en juego el “estar siendo trabajador piquetero y con los piqueteros” (Quirós, 2006), que hace a la singularidad de la organización, en su reconfiguración comunitaria a lo dispuesto, para re-existir siendo.

Sin embargo, estas modalidades de codificación y organización “en la marcha” de las prácticas y los haceres, no implican un “nuevo paradigma de la política concebido desde abajo”, sino un haz movedizo, múltiple y siempre abierto, no necesariamente horizontal, de relaciones de poder, gobierno y verdad, a partir de lo cual se ejercita la des-sujeción crítica y local/cotidiana de los trabajadores-desocupados. Por lo tanto, en este diagrama de poder, gobierno, resistencia y verdad, observamos cómo se construye la astuta y acertosa “autonomía” de la UTD. Dicha autonomía se materializa en diferentes prácticas de autogobierno, en tanto es posible en las tramas relacionales que la UTD va tejiendo y que, a su vez, van constituyendo a la UTD, como una organización en movimiento, no necesariamente “contrahegemónica o dependiente”. En tanto, dichas tramas de relación se construyen en torno del principio ontológico de la libertad sugerido por Foucault, mientras que, siguiendo a Castoriadis (1998), la autonomía es una “apertura y una ruptura”, en el proceso de construcción de mundos según otras leyes y, por lo tanto, crear un nuevo *éidos* (forma) ontológico, otro sí-mismo diferente en otro mundo. Esto supone un ejercicio de “autotransformación, que se construye y cobra formas diversas sin recibir y acorde a lo analizado en torno de la UTD, sin acatar estrictamente, las órdenes y normas desde el exterior - partidos, sindicatos, Estados - a partir de lo cual se pone en juego un

diagrama “heterónimo” de organización, en sentido amplio, que se sostiene y posibilita en el ejercicio de la libertad constitutiva de las prácticas cotidianas, locales y finitas.

En este espiral expositivo, dimos entrada a la **Parte II** del trabajo de tesis dirigida a analizar la gubernamentalidad, el gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia en Argentina y Salta, entre 2003 y 2012/13. Nos adentramos así a una analítica de la actualidad más cercana, que por ser la menos conocida y analizada, por urgente y vigente, consideramos resulta, a su vez, la más inmediatamente relevante, por cercana y posible de ser transformada.

En el **Capítulo 3** realizamos una analítica en torno de los avatares de la gubernamentalidad, en la Argentina y Salta actual (2000-2013).

En primer lugar, realizamos un breve recorrido por el diagrama geopolítico continental correspondiente a la época analizada, considerando que el mismo nos posibilita comprender la emergencia, instalación y singularidad de la gubernamentalidad argentina y salteña instalada entre 2003 y 2007. En dicho recorrido hicimos referencia al contexto y condiciones históricas de posibilidad y realidad acaecidas en el continente latinoamericano, en los últimos años, recordando junto con Svampa (2010) que “el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha tenido diferentes fases en América Latina”, a partir de lo cual observamos cómo estos procesos de encuentros y desencuentros a nivel continental, se acompañan de re-configuradas tendencias en torno del rol de los Estados, los mercados, las economías, la globalización, las glocalidades y la cuestión social, en singulares cruces integracionistas, ante todo.

En segundo lugar, realizamos una reconstrucción crítica de los programas de gobierno y racionalidades políticas instalados y contruidos en la Argentina (2003-2013). A través de una analítica descriptiva y crítica observamos cómo, en sus inicios el programa nacional de gobierno, se instala promoviendo la reconfiguración del rol del Estado como “protagonista, presente y promotor”, frente al rol subsidiario y ausente, que se considera tenía en los 90'; mientras se fomenta el crecimiento, la inversión y el tecnicismo económico político.

En su primer período - 2003-2007 – una de las estrategias de gobierno remite a lo que dio en llamarse “transversalidad”, contruida entre y frente a las críticas del por entonces Partido Justicialista y la articulación con organizaciones sociales, sobre todo de trabajadores desocupados. En esta relación específica, se promovía una propuesta dirigida

en dos direcciones, por una parte: no ejercer represión directa dejando actuar a los trabajadores desocupados, considerando que de este modo los piqueteros se desgastarán por sí mismos y se aislarían; mientras que por otra parte para los movimientos que “colaboren y participen” (los sensatos) se propiciarían estrategias para “emplear” a sus miembros y para participar en el proceso instituido de gobierno (Maneiro, 2012).

Entre prácticas y dispositivos nos adentramos en un segundo momento del programa nacional (2007-2011), en el cual entre crisis y transformaciones se profundiza un discurso centrado en el crecimiento económico sostenido con la creación de empleo-trabajo e “inclusión social con equidad”, con la intención expresa de regular la distribución de la riqueza/ingresos y la creación de “oportunidades”. Hicimos referencia, en tal sentido, a algunas de las prácticas y mecanismos de gobierno más relevantes de la época señalada, bajo el supuesto de que se construyen y entretienen en la puesta en juego de lógicas “para el mercado y en contra del mercado”, a partir de las cuales se ponen ciertos límites morales, políticos y económicos al mercado, mientras se generan las condiciones de posibilidad para que el juego sea posible.

En este recorrido, reconstruimos un tercer momento (2011-2013), en el cual desde el programa de gobierno se propone profundizar lo logrado e instar a un ciclo de industrialización por sustitución de importaciones, entre cuyas prácticas estratégicas rescatamos “la re-nacionalización de YPF” (Ley N° 26.741). Al respecto, señalamos que el modelo dispuesto no es el de la re-estatización, en tanto se continúa con la figura formal de “sociedad anónima” instalada en la privatización de mediados de los 90’, con una apuesta actualizada hacia la profesionalización de la empresa nacional. También observamos cómo lo resuelto se realiza en un haz de relaciones entre las cuales se encuentran las dirigidas a sostener un modelo de “acumulación por desposesión y extractivismo” (Zibechi, 2011), así como, un modelo “extractivo-exportador” (Seoane, 2012), cuya promoción parece agravar los problemas que se dicen querer resolver, abandonando la pretensión de modificar la estructura de propiedad, renta y riqueza en el país, así como neutralizar proyecciones políticas de lucha surgidos, en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, mientras que no se expande el proceso de industrialización petrolera al resto del país.

En tal sentido, la re-nacionalización de YPF instó, por parte de referentes del programa nacional de gobierno en ese entonces, solicitudes dirigidas a “transformar las protestas” – piqueteras - emergidas post privatización, señalando como “con estas medida se terminó

de pagar la deuda de los ex/ypefianos” y considerando que según palabras de la presidenta (2012): “estamos en otra Argentina”. Por tanto, estos tramos discursivos y extradiscursivos consideramos que reconfiguran las prácticas de criminalización, proyección y represión de las protestas, cuando, a su vez, se dirigen, ante todo, a las agrupaciones piqueteras del Gran Buenos Aires, abriendo un complejo abanico de discusión y diálogo en torno de los “otros” movimientos piqueteros, considerando que la realidad de los ex/ypefianos salteños, por ej.: no denota esa mejora sugerida por el acceso al trabajo, sino un constante, creativo y cotidiano proceso de resistencia.

Encontramos en estos trazos y tramos esbozados en el trabajo de investigación, diversos senderos que quedan abiertos, ante todo aquellos vinculados con el proceso de reconfiguración de YPF y su vinculación con los trabajadores desocupados y piqueteros, ex/ypefianos unidos en la UTD; para lo cual es fundamental tener presente el permanente proceso genealógico de reconfiguración de las subjetividades y las prácticas de gobierno y resistencia.

Por tanto, en un haz múltiple y tenso de lógicas y prácticas de gobierno, que se entrecruzan siendo disímiles, sin dejar de serlo, podemos concluir que, el programa de gobierno instalado entre 2003 y 2013, en Argentina, por un lado se postula y construye en una lucha, contra el “anarcoliberalismo y/o anarcocapitalismo”; mientras que, por otro, se codifica en torno de diferentes prácticas dirigidas a posibilitar “marcos” para que el juego de mercado, de un modo singular y local, con diversos límites “morales y económicos”, sea posible. De modos disímiles, el Estado pretende “regular” promoviendo la inversión, el ahorro y el crecimiento con competitividad, así como controlando precios e inflación; mientras también “ordena” generando las condiciones de posibilidad para que el juego del mercado y la economía abierta sean posible: distribución y acceso de suelo, pautas culturales, técnicas, jurídicas, entre otras.

A su vez, observamos cómo la racionalidad (tecnocrática), que decidimos llamar de perfil neodesarrollista atraviesa, ante todo, los dos últimos períodos del programa de gobierno en Argentina. Si bien, no es la “modernización” el horizonte que pareciera ordenar la intervención de esta racionalidad programática en la época analizada, sí lo es, discursivamente, el despliegue de un proyecto industrialista, la maximización del consumo, el empleo y el bienestar. En virtud de esto, el Estado debe intervenir en la programación económica, pero respetando la naturaleza y las dinámicas de sus variables, entre cuyos ejemplos paradójales encontramos los discursos referidos a la independencia

política y el autoabastecimiento energético a través de la renacionalización de YPF y la inmediata apertura a las “inversiones extranjeras” de la mano de Chevron-Texaco en Vaca Muerta. Así también la realización de intervenciones en torno de la inversión, la productividad, los canales de comercio, el acceso a créditos, mientras se promueve la superación de las condiciones de estrangulamiento, ante las crisis financieras mundiales (2008 y 2011), a partir de una estrategia que haga de la industria una alternativa para obtener divisas, ante todo promoviendo la exportación, lo cual se conjugó con una limitación a la importación en relación con la racionalidad política de perfil peronista, y dando lugar al fortalecimiento del mercado interno, mientras que se realizan “inyecciones de consumo” articulando políticas de estímulo directo a la economía.

En este tejido movedizo, también identificamos cómo se abre el espacio para acciones pedagógicas y morales capaces de ayudar a superar limitaciones rutinarias y tradicionales, auto-superar situaciones que impiden el logro de lo que se da en bautizar “ciudadanía social” centrada en el “comportamiento” de las personas y, dirigidas a la inversión en capitales -humanos y sociales- en el caso de los trabajadores advenidos pobres. Dichas intervenciones locales y comunitarias son inescindibles de estrategias macroeconómicas de programación gubernamental.

Por último, la racionalidad política de herencia peronista, que regula el programa de gobierno de la época analizada, manifiesta una impronta singular en relación con las diversas formas de reconfigurarse, en las provincias y el continente en la época analizada y en la década de los 90’, respectivamente. Esto se refleja en las prácticas y programáticas políticas dirigidas a proteger al ciudadano mediante políticas de seguro social, proyecciones de pleno empleo y ciertas intervenciones en los precios, a partir de lo cual, desde el Estado se decidió poner en marcha un marcado proceso de institucionalización, mediante organizaciones e instituciones que realicen directamente sus lineamientos y garanticen, de hecho y ante todo, “la ocupación plena”.

El imaginario que atraviesa la constitución de esta forma de gobierno es el “derecho al trabajo”, entendido como un modo de “integración social” y de adscripción a las “fuerzas vivas” que participan de la orientación de la economía. Aquí aparecen elementos que se pusieron en marcha en este período de gobierno nacional (entre 2003 y 2013), como las negociaciones colectivas, las paritarias salariales, considerando que es posible diseñar planes a largo plazo y gestionar conflictos de intereses en mesas de negociación, así como en la proyección de un proceso de adecuación entre capacidades-formación y puestos de

empleo requeridos. Ahora bien, según el programa de gobierno nacional, estas relaciones referidas al empleo-trabajo se realizarían en una singular relación entre la “planificación estatal”, las contingencias globales y las capacidades-capitales-habilidades que caracterizan al sujeto nacido en estas tierras (argentinas), las cuales debieran ser fortalecidas, promovidas y posibilitadas en una integración entre los Estados, los espacios privados y sociedad civil.

Por tanto, un programa de gobierno, tal cual hemos descripto, no se construye en una línea directa entre lo que se dice y lo que se hace, tampoco en torno de una única lógica política, sino en un movedizo tejido heterogéneo y heterocrónico en cual los pensares, decires, haceres y con ello las problematizaciones y estrategias de gobierno dirigidas a las poblaciones se diversifican, reactualizan, reconfiguran y recrean acorde a condiciones específicas de realidad y posibilidad.

A continuación, en la misma línea de análisis, realizamos una reconstrucción crítico genealógico de la gubernamentalidad en la provincia de Salta. En primer lugar, referimos al momento transitorio entre 2003 y 2007, en el cual se profundizan las reformas de Estado y económicas que venían llevándose a cabo desde 1995, en un complejo tejido vincular entre la provincia de Salta y la nación. Mientras que en el 2007 se instala un programa de gobierno singular, que entrecruza el peronismo local con la propuesta renovadora-humanista.

En la Salta de la época en estudio, entre alianzas y discursos bautizados como “humanizadamente progresistas”, se profundizan y re-crean programas de gobierno vinculados a las reformas de Estado y la administración mediante la reconfiguración del rol del Estado hacia la gestión, la operatividad y la “eficiente eficacia” en el ejercicio del gobierno, el cual sólo es posible en relación estrecha con la sociedad civil y el ámbito privado para generar, según discursos oficiales, un marco político económico acorde a las exigencias del siglo XXI. Entretanto son re-codificadas prácticas de gobierno dirigidas a la descentralización, mediante la promoción de la autonomía de los municipios, lo cual nos remitirá luego a la descentralización de las políticas sociales en la provincia. Observamos cómo dicho “repliegue a lo local”, si bien puede reflejar la búsqueda de reafiliación, también responde a las “reformas del Estado” y al consecuente re-direccionamiento de las políticas públicas, dirigidas a focalizar su acción sobre poblaciones identificadas como “de riesgo”, al tiempo que la descentralización delega responsabilidades hacia la escala local.

En este juego analítico, entre el período 2011 y 2013 el programa de gobierno salteño, consideramos que promueve una re-creación del legado peronista y frentista, alzando las banderas de la “equidad y la inclusión”, en clave de justicia social y bien común, según re-traducciona del por ese entonces programa de gobierno nacional y popular. Esto se instala, a su vez, con la singularidad de ejercer el gobierno “bajo el velo de Dios y el pueblo”, en lo que damos en llamar un tenso proceso de “re-peronización local humanizada”. Este programa se proyecta mediante la apuesta a la apertura y en concordancia con los avances de la globalización y el desarrollo, así como una descentralización política hacia los espacios sociales, civiles y privados. Para una analítica de las prácticas de gobierno seleccionamos un conjunto de técnicas puestas en juego en el proceso de construcción del complejo y dinámico haz de relaciones que codifican el rol del Estado en interacciones diversas y divergentes con otros espacios de gobierno.

Por último, analizamos y describimos cómo este diagrama de poder/gobierno también se construye en torno de técnicas dirigidas a la producción sojera, minera y ante todo petrolera, en torno de lo cual hacemos una breve referencia al modo en que el modelo “extractivo exportador” es puesto en juego, sobre todo mediante el fomento y permisos de desmonte para siembra de soja y extracción de maderas, así como la promoción, aprobación y concesión de la llamada “minería sustentable” y la explotación hidrocarburífera. En tal sentido, en la provincia de Salta, la “re-nacionalización” de YPF solo repercutió en tanto YPF sería una más de las empresas capaces de realizar inversiones a nivel local, pues, no se frenaron las concesiones, ni expropiaron territorios de y/o para exploración y explotación, los cuales siguen en manos de las numerosas empresas privadas y extranjeras asentadas en la zona.

Nos detuvimos en reconstruir el diagrama de explotación, extracción, concesión dispuesto en la provincia, en tanto nos permite entablar relaciones con los modos en que la UTD Mosconi, en su búsqueda por la “reparación histórica”, se alza como una voz y espacio de lucha por el cuidado y la defensa de los recursos naturales, no sólo petróleo o gas, también madera, tierra y agua, algunos de los cuales suelen ser reciclados y protegidos por la organización. Mientras que también referimos, en el caso de la re-nacionalización de YPF, a ciertas prácticas y decisiones llevadas a cabo por las agrupaciones de trabajadores desocupados con la UTD como referente, en relación al esperado advenir del “trabajo y la reparación de y en la zona”. Varios son los senderos

que quedan abiertos en estos tramos de investigación local, los cuales nos invitan a recomenzar las preguntas emergidas y emergentes, que no pudieron ser abarcadas, en relación con las lógicas de gobierno que regulan las prácticas de reparación y las prácticas de resistencia, en los espacios comunales de unión y lucha.

En tal sentido, recuperamos el dispositivo gubernamental “Fondo de Reparación Histórica” (FHR) (Ley N° 7691), construido en torno de las regalías petroleras locales. Los fondos destinados por el FRH son utilizados para obras consensuadas con autoridades municipales y representantes de organizaciones intermedias. Observamos cómo, en el tramo de implementación de dicho Fondo, las obras no se ejecutan en su totalidad, se frenan, se olvidan y/o redistribuyen acarreado consigo diversas problemáticas y revueltas en las tramas vinculares entre gobernados y gobernantes. Hicimos especial hincapié en cómo varias son las voces que se levantan y ponen en juego en el reclamo y pedido de la correcta aplicación del FRH en la zona del Dpto. Gral. San Martín. Así como diferenciados son los modos de tratar la cuestión, ya sea por parte de los medios de comunicación, las gobernaciones, la gendarmería y las policías, las empresas privadas y las organizaciones de trabajadores desocupados, como la UTD.

Entre los discursos de “reparación”, entonces, resuena eso de que algo hay que “arreglar, en tanto se ha roto”, en los lugares en los cuales el FRH interviene. Esto se vincula, con las historias locales de pobreza y desocupación, sobre todo luego de la privatización de YPF, tras lo cual hicimos especial hincapié en las prácticas de resistencia re-emergentes frente al uso que el FRH realiza del dinero proveniente de regalías hidrocarburíferas. Mientras que, estas prácticas se entrecruzan con otras dirigidas a la represión (directa e indirecta) ante todo para con los movimientos de trabajadores desocupados de la zona. Represiones atravesadas de olvidos y pretensiones de desmovilización de las organizaciones en pie de lucha, utilizando el instrumento retórico que pretende, parafraseando al gobernador (2013) “quitarles peso comunal, peso político y peso gubernamental en la zona”, lo cual como se vio tiene una marcada injerencia en la construcción de los programas de gobierno dirigidos a la pobreza y los pobres desocupados.

De este modo, llegamos al **Capítulo 4**, el cual fue construido en torno de los avatares de la gubernamentalidad, en continua discontinuidad con lo trabajado en el capítulo 2 y 3 respectivamente. En él nos orientó el objetivo de analizar cómo se ejerce el gobierno de la pobreza y las poblaciones pobres – desocupados - en el marco de las lógicas y las

prácticas que configuran las políticas sociales públicas, en la Argentina y Salta, (2003-2012/13) y, en simultáneo, como en el espacio de unión, de la UTD Mosconi se configuran prácticas y lógicas – transaccionales - de resistencia “a ser gobernados de ciertos modos”.

Al inicio, identificamos cómo en la Argentina del período trabajado, la transformación de los trabajadores en pobres reinstaló la cuestión social en términos de pobreza de un modo singular, puesto que lo hizo recuperando la impronta “nacional” del discurso de gobierno. En tal sentido, desde los tramos discursivos del gobierno de Estado se sostiene que el trabajo es el mejor “antídoto para luchar contra la pobreza”; a partir de lo cual consideramos que el gobierno de la pobreza se ejerce en el complejo dominio de “lo social” y por la “unidad nacional”, promoviendo lo que dimos en llamar la complementación paradójica entre sujetos jurídicos y sujetos económicos, en los trazos enunciativos del Discurso local de Desarrollo Humano.

A modo de organizar la exposición y dar cuenta de lo antedicho, realizamos un recorrido crítico respecto de lo que llamamos políticas sociales “humanizadas e inclusivas”, entrecruzando las prácticas y lógicas con los discursos y técnicas contruidos en torno del desarrollo, la justicia, la comunidad y la solidaridad emprendedora. Observamos que, desde mediados del 2003, siguiendo las líneas del PNUD, ya no se trata de políticas sociales focalizadas y centradas en los mínimos y básicos, como en las décadas anteriores, si no de un salto logrado por la ampliación de oportunidades. Según tramos enunciativos del programa en cuestión, el suelo común de equidad y con ello la ampliación de oportunidades, debe ser garantizado por la protección del Estado, mediante la administración de “básicos” a partir de los cuales poder re-integrar-se en la sociedad y/o lo social re-inventado. En este programa de gobierno se promueve el postulado “poder vivir mejor”, para lo cual es central tener acceso a provisiones y al trabajo-decente.

La actividad protagónica del Estado, según discurso oficial, remite a la regulación y el orden que habilita la autorrealización para el progreso social y el crecimiento económico, con sustentabilidad y equidad. Por tanto, en el resonar de los saberes analizados en torno de la Escuela de Friburgo y la economía social de mercado, la intervención del Estado en pos de una política de equidad y justicia social, no sólo debe ser posterior (compensatoria y paliativa) a la acción del mercado, sino que debe ser previa y/o concomitante para evitar inequidades en el mal funcionamiento del mismo. Esto implica, entre otras cuestiones evitar situaciones de inequidad derivadas de posiciones dominantes, como las dispuestas

por los grandes monopolios y/o corporaciones, tras lo cual las políticas de equidad deberían velar de manera preventiva, según enunciaciones oficiales por el “adecuado funcionamiento de los mercados en condiciones competitivas.”

En dicho diagrama entra en juego el dispositivo de la economía social, en lo que consideramos el entrecruzamiento de un gobierno ético, moral y económico dirigido a las poblaciones pobres y desocupadas. En torno de dicho dispositivo recuperamos el vínculo con las diferentes estrategias asumidas por el gobierno desde el 2003, a partir de las cuales se tejen redes vinculares y transversales para con los movimientos de trabajadores desocupados, entre cuyos resultados encontramos la elaboración del Proyecto Manos a la Obra.

En sintonía reconstruimos algunos de las técnicas de gobierno, que en el dispositivo de la economía social y el desarrollo local humanizado, se dirigen a los constituidos como sujetos empleables e inempleables, decentes e in-decentes, entre la familia y el trabajo, a partir del año 2004. En tal sentido, nos detuvimos en la instalación del Plan Familia, mientras analizamos el Plan Manos a la Obra y Programa Nacional de Capacitación y Empleo, en torno de los cuales observamos una ejercicio “microconductual de gobierno” al que se le suma la noción y tarea de la “corresponsabilidad”, en la cual se sustentan estas políticas “sociales”, que promueven la responsabilización de los beneficiarios. Esto es posible entre las “transferencias condicionadas, los derechos sociales y los contratos sociales”, que se entrecruzan con los discursos de Estados protagónicos y de sujetos responsables.

En este tramo de análisis, realizamos una rigurosa analítica de los mecanismos de gobierno, en la línea del “trabajo decente”. Este último, acorde a lo dispuesto por los Organismos Internacionales de Crédito e Intervención, es comprendido como meta hacia la cual se tiende, traducida en el marco de la “equidad” y la autorregulación de la propia vida en un suelo común de “oportunidades” que hacen del ingreso, no sólo un bien material, también social y humano. Los mecanismos de gobierno en esta clave se dirigen a los pobres desocupados, ya sea en la figura de “inempleables y/o vulnerables, potencialmente empleables”, bajo la órbita del MDS, entre los cuales recorrimos la llamada “Marca Registrada Argentina Trabaja” con todos sus subprogramas y aquellos dispositivos y técnicas dirigidos a los advenidos “sujetos empleables”, desplegados en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este esquema de gobierno dirigido a las poblaciones desempleadas y desocupadas pobres, parece sufrir

un viraje con la AUH a partir del 2009, la cual si bien ha logrado expandir y transformar el perfil del “pobre intervenido” hacia un universo más amplio, lo ha realizado bajo la lógica de la transferencia y la condicionalidad, la inversión en capitales y el acceso a derechos sociales para pobres.

En el interior de los dispositivos de intervención de la economía social, la dimensión ética y jurídica se conjugan con la económica, ya que el mercado sigue ordenando las prácticas, a partir de lo cual hacer de sus asociaciones económicas locales, sociedades empresariales, pero, con la presencia de un Estado que interviene mediante créditos y gestiones institucionales precisas, así como ejerce un fuerte control sobre la población, generando mapeos, índices, estadísticas y seguimientos. Un Estado que produce las condiciones generales de marco para que el “juego” sea posible, en el proceso de re-inversión de lo social mediante la eficaz gestión de la pobreza, acorde a la singularidad que imprimen los programas dirigidos a la unidad nacional, la soberanía popular y la ciudadanía social.

En concordancia con lo ya señalado, en la Argentina de la época analizada, las racionalidades políticas sociales, benefactoras y promotoras del capital humano, en clave de desarrollo, se entrecruzan y recrean en los procesos y las prácticas de construcción de espacios sociales y comunitarios, a partir de lo cual se re-inventa lo social, mediante el gobierno de la pobreza. Esto implica la construcción y gestión de “sujetos de derecho”, lo cual se realiza poniendo en juego el gobierno económico de las poblaciones a través de DDH local y sustentable, potenciando al sujeto económico, agente activo de su propio desarrollo, trabajador y consumidor.

En igual línea de trabajo, referimos a los programas de gobierno que, en el ámbito de las políticas sociales públicas, se dirigen a las poblaciones pobres y desocupadas, en Salta (2003-2012/13). Analizamos cómo, desde sus inicios, los programas de gobierno provincial dirigen las prácticas de intervención social a la “lucha contra la pobreza”, reafirmando que la “acción social” es la mejor herramienta. Señalamos el carácter “focalizado y descentralizado de las políticas de intervención”, en torno de poblaciones pobres claramente identificadas y clasificadas. Observamos cómo los diversos dispositivos y técnicas de gobierno se construyen en torno de una heterogénea y paradójica vinculación entre lo ético y lo ecológico, lo saludable y lo higiénico, la contención y el desarrollo humano, la libertad, la creación y el emprendedurismo, la intervención y la autogestión, la educación y la inversión en capitales humanos y sociales. Mientras que

estas prácticas de gobierno se ejecutan en el trazo de lógicas dirigidas a la “protección, ayuda y asistencia”, según el discurso oficial, acorde a las labores realizadas por Eva Perón, instalan un marco jurídico dirigido por un lado a la “tutela asistencial”, y por otro, aportan a la construcción de lo que dimos en llamar “sujetos – emprendedores - de derecho”.

No se trata, simplemente de un proceso de “privatización” de lo público, como pretendían los Organismos Internacionales apenas instalado el DDH y el proceso de des-socialización en los 90’, también se pone en juego un ejercicio de gobierno indirecto, específicamente, a través de la comunidad, construida como espacio de contención, riesgo e intervención que tiene como metas constituir “sujetos ciudadanos”, ya no a través de derechos – fundamentales -, sino de “emprendimientos y empoderamientos autogestivos”.

Estas prácticas de gobierno pretenden enmarcarse en el discurso de la “inclusión y la equidad” el cual, acorde a los matices singulares de las racionalidades políticas que regulan el programa de gobierno provincial, no resulta sinónimo de “igualdad”, ya que el gobierno ejercido directamente o indirectamente a través del Estado y/o de la sociedad civil, genera las condiciones, los marcos, el medio ambiente para que el juego de la desigualdad sea siempre posible. En el caso de los pobres, se trata de un juego entre mínimos y márgenes, entre supervivencias, autoconsumos y tutelajes “promocionales”. La sociedad civil, entonces, sigue siendo considerada como el dominio transaccional (Foucault, 2007), en el cual se ejerce el gobierno “indirecto” de lo público, que cobra singularidad en Salta, bajo el valor “natural” de la solidaridad.

En este sentido, reconstruimos los vínculos entre Estado y sociedad civil, en referencia a la des-centralización de las Políticas sociales en Salta (2008-2010; 2011-2013), mediante lo que dimos en llamar un proceso de gubernamentalización del gobierno de Estado, en el cual se pone a jugar lo ya enunciado respecto del rol re-adquirido por los municipios. Identificamos como proceso de gubernamentalización del gobierno de Estado aquél que pone en cuestión los propios mecanismos y se instrumentaliza mediante dos conjuntos de tecnologías, entre las cuales se encuentran las de ciudadanía. En tal marco se ensamblan las prédicas y prácticas en torno de la eficiencia de servicios públicos, el acercamiento a los barrios y las comunidades por medio de planes, programas y proyectos territorializados. Así como se resaltan los elogios a la co-gestión entre el Estado y la sociedad civil, la promoción de canales formales de institucionalización de la

participación social, la democracia participativa y la insistencia en la construcción de “ciudadanía activa y responsable”, en la traducción local del DDH.

En este recorrido realizamos una reconstrucción de prácticas específicas de gobierno materializadas en diferentes técnicas programáticas de intervención, como programas, planes y proyectos. Profundizando en los mecanismos de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres y desocupadas, nos detuvimos en lo que da en llamarse “el triángulo de la responsabilidad social empresaria en relación con las empresas/fábricas sociales y los diferentes programas de capacitación” dirigidos, ante todo, a jóvenes – empleables - desocupados.

Hicimos especial hincapié en cómo, las técnicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas re-codifican el rol del Estado en Salta, no como “generador de empleo”, sino de mecanismos que posibiliten, por un lado la construcción del marco para que el desempleo no sea un potencial riesgo de “quiebre del orden establecido”; y por otro, para que el “sujeto desempleado” advenga, por sí mismo y a partir de sus capacidades sujeto capaz de empleo y autoempleo. Observamos, a su vez cómo, en el proceso de construcción del “perfil del beneficiario, de las condicionalidades de acceso y de la distribución” se recupera de un modo negativo la figura del “piquetero”, acorde a las lógicas y tramos relacionales trabajados (en el capítulo 3), en tanto son re-utilizadas, re-semantizadas y recreadas las figuras de estos sujetos considerados “mal arriados y de malas costumbres”, para reconstruir los modelos de sujetos empleables moral y políticamente correctos.

Por su parte, en este marco de “reciprocidad económica”, que apunta al desarrollo nacional según la RSE, resuena lo sugerido por la DSIC según lo cual la empresa es tratada como una persona que debe ser humanitaria, es decir, se troca la relación capital – trabajo (económica), en una relación ética. Se obtura la obtención de plusvalor. Más aún, se considera que el empresario tiene derecho a generar el mismo y que en todo caso debe tener alguna consideración “de misericordia” hacia los pobres. El proceso de “construcción y producción” de pobres y pobreza implica, entre otras cuestiones, en el ejercicio de la tecnología de gobierno (RSE), otorgarles limosnas. Mientras que las grandes empresas, según lo señalado, en torno de la libertad individual y el acceso a oportunidades en un cruce con la responsabilidad individual, quedan exceptuadas del vínculo de explotación, y de sus responsabilidades para con el medio ambiente y los seres humanos mismos. Esto quiere decir, que la RSE no corresponde a los pobres, sino que

actúa como tecnología de gobierno de las poblaciones, ya que tiene para con las poblaciones pobres y la pobreza el efecto señalado de caridad, producción empresarial y paradójal responsabilidad ética.

Por tanto, en clave de capital humano, en la tensa y múltiple relación entre trabajo decente, empleabilidad, inempleabilidad, responsabilidad social empresaria y empresas/fábricas sociales, se trata, en el caso de las poblaciones pobres y el problema de la pobreza en la Salta contemporánea, de la puesta en juego de mecanismos de gobierno que conjugan, por un lado la intervención del Estado en la generación de marcos y condiciones básicas e iniciales para que los sujetos puedan “autoregularse, autogobernarse, autogetionarse” y, por el otro, la radicalización de la forma empresa a nivel individual y local societal, dirigida a la configuración de “sujetos empresarios de sí”. Así se justifica y construye también el discurso gubernamental de la “cultura del trabajo, de la decencia del trabajo, de la autosuperación mediante el trabajo”.

De modo que, según resonares de la DSIC en el trazo de la RSE, el desarrollo “humano y mundano” serían posibles, en tanto, el propio ejercicio de la libertad les brindara, a los/as trabajadores/as y pobres, oportunidades diferentes. Cuestiones éstas que abren diversas aristas de análisis por des-andar, en el salto hacia otros comienzos, ante todo dirigidas a analizar las relaciones existentes entre el dispositivo de la economía social, la cuestión del trabajo decente y de la responsabilidad social empresaria, en tanto mecanismos de gobierno dirigidos a poblaciones desocupadas y pobres, bajo el supuesto de que las políticas públicas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos, las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento más amplios, en medio de las cuales están inmersas.

Por último, a lo largo del proceso de análisis realizamos una breve referencia, que pretende ser retomada en investigaciones por-venir, a las redes gubernamentales y vinculares entre nación y provincia recuperando las prácticas técnicas de, ante todo trabajadores sociales y promotores territoriales, sujetos que a lo largo y ancho de la provincia realizan las tareas cotidianas y concretas de intervención en el territorio y en relación directa con las poblaciones, que en este juego de gobierno y, según enunciaciones nativas “quedan vivas”.

De este modo llegamos al último apartado, en el cual en un ejercicio relacional con el resto de los capítulos, hicimos puntual referencia a las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi (2003-2013), habiendo partido del supuesto de que las prácticas de lucha, resistencia, gobierno y autogobierno local de la UTD se re-crean astuta

y acertosamente, en realidades y condiciones no siempre favorables, ni fáciles de afrontar para poder “trabajar, sobrevivir y vivir con dignidad”.

Observamos cómo la subjetividad trabajadora Ypefiana ante todo, es recreada en relación con la organización de las tareas y trabajos, así como para con la obtención de recursos, mientras que se re-configuran las relaciones y consideraciones en torno de los “estados” ya que, según perspectivas nativas existen “el Estado gobernante, que somos todos nosotros” y “el que administra”, ese que en muchos casos “nos obliga a morir”. Así rastreamos cómo, en un diagrama de prácticas y lógicas singulares de diferenciación y afirmación, la UTD construye su autonomía como “práctica de libertad” (Foucault, 1994d), mientras ejerce un autogobierno local en el espacio de unión que adviene siendo. En el cotidiano, entre propuestas, prácticas concretas y memorias activas, son rediscutidas y reconfiguradas, entre otras, las programáticas gubernamentales de perfil “inclusivo” en torno del “trabajo decente”. Esto se refleja en el modo de re-construir, por ej.: las disposiciones encontradas en los Manuales que se le entregan a la organización para la ejecución de “planes y programas” bajo su gestión, así como en la re-edición de la organización de las cooperativas, los liderazgos, los movimientos en el interior de los espacios organizados de trabajo, la vinculación con los excedentes, con la producción y ejecución de las tareas, así como con el consumo.

En este ejercicio genealógico y crítico reconstruimos la experiencia de la Fundación de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (FUNDATRAD), que desde 2006 y con mayor visibilidad desde 2009 forma parte de la UTD. Espacio que, construido sin permisos y de modos propositivos inmediatos, como la mayoría de las prácticas que dan forma y deforman a la UTD, pretende dar respuesta a un importante vacío que los mantenía en las márgenes de lo que podríamos llamar la “autoexplotación”. Puesto que la fundación, que en el año 2013 contaba con más de 600 integrantes, gestiona ante ANSES advenir empleador y de este modo pagar lo que las enunciaciones nativas llaman “el salario” (asignaciones familiares), en un paradójal vínculo jurídico con la provincia de Salta. FUNDATRAD resulta, en los marcos normativos de ANSES, una “empresa”, la cual según sus integrantes no produce capital económico-productivo, sino capital social, por lo que son perseguidos, controlados y sesgados (por los entes de regulación y control) para y en el ejercicio de sus prácticas cotidianas.

La experiencia de la Fundación, según lo descripto y analizado pone en juego, en jaque y de manifiesto, el movedizo haz de relaciones que la UTD ha ido construyendo a lo largo

de los años y de los procesos de lucha. Puesto que, se negocia y se establecen vínculos laborales de gestión, organización y trabajo con diferentes espacios instituidos y no instituidos, estatales y no estatales, religiosos, deportivos, empresariales, entre otros, mientras que se resubjetivizan en relación con los roles a cumplir, las tareas a desarrollar, las responsabilidades a distribuir y/o acaparar. La Fundación, entonces, construida bajo la modalidad organizativa de la UTD, marca una singularidad, que pretendemos retomar y profundizar en nuestro re-comenzar, en tanto signa una diferencia del hoy respecto del ayer en el espacio de Unión de la UTD Mosconi; puesto que se ponen a jugar de modos astutos las lógicas de la legalidad, la formalidad y el patronazgo, entre la lucha infinita por trabajo, en los senderos finitos del viviendo.

En estos juegos de gobierno y resistencia, los trabajadores desocupados unidos en la UTD resisten a “ser gobernados de ciertos modos” y con ello, según enunciaciones nativas, a “ser incluidos”, en el marco de los parámetros y lógicas dispuestas, ante todo para con los Estados, en un tenso y complejo tejido transaccional. En tal sentido, las redes vinculares entre gobernados y gobernantes se construyen en un diagrama relacional de prácticas de resistencia, impugnación, autonomía y transacción, así como de aceptabilidad, mutua configuración, concesión, necesidad y libertad.

Por lo tanto, las prácticas políticas de resistencia y autogobierno de la UTD resultan productivas y creativas, *poiéticas* y *poéticas* diríamos, lo cual se resume en las siguientes palabras de uno de los referentes de la UTD: “...*nuestro poder es la creatividad, no la fuerza...*” (J. Pepino Fernández, entrevista, julio: 2012). Juego éste en el cual emergen y se instalan procesos de invención siempre fluida, en los cuales hay papeles que pueden modificarse, reglas que pueden transgredirse y/o constitución de espacios en torno de la transgresión y la clandestinidad, así como la transacción y la aceptabilidad, la mutua configuración, la concesión, la necesidad y las libertades. Esto es, en la puesta en juego de un haz de relaciones, que pasando de un punto al otro ejercitan un proceso que a su vez también pasa, se mueve se desarma y se rearma, de un modo inmediato a veces y provisorio otras, a partir de lo cual se impugna el orden que se les dispone y/o gobierna, en un espacio de simultaneidades heterogéneas y heterocrónicas, mientras también se impugnan a sí mismos, en el constante proceso de des-sujeción crítica, entre discursos múltiples e identidades heterogéneas.

Podemos susurrar entonces, que las redes vinculares entre gobernados y gobernantes se construyen en un diagrama relacional de prácticas de resistencia, impugnación, autonomía

y transacción, así como de aceptabilidad. En el proceso de problematización de las relaciones establecidas, de una genealogía de las prácticas y de los procesos de subjetivación la UTD, como espacio singular y heterogéneo no se agotan, en absoluto, las prácticas de libertad. En su localidad, territorialidad y cotidianeidad, la UTD abre espacios de libertad concreta y con ello de transformaciones posibles.

III-

Para concluir, consideramos que nuestra tesis realiza aportes al campo de las ciencias humanas en general, pero en particular se torna relevante para los estudios sociales. En tanto, el modo de abordar las problemáticas sugeridas resulta singular desde las perspectivas señaladas en el ejercicio de *un pensar situado en nuestra región*, trazado a su vez, en torno de la filosofía política como eje de inspiración epistemológica en un permanente proceso de revisión de lecturas, en torno de las cuales nos apropiamos de los modos disímiles de hacer política, en nuestro presente. A su vez, nos nutrimos de otros campos del saber, como la sociología, la historia, la antropología política y la ciencia política, que han mirado las relaciones entre gobernados y gobernantes, las prácticas de gobierno en relación con el Estado y los movimientos sociales, a partir de lo cual situamos y profundizamos nuestra investigación, en y desde una perspectiva pluridisciplinar y crítica.

Ante todo, en vinculación dinámica con la perspectiva de gubernamentalidad, un abordaje genealógico de las prácticas en relación con un cruce singular de perspectivas y técnicas metodológicas cualitativas centradas en la etnografía, la perspectiva del actor y la IAP, nos brindaron poderosas herramientas de análisis para comprender las prácticas de los trabajadores-desocupados y sus lógicas de organización, resistencia y vida, así como nos habilitaron a indagar sobre los mecanismos de regulación, control y configuración subjetiva utilizados desde las estrategias de gobierno, ante todo.

En tal sentido nuestro trabajo, en el campo de las Ciencias Humanas, posee también una importante potencialidad para reiterar una vez más aquellas preguntas orientadas a desnaturalizar las actuales formas de vinculación entre gobernados y gobernantes, entre las tramas públicas del poder/gobierno y las prácticas de autogobierno y organización comunal del trabajo, las cuales resultan complejizadas y atravesadas por las diversas teorías de Desarrollo humano, capital humano, trabajo decente, entre otras.

A su vez, en este camino del pensar pudimos experimentar un singular proceso que nos permitió desentrañar, de modos concretos e históricamente situados a través de los

acontecimientos, a aquellos acontecimientos, que nos condujeron a construirnos y reconocernos como sujetos de lo que hacemos, decimos y pensamos, a partir de lo cual poder extraer, parafraseando a Foucault, “de la contingencia, la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar del mismo modo”, en el proceso analítico de relaciones de poder, gobierno, verdad y subjetivación.

En síntesis, aseveramos la pertinencia pluriversal y pluritópica de las Ciencias Humanas, cuya potencia nos posibilita otorgar centralidad en el análisis relacional de las prácticas experienciales concretas, cotidianas y locales de gobierno y resistencia. Comprendiendo así, cómo los sujetos resultan contruidos entre sí, de unos hacia otros y hacia sí mismos, cómo actúan y dan sentidos a sus prácticas y mundos en diferentes condiciones de realidad. De este modo, las perspectivas que orientan y moldean el trabajo realizado, abonan para desentrañar un espacio de problemas emergentes y actuales, en torno de los cuales es menester iluminar la amplitud y multiplicidad de modelaciones y re-configuraciones singulares de las relaciones entre poder/gobierno y resistencia. Esto implica la apuesta a una práctica problematizadora, que contribuya a desnaturalizar y des-sustancializar, no sólo las prácticas de gobierno, resistencia y sus lógicas, sino también nuestra conducta presente-actual.

BIBLIOGRAFIA

AGUILAR, M.A Y VÁSQUEZ, E. (1997) De YPF a la ruta: un acercamiento a Tartagal. Ponencia presentada en el XXI. Congreso de ALAS. Brasil Comissao de Trabalho N° 13.

ALONSO, R. N., (2016) *Historia del petróleo del norte argentino: desde Pablo Sardicat de Soria a Francisco Tobar*. Salta: Mundo Gráfico Salta Editorial.

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2015). “Estrategias contra la pobreza”, discurso del Desarrollo Humano y “nuevas” focopolíticas: de las políticas territoriales a los “derechos de pobres”. En: Álvarez Leguizamón, S. (Comp.), *Neocolonialismo y capitalismo Políticas públicas, pobreza, racismo y resistencias subalternas (el Caso de Salta)*. Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones. [Pp.: 67-101].

(2010a). Representaciones e intervenciones sobre la pobreza en Salta (segunda mitad del siglo XX). En: Álvarez Leguizamón, S. (comp.) *Poder y Salteñidad, Saberes Políticas y representaciones sociales*. Salta, Argentina: CEPIHA, Universidad Nacional de Salta.

(2008). *Pobreza y Desarrollo en América Latina*. Salta, Argentina: EUNSA. Ed. de la Universidad Nacional de Salta.

(2006). La invención del desarrollo social en la Argentina: historia de opciones preferenciales para los pobres. En: ANDRENACCI, L. (Comp.) *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo. [pp. 81-124].

(2005a). La invención del desarrollo social en la Argentina historia de “opciones preferenciales por los pobres”. En: Luciano Andrenacci (comp.) *Problema de políticas sociales (y la política social como problema)*. Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina: Prometeo, Universidad Gral. Sarmiento.

(2005b). El discurso del desarrollo y las representaciones sobre pobres y pobreza: ciencias sociales y Agencias de Desarrollo en América Latina (1950-1980). En Álvarez Leguizamón, S. *Los discursos de la pobreza y el Desarrollo Humano*, mimeo.

(2005c). Los discursos minimistas sobre las necesidades básicas y los umbrales de ciudadanía como reproductores de pobreza. En: *Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discursos y actores*. Programa CLACSO-CROP de estudios sobre Pobreza en América Latina y el Caribe.

(2005d) Connotación política sobre el discurso hegemónico de la pobreza y el desarrollo humano: La invención del desarrollo humano (Historias de un desarrollo biológico participativo a escala humana. En: *La Pobreza un Problemas de todos*. Memorias del Seminario Internacional. Rivera López, O. (compilador) Guatemala: FLACSO.

(2004). La pobreza: configuraciones sociales, relaciones de tutela y dispositivos de intervención. (Salta primera mitad del siglo XX). En: *Abordajes y Perspectivas*. Concurso Provincial de Ensayo 2003. Segundo Premio. Salta, Argentina: Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

(2002). Capital social y concepciones de la pobreza en el discurso del Banco Mundial, su funcionalidad en la “nueva cuestión social. En: Andrenacci, L. (org.) *Cuestión Social en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones al Margen, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento. [P.p. 143-163]

(2000) Políticas de desarrollo social, transformaciones y paradojas. En: Susana Hintze (comp.) *Estado y Sociedad. Las políticas en los umbrales del siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA. Centro De Estudios Avanzado. UBA.

(S/D) Percepciones de las nominaciones de la Pobreza, la focalización y la participación: historias de luchas clasificatorias.

ÁLVAREZ LEGUIZAMÓN, S. y VILLAGRÁN, A. (2010b). Artes de gobierno y estrategias de legitimidad en la etapa neoliberal en Salta, el gobierno de Juan Carlos Romero. En: Álvarez Leguizamón, S (comp.) *Poder y Salteñidad, Saberes Políticas y representaciones sociales*. Salta, Argentina: CEPIHA, Universidad Nacional de Salta.

ANDRENACCI, L. (Comp.). (2006). *Problemas de política social en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo, Universidad Gral. Sarmiento.

ANSALDI, W. (2003). Democracias de Pobre, Democracias Pobres, Pobres Democracias. En: *Temas y Debates*. Año 7, N° 6 y 7. [Pp. 27-43]. Rosario, Santa Fe, Argentina.

ARROYO, D. (1997). Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina. En: García Delgado (Org.) *Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: FLACSO-UBA. [pp. 315-328].

ASAD, T. (2008) ¿Dónde están los márgenes del Estado? En: *Cuadernos de Antropología Social*, N° 27. Buenos Aires, Argentina: SEANSO FFyL-UBA.

AUYERO, J. (2002a). La vida en un piquete. Biografía y protesta en el sur argentino. En: *Apuntes de Investigación del CECyP*, N° 8. Buenos Aires, Argentina.

(2002b). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Buenos Aires, Argentina: Libros del Rojas-UBA.

AVALOS, D. (2012). *Cincuenta Editoriales...y ninguna flor. Cinco años de urtubeicismo 2008-2012*. Salta, Argentina: Ediciones el Cuarto.

BALBI, F. y BOIVIN, M. (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno. En: *Cuadernos de Antropología Social*. N° 27. ICA-Sección Antropología Social, FFyL, UBA. Buenos Aires, Argentina.

BALBI, F. (2013). Las concepciones de política como pragmatismos cognitiva y moralmente informados: consideraciones comparativas en torno de algunas prácticas políticas recurrentes entre los peronistas y los radicales. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Investigación en Antropología Social. Sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL-UBA. Buenos Aires, Argentina.

(2012). La integración dinámica de las 'perspectivas nativas' en la investigación etnográfica. En: *Intersecciones en Antropología*, N°14. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina.

(2010). Perspectivas en el análisis etnográfico de la producción social del carácter ilusorio del Estado. En *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*, N°3. Mar del Plata, Argentina.

(2007) *De leales, desleales y traidores. Valor moral y concepción de política en el peronismo*. Buenos Aires, Argentina: Antropofagia.

BARBOSA, J. A. (2009). Políticas de empleo neoliberales en América Latina: Chile durante el gobierno de Pinochet (1973 - 1990) Argentina y Salta en el auge del menemato (1995 - 1997). En: *Revista Escuela de Historia*, vol. 8, N° 2. Salta, Argentina, Jul./dic. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166990412009000200005&lng=es&tlng=es. Consultado septiembre, 2012.

BECCARIA, L. (2007). Pobreza. En: Torrado, S. (Comp.) *Población y bienestar en la Argentina del primer al segundo bicentenario. Una historia social del Siglo XX. Tomo II*, Buenos Aires, Argentina: Edhasa.

BENCLOWICS, J. (2013). *Estado de Malestar y Tradiciones de Lucha. Genealogía del Movimiento Piquetero de Tartagal-Mosconi (1930-2001)*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

BIDET, J. (2011) *L'Etat-monde, Libéralisme, Socialisme et Communisme à l'échelle globale, Refondation du marxisme*. Paris: PUF.

BLAISTEIN, N. y SALVIA, A. (2011). *Derechos sociales para todos y entre todos: hacía una ciudadanía plena*. Buenos Aires, Argentina: Ed. AMIA.

BONIFACIO, J. L. (2011). *Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén*. Buenos Aires, Argentina: El Colectivo.

BOURDIEU, P. (2000). Conferencia: El campo político. En: *Propos sur le Champ politique*. Lyon, Francia: Presses Universitaires de Lyon.

(1997). Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En: *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona, España: Anagrama.

BURCHELL, C. G. y MILLER, P. (1991). *The Foucault effect. Studies in Governmentality*. The University of Chicago Press.

CALABRIA, A.; CALERO, A.; D'ELIA, V.; GAIADA, J. y ROTTENSCHWEILER, S. (2011). Conditional cash transfers in Argentina: Universal Allocation per Child for Social Protection. ANSES. Recuperado de: <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/36092> Consultado marzo, 2012.

CAMPANA, M. (2012). *Medicalizar la asistencia. Asistencializar la salud*. Rosario, Argentina: Prohistoria.

CARENZO, S. y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.I. (2011). Dossier: El Estado: otras miradas El asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad: "cartoneros/as" en la metrópolis de Buenos Aires. En: *Revista Argumentos*. Vol.24, N° 65. [Pp.: 171-193]. México.

CASTEL, R. (2004). *La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Manantial.

(1997). *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica delariado*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

CASTORIADIS, C. (1998). La cuestión de la Autonomía social e individual. Texto aparecido en *Contra el poder*. Madrid, España. Junio.

CASTRO, E. (2004) *El vocabulario de Michel Foucault*. Buenos Aires: Ed. Prometeo, Universidad Nacional de Quilmes.

CASTRO GÓMEZ, S. (2011). *Crítica de la Razón Latinoamericana*. Bogotá: Siglo de Hombres editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.

(2010). *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Bogotá, Colombia: Siglo de Hombres editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.

(2007). Michel Foucault y la colonialidad del poder. En *Tábula Rasa*. N°6: [pp.153-172]. Bogotá, Colombia

(2005) *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá, Colombia: Siglo de Hombres editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar.

(2000) Ciencias Sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro. En: Lander Edgardo (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, UNESCO.

CHARTIER, R. (2006) *Escribir las Prácticas. Foucault, de Certeau, Marin*. Bs. As.: Ed. Manantiales

CORAGGIO, J.L. (2007). Crítica de la política social neoliberal: las nuevas tendencias. Ponencia presentada en el Congreso de ciencias Sociales de América Latina y el Caribe. FLACSO. Quito, Ecuador.

(2004). *De la emergencia a la estrategia. Más allá del “alivio a la pobreza”*. Buenos Aires, Argentina: Espacio.

CORTINA, A. y CONILL, J. (1998). *Democracia Participativa y sociedad civil. Una ética empresarial*. Bogotá, Colombia: Fundación Social Siglo del Hombre Editores.

DE CERTEAU, M. (1995). *La Toma de la Palabra y otros escritos políticos*. México: Institutos tecnológicos y de Estudios Superiores de Occidente. Universidad Iberoamericana.

(2000). *La Invención de lo Cotidiano. Tomo I. Artes de Hacer*. México: Institutos tecnológicos y de Estudios Superiores de Occidente. Universidad Iberoamericana.

DE MARINIS, P. (2005). 16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es). En: *Papeles del CEIC*. N°15. España: Universidad del País Vasco.

(1999). Gobierno, Gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaultianos (Un ensayo sobre la racionalidad política del neoliberalismo). En: Ramos Torre y García Selgas (eds.) *Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de teoría social contemporánea*. Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas.

DEAN, M. (1999). *Governmentality. Power and rule in modern society*. London: Sage Publications.

(1991). *The constitution of poverty: toward a genealogy of liberal governance*. London: Routledge.

DELEUZE, G. (2008). Epílogo: el ascenso de lo social. En: Donzelot, J. (2008) *La policía de la Familia. Familia, sociedad y poder*. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina.

(1995). Posdata sobre las sociedades de control. En Christian Ferrer (comp.) *El Lenguaje Literario, tomo 2*. Montevideo, Uruguay: Ed. Nordan.

(1987). *Foucault*. Bs As.: Edic. Paidós.

DINERSTEIN, A. (2010). Autonomía en América Latina: entre la resistencia y la integración. Ecos de la experiencia de los Piqueteros. Recuperado de: http://cdj.oxfordjournals.org/content/suppl/2010/06/28/bsq029.DC1/bsq029_supp.pdf. Consultada septiembre, 2012.

DOBAÑO, P y LEWKOWICZ, M. (Comps.) (2005). *Cuatro Décadas de Historia Argentina (1966-2001)*. Buenos Aires, Argentina: Proyecto Editorial.

DONZELOT, J. (2007). *La invención de lo social*. Buenos Aires: Nueva Visión.

(1990). *La policía de la familia*. Valencia, España: Artes Gráficas Soler.

(1984). *L'invention du social*. Paris, Francia: Fayard.

(1980). *La policía de la familia*. Barcelona, España: Pre textos editorial.

EQUIPO DE EDUCACIÓN POPULAR “PAÑUELOS EN REBELDÍA” (2006). *Mosconi: Cortando las rutas del petróleo*. Buenos Aires, Argentina: Colección Movimientos, Ed. Madres de Plaza de Mayo. Colección Libre.

ESCOBAR, A. (1998). *La Invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá, Colombia: Grupo editorial Norma.

ESPING-ANDERSEN, G. (1990). *Los tres mundos del capitalismo de bienestar*. Princeton: Princeton University Press.

EUCKEN, W. (1956). *Fundamentos de Política Económica (Grundlagen der Wirtschaftspolitik)*. Madrid, España: Rialp.

EWALD, F. (2006). Advertencia. En: Foucault, M. *Seguridad, territorio y población*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

(1991). Insurance and Risk. En: Burchell, Colin Gordon and Miller. *The Foucault effect. Studies in Governmentality*. Chicago: The University of Chicago Press.

(1986). *Histoire l'Etat providence*. París: Grasset.

FALS BORDA, O. (2015). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Buenos Aires: CLACSO – Siglo Veintiuno Editores.

FASSIN, D. (2003). Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres y los inmigrantes en Francia. En: *Cuadernos de Antropología Social*. N° 17. [pp. 49-78]. Buenos Aires, Argentina.

FERNÁNDEZ, J.C. (2008). Recuperar la autonomía es recuperar el Estado. En: *El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Antropofagia.

FERRAUDI CURTO, M. C. (2006). Lucha y Papeles en una organización piquetera del sur de Buenos Aires. En: Míguez, D. y Seman, P. (editores) *Entre Santos Cumbias y Piquetes. Las Culturas Populares en la Argentina reciente*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

FLORES, A. (2012). *Biopolítica: derivas de una noción*. Ponencia presentada en las Jornadas CEFISA. Salta, Argentina.

FOUCAULT, M. (2008). *Maurice Florence: Autoretrato (1984)*. Buenos Aires, Argentina: Edit. Macedonia.

(2007). *Nacimiento de la Biopolítica*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

(2006). *Seguridad Territorio, Población*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

(2001). *Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

(2000a). *Defender la Sociedad. Curso de College de France (1975-76)*. México: Fondo de cultura económica.

(2000b). *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*. México: Siglo XXI.

(2000c). *Nietzsche, la genealogía, la historia*. Madrid, España: Pre-Textos.

(1996). ¿Qué es la Ilustración (1984)?. En: *¿Qué es la Ilustración?. Genealogía del poder* N°30. España: Ediciones de la Piqueta.

(1994a). La Filosofía Analítica de la Política. En: *E.E.H. Vol. III*. [Pp. 111-128]. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

(1994b). Entrevista: sexo, poder y política de la identidad. En: *E.E.H. Vol. III*. [Pp.416-429]. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

(1994c). ¿Es inútil sublevarse?. En: *E.E.H. Vol. III*. [Pp.203-207]. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

(1994d). La ética del cuidado de sí como práctica de libertad. En: *E.E.H. Vol. III*. [Pp. 393-415]. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

(1994e). Espacios Diferentes. “Des espaces autres” (1967). En: *E.E.H. Vol. III*. [Pp. 431-441] Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós.

(1994f). Anti-Edipó. Introducción a la vida no-facista. En: Luis Kancyper. *El campo Analítico con Niños & Adolescentes*. Zona Erógena. N°18 (versión digital). Recuperado de: <http://www.politicadelaeducacion.files.wordpress.com/2009/03/michel-foucault-prologo-a->

[antiedipo.pdf](#) Consultado agosto, 2013.

(1994g-1971). Enquête sur les prisons brisons les barreaux du silence. En: *Dits et Ecrits, tome II.*, texte 88. Paris, Francia: Gallimard.

(1992a). *El orden del discurso*. Buenos Aires, Argentina: Tusquets.

(1992b). *La microfísica del Poder*. Madrid, España: Ediciones de la Piqueta.

(1991a). El juego de Michel Foucault. En: *Saber y Verdad*. Madrid, España: La piqueta.

(1991b). La Gubernamentalidad. En: AA.VV. *Espacios de Poder*. Madrid, España: Ediciones de la Piqueta.

(1991c). El interés por la verdad. En *Saber y Verdad*. Madrid, España: La Piqueta.

(1988). El Sujeto y el poder. En: *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 50, N°. 3. Jul. - Sep. [pp. 3-20]. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.

(1978-1985) ¿Qué es la Crítica? (*Crítica y Aufklärung*). En: *Revista de Filosofía*. N° 11. [Pp 5-25]. Francia.

FOUCAULT, M. y DELEUZE, G. (1992) “Los intelectuales y el poder”. En: *Microfísica del Poder*. España: La Piqueta.

FREIRE, P. y FAUNDEZ, A. (2010). *Por una pedagogía de la pregunta*. Valencia, Ed. CREC-Instituto Paulo Freire de España

FRISCH, J. R. (2009). *Economía Social de Mercado*. Quito, Ecuador: Fundación Konrad Adenauer.

FRIEDMAN, M. y FRIEDMAN, R. (1980). Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico. Barcelona, España: Grijalbo.

GIARRACA, N. y BIDASECA, K. (2001). Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico. *Terceras Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos*, Instituto de Desarrollo Económico y Social, en junio de 2001.

GIARRACA, N. (2001) *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis en el interior del país*. Buenos Aires, Argentina: Alianza.

GIARRACA, N. y MASSUH G. (2008) (comp.). *El trabajo por venir. Autogestión y emancipación social*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Antropofagia.

GIARRACA, N. y WAHREN, J. (2005). Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina. En: *Reforma Agraria y lucha por la tierra en América Latina. Territorio y Movimientos sociales. Observatorio Social de América Latina*. Vol. 16. Clacso. Argentina

GIAVEDONI, J. (2012a). *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens ed.

(2012b). Resistir en la tierra del panoptismo. Esbozo en torno al problema de las relaciones de poder y las resistencias desde una perspectiva foucaultiana. En: *Revista Tabula Rasa*, N° 16. [pp.: 243-261]. Bogotá, Colombia.

GIRALDO DÍAZ, R. (2009). La ética en Michel Foucault o de la posibilidad de la resistencia. En: *Tabula Rasa*, N°10. [pp.: 255-241]. Bogotá, Colombia.

GLUCKMAN, M. (1978). Cap. 6. Trastornos místicos y ajuste ritual. [fragmentos: pp. 257 a 280 y 288 a 297]. En: *Política, derecho y ritual en la sociedad tribal*. Madrid, España: Akal.

GODIO, J. (2004). La estrategia de transversalidad del Presidente Kirchner. En: *Rebanadas de Realidad*. (Versión digital). Recuperado de <http://www.rebanadasderealidad.com.ar/godio-9.htm>. Consultada 15 de noviembre 2013.

GOLBERT, L. (1993). La asistencia alimentaria. En: L. Golbert; S. Lumi y E. Tenti, *La mano izquierda del estado. La asistencia social según los beneficiarios*. Buenos Aires, Argentina: Colección CIEPP/Mino Dávila.

GÓMEZ, S. B. y RECIO, M. E. (s/d). El sentido de la “transversalidad” en el discurso político del kirchnerismo y del Partido Socialista (Período 2003-2004). Ponencia presentada en la Sociedad Argentina de Análisis Político. Buenos Aires, Argentina. Recuperada de www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresossaap/.../gomez-recio.pdf

GRASSI, E. (2013). La Cuestión social y la cuestión de la pobreza. En: *La Dignidad de los Nadies. Revista Voces en el Fenix*. Publicación del Plan Fénix [Pp: 10-17] Buenos Aires, Argentina.

(2003a). *Políticas y Problemas Sociales en la sociedad neoliberal. La otra década Infame*. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial.

(2003b). *Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame. Tomo II*. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial.

GRASSI, E, HINTZE, S y NEUFELD M. R. (1994). *Políticas sociales, crisis y ajuste estructural*. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial.

GRIMBERG, M. (2008). Transformaciones en el tratamiento de la niñez en riesgo. Reflexiones sobre un dispositivo de protección a la infancia en la ciudad de Buenos Aires. En: *Cuadernos de Antropología Social*, FFyL-UBA, N° 27. [Pp.: 155-174]. Buenos Aires, Argentina.

(2007). Gubernamentalidad: Estudios y Perspectivas. En *Revista Argentina de Sociología*. Consejo de Profesionales en Sociología Vol. 8, año 5.[P.p 95-111]. Buenos Aires, Argentina.

(2005). En defensa de la salud y la vida. Demandas e iniciativas de salud de agrupamientos sociales de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense -2001 a 2003- En: *Avá. Revista de Antropología*. Universidad Nacional de Misiones. N°7. [pp. 1-21]. Misiones, Argentina.

GRIMBERG, M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. I. CARVALHO ROSAS, F. (2009). *Estado y Movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Antropofagia.

GRONDONA, A (2012). “Tradición” y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina. Tesis doctoral. Cs. Sociales. UBA. Colección “Tesis de investigadores e investigadoras del CCC”. Edit. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

(2009). Pobres, indigentes y desempleados. Una reseña sobre las formas históricas de delimitación. En *Papeles del CEIC (Revisión Crítica)*. Vol. 2009/1, marzo 2009.

GUATTARI, F. (1992) *Caosmosis*. Buenos Aires: Manantial.

GUBER, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires, Argentina: Norma.

(1991). *El salvaje metropolitano. A la vuelta de la antropología postmoderna. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires, Argentina: Legasa.

GUPTA, A. y FERGUSON, J. (1997-2008). Más allá de la “cultura: espacio, identidad y las políticas de la diferencia. En: *Revista antípoda*. N°7 julio-diciembre de 2008 [p.233-256]

HALPERÍN DONGHI, T. (2005). *Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*. Buenos Aires: Siglo XXI.

(1998). *Historia contemporánea de América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Alianza.

HAYEK, F. (1995) Cap. XVI “La errada evolución del ideal democrático”. En: *Derecho, Legislación y Libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de justicia y Economía política*. Vol. III *El Orden político de una Sociedad Libre*. Madrid: Unión Editorial

(1980). El ideal democrático y la contención del Poder. En: *Revista de Centros de Estudios Públicos*. N°1. Santiago de Chile, Chile.

HARVEY, D. (2014) *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*. Quito: IAEN.

HOBBSBAWM, E (1998a). *Historia del siglo XX*. Buenos Aires, Argentina: Crítica.

(1998b). *La era del imperio, 1875-1914*. Buenos Aires, Argentina: Crítica.

HONNETH, A. (1999). Comunidad. Esbozo de una historia conceptual. En *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política*. N° 20. [5-15].

HUANACUNI MAMANÍ, F. (2010). *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Lima, Perú: Consultoría Ed., Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI.

JOFRÉ, I. C. (2017). Seguir la huella y curar el rastro. Memorias de una experiencia colectiva de investigación y militancia en el campo de arqueología argentina. En: Cristóbal Gnecco y Henry Tantalean (Eds), *Arqueologías vitales*. (En prensa).

KUSCH, R. (2000). *Geocultura del Hombre Americano*, Tomo III, Obras Completas. Rosario, Argentina: Edic. Fundación Ross. [Pp: 5-231].

(2000) *Esbozo de una antropología filosófica Americana*, Tomo III. Obras Completas. Rosario, Argentina: Edic. Fundación Ross. [Pp.: 241-434].

LAZZARATO, M. (2010). *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires, Argentina: Edit. Tinta Limón.

LESCANO GUTIÉRREZ, I. (2008). *El ordoliberalismo alemán y la economía social de Mercado*. Tesis de grado en Lic. En Cs Políticas. 2008. Universidad Autónoma de México

LO VUOLO. R., BARBETTO A., PAUTASSI. L y RODRÍGUEZ. C. (1999). *La pobreza...de la política contra la pobreza*. Buenos Aires, Argentina: CIEPP, Miño y Dávila.

MAIDANA, M. F. (2013). *Salta y su política de sucesión: caída, emergencia y ascenso de líderes y seguidores del Partido Justicialista entre 2007 y 2011*. Tesis Doctoral. Departamento de Antropología da Universidad de Brasília

(2010). *Ascenso y descenso. El ascenso y el descenso d los dirigentes del Partido Justicialista (P.J) en los cargos de gobierno durante los años 1995-2005. Relaciones entre políticos y la política en Salta con J.C. Romero*. Salta, Argentina: Editorial U.N.S.a.

MANZANO, V. (2009). Piquetes y acción estatal en Argentina: un análisis etnográfico de la configuración de procesos políticos. En: Grimberg, Mabel; Fernández Álvarez, María Inés y Carvalho Rosa, Marcelo (Edit.) *Estado y Movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil* [P.p.:15-36]. Buenos Aires, Argentina: Antropofagia.

(2007). Poder y relaciones de intercambio en el mundo de las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires. En *Etnía*, N° 48. Instituto de Ciencias Antropológicas, UNCPBA. Olavarría, Argentina.

(2005). Desempleo, 'piquetes' y acción estatal en Argentina: Análisis antropológico de un campo de relaciones sociales y políticas. En: *Anales de la VI Reunión de Antropología del Mercosur*. Montevideo, Uruguay.

MANZANO, V, FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.I, TRIGUBOF, M, GREGORIC, J.J. (2008). Apuntes para la construcción de un enfoque antropológico sobre la protesta y los procesos de resistencia social en Argentina. En: Grimberg, M. Fernández, M.J. y Fernández Alvares, M.I (compiladoras) *Investigaciones en Antropología Social*. Buenos Aires, Argentina: coedición FFyL- Antropofagia.

MARX, K. (1999). *Manuscritos de economía y filosofía*. Buenos Aires, Argentina: Alianza.

(1963). *El Capital*. Buenos Aires, Argentina: Cartago.

MAYO, C.A.; ANDINO, O.R y GARCIA MOLINA, F. (1983) *La diplomacia del petróleo (1916-1930)*. Buenos Aires, Argentina: Centro editor de América Latina.

MERKLEN, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires, Argentina: Gorla.

MICHEL, A. (2004). Conflictos Políticos en la provincia de Salta después del triunfo electoral de Perón en 1946. En: *Revista de la Escuela de Historia*. Año 3, Vol. 1, N° 3, Universidad Nacional de Salta. Salta.

MIGUEZ, D. (2013). *Diez Años. Una década de gobierno kirchnerista*. Buenos Aires, Argentina: Planeta.

MILLER, P. y ROSE, N. (2008). Political Power beyond the State: Problematics of Government. En: *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Cambridge: Polity Press.

MOSCONI, E. (1957). *La batalla del petróleo*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Problemas Nacionales.

MURILLO, S. (2018). Neoliberalismo: Estado y procesos de subjetivación. En: *Revista de la Carrera de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Vol. 8, N° 8. . [Pp. 392 – 426].

(2013). La estrategia neoliberal y el gobierno de la pobreza. La intervención en el padecimiento psíquico de las poblaciones. En: *La Dignidad de los Nadies. Revista Voces en el Fénix*. [Pp.: 70-77]. Buenos Aires, Argentina.

(2012). Prologo. En: Giavedoni, J.G. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens ed.

(2011). Estado, sociedad civil y gubernamentalidad neoliberal. En: *Revista de la Carrera de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Vol. 1. N°. 1. [Pp.: 98-101].

(2008). *Colonizar el dolor: La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañon*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

(2007). Naturalización de la pobreza y la desigualdad. Efectos políticos y subjetivos de las estrategias del Banco Mundial. En: *Revista del Centro Cultural de la Cooperación CCC*. Año 1, N°1. Septiembre.

(2000). Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas de mercado en América Latina. En: *Desarrollo Económico*. Vol.40, N°158, julio-setiembre.

(1997). La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado, en la

- primera presidencia de Menem. En: *Desarrollo Económico*. vol.37, N°147, octubre-diciembre.
- (1996). *El discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción del individuo moderno*. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones del CBC/UBA.
- MURILLO, S. Y SEOANE, J. (2012) *Posmodernidad y Neoliberalismo. Reflexiones críticas desde los proyectos emancipatorios de América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Luxemburg.
- NASH, J. (2008). *Comemos a las minas y las minas nos comen a nosotros. Dependencia y explotación en las minas de estaño en Bolivia*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Antropofagia.
- (1989) *From Tank Town to High Tech: The Clash of Community and Industrial Cycles*. Nueva York: State Univ of New York Pr. Suny Series in the Anthropology of Work.
- NEUFELD, M. R.; GRIMBERG, M.; TISCORNIA, S. y WALLACE, S. (comp.) (1988). *Antropología social y política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
- NUAP (1998). Uma antropologia da política: rituais, representações e violência, Projeto de pesquisa. En: *Cadernos NuAP. N° 1*. [Fragmentos: pp. 1 a 12 y 19 a 24]. Brasil.
- NUN, J. (2001) [1969] *Marginalidad y exclusión social*. Buenos Aires, Argentina: FCE.
- ORLANSKY, D. (1997). Reforma del Estado, reestructuración laboral y reforma sindical. Argentina 1989-1995. En: *Revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México*. Vol. XV. México.
- ORLANSKY, D. Y MAKÓN, A. (2003). De la sindicalización a la informalidad. Caso Repsol-YPF. Ponencia presentada en el 6to Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, Argentina.
- OVIDO, L. (2001). *Una historia del movimiento piquetero*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Rumbos.
- PALERMO, H. (2015). *Apuntes para pensar la Nacionalización de YPF: Relaciones laborales y tensiones sociales en Comodoro Rivadavia*. Colección Becas de investigación. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- (2010). *Trabajadores del Oro Negro. Un abordaje socioantropológico sobre el "esplendor" y el "ocaso" de YPF*. Tesis Doctoral. FFyL-UBA. Buenos Aires, Argentina.
- PAULIZZI, C. (2015a). Re-configuración del Estado y re-invenición de lo social, en la Argentina actual. El gobierno de la pobreza (2003-2012), en: *Revista Trabajo y Sociedad*, N° 24, [Pp. 183-205]. Stgo. del Estero, Argentina
- (2015b), Entre Moribundos y piqueteros-trabajadores. Ensayo en torno de la Unión de trabajadores desocupados de Gral. Mosconi (1997-2012), En: Álvarez Leguizamón, S. (Comp.), *Neocolonialismo y capitalismo Políticas públicas, pobreza, racismo y resistencias subalternas (el Caso de Salta)*. [Pp. 241-288]. Prohistoria Ediciones. Rosario, Argentina.
- (2014a). Gobernando para el mercado y en contra del mercado: La gubernamentalización del Estado, en la Argentina actual (2003-2012). En: *Revista Herramienta* N°54, año XVII. [Pp. 73-81]. Buenos Aires, Argentina.
- (2014b). El gobierno de las poblaciones pobres con rostro humano. Gubernamentalidad neoliberal y Discursos de Desarrollo. En: Rita Novo (Comp.) *Michel Foucault: la insumisión reflexiva*. Mar del Plata, Argentina: Edit. Eudem.
- PAULIZZI, C. y MILANA, P., (2015), Los avatares de la gubernamentalidad y la cuestión del Estado. Una aproximación crítica desde el gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia

(Salta, Argentina), en: *Revista Astrolabio Nueva época*, N°15. [Pp.356-386.]. UNC-CONICET. Córdoba, Argentina.

PAUTASSI, L. (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. En: *Serie Mujer y Desarrollo*, N° 87. CEPAL, Santiago de Chile, Chile.

PECK, J. (2001). *Workfare States* New York; London: The Guilford Press

PEREYRA, S. (2006). ¿De las acciones de lucha a los proyectos productivos? La experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados de General E. Mosconi en la Provincia de Salta. En: *Cuadernos de CLASPO*. N° 19. Argentina.

PERÓN, J. D. (1968). *La Hora de los Pueblos*. Colección JDP, los trabajos y los días. Subdirección Editorial. Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.

PETZ, I. (2014). De las formas de la violencia estatal. Continuidad de las prácticas represivas en el norte de la provincia de Salta. En: *Cuadernos de Antropología de la Universidad Nacional de Luján*. N°11. [P.p. 9-23]

(2013). Movimientos Sociales y Estatalidad. De la Desocupación a la Construcción Política: el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi en el Norte de Salta, Argentina. Reseña de Tesis Doctoral. En: *Cuadernos de Antropología Social*. FFyL-UBA N° 37. Buenos Aires, Argentina.

(2005). Acerca de los sentidos políticos del movimiento social en el norte argentino: el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi. En: *Cuadernos de Antropología Social*. FFyL-UBA. N° 22. [P.p. 77-93]. Buenos Aires, Argentina.

PITT-RIVERS, J. (1973). El análisis del contexto y el “locus” del modelo. En: *Tres ensayos de antropología estructural*. Barcelona, España: Cuadernos Anagrama.

PODERTI, A. (2010). *Diccionario del Peronismo*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

PRESTA, S. (2011). Economía Social, Estado y mercado: elementos para el análisis de las formas de construcción de una “ética de autogobierno. Trabajo presentado en el Workshop: *Debates sobre gobierno, Estado y control social: gobernando las desigualdades*. Rosario, Santa Fe, Argentina.

PROCACCI, G. (1991). Social economy and the government of poverty. En: Burchell, G., Gordon, C. y Miller, P. (Ed.): *The Foucault Effect. Studies in governmentality*. Londres: Harvester Wheatsheaf.

QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, Argentina: FLACSO.

QUIRÓS, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires, Argentina: Edic. Antropofagia.

RABINOW, P. (2009). Pasos hacia un laboratorio antropológico. En *Revista de Antropología Experimental*. N° 9, Texto 10: [p. p. 137-151]. Universidad de Jaén. España.

RESTREPO, E. (2016). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

REYGADAS, L. (2014). Todos somos etnógrafos: igualdad y poder en la construcción del conocimiento antropológico. En: Cristina Oehmichen (ed.), *La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales*. [Pp.: 91-118]. México: UNAM.

ROMERO, L. A. (1995): “Los sectores populares urbanos como sujetos históricos”. En: Gutiérrez y Romero: *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Bs. As.: Edit. Sudamericana.

ROSE, N. (2007). ¿La Muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno. En: *Revista Argentina de Sociología*. Año/Vol. 5.Nº 8. [Pp.: 111-150]. Buenos Aires.

(1997). El gobierno en las democracias liberales ‘avanzadas’: del liberalismo al neoliberalismo. En *Archipiélagos. Cuadernos de crítica de la cultura*. Nº29. [Pp.: 25-40].

RUIDREJO, A. (2006). *Foucault, Modernidad y Libertad (Los avatares de la crítica)*. Tesis de Maestría en Filosofía contemporánea. Inédita. Universidad Nacional de Salta, Argentina.

SACCHI, P. (2004). *La Protesta social en el Norte Argentino. Los piqueteros de Mosconi UTD*. Trabajo Final de Tesis de Licenciatura en Sociología. Universidad Nacional de Santiago. Del Estero. Inédita.

SCARFÓ, G.; HOPP, M. y HIGHTON, C. (2009). Reflexiones en torno al concepto de inempleabilidad: consideraciones para pensar la política social. Recuperado de: http://plazapublica.fch.unicen.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=99. Acceso septiembre de 2011-12

SCHUSTER, F. Y PEREYRA, S. (2001). La Protesta Social en la Argentina democrática: Balance y perspectivas de una forma de acción política. En: Giarracca, Norma (Comp.). *La Protesta Social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior*. Buenos Aires, Argentina: Alianza Editorial.

SCOTT, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Ed. Era.

SEN, A. (1995). Ingredients of famine analysis: availability and entitlements. En: *Nueva economía del bienestar*. Escritos seleccionados. Universidad de Valencia, Servei de Publicacions. Valencia, Arts, Grafiques Soler.

(1993). Capability and Well Being. En: Nussbaum y Sen (comp.) *The quality of life*. Oxford: Clarendon Press.

(1987). The Standard of Living: Lecture II, Lives and Capabilities [El nivel de vida: vidas y capacidades]. En: G. Hawthorn (Ed.). *The Standard of Living* [El nivel de vida]. The Tanner Lectures, Clare Hall. Nueva York, Cambridge: University Press.

SEOANE, J. (2012). Para una cartografía el modelo extractivo-exportador en Argentina: mapas de las resistencias, desafíos de las alternativas. En: *Batalla de Ideas*, Revista de debate teórico-político de la izquierda independiente. Año 2. N° 2. Cola del Diablo, Buenos Aires.

SEOANE, J; ALGRANATI, C. (2012). La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”. En: *Revista Herramientas*. Nº50. Año XVI. Julio. Buenos Aires.

SHORE, C. (2010). La antropología y el estudio de la Política Pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. En: *Antípoda*. Nº10. Enero – junio. [P.p 21-49].

SHUSTER, F.; NAISHTAT, F.; NARDACCHIONE, G. y PEREYRA, S. (Comp.). (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

SIGAUD, L. (2004). Ocupações de terra, Estado e Movimentos Sociais no Brasil. En: *Cuadernos de Antropología Social*. N° 20. [P.p.11-23].

(2000). A forma acampamento: Notas a partir da versão Pernambucana. En *Novos Estudos*. N° 58. [pp. 73-92]

SIMMEL, G. (2001). El pobre. En Levine, D. N. (comp.) *Sobre la individualidad y las formas sociales: escritos escogidos*. Buenos Aires, Argentina: UNQUI.

SVAMPA, M. (2010). *Movimientos Sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina*. One World Perspectives. Working Papers 01. Recuperado de: <http://www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php>

(2004). Cinco tesis sobre la nueva matriz popular. En: *Revista Laboratorio. Estudios sobre cambio estructural y desigualdad social*. Facultad de Cs. Sociales, UBA. Año 6. N° 15. Primavera. Buenos Aires.

SVAMPA, M, Y PEREYRA, S. (2005). La política de los Movimientos piqueteros. En: Shuster, Federico; Naishtat, Francisco, Nardacchione Gabriel y Pereyra, Sebastián, (Comp.). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

(2003) *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Bs. As.: Ed. Biblos.

SWARTZ, M. J.; TURNER, V.W. y TUDEN, A. (1994). Antropología política: una introducción. En: *Alteridades*. N° 3. [Fragmento, p.p. 101 a 105]. “Introducción a *Political Anthropology*, (1996) Aldine Publishing Company, Pp. 1-41. Trad. De García Robles, C. y González Aragón, G.

TARROW, S. (1997-2009) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, España: Alianza.

TENTI FANFANI, E. (1989). *Estado y pobreza: estrategias típicas de intervención*. Tomo I y II. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América Latina.

THOMPSON, D. (2002). *Thompson. Obra esencial*. Barcelona, España: Crítica.

THOMPSON, E. P. (1984). *Tradición, revuelta y conciencia de clases*. Madrid: Crítica.

TÖNNIES, F. (1986). El nacimiento de mis conceptos d “comunidad” y “sociedad”. Trad. Galván Díaz, F. En: *Revista de sociología*. Vol. 1. Universidad Metropolitana.

TOPALOV, C. (2004). De la cuestión social a los problemas urbanos: los reformadores y la población de las metrópolis a principios del siglo XX. En Danani, C. (comp.) *Política social y economía del trabajo*. Buenos Aires, Argentina: UNGS/OSDE/Altamira

TRINCHERO, H. H. (2007) Economía política de la exclusión. Para una crítica desde la experiencia de las empresas por sus trabajadores (ERT). En: *Cuadernos de Antropología Social* N° 26. [P.p. 41-67].

TRINCHERO, H.H. y LEGUIZAMÓN, J. M. (2009). Fronteras de la Integración: impactos sociales de la inversión pública y los programas de desarrollo en la cuenca del río Pilcomayo. En: Trinchero, H.H. (comp.) *Fronteras del desarrollo. Impacto social y económico en la cuenca del río Pilcomayo*. Buenos Aires, Argentina: Biblos-FFyL.

(2004). Hidrocarburos, dinámica del capital y cuestión social en el norte argentino. En: Belli, E. y Trinchero, H.H. y Leguizamón, J.M. (comp.). *La Cuenca del Bermejo*. Buenos

Aires, Argentina: Editorial Reunir.

(1995). Fronteras de la modernización. Reproducción del capital y de la fuerza de trabajo en el umbral al Chaco Argentino. En: Trinchero (comp.). *Producción doméstica y capital*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

URTUBEY, J. M. (1999). *Sembrando Progreso. Claves del desarrollo de Salta*. Salta: Edi. Hanne.

VARESI, G. A. (2010a). Crisis mundial, políticas y lucha de clases: El neo-desarrollismo en Argentina (2002-2010). En: *Revista de Economía y Comercio Internacional-GEIC*.

(2010b). La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación. En *Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. México.

VASCO, L. G. (2007). Así es mi método en etnografía. *Tabula Rasa. Revista de Humanidades*, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, No. 6, enero-junio. [P.p. 19-52].

VERONELLI, J. C Y VERONELLI CORRECH, M. (2004). *Los orígenes institucionales de la salud pública en la Argentina*. Tomo I y Tomo II. Buenos Aires: OPS-OMS.

VILLAGRÁN, A. (2014). *Un Héroe Múltiple. Güemes y la apropiación social del pasado*. Salta, Argentina: EUNSA.

(2010). El general gaucho. Historia y representaciones sociales en el proceso de construcción del héroe Güemes. En: Álvarez Leguizamón, S (comp.). *Poder y Salteñidad, Saberes Políticos y representaciones sociales*. Salta, Argentina: CEPIHA, Universidad Nacional de Salta.

WAHREN, J. (2011). *Movimientos Sociales y disputas por el territorio y los recursos naturales: La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Argentina y la Asamblea del Pueblo Guaraní en Bolivia (1995-2010)*. Tesis doctoral en CS. Sociales. UBA. Inédito

WOLF, E. (1993). *Europa y la gente sin historia*. México: Fondo de Cultura Económica. Primera edición en inglés, The regents of the University of California, Berkeley, 1982.

ZIBECHI R. (2011). *Política & Miseria. La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas*. Buenos Aires, Argentina: Lavaca Editora.

FUENTES DE ARCHIVOS

Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi

- Declaración (9/12/2001): Llamamiento del 1er Congreso de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta. Gral. Mosconi.
- Estatuto Social de La Fundación de Trabajadores Desocupados. (2006). Gral. Mosconi. Salta.
- La Maza. Revista de política y Cultura (2001)
- Partido Comunista Revolucionario (PCR) (11/07/2001). Semanario Hoy.
- Partido Comunista Revolucionario (PCR) y Partido del Trabajo del Pueblo (PTP) (05/1997). Tríptico. Jujuy. Argentina.
- Partido Obrero (PO) (11/04/2001). Prensa Obrera N° 702.
- Pouchard Serra, Anita y “Pepino” Fernández (04/03/2013). Somos maestros de piqueteros. Entrevista, *Revista Underground*.
- Roposati, Lorena (directora). (2011). Mosconi. Abriendo los caminos de la resistencia y la dignidad [Película]. Buenos Aires. Argentina.

- Schaumberg, Heike (2009) Informe sobre Campaña contra el Dengue en Gral. Mosconi, en la provincia de Salta, en el Norte Argentino. Un estudio del primer semestre del 2009. Departamento de Antropología Social de la Universidad de Manchester, Inglaterra.

Diarios y portales de noticias

Las fechas y títulos trabajados son especificados en el cuerpo del texto a pie de página.

- Diario Ámbito Financiero: <<http://www.ambito.com/>>
- Diario Clarín: <<http://www.clarin.com/>>
- Diario Cuarto Poder
- Diario digital Que Pasa Salta : <<http://www.quepasasalta.com.ar/>>
- Diario El intransigente
- Diario El Tribuno
- Diario Infobae: <<http://www.infobae.com/>>
- Diario La Nación: <<http://www.lanacion.com.ar/>>
- Diario Página 12: <<https://www.pagina12.com.ar/>>
- Diario Tiempo Argentino: < <http://www.tiempoar.com.ar/>>
- Portal de Noticias Infórmate Salta: <<http://informatesalta.com.ar/>>
- Portal iprofesional: <www.iprofesional.com>
- Portal LPO La Política On Line: < <http://www.lapoliticaonline.com/>>
- Portal Planetas: www.portalplanetasedna.com.ar/

Discursos

Se indican las páginas de recuperación, las fechas y lugares se explicitan en el cuerpo del trabajo.

Banco Mundial

- Wolfensohn, James D. (26/11/2000). Praga, República Checa.
- Zoellick, George (14/09/2011). Más allá de la ayuda. Universidad George Washington.
- Zoellick, George (2010). Democratizar la economía del desarrollo. Universidad de Georgetown, 29 de septiembre. Disponible en: <<http://web.worldbank.org/archive/>>
- Zoellick, George (12/09/2008). Estados frágiles: Garantizar el desarrollo. Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ginebra, Suiza.

Presidenciales/Gobernador

- Casa Rosada. Presidencia de la Nación: <<http://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo>>
- Discursos Cristina Fernández de Kirchner. Página Web oficial de Fernández de Kirchner, Cristina: <<http://www.cfkargentina.com/>>.
- Kirchner, Néstor (23/04/2004). Entrevista. Revista Debate.
- Kirchner, Néstor (25/05/2003). Acto de asunción presidencial ante la Asamblea Legislativa. Disponible en: <<http://www.elhistoriador.com.ar/>>
- Urtubey, Juan Manuel (2011). Discurso de Asunción. Disponible en: <<http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/13/discurso-asuncion-diciembre-2011>>
- Urtubey, Juan Manuel (11/2010) Discurso en el congreso del partido justicialista, Cafayate, Salta. En: Diario El intransigente (29/11/2010). Disponible en <<http://www.elintransigente.com/salta/2010/11/29/discurso-completo-urtubey-congreso-cafayate-62521.html>>
- Urtubey, Juan Manuel (2007). Discurso de Asunción. Disponible en: <<http://www.juanmanuelurtubey.com/discurso/7/discurso-asuncion-diciembre-2007>>

Informes y documentos

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ministerio de Finanzas y Obras Públicas de Salta (2010). Documento PCH24082010: 27-28
- Banco Mundial (2004). Informe para la provincia de Salta. Institutional and Governance Review – Argentina, Buenos Aires World Bank (2000), “Implementation completion report - Argentina Second Provincial Reform – Salta”, Report N° 20698, Poverty Reduction and Economic Management, Latin America and the Caribbean Region, World Bank, Washington DC.
- Banco Mundial (2000). Informe sobre el desarrollo mundial. Lucha contra la pobreza. Washington, DC.
- Banco Mundial (1998). Informe Anual. Washington, DC.
- Banco Mundial (1995). Alivio de la Pobreza y Fondos de Inversión Social. Washington, DC.
- CEPAL (2004). Vinocour. P. y Halperin. L. (autores). Pobreza y Políticas Sociales, en Argentina de los años noventa. Consultoría CEPAL Naciones Unidad. Serie Políticas Sociales. Santiago de Chile.
- Ferrer, Aldo (27/01/2013). Transformaciones de América Latina. Diario Página 12. Opinión.
- Ferrer, Aldo (2009) Entrevista. Revista 31. Bs As. Argentina.
- Fundación observatorio de Responsabilidad Social (2013). El Mapa de RSE en el país. Recuperado de www.ors.org.ar/
- Gobierno de la Provincia de Salta (02/2012) Informe Situación Actual y Perfil futuro de la provincia de Salta. Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2010.
- Gobierno de la Provincia de Salta (09/2011). Documento oficial: Acciones y políticas sociales del Gobierno de Salta.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2000). El estudio de la pobreza con datos censales. Nuevas perspectivas metodológicas.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (1984). La pobreza en la Argentina.
- Jiménez, Mónica (2012). El trabajo decente en Salta, ¿un bien escaso?. Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE). Universidad Nacional de Salta.
- López Calvo, Paula (03/2011). El hambre es un crimen. Salta la linda, Salta la desnutrida. Artículo publicado en el Periódico de la CTA N° 74. Equipo de Comunicación de la CTA Salta
- Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación (2012) Publicación colectiva de los Centros de Referencia y Articulación. Bs. As. Argentina
- Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación (2012) Dcto: Territorios. Huellas y Horizontes de una Institucionalidad de la Políticas Sociales.
- Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación (2010). Políticas Sociales del Bicentenario. Tomos I y II.
- Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación (2007). La Bisagra. Memoria, Verdad, Justicia, Organización Social. Buenos Aires. Argentina
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2006). Análisis de las políticas y programas sociales en Argentina: la acción pública para prevenir y combatir la explotación económica de niños, niñas y adolescentes. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil-IPEC. Cooperación Española.
- PNUD (2011) Informe Anual .Sostenibilidad y equidad. Un mejor futuro para todos. PNUD- Naciones Unidas.
- PNUD (2011) Informe Anual (2010-2011). Desarrollo centrado en las personas. PNUD-

Naciones Unidas.

- PNUD (2009). Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina. PNUD. Naciones Unidas. Buenos Aires.
- PNUD (2009) Evaluación de los Resultados de Desarrollo en Argentina. PNUD. Naciones Unidas. Buenos Aires.
- PNUD (1999). Informe sobre Desarrollo Humano. Edic. Mundi-Prensa. Madrid.
- PNUD (1990) Primer Informe de Desarrollo Humano. Publicado para PNUD, por Tercer Mundo edic., Bogotá.
- Posadas. M. (2007). Gestión Pública y fortalecimiento de la institucionalidad: Creación de la Escuela de Administración pública de la Provincia de Salta. Secretario de la Función Pública – Gobierno de la Provincia de Salta.
- Primera Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance Social. Futuros desafíos, Dcto. Final. Salta, Noviembre, 2012. Recuperado de: <http://www.lsqa.com/pacto-global>
- Programa Argentino de Desarrollo Humano (1995). Desarrollo Humano: un diálogo con la economía y las ciencias sociales. Director Nacional Antonio Cafiero. Honorable Senado de la Nación Argentina.
- Seggiaro, O. (06/2005). Las venas abierta de Salta. Revista Política y ultra. En: Agencia de Noticias Redacción (ANReD). Disponible en: <http://www.anred.org/spip.php?article6134>

Páginas Web

- Agencia de Seguridad Social de la Nación: <<http://www.anses.gob.ar/>>
- Banco Mundial: <<http://www.bancomundial.org/>>
- Elecciones 2015 Argentina: <<http://www.argentinaelecciones.com/>>
- Gobierno de la Provincia de Salta: <<http://www.salta.gov.ar/>>
- MERCOSUR: <<http://www.mercosur.int/>>
- Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, Gobierno de la Provincia de Salta: <<http://www.salta.gov.ar/organismos/ministerio-de-derechos-humanos-y-justicia/4>>
- Ministerio de Desarrollo Humano, Gobierno de la Provincia de Salta: <<http://www.salta.gov.ar/ministeriodedesarrollohumano>>
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: <<http://www.desarrollosocial.gov.ar/>>
- Ministerio de Energía y Minería de la Nación: <www.energia3.mecon.gov.ar>
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: <www.trabajo.gov.ar/>
- Ministerio de Trabajo, Gobierno de la Provincia de Salta: <<http://www.trabajosalta.gob.ar/>>
- Página oficial del Partido Renovador de Salta: <www.partidorenovador.com.ar>
- Parlamento Latinoamericano: <<http://www.parlatino.org/es/>>
- Presidencia de la Nación: <<http://www.presidencia.gob.ar/discursos>>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: <<http://www.undp.org/es/>>
- Salta con bosques: <<http://www.saltaconbosques.org/>>
- Sitio web oficial de Andres Zottos: <<http://www.andreszottos.com.ar>>
- Sitio web oficial de Cristina Fernández de Kirchner <<http://www.cfkargentina.com/>>
- Sitio web oficial de Juan Carlos Romero: <<http://www.romerojuancarlos.com.ar/>>
- Sitio web oficial de Juan Manuel Urtubey: <<http://www.juanmanuelurtubey.com/>>
- UNASUR: <<http://www.unasursg.org/>>
- Vida Silvestre: <<http://www.vidasilvestre.org.ar/>>
- ZICOSUR: <<http://www.zicsur.org/quees.php>>

-Debido a la extensión del trabajo presentado, los Decretos, Leyes y Resoluciones son citados en el cuerpo del texto.

Agradezco a Gabriela Ferro, por su compañía y ayuda en el proceso de organización y armado de la Bibliografía.